



3 1761 08114116 0

ASAMBLEAS LEGISLATIVAS DEL URUGUAY



Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Toronto

ALBERTO PALOMEQUE



:: ASAMBLEAS

LEGISLATIVAS

DEL URUGUAY

(1850-1863)

RAMÓN SOPENA, IMPRESOR

BARCELONA
PROVENZA, 93 A 97

F
2726
P₃
1915



INDICE

	Págs.		Págs.
Dedicatoria... ..	7	Triunfo de ambas ideas... ..	154
Prefacio... ..	9	Perspectivas políticas y financie- ras... ..	159
INICIATIVA PARLAMENTARIA		El Banco Mauá... ..	161
En la asamblea de notables	13	La situación política en 1857... ..	165
Ideas altruistas... ..	17	Los doctores Palomeque y Gó- mez... ..	172
El maestro Narvaja... ..	22	Los preámbulos de la revuelta... ..	177
TENDENCIAS POLÍTICAS		EFECTOS DE LA REBELIÓN	
La Cámara del 55... ..	29	1858.—¡ Quinteros !... ..	187
Las dos fracciones... ..	29	El conflicto moral... ..	192
Contribución directa... ..	35	HONORES A PEREYRA	
Intereses de la Deuda... ..	38	Actitud política... ..	197
El ministro... ..	43	Actitud del presidente de la Re- pública... ..	201
El proyecto salvador del doctor Muñoz... ..	45	Los dos informes de la comisión. Contundente réplica del doctor Palomeque... ..	204 207
La justicia... ..	47	Defensa franciscana del señor Aguirre... ..	210
El tembladeral financiero y eco- nómico... ..	48	Personalidad del doctor Arras- caeta... ..	212
El Banco Montevideano... ..	53	El epicureísta Herrera... ..	214
Discusión de los proyectos finan- cieros... ..	56	El sesudo Lereña... ..	214
Banderillas al Gobierno... ..	60	El doctor Lapido... ..	215
Estudio del presupuesto... ..	63	Doctrina triunfante... ..	216
Una ley no cumplida... ..	66	VIEJOS PARTIDOS PERSONALES	
Al borde del precipicio... ..	67	La primera injusticia parlamen- taria... ..	221
Los servidores del Estado... ..	71	Los viejos partidos personales... ..	225
Empedrado de la ciudad de Mon- tevideo... ..	72	LA TIERRA PÚBLICA	
Personalidad que se destaca... ..	74	Denuncia de la tierra pública... ..	235
En la cumbre... ..	75	Ataque a la libertad parlamenta- ria... ..	236
Una sesión tempestuosa... ..	81	Un buscapié legislativo... ..	238
Atentado al diputado Torres... ..	89	Derechos adquiridos... ..	240
Amortización de la Deuda... ..	91	Habilidad del doctor Juanicó... ..	242
Universidad de la República... ..	92	Los terratenientes en acción... ..	249
Proyecto del doctor Bustamante... ..	97	Pensamiento del señor Lereña... ..	254
Vínculos que se aflojan... ..	98	Hermosa dialéctica del doctor Arrascaeta... ..	255
Los acreedores del 48... ..	102	El amor de la patria... ..	257
Progresos operados... ..	112	El león de la palabra... ..	261
El ministro brasileño Amaral... ..	114	LA GUARDIA NACIONAL	
El leader del Gobierno, derro- tado... ..	121	Crítica del proyecto... ..	269
Los colonos de Greenway... ..	124	Réplica de Vázquez Sagastume... ..	275
Honores a hombres ilustres... ..	126	Los estudiantes... ..	276
La indemnización por perjuicios de guerra... ..	127	Hacer soldados... ..	277
Presupuesto de gastos para 1857... ..	133	Los sacristanes... ..	282
Acuñañón de monedas... ..	135		
Régimen de Aduanas... ..	137		
Impuesto de luces... ..	139		
Reparación justa... ..	140		
La Cámara en 1857... ..	141		
Mar de fondo... ..	143		
A la quema... ..	145		
Ataque hiriente... ..	150		

	PÁGS.		PÁGS.
El mayordomo del establecimiento industrial o de pastores...	282	La nueva política...	421
Actitud impolítica...	283	El espíritu oportunista de los legisladores...	425
PREÁMBULO DE UN GRAN DEBATE		Navegación de la laguna Merín y río Yaguarón...	426
El Banco Comercial y otros...	287	NEUTRALIZACIÓN DE LA REPÚBLICA	
La bancarrota del Gobierno...	288	Significado de la palabra...	437
La ironía de Juanicó...	298	La dialéctica punzante de Lamas...	439
CONTRATO CON MAUÁ		La actitud del doctor Velasco...	445
La Denda Pública y el barón de Mauá...	305	Suspensión del debate...	448
El primer ataque...	309	Acción de Juanicó...	451
Las tres personalidades influyentes...	310	El dictamen de la Comisión...	453
Ataques a Errazquin...	312	Ideas generosas de Arrascaeta...	454
El ministro Nin Reyes...	316	Las pasiones del señor Iturrriaga...	455
El genio rebelde...	318	Un tribuno impertinente...	457
Incidentes personales...	321	Discursos extraviados para la Historia...	463
A regañadientes se retiran los considerandos...	323	Filosofía del debate...	465
Los seis discursos de Juanicó...	325	LA PERSONALIDAD DE AZARA Y EL AMOR DE LA CONCORDIA	
El gladiador parlamentario...	332	Interesante debate sobre la personalidad de Azara...	477
Oratoria del ministro Nin Reyes...	334	El amor de la concordia...	481
El último atrincheramiento de los opositores...	338	EL CÓNSUL ALDAMA, LA ADUANA E IMPUESTOS	
Un rasgo del carácter de Errazquin...	345	La solicitud del señor Aldama, cónsul en Málaga...	489
Una objeción formidable...	350	El presupuesto, la aduana y los impuestos...	490
Un cuarto de hora feliz...	353	FERROCARRIL A LA UNIÓN	
Las carnes y las harinas...	356	El ferrocarril a la Unión...	497
LA DEUDA PÚBLICA Y EL BARÓN DE MAUÁ		Tanteos científicos...	500
La noble personalidad de Mauá...	363	Figuración de Arrascaeta...	503
La victoria de ambos combatientes...	372	Ignorancia y miedo...	506
La política y Mauá...	375	Servidumbre...	507
ACCIONISTAS DEL 48		Tapujos del señor Pérez...	511
Arreglo celebrado...	383	LA ADMINISTRACIÓN DEL 56	
Actitud de Vázquez Sagastume...	384	La administración del 56...	517
RASGOS DE LA VIDA DE ANDRÉS LAMAS		LA AMNISTÍA POLÍTICA Y LA VENGANZA DE QUINTEROS	
Los dos amigos...	389	Interpelación al Poder Ejecutivo sobre amnistía política (1860)...	521
Instituto histórico-geográfico...	390	Ley de olvido...	525
Vacilaciones del espíritu...	392	Una cuestión constitucional...	529
Sus preocupaciones...	395	Debate sobre la amnistía...	535
El Instituto de Instrucción Pública...	396	El carácter duro de las Carreras...	538
Misión al Brasil...	397	Recuerdo imprudente de Quinteros...	540
Pidiendo datos...	398	Lucha en la Asamblea General...	544
Política del 55...	400	El fantasma de la revuelta...	546
El folleto político del 55...	404	Un ataque contrarrestado...	550
Destierro de diputados revoltosos...	407	La venganza de Quinteros...	553
El pacto de los caudillos Oribe y Flores...	408	Apéndice...	557
Ideas triunfantes...	410		
MODIFICACIONES AL TRATADO DEL 51			
<i>La navegación de la laguna Merín y del río Yaguarón</i>			
Modificaciones al tratado del 51...	419		

DEDICATORIA

*A mi buen amigo el
señor don LUIS CARVE*

ASAMBLEAS LEGISLATIVAS DEL URUGUAY

(1850-1863)

PREFACIO

Estas páginas forman parte de un libro histórico que vengo escribiendo desde 1907, en el cual estudio los acontecimientos desarrollados durante los años 1837 a 1872, alrededor de la personalidad de mi padre, el coronel doctor don José Gabriel Palomeque.

Como es de suponerse, en él no me ocupo exclusivamente del autor de mis días, pues no se trata de un simple tributo filial, sino de un holocausto ante el altar de la historia, buscando la verdad en esa enmarañada selva. En el presente tomo se verán actuar a las personalidades que más se han distinguido en el Río de la Plata en la época azarosa de 1850 a 1863.

Si este libro encontrara acogida en el público, recompensando así los esfuerzos de su autor, muy pronto se daría a la luz el que ya está escrito, relativo a la lucha porfiada mantenida con el caudillaje de Cerro Largo, durante el gobierno de don Bernardo P. Berro; una de las páginas más intensas en la historia de la República Oriental del Uruguay.

En mi último libro El general Rivera y la Invasión de Misiones en 1828, rogaba que la crítica no fuera severa con el escritor, para lo cual allí daba mis razones. Hoy no pido otro tanto. Estas páginas están escritas a los 62 años de edad, poniendo en ellas todo el esmero posible, guiado su autor del propósito noble de enseñar lo que quizá no sea muy conocido por las generaciones del presente. Ha estampado en el papel la convicción profunda nacida del estudio imparcial de las cosas y de los hombres. Ni aun el amor filial, como se verá, ha sido bastante a influir en sus ideas. Cree haber hecho una obra útil. Está satisfecho de ella, cuando piensa en la responsabilidad moral contraída por todo escritor al emitir sus ideas. De aquí que no pida, como entonces, se le juzgue con suavidad. Por el contrario, lanza su fruto intelectual a la publicidad, para que se le estudie, aun con pasión adversa, si se cree del caso. Venga la crítica elevada y escudriñe el libro. De ella nacerá la luz.

Bahía Blanca, marzo 31 de 1915.

ALBERTO PALOMEQUE.

INICIATIVA PARLAMENTARIA

EN LA ASAMBLEA DE NOTABLES

La práctica adquirida por el doctor Palomeque en el Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores, y en la secretaría de la Universidad e Instituto de Instrucción Pública, al lado de hombres superiores como los doctores don Manuel Herrera y Obes y don Luis José de la Peña, le serviría para el desempeño de funciones parlamentarias. Los hombres superiores, como los mencionados, y en especial el ilustre patricio don Joaquín Suárez, cuya memoria fué siempre respetada por él, comprendieron que debían utilizar sus buenas cualidades, y, en su consecuencia, fué nombrado para miembro del Consejo de Notables, el día 29 de octubre de 1850, junto con los señores brigadier general don Anacleto Medina, general don Melchor Pacheco y Obes, coronel don José María Magariños, don José Antonio Zubillaga, don Alberto Flangini, don Bartolomé Gayoso, don Francisco Hordeñana y don León Zubillaga. A la sazón desempeñaba el puesto de oficial mayor interino del ministerio de Gobierno, junto con su inseparable e inolvidable amigo don Alberto Flangini, al lado del ministro Herrera y Obes, a quien debía lo que era y sería, después, naturalmente, de deberlo a sus ingénitas facultades, que lo hacían destacar en sus tareas (1). Iba, pues, ascendiendo en la vida pública, lentamente, cual corresponde a quien ha de llegar a la cumbre. Los pasos agigantados, a saltos, no siempre son los sólidos en la vida política. Los lentos son los que enseñan y hacen conocer íntimamente los secretos de la administración gubernativa, que luego se utilizan desde el elevado puesto en que los sucesos nos colocan. La ciencia administrativa no se aprende en los libros, sino en la tarea oficinesca.

Novicio en el arte parlamentario, y respetuoso por educación, allí estuvo, asistiendo a los últimos movimientos de esa Asamblea. Apenas pudo desempeñar la misión de formar parte de la Comisión Especial a dictaminar en el proyecto de honras a la memoria del coronel don Juan Crisóstomo Thiebaut, en unión de los señores Correa, Bustamante, Flangini y Magariños (José María) (2). Su firma es la

(1) Asamblea de Notables—10.^a sesión—2 de noviembre de 1850.

(2) Sesión del 16 de mayo de 1851.

primera que aparece en el informe aconsejando un proyecto substitutivo, como una prueba de haber sido designado miembro informante de ella. El proyecto fué sancionado sin discusión alguna (1).

Sin embargo, cuando el Poder Ejecutivo se dirigió a la Asamblea dándole cuenta de los importantes acontecimientos desarrollados en Entre Ríos y el Imperio del Brasil, para traer la combinación que daría en tierra con la tiranía de Rosas y su aliado el general Oribe, se creyó obligado a hacer uso de la palabra. Nadie mejor que él estaba al corriente de los sucesos, por la circunstancia de hallarse al lado del doctor Herrera y Obes, quien, junto con Lamas, habían sido el alma de ese movimiento sensacional. Entonces manifestó que «por la importancia del asunto hacía moción para que se diera lectura de la nota del Poder Ejecutivo dirigida a la Asamblea, y de la que el Encargado de Negocios de Entre Ríos había pasado a nombre de su Gobierno», la cual fué suficientemente apoyada.

Leídas que lo fueron, mocionó en esta forma: «La Honorable Asamblea de Notables acuerda al Poder Ejecutivo un voto de confianza, para que pueda expedirse en las negociaciones pendientes entre el Imperio del Brasil, el Estado de Entre Ríos, Corrientes y República del Paraguay.»

Esta moción pasó a la Comisión de Legislación (2).

En los momentos en que tan trascendental asunto se trataba, los ánimos estaban prevenidos contra el doctor don Manuel Herrera y Obes. Esas prevenciones nacían de los celos naturales entre los hombres políticos, si bien es verdad que ninguno era capaz de llegar a la altura de Herrera y Obes y de Lamas. De ahí que éstos se mantuvieran en el gobierno, desde 1847, primando en las resoluciones adoptadas por don Joaquín Suárez. Este gobernante, de buen sentido común, había descubierto las hermosas cualidades del doctor Herrera y Obes, y no lo abandonó. Comprendía que era insustituible. No había en aquella ciudad un hombre de tanto copete intelectual como él, y de ahí los celos y las envidias. La prueba elocuente era que se había mantenido en el poder, pero con dignidad y energía, durante cuatro años, a pesar de los ataques furibundos encabezados por hombres como Pacheco y Obes, Batlle, Díaz, Magariños, Peña, Bustamante, Ferreira, etc.

En estos momentos llegaba a la meta. Ahí estaba ahora consumada su obra política con el tratado de alianza, que aseguraba la caída de Rosas y Oribe en el Río de la Plata, donde habían dominado, aunque sin conseguir avasallar a la heroica *aldea* de Montevideo.

Esta victoria del gran ministro de la Defensa de Montevideo, ayudado por el cerebro poderoso y el corazón bien puesto de Andrés La-

(1) Sesión del 2 de junio de 1851.

(2) Sesión del 11 de junio de 1851.

mas, en Río de Janeiro, no se la podían perdonar sus adversarios, sentados en la Honorable Asamblea de Notables, donde más de una vez habíanse librado batallas interesantes y fecundas, como las descriptas en páginas anteriores.

Como era natural, la moción del doctor Palomeque, dando un voto de confianza al Poder Ejecutivo para que pudiera expedirse en las negociaciones entre el Brasil, Entre Ríos, Corrientes y Paraguay, tenía que ser objeto de crítica por parte de los enemigos del doctor Herrera y Obes. Ellos veían en el doctor Palomeque al hombre de confianza de esa ilustre personalidad (1). La moción, pues, fué rechazada, sin que la Comisión la citara siquiera en su informe ni en el proyecto de *Minuta de Comunicación* que aconsejó. Pero, en cambio, se arremetía contra el ministro omnipotente, dándole una última punzada en las postrimerías de aquella epopeya, que tan gloriosamente concluía, para bien de la civilización en el Río de la Plata.

En efecto, la Comisión, compuesta de los señores Peña, Bustamante, Zas y Solsona, declaraba, en su *Minuta de Comunicación*, que, «aceptando, por su parte, la Asamblea las felicitaciones del Poder Ejecutivo, y apreciando altamente los sentimientos que manifiesta, le garante que una conducta semejante merecerá siempre su aprobación y el reconocimiento de toda la nación»; que le autorizaba para celebrar los tratados, sometiénolos a la aprobación de la Asamblea, y que le permitía la entrada al territorio de las tropas extranjeras en defensa de su independencia y libertad, dando inmediatamente cuenta a la Asamblea del hecho y de los motivos que lo hubieran causado; pero, a la vez, decía lo siguiente: «La nueva situación de la República crea necesariamente nuevas necesidades, y exige, por lo mismo, un caudal de luces, que, si en todas partes es la garantía de las buenas disposiciones, en las que presentan un carácter extraordinario es rigurosamente indispensable para asegurar el resultado de la acción. Por eso la Asamblea lamenta no ver en la forma que tiene hoy el Ministerio, la que generalmente ha conservado en épocas anteriores: y que, dando a las resoluciones gubernativas mayor seguridad de acierto, ha facilitado también la ejecución de esas mismas determinaciones. Mas ella espera, también, que si circunstancias especiales trajeron ese orden que puede llamarse excepcional, las que hoy se presentan decidirán al presidente de la República a llenar la necesidad que se siente a este respecto» (2).

Estos párrafos fueron combatidos por los señores Martínez (E.), Díaz, Rodríguez (A.), Ferreira y Hordeñana, sosteniéndolos los señores

(1) Debe tenerse en cuenta que el doctor Palomeque desempeñaba a la vez las funciones de oficial mayor en el ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores, presidido por el doctor M. Herrera y Obes.

(2) Actas de la Honorable Asamblea de Notables, página 459.

res Peña y Bustamante. Esos fueron los *leaders* de la discusión, durante la cual se dirigieron ataques hondos al Ministerio.

Se quería que en vez de dos ministros—cuales los ciudadanos Herrera y Obes y Batlle—hubiera tres; pues, a la sazón, el de Guerra (Batlle), desempeñaba simultáneamente el de Hacienda.

Esto no era sino un pretexto. La situación excepcional por la que atravesaba el país no exigía más que los ministros existentes. Así como hasta entonces se había marchado, podía seguirse. Si bueno había sido el gobierno de hecho que imperaba para conducir las cosas al estado en que se hallaban, mejor tenía que serlo para realizar el pensamiento concebido, y tan hábilmente desenvuelto en medio de las dificultades de la obra. Lo difícil fué atraer al Brasil y al general Urquiza a la alianza, es decir, decidirlos a subscribir el tratado. Lo demás, se caía de su propio peso. Por eso la moción del doctor Palomeque era la pertinente: dar un voto de confianza al Poder Ejecutivo para la conclusión de la empresa. Esta moción era la práctica, como que fué la que en el hecho triunfó, no obstante lo que en teoría decidió la mayoría de la Asamblea de Notables.

El doctor Palomeque era uno de los pocos conocedores de lo que había entre telones. Conocía mejor que nadie la marcha seguida para traer las cosas al estado en que se hallaban. Era el secretario privado del ministro Herrera y Obes. Lo cierto fué, sin embargo, que los opositores desempeñaron un papel platónico al atacar al ministro y resolver lo que dejamos expuesto, porque el señor don Joaquín Suárez no alteró en nada su Ministerio, concluyendo su misión histórica con el doctor Herrera y Obes a su lado.

El doctor Palomeque no creyó oportuno tomar parte en el debate. El triunfo platónico de los adversarios del ministro, en cuanto a la supresión de los párrafos citados, parece ser que se debió más al odio que a lo que la prudencia política aconsejaba en esos momentos difíciles. Y así lo decimos, porque cuando llegó el momento de votar el punto en debate, algunos de los mismos que habían opinado por la supresión de aquellas inusitadas expresiones, no quisieron concurrir al recinto, como creyó de su deber hacerlo notar el señor presidente (1).

La acción parlamentaria del doctor Palomeque en la Asamblea de Notables se redujo a lo expuesto, y a una ligera escaramuza con motivo del nuevo enrolamiento de los ciudadanos. Aun no estaba bastante baqueteado, y cualquier ataque lo tomaba de improviso, por más que ya tenía hechas sus armas en el periodismo, redactando el diario *El Porvenir*, según lo asegura un señor don Antonio Zinny en una de sus producciones (2), reveladoras de la labor de cronista, aunque sin el talento necesario para llegar a las alturas donde realmente se

(1) Véase página 462 de la Honorable Asamblea de Notables.

(2) Prensa periódica de la República Oriental del Uruguay.



El Coronel Doctor Don JOSE GABRIEL PALOMEQUE en 1849.

espacia el hombre de pensamiento. Zinny era un simple rebuscador de datos, carente de la calidad del historiador para ir al fondo de las cosas y presentarlas luego con el brillo reclamado por la frase. Además, muchas veces, y es bueno decirlo, no era exacto ni imparcial, pues ponía en sus afirmaciones esa pasión condenable en quien escribe para las generaciones venideras.

El doctor Palomeque creyó del caso dejar constancia de su opinión al discutirse el proyecto relativo al enrolamiento. Comenzó a exponer su pensamiento cuando fué repentinamente interrumpido por el señor don Fermín Ferreira, diciéndole : «¡ Cuidado, señor Notable, con hablar del año 43 !» Al oír esta frase exclamó : «Estoy en mi derecho. No es posible discutir ; por tanto, retiro la palabra». El parlamentario había sido interrumpido, porque había empezado diciendo que el Poder Ejecutivo quería poner en «ejercicio y rigurosa vigencia los decretos expedidos al principio del asedio, es decir, señores, que se le autorice para que se repitan en la capital las escenas del año 43 y del año 44.» Como se ve, aun no estaba preparado del todo para la lucha parlamentaria. Se hallaba en los comienzos. Ya vendrían los tiempos en que se atrevería a contener al adversario audaz.

Su ingreso a la Honorable Asamblea de Notables tuvo lugar en las postrimerías del sitio, donde puede decirse no tuvo tiempo de revelar sus dotes de polemista parlamentario ni de aprender esta ciencia esencialmente práctica. Apenas si sirvió para ir destacando su personalidad desde el Ministerio al periodismo, y de éste al Parlamento.

IDEAS ALTRUÍSTAS

Concluido el sitio, continuó desempeñando sus funciones en el Ministerio. El presidente Giró no cometió el error ni la injusticia de arrancarlo de su puesto, convencido de los méritos del empleado público. No poco influiría en ello la sinceridad de sus opiniones políticas, manifestadas de palabra y de hecho, de no servir sino a los intereses generales del país, y nunca a una facción.

En este sentido, sus ideas expresadas en 1845, después de India Muerta, en la notable carta dirigida a su querido amigo don Pedro Carve, encontraban ahora la ocasión de hacerlas prácticas en el Gobierno. El país se había pacificado. No había *vencidos ni vencedores*, según la hermosa frase del general Urquiza, al pactar con el general Oribe, que era la misma de Lamas, de Herrera y Obes y de cuantos pensaban hondo. El país reclamaba una política nueva, esencialmente nacional, de olvido del pasado.

Todos así lo comprendieron, empezando por el mismo general Oribe, quien, por razones especiales, alegadas por el general Urquiza

en carta a Herrera y Obes, había quedado en el territorio, no obstante lo pactado en el Tratado de Alianza (1).

Esas ideas altruistas del doctor Palomeque lo mantuvieron en su puesto, estrechando la amistad que en otro tiempo conservó con el caudillo del Cerrito, antes que éste invadiera la patria, ayudado por el tirano Rosas. Su espíritu ya maduro por la experiencia adquirida y por los horrores vistos en la guerra, no quiso saber más de tales asechanzas políticas. Se formó su ideal, resuelto a respetar el principio de autoridad constitucional. Se hizo sostenedor del partido gubernamental, convencido de que en la paz estaba el secreto del porvenir. No serviría a déspotas ni tiranos, pero sí a quienes en el Gobierno representaran la opinión pública, manifestada en un momento dado por el órgano debido. Por eso no acompañaría a los autores del motín militar del 53, que desalojaron a Giró, ni a los revoltosos del 55, que arrojaron del gobierno constitucional al general Flores, ni a los que se rebelaron en 1857 contra la autoridad de don Gabriel Antonio Pereyra, ni al amigo y ex compañero de luchas, el general Flores, cuando vino, en 1863, con el extranjero, a arrasar el territorio y echar por el suelo el gobierno constitucional de Berro.

Así fué contribuyendo a formar el verdadero partido nacional, convencido, como más tarde lo diría el doctor Acevedo en uno de sus mensajes ministeriales, de que sólo la paz nos salvaría, condenando las revoluciones y los crímenes cometidos, porque, declaraba alto, «aun con los gobiernos malos prosperan estos países».

Producido el motín del 53, continuó en su puesto, en el ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores. Allí lo halló el caudillo a quien la suerte colocó al frente de la situación—el general Flores—con quien se conocía desde los tiempos del sitio de Montevideo. Una verdadera amistad los unía, llegando ésta hasta establecer el vínculo de parentesco espiritual. El caudillo tuvo oportunidad de aquilatar las aptitudes del subalterno en su viaje al interior de la República, como asimismo en la inspección escolar realizada por el doctor Palomeque en 1854, para conocer el estado de la educación común en toda la República. El informe pasado al Instituto de Instrucción Pública, dando cuenta de la tarea encomendada, levantó su personalidad. Era el primer trabajo educacional, en su género, que se hacía en el país. En él aparecía el estado lastimoso de la educación común. Todo había que hacerlo. Los ciudadanos, ocupados en pelear, no habían tenido tiempo para fundar escuelas y hacer maestros. Ahí presentaba el censo escolar y el espectáculo triste de las llamadas casas de enseñanza. Nadie mejor que él pudo desempeñar esa ardua misión, como que había estado, y estaba, al frente de los destinos educacionales, en la Universidad y en el Instituto de Instrucción Pública, desde 1847.

(1) Véase mi estudio *La Diplomacia de la Defensa*.

Este era, para él, su timbre de honor, reconocido por los hombres de la época, como Herrera y Obes, Peña y Requena, en los documentos respectivos y en las cartas íntimas. Aquel informe lo hizo destacar. Allí se veía al hombre preparado, en la teoría y en la práctica, conocedor perfecto de las necesidades de la enseñanza común. Como buen espíritu administrador, allí aconsejaba lo que debía hacerse para levantar la educación común a la altura que correspondía, y sin lo cual sería imposible la democracia, el gobierno de las instituciones libres. Comprendía que sólo de la escuela surgiría la regeneración de ese pueblo, embrutecido por las guerras fratricidas, engendradoras de odios y de ruinas.

Su informe, notable bajo todos conceptos, aun para la época actual, como lo proclaman pedagogos modernos, dentro y fuera del país, causó la impresión debida (1). En puridad de verdad, él fué el *precursor* de la reforma escolar llevada a término años más tarde, en 1877, por el malogrado José Pedro Varela. Nunca podrán separarse esas dos personalidades en la historia de la escuela uruguaya, como lo ha reconocido el ilustre educacionista don Orestes Araujo en nuestros días (2). Reunido el Consejo del Instituto de Instrucción Pública para estudiar el informe presentado por el doctor Palomeque, resolvió, en dictamen honroso para este ciudadano, que merecía bien de la patria por cuanto había practicado, excediendo las esperanzas fundadas del Consejo. Y así dejó constancia el dicho Consejo en la resolución puesta al pie del informe, en el cual se reconocía la necesidad de una mano firme que dirigiera la enseñanza común y el pronto establecimiento de las escuelas normales, de donde debían salir los maestros que educarían a las generaciones del porvenir.

Todo esto daba origen al crecimiento de su personalidad. Se le veía resuelto y animoso en sus empresas, convencido de las opiniones emitidas, después de maduro examen, y, sobre todo, sincero en sus manifestaciones públicas y privadas. De ahí que sus amigos le encargaran más de una comisión honrosa y delicada, en la que hubiera necesidad, algunas veces, no sólo de tacto sino de valor sereno. Ya lo iremos viendo en el desarrollo del drama de su vida.

En los sucesos recientemente pasados se le había visto honrado por el ministro Herrera y Obes con la administración de ciertos fondos secretos existentes en la Policía (3), y con la tarea de iniciar una manifestación de aprecio y gratitud a las fuerzas brasileñas comandadas por el marqués de Caxías, en el acto de retirarse éstas de Montevideo para proseguir su jornada redentora en Buenos Aires, en

(1) El ilustre educacionista argentino don Aurelio Bassi lo acaba de decir en un sesudo artículo publicado en la *Revista de Educación*, órgano de la Dirección de Escuelas de Buenos Aires (año 1908).

(2) Véase *La Escuela Uruguaya* por Orestes Araujo.

(3) Las cuentas de esa administración secreta son innumerables. Existen en mi archivo, e irán al *Archivo Histórico Nacional*.

unión de Urquiza y los orientales, en los históricos campos de Caseros. Esa amistad con Herrera y Obes fué una de las más fieles de su vida. Se querían y se respetaban. Los acontecimientos políticos no pudieron romperla, aun después que cada uno siguió el derrotero que más en armonía se hallaba con sus pensamientos. En 1857 aun el doctor Herrera y Obes le decía : «De todos modos usted tendrá mi último pensamiento y mis verdaderos designios» (1).

Como era natural, el general Flores utilizó a un ciudadano que tales méritos poseía. Se sentía inclinado a ello, porque este caudillo, en medio de todos sus veleidosos pensamientos y de sus arranques impetuosos, vivía convencido, desde el sitio de Montevideo, de la necesidad de concluir con los partidos personales, olvidar el pasado, y unirse todos los hombres de buen sentir para llevar la nave al puerto de la paz. En estos instantes así pensaba, y así lo había declarado.

Nada sorprendente, pues, que creyera necesario colocar al doctor Palomeque en una posición más encumbrada, políticamente hablan-

(1) «Señor don José G. Palomeque.

»Enero 17/857.

»Mi querido amigo :

»Remito a usted las notas que me manda hoy para firmar. La de Requena a que usted se refiere, no vino.

»El portero las dejó, retirándose enojado, porque lo hacía esperar. Venía en chispa.

»Venga cuando quiera y pueda. Lo primero para usted, hoy, es concluir su carrera. Eso es pan y porvenir para usted y sus hijitos. La patria ya sabe usted cómo paga : para sus mejores hijos, casi siempre es madrastra. Saque usted siquiera ese provecho de sus disgustos y fatigas.

»¡ Me habla usted de barbaridades ! ¿ Pues qué le sorprende ? A mí, maldita la impresión que me hacen : lo que a ese respecto no se haga, será lo que me sorprenda. Cada día me convenzo más de que lo que a mí me ha pasado, era lo que no podía dejar de ser ; así es que hoy estoy completamente frío, en cuanto a ofensas pasadas. Yo he sido el único que no he tenido razón, porque debí ver y prever lo que con los ojos vendados por el cándor de mis sentimientos y esa incurable buena fe que hace el fondo de mi carácter individual, sólo pude dejar de ver. Francamente, nunca creí que estábamos tan atrasados y desmoralizados.

»Si yo tengo tiempo, mañana le veré.

»¿ En qué y cómo quiere usted que yo vuelva a la vida de hombre público ? ¿ Para qué puedo servir, cuando mi desgraciado nombre despierta tantas rencillas y emulaciones, cuando nadie le acuerda el derecho de ocupar otro lugar que el de la obscuridad, donde los miopes de mis enemigos no ven sino penas y desgracias ? ¿ Por qué ni para qué abandonaría la posición en que la fortuna me ha colocado, y donde mis ambiciones legítimas cada día ganan tanto terreno ?

»Hablaemos ; de todos modos usted tendrá mi último pensamiento y mis verdaderos designios.

»De usted affmo. amigo y s. s.,

»MANUEL HERRERA Y OBES.»

do, pues ninguna lo fué más, para él, que la de amante de la educación de la juventud de la República. En su consecuencia, fué nombrado jefe político de Montevideo, en 1854, volviendo así a aquella casa de sus primeros amores, donde la esposa amante del general Pozolo lo había conducido de la mano, dándole la ocasión para exhibir sus hermosas facetas morales e intelectuales.

Allí estuvo, revelando una vez más sus aptitudes. No descansó en sus faenas. De noche, en lo más recio de una tormenta, se le veía salir a la calle para recorrer los puestos de los guardianes del orden público, sorprendiéndoles en faltas que luego castigaba con energía. La Memoria pasada al Gobierno revela todo lo que hizo en beneficio de la ciudad (1). Entre otros trabajos, a él se debe, en unión de una sociedad de progreso urbano, presidida por el señor don Luis Lerena, la apertura de la calle hoy denominada Rondeau. Él se dió cuenta de la importancia y necesidad de esa vía de comunicación, y, desde su puesto, influyó decisivamente, arrancando de cuajo los obstáculos opuestos por vecinos egoístas. Si la justicia humana fuera siempre distributiva, esa calle, a haberse sabido lo aquí expuesto, no debió llevar otro nombre que el suyo, sin que esto quiera decir que el genio militar de Rondeau no mereciera ese recuerdo. Hecho está, y bien hecho, por lo que así debe quedar. Por lo demás, en la ciudad de sus amores hay campo para honrar su memoria (2).

Y fué en el desempeño de sus funciones de jefe político, o, más bien dicho, cuando las hubo renunciado, que el departamento de Maldonado, donde su apellido tenía arraigo popular, por ser sede de su familia materna y paterna, le designó para que lo representara en la Cámara de Representantes. Así, con sus ideas ya hechas y conocidas, como para que nadie pudiera mañana alegar ignorancia al respecto, entraba, en 1855, al recinto legislativo, aquel en donde se había sentado cinco años atrás, aunque cual ave de paso.

Y allí se le verá, cuando su personalidad política y parlamentaria tome vuelo definitivo y acentúe sus contornos simpáticos, exclamar, en día solemne: «No más partidos tradicionales; han concluido los círculos nefastos; sólo un partido subsiste: el de los hombres de buena voluntad, rindiendo culto al principio de autoridad constitucional, con abandono absoluto de trapos ensangrentados y olvido completo de denominaciones atávicas».

Este era y sería su programa; a él tributaría homenaje; a él sería fiel, y por él daría la vida. Así comprendía el Partido Nacional, del cual, en estos instantes, fué uno de sus conscientes *precursores*, como

(1) Esta Memoria va en el *Apéndice*.

(2) Se me asegura que en estos días la Comisión encargada de la nomenclatura de las calles, piensa ponerle su nombre a una de ellas, por iniciativa del distinguido ciudadano don Luis Carve, el hijo de su viejo amigo Pedro Carve.

asimismo su más noble y destacado *fundador* al intervenir en los sucesos que van a producirse, presentándolo en las páginas de la historia como uno de sus principales actores.

EL MAESTRO NARVAJA

Este es el momento en que su personalidad se modela completamente, apareciendo en la escena con todas sus armas, lleno de gallardía; impetuoso, a veces; sesudo, siempre, aun en sus errores, hijos de la época; y dotado, para ello, de una ciencia que se revela en sus discursos y en su acción. La ciencia la había conquistado a fuerza de constancia. Esa carta del doctor Herrera y Obes, ya citada, demuestra que el político era todavía estudiante. Ocupaba la alta posición de padre de la patria, de educacionista, de secretario de la Universidad Mayor y del Instituto de Instrucción Pública, y demás ya mencionadas, pero, desde aquí, continuaba su vida de estudiante, no obstante tener una numerosa familia. El fundador de los centros educacionales daba el alto ejemplo, a su edad (45 años), de estudiar, de continuar la carrera comenzada en Buenos Aires, en 1836, cortada desgraciadamente debido a las venganzas de la mazhorca, que lo obligaron a huir de aquella capital. Su espíritu ansiaba nutrirse, y, por eso, al lado de Herrera y Obes y Peña, fué el elemento indispensable para la realización de la obra educacional, de la cual nunca desesperó. En 1857, el doctor Herrera y Obes le decía: «Lo primero para usted, hoy, es concluir su carrera. Eso es pan y porvenir para usted y sus hijitos. La patria ya sabe usted cómo paga: para sus mejores hijos, casi siempre, es madrastra. Saque usted siquiera ese provecho de sus disgustos y fatigas.»

En efecto, no obstante tener a su cargo una numerosa familia, y desempeñar tantas funciones públicas, no se desanimó un momento. La Universidad, en atención a los servicios prestados a la educación, no sólo lo premió con una medalla de plata, sino que le concedió el privilegio de no rendir los exámenes necesarios para completar el bachillerato. En presencia de los certificados expedidos por la Universidad de Buenos Aires de haber sido aprobado en las asignaturas de latín y matemáticas, se le permitió rendir la prueba de una tesis filosófica, a sostenerla en acto público. Así lo resolvió el Consejo Universitario en 1850.

En su consecuencia, presentó su tesis, desarrollando el tema de *La revelación como base de la razón humana*. El tema respondía al ambiente de la época y a las doctrinas católico-apostólico-romanas en que siempre vivió y en las que murió (1).

(1) Como una prueba de ello, en el *Apéndice* va el testamento que formuló años después, en 1870, temeroso de morir durante la fiebre amarilla en Buenos Aires.

Rendida aquélla, y aprobado, empezó sus estudios jurídicos, en la embrionaria Universidad, cursando las materias, él, un hombre hecho, al lado de jóvenes que nacían a la vida. Así se explica que en 1857 el doctor Palomeque, el buen amigo de don Juan P. Ramírez, tuviera al hijo de éste, a José Pedro, de compañero en el aula, recibiendo juntos de doctores en dicho año. Era el secretario, el estudiante y el político, pero, en la clase, sólo dominaba el amante de la ciencia. Tuvo de catedrático de derecho civil al gran jurisconsulto argentino doctor don Tristán Narvaja, por quien siempre conservó respeto y cariño, no desmentidos por ambos ni en los días grises de la política militante. Estudió la ciencia jurídica con amor y entusiasmo. En aquellos tiempos no abundaban los textos. Sólo existía el Alvarez, anotado luego por Vélez Sársfield; libro que había venido recorriendo las universidades americanas, desde Salamanca, hasta llegar a Córdoba, de donde pasó a Buenos Aires.

El texto no satisfacía al *cordobés* Narvaja, sin duda porque lo había anotado otro *cordobés*, Vélez Sársfield, o porque, en su indiscutible sabiduría, creía que la enseñanza debiera revestir otro carácter.

Y fué así que el doctor Narvaja, con aquel estilo castizo, en él característico, de una precisión admirable, puesto de manifiesto en la redacción del Código Civil, del cual fué autor único, años después, en 1870, comenzó a dictar su curso, escuchado con serena atención por los pocos estudiantes de la época.

Ahora bien, el doctor Palomeque seguía el vuelo de ese pensamiento, y cuando llegaba a su hogar tenía tiempo, en medio de sus graves tareas, para redactar lo que el maestro había explicado. Ahí están sus cuadernos-borradores donde vaciaba su cerebro de estudiante, demostrativo del cariño y respeto que profesaba al sabio y bondadoso catedrático. Y al concluir el curso de Derecho Civil, el doctor Palomeque regalaba a su maestro una hermosa joya del corazón: ¡las lecciones dictadas durante el curso! Estaban encuadradas en rica tapa de terciopelo morado, con una dedicatoria expresiva. El profesor agradeció conmovido, por escrito, tan sencilla pero elocuente manifestación de afecto, reveladora a la vez del provecho que el discípulo había sacado de sus vigiliass de clase. Desde entonces, el maestro tuvo ese manuscrito como texto, completándolo y suprimiendo algo de su contenido.

El libro continuó de mano en mano, hasta que un día el joven Joaquín Requena y García, quiso poseerlo para sí. El noble profesor no se atrevió a ofender a su digno ex discípulo, desprendiéndose así no más de una prenda de tanto valor moral e intelectual para él. En su virtud, escribió al donante pidiendo autorización para ello, y, concedida, el manuscrito pasó a poder de Requena y García, el hijo del distinguido jurisconsulto don Joaquín Requena, a quien el país tanto

debe en orden a la codificación al lado del doctor Narvaja, amigos de corazón y de ciencia.

La amistad del profesor con el discípulo, y con el jurisconsulto Requena, nunca se alteró. Cuando, andando los años, se eclipsara la estrella política del estudiante, los maestros Narvaja y Requena recordarían siempre al amigo, en el destierro, y hasta éste llegarían los frutos de ambas inteligencias, cuya estela de luz brilla en las páginas inmortales de los códigos Civil, Comercial, de Procedimiento y de Minería. El estudiante-político recibíalos con dedicatorias honrosísimas, algunas de ellas suscriptas con la firma social de esos sabios, que vivieron unidos para la ciencia y en el amor de la familia, separados solamente de sus hogares por la calle intermedia (1).

Digna de mención es la carta del doctor Narvaja al remitirle al doctor Palomeque su notable obra, el Código Civil del Uruguay, la obra más perfecta de su tiempo, con arreglo a su época, muy superior, en su intachable redacción, a la monumental de Vélez Sársfield, autor del Código Civil argentino, como por aquel entonces lo hizo resaltar el ilustre e ilustrado doctor don Vicente Fidel López aun en medio de las críticas acerbas hechas a ambos autores (2).

En esa carta, que llamaré histórica, el doctor Narvaja dice a su amigo el estudiante-político, en íntima confidencia, en la que no se miente, cómo había levantado ese edificio científico y cuántas privaciones y amarguras representaba. Allí está el alma pura del sabio, vaciándose, a la distancia, en epístola amada, escrita a la ligera, sin pretensiones de producir efecto externo para atraerse el aplauso del público. Escribe a su viejo compañero desterrado, a quien el infortunio le persigue, que vive obscurecido, encerrado en su conciencia, dedicado al trabajo ennoblecedor de *peón-capataz* de barraca, rodeado de sus hijos y parientes, sus *peones* menores, de lo que más adelante se trata.

Es una epístola afectuosa, no destinada a la publicidad, sobre todo dada la situación oscura en que vivía el desterrado, sin influencia, y sin aspirar a ella, en una sociedad desconocida y hostil en las altas esferas del gobierno, dada la situación política por que se atravesaba.

El doctor Narvaja estaba seguro, pues, de su confidencia. Ella no saldría del seno de la amistad. El doctor Palomeque no la publicaría en ese país del destierro, donde su norma de conducta estuvo trazada desde que pisó sus playas, para él inhospitalarias y crueles, como se verá en su lugar oportuno. La guardó entre sus papeles queridos, que aun conservan el perfume de aquella amistad imperecedera, como si

(1) El doctor Narvaja casó con una hija del doctor Requena, y vivía frente por frente de la casa de su amigo y suegro.

(2) Véase *Revista de Buenos Aires*. En 1912, el doctor don Cipriano Soría publicó un folleto respecto del doctor Narvaja. Contiene errores, pero es de noble factura.

previera que algún día de allí se arrancaría para entregarla a la publicidad, a las páginas de la historia, a fin de levantar la personalidad del codificador; mostrándolo sencillo y humilde en su grandeza científica, y noble y sincero en su afecto y cariño para con el estudiante-político, que un día reflejara el pensamiento del maestro en el manuscrito inolvidable que durante años pasó de mano en mano a los estudiantes de Derecho Civil de la Universidad de Montevideo! (1).

(1) Muerto el doctor Palomeque, los doctores Narvaja y Requena creyeron de su deber perpetuar ese vínculo amoroso, y el hijo, también en el destierro, recibía las producciones de esos jurisconsultos, con dedicatorias que le enaltecían, dada su pobreza intelectual. Lamentamos no poseer la respuesta del doctor Palomeque al doctor Narvaja, que debe hallarse entre los papeles de éste. La familia del doctor Narvaja haría bien en darla a luz. He aquí la epístola del doctor Narvaja:

«Señor doctor don José Gabriel Palomeque.

»Montevideo, noviembre 10, 1866.

»Mi apreciable amigo y compañero: Son en mi poder sus dos apreciables a que tengo el placer de contestar.

»Permítame ante todo felicitar a usted por el suceso de familia—el estado de la señorita Angelita de que usted se dignó instruirnos.—¡Quiera el Cielo rodear de felicidades ese enlace!

»A la vez agradezco a mi compañero y amigo predilecto los finos conceptos que dedica a su pobre trabajo, el que se llama Código Civil Oriental; y tanto más los agradezco cuanto que los juzgo nacidos del buen afecto que me dispensa, aunque esto mismo lo constituya menos imparcial.

»¡Cuánto sacrificio importa para mí ese trabajo, y la extensión de ese sacrificio, sólo pueden apreciarlo bastantemente las personas que, como el doctor Requena, me habían visto trabajar! Dos años de estudio cerrado, todos mis negocios e intereses abandonados, sin reposo, ni día ni noche, sin salir sino para cumplir con el precepto de la misa, los domingos. De veras, amigo mío, yo no hubiera podido resistir, sin el auxilio del que *está arriba*. Así, pues, tengo la satisfacción que da el *deber cumplido* lealmente y sin omisión voluntaria o imputable. Creo, además, que algún bien producirá el Código, sean cuales fuesen sus defectos, que no dudo tendrá. Apenas se me presente ocasión segura he de remitirle el ejemplar que le tengo destinado.

»Mi Merceditas me encarga de dar a usted sus afectuosos recuerdos, en cambio de la fineza con que usted la tiene siempre presente. Ahora está muy contráida al piano. Tengo, además, dos varoncitos, Manuel, el mayor, y Tristán. El primero me ha salido débil y de delicada constitución; el otro por el contrario. Retribuye a usted sus afectos.

»Usted ordene a este su affmo. compañero y amigo Q. B. S. M.,

»(Firmado). TRISTÁN NARVAJA.»

TENDENCIAS POLÍTICAS

LA CÁMARA DEL 55

Entraba a la Cámara de Representantes de 1855 con un capital moral e intelectual que sólo pudieron apreciar los hombres de su época, desconocido por sus adversarios aun en nuestros días ; con una sólida y verdadera influencia entre la juventud y los hombres de entonces, debido a sus buenas costumbres públicas y privadas ; con un espíritu alegre, que sembraba la vida de sonrisas a su alrededor, convirtiendo su pobre hogar en encantadora velada de gente buena y honesta ; con una facilidad de palabra, que impresionaba y penetraba en el auditorio, porque salía con calor del fondo de su raciocinio y de su corazón vehemente ; con un carácter resuelto a librar batallas por sus ideales queridos, ahora que había llegado el momento de sustentarlos en las alturas del gobierno al desplegar a todos vientos la bandera de su causa política, amasada con dolores en aquel calvario comenzado en 1837 ; continuado, después de India Muerta, en 1845 ; seguido, durante el Sitio, desde el humilde empleo de meritorio en la Policía hasta el ministerio de Relaciones Exteriores y de Gobierno y Asamblea de Notables, en 1850 ; y fortificado su ánimo por lo aprendido en la noble tarea de la educación común y secundaria en la República, cual precursor, y hasta fundador, de la reforma escolar vigente. De aquí que aparezca en las páginas de la historia, al lado del gran ciudadano don José Pedro Varela, quien, para llevar adelante sus principios educacionales, tuvo que poner en práctica, veinte años después, aun en época triste para el país, las doctrinas evolucionistas predicadas por los doctores Palomeque y Acevedo, como único medio de conseguir la paz derivadora de bienes fecundos.

LAS DOS FRACCIONES

La Cámara de Representantes de 1855 era el fruto natural de aquella época difícil, surgida después del motín de 1853. Tumbado el gobierno de Giró, las elecciones se habían hecho por el elemento dominante, no permitiendo el regreso al país, como ya lo hemos explicado, de los caudillos vencidos en la reacción de noviembre de 1853, para que tomaran parte en el acto del sufragio.

En esta jornada se había destacado la personalidad militar del ge-

neral Flores, contra los deseos de los autores del movimiento anárquico. Todo le había favorecido al general Flores, según lo declaraba Pacheco y Obes en carta que ya conocemos. Triunfante este caudillo, al reorganizarse constitucionalmente el país, él presidió las elecciones complementarias de esa nueva época. Y fué así que de las urnas electorales de 1854, dentro de ese ambiente caliginoso, en medio de la abstención más completa de los hombres arrojados del poder en 1853, surgió la Asamblea de 1855, compuesta de elementos sanos, por lo general, de entre los cuales se destacaban, como intelectualidades reconocidas, los doctores don Mateo Magariños Cervantes, don José María Muñoz, don Pedro Bustamante, don Patricio Vázquez, don Luis Magariños, don Fernando Torres, don José Labandera y don José Gabriel Palomeque.

Es sabido que la Asamblea del 55 fué el fruto de un pacto celebrado a última hora entre la fracción encabezada por Muñoz y Bustamante y la gubernamental presidida por hombres como Mateo Magariños Cervantes y José Gabriel Palomeque.

Los primeros, denominados *conservadores*, para distinguirlos de los otros que se les llamaba *floristas*, pasaron por las horcas caudinas, y aceptaron el acuerdo, después de manifestaciones populares, muy ardientes, que recorrieron las calles de Montevideo, para concluir por confraternizar con ciudadanos, que, al fin y al cabo, pertenecían a la misma familia política.

Llegados así a la Asamblea, se presentaron los poderes respectivos ; ya aquí se dibujó la lucha que pronto los separaría para siempre, respondiendo así a la marcha de la idea que cada uno tenía formada después de los acontecimientos de 1853.

De entrada, fué nombrado presidente provisorio el doctor don Mateo Magariños, por una casi unanimidad. Este tuvo 13 votos ; José María Muñoz, apenas cuatro ; Juan Carlos Neves, dos ; y José Encarnación de Zás, dos.

Nombrada la presidencia definitiva, la que recayó en el doctor Magariños, el doctor Palomeque fué designado para componer, junto con los señores Gregorio Conde, Juan José Arteaga, José Encarnación de Zás y Juan Carlos Neves, la Comisión Especial encargada de revisar los poderes de quienes componían la Comisión General (1).

La designación de las dichas dos comisiones era muy importante en esos momentos, como va a verse.

Cuando la Comisión General se expidió, en los términos usuales, aconsejando la aprobación, en globo, de los poderes de los diputados, como era y es de práctica, el señor Muñoz pretendió «se dividiera la consideración de los poderes por orden de departamento» ; pero, habiéndose opuesto a ello el doctor Palomeque, como también don Eduar-

(1) Sesión del 10 de febrero de 1855.

do Bertrán (1), el debate se hizo libre, por moción del mismo Muñoz, y los poderes se aprobaron en globo tal cual lo había aconsejado la Comisión (2).

El Diario de Sesiones dice que «se trabó un justísimo debate en el que tomaron parte en pro del proyecto presentado por la Comisión, los señores don Eduardo Bertrán, don Juan Antonio Labandera, don José Gabriel Palomeque y el señor doctor don Mateo Magariños, a quien, habiendo pedido se nombrase una persona que lo substituyese para hacer uso de la palabra, se le concedió lo hiciera desde su asiento. Tomaron la palabra, en contra, los señores Muñoz, Bustamante y Torres».

En esta primera guerrilla fué necesaria la intervención del avezado parlamentario Mateo Magariños, para luchar con quienes siempre fueron sus implacables adversarios (como también del doctor Palomeque), por lo mismo que aquél poseía grandes cualidades.

Desde luego, se revelaba el gran antagonismo existente entre esas dos fracciones, preocupadas de dominarse la una a la otra.

En el juego de la política, triunfaría, sin embargo, la doctrina evolucionista, siendo vencida la intransigencia revolucionaria del grupo compuesto de hombres considerados por sí mismos como los únicos ciudadanos con virtudes y talentos; circunstancia que les incapacitaría para el gobierno de la sociedad, sin dejar de tener la influencia correspondiente a sus buenas cualidades. Eran ciudadanos que rendían demasiado culto a la gloria personal. No conocían la humildad del sabio, no obstante la ilustración que algunos poseían, aunque no en sumo grado. La soberbia debilitaba la fuerza de sus ideales. Carecían del don de la vida. Todo lo sacrificaban, en un arranque de inspiración, por hacer una frase efectista, a la que no renunciaban, sin medir sus consecuencias fatales, tratándose de un país carente de la práctica de las instituciones libres, donde todo aun era embrionario, sometido, desgraciadamente, al empuje de la fuerza bruta. Era un grupo que todo creía remediarlo por medio de la revuelta. Se necesitaba mucha habilidad para marchar por esa selva llena de alimaña venenosa. Quien a ello se atreviera, sin antes hacer examen concienzudo del terreno a recorrer, y de sus fuerzas a desarrollar, se expondría a una zozobra. Las cosas había que tomarlas como eran, dados los tiempos duros por que se atravesaba. La única política aceptable al país era la evolucionista, la del acuerdo de los hombres a quienes las circunstancias habían colocado en elevadas posiciones, sin preguntar su pasado, como lo proclamaría el doctor don Andrés Lamas muy pronto en un folleto sensacional.

Fuera de ahí, todo sería ruina y desolación. La fuerza bruta no

(1) Este sería quien, en 1867, trataría de matar al general Flores por medio de una mina.

(2) Sesión del 12 de febrero de 1855.

se dominaría con la fuerza bruta, sino con el *savoir faire* del intelecto humano, pues para algo se nos ha dado la razón y las artes de la sabiduría. Esto no lo comprendían ni lo comprenderían los llamados *conservadores*, que nada conservarían, lo que no quiere decir que no hayan realizado transacciones con el caudillaje dominante en el poder, teñidas las manos de sangre fratricida, y halagado, más de una vez, preocupaciones y prejuicios, deteniendo la marcha de la educación política del país, quizá con muy buenas intenciones, que respetamos, aunque no justifiquemos, dados sus resultados desastrosos (1).

En estos instantes empezaba a ponérsele piedras en el camino al general Flores, por los mismos que, sin pensarlo ni quererlo, lo llevaron al poder, protegido por la muerte de sus dos compañeros del triunvirato surgido de las violencias militares de 1853.

En esos días circuló un pasquín en Montevideo atacando al Gobierno, y en especial al Imperio del Brasil. Se incitaba a la insurrección y a la revuelta. Se atacaba la alianza con el Imperio, despertando en las masas la desconfianza y los odios, con recuerdos gloriosos, a la vez que azuzando los belicosos sentimientos del pueblo.

El señor Muñoz inmediatamente interpelló al ministro de Gobierno, porque «tanto por las publicaciones de los diarios—decía—como por los hechos que corren en la voz pública, han llegado a sus noticias algunas medidas extraordinarias tomadas por el Poder Ejecutivo con motivo de la libertad de la prensa» (2).

El ministro, que lo era don Alejandro Chucarro, recientemente nombrado para esa interpelación, en reemplazo de don Francisco Hordeñana (3), grato quizá a los señores conservadores, dado lo que sucedió, se presentó y explicó la cosa, diciendo que los autores del hecho habían sido tomados por la policía y sometidos a la justicia ordinaria, cesando la acción administrativa. El ministro abundó en protestas de respeto a la Constitución y de hacer práctico el acuerdo que debía reinar entre los poderes ejecutivo y legislativo.

El señor Muñoz se felicitó de cuanto había oído, estando de acuerdo en lo de la calificación de pasquín, para concluir por desautorizar el rumor de que el Poder Ejecutivo hubiese procedido por exigencias del representante del Imperio. Pidió al Poder Ejecutivo que si volviesen a aparecer escritos de esa naturaleza, los acusase por conducto del fiscal, por ser ese el medio más legal, y en cuyo terreno, decía, «encon-

(1) Ejemplo de ello, son esos dos ciudadanos presentados como modelos de virtudes públicas y privadas, en el momento de su muerte: José Pedro Ramírez y Julio Herrera y Obes, quienes, sin embargo, fueron los genuinos representantes de las virtudes y de los vicios de su época triste.

(2) Sesión del 23 de febrero de 1855.

(3) En 30 de mayo se encargó a don Francisco Agell del despacho de Relaciones Exteriores, y en julio 14 se nombró ministro de Gobierno a don Salvador Tort, que se mantuvo en él hasta la revolución de agosto de ese año.

trará siempre al Poder Legislativo pronto a marchar en perfecto acuerdo, a fin de producir ambos poderes los grandes resultados que el país reclama».

Este consejo era erróneo. En esos tiempos existía una disposición, vigente aún, que autorizaba a la policía para apoderarse de los pasquines (1). Y era lo que se había hecho en el caso, para comenzar la instrucción del sumario por la autoridad ordinaria. En el fondo, estas cuestiones de pasquines son de policía en todos los países organizados. Como se ve, no se trataba de atentados a la libertad de la prensa, como lo afirmó el señor Muñoz al deducir su interpelación. El interpelante, que era hombre impulsivo, como lo eran sus compañeros Bustamante y Torres—la trinidad intelectual de la oposición parlamentaria,—había exagerado la nota, quizá a propósito, o no tomado bien los datos, como era de su deber, y le hubiera sido fácil saberlo, al ver que todos los papeles públicos de la época continuaban apareciendo sin que fueran objeto de medida restrictiva alguna por parte del Gobierno.

Por lo demás, parecía que sólo hubiera querido aprovecharse esta oportunidad para hacer la declaración relativa a la exigencia no hecha por el diplomático brasileño, contra quien, como se verá, había resistencias entre los elementos dominantes.

El ministro, a su vez, se felicitó de la sesión, «pues que ella le daba fundamento para creer que *en adelante* reinaría entre ambos poderes ese acuerdo tan necesario para producir el bien del país», concluyendo por calificar de *falsa y calumniosa* la aseveración de haber el diplomático extranjero hecho exigencias para las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo. Y lo declaraba, decía, porque para ello estaba *autorizado*.

Como se ve, había una *entente* con el nuevo ministro. Se suponía que para *en adelante*, con olvido del pasado, la paz reinaría entre los príncipes cristianos, lo que nunca sucedería, pues un criterio fundamental los separaba y los separaría. El objeto fundamental de la interpelación parecía llenado con esa declaración *autorizada* hecha por el señor ministro. Este detalle no apareció en la moción de interpelación, lo que daba motivo para creer que privadamente se hubiera concertado algo al respecto, a fin de poder hacer, desde luego, esa declaración *autorizada* por el Poder Ejecutivo sobre punto por él ignorado hasta aquel entonces. Los *pour parleurs* parecían evidentes.

Los señores Bertrán y Palomeque terciaron en el debate para felicitarse de las explicaciones dadas. El primero llegó a declarar que «era necesario que el Poder Ejecutivo pusiera los medios a su alcance para que no volvieran a aparecer tales escritos en el país». El segundo no

(1) Véase *Manual de Policía* por el ciudadano español don Matías Alonso Criado.

sólo se felicitaba de las explicaciones del ministro, sino del «tino y patriotismo con que el señor Muñoz las había desarrollado», declarando «que tenía la persuasión de que cualquiera que fuesen las medidas que adoptase el Poder Ejecutivo en cumplimiento de sus obligaciones, ellas serían en el sentido preciso de la ley, y que en este caso estaban las que ocupaban a la Honorable Cámara».

Las cosas parecían calmarse y que todo tendía a la armonía. El nuevo ministro tenía esa virtud. Sin embargo, el doctor Palomeque ponía los puntos sobre las íes, cuando, al hacer extensiva su felicitación al *tino y patriotismo* del señor Muñoz, declaraba que *cualquiera* que fuesen las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo, ellas serían en el sentido preciso de la ley. Defendía desde ya al Gobierno, cuyas tendencias creía interpretar fielmente, y hacía recalcar que la reacción o acercamiento de los opositores revelaba *tino y patriotismo*, desde que el Poder Ejecutivo en nada había faltado ni faltaría nunca, ciñéndose a la ley.

Lo sucedido demostraba cuán inútil e infundada había sido la interpelación. El arma de combate se había quebrado en las manos de sus propios autores.

La Cámara, como era lógico, declaró suficientes las explicaciones dadas por el señor ministro. Eran los tiempos en que se creía procedente, después de oír al ministro, declarar si se estaba o no satisfecho. Aun no había nacido la otra doctrina, más práctica, de : *Oír y pasar a la Orden del Día*. En verdad que cuando la Cámara está satisfecha, nada obsta aquella declaración. La dificultad surge cuando una parte de ella no lo está. Entonces no es posible tener allí al ministro, en su banca azul, como un acusado, cuando no se le ha llamado en tal carácter, sino para pedirle antecedentes y luego utilizarlos el legislador. Si la Cámara cree que el Poder Ejecutivo ha cometido alguna extralimitación, hay el camino prudente de la Minuta de Comunicación, sin perjuicio de la acusación política.

Pero, no obstante aquella declaración unánime, se produjo un hecho revelador de que la mayoría de la Cámara no estaba dispuesta, en aras de la confraternidad, a dejarse dirigir por la minoría conservadora, entrada al Cuerpo Legislativo por obra de un acuerdo. El señor Muñoz se entusiasmó ante aquella «armonía», como allí se dijo, y propuso una moción que fué inmediatamente rechazada, quizá por la forma de su redacción, ya que no por su improcedencia. El mociónante quería que se oficiara al Superior Tribunal de Justicia pidiéndole comunicara el resultado de la causa seguida contra los individuos, «los cuales», decía en la moción, «según explicaciones dadas por el señor ministro de Gobierno, han sido puestos a disposición del juez competente con los antecedentes obrados» (1).

(1) Sesión del 26 de febrero de 1855.

Ni en el fondo, ni en la forma, era admisible la moción, por lo que hizo bien la Cámara en rechazarla. Después de admitidas las explicaciones, la conciencia del legislador no podía dudar de ellas, desde que las había hecho suyas. Desde luego, ya no era el ministro el único convencido de que las cosas habían pasado de una manera constitucional. Si el diputado no se había convencido de ello, no obstante «los antecedentes e instrucciones que así lo comprueban», según lo decía en ese acto el ministro, entonces su deber habría sido no darse por satisfecho.

La cuestión constitucional de si el Poder Ejecutivo había extralimitado la ley al aprehender a esos individuos y someterlos a la justicia ordinaria, estaba concluida. El Cuerpo Legislativo no tenía para qué mezclarse en el proceso, desde que nadie se quejaba de atentado cometido por el Poder Judicial. Por lo demás, el defensor de los presos allí estaría, en todo caso, para llenar su noble misión.

El resultado, pues, de la sesión, no hablaba mucho a favor de esa «armonía», que parecía pegada con papel, no obstante el *tino y patriotismo* del señor Muñoz a que había aludido el doctor Palomeque al desarrollar las explicaciones dadas por el ministro flamante; quien, de manera airosa, defendía al Poder Ejecutivo, cuando al final de su discurso declaraba felicitarse «de que la Honorable Cámara haya presentado esta ocasión al Poder Ejecutivo para que, por mi intermedio, pueda manifestar que en el ejercicio de sus deberes está íntimamente convencido de que el primero es no ultrapasarse las facultades que le acuerda la Constitución del Estado; y que, animado con esta profunda convicción, jamás se apartará del terreno de la ley, y de hacer práctico el acuerdo que debe reinar entre él y el Poder Ejecutivo».

Ya veremos lo que duraría ese acuerdo. Eran dos fracciones que vivirían eternamente separadas, formando partidos distintos. Cada uno de esos ciudadanos seguiría sus tendencias propias, aun desde los muros de la Defensa de Montevideo. El uno sería esencialmente revoltoso, el otro clásicamente evolucionista. Por un sarcasmo de la suerte se daría el título de conservador al revoltoso.

CONTRIBUCIÓN DIRECTA

La legislatura de 1855 se destacó por su labor, su patriotismo y su sensatez. Ella se dió cuenta del estado enfermizo del país y empezó por castigarse a sí misma, asignándose, como dietas, la miserable suma de tres pesos diarios. Por ello abogó el doctor Palomeque, sosteniendo, junto con Bertrán, Torres, Veira, Bustamante y Muñoz, la Minuta de Decreto del doctor Magariños, que así lo aconsejaba (1).

(1) Sesión del 28 de febrero de 1855.

El espíritu parlamentario del doctor Palomeque comenzaba a exhibirse en esos pequeños detalles imprevistos en toda asamblea legislativa. En un momento dado intervenía para enderezar una cuestión, que, mal dirigida, podía perderse, siendo, sin embargo, muy útil el pensamiento que le daba vida. Así sucedió cuando el pequeño debate sobre la renuncia de don Adriano Acosta, indicando él la forma práctica de conciliar las opiniones, lo que fué aceptado (1). Otro tanto al oponerse a la moción de don Fernando Torres, sostenida por el señor Bustamante, de no ocuparse de asuntos de interés particular mientras no fueran despachados por las comisiones los de interés general. Esta Minuta de Decreto fué combatida racionalmente por los señores Palomeque, Bertrán y Labandera, batiéndose en retirada los señores Torres y Bustamante, siendo vencidos en toda la línea (2). Igualmente, cuando en unión de los mismos Representantes citados, combatía el proyecto que mandaba no percibieran su sueldo íntegro los generales, jefes y oficiales agregados al Estado Mayor General, sino el mismo de los agregados al Estado Mayor Pasivo. El señor Torres fué vencido, no obstante el calor e insistencia con que defendía la idea (3).

La legislatura del 55 heredaba todas las dificultades nacidas de la guerra civil de los 12 años y de los extravíos del 53. El país aun no había entrado en caja. Sus finanzas se hallaban en un estado desastroso. Se vivía de prestado, pues aun no era posible siquiera cobrar la contribución directa. El problema era difícil, tratándose de gente esquilmada por la guerra, carente de recursos, que recién volvían a subir la montaña. No era posible sacrificarlos, vendiéndoles la tierra, ni obligarlos a hipotecarla en época tan calamitosa para pagar el impuesto territorial.

Quizá nada de esto habría sucedido, a no romperse la cadena constitucional en 1853, y en lo que no poca participación tuvo el Imperio del Brasil y la falta de prudencia política en los factores de entonces.

Ahí estaba la Deuda Consolidada, aquella de la cual hablaba el tratado del 51 con el Imperio del Brasil. No había con qué pagarla, y el Gobierno, dando una prueba de su buena fe, aspiraba a sacrificar lo poco que nos quedaba, pretendiendo enajenar la tierra pública para adjudicar *exclusivamente* su producto a la amortización de la Deuda. Era tal su buena fe que recomendaba a la Cámara su preferente atención (4). A la vez acompañaba copia del contrato de empréstito celebrado en Río de Janeiro por el plenipotenciario de la República en aquella corte y el Excelentísimo señor barón de Mauá (5). Y, como una demostración de que el Gobierno estudiaba y trabajaba, preocu-

(1) Sesión del 3 de marzo de 1855.

(2) Sesión del 3 de marzo de 1855.

(3) Sesión del 9 de marzo de 1855.

(4) Sesión del 13 de marzo de 1855.

(5) Sesión del 13 de marzo de 1855.

pándose de los intereses generales del país, no sólo de su presente, sino de su porvenir, unía a estos dos proyectos, tendientes a salvar las dificultades del momento crítico por que se atravesaba, otro de gran importancia, y por el cual tanto batalló la gente pensadora, hasta verlo realizado recién en nuestros días. El pensamiento de los hombres del 55 habla muy alto en su favor. Nos referimos a la propuesta para el establecimiento de un Banco, bajo la denominación de *Banco Nacional de Montevideo* (1).

Estas eran las perspectivas financieras. El doctor Magariños, que conocía muy bien la situación, se preocupaba de buscar recursos, creando impuestos de peaje, pontazgo y barcaje, aplicables a la conservación y mejora de los caminos públicos, sin perjuicio de interpelar al ministro de Hacienda para que explicara por qué no se hacía efectiva la ley de Contribución Directa (2).

El ministro declaró paladinamente que el Poder Ejecutivo se había visto «obligado a poner en suspenso la ley de Contribución Directa dictada el 31 de julio de 1853, dado el estado de aniquilamiento en que todavía se hallan», decía, «todas las fortunas particulares y las graves dificultades que presenta el establecimiento de esta imposición, con la justicia y equidad necesarias para que ella no sea origen de continuas reclamaciones».

Como se ve, el país no había podido ejecutar la ley de Contribución Directa dictada en 1853, y se preocupaba, sin embargo, de vender sus tierras públicas para pagar al Imperio del Brasil, en los propios instantes en que por intermedio del barón de Mauá obtenía un préstamo para salvar su afligente situación.

Un país que no podía cobrar contribución directa a sus habitantes, siendo esa la principal fuente rentística de un Estado, estaba condenado a la bancarrota y a la ruina, porque carecía de los medios indispensables para vivir. Y, sin embargo, pensaba vender sus tierras públicas, en tan horrible situación, no para comer, no para pagar a sus empleados, sino para solventar la Deuda en que tanto interés tenía el Imperio (3). Pero, en cambio, nos prestaba, para así aumentar el débito. ¡Cuánto mejor habría sido que nos dejara libre nuestra acción para organizarnos, y luego pensar en la Deuda! Así no se necesitaría contraer nuevos empréstitos.

El doctor Magariños se dió por satisfecho con lo expuesto por el señor ministro, mocionando en el sentido de que la Cámara recomendara al Poder Ejecutivo que hiciera lo posible para que dentro del año 1855 quedara establecida en el país la ley de Contribución Directa.

(1) Sesión del 13 de marzo de 1855.

(2) Sesión del 9 de marzo de 1855.

(3) Ya veremos cómo en seguida la necesidad le obligó a reaccionar.

¡ Qué tiempos ! ¡ Una ley dictada en 1853 se había declarado en suspenso por el Poder Ejecutivo *sin haberla vetado* ! Y aun en 1855 el Cuerpo Legislativo le *rogaba* la ejecutara.

En su consecuencia, el doctor Palomeque creía que el ministro debía establecer « clara y precisamente los inconvenientes que había para suspender la ley de Contribución Directa, desde que se decía ser imposible llevarla a efecto » (1).

No, decía el ministro, « ni en el mensaje ni en lo que he expuesto se establece que sea imposible llevar a efecto la ley : el Gobierno se preparaba, a pesar de sus graves dificultades, a ponerla en vigencia ».

En su virtud, el doctor Magariños mocionó en este sentido : « Recomiéndese al Poder Ejecutivo que, no obstante lo dispuesto en el artículo 5.º de la ley de 13 de enero de 1853, la haga efectiva ».

Por su parte, el doctor Palomeque, después de rectificar algunos conceptos, se dió por satisfecho con las explicaciones del señor ministro (2).

La moción del doctor Magariños pasó a comisión.

INTERESES DE LA DEUDA

Pero, el doctor Palomeque creyó de su deber pedir nuevamente la comparecencia del ministro « sobre asuntos que juzgaba del mayor interés en virtud de lo que disponía el art. 53 de la Constitución. » Fundado en él, pedía que antes de entrar a considerar los asuntos del día se mandara llamar al señor ministro, lo que así se resolvió.

Sin embargo, mientras se llamaba al ministro, se discutió el proyecto de Magariños, siendo sancionado en general y particular, con las modificaciones indicadas por la Comisión, referentes a la época de la averiguación de los capitales y al pago de las cuotas de los dos primeros trimestres del año corriente. Lo primero, se haría en el mes de mayo ; y lo segundo, en agosto.

Mientras tanto, el ministro no fué hallado, y se señaló el día siguiente, aunque era domingo, para que tuviera lugar la sesión (3).

Ese proyecto fué inmediatamente sancionado, aunque con las reformas aconsejadas por la Comisión y modificaciones propuestas por el autor. Por él, el pago de la Contribución podía hacerse con títulos de la Deuda, recibiendo éstos por el duplo del valor alcanzado en la úl-

(1) Hay que advertir que las actas son deficientes, pues aun no había taquígrafos.

(2) Así resultó, como se verá, demostrando el tacto administrativo del doctor Palomeque. Ya decía el ministro lo contrario de lo que ahora afirmaba.

(3) Bueno es advertir que aun no se había cobrado la Contribución, y ya se presentaba un proyecto mandando que el 50 % de ella podría pagarse en títulos de la Deuda Consolidada, siendo su autor el doctor Magariños.—(Sesión del 20 de marzo de 1855).

tima amortización mensual al tiempo de verificarse el pago, debiendo liquidarse el interés de los meses vencidos, cuyo monto se recibiría como capital (1).

La cuestión financiera traía preocupados los ánimos, siendo curioso que el país no recibiría dinero alguno para con él atender al presupuesto de gastos. Emitían títulos de Deuda Consolidada, que ganaba interés, y luego los recibían ellos mismos. Y los intereses liquidados ¡oh coincidencia! iban a ser justamente lo necesario para pagar la Contribución. El Gobierno sería, en último resultado, quien tendría que dar los cambios *en dinero*. ¿Se había calculado a cuánto alcanzarían esos cambios? ¿Tendría de dónde sacarlos el Gobierno?

He aquí lo que iba a decirnos la interpelación del doctor Palomeque. Este ciudadano no era un orador de frase hueca ni amante de cuestiones político-personales, donde se busca el brillo del individuo. Era, por el contrario, de frase sobria, muy partidario de la dilucidación de puntos de verdadera trascendencia para los intereses económicos, comerciales y financieros de la República, que conocía muy a fondo, por haberlos palpado en el terreno. Conocía la geografía del país, sus fuentes de producción, los mercados de consumo, el estado de la Hacienda pública y los elementos con que podía contarse para llevar adelante la reorganización administrativa. Por eso nunca se le vió en la Cámara pronunciando discursos *patrioteros*, si bien, en algún caso, unía, a los argumentos fundamentales sobre materia que hería aquellos tópicos, el sentimiento de amor a una patria, que, por todos lados, se venía al suelo.

Admira, por lo tanto, el valor, la energía, la constancia de aquellos hombres para poner el hombro y sostener un edificio que se derrumbaba. Acudían a colocar esos puntales, creando títulos para pagar la Deuda, y recibiendo esos mismos títulos en pago de impuestos. Se pagaban a sí mismos con lo suyo, adeudado. ¡Ni siquiera tenían para los intereses! De ahí la necesidad de recibir esos títulos en pago de impuestos, doctrina que se extendería hasta el abono de los derechos de aduana, ya que no se atrevían a declarar suspenso el pago de la Deuda. Es verdad que a ello llegarían.

El doctor Palomeque comprendía la necesidad de abordar la cuestión financiera. En ella se encerraba el porvenir del país. Sin Hacienda no era posible hacer política. Por eso se apuraba por saber si el Poder Ejecutivo podía o no hacerse de recursos cobrando la Contribución Directa. El Poder Ejecutivo había dicho que no era imposible, y él había quedado satisfecho aparentemente, pues bien sabía cómo se hallaban las cosas y la competencia de quienes las manejaban. Pero, ahora era necesario poner en claro otro problema: saber si había con

(1) Sesión del 27 de marzo de 1855.—El Senado lo modificó suprimiendo lo del *duplo*.

qué pagar los intereses de la Deuda Consolidada. De ahí la urgencia en la celebración de la sesión, no obstante tratarse de un día festivo. Este llegó, y entonces el interpelante recordó que la ley de 3 de julio de 1853 disponía, en el art. 3.º, que, a contar desde el 1.º de enero de 1855, la deuda empezaría a vencer el interés del 1 % de rédito anual, el cual se pagaría por trimestres : que por el art. 8.º de la misma debía ponerse a disposición de la Tesorería de la Junta de Crédito Público la cantidad de 60,000 pesos mensuales, destinándose 10,000 a la amortización y 50,000 al pago de los intereses que la misma deuda fuera venciendo.

«De modo, pues», decía, «que debe estar en poder de la Tesorería la cantidad de 50,000 pesos para atender al cumplimiento de los intereses marcados por dicha ley : si esto no es así, es de opinión que, como en el cumplimiento de esta ley está comprometida la buena fe del Poder Ejecutivo, la del Cuerpo Legislativo y el crédito de la nación, la Cámara de Representantes ha llamado al señor ministro de Hacienda a su seno para que le manifieste si el Poder Ejecutivo tiene los recursos necesarios para dar cumplimiento a la expresada ley.»

Hacía presente que se hallaban a 25 de marzo, faltando muy pocos días para el 1.º de abril, en el cual el Gobierno debía pagar los réditos mencionados.

Dicho esto, manifestaba que «si de la contestación del señor ministro se ve que resulta que no hay con qué llenar el cumplimiento de la ley indicada, un señor representante trata de presentar un proyecto que ponga pronto remedio a este mal». Y terminaba declarando, a fin de no verse en su actitud una hostilidad al Gobierno, que «aquí no se trata de otra cosa sino de salvar el país, ayudando al Poder Ejecutivo en todo cuanto se pueda a este fin ; y es por ello que pide al señor ministro se sirva explicar si tiene los medios con qué darle cumplimiento» (1).

Era una exposición sencilla, sin fraseología hueca : ni una palabra de más, ni una de menos. Era clara y precisa, como la respuesta que pedía al señor ministro, para luego preocuparse de los medios de salvar la pavorosa situación. Se veía al hombre preparado, al cabo de las cosas, conocedor de las cualidades del ministro como financista. Él sabía que era tan *imposible* pagar los réditos, como *imposible* poner en ejecución la ley de Contribución Directa dictada desde 1853, no obstante la declaración en contrario del señor ministro de Hacienda, de que ya se ha hablado, al interpretar en aquellos instantes las propias palabras del representante del Poder Ejecutivo.

No pudo entonces, en aquel momento, sin ser descortés, poner en duda la aseveración del ministro, pero éste se encargaría, al muy poco tiempo, de manifestar a la Honorable Asamblea «la imposibilidad en

(1) Sesión del 25 de marzo de 1855.

que se hallaba de dar cumplimiento en el presente año a la ley de Contribución Directa, pidiendo a la Honorable Cámara lo facultara de una manera más lata, a fin de poder llevarla a efecto» (1).

Otro tanto haría relativamente a distraer ninguna de las rentas de la nación para aplicarlas al pago de la Deuda Pública, sin que previamente se cubrieran los gastos del servicio público (2).

Parecía que no hubiera al frente del ministerio de Hacienda quien se diera cuenta de la verdadera situación del país, trazándose rumbos ciertos para la resolución del grave problema, pues se vivía tanteando caminos. Los expedientes a que se recurrieran eran ficticios. Un país endeudado, que no tiene cómo pagar los intereses de su deuda, no puede adoptar más que un camino : así declararlo y suspender el pago, destinando sus rentas, primero, al abono de su servicio interno, y el sobrante, si lo hubiere, a la amortización e intereses de la Deuda. Era, pues, ridículo todo aquello de pagar deuda con deuda. Primero hay que vivir, no siendo posible sacar de donde no lo hay. Es el recurso impuesto por la necesidad a todos los pueblos en sus grandes crisis. Así, por último, lo comprendería el Poder Ejecutivo, y tendría el valor de declararlo, una vez que agotó todos los recursos, y que con la interpelación del doctor Palomeque se puso en evidencia el mal.

En efecto, el ministro declaró, al contestar la interpelación, «que el Gobierno no tenía cómo para poder pagar los intereses, y que en vista de esta imposibilidad había pensado en promover, y puesto en práctica, una negociación que le asegurase no sólo el pago de los intereses del primer trimestre, sino también el de los demás, con toda seguridad de que en adelante no le faltasen estos recursos ; pero que esto no era una cosa realizada, no era más que una esperanza por ahora (3). Que, sin embargo, si hubiese algún señor representante que presentase un proyecto, el cual envolviese un pensamiento feliz, el Poder Ejecutivo se esmeraría en prestarle todo su apoyo, toda la cooperación posible para su realización».

Era valiente la respuesta del ministro, aunque reveladora, a la vez, de que nada se le ocurría, fuera del pensamiento trillado e inútil de recurrir al préstamo para ahondar más el abismo, como esos jóvenes calaveras caídos en la malla de los usureros sin sentimiento. Y así lo éramos : unos calaveras políticos, que no habíamos medido las consecuencias de nuestras revueltas fraticidas. Aspirábamos al poder, empleando el medio ilícito de la fuerza bruta, y al llegar a él nos encontrábamos incapaces de dirigir los destinos sociales, porque no sólo carecíamos de la buena y nutrida Hacienda, sin la cual no se mueve la

(1) Sesión del 8 de junio de 1855.

(2) Sesión del 30 de marzo de 1855.

(3) Más adelante, en el capítulo *La personalidad de Mauá*, se sabrá cuál era ese medio.

nave del Estado, sino que, como buenos caudillos, a veces analfabetos, ignorábamos la ciencia de encarrilar lo desordenado.

La Hacienda, herida y ofendida ante los desmanes de que había sido víctima por quien se apoderaba del gobierno, creyendo que bastaba la fuerza bruta para hacer brotar aquélla de las entrañas de la tierra feraz, se vengaba, ocultándose, en las horas difíciles, para enseñar el mal irremediable hecho al violarse las leyes de la democracia, ésta que es pura prudencia y sacrificio. Ahí estaba el abismo abierto por las revueltas, que a todos tragaba. Ese abismo era el resultado de todas las luchas intestinas. El hijo pródigo había gastado una fortuna en su carrera de desórdenes, comprometiendo la de sus compañeros y vecinos pacíficos.

Ese era el origen de la gran Deuda Pública. Teníamos que pagar todos los perjuicios causados durante esos días de extravío; y en la hora de la dicha, cuando nos sentábamos en el solio aspirado, en la seguridad de que bastaba tocarlo para poder gobernar, mirábamos hacia abajo, y nos horrorizábamos del temblor que sentíamos a nuestros pies, causado por el clamor de tanto derecho atacado, de tanta injusticia cometida. Y esos daños y perjuicios, que se resolvían en Deuda Pública, que no podía pagarse, ni en sus intereses, y cuyo monto aun se ignoraba, porque ni el tiempo de revueltas ni las malas mañas de los supuestos acreedores habían permitido liquidarla, se presentaban airados, diciendo: ¡Esta es vuestra obra! Y sus autores, desesperados, deseosos de buscar un remedio a tan grave mal, se debatían con la suerte, no queriendo, por un rasgo de honradez personal e ingénita, atreverse a declarar que no había remedio para tal enfermedad sino una: suspensión de todo pago de Deuda Pública, disminución del presupuesto, y luego, una vez conocida la cantidad sobrante, dedicarse al pago de aquélla, hasta donde ella alcanzase.

No sería la cuestión política personal la que haría bambolear al caudillo en su poder, y caer con estrépito; ni en esto consistiría el remedio para curar el mal. Era la situación financiera la que lo mataría a él, como a todos. Si las finanzas hubieran marchado en orden, la paz habría estado asegurada, porque las pasiones se tranquilizan cuando en el hogar hay pan para los hijos, ganado en el trabajo honrado.

Una sociedad donde todo era ficticio, desde el título emitido para la Deuda Pública, hasta el sueldo asignado al desgraciado empleado, que lo recibía en tres plazos, tarde, mal y nunca, estaba preparada para la anarquía. Todos eran elementos de discordia, y atribuían al gobernante lo que era obra de ellos mismos. El hombre de arriba no era sino el representante de aquellas pasiones desencadenadas, que a él lo habían colocado allá, mientras ellas quedaban abajo. El pedestal sobre el cual se asentaba era movedizo, como toda pasión airada, bastando sólo un movimiento de la ola humana para que todo se derrumbara.

Es verdad que esa ola no se movía así no más, porque el instinto de la propia conservación la hacía mantener unida, mirando el pendón de un caudillo, pero no un ideal de verdad y de justicia ; mas la hora llegaba en que el fin económico de toda acción generatriz se sacudía latentemente, observándose las vibraciones del dolor por encima de la epidermis, y entonces un individuo cualquiera explotaba esa situación del espíritu, y con palabras sonoras le enseñaba a la pobre masa ignorante, pero hambrienta, el camino de la revuelta como la panacea para curar el cáncer. Y así continuaban cavando más y más el abismo, porque no eran hombres los que se necesitaban—pues los había muy buenos, honrados e inteligentes, alrededor de la fuerza bruta dominante, la que se dejaba avasallar a pesar de su aspereza,—sino Hacienda pública con que satisfacer las exigencias económicas de la sociedad. Y esto no se obtendría sino cuando la paz permitiera estudiar el cuadro pavoroso. La inteligencia no dominaría ni resolvería el problema en medio del incendio colosal, el cual sólo permitiría buscar el recurso del momento, del día presente, para abrir una brecha por donde huir de las llamas devorantes.

EL MINISTRO

Esto era lo que hacía el ministro de Hacienda don Francisco Agell, hombre honesto, pero que carecía de conocimientos para abordar la dilucidación del punto. No se le ocurría sino pedir dinero prestado para pagar los intereses, es decir, aumentar la Deuda. Y esto era sólo una *esperanza*, porque, como era natural, ¿quién iba a facilitar capital a un Gobierno endeudado con el Imperio, que le absorbía cuanto producía, el cual, en ese momento, volvía a pedirle mayor cantidad ; a un Gobierno que afectaba la importante renta territorial para la amortización e intereses de esa Deuda ; a un Gobierno que resolvía vender toda su tierra pública para destinarla a ese único fin ; y a un Gobierno, que, como va a verse, no pensaba más que en esa maldita Deuda Pública, para destinarla al pago de los derechos de aduana, como único recurso salvador de la ruina y miseria general ?

Por todas partes el título de la Deuda Pública, en la cual estaba puesta la garra del Imperio, por el Tratado del 51, no dejando un minuto de descanso a los hombres pensadores, ni a la sociedad en general, a fin de recuperar fuerzas para volver a llevar la carga a la montaña. De ahí que en el corazón del pueblo se sintieran enconos contra el ministro diplomático brasileño, cuyo nombre pronto aparecería en las lides parlamentarias y revoltosas ; hasta el extremo de ser causa de aquellos pasquines, que, en el fondo, reflejaban un sentimiento honrado y noble. El mismo novel ministro, que calificaba de *calumniosa y falsa* la aseveración del *pasquín*, sentiría interiormente la verdad de todo aquello, por más que su posición y las exigencias del país y la

fuerza del consonante político le obligaran a decir que eran blancas las hormigas.

Al ministro de Hacienda no se le ocurría nada. Todo lo esperaba de la inteligencia de los legisladores, de ese proyecto a que se había referido el doctor Palomeque, y que muy luego presentaría el doctor Muñoz, como prueba de que marchaban unidos y de acuerdo en este momento trascendental. Al doctor Palomeque le había tocado en lote la tarea de la acción, y al doctor Muñoz la del pensamiento. Así se complementaban.

En su consecuencia, una vez oída aquella declaración del señor ministro, el interpelante, que sabía adónde iba, que nunca daba un paso sin meditarlo mucho, y que tendría muy presente aquello que ese mismo ministro había declarado de no ser *imposible* salvar los inconvenientes opuestos a la ejecución de la ley de Contribución Directa, se apresuró a acentuar más y más las cosas. Quería que «al menos—decía,—se sirva decir el señor ministro si el Gobierno tiene algún medio, es decir, algún proyecto, algún pensamiento, que, unido al del señor representante a que antes ha hecho referencia, pudiera dar el bien que se busca, porque, lo repetía, no se trataba de otra cosa, ni se tenía otro objeto, que ayudar al Poder Ejecutivo por todos los medios posibles a salvar el país del descrédito con que lo amenazaba la imposibilidad de pagar los réditos de su Deuda».

El ministro reiteró lo dicho, y, después de algunas increpaciones del señor Arteaga, contestadas por el ministro, quien sostuvo que «en el Mensaje del Gobierno se había dado conocimiento del estado en que se hallaba el Poder Ejecutivo», el doctor Palomeque expresó su «sentimiento, al ver que el objeto de su moción iba degenerando en increpaciones, que si seguían traerían la necesidad de entrar en averiguaciones y examen de cosas de que era necesario apartar la vista». Hizo presente que el objeto de su moción había sido bien explícito «entre la posibilidad o imposibilidad de pagar los intereses de la Deuda Consolidada». Y esto expresado, creyó de su deber hacer notar el error del ministro cuando habló de haber dado en el Mensaje respectivo, «conocimiento a la Cámara de la situación del Gobierno respecto al pago de los intereses». Con oportunidad dijo que en el Mensaje se leía lo siguiente: «La ley que dictasteis respecto de la deuda general ha sido hasta aquí cumplida en todas sus partes.» «Luego, pues—decía—ha debido haber ya en depósito los 50,000 pesos destinados al pago de los intereses; pero, dejando esto a un lado, vuelve a repetir que su objeto no ha sido hacer increpaciones, sino saber si el Gobierno tiene cómo para pagar los intereses, y si no, ayudarlo en cuanto se pueda, para salir del mal paso en que nos encontramos».

La actitud del doctor Palomeque era prudente y hábil. No quiso dejar sin correctivo el error del ministro, el cual, en el fondo, importaba un ataque a la Cámara, pero, inmediatamente, con toda cortesía,



José María Muñoz

con el don de gentes en él innato, al lamentar lo que sucedía, que podía llevarlos muy lejos, de recriminación en recriminación, en la hora del desastre, levantaba su espíritu a regiones serenas, y detenía a los contrincantes, diciéndoles: «Aquí sólo hemos venido a ayudarnos mutuamente para salir del abismo a cuyo borde nos encontramos».

Salvaba a la Cámara del cargo injusto hecho por el ministro, pues no era verdad que el Poder Ejecutivo hubiera dado conocimiento de lo que pasaba, como era su deber, sino que, por el contrario, había asegurado que la ley se había cumplido hasta aquel momento *en todas sus partes*.

¡Y faltaban *cinco días* para el vencimiento del pago de los intereses, y nada había dicho el Poder Ejecutivo!

Por lo demás, el doctor Palomeque había procedido parlamentariamente, con todos los respetos debidos al Poder Ejecutivo, al no querer arrebatarle la primacía en esta incidencia fatal.

Era el Poder Ejecutivo el llamado a dirigirse a la Cámara comunicando el hecho e indicando las medidas a adoptarse. Quería que éste previamente declarara aquel hecho elocuente, y que además nada tenía que proponer, para recién entonces proceder a la presentación del proyecto confeccionado por el señor Muñoz. Su actitud fué correcta, hábil y sentida. Así lo comprendió el señor ministro, y guardó silencio, siendo llegado el momento solemne de ocupar la tribuna el doctor Muñoz, para presentar el proyecto que se suponía salvador de la situación horrible por que se atravesaba.

EL PROYECTO SALVADOR DEL DOCTOR MUÑOZ

El proyecto del señor doctor Muñoz fué fundado, diciendo su autor que «creía que debían reunirse todos en concurso de ideas, para ayudar al Poder Ejecutivo, no como para salir del presente apuro, sino para salvar completamente al país de las ruinas a que lo precipitaría el descrédito de la deuda general del Estado». Declaraba que presentaba su proyecto, no como una cosa completa, sino como un pensamiento que podría contribuir a dar el remedio que se buscaba.

Después de estas ligeras frases, pasó «a considerar los beneficios del proyecto a que se refiere», dice el acta, aunque sin mencionarlos, y entróse a su lectura.

El pensamiento fundamental consistía en admitir los títulos de la deuda en pago de la cuarta parte de los derechos de aduana, estimándose aquéllos al duplo del término medio a que se hubiera efectuado la última amortización de cada mes, sobre el fondo de los 10,000 pesos que asignaba la ley de 3 de julio de 1854. Se capitalizarían los intereses vencidos, sin contar los días de fracción, y por las fracciones que resultaren, al verificarse el pago de la cuarta parte en billetes, se

expedirían vales provisorios, cuyos vales serían admitidos en la misma forma que los billetes.

Este proyecto lo complementaba con otro muy importante.

La deuda tenía por origen los daños y perjuicios causados por la guerra concluída el 51. Por consiguiente, ya que no podían pagarse los intereses de los títulos emitidos, justo era suspender el reconocimiento y conversión de tales perjuicios para en adelante.

Esta medida se imponía, mucho más teniéndose en cuenta los escándalos a que había dado lugar la tramitación de los expedientes relativos. En su consecuencia, el doctor Muñoz así lo proponía, sin perjuicio de la tramitación de los expedientes, que serían sometidos al examen de una comisión legislativa, compuesta de un senador y dos representantes.

Los proyectos, especialmente el primero, fué *muy apoyado*, mientras el otro *fué también suficientemente apoyado*, dice el acta, dando lugar para que el doctor Palomeque, al leerse el principal, mocionara para que la Comisión de Hacienda, dada la urgencia del caso, le diera su preferente consideración y pronto despacho, de modo, si fuera posible, mañana mismo, decía, la Cámara lo tome en consideración.

La cosa urgía. El país estaba infestado de títulos de la Deuda. No había persona que no los poseyera, legítima o ilegítimamente, como tendría ocasión de denunciarlo el doctor Palomeque en pleno Parlamento cuando abogaba por la quemazón de los tales expedientes fraguados (1).

Por consiguiente, cuantos esfuerzos se hicieran para remediar el mal, se agradecerían, principalmente por aquellos que, en su calidad de comerciantes o de propietarios, tuvieran que pagar derechos de aduana o impuesto territorial. Los demás, que tuvieran esos billetes como renta, se verían en el caso de guardarlos para mejor época, o de venderlos a los primeros.

Dada la impresión causada en el ánimo de los legisladores, hubo quienes, como don Fernando Torres y don Eduardo Bertrán, atacaron el asunto de una manera radical.

El señor Torres sostenía la necesidad de reconsiderar la ley de consolidación de la Deuda, «desde que—decía—el mal dependía de ella misma». No, el mal no dependía sólo de la ley, sino del estado agónico del tesoro, al cual no entraban los fondos necesarios para pagar siquiera a los servidores del Estado. La ley era muy buena, ya que se había declarado, en 1853, el derecho a indemnizar a todo el mundo, dada la circunstancia de haberse reconocido la existencia de dos Gobiernos legales al hacerse la Paz del 51—uno, dentro de Montevideo, y otro, fuera de Montevideo.

(1) Al respecto ya se conocerá lo que el caudillaje de Cerro-Largo le imputaba al coronel Palomeque, cuya intervención en la cuestión de daños y perjuicios tantos disgustos le causó, como se verá oportunamente.

Todo el mundo, pues, aparecía acreedor; todos habían sido dueños de grandes rodeos de animales. Y ese todo el mundo, poseía títulos de la Deuda, acaparados por los que habían negociado con la desgracia social, entre los cuales aparecían abogados, escribanos y procuradores duchos en el arte de fraguar expedientes por perjuicios.

La medida, pues, aconsejada por el señor Muñoz, era procedente. No así la del señor Torres. En cambio era muy procedente la del señor Bertrán, relativa a suspender la liquidación de la Deuda hasta tanto se supiera con qué recursos se podía contar para su cumplimiento, pues no hacía más que *legalizar* un hecho, que era, en el fondo, lo que importaban los proyectos presentados por el señor Muñoz. En el fondo, se declaraba en suspenso la liquidación de la Deuda, puesto que no había recursos para solventarla. Su cotización, aun a sancionarse esos proyectos, no sería sino un juego de Bolsa, a fin de obtenerla al menor precio posible, para pagar derechos de aduana solamente, pues en cuanto al impuesto territorial, quedaría de hecho sin efecto.

Ese sería el único rol que desempeñaría. No llenaría el muy importante, con carácter permanente, en todo país bien organizado, de colocación de capital, teniendo presente el rédito a pagarse. Ahora este último se capitalizaría, ya que no se podía pagar, dándose vales, que sólo servirían para abonar derechos de aduana, hasta con pérdida de las fracciones de los días. Aquí siquiera se preveía lo que debía hacerse con esa diferencia. El cambio se pagaría en vales, cosa no prevista en el proyecto sobre el pago de la Contribución Directa. Es verdad que poco importó la omisión, pues no siendo posible cobrar Contribución Directa, como sucedió, desgraciadamente, la Deuda no tuvo empleo en ese cauce. Ya veremos cuándo fué posible cumplir la ley de Contribución Directa. Sólo la paz daría ese beneficio.

LA JUSTICIA

Mientras llegaba el momento de discutir esos proyectos, el doctor Palomeque se ocupó, en unión de los señores Vázquez, Aguiar, Tenorio y Neves, sus compañeros de Comisión de Legislación, del proyecto relativo a la Administración de Justicia (1).

Ese proyecto se ocupaba de los recursos de apelación, segunda apelación, revisión, nulidad e injusticia notoria, juicio ejecutivo y disposiciones generales. Era un proyecto muy bien trabajado, en el que lucían ideas adelantadas. La Cámara le consagró gran atención, sancionándolo después de una larga y laboriosa discusión, en cinco sesiones casi consecutivas (2).

Era un proyecto muy necesario, para así concluir con las vetus-

(1) Sesión del 28 de marzo de 1855.

(2) Sesiones del 28 y 30 de marzo, y 3, 9 y 13 de abril de 1855.

tas leyes que paralizaban el procedimiento judicial. En él, el doctor Palomeque utilizó los conocimientos adquiridos al lado de hombres como Narvaja, Requena y Herrera y Obes.

Otro tanto haría cuando confeccionara el proyecto relativo a las hipotecas y registro de ventas (1) para concluir con todas las dificultades emanadas de las diversas leyes españolas citadas en los tribunales, y que hacían la desesperación, cuando no la delicia, de los litigantes. Aun tenía frescas las lecciones recibidas en el aula, en la cátedra regentada por sus maestros-amigos, y las aplicaba, con la colaboración de éstos, en leyes, que, andando el tiempo, se incorporarían a los Códigos modernos, depuradas de sus defectos o ritualidades ya innecesarias, atentos los progresos operados; pero obedeciendo a la tradición legislativa que todo pueblo ha de conservar para no renegar de sí propio en el vínculo del presente con el pasado y de aquél con el porvenir, único medio de conocer las evoluciones operadas en el camino de la civilización.

EL TEMBLADERAL FINANCIERO Y ECONÓMICO

La situación era azarosa. No había renta pública con qué pagar a los empleados. No podían salvarse los inconvenientes para cobrar la Contribución Directa, porque en el desorden vivido no había sido posible formar los empleados necesarios para las medidas previas a la recaudación; y ello, sin contar con la miseria del país. La única renta era la de la Aduana, cuya enajenación ya conocemos, y ésta misma se afectaba a la Deuda Pública, en la creencia de que por ese medio ésta se valorizaría.

El Gobierno, pues, empezó a sentir el tembladeral en que se hallaba el país, próximo a hundirse definitivamente, sin que lo salvara el proyectado empréstito de Mauá, del cual la Cámara no daba señales de ocuparse, ni la negociación, de la que sólo *esperanzas* tenía, para atender al pago de los intereses de la Deuda. Entonces comprendió que todo eso era ficticio: que ni la Deuda se salvaría, aunque se destinaran aquellas rentas, y que ni la Contribución Directa se cobraría, dados los inconvenientes presentados. Se trataba de un pueblo, acreedor del Gobierno, casi todo él, que ostentaría en sus manos los títulos emanados de los daños de la guerra, cuando los agentes de la autoridad fueran a presentarse en sus hogares arruinados a exigirle el pago del impuesto territorial. «¡Me debéis todo esto, me habéis arruinado! ¿Con qué queréis que os pague el tributo para dar de comer siquiera a los desgraciados servidores del Estado?» Esto parecía oírse, y tras

(1) Este proyecto fué confeccionado por el señor escribano don Estanislao Mouliá, muy preparado en esas materias, siendo patrocinado por el doctor Palomeque.

él la acción desesperante de quien ya no razona y arremete contra la autoridad, a la cual considera como la causa de sus desgracias, buscando colocar en su lugar otros hombres capaces de cambiar la situación ; ¡ con olvido o ignorancia de que el remedio del mal no se hallaría nunca en ese procedimiento violento !

Convencido, pues, el Gobierno de que era un error querer jugarlo todo a una sola carta, es decir, a la Deuda Pública, tuvo la energía de volver por sus fueros, después que conoció los proyectos del señor Muñoz, y se había sancionado el del doctor Magariños autorizando el pago de la Contribución Directa con títulos de la Deuda. No, dijo el Gobierno ; esto no puede subsistir ; así no será posible vivir ; es necesario convencerse de «la imposibilidad que hay en distraer ninguna de las rentas de la nación al pago de esa Deuda, sin que previamente se cubran los gastos del servicio público» (1).

La lectura del Mensaje del Poder Ejecutivo causó la impresión consiguiente. Fué escuchada en medio de una ansiedad silenciosa. Él importaba la condenación de los proyectos en trámite, y venir al pensamiento del señor Bertrán, de suspender el pago de la Deuda.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo declaraba haber hecho todos los esfuerzos imaginables para salvar la situación, manifestando «las esperanzas que abrigaba de obtener los medios de hacerle cumplida justicia sin apelar a las medidas excepcionales a que la Cámara crea deber recurrir».

Hacia presente que a principios de febrero había entregado a la Junta de Crédito Público los 10,000 pesos asignados a la amortización, haciendo un gran sacrificio. Recordaba que ahí estaba su proyecto de vender la tierra pública, destinándola al pago de la Deuda. «Y recientemente, aun—decía—acordando el pago de los intereses a los títulos que se amorticen, el Gobierno se ha impuesto un nuevo sacrificio, en bien de la Deuda Consolidada, a la cual este precio mayor en la amortización no podrá dejar de dar algún valor. Ha procedido así, en ejecución de la ley, con los títulos que mueren, para no defraudarles un derecho que ya tienen adquirido».

Y expuesto cuanto había hecho para dar *algún valor* al título depreciado, que representaba la ruina del país por sus propios hijos, cuando no el latrocinio de quienes fraguaron daños y perjuicios, entraba valientemente a decir lo que, afirmaba en su Mensaje, *iba a expresar cuando fué interpelado por el doctor Palomeque*. Recién aquí lo iba a declarar, cuando debió manifestarlo en el acto de la interpelación, mucho más cuando los señores Torres y Bertrán hicieron aquellas mociones.

Es de suponerse que no había sinceridad en esta declaración del Poder Ejecutivo, pues, a haber tenido la intención entonces, lo hu-

(1) Sesión del 30 de marzo de 1855.

biera expresado en el momento de la interpelación. Sin embargo, ni una palabra, ni una insinuación siquiera.

Pero, había reaccionado, ahora que conocía el remedio propuesto por el señor Muñoz, y sentía temblar el suelo bajo sus pies, por lo que, sacando fuerzas de flaquezas, dijo a la Asamblea lo que debió decir desde el primer momento, mucho más desde que el Poder Ejecutivo había cumplido con su deber enviando ya a la Cámara el presupuesto general de gastos (1).

«No es dado al Gobierno realizar lo imposible—decía,—ni dar pruebas más positivas del interés que acuerda a sus obligaciones de este orden. Piensa también que, sin arreglar previamente la ley del presupuesto en lo concerniente a los gastos de servicio público, no se debe disponer de ninguna otra de las rentas de la nación. El orden público, la protección de los derechos de todos los ciudadanos, el prestigio y crédito de la autoridad a que tan íntimamente va ligado el de la Deuda Pública en sus distintas categorías, así lo reclaman. Asegurando los gastos de la administración, con todas las reducciones que creáis justo hacer, entonces destinad a la Deuda, bajo las más severas responsabilidades, cuanto exceda de aquella cifra» (2).

La pavorosa situación ahí estaba al desnudo. La Cámara, sin embargo, no se asustó. No quiso suspender la consideraciones de los asuntos repartidos, y la nota del Poder Ejecutivo fué pasada a la Comisión de Hacienda, aunque habiéndose pretendido que ésta se expidiera en cuarto intermedio, a fin de tomarse en consideración, y contestarse, cual lo indicó el señor Arteaga.

La Comisión de Hacienda se expidió en la sesión siguiente, aconsejando una Minuta de Comunicación. En ésta manifestaba que «sentía que el Poder Ejecutivo hubiera llegado hasta sospechar o temer que pudiera faltarle a la Cámara de Representantes el buen tino, prudencia y saber que debe presidir en todas sus deliberaciones. Representando ella al pueblo oriental—decía,—cuyas conveniencias guarda y defiende como un sagrado deber, no le era necesaria la comunicación referida del Poder Ejecutivo para cumplir dignamente con su misión. La Cámara de Representantes, emanación directa del pueblo soberano, lamentaría como una calamidad pública, la invitación del Poder Representativo, si no comprendiera, como resueltamente lo com-

(1) Sesión del 27 de marzo de 1855. En seguida presentó otro mensaje, en la sesión del 13 de abril de 1855, adjuntando un proyecto de ley por el cual reducía a la mitad todas las pensiones percibidas fuera del territorio, pidiendo la facultad de aplicar a este año las supresiones de empleos y otras economías que la Honorable Cámara haga para el venidero, sin menoscabar el buen servicio público.

(2) Sesión del 30 de marzo de 1855. Consecuente con este pensamiento, el Poder Ejecutivo se dirigió a la Asamblea pidiéndole la reducción de los sueldos y de las pensiones, ya indicados (sesión del 13 de abril).

prende, que el Poder Ejecutivo lleva sus deseos por la mejora de la referida situación, aún más allá de lo que en el caso debiera. Deseando, pues, tranquilidad en el Poder Ejecutivo, ella proseguirá en el desempeño de sus funciones, con la prudencia que a su alta jerarquía corresponde» (1).

La Cámara procedió con parsimonia. No trató el asunto inmediatamente, sino que mandó repartir este Informe, para que lo estudiaran detenidamente los señores representantes, demostrando un valor que, en el fondo, no era natural, cual se verá.

Pero, como respuesta anticipada, el mismo señor Muñoz, autor de aquellos proyectos, presentaba otro en el cual se estatuyó que la reforma militar acordada por la ley de 25 de julio de 1853 se pagara en billetes de Deuda Consolidada, y que, acordada por la Asamblea la enajenación de tierras públicas, se admitieran en pago de éstas los títulos de reformas como dinero por su valor escrito.

Esta era, desde luego, una banderilla puesta al Poder Ejecutivo por el señor Muñoz, autor de los proyectos financieros, en respuesta a lo que respecto de ellos había insinuado el Gobierno en su Mensaje, pidiendo la suspensión de todo proyecto al respecto.

Se hacía más: la Comisión Especial de Presupuesto se apresuraba a expedirse, aconsejando una Minuta de Comunicación por la cual reprobaba, y devolvía al Poder Ejecutivo, el presentado por él, por no estar en consonancia con la necesidad de economías que el país reclamaba (2).

Iba adelante en su obra. No se apuraba a satisfacer los deseos del Poder Ejecutivo. Parecía que quería ponerle piedras en el camino. Y, como una prueba de que no estaba dispuesto a acceder a aquellos deseos manifestados, resolvió ocuparse previamente del proyecto sobre enajenación de tierras públicas, destinadas al pago de la Deuda Consolidada, que el Poder Ejecutivo había presentado, pero cuyo retiro, en el fondo, acababa de solicitar.

Las líneas estaban tendidas, y las consecuencias fatales parecía no sorprenderles.

Sin embargo, acaeció una curiosa y llamativa escena (3).

Cuando se creía que iban a tratarse los proyectos sobre enajenación de tierras públicas destinadas al pago de la Deuda, presentados por el Gobierno, por el doctor Magariños y por la Comisión de Hacienda, en mayoría y en minoría, la Cámara quedóse sorprendida ante la moción hecha por el señor Bertrán, quien, como miembro de la di-

(1) La Comisión estaba compuesta de los señores Juan Antonio Labandera, Juan F. Rodríguez, Juan José Arteaga y Hermenegildo Solsona.—(Sesión del 31 de marzo de 1855).

(2) Sesión del 9 de abril de 1855.

(3) Sesión del 31 de marzo de 1855.

cha Comisión, mocionó para que se suspendiera su discusión por algunos días «porque no había tenido tiempo bastante para estudiarlo».

El señor Magariños se opuso, quedando así las cosas. Mas cuando en una de las sesiones siguientes, la del 11 de abril, se dió cuenta del dicho asunto, e iba a entrarse a la discusión, volvió el señor Bertrán (1) a oponerse, no ya fundado en que él no había estudiado el punto, sino que «en nombre de la Comisión de Hacienda en mayoría, pedía retirarlo para reconsiderarlo y poderlo presentar acaso en la próxima sesión, modificado de algunas cosas que la Comisión encontraba dignas de reconsideración». Es de advertir que a las dos citadas sesiones había concurrido el ministro y ocupado su asiento, teniendo que retirarse, dados los incidentes producidos, que dieron por resultado el aplazamiento de la discusión.

La moción de retiro no la discutió nadie. Todos reconocían que una Comisión tenía el derecho indiscutible de hacerla, pero el doctor Magariños criticó, con razón, el procedimiento usado, porque habían «corrido once días, y parecía que había habido suficiente tiempo para haber hecho la reconsideración, no comprendiendo cuál hubiera sido el motivo que tuviera la Comisión para proponer el retiro». El señor Bertrán hacía presente que eso era dudar de las razones que tuviera la Comisión. No creyó del caso exponerlas, por considerarlo extemporáneo, declarando que se alegrarían al presentarse nuevamente el proyecto en la próxima sesión.

Era curiosa la actitud de la Comisión, como lo aseveró también el señor Torres; pero, se concedió el retiro, y el ministro ahí sentado, desairado por segunda vez, tomó las de Villadiego.

Y fué entonces, cuando la Cámara recibió del Poder Ejecutivo el mensaje sobre reducción en los sueldos y pensiones, con lo que persistía en su obra práctica de encarrilar las cosas por el verdadero terreno de las economías y del servicio del presupuesto, sin afectar las rentas al pago de la Deuda, sino después de conocer el *superavit* (2).

Por su parte, la Comisión de Hacienda, en cumplimiento de lo ofrecido, se expedía inmediatamente, en la sesión siguiente, la del 13 de abril.

Al fin, en la sesión del 28 de abril se discutió el proyecto.

La Comisión de Hacienda aceptaba el pensamiento fundamental del Gobierno, de vender las tierras públicas, pero no así en cuanto al destino dado a su importe. El Poder Ejecutivo proponía que se aplicara «el importe total de esas ventas al solo y único objeto de la amortización de la Deuda Pública Consolidada» (3).

(1) No había más miembro de la Comisión que este señor, compuesta de los señores Juan Francisco Rodríguez, Hermenegildo Solsona y el mencionado.

(2) Sesión del 13 de abril de 1855.

(3) Artículo 5.º y página 116.—Diario de Sesiones.

La Comisión aceptaba que se pagaran las tierras en plata u oro efectivos *o en títulos de la Deuda*. Esto último lo rechazaba el Gobierno en su primitivo proyecto, pues sólo admitía el pago en dinero efectivo.

El Gobierno autorizaba la venta de todas las tierras públicas, mientras la Comisión sólo admitía la de las tres cuartas partes, quedando la otra cuarta para los legionarios extranjeros de la Defensa de Montevideo, y el sobrante para colonias agrícolas de inmigrantes europeos. El Gobierno establecía como *minimum* el precio de 1,500 *patacones* por legua cuadrada, y para los poseedores de más de 30 años el de 1,000. La Comisión lo consideraba exagerado, y proponía 1,500 *pesos moneda corriente*, y para los poseedores 900.

Leído el proyecto reformado, todos, de acuerdo, retiraron los su-
yos, tanto el Gobierno como el señor Magariños y la Comisión en minoría. El único que apareció combatiendo el pensamiento fundamental, el de la venta de las tierras públicas, en aquel momento espantoso, en que todo estaba por el suelo, por lo que se vendía una legua cuadrada de tierra a ¡900 y 1,500 *pesos moneda corriente*!, fué don Fernando Torres.

El acta no menciona las razones alegadas, que se suplen, pues allí sólo se dice: «Y el señor Torres, combatiendo extensamente la idea de enajenación de las tierras públicas» (1).

Tan serias eran las razones, que, a pesar del acuerdo, y de los retiros de los proyectos por sus autores, la Cámara rechazó el presentado por la Comisión de Hacienda, sin mayor discusión, colocándose así a la altura de la misión confiada. Demostró, con esta conducta, que la sorpresa del naufragio había pasado, y recuperado la serenidad para poner el pecho a la corriente. No era aquel el momento de vender, es decir, tirar a la calle la tierra pública. No dice la Cámara quiénes votaron en pro y quiénes en contra, lo que es de lamentarse. De ahí que ignoremos cómo procedió el doctor Palomeque, quien, en esa sesión, aparece defendiendo al Gobierno, en pugna con el criterio del señor Muñoz, con motivo de la interpelación del señor Torres sobre el arrendamiento de las islas situadas frente a la Colonia; de donde se extraían piedras en virtud de contratos celebrados con don Adolfo Sáez y don Cayetano Grané, respectivamente, aprobados previo informe de la Junta E. Administrativa de ese Departamento.

EL BANCO MONTEVIDEANO

Pero, los espíritus vivían alerta. No descuidaban aquel malestar. Por eso se ponían a la obra, creyendo que la fundación de un Banco, en momentos tan desastrosos, era un ancla salvadora.

(1) Sesión del 28 de abril.

Todo el Ministerio se presentó en la sesión adonde iba a tratarse tan magno asunto (1).

El Banco Nacional Montevideano era una aventura, una utopía. El señor don Fernando Menck, diciéndose agente de una asociación europea, había presentado al Poder Ejecutivo unos estatutos, los cuales, aceptados, fueron enviados a la Cámara, por más que ellos no estuvieran completamente basados en la ley de 15 de julio de 1854, como lo reconocía la Comisión de Hacienda en su Informe.

La primera infracción a dicha ley consistía en que ésta señalaba un máximum de interés del 6 % anual, mientras que aquí se proponía un 9 %, exigiendo, además, un privilegio de doce años.

La Comisión no hacía cuestión respecto al interés, pues no sólo creía que él haría bajar a la mitad el que hasta entonces se pagaba en el mercado de Montevideo, sino que sería un fuerte aliciente para que los capitales europeos vinieran, con el tiempo, a tomar colocación en el Banco Nacional. No se oponía al privilegio de los doce años, porque no debía paralizarse, por esa circunstancia, empresa de tan trascendentales bienes. El Banco no realizaría, por el momento, ninguna operación hipotecaria, pues esto, que habría sido muy útil, no era posible practicarlo «mientras no sea servida—decía—aquella legislación hipotecaria, y armonizada con las garantías que deben sostener el buen crédito y libre acción de una empresa que por la primera vez aparece entre nosotros».

Los estatutos estaban firmados de acuerdo con los empresarios europeos, según lo aseguraba la Comisión, no pudiendo hacerse ninguna alteración substancial, porque, decía, «traería necesariamente la paralización de la empresa y muy probablemente el abandono de ella con grandes pérdidas para el país».

Por todo esto, la Comisión declaraba que los Estatutos remitidos por el Poder Ejecutivo nada contenían que pudiera calificarse de inaceptable, teniendo «la conciencia de que al aconsejar su aprobación os invita a un proceder que el futuro no lejano de nuestra patria mirará como el mayor legado que podáis dejarle».

Así, con verdadera conciencia, y ante el triste espectáculo del país, lo manifestaban los señores Labandera, Rodríguez, Solsona y Arteaga. Procedían bajo la presión moral de la situación difícil por que se marchaba. Tanto el Poder Ejecutivo, como la Comisión, creían que bastaba decretar la creación de un Banco para que surgiera. ¡*Fiat lux!* No; un establecimiento bancario es el resultado de una época de garantías y de moralidad administrativa. Nada más poderoso, pero, a la vez, nada más cobarde, entre las fuerzas sociales, que el dinero. Se esconde a las primeras dificultades, y sólo se arriesga con usura. La

(1) Sesión del 16 de abril de 1855.

Comisión lo decía, cuando recordaba que en esos momentos el interés del dinero se hallaba al 20 %.

Era natural; la tierra a bajo precio, cual la Comisión lo reconocía cuando proponía vender una legua cuadrada a 900 y 1,500 pesos *moneda corriente*; las industrias ausentes, y el trabajo escaso, el presupuesto impago, las rentas comprometidas, la Deuda por el suelo, y la próxima enajenación de los recursos de la Aduana a favor de particulares, no era ambiente para que el capital europeo se lanzara a una aventura bancaria.

Sin embargo, era tal la ilusión, surgida del deseo de remediar el malestar, que, sin saberse quiénes eran esos capitalistas europeos, ni presentarse los reglamentos, el proyecto de Banco se aprobó. Por él, el capital sería de tres millones de pesos, con facultad para empezar sus operaciones con un millón, el primer año, otro millón el segundo, y el tercer millón, cuando lo juzgara necesario. El capital se dividiría en acciones de a cien pesos fuertes. Tendría el privilegio exclusivo de emitir billetes de Banco al portador, pagaderos a la vista por una suma doble del capital invertido, siendo recibido como dinero en las cajas de la Administración Pública. Entre las operaciones bancarias existía la de hacer adelantos al Gobierno hasta la cantidad de 50,000 pesos fuertes mensuales, reembolsables a los tres meses, y garantidos por valores comerciales recibidos en la Aduana, aprobados por el Banco y entregados al tiempo de cada adelanto. El interés que el Gobierno pagaría por ese préstamo sería el del 6 % anual.

Como era natural, salían a bailar los títulos de la Deuda. Se declaraba que se prestaría dinero sobre ellos, no pudiendo exceder el adelanto de las cuatro quintas partes del valor, en relación con el que tuviera al contado la víspera del día en que se hiciera el adelanto.

Un comisario del Gobierno velaría por la emisión de los billetes.

El privilegio era concedido, no al Banco, sino a don Fernando Menck, por 12 años, contados desde su instalación, la cual debía hacerse en todo el resto del año, so pena de cesar el privilegio. El señor Menck y sus socios desconocidos deberían hacer firmar por el ministro de Hacienda, en el acta social, las condiciones de existencia de la compañía formada para la explotación del Banco, no pudiendo funcionar éste sin que previamente se aprobara su Reglamento por el Cuerpo Legislativo.

Los Estatutos fueron discutidos y aprobados en dos sesiones consecutivas—las del 16 y 17 de abril de 1855. El doctor Palomeque, en unión con los señores Muñoz y Torres, se opusieron al proyecto hasta tanto se presentaran los Reglamentos, según moción de Muñoz. Esto fué en la discusión general, sin que consten las razones alegadas, en el acta respectiva. El doctor Palomeque se opuso asimismo a varios artículos, en la discusión particular, y muy en especial cuando se leyó aquel que declaraba concedérsele el privilegio, no al Banco, sino a

don Fernando Menck. Este detalle revelaba a las claras que el proyecto no era serio, sino uno de tantos obtenidos por comerciantes, o no comerciantes, carentes de capital y de influencia que llevar a la práctica la concesión, cuyo único propósito era vender el privilegio.

En dos días se había decretado el Banco. Ahora sólo faltaban los Reglamentos. Ellos vinieron, y fueron aprobados en bloque (1), contra la opinión errónea del señor Torres, que quería lo fueran uno a uno de sus artículos.

La Cámara de Senadores introdujo reformas, que no aceptó la de Representantes, muy en especial la que consignaba aquello de: «Se establece un Banco de emisión, depósito y descuento con la denominación de «Banco Montevideano». En las actas nada hay de ilustrativo. Todo fué oral y rápido, suprimiéndose la lectura del proyecto que presentaba la Comisión, por ser *larga y fastidiosa!* (2).

En este acto continuó la oposición del doctor Palomeque, en unión de los señores Muñoz, Bustamante y Torres.

Con esto se creía haber dado un gran paso en el sentido de consolidar la situación financiera y económica, como asimismo en el de valorizar la Deuda Consolidada; pero los sucesos podrían más que la buena voluntad. El señor Menck no sería el llamado a semejante empresa, reservada únicamente a un hombre como Mauá, vinculado al país por acontecimientos políticos y financieros desde el tiempo de la Defensa, detrás de cuya ilustre y sesuda personalidad se hallaba nada menos que el Imperio del Brasil y los talentos del doctor don Andrés Lamas. Estos se daban cuenta de lo que influiría en el desarrollo del país una máquina tan poderosa como aquella, y no iban, naturalmente, a permitir que el señor Menck la montara y la manejara. El Banco, en aquellos momentos, era una pieza política indiscutible. El resultado fué que el señor Menck no pudo reunir el capital, por lo que pidió una prórroga de seis meses, la que le fué concedida, en calidad de improrrogable, en la sesión del 19 de junio de 1856, es decir, al año siguiente (3).

DISCUSIÓN DE LOS PROYECTOS FINANCIEROS

Quedaban ahora sobre el tapete los proyectos del doctor Muñoz, con los que él creía conjurar la crisis. La Comisión de Hacienda, que tantos trabajos hiciera en esa época, con tan buena voluntad, por lo

(1) Sesión del 18 de junio de 1855.

(2) Sesión del 21 de mayo de 1855. La razón de la oposición del doctor Palomeque se halla explicada en el documento del cual más adelante se hablará.

(3) Véanse sesiones del 17 y 26 de junio; 3 y 14 de julio de 1857. El Senado declaró caduca la concesión, pero la Cámara de Representantes (14 de julio de 1857), por moción del señor Labandera, concedió otra prórroga. En reunión de Asamblea se declaró caduca la concesión y Mauá triunfó en la contienda.

que bien merece un voto de gracias, aunque ellos no dieran, desgraciadamente, el resultado apetecido, porque no dependería de aquélla encontrar la medicina que debiera calmar tanto dolor, se había apresurado a despachar los dichos proyectos.

Cuando se ocupó del principal, en el que creía hallarse realmente el recurso para valorizar aquella maldita Deuda, nos decía, a las 48 horas escasas, bajo la impresión de lo sucedido en la sesión donde el doctor Palomeque interpelló al ministro de Hacienda (25 de marzo), y de las frases del doctor Muñoz, que estaba «persuadida de los grandes resultados que produciría su sanción», aconsejando, por lo tanto, se aceptara, sin exponer consideración alguna, salvo las que alegraría *in voce* (1).

El señor Arteaga, miembro informante, adelantó, dice el acta, «algunas consideraciones, explicando las razones que han influido en la Comisión para aconsejar a la Cámara acepte el proyecto en discusión».

Nada más se conoce para la historia. La cosa urgía, y no eran necesarias muchas palabras ante los grandes sucesos. El remedio se consideraba eficaz e indiscutible. Pero, ni siquiera el secretario de la época creyó del caso substraerse al ambiente en que se vivía. Hasta él alcanzó la ola que todo lo invadía, y apenas nos dejó esas cuatro líneas. Por su parte, la Comisión no tuvo una expresión para el Poder Ejecutivo, el cual, como es sabido, a raíz de aquella interpelación, y de esos proyectos, había manifestado terminantemente a la Cámara no tocara renta alguna para aplicarla a la Deuda, por hallarse el país en bancarrota, siendo del caso salvar, primero, a los empleados de la administración pública.

La Comisión, y con ella la Cámara, le respondería en el hecho, aunque no sabemos si con el pensamiento hablado, pues el escrito es pobrísimo, o no existe en el acta, lo que el doctor don Nicolás Avellaneda dijo un día a la República Argentina, en hermosa y caliente frase; lo que no quiere decir que fuera dictada por lo que la ciencia económica aconseja a los pueblos, y aun a los hombres, en trances de ruina y de miseria: «Economizaré sobre la sangre, la vida y el hambre del último de los argentinos, para pagar lo que debemos».

¡Eso puede decirse y hacerse cuando hay para economizar!

Luego que el señor Arteaga se despachó, el señor ministro de Gobierno, allí presente, y no el de Hacienda, se apresuró a sostener, de acuerdo con lo que tenía comunicado a la Cámara, que el Gobierno estaba «en oposición al proyecto, y combatiendo todas sus proposiciones concluyó pidiendo a la Cámara lo desechara en general».

Con tal motivo «trábase un sostenido debate, haciendo uso de la palabra, en pro del proyecto, los señores Torres, Bertrán, Muñoz,

(1) Sesiones del 27 de marzo y 21 de abril de 1855.

Magariños (don Mateo) y Palomeque; y en contra el señor ministro y el señor Labandera». Esto es todo lo que se enuncia en el acta (1).

Se dió en seguida por suficientemente discutido el punto, y el doctor Palomeque, con habilidad parlamentaria, propuso que la votación fuera nominal. Quiso de esa manera demostrar ante la historia que la Cámara del 55 tenía ciudadanos conscientes de su misión, quienes, cuando menos, aunque se equivocaran candorosamente, carecían del valor para permanecer cruzados de brazos ante aquel vendaval, al contemplar la nave próxima a estrellarse contra las rocas.

Y así se sancionó el proyecto que destinaba los billetes de la Deuda Consolidada al pago de la sexta parte (2) de los derechos de la Aduana de Montevideo.

Queden aquí consignados los nombres de quienes votaron por la sanción del pensamiento fundamental, en pugna con el ministro de Gobierno (3). Ellos fueron: Bertrán, Conde, Magariños (Mateo), Vázquez, Rodríguez, Bustamante, Muñoz, Tezanos, Echenique, Solsona, Torres, Veira, Acosta, López, Fernández (don Ramón), Magariños (don Luis), Aguiar, Zás, Fisterra, Latorre, Neves, Arteaga, Palomeque y Mayobre. Votaron con el ministro de Gobierno, los señores Fernández (Eugenio), Martínez y Labandera.

El Senado modificó el artículo, reduciéndolo a la octava parte, como había propuesto el señor Torres, y la Cámara lo admitió (4).

Pero, cuando se creía que la ley salvadora se hallaba en ejecución, el Poder Ejecutivo se dirigió a la Cámara comunicándole no sólo que era imposible ejecutar la ley de Contribución Directa, sino que había «dificultades en la ejecución de la ley sobre admisión de los billetes de la Deuda Consolidada en pago de la octava parte de los derechos de Aduana, por lo que pedía a la Cámara su preferente atención sobre este asunto, a fin de que, adoptando una resolución conveniente, pudiera hacer desaparecer esas dificultades» (5).

Por su parte, el doctor Palomeque se había apercibido de lo que sucedía, y presentaba un proyecto de ley para que se adicionara un artículo a la ley de 23 de mayo último, en el que se declaraba que no sería considerada por la Junta de Crédito Público para la amortización de que trata el art. 8.º de la ley de 3 de julio de 1854, ninguna propuesta cuyo mínimum fuera de cinco por ciento (6).

(1) Lamentamos no poseer los diarios de la época para ver si allí dan luz al respecto. Esto lo escribimos en Cádiz (España), el 31 de julio de 1913.

(2) En el proyecto se decía—la cuarta—que se modificó por moción de Arteaga. Al respecto hubo una larga discusión; el señor Torres propuso la octava, Arteaga la sexta, mientras Muñoz, Palomeque y Magariños (don Mateo), sostuvieron el artículo tal cual estaba—la cuarta—sesiones del 21 y 24 de abril de 1855.

(3) Hay la mala costumbre de no poner el nombre del ministro en el Diario de Sesiones. Por eso no lo mencionamos.

(4) Sesión del 23 de mayo de 1855.

(5) Sesión del 8 de junio de 1855.

(6) Sesión del 11 de junio de 1855.

Este proyecto nos exhibía el estado a que las cosas habían llegado. ¡Era tal la depreciación de la Deuda, que se cotizaba al 5 %! Se jugaba con la desgracia nacional. Era natural que así sucediera, tratándose de un papel que no ganaba interés, destinado sólo a pagar derechos de aduana y contribución directa, ésta en el nombre. Quienes lo necesitaban, serían los primeros en hacerlo bajar de precio.

A ello se agregaba que la fabricación de los expedientes por daños y perjuicios crecía que era un primor, y, en consecuencia, aumentaba la emisión de los billetes. La ley de Consolidación había calculado que la Deuda Nacional no pasaría de sesenta millones, por lo que había destinado sólo 50,000 pesos para el pago de los intereses. Ahora bien, el Poder Ejecutivo hacía saber a la Cámara que la Deuda había llegado a esa suma, por lo que se necesitaba una resolución al respecto, recomendando lo urgente de este asunto a fin de ser despachado a la mayor brevedad (1).

Continuaba creciendo la ola, y ya se creía imposible salvar. En ese sentido, venía a la memoria el otro proyecto del doctor Muñoz que mandaba suspender la liquidación de los daños y perjuicios, y creando una comisión que estudiara los expedientes.

El proyecto del doctor Palomeque era urgente. Él así lo comprendió, por lo que trabajó para que la Cámara se ocupara inmediatamente del asunto. En su consecuencia, el señor Arteaga activó su despacho, pidiendo se tratara en seguida, aunque con la oposición de los señores Muñoz y Labandera (2). El doctor Palomeque triunfó, no obstante las dificultades opuestas muy luego por el señor Muñoz para que no se tratara su proyecto con preferencia (3).

Al fin se entró a estudiarlo. El señor Muñoz lo combatió extensamente, dice el acta, no obstante la defensa hecha por su autor, y por el señor Labandera, miembro informante de la Comisión. El señor Muñoz insistió en hablar por segunda vez, de acuerdo con su pensamiento de ser «muy grave el asunto y creer que podía llevar su consideración muchas sesiones». La Cámara, por primera vez, viendo quizá un obstruccionismo en la actitud del señor Muñoz, y deseosa de concluir con un asunto de vital interés, le negó al doctor Muñoz el derecho de hablar en la discusión general, desechando la moción del señor Neves para que la discusión fuera libre. El doctor Muñoz insistió con *nuevos argumentos*, dice el acta, en la discusión particular, pero, contestado por el señor Labandera, el proyecto fué votado y sancionado por una resolución que se imponía.

Otro tanto sucedía con la consulta hecha por el Poder Ejecutivo sobre conversión de la Deuda Nacional.

(1) Sesión del 18 de junio de 1855.

(2) Sesión del 25 de junio de 1855, página 298.

(3) Sesión del 26 de junio de 1855.

El doctor Palomeque se había dado cuenta de la importancia del hecho, y pedido que la Comisión de Hacienda se expidiera a la brevedad posible (1). Ésta lo hizo, aconsejando una Minuta de Comunicación, por la que se hacía presente al Poder Ejecutivo que debía continuar la conversión, no obstante haberse liquidado ya 60.000,000 de pesos por daños y perjuicios, «siempre que los créditos se hallasen comprendidos en las leyes del caso, y aunque hubieran finalizado los términos concedidos para los créditos de que trataba la nota del 9 de julio de 1855» (2).

Esta Minuta fué aprobada después de haber hecho uso de la palabra los señores Aguiar, Palomeque y Labandera.

BANDERILLAS AL GOBIERNO

La calma parecía un hecho, sobre todo después de la nerviosa discusión sobre la reprobación del Presupuesto y su devolución al Poder Ejecutivo para que lo presentara en forma.

Los ánimos estaban agitados, hasta este momento.

En verdad, que era inaudito decirle al Poder Ejecutivo, como lo pretendía la Comisión Especial, compuesta de los señores Muñoz, Bustamante, Fistera, Veira y Vázquez: «Repruebo ese documento, y se lo devuelvo para que lo presente equilibrando las erogaciones con los recursos calculados para el año, debiendo proponer al efecto las disminuciones de gastos o el establecimiento de impuestos que considerara convenientes al mejor servicio de la nación». En el fondo, esto era abdicar la Cámara de las facultades legislativas (3).

Para fundar esta medida tan grave, llamada a producir un conflicto, en caso de sancionarse, la Comisión Especial decía que «ese presupuesto presentaba un enorme déficit eventual, y que para llenarlo no se proponía medio alguno. En los gastos, decía, se incluyen asignaciones *ilegalmente concedidas por el Poder Ejecutivo a viudas y a supuestas viudas e inválidos, además del sueldo íntegro que disfrutaban algunos militares sin más razón para ello que una orden superior*. En el proyecto se presupuesta una administración montada con superabundancia de empleados y gastos, desconociendo así el Poder Ejecutivo la indispensable necesidad de adoptar economías que hagan posible el equilibrio de las rentas con las erogaciones». La Comisión declaraba que «desistía de proponer aumentar o disminuir un presupuesto en que parece—terminaba diciendo—hacerse abstracción de las leyes preexistentes, de las necesidades reales del servicio público y de la escasez de recursos en la actualidad».

(1) Sesión del 29 de mayo de 1855.

(2) Sesión del 9 de julio de 1855.

(3) Sesión del 19 de abril de 1855.

Era gravísima la medida aconsejada, como asimismo la denuncia de actos irregulares cometidos por el Poder Ejecutivo.

Los señores ministros de Gobierno y de Guerra, allí presentes, contestaron las consideraciones que en ese instante expuso el señor Muñoz, además de las consignadas en el Informe de la Comisión. La discusión se prolongó «extensamente», hasta que el señor Bertrán procuró conciliar la cosa, proponiendo que la mesa nombrara una nueva Comisión que conferenciara con el Poder Ejecutivo y confeccionara el presupuesto. Esta moción fué rechazada, por lo que continuó la discusión general. Hablaron en pro los señores Muñoz, Bustamante, Torres y Labandera, y en contra los señores ministros y el señor Palomeque. Declarado suficientemente discutido el punto, se votó, y fué aprobada en general la Minuta aconsejada.

Este triunfo de la oposición fué efímero, pues cuando se entró a la discusión particular ya se vió que las fuerzas adversas se sentían débiles, al haber comprendido la gravedad de la situación a desenvolverse.

En efecto, ellos mismos, con el señor Labandera por *leader*, propusieron quitarle al proyecto la forma áspera que revestía, el cual quedaría concebido en estos términos: «Devuélvase al Poder Ejecutivo el presupuesto general de gastos para el año 1856, a fin de que lo presente en forma». El señor Muñoz aceptó, siempre que se agregara la palabra «debida». Por su parte, el señor ministro de Gobierno observó atinadamente, diciendo que «desde que sólo importaba una simple devolución del Presupuesto al Poder Ejecutivo, no merecía la pena de una resolución que tendría que pasar al Senado, y quedar aún después sujeta al veto que el Poder Ejecutivo pudiera ponerle, por lo que creía que lo más acertado era que se devolviese el presupuesto a la Comisión, y ésta, exigiendo del Poder Ejecutivo todos los datos que necesitara, pudiera confeccionar el que debiera presentarse».

Los señores Labandera y Muñoz se opusieron, mientras que el señor Magariños descendía de la presidencia a sostener lo que el ministro había aconsejado, terciando en el debate el señor Torres, para opinar como aquéllos.

El *debate* fué *largo*, y durante él los espíritus se serenaron, dándose cuenta del abismo adonde iban a precipitarse. Es el resultado muchas veces de los *largos* debates.

En su consecuencia, la buena doctrina triunfó, y el proyecto fué rechazado al votarse en particular.

Indudablemente que todos se felicitarían de esta solución, por lo que el doctor Magariños, con esa práctica parlamentaria, en él característica, mocionó en seguida «para que la Comisión encargada del Presupuesto se entendiera con los ministros del Poder Ejecutivo para la confección del Presupuesto General de Gastos para el año 1856», que era lo propuesto por el señor Bertrán, desde un principio.

Esto dió lugar a que el mismo señor Muñoz, ya templado en su radicalismo, meditara bien la cosa, y salvara la dificultad, proponiendo «que la Cámara se constituyera en comisión general y llamara a su seno a los ministros de Estado». Era una manera hábil de salir del atolladero en que se había metido. Era una cuestión de nombre, pues precisamente lo que se estaba haciendo, y se hace siempre que se discute el presupuesto, es, en el fondo, llamar a su seno al Ministerio, y de hecho constituirse en comisión. Y esto era lo que se había hecho por moción del doctor Palomeque (1).

Esta tendencia animosa contra el Poder Ejecutivo se había observado asimismo cuando se discutió el Mensaje aquel en que se pedía se suspendiera toda discusión sobre la Hacienda Pública, hasta tanto se deliberara definitivamente sobre el Presupuesto. Se recordará que la Comisión de Hacienda había aconsejado una Minuta de Comunicación bastante enérgica; pero, cuando llegó el momento de discutirla, lo que se hizo después del debate sobre la reprobación y devolución del Presupuesto, se adoptó un nuevo camino, aunque lanzándose la flecha de Parthos por el doctor Bustamante. Éste, al oír la moción del señor Solsona para que se aplazase la discusión, dijo, enérgicamente, que «consideraba intempestiva su consideración *desde que la Cámara se había ocupado de lo que el Poder Ejecutivo quería que no se ocupase*» (lo que era verdad), por lo que mocionó para que el asunto se archivase.

¡ Así se resolvió !

Los ánimos, pues, se calmaron, para entrar en seguida a discutir el Presupuesto, donde, como se verá, prevaleció el pensamiento del Poder Ejecutivo de resolver en él mucho de lo que se refería a préstamos y a servicios de la Deuda, teniendo en cuenta lo que el país producía, aunque respetando sus rentas.

Por lo demás, bueno es dejar constancia de que si bien era cierto que la Cámara se había ocupado de lo que el Poder Ejecutivo no quería, como decía el señor Bustamante, afectando la renta de aduana al pago de la Deuda, lo cierto fué que se trató de una victoria a lo Pyrho, pues ese proyecto quedaría sin efecto, y se llegaría al extremo de proponer la enajenación a particulares de las rentas de la aduana, dado el desquicio administrativo en que se vivía.

Desde luego, serenados los espíritus, la Cámara pudo ocuparse de proyectos en que la política no actuaba, decididamente, como ser los del alumbrado a gas de su recinto; registro general de propiedades raíces; establecimiento de la cátedra de química en la Universidad, en cuyo asunto intervino, como era natural, con todo empeño, el doctor Palomeque; pensión a la viuda del general Melchor Pacheco y Obes,

(1) Sesión del 18 de junio de 1855.

propuesta por el doctor Palomeque ; solicitudes de Valentín Héguy, coronel Matías Barrios, Manuel J. Lima, José J. Freitas, Juan Alfredo Biraben, Domingo Lenzi, Bianquet, Maciel, Meléndez, Maldonado, Caraballo, Méndez, Susini, Almada ; impuesto de peaje, pontazgo y barcaje ; continuación de los expedientes iniciados para la conversión de Deuda del Estado, que no habían podido concluirse dentro de los cuatro meses designados por la ley de 3 de julio de 1854 ; templos en la Colonia, Maldonado, Pando, Minas y Rocha ; establecimiento de faro en Banco Inglés, isla de Lobos y balsa de refugio al sur del mismo Banco, de acuerdo con la propuesta del señor Tomás Libarona ; intervención del Fisco en las sucesiones ; juicio político al señor Manuel Acosta y Lara ; creación de los empleos de taquígrafo para don Pablo Nin y González y Ramón Pampillo ; y registro de hipotecas y privilegios (1).

ESTUDIO DEL PRESUPUESTO

Antes de entrar a discutirse el presupuesto, se trataron asuntos importantes y de carácter político. Uno de ellos, fué el relativo a la acusación contra el ex ministro de Hacienda don Manuel Acosta y Lara, que éste mismo señor había solicitado, para evidenciar su inocencia, como lo hizo.

En este momento comienza a acentuarse la personalidad influyente del doctor Palomeque. Es en ese acto que obtiene *tres* votos para formar parte de la comisión encargada de estudiar esos antecedentes (sesión del 19 de mayo de 1855). Luego, aparece interpelando a todos los ministros sobre el hecho de no cumplirse con el art. 88 de la Constitución (sesión 23 de mayo), quienes ofrecen presentar sus Memorias inmediatamente (sesión del 26 de mayo).

Otro tanto hacía el señor Muñoz con motivo de haberse aprehendido a dos individuos de la clase militar, y no comunicárseles la causa de la prisión. Sostenía el señor Muñoz, y con razón, que no había más delitos militares que los cometidos por militares en servicio o en faltas de cuartel (sesiones del 31 de mayo y 4 de junio) (2).

La interpelación terminó con la declaración, por parte del ministro de la Guerra, de que el Gobierno no desterraba al comandante Jáuregui ni al mayor Guzmán. Estos militares se habían embriagado, y dado voces sediciosas, por lo que fueron aprehendidos. El punto dió lugar a un *fortísimo debate*, tomando parte en él el ministro, y los señores Muñoz, Bertrán y Torres.

(1) Sesiones del 7, 12, 15, 16, 23, 25, 30 y 31 de mayo, y 1, 4, 11, 13, 16 y 18 de junio de 1855.

(2) En los momentos en que esto escribo, en Sevilla (España), aun se sostiene la monstruosa doctrina de someter a la justicia militar a un capitán Sánchez que ha asesinado en su casa a un particular. (Año de 1913).

Con aquella declaración de que el Poder Ejecutivo «no desterraba a los individuos de que se ha hecho mención, no llevando el destino a que son dirigidos la calidad de destierro», la Cámara se dió por satisfecha (4 de junio).

Por su parte, el señor Mayobre interpelló al Poder Ejecutivo con motivo de las arbitrariedades cometidas por el jefe político de San José. El dicho funcionario retenía, en la cárcel, a varios individuos, sin saberse por qué, con barras de grillo, negándose a dar explicaciones cuando el alcalde ordinario se las había pedido (8 de junio). Los hechos, desgraciadamente, parecían exactos, y el ministro quedó comprometido a instruir a la Cámara inmediatamente que recibiera los datos que había pedido.

Esta era la situación cuando se comenzó el estudio del Presupuesto.

Durante la discusión, el doctor Palomeque reveló su dominio absoluto de la parte administrativa. Conocía muy bien las necesidades públicas, por lo que, apenas iniciado el debate, propuso que en el ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores se aumentara un oficial auxiliar, lo que fué sancionado, no obstante la oposición de los señores Labandera, Muñoz y Bertrán (19 de junio).

En los momentos de discutirse lo relativo a la Universidad, su opinión fué tan respetada, que el señor ministro de Gobierno así lo reconoció, desistiendo de la disminución propuesta para los catedráticos de Civil, Mercantil, y Gentes, aunque conservando una suma inferior para el de Teología y Cánones (1).

El doctor Palomeque transaba con el sostenimiento de esto último, que para nada lo necesitaba el país, como lo reconocería más tarde, durante el ministerio del doctor Acevedo, en 1860. Abogó por el aumento de los sueldos al Colegio Nacional, mientras el señor Torres sostenía las partidas para jóvenes que estudiaran arquitectura naval, civil y militar en Estados Unidos y Francia. En esa época sólo se educarían ; 24 alumnos ! al año, en el Colegio Nacional, y sólo existirían, en educación primaria, diez escuelas de ambos sexos para la capital, a 1,000 pesos cada una, y 44 para campaña, a 720 pesos ; siendo la suma, para ambas, en alquileres, gastos y textos, de ; 16,136 pesos ! La educación costaba la suma total de 57,816 pesos. Así se explicaba, y explicaría, el estado triste del país. Las escuelas sólo costaban apenas 60,000 pesos, mientras ya veremos lo que la guerra nos reclamaba.

Las ideas liberales del doctor Palomeque, aunque con un sentimiento religioso indiscutible, pero no militante, se pusieron en transparencia cuando el señor Labandera pretendió se aumentara a 4,000 pesos la partida para el Vicario Apostólico, quien quería quedara tal

(1) Sesión del 25 de junio de 1855.

cual estaba en esos momentos, mientras la Comisión proponía reducirla a 3,000 pesos.

El doctor Palomeque, en unión del señor Arteaga, se opuso, mientras el señor Labandera recurrió a la treta de pedir que la votación fuera nominal. No por eso se asustaron los hombres de espíritu liberal, y todos, menos dos—los señores Labandera y Vázquez,—hicieron triunfar la nueva idea.

Fué durante la discusión del Presupuesto que se aplicó al pago del empréstito hecho por Mauá, del cual ya nos hemos ocupado, el producido del papel sellado y patentes, tal cual existía, aunque deduciéndose de él los sueldos y gastos de la administración. No se encontró otro medio para solucionar el punto, pues la crisis continuaba, hasta el punto de hacerse necesaria la reconsideración de la ley sobre pago de derechos de aduana con billetes de la Deuda; llegando la Comisión de Hacienda hasta presentar un proyecto para enajenar las rentas de las Aduanas en toda la República (1).

La intervención del doctor Palomeque en toda la discusión del Presupuesto, demostró que era un ciudadano consagrado exclusivamente a la cosa pública. No se le encontraba desprevénido en el más mínimo detalle. Las actas de las sesiones lo exhiben atento durante la discusión de la ley de las leyes. Así se ve que él es quien consigue se aumente el sueldo de capitán del puerto a 2,000 pesos. Eso mismo se observa cuando llega el momento de discutirse el cálculo de recursos. Entonces el doctor Palomeque llama la atención sobre el hecho notorio de que «la partida que debía producir la Contribución Directa estaba, por leyes anteriores, asignada al pago de intereses y amortización de la Deuda Consolidada; y que, siendo esto así, o debía suprimirse dicha partida, o bien debía asignarse una cantidad igual al servicio de la Deuda» (2). Esta indicación dió motivo para que el doctor Magariños propusiera, y así se sancionara, se destinara la cantidad de 600,000 pesos para el pago de los intereses y amortización de la Deuda. De esta manera vino a triunfar la doctrina sostenida por el Poder Ejecutivo, de que lo práctico era discutir primero el presupuesto general de gastos, para luego saber con lo que se contaba para el pago de la Deuda Consolidada. Era que la serenidad del espíritu había venido. El presupuesto quedaba así sancionado, alcanzando su cálculo de recursos a la suma de 2.033,000 pesos (3).

(1) Sesión del 9 de julio de 1855.

(2) Sesión del 9 de julio de 1855. En esta sesión se concedió pensión al joven Alejandro Magariños Cervantes durante un año, por 60 pesos mensuales, lo mismo que a Juan G. Mendez.

(3) Sesión del 11 de julio de 1855.

UNA LEY NO CUMPLIDA

¿Podría el país soportar el pago de esta suma, considerada hoy muy exigua? ¿No había otros acreedores de carácter preferente, omitidos en ese presupuesto? ¿Podrían hacerse efectivos los recursos calculados?

La situación sólo podría salvarse a conservarse la paz. Sólo esto daría tiempo para reflexionar e ir paulatinamente remediando el mal. El país estaba dotado de una maravillosa fuerza productora, pero no podría dar sus frutos si el casco de Atila la pisoteaba. Ahí, por ejemplo, había rentas como la del arrendamiento de las islas de San Gabriel, frente a la Colonia, de lo cual se ocupaba el doctor Palomeque a causa de la interpelación del señor Neves (1), no mencionadas en el cálculo de recursos; ahí estaban las que resultarían de la construcción de los faros, a fin de facilitar la navegación del Río de la Plata, para lo cual se autorizaba al Gobierno a hacer los arreglos del caso con la República Argentina, no obstante la oposición del señor Muñoz, por cuestión de forma, contra la del doctor Palomeque, que prevaleció (2); ahí estaba la que daría el nuevo impuesto sobre herencias transversales (3), pontaje, registro de ventas y de hipotecas, a crearse; ahí estaría lo que produciría el uso del pasaporte, que acababa de restablecerse (4).

Muchos otros recursos podrían obtenerse del ingenio humano, a medida que el comercio se desarrollara, debido a la paz, por lo que no era de desesperarse si ésta se mantenía.

De ahí que el Poder Ejecutivo y la Cámara se preocuparan de la ley de Contribución Directa y de enfiteusis. Respecto de la primera, se trataba de salvar para 1856 los inconvenientes que habían impedido la aplicación de la sancionada desde 1853, por más que el verdadero inconveniente se hallaba en el estado de guerra y de anarquía que prevaleció en la República. Ahora se proponía que los capitales pagaran un cuatro por mil para 1856. La ley era corta y sencilla, confeccionada por el señor ministro de Hacienda don Antonio Agell, un ciudadano honesto y laborioso, que ha pasado por la vida política sin

(1) Sesión del 5 de junio de 1855.

(2) Sesión del 26 de junio de 1855.

(3) Sesión del 2 de julio de 1855.

(4) Sesiones del 5 y 6 de julio de 1855.

mayor estela de luz, y que, sin embargo, a estar a las crónicas del tiempo, hubo de ser candidato a la presidencia de la República (1).

Los capitales se regularían por las declaraciones del contribuyente, y, en defecto, por el avalúo hecho por dos vecinos y el juez de paz; aquéllos, sacados a la suerte de una lista de veinte formada por este último. Las declaraciones se harían ante las personas o corporaciones nombradas por el Poder Ejecutivo, las cuales podrían ordenar el avalúo si consideraran diminuta la manifestación del contribuyente. Esas declaraciones deberían recogerse en noviembre, y su resultado enviarse al Poder Ejecutivo, con sus antecedentes. Los gastos serían cubiertos del importe de la recaudación, la que se haría por cuatrimestres. Quedaban exceptuados quienes no poseyeran más bien que un capital o cosa que no valiera mil pesos, mas no quienes en diferentes propiedades tuvieran una suma mayor, o equivalente (2).

Esta ley era muy aceptable, dado el estado del país. Se acomodaba perfectamente a las costumbres, garantiendo los derechos del contribuyente, y evitando el fraude. Lo imprevisto sería materia del reglamento respectivo, estudiándose en el terreno los inconvenientes y dificultades a salvarse, de acuerdo con la inteligencia y honradez de los jefes políticos en campaña.

Ya veremos la dedicación y labor del doctor Palomeque al poner en ejecución dicha ley en su carácter de jefe político en Cerro Largo.

Esta ley fué desgraciada, pues no sólo se suspendió su discusión, por estar ausentes del local de sesiones la mitad de los representantes presentes, sino que, cuando en la sesión siguiente (5 de julio) se trató, se rechazó el proyecto, mandando simplemente que «para el año 1856 rigiera la ley vigente sobre Contribución Directa (3).

AL BORDE DEL PRECIPICIO

Mientras tanto, el Poder Ejecutivo se consideraba más firme en su puesto, y pedía a la Cámara derogara la ley del 23 de mayo último, que admitía, en la aduana, los bonos de la Deuda Consolidada, por la octava parte de los derechos, aumentando el fondo amortizante con 10,000 pesos más. Enviaba asimismo un proyecto por el cual se había de clasificar y liquidar la Deuda denominada exigible, asignán-

(1) Este señor vivía en la calle Maciel frente a la antigua Universidad. Era muy amigo del doctor Palomeque, siendo su vecino. Se cuenta que, para incitarlo a la candidatura presidencial, se le insinuó la necesidad de casarse con su amante, quien así lo habría hecho.

(2) Sesión del 4 de julio de 1855.

(3) El Senado varió el proyecto (sesión del 10 de julio de 1855). El doctor Palomeque no asistió a la sesión donde se adoptó tal resolución, por lo que no sabemos si habría opinado por declarar vigente una ley que nunca pudo ponerse en práctica, por no conseguirse salvar los inconvenientes opuestos a su ejecución.

dose un fondo para su amortización. Igualmente pedía autorización para celebrar con los agentes diplomáticos los arreglos que consintieran las exigencias del servicio público. Y coronaba todo esto, con un proyecto práctico, cual el de emitir vales de Tesorería, contra las rentas generales del país, hasta la cantidad de doscientos mil pesos, por una sola vez, y cincuenta mil mensuales, por siete meses (1).

La Comisión de Hacienda se expidió inmediatamente en los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo, agregando, por su parte, uno que se inspiraba en las exigencias del momento, para completar el plan diseñado por el Gobierno.

Este consistía en la enajenación de las rentas de las aduanas en toda la República (2).

Todo empezaba a normalizarse, si bien la obra legislativa había sido defectuosa, y el Poder Ejecutivo así lo hacía comprender. Ambos poderes se habían convencido de la necesidad de aunar sus esfuerzos para salvar las dificultades. En su consecuencia, se derogó la ley relativa a recibir la octava parte de la Deuda en pago de los derechos de aduana, destinándose la suma de 10,000 pesos mensuales para el pago de los intereses, mientras no fuera posible cumplir, en esa parte, la ley de Consolidación (3).

Se reconocía que era una verdad el déficit resultante de la recaudación mensual, por lo que, con el fin «de atender al pago puntual de los gastos de la Administración, se autorizaba el giro de nuevos vales hasta 50,000 pesos, por siete meses consecutivos».

La Comisión de Cuentas de la Asamblea, asociada al ministro de Hacienda, al Contador General y a la Junta de Crédito Público, girarían los vales, los que se recibirían en la Oficina de Recaudación por su valor escrito, como dinero metálico. Al finalizar el período del giro se quemarían 25,000 pesos mensuales, hasta su extinción, a cuyo efecto la Tesorería General remitiría dicha suma a la Junta de Crédito Público.

Al discutirse este proyecto, el único práctico, al que recurren los pueblos en sus grandes crisis, el cual, en el fondo, importaba una emisión restringida de papel, aunque valorizada, desde luego, por el hecho de recibirse en las Oficinas de Recaudación solamente por su valor escrito, «el señor Torres le hizo observaciones, pidiendo al ministro se sirviera dar algunas explicaciones» (4). El ministro las dió, declarando que la operación consistía únicamente en fraccionar, con

(1) Sesión del 6 de julio de 1855. Durante todo el tiempo transcurrido desde el 4 de julio al 9 de julio, durante el cual no se trató el Presupuesto, el doctor Palomeque no asistió a las sesiones.

(2) Sesión del 9 de julio de 1855.

(3) Sesiones del 10 y 13 de julio de 1855.

(4) Sesión del 10 de julio de 1855.

grande economía para el Erario, los empréstitos que se habían hecho hasta el día; que el Gobierno, para facilitar su marcha, no se había limitado a este solo proyecto, desde que estaban a la consideración de la Cámara otros que tenían relación con él; que, sin embargo, «si el Poder Ejecutivo encontrase otros medios *de salvarse del precipicio en que estaba*, desde luego los aceptaría».

No podía pedirse más franqueza. El señor ministro de Hacienda no se andaba con vueltas. El señor Agell no ocultaba que se hallaban al borde de un precipicio, por lo que aceptaría todo lo que a los legisladores se les ocurriera para salvarse, no siendo naturalmente los recursos inocuos empleados hasta entonces, limitados a apoderarse de todas las rentas para valorizar la Deuda, como si todo el mal residiera ahí; con olvido del pago de los gastos de la Administración, que son también un elemento importante en el rodaje económico de un pueblo, por tratarse de un capital que mensualmente va a alentar el poder vital del comercio. Ahora la Cámara iba a reconocerlo, por lo que el señor Torres, después de oír las explicaciones del señor ministro, «nada tenía que observar, si no era más que lo que exponía; pero si esos vales, decía, habían de ser de curso forzoso, se opondría extendiéndose en algunas consideraciones al respecto».

Era curioso ese temor al curso forzoso, tratándose de un país en bancarota, que no tenía de dónde sacar renta, cuya contribución inmobiliaria no existía, viéndose en el caso de derogar hoy lo que ayer no más había sancionado, hasta llegar al extremo de emitir vales de Tesorería para pagar a sus empleados. El precipicio ahí estaba, y aun quería discutirse si eran galgos o podencos. Felizmente, todos se dieron cuenta del momento psicológico por el cual se atravesaba, y, dejando solo al señor Torres, guardaron silencio ante la solemnidad del acto, que no era para alardear altiveces, y votaron la medida que daba un respiro al Gobierno durante siete meses; hasta que, cambiadas las cosas, pudiera pensarse en algo mejor, en presencia de la fuerza productora del país. No era que éste no tuviera elementos para hacer frente al pago de sus buenos servidores; era que de todas partes salían acreedores, en la época de liquidación en que se entraba, que los agobiaba. Este es el mérito de aquella pléyade de hombres, que nada ganaban con las desgracias de la patria. Hacían frente a cuanto reclamo se presentaba, fiados en el porvenir, en el poder de esa tierra regada por tanta sangre, y con conciencia de que ese era su deber, porque ellos mucho habían contribuido, con sus intransigencias y odios, a traerla al estado en que se hallaba.

No eran solamente los poseedores de títulos de la Deuda, y los servidores de la nación, quienes a grito herido demandaban el abono de lo adeudado, exhibiendo sus desnudeces, sino que, para agobiar más al deudor, e impedirle su subida a la montaña, ahí estaban los señores ministros diplomáticos golpeando las puertas del ministerio de Re-

laciones Exteriores en demanda de lo que se adeudaba a sus conacionales y a su país.

En la hora tremenda de la liquidación, ellos, que habían contribuido a sostener aquella Defensa de Montevideo, decían : «¡ Aquí estamos, reclamamos lo prestado !» ; Y eran diplomáticos que carecían de sentimiento !

La Cámara no se detuvo en el camino emprendido, porque había llegado la hora de la reacción. Por eso, después de lo que acababa de sancionar, derogando la ley que autorizaba pagar los derechos de aduana con títulos de la Deuda, y dictado la que emitía vales de Tesorería, completó su obra, el plan del Poder Ejecutivo, facultando a éste para celebrar los arreglos necesarios con los agentes diplomáticos, debiendo dar cuenta a la Asamblea General, o a la Comisión Permanente, y a enajenar las rentas de aduana en toda la República, hasta fines de diciembre de 1856 ; pero, debiendo el Poder Ejecutivo conservar la intervención correspondiente en la administración general.

Un solo diputado observó estos dos últimos proyectos : el señor Torres. En cuanto al de los arreglos diplomáticos, quería que constase explícitamente que al darse cuenta de ellos a la Asamblea era *para su aprobación*. Esto no era necesario, como los hechos posteriores lo demostraron, pues esos arreglos fueron todos ellos sometidos al Cuerpo Legislativo. Y respecto a la enajenación de los derechos de aduana, se opuso decididamente, «fundándose en detenidas consideraciones», dice el acta citada.

El señor Torres no se quería convencer de que vivíamos al borde del *precipicio*, y que se trataba, no sólo de un país empobrecido y esquilado en sus intereses por las malditas guerras civiles, sino carente, por lo mismo, de hábitos administrativos, de hombres competentes para formar los servidores del Estado encargados de recaudar la renta. Se carecía de hombres, de dinero, de renta, de fortuna, y hasta de familia, base de la moral de un pueblo, porque la lucha fratricida todo lo había dislocado.

El servicio administrativo es un estudio que sólo se aprende en el camino de la paz. Todos sabían manejar un fusil, una lanza, un cuchillo, marcar el paso, lanzar el caballo sobre el hermano, pero no todos sabían leer y escribir, poseer nociones de honradez administrativa, preparación y constancia ; y ello, porque siendo fácil, como decía San Martín, soplar y hacer botellas, ninguno lo había aprendido en la escuela del trabajo.

De ahí que el doctor Palomeque, conocedor, como pocos, de la situación, fuera quien respondiera al señor Torres para sostener no sólo la innecesidad del agregado : *para su aprobación*, en unión de Labandera y Aguiar ; sino quien contestó a las «detenidas consideraciones» del opositor, «demostrando las conveniencias» del proyecto de enajenación de las rentas de aduana, como dice el acta respectiva.

Todo esto fué lo que, al fin, después de tanto tanteo de la Cámara, se resolvió en la célebre sesión del 10 de julio de 1855. La opinión pública se había formado, después de la *via-crucis* recorrida, y comprendía que las medidas adoptadas eran las únicas aceptables, por el momento, tratándose de un gobernante y de unos legisladores a quienes no les guiaba otro propósito que el bien de la sociedad que dirigían. Nunca hubo legislatura alguna tan sacudida por acciones y reacciones, y en la que el amor a la tierra nativa fuera tan intenso. Pudieron equivocarse sus autores, pero hay que honrarlos al contemplar el cuadro desolador que presentaba la República en aquellos momentos afflictivos. Carecían de todo, hasta de ciencia, si se quiere; pero, todo lo suplieron, y se salvaron al borde del precipicio. Y fué en esta jornada donde se destacó la personalidad del doctor Palomeque.

LOS SERVIDORES DEL ESTADO

Pero aun había otros acreedores que ahí esperaban desde el fondo de los hogares, porque su desnudez no les permitía salir a la calle y presentarse en las puertas de los ministerios y del Cuerpo Legislativo. Esos eran los pobres servidores del Estado, cuyos créditos impagos caían bajo el proyecto de ley relativo a la clasificación y liquidación de la Deuda exigible. La Cámara reconoció que este asunto formaba parte del plan del Poder Ejecutivo y se apresuró a tratarlo en la sesión siguiente (1).

El señor Labandera pidió su aplazamiento, porque la Comisión de Hacienda quería «hacerle algunas reformas», y así se resolvió.

La Comisión presentó su proyecto, pero el doctor Palomeque lo combatió. Hacía presente «que el proyecto de ley en discusión sólo abrazaba los sueldos de los empleados de este año, dejando sin hacer mención de los vencidos desde 1852 hasta diciembre de 1854; que tan Deuda exigible era una como la otra, y que puesto que la Cámara iba a adoptar una resolución, creía que ésta debía ser extensiva a toda la Deuda exigible», por lo que concluía «proponiendo se designara a toda la Deuda exigible, que suponía fuera de dos millones quinientos mil pesos, el interés del 3 %, destinando para su amortización 8,000 pesos (2).

Estas consideraciones suscitaron un «prolongado debate». Las observaron los señores Labandera y Bertrán, sosteniéndolas su autor, Aguiar y Magariños (Mateo). Este último, siempre con su práctica admirable, propuso se desechara el proyecto de la Comisión y se ocupase del que pasó el Poder Ejecutivo, lo que así se sancionó.

No obstante, el proyecto del Ejecutivo no fué aceptado, y se nom-

(1) Sesión del 11 de julio de 1855.

(2) Sesión del 12 de julio de 1855.

bró una comisión compuesta de los señores Magariños (Mateo), Vázquez, Palomeque, Veira y Torres para que aconsejaran al respecto (1).

Esta comisión (con excepción del señor Vázquez, cuya firma no aparece en el informe) aconsejó que la Junta de Crédito Público clasificara y liquidara todos los documentos que acreditaran acción contra los fondos públicos, bien fuera en virtud de órdenes giradas por el Poder Ejecutivo, bien fuera por sueldos devengados de los servidores del Estado desde el 1.º de enero de 1853 hasta el 30 de junio de 1855. Esta deuda ganaría el interés del 3 % anual, creándose una caja especial de amortización, a la que se destinarían 5,000 pesos mensuales a fin de rescatar los documentos liquidados, sin perjuicio de aumentar este fondo (2).

El proyecto aconsejado era el mismo del Poder Ejecutivo, con un solo agregado: *el del interés del 3 % anual.*

El señor Magariños informó a nombre de la Comisión, combatiéndole los señores Bustamante, Arteaga y Muñoz, quienes sostenían que la conversión debiera hacerse hasta el 31 de diciembre de 1854, dejando los meses corridos del año 55 para que el Poder Ejecutivo los fuese pagando conforme le fuera posible. Los señores Palomeque, Torres y Aguiar sostuvieron el proyecto, el cual fué sancionado.

De esta manera los empleados de 1853 pudieron cobrar sus sueldos, tal cual lo observó el doctor Palomeque al combatir el primitivo proyecto de la Comisión de Hacienda, de acuerdo aquél, en un todo, con el Poder Ejecutivo. Y para complementar la tarea, se declaraba que todo lo hecho en nada perjudicaba a los acreedores hipotecarios al no presentar sus títulos de crédito a la conversión.

De esta manera se iban conciliando todos los intereses heridos durante aquella época triste; cerrando el número de determinaciones de ese género con la que destinaba 10,000 pesos mensuales para pagar el 20 % de los intereses de la Deuda, cuyo abono se haría trimestralmente, y afectando a los intereses de la dicha Deuda, en la proporción que alcanzara, el producto de la Contribución Directa (3).

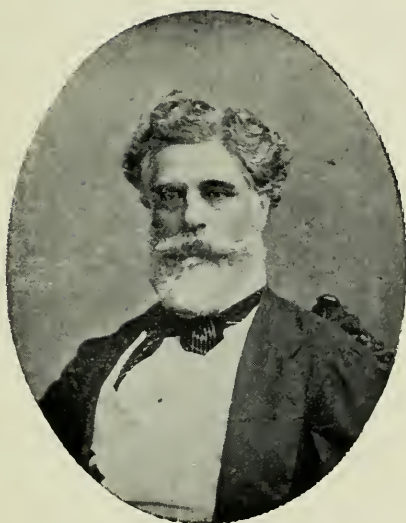
EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO

La calma parecía un hecho. Todos los intereses estaban garantizados. La labor del Cuerpo Legislativo y del Poder Ejecutivo había sido enorme y profícua, inspirando confianza al pueblo. Así al menos lo parecía.

(1) Sesión del 12 de julio de 1855.

(2) Sesión del 13 de julio de 1855.

(3) Sesión del 13 de julio de 1855. Este proyecto fué del doctor Magariños (Mateo). El Senado lo varió, como luego veremos.



Mateo Magariños Cervantes

En su consecuencia, se pensó en hacer algo útil en otro sentido, tratando de marchar adelante por la vía del progreso.

La ciudad de Montevideo presentaba todavía un aspecto reñido con el bienestar. Sus calles no estaban pavimentadas en toda la extensión debida. Al llegar a la antigua ciudadela, lo que se llamaba el Mercado Viejo, destruido en épocas del coronel Latorre, no había, por sus calles laterales, pavimento alguno. Esos caminos eran un lodazal en invierno, y la tierra se convertía en polvo durante el verano. El Poder Ejecutivo propuso, pues, un proyecto de ley al respecto, mandando que todas las calles de Montevideo, que no hubiesen sido empedradas o recompuestas con posterioridad a la ley de 12 de mayo de 1835, lo serían, por una sola vez, a costa de los propietarios. Ese empedrado se haría por el sistema entonces vigente, a cargo de don Gabriel Munilla, de acuerdo con el contrato existente desde 1833, por haber este señor rematado ese servicio. Dicho empedrado estaría circunscripto a las calles de la ciudad vieja, pudiendo elegirse entre ese sistema, el de Mac-Adam, y el mixto, que participara de aquéllos, para empedrar la ciudad nueva. Los propietarios de la ciudad vieja pagarían, por el término de dos años, un impuesto mensual de tres reales fuertes por cada vara lineal del frente de su casa, o terrenos respectivos, y los propietarios de la ciudad nueva, cuatro reales fuertes en la misma forma. El propietario que quisiera pagar de contado el valor del empedrado, lo haría a razón de once reales sencillos por vara cuadrada del empedrado actual, seis reales del de Mac-Adam, y ocho reales del mixto. A los dueños que hubieren pagado ya el empedrado anterior, se les tendría en cuenta la cuota de cuatro reales por vara cuadrada abonada según la ley del 35. El Poder Ejecutivo exigiría al constructor garantías de buena ejecución y de conservación, por el término de tres años a lo menos, durante los cuales el empresario haría desaparecer, en el acto, todos los deterioros que sufriera bajo la influencia de los rodados.

Este proyecto fué sancionado, aunque respetando los derechos que pudiera alegar el señor Munilla (1). Nada hubo que objetar, pues así lo imponía la necesidad. El empedrado de aquella época, desaparecido bajo la acción del progreso moderno, en nada se parecía al actual. Entonces no se tenían los trozos de granito simétrico—el adoquín,—sino que la piedra se colocaba en bruto, sufriendo mucho el rodado, y descomponiéndose con facilidad el pavimento. Se carecían de las máquinas modernas para aplanar el piso, lo que hacía indispensable el empleo del brazo humano. Felizmente, el terreno pedregoso de Montevideo no permitía lo que sucedía en Buenos Aires. En esta ciudad el empedrado era horrible, aun en 1870, sufriendo sus consecuencias quienes viajaban en carruaje.

(1) Sesión del 7 de julio de 1855.

El proyecto en cuestión fué inmediatamente aprobado por el Senado, y su ejecución daría a la ciudad otro aspecto, valorizando mayormente las propiedades urbanas.

Al mismo propósito, aunque de un orden moral, respondió el proyecto asignando sueldo íntegro, durante su vida, a la viuda del brigadier don Rufino Bauzá, más diez mil pesos por una sola vez, como premio a los importantes servicios del finado general (1). El fundamento era indiscutible. Se trataba de uno de nuestros más distinguidos ciudadanos, que dejaba en la miseria a su familia. Bien hizo, pues, el Poder Ejecutivo de entonces, en dar el decreto asignando el sueldo íntegro a la viuda, y mejor el Cuerpo Legislativo en aprobarlo por medio de una ley. De idéntica naturaleza era la solicitud del nieto del general Artigas, que pedía se liquidaran los haberes de su abuelo hasta el 18 de septiembre de 1848, en que falleció en el Paraguay (2).

Por lo demás, se sancionaba la ley de contrabando creando un jurado compuesto del colector, dos comerciantes, el fiscal general y el juez de Hacienda, según el importe de la mercadería, cuya sentencia sería inapelable (3).

PERSONALIDAD QUE SE DESTACA

Esta era la labor de la legislatura de 1855. Ella había cumplido dignamente con su deber, solucionando, dentro de las graves cuestiones propuestas, las principales y fundamentales de donde dependió el porvenir del país. Aun le quedaba, al finalizar, el proyecto sobre derogación de la ley que admitía la maldita Deuda en pago de los derechos de aduana, variado por el Senado (4).

Durante esta labor legislativa, se había destacado la personalidad del doctor Palomeque. Había sido un factor importante en la confección de las leyes, poniendo en evidencia sus conocimientos teóricos y prácticos, al lado de una infatigable actividad al servicio de los intereses generales del país. No había cuestión que no conociera, y que no hubiera estudiado durante la discusión. El Gobierno había encontrado en él un elemento decidido a sacar a la nación del estado agónico en que se hallaba. No conocía las intransigencias de la política personal, por lo que, en más de un caso, se le había visto acompañar con su voto y sus argumentos a quienes, como los señores Muñoz, Bustamante y Torres, encabezaban un círculo opositor. De esta manera trataba de contener la ola que pronto pretendería arrasarlo todo,

(1) Sesión del 11 de julio de 1855.

(2) Sesión del 12 de julio de 1855.

(3) Sesión del 14 de julio de 1855. Este proyecto daría motivo para que el doctor Palomeque se preocupara más adelante del asunto—(sesión del 7 de julio de 1856).

(4) Sesión del 14 de julio de 1855.

y destruir lo edificado. Allí estaría él, poniendo de nuevo el hombro para impedir que la obra realizada en 1855 se viniera al suelo. No entendía de círculos ni de divisas. Quería la gran política de la fusión de los partidos tradicionales para echar los cimientos del verdadero partido gubernamental, respetuoso del principio de autoridad, condenatorio de las revueltas y de las guerras fratricidas. Por consiguiente, cuando los sucesos sangrientos y escandalosos se produjeran, se le encontraría en su puesto, cumpliendo con su deber, al lado del presidente constitucional, aconsejándole en trance tan serio, para siquiera salvar lo que tanto había costado fundar : ese organismo legal. Su creciente personalidad hizo que, al terminar sus sesiones legislativas en la Cámara de Representantes, alguno se acordara de darle *un voto* siquiera para formar parte de la Comisión Permanente (1). No fué electo, pero ese *un voto* probaba que quien había entrado a la Cámara, en 1855, sin tener la nombradía de otros, se había destacado bastante en el cuadro de los sucesos políticos. En él se reproduciría lo que sucede con los candidatos presidenciales en Norte América : que los que al principio son pequeños, luego se engrandecen y triunfan. Así iba a sucederle. La revuelta próxima a estallar acentuaría mayormente su personalidad, porque lo revelaría inflexible en la línea de conducta trazada, cual hombre de carácter y valor a toda prueba para afrontar situaciones difíciles ; y aparecería, no ya con *un voto*, sino con la casi unanimidad de sus compañeros, ¡ para colocarle en el elevado puesto de presidente de la Cámara de Representantes ! Lo habría conquistado por sus virtudes y talentos ; y allí permanecería durante tres años, procediendo con toda imparcialidad, a punto de exponer su vida para salvar a sus colegas enemigos. Así conseguiría que su implacable adversario—el doctor don Juan Carlos Gómez—le dijera en epístola privada : ¡ digno presidente ! (2).

¡ El hombre marchaba !

EN LA CUMBRE

En efecto, los hombres no habían concluido de aprender. Aun creían, y seguirían creyendo por muchos años, que la guerra fratricida era el recurso natural de los pueblos democráticos para realizar sus anhelos políticos. No querían convencerse de que eso era la causa de todos los males, y que sólo la evolución podía conducirlos al bien-

(1) Sesión del 14 de julio de 1855. Los señores Eugenio Fernández, Zás y Durán dieron ese voto en las diversas votaciones. Luego los dos primeros, en 1856, pues el tercero no se hallaba, votaron por él para Presidente.

(2) El doctor Palomeque, que nunca fué orgulloso, que no se envanecía de sus triunfos, que fué humilde y sencillo, sabía apreciar las cualidades de los hombres superiores, y por eso contestaba al doctor Gómez diciéndole lo que se verá en el *Apéndice*.

estar. La guerra sólo se justifica cuando el despotismo o la tiranía han usurpado el poder y arrebatado a los ciudadanos las libertades primordiales, cuales las de reunión, de imprenta y de soberanía. Mientras éstas subsistan, con todos los defectos inherentes a pueblos vírgenes, que no recibieron lecciones prácticas de gobierno de los conquistadores, ni de los fundadores de la Independencia, que no podían enseñarnos lo que no habían aprendido, no se tiene el derecho de levantarse contra el poder constituido legalmente. El gobierno del general Flores había surgido de un *hecho consumado*, el cual, en política, es una fuerza que merece respeto, por lo que la fe de erratas no existe en la vida gubernamental. No es posible hacer las de Penélope en el movimiento de un organismo constitucional. No se puede ni se debe deshacer lo hecho, lo fundado sobre un hecho consumado, como elocuentemente lo demostró el doctor don Manuel Herrera y Obes ante la Asamblea de Notables, en 1850, según lo hemos visto en su lugar respectivo, para hacer retrogradar el país. Los intereses creados merecen respeto, muy especialmente cuando ellos son la obra de los mismos que quieren destruirlos, pensando que sobre los escombros de lo reciente puede edificarse algo mejor. No es aquél el método racional y científico. Ese presente ha de respetarse, buscando los medios de perfeccionarlo, sin destruir la obra, dejando que el tiempo se encargue de decirnos si fué buena o mala. No somos nosotros los jueces de nuestras acciones, pues sólo desempeñamos el papel o rol de artífices. Esto es de mayor aplicación a la ciencia gubernamental, donde la experiencia se muestra maestra severa y exclusiva; por lo que, los representantes de la soberanía nacional, aunque sin derecho, ponen a veces trabas serias a las reformas inmediatas que el pueblo pretendiera, sin antes llenarse ciertas y determinadas fórmulas, más o menos procedentes.

Los autores de aquel movimiento, que comenzó por el motín militar de julio de 1853, para tener su desenlace en la anarquía producida en septiembre del mismo año, habían partido del hecho consumado, y sobre él construido su obra constitucional. Y ahí estaba, por influjo de ellos mismos, el general don Venancio Flores, como presidente de la República, desde el mes de marzo de 1854, no obstante sus deseos de haber colocado en el mando al patricio don Joaquín Suárez, quien, dándose cuenta del mal a hacersele, se había apresurado, no sólo a demostrar su disgusto, sino hasta renunciar el cargo de senador por el Departamento de Canalones. Así probaba que había terminado su misión con la Defensa de Montevideo, y que no debía manchar esa página de gloria de su vida mezclándose en las reyertas de hermanos.

Triunfante la candidatura del general Flores—debido al juego parlamentario, en el que se destacó la personalidad del doctor don Mateo Magariños, acompañado, de afuera, por el doctor Palomeque, desde

el ministerio de Relaciones Exteriores y de Gobierno, que desempeñara interinamente en esos días de marzo de 1854, al lado del gobernador provisorio,—todos acataron el voto de la Asamblea, y se propusieron luchar empleando los medios legales. Ya hemos visto cómo ese círculo conservador, adversario del general Flores, pudo conseguir, por medio de un acuerdo, llevar sus elementos al Consejo Legislativo, donde luchara ardientemente todo el año 1855, que había terminado constitucionalmente en julio del mismo, después de una labor constante y proficua.

Al concluir las faenas parlamentarias hicieron el balance de sus fuerzas, y se encontraron con que la minoría en que vivían, no se había destacado, con sus *leaders* a la cabeza, ni conseguido exhibir debilidad, falta de sensatez y de prudencia en los conductores de la voz gubernamental en el recinto legislativo. Ni Muñoz, ni Bustamante, ni Torres, habían conseguido exhibir superioridad moral e intelectual sobre Magariños y Palomeque, *leaders* convencidos de la doctrina evolucionista.

Las intransigencias de los conservadores había dado por resultado que empezara a actuar un factor político hasta entonces alejado del escenario, ya porque su caudillo estuvo ausente del país, ya porque la actitud guerrera de los capitanejos lo había condenado a la abstención, después de los sucesos del 53, en que éstos se habían levantado con las armas en la mano, obedeciendo a la errónea y condenable propaganda de don Bernardo P. Berro. Ese factor era el general don Manuel Oribe, de gran importancia aún en los destinos del país. Empezaban a sentirse sus movimientos alrededor de la teoría evolucionista, la cual, como se verá, acercaría, en la hora tremenda en que iba a hundirse o salvarse el país, a los dos grandes dominadores de la muchedumbre.

En esos instantes, el doctor don Andrés Lamas, cuyo talento nadie discute, envió, desde Río de Janeiro, el más hermoso panfleto político que posee la literatura nacional, en el cual predicaba la fusión de los partidos, buscando el medio de atraerse los elementos del viejo partido oribista. Ese folleto estaba escrito de una manera admirable. Es quizá el mejor documento político de esa cabeza privilegiada. Sólo un defecto tenía: iba recto a herir el principio de autoridad constitucional representado por el general Flores, alentando a sus adversarios.

El efecto causado en el Río de la Plata fué indescriptible. Tanto en Montevideo como en Buenos Aires, los hombres superiores, con don Félix Frías a la cabeza, lo comentaron favorablemente, mirando las cosas por el lado simpático. Otros lo atacaron, porque no comprendían que la política fuera la mezcolanza de los hombres que hasta ayer habían vivido separados en Montevideo y el Cerrito. Y otros, que lo estudiaron a fondo, creyeron encontrar allí la tendencia revolu-

cionaria que los agitaba, y se felicitaron, por lo que tenía de adverso a la personalidad del gobernante.

Salvemos las intenciones del doctor Lamas, pero reconozcamos que ese opúsculo alentó al elemento conservador, no por lo que tenía de fusionista, que lo condenaban, sino por lo que importaba atacar al general Flores.

Desde luego, pues, se lanzaron a la revuelta, en agosto de ese año, una vez concluido el período legislativo. Buscaban, como en 1853, tumbar al magistrado, y dominar exclusivamente, sin darse cuenta que el folleto del doctor Lamas era un arma de doble filo, que iba a herirlos por lo que de *unionista* contenía.

De allí, del pueblo *La Unión*, conocido en otros tiempos con el nombre de *Pacificación*, saldría otra fuerza inspirada precisamente en las sanas ideas predicadas desde Janeiro por el ilustre diplomático uruguayo.

Lanzado el doctor Muñoz, con sus compañeros, al terreno de la revuelta, el presidente de la República se refugió en *La Unión*, rodeado de todos sus amigos, entre los cuales estaba el doctor Palomeque, llamado urgentemente por el general Flores, diciéndole que allí estaba la *Unión de los Orientales* (1).

En su consecuencia, el caudillo tuvo una inspiración, y se resolvió a pasar por lo que los acontecimientos aconsejaban, y así se lo hacían comprender los que estaban a su alrededor. En efecto, se decidió a renunciar su cargo para no ensangrentar el país. Esto era hábil, porque al satisfacer los deseos de los anárquicos, se conservaba la fuerza legislativa, que no se derrumbaría, y en la que predominaba la mayoría gubernamental; la cual, en el momento oportuno, maniobraría hasta convertir en victoria lo que *parecía* una derrota.

Por segunda vez, el núcleo revolucionario de 1853 vería por el suelo sus propósitos, después de haber conseguido destronar a otro primer magistrado de la nación. Ese Cuerpo Legislativo, sin embargo, tendría la virtud de mantener el organismo del Gobierno y salvar las instituciones.

En su consecuencia, entró al desempeño del Poder Ejecutivo el señor don Manuel Basilio Bustamante, presidente del Senado, quedando al frente de la situación el poder del caudillo destronado. Y fué entonces que el general Oribe comprendió cuán importante era la teoría evolucionista, e hizo todo lo contrario de lo que don Bernardo P. Berro había practicado en 1853. No aconsejó ahondar la anarquía, lanzándose sus adictos a la acción guerrera, para reivindicar una presidencia renunciada, como él lo había hecho en 1841-42, y aun el

(1) Más adelante publico unos manuscritos del general Flores y del doctor Palomeque, en el capítulo *Rasgos de la vida de Lamas*, donde relato detalladamente todos los sucesos del 55.

mismo Giró, a quien servía Berro, en 1853, sino que aceptó el hecho consumado, y de aquí partió para obtener lo que las ulteriores de la política darían a quien pusiera en juego la inteligencia para dominar la situación, apoyándose en la autoridad y en el sentimiento de amor a la paz.

Por su parte, el general Flores, cuyos prestigios e influencia quedaban en pie, con sus amigos en el Cuerpo Legislativo y en el Poder Ejecutivo, se vinculaba, sin buscarlo, y hasta sin quererlo, con esa misma idea evolutiva, por lo mismo que sus enemigos lo combatían (1).

Era ella, pues, la que iba acercando hombres y cosas en otros tiempos separados. Las épocas eran distintas y reclamaban nuevos medios de acción. Y de ahí que, en presencia del enemigo común, y por un secreto instinto de propia conservación, que el país reclamaba, para salvarlo de la ruina y de la miseria a que lo precipitaban, se unieran aquellos dos caudillos para solucionar la cuestión presidencial que se venía encima.

Ni bajo el punto de vista moral, ni en el del interés de la República, pudieron hacer nada mejor. La voz del patriotismo así lo exigía. El estado del pueblo lo reclamaba, y éste así lo pedía. Y surgió el *Pacto de Unión*, que tantos bienes daría a la República, y con él la candidatura del patricio don Gabriel Antonio Pereyra.

Uno de los factores importantes en esta negociación, lo fué el doctor Palomeque, quien conservaba amistad con el general Flores, estrechada por vínculos de parentesco espiritual (2).

El estuvo en el secreto de todo lo que se hacía, conservando una amistad respetuosa, ya que no íntima y estrecha, con el mismo general Oribe, a estar a epístolas de ambos, existentes en nuestro archivo.

Por consiguiente, cuando los conservadores, creyendo asegurada su victoria, pensaron en el general César Díaz para la presidencia de la República, se encontraron vencidos en el terreno legislativo y en el popular: en el primero, porque allí estaba el elemento votante del viejo partido colorado, que seguía la corriente evolucionista, levantando la bandera de la unión, de la fusión; y en el segundo, la masa del pueblo, con sus dos grandes caudillos al frente, y los hombres pensadores y de acción de ambas fracciones del país.

El círculo conservador estaba, pues, vencido y tomado en sus propias redes. Su derrota no era la obra de la imposición ni del fraude,

(1) Sin embargo, en Flores esto ya era viejo. Recuérdese lo que hacía en la Defensa de Montevideo, saliendo en altas horas de la noche a entrevistarse con Oribe.

(2) Era padrino de uno de los hijos del general Flores, el que fué después general don Fortunato Flores. El programa presidencial de Pereyra fué escrito, a pedido del doctor Palomeque, por el doctor don Alejandro Magariños Cervantes, cuyo original existe en nuestro poder.

sino de los vaivenes naturales de una lucha democrática en toda regla. Así lo comprendió, y siguió luchando hasta el último momento, tratando de conseguir votos a su favor en el seno de la Asamblea General. Todo fué inútil.

En esa tarea presidencial se destacó el doctor Palomeque, tratando por todos los medios de atraer a los conservadores al terreno en que él pisaba. Su corazón noble lo condujo hasta presidir una manifestación popular en honor del general César Díaz, para sacarlo de la Legación, donde estaba asilado, y llevarlo hasta su domicilio, con todos los honores debidos a sus virtudes y talentos (1).

En el fondo, era una lucha entre las dos fracciones en que de tiempo atrás, como sucedería en adelante, estaba dividido el partido de la Defensa. Todos los elementos votantes en la Asamblea pertenecían a esa colectividad. Cada uno seguía las inspiraciones de su conciencia. Si bueno era César Díaz, no menos lo era el patricio desinteresado, lleno de servicios al país, don Gabriel Antonio Pereyra. Nadie podía afear la foja de servicios de uno y de otro. En una sola cosa se habían distinguido, durante los últimos años: en que César Díaz era militar, y militar revoltoso, de carácter empedernido en esa materia; mientras Pereyra era civil, y civil pacífico, dotado de energía para contener a los caudillos y a los revoltosos, como lo deseaba aquella sociedad dilacerada, cansada de tanto escándalo, de tanta sangre derramada y de tanto despilfarro de la riqueza del país. Se quería paz, costara lo que costara, en cambio de tanta guerra despiadada. Esta ya había dado a conocer sus maléficos frutos, ahora quería verse los que produciría la tranquilidad material y la de los espíritus exaltados hasta ayer.

El general Oribe, pues, no ganaba nada, por el momento, para sus amigos y paniaguados, pero estaba convencido de que, procediendo así, servía al país, y que los sucesos del futuro darían a sus compañeros de causa el lugar reservado a todo tercero coadyuvante, que sabe esperar su tiempo, mucho más si Dios enloquecía a los que, como se iba viendo, quería perder.

Todo esto fué causa de que se mirara alrededor y no se viera otro hombre capaz de colocar al frente de la Cámara de Representantes que a quien, como el doctor Palomeque, con prudencia y sabiduría, había contribuido a la obra de la paz, de la consolidación de las instituciones y del principio de autoridad. Entraba llevado en alas de la opinión pública. Y, cuando la candidatura del señor Pereyra fué proclamada, y éste prestó su juramento, el doctor Palomeque, desde su elevado asiento de presidente de la Cámara de Representantes, declaraba que aquello era el resultado de la *Unión de los Orientales*; que caían abajo los nombres odiados de los círculos; que no se oyeran más

(1) Véase la *Vida Moderna*, año 1902, donde relato este hecho.

las denominaciones atávicas, y que sólo se vivara al presidente de la República, a la *Unión de los Orientales*, en una palabra, al nuevo partido gubernamental, surgido del triunfo de la idea evolucionista.

Al fin, veía realizado su sueño, después de India Muerta, y podía, desde la altura del poder, proclamar sus ideales altruistas, por los que tanto había luchado en la llanura. Al fin, veía reconciliada a la familia uruguaya, cuya sinceridad de opiniones la pondrían a prueba los acontecimientos a desarrollarse. Sus ideales no se postrarían ante ningún caudillo, si bien respetaría la foja de servicios de éstos, para, en la hora de la muerte, rendirles el tributo que merecían, en cuanto no hubieran contrariado la voluntad nacional. Ya no miraría el pasado luctuoso, sino para olvidarlo. Buscaría en el porvenir la solución de todos los problemas, sin preocuparse de cuanto se le dijera y de cuanto se le motejara. Viviría con su conciencia, para nacer en las páginas de la historia. Su carácter enérgico no titubearía un instante, sostenido por el vigor físico adquirido en sus luchas campesinas y en sus trabajos comerciales, a la edad de 46 años, en que el hombre está en el pleno goce de la vida moral, material e intelectual. Vamos, pues, a verlo ahora cómo se desempeñó en sus tareas de presidente de la Cámara de Representantes, y cómo mantuvo sus ideales, hasta echar, desde el poder, las bases del Partido Nacional, enemigo de caudillos y de revueltas, y partidario de la libertad del sufragio, origen de la soberanía nacional (1).

UNA SESIÓN TEMPESTUOSA

Inicióse su presidencia con un asunto gravísimo. Con motivo de la revuelta de agosto de 1855, habían salido del país, desterrados para Buenos Aires, los diputados Muñoz, Bertrán y Torres. El Poder Ejecutivo los había acusado. El señor Magariños pidió, en la sesión del 19 de febrero, «*fuese citada la Cámara para mañana*». Así se hizo, y el 20, el señor presidente abrió la sesión, exponiendo que «los señores representantes que la habían pedido podían manifestar el objeto de ella». Entonces el señor Labandera solicitó se leyese el informe pasado por la Comisión Permanente a la Asamblea. Como el señor presidente, de acuerdo con el Reglamento, manifestara que no había sido apoyada la indicación, lo hizo así el doctor Magariños, «porque creía que la simple indicación del señor Labandera era suficiente». Alentado el señor Labandera por esta ayuda, emanada de quien, como el señor Magariños, junto con él, habían pedido la sesión, y sabían, por lo tanto, a lo que se iba, declaró que había solicitado «la lectura de

(1) El Senado nombró a don José M. Plá, presidente; Apolinario Gayoso, primer vice, y Juan Pedro Ramírez, segundo vice. En la de Representantes fueron Eugenio Fernández, segundo vice, y Narciso Díaz Tenorio, primer vice.

aquel documento porque en él había algo que estaba en relación con la moción que se iba a hacer, que era lo que formaba la orden del día».

Como se ve, el señor Labandera hablaba en nombre de una tercera persona, que era la que haría la moción fundamental, origen del escándalo a producirse, en el que la vida del doctor Palomeque se comprometería, por salvar las de sus colegas adversarios. El presidente, que, sin duda, estaba al cabo de lo que se pretendía, quiso evitarlo, temeroso de sus consecuencias, y, amparado en el artículo 104 del Reglamento, hizo presente que no podía acceder a lo solicitado. Ello produjo un debate, sosteniéndose por Magariños, Labandera, Vázquez y Bustamante, la procedencia de lo indicado, mientras la Cámara declaró improcedente la lectura del informe de la Comisión Permanente.

Este primer fracaso desalentó al señor Labandera, quien se sulfuró, expresando que lo resuelto importaba declarar que «la Cámara no quería la sesión, dejando por el hecho inutilizada la petición de aquellos representantes, *por cuya razón creía conveniente la derogación de un artículo que para nada sirve*».

El señor Labandera había perdido los estribos, pues no contaba, dada su imprevisión, que hombres prudentes y sensatos buscaran todos los medios para impedir la realización de un hecho como el que se pretendía, a raíz de la situación política a inaugurarse el 1.º de marzo.

Como era natural, el doctor Palomeque contestó, en el acto, con toda parsimonia, a la salida de tono, poniendo en evidencia que era un hombre que sabía ser presidente, moderado, atenido a las disposiciones reglamentarias. Puso los puntos sobre las íes, obligando al señor Labandera a guardar silencio, ya que había perdido el tino para discutir. El doctor Palomeque «contestó que ahora no podía hacerse otra cosa que ceñirse al Reglamento vigente; que en el período anterior se nombró una comisión para la revisión de éste, y que, cuando ella se expidiese, habría lugar, en la discusión, tanto a la observación del señor representante cuanto a otras que pudiesen hacerse».

Y fué entonces que apareció la tercera persona a que se refería el señor Labandera, cuando hablaba de la moción que *se iba a hacer*. El doctor Magariños, que sabía muy bien de lo que se trataba, porque él había pedido la sesión, según se ha visto, se apresuró a intervenir en el incidente, a fin de salvar a su colega del trance difícil en que se hallaba, empleando para ello su práctica parlamentaria y su influencia en aquella asamblea. De nada le valdrían, porque hasta esa misma influencia la iba perdiendo, siendo su heredero el propio doctor Palomeque, su pariente, amigo y admirador de sus talentos. El doctor Magariños le tomó el pulso a la situación, y se vió perdido. Más aún: no hacía sino llenar un compromiso amistoso, sin irse muy a fondo, cuando los sucesos se exhibieron desnudos. No hay que olvidar que

el legislador en cuestión era hombre muy práctico, que sabía mero-dear las ccas, llegado el momento. Pues bien, al ver aquel descabro, sufrido a la entrada no más, se apresuró a decir algo que no era verdad, como para cohonestar su actitud. Declaró que «él no era el indicado para tomar parte en esta discusión ; pero, desde que el señor representante encargado de hacer la moción la abandona, él buscaría el medio de entrar en ella». Y, cuando iba a buscarlo, empezando en su discurso por decirnos que «entre las carpetas que acompañaban el informe de la Comisión Permanente figuraba una, número 16, que contiene la acusación entablada por el Poder Ejecutivo contra tres representantes de la nación», el orador fué interrumpido por las voces de la barra, la cual fué llamada al orden por el señor presidente, leyéndole los artículos 110 y 111 del Reglamento.

En su consecuencia, el doctor Magariños continuó expresando las causas por qué se había pedido la lectura del Informe de la Comisión Permanente, en cuyo momento «fué interrumpido por el señor presidente, previniéndole que, según el Reglamento, no podía fundarse una moción antes de presentarse ésta en la forma establecida».

No podía desconocerse que el doctor Palomeque era hombre de recursos, que entendía lo que tenía entre manos. Era el hombre preparado, llamado a ponerse delante de la formidable dialéctica del doctor Magariños. No podía hacerlo desde su asiento, pero, no obstante, los estaba batiendo, dentro de la ley, con el Reglamento, el cual podía invocar desde la presidencia, sin descender de ella.

El señor Magariños, sea porque no tenía calor en el alma, y se limitaba a una simple parada parlamentaria, o porque realmente no encontró en su arsenal parlamentario aquel *medio buscado para entrar* a la discusión del asunto, lo cierto fué que se batió en retirada, volviendo a declarar algo inusitado, aquello de no haber «traído la moción escrita, porque no era él el que la iba a hacer ; que no había hecho otra cosa que tomar la discusión sin venir preparado, y nada más que por sostener el punto constitucional, pero puesto que se le objetaba el Reglamento, *nada tenía que decir*».

Esto era una salida, no más, porque bien pudo el señor Magariños *dictar* la moción, en ese acto, y luego pasar a fundarla. O no quiso hacerlo, viéndose perdido, o se atribuló ante aquellas *voces de la barra*, y la interrupción del presidente, no ocurriéndosele sino la simpleza indicada. Dados sus talentos indiscutibles, nadie podía creer que quien había pedido la sesión, para en ella exponer lo procedente, saliera ahora diciendo que él no tenía nada que hacer en el asunto, que no venía preparado, y que sólo había terciado por amor a la ciencia constitucional.

El doctor Palomeque no creyó de su deber guardar silencio, en lo que hizo muy bien, dado lo sucedido después, por lo que acentuó enérgicamente su actitud, hasta el punto de arrancarle al doctor Maga-

riños la declaración caballeresca de que era exacto cuanto aquél exponía.

Aquél decía «que no hacía más que cumplir el deber que, como presidente, tenía de hacer observar el Reglamento; que presentase la moción escrita y después de apoyada podía entonces ponderarla». Y era a esto que contestaba el doctor Magariños declarando «*que era exacto*, pero que no tenía escrita la moción como aquél disponía, y que no tenía nada que añadir».

Así pudo el presidente cortar el escándalo, por el momento, quizá con la complicidad de los mismos autores de lo relatado; pues no se concibe cómo los señores Labandera y Magariños no redactaran por escrito, en el acto, dictándola al señor secretario, como es de práctica, la moción, para que se leyera el Informe de la Comisión Permanente, y demás que se propusieran sostener. Quizá comprendieron la gravedad de la cosa, y reaccionaron en el procedimiento a seguir.

Mientras tanto, no faltó quien, en la prensa, alarmara los espíritus, sosteniendo que el doctor Palomeque había coartado al doctor Magariños en el uso de la palabra; y como esto era falso, y afectaba el buen nombre, no sólo del presidente, sino la autoridad moral de la Cámara que lo hubiera consentido, inmediatamente el atacado hizo presente «que, aun cuando el Reglamento establecía el modo de hacer sus publicaciones de actas, como no está establecido el Diario de Sesiones, y deseando dejar constancia de la verdad de lo acaecido en la sesión del día 20, hace moción para que dicha sesión sea publicada en todos los diarios de la capital» (1).

Así contestaba a la maledicencia de sus enemigos, de aquellos a quienes no había querido acompañar en sus revueltas de 1853 y 1855, porque iba detrás de un propósito superior, cual la formación de un partido gubernamental, que concluyera con los trapos ensangrentados y el caudillaje del gaucho ignorante. Desde entonces, como se ve, había un abismo entre esos revoltosos y el hombre servidor de gobiernos constitucionales. Cada uno seguiría su ruta: aquéllos, adheridos al pasado, queriendo perpetuar tradiciones sangrientas, y éste, mirando

(1) Sesión del 26 de febrero de 1856. El joven Onetto y Viana, andando los años, escribió un folleto atacando indignamente la memoria del doctor Palomeque. En él revelaba ignorancia absoluta sobre esta personalidad. Le combatí de palabra y por escrito. Puede verse al respecto lo publicado en *Vida Moderna* y en *El Día*. Tuve el valor de asistir a la conferencia celebrada en un centro del Partido Colorado, presidido por el joven Alberto Zorrilla, donde contesté al señor Onetto y Viana. Allí el señor Martínez Vigi^{II}, con frase acerada, hizo pedazos el folleto aludido, en lo que se refería al general Flores. Otro tanto, don Eduardo Flores. Lo mismo expuso más tarde, en brillante trabajo político, el laureado poeta Julio Herrera y Reissig, muerto prematuramente para la ciencia. En ese acto, a pesar de la pobreza de la argumentación del señor Onetto y Viana, que no supo defender su opúsculo, en cuanto a Flores, pero sí sostenerlo tímidamente en cuanto al doctor Palomeque, le decía yo al autor: «Pase, sí, por mi casa, donde mucho tendrá usted, joven, que aprender.»

al porvenir, buscando el medio de fundar verdaderamente el Partido Nacional, que así nacía a la vida con el concurso de los ciudadanos que tenían el valor de arrancarse de sus pechos el culto de lo viejo.

Pero, llegado el 1.º de marzo, y nombrado presidente el señor Peyreya, la Asamblea se apresuró a remitir a la Cámara la nota y decreto de fecha 29 de febrero, pasados por el Poder Ejecutivo, en que ponía en libertad de poder volver a la República a todos los ciudadanos que por motivos políticos se hallaban ausentes de ella, y derogando el decreto del 11 de enero en la parte que impedía la vuelta al país de los diputados Muñoz, Torres y Bertrán (1).

Con este antecedente, los amigos de los desterrados resolvieron llevar adelante el plan propuesto, agitando la opinión pública a su favor, pues aun estaban calientes sus ánimos con la derrota sufrida en la lucha presidencial. En su consecuencia, empezaron por preparar el terreno, interpelando al Poder Ejecutivo, porque éste había arrojado del país a uno de los ciudadanos, que, se decía, habían regresado. Se mandó llamar inmediatamente al ministro de Gobierno; y, en el acto, concurrieron éste y el de Hacienda. El ministro de Gobierno dió las explicaciones. No se trataba sino de un extranjero turbulento e inmoral, llamado Juan J. Cernada, quien, por motivos políticos, u otros ignorados, había salido prófugo del país, no cumpliendo, a su vuelta, con los reglamentos y órdenes policiales. Declaraba el ministro que dicho individuo no había sido desterrado.

El ministro sostenía que se trataba de un extranjero recién venido, y que todo país tenía el derecho de prohibir la entrada al individuo que no cumpliera con las prescripciones que el Gobierno ha establecido para su buena moral y orden. De aquí deducía que el Gobierno ha-

(1) Sesión del 7 de marzo de 1856. Este señor Bertrán, a quien conocimos, en 1868 a 70, de visita a nuestro padre, en Buenos Aires, fué el autor de la célebre mina para hacer volar al general Flores en el Fuerte. Murió asesinado, como en épocas a lo Luis XI. Cuentan que en 1875 a 76, durante el terrorismo de Latorre, aquél tramaba una conspiración cuartelera, negra como el alma de la época y de sus actores. Latorre lo sabía; pero Bertrán, dotado de un valor poco común, y muy audaz y confiado, le visitaba en el Fuerte, con alardes de amistad, para desempeñar mejor su papel. Ambos trataban de engañarse, en su sed de sangre. Al retirarse Bertrán, el dictador le acarició, dándole una palmada de afecto en el hombro, que era una señal de garra de tigre en él, diciéndole: «¡Adiós, Bertrán, que seas feliz!» Bertrán salió, soñando quizá en la desgarradura proyectada por él, para el día siguiente, sin pensar en que el otro se le anticipaba en su obra. Salió, y tomó por la calle de Wáshington. Mientras tanto, Latorre, a lo Luis XI, miraba por la celosía de su habitación a quien marchaba confiado, tranquilo, con las manos detrás, y con aquel su paso lento, necesario para conducir su pesado cuerpo.

Desde allí vió Latorre cuando el comandante Esteban Martínez, asesinaba, por la espalda, a puñaladas, al señor Bertrán. ¡El terror dominaba! Ni una palabra en la prensa. Nadie persiguió al asesino, siendo más tarde premiado, llegando a ser general, según creo.

bía estado en su derecho al hacerlo salir, sin que ello importara una confinación ni una pena.

El ministro sostenía la doctrina moderna, aplicada a los anarquistas. Es verdad que él invocaba una doctrina aun no incorporada a la legislación, desde que no había ley que así lo estableciera. El Poder Ejecutivo, en aquellos buenos tiempos en que todo estaba por hacerse, se arrogaba las facultades del Cuerpo Legislativo, único que podía privar la entrada del extranjero al territorio, como se ha hecho después, no sólo para los anarquistas, sino para los viejos, enfermos e inútiles, como sucede en todos los pueblos trabajadores y honestos.

Como era natural, el señor Labandera no se dió por satisfecho, pues sostenía la doctrina parlamentaria prevalente entonces de entrar a discutirse con el ministro si tenía o no razón, como si fuera un acusado, y no un funcionario llamado exclusivamente para pedirle, y de sus labios oír, ciertos antecedentes, para luego el legislador fundar en ellos sus proyectos, con conocimiento de causa.

El interpelante, lo mismo que los señores Magariños y Aguiar, pedían se desembarcase dicho individuo para ser entregado al juez competente, habiendo manifestado el primero que tal vez el ministro no podría hacer esa promesa sin antes ponerse de acuerdo con el señor presidente de la República.

Esto era un respiro que se le daba al Poder Ejecutivo para que pudiera volver sobre sus pasos, aunque lo sostenido por los señores diputados era inadmisibile. Nada tenía que hacer el Cuerpo Legislativo en el asunto. Si el Poder Ejecutivo había faltado, atacando una garantía individual, no podía el Cuerpo Legislativo intimarle la línea de conducta a seguir. El atacado en sus derechos era el único juez de la actitud a asumir, presentándose, al efecto, ante los jueces, invocando la ley del *habeas corpus*. El Cuerpo Legislativo, y mucho menos una de las Cámaras, de por sí estaba autorizado para hacer una ley, que tal lo era lo que resolvía, y mandar que la cumpliera el Poder Ejecutivo. Para ello necesitaba la sanción del Senado. Ninguna de las Cámaras puede hacer otra cosa que *dictar leyes*, en general, o intervenir llenando los requisitos constitucionales, en los casos especiales en que se la faculta para proceder por sí sola. En la Constitución no había precepto alguno que la permitiera llamar al Poder Ejecutivo y decirle: «Usted ha faltado; haga esto: desembarque al individuo y sométalo al juez competente». Lo único que podía hacer, era oír la exposición del ministro, y luego, si creía que había faltado, acusarlo; pues hasta las advertencias previas, si bien pueden aconsejarse por un espíritu prudente, antes de llegar a aquella medida extrema, por los trastornos que produce, no están indicadas en la Constitución. Sólo la Comisión Permanente puede hacerlo.

Como era de preverse, el ministro aprovechó la coyuntura que se le presentaba, y se retiró, para ir a consultar con el presidente, ha-

biendo hecho moción el doctor Palomeque para que la Cámara se declarara en sesión permanente hasta que el señor ministro viniera a informarla de la disposición gubernativa. Retirado el ministro, y siendo los tiempos en que no se acostumbraba usar una nota escrita comunicando lo del caso, ese funcionario anduvo de un lado a otro, perdiendo su tiempo, para regresar a decir que el Poder Ejecutivo mantendría lo hecho, y que tenía orden de no entrar en más discusión, para que la Cámara resolviese. Esto era decirle a la Cámara: «usted está equivocada en el camino adoptado; no puede trazar líneas de conducta al Poder Ejecutivo.» El ministro se retiró, y la Cámara se encerró en sesión secreta, ignorando aún la historia lo que en ella pasó; y esto, porque existe la pésima costumbre de no mandarse publicar las actas secretas, después de transcurrido el tiempo necesario, para impedir las consecuencias tortuosas a sobrevenir si se supiera en seguida lo que debe ignorarse en el momento serio.

El terreno quedaba preparado, y los legisladores de la oposición iban a tomar la revancha. En efecto, a los tres días volvían a la brecha, y el señor Magariños, con todo candor, como si no se diera cuenta de la trascendencia de su moción, o porque realmente tuviera malicia, propuso, en vista de haber llegado a su conocimiento que dos de los representantes emigrados a Buenos Aires se hallaban en la ciudad, que el señor presidente de la Cámara oficiara al Poder Ejecutivo a fin de convocar a dichos legisladores (1).

El señor Labandera creía, y con razón, que no era necesaria la convocatoria por intermedio del Poder Ejecutivo, por lo que pidió que en el acta constara «que para reincorporarse un representante a su Cámara, después de abiertas las sesiones, no necesitaba ser convocado por el Poder Ejecutivo» (2).

Resuelto, al parecer, como se verá, que se hiciera como lo indicaba el señor Magariños, el presidente *ad hoc*, pues el doctor Palomeque había descendido de su asiento para tomar parte en la interpe-lación hecha por él al señor ministro sobre la creación de la Universidad Menor, y discusión sobre la consolidación de la Deuda, dijo que se pasaría la nota al Poder Ejecutivo, desde que estaba apoyada la moción del señor Magariños, levantándose la sesión.

Como se ve, ni discutida, ni votada, fué la moción del señor Magariños. El presidente sólo se limitó a decir que así se haría, por estar apoyada la moción; con el mismo criterio pudo declararse sancionado lo contrario, pues consta en el acta que también había sido apo-

(1) El señor Muñoz no volvió en seguida al país, yendo a vivir a Ayacucho, pueblo de reciente fundación en la provincia de Buenos Aires, donde desempeñó el cargo de procurador municipal, estando su firma al pie de los boletos expedidos a los primitivos pobladores.

(2) Sesión del 15 de marzo de 1856.

yada la declaración del señor Labandera. Apoyar, no es discutir ni sancionar.

Puede decirse, pues, que aquello fué una sorpresa. Nadie se dió cuenta de lo hecho, sino después de sucedido. La reacción, sin embargo, se produjo, y hasta sus mismos autores no se atrevieron luego a perseverar en su obra, dejando a los señores legisladores amigos abandonados a su propia suerte. Iban a convencerse de la imprudencia cometida, y de la no menos incomprensible del señor don Fernando Torres, quien tanto les comprometió metiéndose en un callejón sin salida. La actitud de éste, envalentonada quizá por la resolución inconsulta de la Cámara, si es que ésta algo había resuelto, dado lo expuesto, no poco influiría en el ánimo de los legisladores amigos para abandonarlo a su destino.

El doctor Palomeque se dió cuenta inmediatamente de lo sucedido, y trató de remediar el mal. En su consecuencia, en la próxima sesión, presentó una moción «para que interin no se expidiera la Comisión Especial, encargada de dictaminar en la acusación entablada por el Poder Ejecutivo contra los representantes Muñoz, Torres y Bertrán, se suspendieran los efectos de la resolución de la Cámara, fecha 15, relativa a su convocatoria» (1). Pidió se tratase sobre tablas, para ser discutida, y no pasase lo que con la del señor Magariños. Fué apoyada; y votada, resultó afirmativa, yéndose a cuarto intermedio por indicación del señor Aguiar. Vueltos a la sala, se discutió, y se sancionó, no obstante una *modificación* propuesta por el señor Labandera. Este señor, sin embargo, no se opuso, en ese momento, a lo fundamental del pensamiento del doctor Palomeque, porque comprendería que éste era guiado por el deseo de poner un paréntesis a la situación grave que acababa de producirse, sin entrar al fondo del asunto, para así evitar una discusión desagradable y la reproducción de una escena espinosa.

El doctor Palomeque orillaba la dificultad. Nada decía sobre el fondo de la cuestión provocada. Buscó un medio hábil, cual fué el de prorrogar el debate hasta que la Comisión Especial se expidiera en la acusación entablada por el Poder Ejecutivo. Ahora bien, como esa Comisión nunca se expediría, no llegaría la oportunidad de discutir si podía o no citarse a los legisladores ya nombrados. Así lo comprendió el señor Labandera, por lo que propuso la modificación de suspender los efectos de la convocatoria *hasta resolución de la Cámara*. Esto no era lo mismo que aquello. Esto importaba entrar en seguida al fondo del asunto, para resolver la Cámara si los expatriados podían sentarse en su escaño legislativo. Y esto era lo que el doctor Palomeque quería impedir, después del grave suceso acaecido, que traía consternados los espíritus. Y fué hábil el doctor Palomeque, has-

(1) Sesión del 18 de marzo de 1856.



Fernando Torres

ta para aprovechar ese instante psicológico, y arrancar a la Cámara, bajo la elocuencia del hecho brutal, lo que la prudencia aconsejaba, y no se había querido reconocer dados los tiempos duros por que se atravesaba. En esa moción les decía a todos: «mirad lo que ha sucedido al solo amago de pretender entrar a esta Cámara el diputado Torres, envalentonado por vuestra actitud de la última sesión; mirad lo que sucederá si persistimos en ese camino, y, desde luego, entraremos a tratar un asunto tan escabroso, sin tomarnos el tiempo necesario para calmar las pasiones exacerbadas».

ATENTADO AL DIPUTADO TORRES

¿Qué era lo que había sucedido?

Lo que vamos a narrar no consta en el acta, y quizá puede asegurarse que ni en los papeles de la época, ¡tal era el terror de que fué víctima Montevideo en esos días! ¡Apenas si una que otra palabra suelta de los mismos que menos derecho tenían a hablar, como sucedió con el doctor don Pedro Bustamante, quien tildó al doctor Palomeque, no obstante haber éste expuesto su vida para salvarlos en trance tan fiero! Sólo un detalle se halla en el acta del 1.º de abril, la primera celebrada después de lo acaecido en la del 18 de marzo; tal era la consternación causada. En efecto, el Poder Ejecutivo creyó del caso sincerarse ante el país, y se dirigió a la Cámara manifestando «el pesar e indignación que le había causado el hecho tenido lugar en la casa de la Representación Nacional, el día 18 del corriente, por lo que había tomado las medidas más enérgicas para descubrir a los autores de tan temerario como criminal atentado».

El 18 de marzo se dirigía el doctor Palomeque a la Cámara, siendo ya pasada la hora reglamentaria, cuando, al atravesar la plaza Constitución, se encontró con una turbamulta, a la cual se dió a conocer al saber que se quería hablar con los Representantes del Pueblo. Esa turba lo arrastró hasta subirle en andas por las escaleras del Cabildo. Los gritos terroríficos que se daban, llegaron hasta el recinto legislativo. La muchedumbre pretendía entrar a éste, para saciar sus caníbales instintos en las personas de algunos de los legisladores. A ello decididamente se opuso el doctor Palomeque, diciéndoles que primero pasarían por sobre su cadáver. Fué aquel un instante difícil, pues el presidente de la Cámara hubo de ser arrojado desde el corredor al fondo del patio del Cabildo. Contenida aquella avalancha, aquella bestia humana, el doctor Palomeque entró a la Cámara, donde encontró, como era natural, el terror pintado en muchos de aquellos semblantes. En cumplimiento de su deber, y, no obstante la oposición de algunos, entró a la sala, y se colocó al frente de ella, obligando,

con su actitud, a la celebración de la sesión. Y fué entonces cuando tuvo el pensamiento feliz de contener las pasiones, de unos y otros, presentando, en en ese instante de tribulación, en que nadie atinaba a encontrar el buen camino, aquel proyecto salvador, arrancado, a unos, por convicción, a otros, por prudencia, y, a no menos, por miedo. ¡ Allí estaba la jauría humana husmeando la carne para lanzarse sobre la presa! Cuando el doctor Palomeque se hallaba presidiendo el acto, se sintieron alaridos salvajes, fuera del recinto, oyéndose la descarga de un arma de fuego. Se pretendió levantar la sesión, pero el presidente los contuvo, recordando, sin duda, a los senadores romanos, que permanecían impassibles en sus asientos cuando las hordas enemigas invadían el recinto sagrado. Lo que sucedía afuera era, que, en esos momentos, el señor Torres había pretendido, imprudentemente, entrar a la Cámara, atravesando por entre aquella muchedumbre desencadenada. El acto demostraba, más que valor, temeridad. Nadie mejor que Torres conocía lo que era el pueblo salido de cauce, pues nada lo contiene, llegando al crimen, en el desborde de sus instintos sanguinarios. Y el señor Torres fué cobardemente herido, pagando así, casi con su vida, su imprudencia y su temeridad. La gente parlamentaria se movía dentro del recinto, y, una vez pasadas las cosas, se buscaban a los que habían desaparecido. Uno de ellos fué el doctor don Pedro Bustamante, a quien se encontró, por el doctor Palomeque, oculto debajo de la mesa de la secretaría. De allí lo sacaron, él y el señor Juan Antonio Magariños, llevándolo a una habitación, donde lo encerraron, quedándose con la llave. Tranquilizado todo, lo sacaron de allí, y lo acompañaron. ¡ Y este mismo señor salía después hablando en contra de sus benefactores! Con este motivo, el doctor Palomeque escribió un Manifiesto, en su carácter de presidente de la Cámara, donde relataba todo lo sucedido, siendo sumamente interesante para la historia los prolegómenos explicativos de su conducta política frente a los elementos conservadores. El dicho Manifiesto no se publicó, pues así lo creyeron conveniente los amigos políticos, por lo que lo guardó en su archivo con este título: *«Inédito, para mis hijos, por si alguien atacare mi memoria sobre los sucesos a que se refiere este Manifiesto, que no publiqué por así venir a la política de la época»* (1).

La historia no nos dice quiénes capitaneaban aquellas masas sedientas de sangre. Lo cierto es, que el doctor Palomeque las condenó en ese Manifiesto, en el cual decía, al reconocer la temeridad del señor Torres, que, sin embargo, lo hecho le enaltecía, porque quién sabe si él, en su caso, no hubiera procedido lo mismo. Agregaba más :

(1) En *Mi Expulsión*, del autor de este libro, se encuentra publicado ese documento, en parte, y relatado en todos sus detalles el suceso aquí referido. Puede verse, asimismo, *Vida Moderna*, donde contesté al señor Onetto y Viana.

que lamentaba no haber abandonado su puesto de presidente, para ir a socorrerle, a saber lo que le acontecía (1).

Este fué el grave suceso con que inauguró su presidencia, poniendo a prueba su energía. Por lo demás, los legisladores comprendieron que la situación reclamaba mucha prudencia, y no removieron la cuestión del ingreso de los diputados revoltosos, acusados por el Poder Ejecutivo, quienes nunca ingresaron a la Cámara.

Conviene hacer notar que ya en esa época los elementos del general Oribe estaban vinculados a la situación, por lo que algunos de sus paniaguados aparecieron en el movimiento tumultuario que todos los hombres bien nacidos condenaron.

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

Era indispensable entrar a la labor, para terminar mucho de lo que había delineado la legislatura, en 1855, e iniciar, desde luego, lo que era necesario e impuesto al país. El Poder Ejecutivo apuraba por lo relativo a la conversión de créditos, de acuerdo con la resolución de la asamblea del 12 de julio de 1855, mientras el doctor Palomeque urgía recomendando al Poder Ejecutivo diera cumplimiento, desde el 1.º de abril inclusive, a la amortización de la Deuda Pública, de acuerdo con el artículo 8.º de la ley de 3 de julio de 1854 (2). Al efecto, presentó una Minuta de Comunicación a dirigirse al Poder Ejecutivo, la cual, con una ligera supresión de palabras, fué sancionada por la Cámara, de cuyo debate participaron los señores Labandera, Bustamante, Latorre y Arteaga. Todos ellos reconocieron la justicia de la Minuta, aunque el señor Latorre creyese conveniente postergar su consideración.

En esa Minuta se abogaba por el pronto cumplimiento de la ley sobre amortización de la Deuda. «Esta ley—decía el autor en su Minuta de Comunicación,—en parte salvadora, debe ser una realidad y cumplirse en lo posible, cueste lo que cueste. En el presente caso, cualquiera que sea el sacrificio pecuniario a que se vea obligado el Poder Ejecutivo, será infinitamente inferior a la justicia altamente reclamada por ingentes capitales que de otro modo peligran; serán también más soportables ante el buen nombre de la nación, que se ha obligado al cumplimiento de una ley que hace la más seria, solemne y única garantía de los acreedores del Estado. El clamor general y los sucesos comprueban bien que ni las circunstancias más críticas son bastante poderosas para imponer y hacer llevadero a los acreedores del Estado el sistema prohibitivo de lo que la ley les ha acordado».

(1) Si bien no publicó el Manifiesto, aparecieron cuatro líneas en *El Comercio del Plata*, rechazando toda solidaridad con el suceso.

(2) Sesión del 7 de marzo de 1856.

En ella se recordaba el clamor público para poner «un pronto y eficaz remedio al descrédito en que se encontraban los fondos públicos y a la espantosa bancarrota que con ese descrédito amenazaba a nuestro debilitado comercio».

No olvidaba hacer patente el mal causado por la revuelta (1) reciente, ni los beneficios que se esperaban de la nueva situación política, en cuya organización él tanta influencia había ejercido. «Después de las convulsiones políticas por que ha pasado el país—decía,—sucedidas por los desórdenes de los últimos tiempos, era natural se complementasen el trastorno y confusión en que se halla la Deuda pública. La misma restauración política del 1.º de marzo corriente no ha contribuido aún bastante a restablecer el crédito público, que es la vida de los pueblos, el adelanto y la regeneración de las naciones. Tal es la situación en que se encuentra la Deuda Nacional; y este cuadro ruinoso a la vista de todos impone a la Cámara de Representantes el sagrado deber de cumplir con religiosidad el mandato que ha recibido, llamando muy seriamente la atención del Poder Ejecutivo sobre tan importantísimo asunto» (2).

Esta Minuta de Comunicación exhibía el criterio sesudo de su autor. No podía haber buenas finanzas, donde hubiera mala política. Así aparecía de ese documento, al reflejar que el decaimiento de la Deuda no era sino una consecuencia de «las convulsiones políticas por que había pasado el país, sucedidas por los desórdenes de los últimos tiempos». Aprovechaba la oportunidad para recordarlo, esperando que la «restauración política del 1.º de marzo», cuyos beneficios aun no había sido posible obtenerse del todo, remediaría lo demás, al desarrollarse en toda su amplitud. No quería, «en los momentos en que se iniciaba una nueva era—decía en la Minuta,—dejar de hacer cuanto de las facultades de la Cámara depende en bien y prosperidad de la nación».

Comprendía que el problema de la Deuda era vital para el país; pero que para realzar el crédito público era necesaria la buena política, engendradora de la paz, sin la cual no hay finanzas posibles. En ese sentido, deseaba continuar la obra comenzada en 1855, que habían venido a suspender «los desórdenes de los últimos tiempos».

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

A esta Minuta de Comunicación tendiente a fortificar el crédito público, para hacer pagar los intereses de la Deuda, y así levantarla de su postración, ahora que se iniciaba «una nueva era», se unía a

(1) El lector debe fijarse que nunca usamos la palabra *revolución*. Esta tiene un significado muy grande. Nuestra vida no ha sido revolucionaria, sino anárquica, de revueltas fraticidas.

(2) Sesión del 15 de marzo de 1856.



Pedro Bustamante

otro trabajo no menos importante en el terreno de la cultura intelectual del país, demostrativo de su celo por la educación común.

En esos días, el Poder Ejecutivo había tirado un decreto creando lo que llamó la Universidad Menor de la República, por lo que el doctor Palomeque mocionó para que fuera llamado el ministro y se le pidieran explicaciones sobre ello y sobre algunas otras medidas gubernativas (1). Llegado el momento, el doctor Palomeque expuso las razones fundamentales de su interpelación—para usar el término parlamentario del actor, mas no porque creamos que entre nosotros exista otro derecho que el muy simple de hacer venir al ministro para pedirle y oírle los informes que tenga a bien dar,—y el representante del Poder Ejecutivo contestó reconociendo la justicia de la crítica hecha al decreto emanado de la anterior administración, de fecha 12 de febrero de 1856.

El ministro declaró que «el Gobierno no tiene por qué constituirse en defensa de dicha medida: que, por el contrario, no tendría dificultad en volver atrás, para lo cual desearía apoyarse en el informe del Consejo Universitario. En su consecuencia, sólo esperaba la resolución que la Cámara adoptase sobre el asunto en cuestión».

El triunfo no podía ser más completo. La Cámara se dió por satisfecha con las explicaciones, y, por moción del señor Labandera, legislador que se había destacado en el recinto de las leyes por su preparación y labor, se encargó al doctor Palomeque de la redacción de la Minuta a dirigirse al Poder Ejecutivo. En efecto, nadie más preparado para ello que el autor de la moción.

Es verdad que el presidente de la Cámara tenía una preparación general y completa sobre las necesidades públicas, y un saber perfecto de la legislación nacional; pero, en materia de educación, poseía, además, el amor por ella, y el conocimiento íntimo del mecanismo dentro del cual se desarrollaba, por haber vivido en él desde el día de la fundación de la Universidad y del Instituto de Instrucción Pública. Allí había estado él, y allí estaba, desde entonces, custodiando el arca de donde saldría la regeneración política de la República.

Como era natural, su Minuta de Comunicación fué el fruto del amor y de la preparación. Es un documento sobrio, pero lleno de ilustración. En pocas palabras está hecha la historia legislativa de la fundación de la Universidad, y la reivindicación del derecho de la Cámara para legislar a su respecto.

El decreto del 12 de febrero de 1856 importaba una invasión de la facultad constitucional que tenía la Cámara. Sólo ésta podía crear otra Universidad más, estableciendo sueldos y afectando rentas. En esa Minuta, redactada en seguida, y presentada, por su autor, en la sesión siguiente, se recordaba, primero, que no se había querido pro-

(1) Sesión del 12 de marzo de 1856.

mover el asunto sino después de «electo el Gobierno que se ha dado el país el 1.º del corriente marzo», por lo que la Cámara, decía, «no trepidó en aplazar el cumplimiento de una de sus más serias obligaciones» (1). Reconocía, en segundo lugar, «el celo que el Poder Ejecutivo había demostrado por la instrucción pública al dictar el citado decreto, que era digno, y debía necesariamente recibir el aplauso y la estimación de la sociedad ilustrada.» «Pero—decía,—esto no basta. Hay consideraciones de un orden superior que el Poder Ejecutivo debe tener presentes para apreciar en su verdadera extensión las observaciones que la Cámara de Representantes halle justo y legítimo hacer en esta comunicación. La propaganda de las ciencias debe ser una mina fecunda, pero no debe explotarse en balde; si así se hiciere, importaría una persecución que conviene desterrar empleando los medios eficaces de protección y amparo. Bajo este saludable y verdadero principio instructivo se sostendrán bien amparadas las ciencias, y con ellas a la sociedad oriental se le verá encaminar sin tropiezos a su engrandecimiento y poderío.»

Aspiraba a que «la nueva era inaugurada», en la que tantas esperanzas fundaba, fuera la autora de la reacción, dejando constancia del respeto constitucional, como lo había hecho el ministro. Esto levantaba el espíritu de los gobernados, y aun del gobernante que tan buen ejemplo daba.

Por otra parte, el doctor Palomeque se colocaba a la altura debida, al reconocer por esa Minuta de Comunicación, en el Gobierno cesante, el noble celo que lo había guiado al tirar aquel decreto, a fin de no verse en la actitud por él asumida un acto de hostilidad hacia el señor don Manuel Basilio Bustamante, que tan correctamente había desempeñado sus funciones, desde la revuelta de agosto de 1855, hasta la entrega del mando al señor Pereyra, el 1.º de marzo de 1856.

Pero, sin negarle al Poder Ejecutivo el propósito de ayudarle en ese terreno, reivindicaba para el Cuerpo Legislativo la facultad propia de dictar leyes, exponiendo a la vez el principio educacional sobre el cual debe reposar todo plan de enseñanza, perfectamente graduado. Aquí se destacaba el maestro, el pedagogo, el entusiasta amante de la enseñanza, aquel que en 1854 expusiera, en informe nunca superado, los verdaderos cimientos sobre los cuales debiera construirse el monumento educacional, para una sociedad recién nacida a la vida después de cruentos sacrificios.

«Bajo la estabilidad de un sistema regular—decía,—la juventud estudiosa de la República encontrará todo hecho, viendo asegurada la educación en la estricta observancia de sus códigos y con la conciencia de que así se hace el bien común de la patria, nada omitirán para dedicarse con decisión al estudio de los ramos del adelanto y prospe-

(1) Sesión del 18 de marzo de 1856.

ridad pública que siempre se fomentan, vivifican y basan en el apoyo de sus leyes orgánicas, y en el fiel cumplimiento de la Constitución del Estado, único y principal elemento en que debe fundarse la esperanza de un porvenir más feliz y venturoso».

Y dicho esto, con toda su autoridad intelectual y moral, aprovechaba el momento para acentuar su tendencia política, la evolutiva, a que venía sirviendo desde tiempo atrás.

Quería que el Poder Ejecutivo supiera, una vez más, que era «en razones de este género que estribaban las brillantes y halagüeñas esperanzas de la Cámara de Representantes *para robustecer más y más las resoluciones gubernativas, como el único medio de salvación, y como el único elemento conservador del orden que vigoriza y comunica su acción dando vida a la paz y propagación de las luces*».

Esta manifestación era la expresión genuina de las aspiraciones de aquella sociedad. No había un solo ciudadano bien intencionado que no pensara en condenar a quien quisiera detener la marcha evolutiva de la idea.

Era tal la tendencia conservadora de aquellos días, que, en el diario *El Comercio del Plata*, redactado por personas no adictas al candidato presidencial triunfante, que inauguraba «la nueva era», se decía, una vez electo «aquél constitucionalmente, que no debía haber consideración, y aplicársele todo el peso de la ley, a quien pretendiera alterar el orden público». En ese camino se marchaba. Se buscaba la senda del respeto al principio de autoridad, para vigorizar y robustecer las resoluciones administrativas. Se quería salir del atolladero en que los motines y las revueltas habían metido el país.

Sumamente firme era aquella parte de la Minuta en que se reconocía que el decreto, «en los primeros días de la emancipación política habría sido un medio vigoroso y verdadero de ayudarla, pero que en esos momentos era inútil e inconveniente, porque contrariaba las leyes existentes, minando por su base la organización de la enseñanza adquirida en fuerza de tantos y valiosos sacrificios públicos y privados». Hacía presente la innecesidad de entrar a discutir la inconveniencia de una segunda Universidad, después de lo manifestado por el ministro; pero, en cambio, se contraía única y exclusivamente a demostrar que para la creación de una nueva Universidad era forzosa la sanción del Cuerpo Legislativo.

Con este motivo, hacía sucintamente la historia de la fundación de la Universidad (1). Trajo a colación la ley sancionada el 8 de junio de 1833, promulgada el 11 del mismo mes y año, donde se determinan el número de cátedras y las ciencias a cursarse; recordando

(1) Véase mi artículo sobre la fundación de la Universidad, publicado en la *Revista Histórica* (Anales de la Universidad) de Montevideo, en su primer número.

que por el artículo 13 de esa ley se había facultado al Poder Ejecutivo para erigir la Universidad, debiendo dar cuenta a la Asamblea General con un proyecto relativo a su arreglo. Esto último lo cumplió el Poder Ejecutivo.

«En 18 de diciembre de 1835, el Poder Ejecutivo nombra—dice el doctor Palomeque—una comisión de ciudadanos respetables, hábiles y científicos, para la redacción del proyecto de que trata la citada ley, y en 17 de febrero de 1836 la misma Comisión eleva sus trabajos, que, aprobados por el Poder Ejecutivo reciben la sanción del Cuerpo Legislativo por decreto de 7 de junio de 1837. Hasta aquí, pues, se ve bien la existencia de dos leyes relativas a la creación de la Universidad Mayor de la República, que toma este nombre por decreto del Poder Ejecutivo, fecha 27 de mayo de 1838».

Este antecedente legislativo, probatorio de la atribución exclusiva del Cuerpo Legislativo para crear una Universidad «con facultad de conferir grados académicos», como lo pretendía el decreto que aquí se impugnaba, era indiscutible. De aquí se deducían consideraciones muy fundadas, para concluir por declararse que el Poder Ejecutivo debió ocurrir al Cuerpo Legislativo. En su consecuencia, «la Cámara de Representantes—concluía diciendo—cumple con uno de sus más sagrados deberes pidiendo al Poder Ejecutivo, como lo hace, reconsidere su decreto de 12 de febrero último, y en su mérito derogarlo o suspenderlo en sus efectos hasta tanto se provea como lo aconsejen los intereses bien entendidos de la nación» (1).

No había nada que observar a la ilustrativa y bien redactada Minuta. El señor Labandera, pues, mocionó para que fuese considerada sobre tablas, lo que así se hizo, sancionándose sin que en nada se observara.

Así se iniciaba la Cámara de Representantes, con toda independencia, deseando que el Poder Ejecutivo, al inaugurar «la nueva era», lo hiciera respetando la Constitución. ¡Y el Poder Ejecutivo así lo reconocía y declaraba en pleno Parlamento! Bajo tan gratos auspicios se iniciaba, cuando, a los pocos minutos, en el propio acto, las turbas desencadenadas querían precipitarse al recinto legislativo para impedir que los representantes del pueblo deliberaran con entera libertad. El efecto que esto causó ya lo conocemos, pues dió motivo al Mensaje del Poder Ejecutivo, y al Manifiesto del señor presidente de la Cámara, donde éste, al hablarnos, ahora, desde ultratumba, nos revela su energía de carácter y su voluntad de acero, al haber callado durante tanto tiempo, apelando a la posteridad, justiciera y recta. Él sabía, como hombre de Estado, que éste no se defiende, sino que apela a la posteridad, para que lo lea y lo juzgue por sus hechos, escudri-

(1) En esta misma sesión (18 de marzo de 1856) se desarrolló aquel escándalo del cual ya hemos hablado.

ñando hasta sus intenciones, para saber si fueron sanas. Y, en el caso, lo fueron, pues el doctor Palomeque nunca fué amante de violencias, si bien tuvo energías para defender sus derechos. Era hombre de ley y de raciocinio, sin carecer de la habilidad necesaria para moverse en aquel mundo de pasiones bravías.

PROYECTO DEL DOCTOR BUSTAMANTE

Al lado del doctor Palomeque había otros ciudadanos, que, aunque no participaran del todo de sus opiniones, tenían antecedentes honorables y preparación científica. Uno de éstos era el doctor don Pedro Bustamante, hombre de un saber limitado, pero atrabiliario de carácter. Él también contribuyó, con sus hechos y buena voluntad, a solucionar las dificultades de entonces. Se daba cuenta de lo difícil de la situación financiera, y se apresuraba a presentar un proyecto autorizando al Poder Ejecutivo para la enajenación de la mitad de las rentas de aduana por el término de un año, a contar desde el 1.º de abril; esas rentas que antes se habían afectado, en una octava parte, diremos así, al pago de los billetes de la Deuda (1).

Esto importaba reaccionar respecto a la enajenación total de esas rentas hasta diciembre de 1856, autorizada por la ley de 13 de julio del año anterior.

Se iba tanteando, aprendiendo, según lo exigían las necesidades. Ayer se opinaba de un modo, y al día siguiente, los hechos, con su brutal elocuencia, enseñaban a aquellos hombres un nuevo camino a seguir, y lo seguían. Quizá mañana volvieran a reaccionar, para adoptar el primer sendero, hoy abandonado; pero este tanteo no acusaba ignorancia, ni falta de firmeza en las ideas, sino la revelación evidente de atravesarse por una época embrionaria, donde los acontecimientos inesperados, como la misma exuberancia productora de la tierra, sorprendían a los pensadores en la mitad del camino, para anunciarles «una nueva era» que les imponía el deber de pensar de manera distinta, en bien del país. Ahora ya se creía que no era necesario enajenarlo todo, sino una mitad. ¡La esperanza renacía!

En su consecuencia, a los seis días de presentado aquel proyecto por el doctor Bustamante, ya era sancionado por la Cámara. Había apuro en dictar la nueva ley. Así lo propuso el señor Labandera, lo que se aceptó; informando, en el acto, a nombre de la Comisión de Hacienda (2).

Por dicha ley, el Poder Ejecutivo conservaría la correspondiente

(1) El Poder Ejecutivo contestó que por ahora no podía fijar el momento en que podría asegurar el cumplimiento de la amortización de la Deuda a que se refería la ley de 3 de julio de 1854 (sesiones del 12 y 23 de marzo de 1856).

(2) Sesión del 18 de marzo de 1856.

intervención en la administración general de las aduanas, debiendo instruir a la Asamblea de las condiciones del contrato de enajenación.

Como era natural, quedaba derogada la ley de 13 de julio de 1855, que autorizaba la enajenación total hasta diciembre de 1856. Ahora se autorizaba la enajenación de la mitad, por el término de un año, a contar desde el 1.º de abril de 1856. Era tal la exigencia del momento, que este proyecto fué, en seguida, aprobado por el Senado, para que pudiera ser ley desde el 1.º de abril (1).

Por su parte, el doctor Palomeque continuaba preocupándose de la cuestión financiera, aprovechando el ambiente favorable que se respiraba en el orden político. Todo el mundo estaba convencido de la honradez privada y política del señor Pereyra y sus ministros, por lo que se apresuraban a rodearle. Esta buena situación no debía desperdiciarse para buscarle recursos al Poder Ejecutivo. De ahí que el doctor Palomeque presentara un proyecto estableciendo el impuesto sobre los carruajes, carretillas, carros y carretas (2).

En prosecución de idéntico propósito, presentaba otro referente al arrendamiento de puestos de venta en los mercados públicos. Este proyecto tenía de original que, en caso de propuestas hechas por ciudadanos y extranjeros, eran preferidos los primeros; y cuando lo fueran sólo ciudadanos o sólo extranjeros, se preferiría a quien se hiciera más meritorio por sus servicios a la República (3).

Por su parte, el Poder Ejecutivo enviaba una propuesta de don Vicente Lena para la construcción de un mercado en la plaza Cagancha, el que era aprobado (4).

VÍNCULOS QUE SE AFLOJAN

Aquel incidente del 18 de marzo había tenido sus consecuencias, y las tendría todavía más en adelante, hasta aflojar del todo los vínculos entre aquellos hombres, pertenecientes, en su origen, al partido de la Defensa, dueños del gobierno de la sociedad en estos momentos. Se necesitaba mucho tino político para marchar unidos, después de los sucesos desgraciados del 53 y 55, en que, como se ha visto, no opinaban al unísono. En el que acababa de producirse, apareciendo en la superficie las pasiones fuertes, entraba un nuevo elemen-

(1) Sesión del 1.º de abril de 1856 de la Cámara de Representantes.

(2) Sesión del 3 de abril de 1856 de la Cámara de Representantes.

(3) Sesiones del 9 de abril y 13 de mayo de 1856. El proyecto fué sancionado, pero con modificaciones, en especial lo relativo a ciudadanos extranjeros.

(4) Sesiones del 9 y 19 de abril de 1856.

to, mantenedor del Gobierno, que, otrora, en 1855, había estado unido a los revoltosos de entonces, al producirse la anarquía.

Es sabido que los oribistas aparecieron, en aquella ocasión, en 1855, vinculados a los hombres que se decían los genuinos representantes de la Defensa, proclamando lo que entonces era considerado como el *plus ultra* de la aspiración nacional : la alianza brasileña bien entendida, y el olvido de los partidos tradicionales, bajo el título de fusión de los orientales. En esta nueva política del centro denominado *Unión Liberal* creía encontrarse, y en efecto se encuentra, la base de la soberanía popular ; pero, no por medio de revueltas y asonadas, sino por obra de la paz y del convencimiento, surgidos de la educación en el hogar y en la escuela, de la libertad de la prensa, y de la del pensamiento hablado y escrito.

Ahora bien, los acontecimientos habían destruído aquella coalición del 55, salida a la calle en la hora del desangre y de la caída de un Gobierno constitucional ; porque tal es la ley de toda unión híbrida, basada en la violencia y en el ataque al principio de autoridad constitucional.

No se había meditado seriamente el caso, por más que un sentimiento sano, inspirado en el amor de la patria, había decidido a los hombres del Cerrito, que vivían retraídos, en la abstención, a elegir ese mal momento para prestar su concurso a la lucha de la organización administrativa. Quizá habrían procedido cuerdamente dejando que las cosas se desarrollaran por los autores del movimiento, y entrar a actuar una vez que ellos, por sí solos, se hubiesen constituido.

Ese error de procedimiento les enseñó el trayecto a seguir en adelante, y fué así que, cuando Oribe y Flores se unieron para constituir el poder que contrarrestaría la acción de los *conservadores*, se limitaron los partidarios del primero a vivir fuera de las filas del Gobierno, pero esperando el desarrollo de los sucesos, para saber a qué atenerse. En su virtud, se constituyeron en sostenedores de la nueva situación, desde las filas populares, aun después de muerto el general Oribe, en obediencia a las palabras que, se dice, fueron pronunciadas por éste, en la hora de la muerte, por más que nos cueste creerlo, suponiéndolo más bien un recurso hábil de los políticos de la época, entre los cuales ya se destacaba don Cándido Juanicó.

De ahí que muchos de aquellos hombres de acción aparecieran en la calle entre la turba que atacó al señor don Fernando Torres, si bien se aseguró, con visos de verdad, que algunos de los directores llenaron una misión de garantía más que de atacantes.

Este acercamiento de hombres, en la calle pública, no era sino el resultado de lo que se desarrollaba en las altas esferas políticas. Nadie quería hablar de círculos personales, exclusivistas, tradicionales, sino de formar un partido grande, a la sombra de la bandera de la patria, bajo la cual cabían todos los orientales, según lo había dicho el

señor Pereyra en el Programa redactado por el distinguido literato doctor don Alejandro Magariños Cervantes, a instancias del doctor Palomeque, quien así colaboró en la obra (1).

Sin embargo, el suceso del 18 de marzo, que a nadie había satisfecho, produjo el efecto de hacer dudar a algunos de los legisladores sostenedores de la nueva política; a los mismos que, andando el tiempo, la abandonarían ante el primer amago, porque no tenían un concepto firme de lo que ella importaba, creyendo haberse equivocado y ser mejor volver a sus primeros amores. La nueva política sólo podían mantenerla quienes hubieran estudiado bien a fondo aquel país y dándose cuenta de las causas de sus males. No la entendían sino quienes la sentían. Para persistir en ella se necesitaba mucha resolución enérgica, nacida de aquel estudio. La nueva política no era una panacea que todo lo curara inmediatamente; era el principio de una marcha evolutiva a producir sus efectos con el tiempo. Estaba basada en el olvido del pasado luctuoso, y en la guerra a la ignorancia. Tenía por base el principio de autoridad constitucional y la expansión de la escuela en la campaña, para mantener la paz; sin la cual no era posible concluir con el gaucho y el caudillaje. Como era natural, mucho costaría arrancar de cuajo los resabios de una época atrasada, triste herencia de las generaciones del presente. La constancia en el propósito sería la única que la salvaría, cuando la obra se viera comprometida por hechos que la contrariaran. La perfección no era posible. De ahí el mérito de quienes persistieron, soportando toda clase de dolores para llegar al *desideratum*; salvando siquiera sus personalidades, en cuanto les era dado, del contacto de los actos que obstaculizaran la marcha. Mucho espíritu de transacción reclamaba tal política evolutiva, dentro de la cual actuaban tendencias atávicas, opuestas, que había que contener y armonizar, hasta que ese contacto completara el plan por medio de la educación de las masas arrojadas luego al tapete de la discusión pública. Esa tarea difícil, sólo podía realizarse por hombres superiores, convencidos de su misión, y, muy en especial, por quienes habían asumido el rol de autores principales, aceptando la responsabilidad para ante la historia, como iniciadores y precursores de la buena idea.

Los otros, los que habían adherido por un sentimiento noble, por inspiración de un momento, sin mayor estudio, siguiendo la corriente trazada, pero sin abjurar verdaderamente, en lo interior, de lo luctuoso de aquel pasado, que se entregaba a la historia, para nunca más acordarse de él, salvo para perpetuar lo bueno y grande, lo indiscutible para todos los orientales, como ser, los acontecimientos de la Independencia y de la Defensa, no tendrían la fuerza de resistencia

(1) Ese programa original, de puño y letra del doctor Magariños, se encuentra en mi archivo.

nacida de la firmeza de opiniones que atraviesa las montañas. De ahí que éstos, al primer amago, volvieran a sus campamentos derruidos, en la creencia de que allí estaba el remedio a tanto mal, sin contar con el tiempo, ese gran colaborador de los hombres que saben tener paciencia. Era que unos tenían el juicio del presente, el de las pasiones airadas, que no razonan ; mientras los otros, apelaban a la posteridad, al juicio de la razón. Aquéllos no tenían el valor para soportar los ataques del día de hoy, mientras los otros vivirían para su conciencia, y en las páginas de la historia ; de ésta, que premia a quienes, aunque no aparezcan vencedores en la lid material, han dado pruebas de un valor magnánimo, sosteniéndose firmes en la obra emprendida, rodeados de escombros y de humo, como si fueran el incienso perfumador de sus almas gigantescas. No es la gloria la que destaca a la personalidad materialmente vencedora, gozando del sibaritismo del poder, pero sí la virtud la que engrandece a quien dió muestras de poseer un alma dispuesta al sacrificio en holocausto a una gran idea. Por eso el soldado valeroso, batallador por una causa santa, toma las alas del héroe, y su espíritu se remonta al cielo de las grandes hazañas, llevado por la Gloria, aunque su cuerpo sucumba en la empresa encomendada a sus gigantescos alientos.

Con motivo de aquel suceso del 18 de marzo, que soportó impasible el doctor Palomeque, renunciando hasta a defenderse, se sintió algo movedido en el terreno político. Así, se veía que el doctor don Mateo Magariños, una de las columnas de aquella situación, creía conveniente retirarse, pidiendo una licencia que la Cámara no le concedió, porque, decía, «en la actualidad no sería prudente defraudar a la Cámara de ninguno de sus miembros, y mucho menos del doctor Magariños, cuya reconocida capacidad es tan necesaria a esta corporación, para que tome parte en las discusiones que sobre cualquier materia hayan de tener lugar en lo sucesivo» (1). Otros, como Benito Lombardini, Araucho y Veracierto, muy luego renunciarían, lo mismo que sus suplentes convocados. Creían que debían abstenerse. El doctor Palomeque denunciaba la inasistencia de sus colegas, desde el 15 de febrero, en que se abrieron las sesiones, para que se adoptaran las medidas impuestas por el Reglamento en el artículo 3.º de las adiciones de 14 de octubre de 1843 ; respecto de lo cual insistió en una de las siguientes sesiones, el señor Arteaga, para que se exigiera de los señores inasistentes los motivos de su proceder (2).

(1) Sesiones del 3 de abril y 16 de junio de 1856.

(2) Sesiones del 3 y 9 de abril y 3 de mayo de 1856.

LOS ACREEDORES DEL 48

La legislatura de 1856 trató asuntos de suma importancia, y ello con gran acopio de ilustración y de patriotismo. En esos asuntos siempre intervino el doctor Palomeque, descendiendo de su asiento de presidente para ilustrar el debate. Era un gran colaborador del Gobierno, a quien servía y ayudaba, pero con entera independencia, como los sucesos lo irían revelando. Allí donde veía comprometido el programa evolutivo de gobierno, se encontraba dispuesto a librar batalla. Podía ser vencido, pero no renunciaba a sus ideales. No siempre pudo contener su alma vehemente, dándolo a comprender al gobernante y a sus amigos de Cámara, ya fuera no concurriendo a la casa del primero (1), ya retirándose del salón de sesiones (2).

Entre esos asuntos de suma importancia estuvo la negociación realizada por el Poder Ejecutivo con el encargado de Negocios Británicos, en representación de la sociedad compradora de las rentas de aduana de 1848. El Poder Ejecutivo la enviaba al Cuerpo Legislativo y pedía se sirviera atender a este asunto con la premura que reclamaba el artículo 48 del arreglo convenido (3).

En efecto, había urgencia, por lo que en la sesión del 12 de abril el señor don Luis Magariños propuso se tratara sobre tablas, en vista de haberse expedido ya la Comisión de Hacienda. Los señores Bustamante y Magariños (Mateo) se opusieron, por no estar preparados y no poder formar su conciencia para votar. Entonces el doctor Palomeque descendió de la presidencia, para terciar en el debate. Estuvo vehemente, al calificar la actitud de los opositores de «pretexto para ganar tiempo», «porque no se quiere considerar una cosa o se quiere inutilizar». Afirmó que no era cierto aquello de no conocerse el asunto, pues el arreglo se había publicado, y arrancaba desde el año 45, y que ninguno de los presentes podía decir propiamente que no lo conocía; que en este concepto se oponía a toda demora en su consideración» (4).

La urgencia se fundaba en que el día 15 era el señalado en el arreglo para poner en posesión a la sociedad compradora de 1848. El doctor Magariños llegó a manifestar que se retiraría, por no estar pre-

(1) La carta del doctor Requena, en mi archivo, lo prueba.

(2) Sesión del 23 de mayo de 1856.

(3) Sesión del 9 de abril de 1856.

(4) Sesión del 8 de abril de 1856.

parado, debido a lo cual se transó, señalando el día siguiente, no obstante ser festivo, para la celebración de la sesión. Y así se hizo.

El día 13 de abril se reunió la Cámara, leyéndose el Informe de la Comisión de Hacienda, compuesta de los señores Labandera, Rodríguez, Luis Magariños y Zás, aconsejando se aprobara el arreglo celebrado por el Poder Ejecutivo con el señor Encargado de Negocios de Su Majestad Británica, relativo a las reclamaciones de la sociedad compradora de las rentas de aduana en 1848, en ejecución del contrato de 5 de noviembre de 1845, garantido por el Gobierno de Inglaterra y Francia. La Comisión hacía presente que «el total de los créditos contraídos bajo la garantía de aquellos Gobiernos ascendía a la suma de 1.070,000 pesos, próximamente, y a su pago se destinaba la octava parte del producto líquido de las rentas de aduana hasta su total extinción; quedando, entretanto, la administración de esas rentas bajo la dirección de la sociedad de 1848». Declaraba que «el Poder Ejecutivo había desplegado en pro de los intereses fiscales una inteligencia y celo que la Comisión se complacía en reconocerle».

La ventaja de los arreglos consistía en que no se pagaría el interés del 6 % que aquel capital debía producir, habiendo sido descargado el erario público de una suma de 600,000 pesos, lo que era debido al empeño del Gobierno y a la buena predisposición del diplomático inglés. «Esta circunstancia—decía—permitiría reorganizar la Hacienda, abriendo una serie de economías al erario para el futuro».

La actitud de los Encargados diplomáticos daba motivo para que la Comisión, quizá fuera de lugar, nos dijera sentimentalmente: «Nunca el hombre es más noble ni se eleva más que cuando su generosidad viene a prueba».

El miembro informante de la Comisión, don Luis Magariños, uno de los hombres intelectuales de su época, muerto prematuramente para la sociedad que lo distinguía, dijo cuatro palabras, refiriéndose, en un todo, a lo dicho en el Informe, en el cual se declaraba, y con razón, «que ése era el término que había alcanzado este grave negocio, en el cual estaba alta y solemnemente comprometido el honor y el crédito nacional».

El señor ministro de Hacienda mantuvo lo expuesto, siendo ello materia de «un prolongado y sostenido debate, en el que tomaron parte, en contra, los señores Magariños (Mateo) y Aguiar; y en pro, el señor ministro de Hacienda y el señor Palomeque».

Durante la discusión general, declarada libre, por moción del señor Magariños, se «continuó por largo tiempo la discusión cada vez más animada sin que se pudiera arribar a un término».

Enardecidos los ánimos, el señor Aguiar se salió de la cuestión, arremetiendo contra el señor ministro, de una manera inopinada. Le interpeló sobre el estado de las rentas, en sus diversas afectaciones,

pidiéndole dijera si era o no exacta la nómina, que al efecto leyó, «obtenida por conducto de un senador».

Como se comprende, el ministro rechazó indignado tal salida de tono, «repeliéndola como inexacta e injuriosa a los respetos, que, para que sea creída—decía,—se merece el Poder Ejecutivo en este lugar».

No se dió por vencido el señor Aguiar, pues con una sangre fría admirable, y un candor inconcebible, contestaba que sin duda no se daban las explicaciones porque en sesión pública causaría mal a la administración, haciendo moción para que la sesión fuera secreta.

Si extemporáneo fué lo primero, mucho más lo era lo segundo. El ministro y el doctor Palomeque combatieron tan improcedente actitud, mientras el doctor Magariños, al darse cuenta del *imbroglio* en que se hallaban, opinó por levantar la sesión y continuarla al día siguiente, para, «con mejores datos, hacer más fácil y más breve la consideración del asunto en cuestión».

Esta moción era práctica al estado a que se había llegado. Convenía que los ánimos se serenaran. En ello se veía la indiscutible habilidad de su inteligente autor. En el primer momento, el señor ministro, afectado como se hallaba por lo sucedido, se negó a acceder a ello, fundado en que redundaría en perjuicio de los intereses públicos; «pero después, a indicación del señor Palomeque—dice el acta,—el señor ministro se adhirió a la moción». Los dos tenían razón, pues si bien era bueno calmar los ánimos y proceder con pleno conocimiento de causa, a fin de no creerse que se resolvía presionado por los ministros extranjeros, la verdad era que los intereses públicos reclamaban la pronta solución, atento el término señalado en el arreglo para dar posesión a la sociedad compradora de las rentas de aduana.

Llegó la sesión definitiva, y no compareció el doctor Magariños, como tampoco el otro *leader* de la oposición, el señor doctor Bustamante (1). Estos diputados, que habían pedido tiempo para estudiar y dar su voto en conciencia, el cual lo tuvieron, abandonaron la partida; si bien el doctor Magariños permaneció en el terreno mucho más tiempo que su compañero de tareas. Fué en esta sesión, donde el doctor Palomeque volvió a exhibir sus altas facultades y su criterio político, con la conciencia plena del deber a cumplirse. Vamos a verlo.

Los ánimos habían sufrido transformación. Tres días había durado la discusión. Los opositores no tenían argumento que alegar, pues aquello era, como toda nuestra Deuda Pública, y bien que ellos lo sabían, el resultado inevitable, fatal, de la guerra fratricida. Por consiguiente, adoptaron el temperamento muy práctico de no concurrir a la sesión señalada, pedida por el doctor Magariños. Bustamante y Magariños brillaron por su ausencia, después de haber tenido el tiem-

(1) Sesión del 14 de abril de 1856.

po suficiente para ilustrarse y formar conciencia. Esto, seguramente, no fué sino un pretexto, a fin de obstruir la acción legislativa.

Nadie mejor que ellos estaban al corriente de la cuestión y de la necesidad de solucionarla; pues, como iba a demostrarse, el Poder Ejecutivo no hacía sino cumplir con las leyes existentes, que le habían autorizado para hacer esos arreglos, sin necesidad de estar a la aprobación del Cuerpo Legislativo, si bien obligados a comunicar los convenios hechos. Si el contrato se había sometido, ahora, a la Cámara, había sido porque el Poder Ejecutivo lo había convenido así con el señor ministro inglés, según constaba de una de las cláusulas.

Pero, si bien aquellos diputados no concurrieron, asistió, sí, el señor Aguiar. Éste, ya más tranquilo, volvió a tratar el tópico anterior, aunque llenando formas suaves que produjeron el resultado de atraer la solución razonable del caso. El señor Aguiar se encontró satisfecho, y votó el proyecto de la Comisión.

El doctor Palomeque inició el debate con un «discurso bastante extenso y persuasivo», dice el acta, haciendo notar que «la continuación de la discusión por tres días sucesivos, sobre un asunto de tanta trascendencia, explicaba perfectamente la gravedad del asunto, y el tino con que la Honorable Cámara quería proceder, llevada de un celo digno y plausible a la vez por el bien público».

El orador, venía por el honor de la Cámara que presidía. No quería fuera a suponerse que lo sucedido era obra de una oposición sistemada contra el Poder Ejecutivo, pero tampoco un servilismo indigno de hombres conscientes. Aspiraba a que se discutiera extensamente el punto, para que el pueblo se convenciera de que allí no había otra influencia que la impuesta por la necesidad y la razón. Estaba plenamente seguro de que cuanto más se escudriñaran las cosas, más evidente aparecería lo aconsejado por la Comisión de Hacienda.

En el deseo, pues, de despejar toda duda, se consideró obligado a hacer un «discurso bastante extenso y persuasivo—según el acta,—como lo reclamaba su trascendencia y gravedad, en un asunto—decía—que lleva en pos de sí la felicidad o la desgracia del país» (1).

En efecto, el asunto era muy grave. Se trataba de un reclamo internacional hecho en aquellos tiempos en que aun los países europeos solían, o pretendían, mezclarse en asuntos de esa naturaleza, tal cual lo hacía asimismo el Imperio del Brasil.

«Inglaterra, desde 1847—decía el doctor Palomeque,—por medio de sus agentes, ha gestionado y gestiona siempre la satisfacción de un crédito de sus súbditos, cuyos derechos arrancan desde el contrato celebrado en 1845». Debido a esto, «todas las administraciones habían tocado en su marcha los inconvenientes consiguientes a la falta de cumplimiento de la fe pública empeñada en esos contratos». Cada vez

(1) Sesión del 14 de abril de 1856.

que el Gobierno había querido enajenar el todo o parte de las rentas de aduana, la sociedad compradora de la cuarta parte del año 48, hacía presente sus derechos y protestaba por el no cumplimiento de su contrato (1).

Como prueba de ello, cuando el Gobierno publicó avisos llamando a propuestas para enajenar la mitad de las rentas de aduana, con arreglo a la ley dictada en esos días, inmediatamente reclamó el ministro inglés. Fundado en este hecho, y en cumplimiento de la ley de 1855, se había celebrado el convenio en discusión.

En ese convenio había una cláusula cuarta que establecía se sometiera el arreglo hecho a la aprobación del Cuerpo Legislativo. El doctor Palomeque creía que este artículo estaba mal colocado; que el Poder Ejecutivo no debió ponerlo, desde que estaba autorizado para hacer el contrato, sin obligación de someterlo previamente a la aprobación de las Cámaras.

Alegado todo esto, sostenía que el rechazo del convenio importaría coartarlo al Poder Ejecutivo en su marcha, terminando por decir: «¡ Cuánta responsabilidad no atraían sobre sí los representantes para con sus comitentes! ¡ Todo esto el resultado que traería sería la anarquía, los horrores, el desquicio y la ruina de todo el Estado! »

Estas palabras, tendientes a decidir a sus colegas, quizá fueran una exageración, miradas hoy las cosas con friedad; pero, en aquellos tiempos en que se carecía no sólo de la fuerza material, sino de la moral, para resistir los avances de un ministro inglés, francés o brasileño, nada sorprendía mirar las cosas por el lado pesimista. Lo cierto era que la marcha administrativa ahí estaba trabada. El Poder Ejecutivo estaba autorizado por el Cuerpo Legislativo para enajenar la mitad de las rentas de aduana, y no podía hacerlo, porque la diplomacia británica se le atravesaba en su camino. Y, para conseguir que así no pasaran las cosas, era indispensable soportar la imposición, que, al fin, se basaba en un indiscutible derecho, y entregar, a buenos administradores, las rentas de aduana, el día 15 de abril de 1856. De aquí la urgencia de la sanción de la ley. Nada de extraño, pues, que ante lo pavoroso de la situación, concluyera el doctor Palomeque su peroración, exhortando a los señores representantes a que «se fijaran en lo que iban a hacer, diciéndoles que pusieran la mano sobre su corazón y escucharan de su conciencia la voz de los pueblos, de sus comitentes, que les pedían, en la resolución de ese negocio, un voto que les diera la paz, la felicidad de que tanto se necesitaba; porque era preciso se tuviera presente que esa cuestión era de vida o de muerte para la República».

Era tal su profunda convicción, que, al referirse al incidente pro-

(1) Ya hemos relatado en otra parte el ataque del Gobierno a esos compradores, despojándolos de lo que legítimamente poseían.

vocado por el señor Aguiar en la sesión anterior, tenía un arranque del fondo de su corazón. Después de haber estudiado con calma legal el proyecto en discusión, recordó lo afirmado en «una demostración numérica, de que el Gobierno no tenía más que 6,000 pesos y pico para atender al pago de la lista civil y militar» (1).

Ahora bien, el Ministerio había declarado que tenía cómo satisfacer ambas listas, no siendo cierto lo afirmado. Pues, aunque fuera cierto, decía el doctor Palomeque, «el Cuerpo Legislativo, que no es administrador, no debe negarle su aprobación al convenio celebrado, por el temor de que, no teniendo más que los 6,000 pesos, no pueda pagar las listas referidas».

En esto tenía razón. El Cuerpo Legislativo había autorizado al Poder Ejecutivo para hacer esos arreglos con conocimiento perfecto de la situación. Luego, la consecuencia era forzosa. En todo caso, ello debió pensarse cuando se discutió la autorización para el dicho arreglo. La seriedad del Gobierno estaba comprometida, pues no podía desautorizársele ante el ministro diplomático, con quien se había contratado, porque así expresamente lo había resuelto el Cuerpo Legislativo.

Por lo demás, el argumento hecho por el señor Aguiar quedaba destruido ante la respuesta del Ministerio. Éste, faltaría o no a la verdad, al decirnos que tenía recursos, por más que la afirmación pudiera parecer dudosa. El mismo doctor Palomeque, que conocía muy bien el estado de las cosas, el volcán económico sobre el cual se sentaban, dejaba entrever su pensamiento, cuando, al ocuparse de este detalle, concluía diciéndonos: «Que en su concepto, aun creyendo que el Ministerio se equivocaba o no decía verdad, debía, sin embargo, darle la aprobación que buscaba según la base cuarta de dicho convenio, pues el tiempo vendría a poner en evidencia la verdad, y entonces, si el Ministerio había faltado a ella, habría llegado el caso de acusarlo, juzgarlo y penarlo; que él sería el primero en acusar a un ministro que viniera ante la Cámara a asegurar lo que él tal vez no tuviera la conciencia de creer; pero que el tiempo se encargaría de revelar lo incierto de su aseveración».

Era evidente que el Gobierno pasaba por un momento difícil, a tal punto, que de esta discusión resultaba que el *crédito personal* del ministro de Hacienda era una garantía que se tenía en cuenta para la marcha administrativa, según lo recordó el señor Aguiar; pero, este caballero no se daba cuenta de lo que la Comisión de Hacienda había expuesto, base y fundamento de la afirmación del ministro. Podría aquel *papelito* del senador de antesalas ser muy verdadero, pero no se contaba con que, despejada la situación, con este arreglo, entonces se

(1) Esto era lo denunciado por el señor Aguiar, fundado en apunte transmitido a él, en antesalas, por un senador.

abrían horizontes, siendo fácil al Gobierno obtener nuevos recursos. Y era aquí donde se hallaba el fundamento de la afirmación del ministro. Hoy podría no haber un peso en caja, pero mañana, ante la seguridad de que al frente del Gobierno había hombres honestos que cumplieran los convenios internacionales, se abrirían nuevas fuentes de riqueza, como así sucedió, que permitieran confiar en esa felicidad de la cual hablaba el doctor Palomeque; quien, por lo mismo, no tuvo para qué acusar al ministro, aunque sí, como veremos, interpellarlo por hechos de verdadera trascendencia en nuestra política interna y por la actitud observada para con el representante del Imperio.

El señor Aguiar hizo uso de la palabra en seguida, no para constatar «las consideraciones y teorías que acababa de establecer su muy honorable colega, amigo y representante, el señor Palomeque» (1), como él decía, y era verdad, pues nunca murió el afecto entre ambos, transmitido luego a sus descendientes.

El señor Aguiar era un caballero en toda la extensión de la palabra, un modelo de virtudes de su hermoso hogar. Poseía distinción en su cuerpo, atracción en su fisonomía, majestad en su gesto, corrección en su andar y nobleza en su presencia, que cautivaban. Su inteligencia despierta, y su sensibilidad exquisita, predisponían a su favor. Dotado de un carácter constante, era de aquellos que, conscientemente, habían abrazado la «nueva era» de la confraternidad de los orientales, sirviendo, no al Gobierno, sino a la idea que personificaba esa tendencia altruista. Por eso, cuando hizo uso de la palabra, apareció la nobleza de su ánimo, al recordar con suavidad el incidente pasado. Declaró que en el curso de la discusión parecía que el ministro le había dirigido palabras que le hubieran satisfecho, si las hubiera comprendido. El ministro le había dado explicaciones más tarde, en antesalas, las mismas que quería se le dieran oficialmente. De ahí que lo interpellara nuevamente para que declarase de una manera categórica si, sancionado el contrato, le quedaban al Gobierno los recursos materiales para atender a los gastos más premiosos e indispensables de la administración pública. Quería que el señor ministro tuviera la bondad de satisfacerle oficial y categóricamente, porque deseaba declarase a la Cámara que al Poder Ejecutivo le quedaban los medios para marchar, sin valerse del crédito personal del señor ministro, porque no todos los individuos que suben al ministerio de Hacienda llevaban el crédito personal. Y al terminar, volvía a declarar que «quería que el señor ministro tuviera la bondad de satisfacerle», para luego dar su voto favorable.

El ministro se «complació mucho del tino que el señor represen-

(1) Aun no era doctor el autor de mis días. Recién al año siguiente, en 1857, se recibiría, junto con el joven José Pedro Ramírez, muerto, al parecer, en los momentos en que, en Granada, en España, escribo estas líneas (1913).

tante—decía,—que acababa de hablar, daba a este negocio». El caballero había vencido al funcionario, y éste declaraba que «la situación del Poder Ejecutivo era la de pagar los sueldos y gastos ordinarios, y que no perdería nada por la aceptación del contrato.» Tenía el honor de declarar a la Cámara que la misma situación en que ella quería que quedara el Poder Ejecutivo, era la misma en que éste se encontraba. El Poder Ejecutivo marcharía, decía, «con aquel pulso y moderación necesarios en que reposan todos sus actos, no se comprometería jamás, no contraería jamás compromisos que le cortasen los medios de llenar sus principales deberes. Se complacía en manifestar que esa era la verdad de la situación en que se encontraba; esto es, *la de inspirar confianza*».

Aquí realmente estaba el *busilis* de la cosa. La situación era muy difícil. De esa *confianza inspirada* resultaría todo lo demás, para poco a poco taparse todos los agujeros. El Poder Ejecutivo buscaba con ansia los recursos para satisfacer las deudas que contraía periódicamente con los empleados del Estado. «Harto hacía—decía,—y harto le costaba, en la situación en que se encontraba la República». Los empleados, hacía unos cuatro años pasaban penas. Hubo año que no recibieron sino dos o tres meses de sus sueldos, y «época en que no habían percibido sino mes y medio, o dos meses». Ahora «se complacía en pensar que esos servidores podrían contar, ciertamente, con la mitad de sus sueldos religiosamente pagos, y quedarían satisfechos».

Era tristísima la época y pesado el camino a recorrer. El Gobierno no había pagado sus empleados, y, con dolor valeroso, se atrevía a decir que la perspectiva sería, a pesar de *inspirar confianza*, y del *crédito personal* del ministro, ¡*rara avis!*!, la de apenas recibirse la mitad de los sueldos; con lo que al fin y al cabo esos empleados *quedarían satisfechos*.

¡Qué tiempos! y ¡qué servidores abnegados!

En esta declaración se veía claramente la razón de la vaguedad del pensamiento ministerial. No era *categorico* en sus palabras, como lo quería el señor Aguiar, pues su verdadero sentir estaba velado. El funcionario pudoroso no se atrevía a declarar que podría pagar el presupuesto ordinario, sino que a eso se aspiraba, como lo deseaba la Cámara, de acuerdo con «la confianza que se inspiraba», y lo que resultaría del propio arreglo y medidas a adoptarse en el futuro. Era, en el fondo, decir que todo deudor que paga acrecienta su crédito. Por eso, al entrar a la interpelación del señor Aguiar, le demostraba que todo lo que importaba la octava parte cedida por el contrato, era la de 12,000, cantidad que no afectaba en mucho el presupuesto a abonarse, pues, sumados esos ocho a los seis mil que quedasen al Gobierno, «vería el señor representante que podrían hacer con seis lo mismo que con diez y ocho». No magnificaba, en la mente del Gobierno, la importancia de sus acciones, sino que, modestamente, aceptaba la parte

que en ello tenía, al referirse a las palabras enaltecedoras de la Comisión de Hacienda. Suponía fundadamente que tres o cuatro meses de espera demostrarían que el aumento de las rentas sería la consecuencia de la buena administración resultante del contrato, mejor sin duda, decía, «que la que tiene hoy día la Aduana; porque el ministro de Hacienda intervendría personalmente; y porque tiene el gusto de decir que todas las personas que forman la sociedad de ese contrato son amigos suyos».

Eran todavía los tiempos patriarcales en que las cosas se hacían en familia, donde todos se conocían, dándose gran importancia al individuo y no a las prendas reales. De ahí que tanto el ministro como Aguiar la alegaran en una cuestión de Estado. Esa confianza en la honradez de los contratantes, de los amigos del ministro, le autorizaban a éste para sostener que «el aumento de las rentas excedería la parte que el Gobierno daba ahora en pago de esas reclamaciones». Era natural suponerlo, porque no solamente se tendría un empleado debidamente retribuido, que trabajaría con ahinco, sino un ojo vigilante, cual el de los propios interesados, para impedir que el desorden continuara y los derechos de aduana no se malversaran. Esto era lo que llevaba al ministro al extremo de declarar sinceramente que «si hubiera seguido el camino de la convención del 4 de enero (1) y si la renta hubiera quedado en manos del Poder Ejecutivo, necesariamente hubiera tenido que rematarla, o enajenarla, aunque más no fuese que por la mitad». Por lo demás, terminaba apelando al tiempo, bien corto, de seis meses de práctica, para decidir del resultado, y que entonces se podrían calcular las ventajas que el Ministerio y el Poder Ejecutivo esperaban obtener de este negocio.

La palabra convincente del señor ministro penetró hondamente en el espíritu del señor Aguiar, «especialmente—decía—con la parte de sus explicaciones en que dice le quedan al Gobierno los recursos para cubrir los gastos ordinarios del servicio público». No creemos que esto lo expresara categóricamente el señor ministro. Él esperaba que así sucedería. ¡Confía! Pero como las manifestaciones eran sinceras, noble el ánimo de los contrincantes, y no había motivos para oponerse al arreglo, se dió por satisfecho el señor Aguiar, y declaró que votaría el proyecto aconsejado por la Comisión de Hacienda.

Se creía agotada la discusión, desde que nadie entraba a rebatir lo expuesto por el doctor Palomeque, el señor ministro de Hacienda y el señor Aguiar, cuando el señor ministro de Gobierno (2) terció en el debate, para sostener, contra lo expuesto por el doctor Palomeque, que la cuestión no era grave ni engorrosa sino sencillísima, según él,

(1) En las páginas siguientes se sabrá lo que era ese arreglo del 4 de enero de 1855.

(2) Ignoro quién lo fuera, no tengo libros en Granada para averiguarlo.

pues la gravedad estaría en el rechazo del contrato por la Cámara. Demostró que el Gobierno no había hecho más que cumplir con su deber al ejecutar las leyes dictadas, trayendo a colación lo ya expuesto anteriormente. Luego, sostuvo, y con fundamento, que lo único a discutir y resolver era si el arreglo era realmente ventajoso o no, si era o no era oneroso para el país. Sobre este punto no creía pudiera haber la menor duda; pues antes al contrario, el arreglo produciría bien al país, desde que reducía inmensamente los derechos pecuniarios de los acreedores. «Que ellos—decía con argumentación ilevantable—habían estipulado que se les daría la cuarta parte de las rentas, y por este nuevo arreglo vienen a recibir sólo la octava parte; que venían a recibirla después de habérseles deducido los gastos de la administración, cuando antes, según el arreglo del año 45, sacaban la cuarta parte del todo, sin la deducción de esos gastos: que esto aliviaría los intereses públicos, por cuanto se ha conseguido una ventaja sobre el arreglo de enero de este año.» Por todo ello insistía en considerar sencilla la cuestión, y que sería de grave trascendencia, y gravísima, si resultase una negativa por parte de la Cámara; «negativa—decía—que absolutamente no esperaba el Gobierno, del celo e interés por el bien del país de que creía animado a los señores representantes» (1).

El doctor Palomeque no perdió el tiempo en contestar la alusión del señor ministro, lo que hubiera hecho victoriosamente, pues lo que él había expresado, con relación a los tres días sucesivos que llevaban discutiendo, era que el asunto tenía «trascendencia», explicando ésta «perfectamente bien la gravedad del asunto». No respondió, porque era hombre que sabía muy bien que no debían desperdiciarse las ocasiones por una pequeña incidencia de vanidad pueril. En efecto, la discusión había llegado al punto álgido. Los ánimos estaban dispuestos a votar. Estaban cansados. Debía aprovecharse la buena impresión causada por las discusiones anteriores, antes que una reacción, natural en los Parlamentos, se operase, o que, dilatada la discusión, llegara otra sesión a la que concurrieran los ilustrados y hábiles oradores Bustamante y Magariños, a quienes, en un principio, había apostrofado el doctor Palomeque, como ya se ha visto. En su consecuencia, mocionó para que se diera por suficientemente discutido el punto, lo que así se hizo, votándose en general. Luego, en la discusión particular, el señor Aguiar indicó la conveniencia de ser bien explícitos en cuanto se refería a la independencia nacional, para no suponerse una ingerencia directa del ministro inglés en nuestra administración. Esto fué claramente explicado por el ministro de Hacienda, no obstante la vaguedad que la propia Comisión de Hacienda veía en el artículo 3.º del Convenio, como lo manifestó su miembro informante, el señor don Luis Magariños. Otro tanto en cuanto a las ob-

(1) Sesión del 19 de abril de 1856 de la Cámara de Representantes.

servaciones hechas por el ministro de Gobierno, quien suponía que la Cámara no tenía que *aprobar* el Convenio, pues el Gobierno había obrado en virtud de una ley que lo autorizaba para ello. El ministro de Gobierno estaba equivocado, y así se lo demostró el doctor Palomeque. Éste manifestó que, como él había expresado precisamente los mismos conceptos del ministro, le tocaba ahora combatirlos. «Que la Cámara—decía—debía haber dicho, desde un principio: «Acútese recibo, y archívese», si no hubiese tenido la base 4.^a que decía: «Se dará posesión de las rentas a la sociedad el día 15 o antes, *si lo aprobase el Cuerpo Legislativo*». Que esa base había hecho que el Gobierno adquiriera seguridad, prestándole su aprobación el Cuerpo Legislativo. Que por eso era que no podía variarse esa palabra, porque para variarse era preciso que se suprimiera la base 4.^a. Ratificado todo esto por el señor don Luis Magariños, el proyecto fué sancionado tal cual la Comisión lo había propuesto, y, pasado al Senado, éste lo aprobó inmediatamente, siendo así posible darle ejecución el 15 de abril, como estaba convenido.

La legislatura de 1856 había puesto una pica en Flandes. La situación se despejaba, porque, no obstante ser sencilla la cuestión, como decía el ministro de Gobierno, era trascendental y de suma gravedad. Lo que sucedía era que los políticos tenían que pasar por las horcas caudinas del momento. La necesidad imponía esa medida, precisamente cuando el Cuerpo Legislativo, y aun el mismo Poder Ejecutivo, habían creído conveniente enajenar la cuarta parte de esas rentas, a pesar de la existencia del Convenio del 45 y de las constantes reclamaciones del ministro inglés. Y esto, sin entrar a recordar cuál había sido la doctrina sostenida en 1853, al respecto, por hombres como Acevedo, Muñoz, Juanicó, etc. En la época actual nadie se atrevería a sostener que un Gobierno extranjero tiene el derecho de intervenir en el reclamo de créditos a favor de personas, que, en el caso, no todas eran de la nacionalidad inglesa. Es verdad que en esta ocasión se alegaba la circunstancia, muy fundamental, de estar ese contrato garantido, desde sus orígenes, por los Gobiernos inglés y francés. Y esta era la causal que se tenía muy en cuenta para acceder a pretensiones, que, al fin, en el fondo, eran justas, porque nadie podía poner en duda la legitimidad de la deuda.

PROGRESOS OPERADOS

Despejado el horizonte, la Cámara se ocupó de los proyectos del señor don Juan J. F. Aguiar sobre creación de dos nuevos juzgados letrados, techo de la bóveda del recinto legislativo y firma de letrado (1); de la renuncia del señor don Francisco Arancho (2), del

(1) Sesiones del 3 y 16 de abril y 11 y 13 de junio de 1856.

(2) Sesiones del 16 y 28 de abril de 1856.



Avelino Lerena

impuesto sobre herencias transversales (1); de la enajenación de tierras destinadas a los legionarios franceses e italianos, de acuerdo con la ley de 10 de mayo de 1843 (2); de la inasistencia de los legisladores (3); de la renuncia del señor Benito Lombardini (4); del retiro de las dietas de las sesiones de representantes emigrados en Buenos Aires (5); de la vigencia del Código Civil confeccionado por el doctor Acevedo (por moción del doctor Bustamante) de las materias comprendidas desde el segundo libro (6); de las hipotecas (7); de la prórroga de seis meses para la instalación del Banco Montevideano (8); de la ley de aduana, presentada por el doctor Palomeque (9); de la concesión a don Juan Greenway para introducir en el país cinco mil o más familias destinadas a colonias agrícolas (10); de la queja del sargento mayor de caballería de línea, don Leandro Gómez, contra el Poder Ejecutivo (11); de la división del Departamento de San José, para formar el de Florida (12); de la enajenación o concesión en enfiteusis de los terrenos de propiedad pública destinados a pastoreo, y de los terrenos que existieran en los denominados de Propios y del Ejido (13); de las loterías públicas, declaradas de propiedad exclusiva del Hospital de Caridad, concediendo dos loterías anuales al Teatro Solís, desde el 1.º de enero de 1857 (14); del proyecto sobre causas de contrabando, presentado por el doctor Palomeque (15); de la ley de papel sellado; del nombramiento del señor don Félix Lizarza para jefe del Registro de Hipotecas (16); de los terrenos a adjudicarse a la sucesión Lavalleja (17); de los límites del puerto de Montevideo (18); de la aprobación del tratado de comercio con los Estados de Zollverein (19), y del impuesto de luces (20).

Pero, entre otros asuntos importantes, tratados durante el año, tendientes a regularizar la situación política, internacional y finan-

(1) Sesiones del 23 de abril y 14 de julio de 1856.

(2) Sesiones del 28 de abril de 1856.

(3) Sesiones del 3 y 10 de mayo de 1856.

(4) Sesiones del 3 de mayo y 11 de junio de 1856.

(5) Sesiones del 19 de mayo y 11 de junio de 1856.

(6) Sesión del 4 de junio de 1856.

(7) Sesiones del 9 y 19 de junio de 1856.

(8) Sesión del 18 de junio de 1856.

(9) Sesiones del 1.º, 9 y 15 de julio de 1856.

(10) Sesión del 2 de julio de 1856.

(11) Sesión del 2 de julio de 1856.

(12) Sesión del 2 de julio de 1856.

(13) Sesión del 7 de julio de 1856.

(14) Sesiones del 7 y 9 de julio de 1856.

(15) Sesión del 11 de julio de 1856.

(16) Sesión del 13 de julio de 1856.

(17) Sesión del 13 de julio de 1856.

(18) Sesión del 13 de julio de 1856.

(19) Sesión del 13 de julio de 1856.

(20) Sesión del 15 de julio de 1856. En el *Cuestionario* del diario *El Siglo* de 1913, no se menciona este asunto de tanto interés.

ciera de la República, se hallaban los referentes a la Sociedad Europea, representada por don Roberto Rowley, para establecer un ferrocarril desde la capital hasta la frontera con el Brasil, cuya concesión duraría noventa años, y demás líneas convenientes para ligar los pueblos del interior con la ciudad de Montevideo; a las relaciones con el Brasil; al establecimiento de colonias agrícolas; a la Contribución Directa; al valizamiento del Uruguay; a la mensura de los terrenos comprendidos en los Departamentos de Montevideo y Canelones, por don Rufino Gurméndez; a los reclamos por perjuicios; a la recompensa nacional a don Joaquín Suárez; a los honores tributados al general Artigas; a la ley de aduana; al presupuesto general de gastos, y a la acuñación de monedas, en todos los cuales se había sentido la influencia del doctor Palomeque, ya como autor de proyectos de ley, ya como luchador desde el asiento legislativo, al cual descendía, con frecuencia, para tomar parte en los debates.

Todos esos proyectos demostraban que el país entraba en una vía de reorganización, que, como entonces se decía, «inspiraba confianza, dada la nueva era» inaugurada. Lo probaba el proyecto aquel de la construcción del ferrocarril al Brasil y a los pueblos interiores de la República. Las fuerzas empezaban a desarrollarse, y era de suponerse que, si el buen juicio dominaba, el país pronto vería el rail cruzando las extensas y despobladas comarcas, para vincularnos a los pueblos vecinos. Desgraciadamente, ese buen juicio no persistiría, y el señor don Roberto Rowley, representante de los capitalistas, veríase obligado a sufrir las consecuencias del desorden. Como era natural, al frente de esa idea de progreso y adelanto, se hallaba el doctor Palomeque, en unión de los señores Aguiar y Vázquez, combatiendo al señor Labandera, que se oponía al pensamiento» (1).

EL MINISTRO BRASILEÑO AMARAL

El Senado había enviado a la Cámara la Minuta de Comunicación sancionada por él, contestando el Mensaje del Poder Ejecutivo. La Comisión Especial se había expedido de conformidad, por cuya razón el doctor Palomeque terció en el debate.

Recordó a la Cámara que el Poder Ejecutivo había pedido al Brasil el retiro del señor Amaral, siendo notorio que, lejos de haberse llenado los deseos del Gobierno, «vió al mismo agente de Su Majestad el emperador en el carácter de ministro y cerca del Gobierno de la República». «Esta circunstancia—decía—establecía una disyuntiva: o el Gobierno oriental tuvo causas legítimas para pedir el retiro del agente imperial, o no las tuvo; si en el primer caso, la dignidad nacional se hallaba menoscabada; si en el segundo, la Cámara necesita

(1) Sesión del 13 de mayo de 1856.

conocer los términos en que el Gobierno de la República ha podido satisfacer al Gabinete imperial, restableciéndose las cosas al estado en que se encontraban antes de aquel pedido».

Por estas consideraciones, «como por el honor de esta patria», proponía se introdujera en la Minuta de Comunicación redactada por el Senado un párrafo en el cual, aludiendo al punto indicado, se pidieran las explicaciones necesarias» (1).

El señor Labandera aceptó la indicación, pero le parecía más conveniente tratarla por separado, a cuyo efecto se nombraría una Comisión Especial. A ello adhirió el señor Aguiar, quien también aceptó la indicación del doctor Palomeque. Su autor tampoco se opuso, y el asunto pasó a una comisión compuesta de los señores Palomeque, Labandera y Aguiar.

La comisión se expidió en un extenso y meditado documento. Empezó diciendo que «cumplía con uno de sus más honrosos deberes que le impone el Código fundamental del Estado, llamando muy particularmente la atención del Poder Ejecutivo sobre el incidente que motiva la presente comunicación» (2). Invocaba «el decoro y la dignidad de la nación»; y al recordar «el decidido interés manifestado por Su Majestad Imperial en la conservación de las buenas relaciones, decía «que la Cámara de Representantes no puede ni debe consentir en un hecho que, pesando sobre su responsabilidad, mancilla dolorosa y cruelmente la dignidad y honra de la República». Veía lastimado el honor nacional, y creía de su deber denunciarlo, no trepidando «en declarar al Poder Ejecutivo, de una manera muy explícita, que *mira con el más profundo pesar la representación del Gobierno de Su Majestad Imperial en la República en la persona de su ministro diplomático, el Excelentísimo señor don José M. do Amaral*». De la mente de la Cámara estaba muy distante «todo espíritu de partido, todo sentimiento de odio y venganza, toda acción que pudiera defraudar y ofender al representante de Su Majestad Imperial». En ello, sólo «aspiraba a la noble pretensión de salvar a la patria de toda nota ignominiosa que pudiera hacerle desmerecer de la consideración que debía inspirar a las naciones cultas y a las generaciones venideras; sólo quería salvar el honor de la patria gravemente comprometida por acontecimientos cuya solución oficial era todavía un misterio para todas las clases del Estado».

«La Cámara de Representantes—decía el doctor Palomeque en esa Minuta de Comunicación por él redactada,—que tanto tiene de que lamentarse en esta honorífica cuestión, no desea, ni puede por lo mismo permanecer sorda y fría espectadora ante la resolución del Poder Ejecutivo de fecha 24 de agosto de 1855, por la que se ordenó

(1) Sesión del 20 de mayo de 1856.

(2) Sesión del 13 de junio de 1856.

al ministro oriental en la corte de Río de Janeiro declarase al Gobierno de Su Majestad Imperial *el cese de la intervención armada y pidiere en consecuencia su retiro, y el retiro de Su Excelencia el señor ministro Amaral, contra quien el Poder Ejecutivo tenía tan justos como dobles motivos de queja*» (1).

No era sólo esta manifestación la que se traía a colación por el doctor Palomeque, sino que, teniendo en cuenta no haber sido posible desatenderse por el Imperio, el aliado de la República Oriental, se robustecía «con tanta más justicia—continuaba exponiendo,—cuanto que por los sucesos políticos que se desarrollaron por medio de una revolución pronunciada el 28 del mismo agosto, puso al Poder Ejecutivo en el caso de protestar en 1.º del siguiente mes de septiembre contra *la conducta inerte y parcial del ministro imperial doctor Amaral, y en consecuencia suspender sus relaciones hasta obtener una satisfacción digna de su Gobierno por infracción de la buena fe con que el de la República aceptó los tratados de alianza con el de Su Majestad Imperial*, cuya protesta, y lo consiguiente a ella, fué oportunamente transcripto por medio de una circular a los agentes extranjeros acreditados debidamente cerca de la República».

Quien así hablaba tenía perfecta razón para conocer los secretos de esos sucesos desgraciados, pues había actuado en ellos, al lado del presidente de entonces, como se ha explicado en páginas anteriores. No podía mirar con indiferencia lo que sucedía, sin que antes se explicara cuáles habían sido «los medios hábiles empleados para dirimir la cuestión internacional que surgía de la resolución de 27 de agosto y 1.º de septiembre, al verse recibido el señor Amaral, en calidad de ministro diplomático, el 22 de noviembre del mismo año, con el más humillante y completo olvido de los antecedentes que marchitan los gloriosos colores de la patria».

Fundado en estos antecedentes, se pedía al Poder Ejecutivo instruyera «muy detallada y circunstanciadamente de las ulterioridades a que necesariamente habían dado mérito las citadas resoluciones de 27 de agosto y 1.º de septiembre.» Y elevando el tono, se afirmaba que de esas ulterioridades nacían «las dudas que asoman envileciendo a la nación, y que la Cámara, en el vivo interés de su honor, quiere y desea ver desvanecidas».

No tenía la intención de hacer un cargo al Poder Ejecutivo, pues conocía que éste no podía tener más responsabilidad que la que moralmente le alcanzara el *statu quo* al 1.º de marzo del año corriente. Lo que sí, creía que aquellos pormenores explicaban «muchas y misteriosas circunstancias al parecer mal encaminadas por el Gobierno imperial, cuyos motivos, a juicio de la Cámara, descubren el fondo de los hechos y la verdad de rudos acontecimientos».

(1) Esto, como lo que va más adelante, está subrayado.

Era enérgica la Minuta de Comunicación. Estaba redactada con todo el calor del alma. El rubor subía al rostro al conocerse aquellos pormenores. Era necesario saber a fondo las causas productoras del hecho denunciado. El Poder Ejecutivo actual tenía que deslindar posiciones, a fin de no hacerse solidario de actos anteriores, afectivos de la dignidad nacional, si eran verídicos. El doctor Palomeque velaba por el lustre del Gobierno al cual tanto había cooperado. Era su obra, y no quería verla mancillada. Por eso procedía con toda independencia de criterio, indicando al Poder Ejecutivo el buen camino a seguirse, para que diera las explicaciones del caso. Nos encontrábamos todavía con los colazos de la maldita revuelta de agosto de 1855.

La Cámara, después de oír el informe oral del doctor Palomeque, sancionó la Minuta, sin alteración alguna. Y, comunicada al Poder Ejecutivo, éste la devolvió haciendo algunas observaciones, las cuales no hemos podido conocer a fondo porque no constan en el Diario de Sesiones (1).

Sin embargo, del dictamen de la Comisión Especial, a la cual fué pasado el Mensaje del Poder Ejecutivo, y de la discusión mantenida, se deducen cuáles fueron los fundamentos alegados por el Poder Ejecutivo al devolverle a la Cámara la Minuta de Comunicación.

Si enérgica era la Minuta, no menos grave era el paso dado por el Poder Ejecutivo. Las cosas tomaban un giro alarmante. La independencia de criterio del doctor Palomeque, alma de este debate, y de este pensamiento, iba a revelarse, lo mismo que la de los legisladores sostenedores de la política nueva proclamada por el Gobierno del 1.º de marzo de 1856.

El doctor Palomeque era consecuente con la política internacional iniciada, pues el Gobierno de Pereyra había declarado que sacudiría la tutela de los vecinos, y en especial la del Imperio del Brasil. Aspirábase a que los Gobiernos amigos fueran neutrales, no ayudando invasiones de revoltosos. Se quería la aplicación de las reglas de buena vecindad, impidiendo la intromisión de los extranjeros en la dirección de la administración pública. La actitud, pues, del doctor Palomeque, seguía esos derroteros.

La Comisión Especial, que ya conocemos, se expidió. Se hizo cargo del argumento de forma, recurso de abogado chicanero, de que la Minuta pasada «carecía de sanción para considerarla una adición o una doble contestación al Mensaje» (2). Contéstabase este especioso argumento suponiendo o una mala inteligencia o una interpretación forzada de las disposiciones constitucionales. Con razón, la Comisión

(1) Como escribimos en Granada (España), no nos es posible revisar los diarios de la época para saber lo que se dijo. (Sesión del 23 de junio de 1856).

(2) Esto se decía porque la Cámara había aceptado la respuesta dada al Mensaje del Poder Ejecutivo, redactada por el Senado, pasada al Gobierno. Creía que ya no podía volverse sobre ello.

sostenía que lo que la Cámara hacía, en el caso, era, en uso de sus atribuciones constitucionales, pedir informes al Poder Ejecutivo sobre un hecho oficial que le había sido sometido : el retiro del señor ministro Amaral. Pudo agregar más : que fuera como adición a la contestación al Mensaje, o no, siempre podía hacerlo la Cámara, desde que no había precepto constitucional que estableciera, no ya la forma o la época de responder al Mensaje, pero ni siquiera la de contestar, discutir, aprobar o reprobar el Mensaje que el Poder Ejecutivo dirige a la Asamblea al abrir sus sesiones ; práctica que, con el andar de los años, ha desaparecido.

En lo que quizá tenía razón el Poder Ejecutivo era en aquello de que el Cuerpo Legislativo carecía de facultad para estar haciendo advertencias o amonestaciones por medio de minutas de comunicación. Pero, aun esto estaba fundado en una práctica parlamentaria muy prudente, cual lo hemos expuesto en otra parte de este libro. A esa práctica recurría la Comisión, con habilidad, recordando que ese procedimiento era viejo, y que el Poder Ejecutivo no había protestado contra él cuando «en 18 de marzo, 15 de abril, y otras, en el corriente período de sus trabajos legislativos», se había usado. «El caso es práctico —se decía,—y siendo muy reciente, no hay lugar a dudas, a no ser que el Poder Ejecutivo quisiera confesar con lealtad y franqueza cuándo y dónde ha estado su error ; si en los dos casos señalados, o en el que motiva estas explicaciones. Pero, aun cuando tal confesión se hiciera, declarando el error en los dos primeros casos, la Cámara de Representantes no podría aceptarlos, porque el artículo 6.º de la Constitución está arriba de todo, y lo que es más, aun está en el raciocinio que el Poder Ejecutivo ha empleado en su nota de devolución, estableciendo que, en el caso de *no ser una adición a la contestación del Mensaje, y si una minuta distinta de la anterior, debería pasar por las dos Cámaras, por ser acto legislativo*, lo que constitucionalmente no es tampoco aplicable».

El error fundamental del Poder Ejecutivo consistía en olvidar que las Cámaras proceden, en esos actos, ejercitando una facultad propia, constitucional, independiente de lo relativo a la formación y sanción de las leyes. Más aún : es una facultad privativa de la de Representantes la de *iniciar* el proceso contra el Poder Ejecutivo, cuya raíz o comienzo puede hacerse por todos los medios que la inteligencia sugiera, ya sea llamando previamente al ministro para pedirle informes, ya sea por medio de una nota. Esto último, quizá sea lo más práctico, para ahorrar tiempo, y no distraer al funcionario de sus atenciones públicas.

Por lo demás, era un desacierto completo el de devolver la nota a una rama de los poderes públicos, a título de considerarla improcedente. Esto es grave, y sólo se hace cuando el documento contiene términos injuriosos e indignos. Cuando no sucede así, y se discute,

como en el caso, sobre la jurisdicción de un poder para entender en un asunto, lo natural y correcto es discutir el derecho de cada uno, conservándose en su poder los escritos remitidos. Devolver una nota es declarar que es indigna o injuriosa; es romper toda relación oficial entre los representantes de la autoridad.

La Comisión, pues, insistía en que la Minuta devuelta no importaba «otra cosa que una interpelación o aviso para que el Poder Ejecutivo responda a las dudas en que está la Cámara de Representantes en lo que dice relación con las causas que han motivado la nueva recepción del señor ministro Amaral». Declaraba asimismo que no quería entrar en otras consideraciones muy oportunas. Se limitaba, decía, «a las ya aducidas como bastantes, para que el Poder Ejecutivo se contraiga a dar las explicaciones que le han sido pedidas en la Minuta de Comunicación fecha 13 del corriente, que remite nuevamente con ese especial y único objeto».

Hacía bien en devolverle la nota devuelta, sin exponer una sola consideración a su respecto. Bastaba su devolución para decirle: eso es inadmisibles para la Cámara. Se la volvía a remitir, sin censurar con palabras lo que censuraba en el hecho.

Y después de esto, creía que las reflexiones alegadas harían «impresión en el ánimo del Poder Ejecutivo, siempre deseoso de manifestar al país su interés por los principios constitucionales». Suponía que «el Poder Ejecutivo, obrando con la lealtad que corresponde en la interpretación de las disposiciones constitucionales, y teniendo en vista—terminaba diciendo—su indeclinable obligación de concurrir al mejor acierto de las Cámaras, por medio de los informes que éstas tuviesen a bien exigir de sus ministros, se apercibirá de que, sea cual fuese el medio por el cual la Cámara de Representantes se lo pidiere, está en el deber constitucional de darlos» (1).

La cuestión era sumamente grave. Se necesitaba mucho valor, nacido de la convicción profunda, para abordarla. Además, ella colocaba al Gobierno en una posición difícil, tanto más cuanto que la provocación de las explicaciones emanaba de un ciudadano insospechable. El doctor Palomeque era el amigo decidido de la nueva administración venida a la vida, quien procedía en todos sus actos de una manera consciente, inspirada en el bienestar del país.

El, que conocía muy bien el estado de las cosas, no podía aspirar a un conflicto con el Imperio del Brasil, pues lo que se necesitaba era mantener las buenas relaciones. Pero, ¿cómo guardar silencio en presencia de lo que el Poder Ejecutivo había hecho público comunicándolo a los representantes de las naciones extranjeras? La dignidad nacional exigía se diera una explicación satisfactoria. Quizá la hubiera, y el doctor Palomeque buscaba la oportunidad decorosa para que el

(1) Sesión del 5 de julio de 1856.

Poder Ejecutivo la comunicara y satisficiera la opinión nacional. Y si no la había, entonces no quedaba más camino que el muy sencillo entre las naciones de declarar al Gobierno amigo que tal persona *ya no es grata*, sin que esto importe una ruptura de relaciones, ni la producción de un conflicto grave. Es, por el contrario, el medio más correcto para evitar disgustos mayores. Por eso lo ponen en práctica todas las naciones civilizadas, llegando algunas, en casos extremos, hasta casar el exequátur y entregar sus pasaportes al ministro.

La Minuta de Comunicación fué sometida a un trámite curioso. No sabemos por qué apareció el ministro de Gobierno en la sesión donde aquélla se discutía. Allí estuvo, para «contestar los fundamentos de la Comisión y sus consideraciones, y sostener las razones de la contestación del Poder Ejecutivo, dada a la anterior Minuta de Comunicación» (1).

El doctor Palomeque descendió de la presidencia, promoviéndose «entonces una sostenida y dilatada discusión que duró más de dos horas y media, y en la que tomaron parte, en pro, el señor Palomeque y el señor Aguiar, y en contra, el señor ministro y el señor Bustamante; este último fundando su oposición, no a que se den las explicaciones solicitadas por la Honorable Cámara, sino por la forma de la redacción de la Minuta en que eran solicitadas».

No pudieron entenderse, por lo que se pasó a cuarto intermedio. Vueltos a la sala, el doctor Palomeque contestó las observaciones del señor Bustamante. Éste propuso entonces que la Comisión retirara la Minuta propuesta, y que el ministro daría las explicaciones pedidas por la Honorable Cámara, ya fuera en ésta o en otra sesión que al efecto se acordara, lo que no fué apoyado. Las cosas habían llegado a ese punto en que no se transa. La Cámara no podía ni debía retirar su nota, después de la actitud del Poder Ejecutivo, al faltarle a los respetos debidos. Por consiguiente, era improcedente la moción del señor Bustamante, por lo que ni siquiera fué apoyada, no tomándose en consideración para discutirla.

En este tren, la Cámara, en presencia del propio ministro, oyó la nueva lectura de la Minuta, después que, por moción del doctor Palomeque, se declaró suficientemente discutida, sancionándose en discusión general.

No esperaba el señor ministro la derrota sufrida. Había creído que su presencia impondría a los legisladores. No fué así; éstos se mantuvieron firmes en sus convicciones. Y al verlo, *se retiró*, entrando en seguida la Cámara a aprobar, en discusión particular, lo que había sancionado en general, frente al ministro así derrotado.

Esta sesión demostró al pueblo que tenía en la Cámara de Representantes dignos y apuestos caballeros, defensores de la dignidad na-

(1) Sesión citada.

cional, y que el doctor Palomeque llevaba adelante las ideas proclamadas de luchar por independizar al país de la influencia del Imperio del Brasil, como asimismo de la Confederación Argentina y Estado de Buenos Aires (1).

EL «LEADER» DEL GOBIERNO, DERROTADO

La personalidad del doctor Palomeque seguía creciendo. Sin embargo, este carácter independiente, pero dentro del programa que él había redactado junto con Alejandro Magariños Cervantes para el nuevo orden de cosas inaugurado, le acarrearía, por el momento, cierto desapego por parte del Gobierno. En efecto, cuando a los pocos días de este y de otros sucesos que narraremos, se reunía la Cámara para nombrar las personas de la Comisión Permanente, a nadie podía ocurrírsele que el doctor Palomeque no fuera el primero de los designados, como factor principal de la situación gubernamental. No es posible suponer que él rechazara semejante puesto, desde donde tanto podría servir a sus ideales. Es muy natural atribuirlo a esta batalla librada contra el ministro brasileño Amaral, cuya influencia se hacía sentir, no por lo que él pudiera valer personalmente, sino porque detrás de él estaba el Imperio del Brasil, del cual no podía así no más prescindirse todavía, y aun después.

A los nueve días de esta batalla, en la que el señor ministro había sido vencido, demostrativo de su carencia de poder en la legislatura, lo que en otro país hubiera causado crisis, renunciando el funcionario, se reunía la Cámara para hacer aquellos nombramientos.

Durante ese corto espacio de tiempo, el gobernante maniobró, viéndose el caso curioso de no aparecer el nombre del *leader* de la mayoría parlamentaria, el doctor Palomeque, entre los designados para formar parte de la Comisión Permanente.

Este es un fenómeno muy natural en el país; el de verse a un ministro vencido no renunciar su cargo, y aparecer, en seguida, con influencia en esa misma Cámara que lo ha maltratado, como aquí sucedía, porque él, a su vez, había sido descomedido con el Cuerpo Legislativo. Y esto, porque los círculos parlamentarios no responden a un centro directivo, con ideas definidas, sino a fracciones personales, donde los intereses particulares deciden de la actitud de los hombres.

Pues bien, a los nueve días de aquella derrota, se veía que el primer nombre que salía triunfante de la urna, era el del doctor don Pedro Bustamante, quien había tenido la habilidad de maniobrar al lado del ministro, en la sesión ya citada, poniéndose frente al *leader*

(1) No conocemos la actitud del Gobierno, ni lo que se expuso al dar las explicaciones, que, seguramente, se dieron. Nada encuentro en el Diario de Sesiones. Hay que tener en cuenta que las sesiones se clausuraban en esos días.

de «la nueva era»: el doctor Palomeque. El doctor Bustamante, defensor de última hora, había sabido atraerse la voluntad ministerial, y su nombre era el primero en destacarse, con catorce votos, mientras el doctor Palomeque sólo obtenía uno.

Los otros señores designados fueron don Román Fernández, don Juan C. Neves, don Patricio Vázquez, don E. Durán, como titulares; y los señores Rodríguez, Labandera, de los Campos, Veira y Acosta como suplentes (1).

Estos nombramientos se hicieron en una sesión a la cual asistieron apenas quince diputados para formar *quorum*, faltando a ella, con aviso, 11, y sin aviso, uno.

Este triunfo sería efímero. El doctor Palomeque tenía mucho lastre político, y ya lo veremos flotando en la superficie, para vencer a sus vencedores de hoy.

Lo que llama la atención es la circunstancia de no haber concurrido con sus elementos a ese acto. Quizá no quiso ahondar la división, dejando al Gobierno en absoluta libertad para resolver los nombramientos.

No fué ésta la única derrota sufrida, sin que sus amigos se dieran cuenta, muchas veces, del daño hecho por ellos mismos a su causa, al dar vueltas rápidas en medio de la marcha hacia el porvenir.

No era posible comprender cómo el *leader* triunfante durante la víspera, pudiera ser vencido, al día siguiente, o en la misma sesión.

Un caso de éstos se produjo cuando se discutió el proyecto de ley presentado por la Comisión de Hacienda, compuesta de los señores Juan Antonio Labandera, José E. de Zás y Juan F. Rodríguez, referente a colonización (2).

La Comisión pretendía subvencionar con 30,000 pesos a las empresas que introdujeran colonos al país. La idea era muy buena, pero era «inoportuna e irrealizable», como lo sostuvo razonablemente el doctor Palomeque. El país no tenía un centésimo; apenas podía marchar, como se ha visto; y se quería gastar aquella suma, que por entonces era elevadísima. ¿De dónde iba a sacarse ese dinero? Bastaría con lo resuelto en el caso de Greenway, a que pronto nos referiremos, donde triunfarian las ideas del doctor Palomeque. Pero, los señores Bustamante, Labandera y Aguiar no opinaban así, si bien el último, en el fondo, se convencía de la pertinencia de las observaciones hechas por el doctor Palomeque, y mocionaba para aplazar «la discusión hasta que la Cámara se cerciorara de la existencia de los medios de atender a los gastos de colonización».

Este pensamiento fué apoyado hasta por el mismo señor Laban-

(1) A esta sesión no concurrió el doctor Palomeque, como tampoco sus amigos Fernández (Eugenio), Luis Magariños, Mateo Magariños, Aguiar, etc. (Sesión del 14 de julio de 1856).

(2) Sesión del 23 de mayo de 1856.

dera, a nombre de la Comisión. Pero, el doctor Palomeque se opuso al aplazamiento, consiguiendo triunfar.

Cualquiera creería que esta victoria importaba que el *leader* sería sostenido en lo que era una consecuencia de lo resuelto ; pero, no sucedió así, dado el terreno movedizo de aquella política parlamentaria. En seguida, la victoria se convertiría en derrota, causando esto una impresión profunda en el espíritu del doctor Palomeque, la que le hizo perder su indiscutible golpe de vista.

En efecto, después de aquel triunfo, se entró en la discusión general, en la que tomó parte el doctor Palomeque. Éste, confiado en el éxito de su primera guerrilla, mocionó para que se diera el punto por suficientemente discutido. Así se hizo ; y, cuando se votó, apareció vencido. La Cámara pasaba a la discusión particular.

Y fué aquí donde perdió su serenidad de espíritu. En ese instante entró al salón don Ramón Fernández, cuyo voto decidía, al parecer, la cuestión a su favor, dándole así nuevo giro al debate. La serenidad de espíritu, perdida ante aquella volubilidad de pensamiento de sus compañeros, lo condujo a sostener un error. Pretendió se procediera a nueva votación, en razón de no haber votado el representante señor Fernández. Como era reglamentario, y de buen sentido, la moción fué rechazada, de acuerdo con los artículos 108 y 109 del Reglamento. Y el doctor Palomeque, molestadó ante aquella derrota, hizo presente a la mesa que *se retiraba* (1).

Abandonó el campo al enemigo, incurriendo en una grave falta. Nunca ha de retirarse el parlamentarista del recinto legislativo, pues no se sabe las sorpresas que se producen durante el debate. Pudo y debió el doctor Palomeque pedir reconsideración de la votación, y aun de lo resuelto, aprovechando así la entrada del diputado ausente, a quien nadie hubiera podido privarle entonces del derecho de tomar parte en el debate y votar. Pudo más : combatir desde su asiento, al discutirse en particular cada uno de los artículos, y así triunfar, haciéndolos rechazar, si es que contaba con el voto del señor Fernández para formar la mayoría.

Pero había perdido la serenidad, y de ahí su actitud.

Sin embargo, la victoria de sus adversarios fué efímera. El proyecto se sancionó en seguida, pero estaba herido de muerte : no había dinero para ello ; era inoportuno e irrealizable, como lo había sostenido el doctor Palomeque.

Sus propios autores se convencieron de ello inmediatamente, por lo que el proyecto quedó en el vacío, no aprobándolo el Senado.

(1) Sesión del 23 de mayo de 1856.

LOS COLONOS DE GREENWAY

En cambio, se presentó el señor Greenway, de quien ya hemos hablado, proponiendo traer al país cinco mil familias.

Por ese proyecto no se pagarían 30,000 pesos o más, sino que el Gobierno contribuiría a la construcción de un puente, pudiendo el proponente establecer ferrocarriles en el distrito de la colonia y en los pueblos circunvecinos. Los colonos estarían exentos del servicio militar, y libres de contribuciones durante seis años. Se eximía del pago de derechos a los utensilios de los colonos, lo mismo que de los de puerto, con más la rebaja de un 25 % para la carga de los mismos. El buque debería traer cuando menos 50 colonos.

Al discutirse este proyecto, el doctor Palomeque terció en el debate, proponiendo enmiendas que fueron aceptadas. En su virtud, se reformó lo relativo a la construcción de puentes, «la que estaría a cargo del proponente, y no del Poder Ejecutivo, con sujeción a las disposiciones de la ley de 4 de junio de 1855».

Otra reforma fué la de aumentar a setenta el número de colonos que debía traer cada buque, hecha por el mismo doctor Palomeque.

Dichas enmiendas, fueron, en un principio, resistidas, pero luego se aceptaron. No tuvo la misma suerte una que más tarde adoptarían los mismos impugnadores, donde se reveló lo efímero del triunfo adquirido al discutirse el anterior proyecto sobre empresas de colonización.

El doctor Palomeque había recuperado su serenidad, después de aquella derrota, e iba ahora a obtener la revancha. Con toda clarovidencia había procedido al declarar que aquel proyecto era inoportuno e impracticable. Los hechos venían a darle la razón, pues el proyecto de Greenway lo evidenciaba. No era concebible que Greenway propusiera lo indicado, a haber existido una ley que premiara con el 6 % (30,000 pesos se calculaban, como hemos visto) a todo aquel que introdujera colonos. La ley relativa a Greenway destruía aquello. De ahí que el doctor Palomeque tomara lo bueno de aquel proyecto, cuyo triunfo le había obligado a *retirarse* del recinto, cual era, su generalidad, y no su exclusivismo, su privilegio, su monopolio, diré así, y propusiera un artículo que dijera que «los beneficios acordados a Greenway serían extensivos a todos aquellos que bajo iguales condiciones ofrecieran transportar colonos a la República».

Este pensamiento general estaba en aquel proyecto triunfante. El doctor Palomeque, pues, como se ve, dejaba lo malo, lo inoportuno, lo irrealizable, y tomaba lo sano, lo hacedero, lo útil para el país.

Y, sin embargo, aquellos que habían sido vencedores entonces, se opusieron ahora, con el señor Vázquez a la cabeza, hasta convencer al

autor de la enmienda «de la inconveniencia de introducir esta enmienda», dice el acta (1).

Sin embargo, se convino en tratarlo por separado ; por lo que a los pocos días la Comisión de Legislación se expedía favorablemente «sobre la moción del doctor Palomeque relativa a la introducción de colonos, ofreciendo informar *in voce*» (2).

En efecto, se sancionó inmediatamente, sin discusión de ningún género ; debiendo hacerse notar que hasta el Poder Ejecutivo se había creído en el caso obligado de terciar en el asunto, remitiendo un proyecto, que, en lo fundamental, contenía lo propuesto por el doctor Palomeque.

El proyecto aprobado declaraba que «los beneficios acordados al señor Greenway, por la ley de 11 de julio último, se harían extensivos a todos los que bajo iguales condiciones propusieren introducir colonos a la República».

¡ Así, el vencido resultó vencedor ! No se pagarían 30,000 pesos a las empresas, sino lo que se diera al señor Greenway, quien, en el caso, no aparecía con privilegio alguno. La ley reunía un requisito que la ennoblecía : su generalidad.

La serenidad de espíritu había recuperado su dominio y obtenido la victoria aconsejada por la razón y la situación del país. No había decaído, pues, la influencia moral del presidente de la Cámara. Por el contrario, la derrota de la víspera había servido para acrecentar su poder moral.

Los legisladores del 56 se daban cuenta del problema que tenían entre manos. No sólo necesitaban valorizar su deuda pública y reconocer los contratos solemnes celebrados con la garantía de las potencias extranjeras, introduciendo el orden en la administración desquiciada por una serie de desaciertos, sino que comprendían que no habría riqueza posible sin poblar el territorio con hombres laboriosos, traídos de otros países, que nos enseñaran a fructificar lo que poseíamos. De ahí que brindaran la tierra y la hospitalidad a empresas particulares, facilitándoles todo cuanto, por el momento, podían darles. Y nada más podían ofrecerles, a fin de cumplirlo, que las facilidades ya indicadas en el proyecto de Greenway, extensivas a todo otro decidido campeón del progreso económico ; mas no lo del 6 % sobre un capital que exigiría un servicio, cuando menos, de 30,000 pesos. Esto fué irrealizable, comprendiéndole así el Poder Ejecutivo, el doctor Palomeque, y aun quienes, no participando de su opinión, en un comienzo lo derrotaron, obligándole a retirarse de la sesión, por no querer sancionar con su presencia algo imposible y perjudicial. Quizá podría decirse que hasta inmoral, por aquello de que quien contrata sa-

(1) Sesión del 1.º de julio de 1856. El proyecto fué reformado en el Senado (sesión del 9 de julio de 1856).

(2) Sesión del 15 de julio de 1856.

biendo que no puede cumplir con lo pactado, practica una acción ilícita, y, como tal, condenable.

La nueva era, pues, seguía adelante en su tarea, defendiendo los intereses morales, cual en el caso del ministro Amaral, como asimismo los intelectuales y materiales. Había, es verdad, que atraer capitales y hombres, pero, eso sí, exhibiendo incólume la dignidad nacional, tantas veces ultrajada, para que los nuevos pobladores supieran cuando menos que venían a un país que les ofrecía con la paz el honor en el gobierno.

HONORES A HOMBRES ILUSTRES

Esa parte moral resplandecía cuando al resurgir la nación a la vida próspera se preocupaba de honrar a sus hombres ilustres. Pensar en mantener vivo el culto de quienes nos precedieron en la vida, enseñándonos a colocar el sentimiento noble de la patria bien arriba, para que no todos puedan tocarlo y mancharlo, como decía el escritor noruego Ibjerbonson, era un deber nacional. La personalidad ilustre de uno de esos seres, ya había sido honrada por acción del Poder Legislativo, a iniciativa, en parte, del doctor Palomeque, en los instantes en que aquella figura brillante besaba la tierra de sus amores para descansar en ella el sueño eterno de la muerte. Nos referimos al general don Melchor Pacheco y Obes.

Ahora, iban a hacer otro tanto con la personalidad tan discutida del general don José G. Artigas, el precursor de la nacionalidad uruguaya.

Fueran cuales fueran los errores de este hombre, lo cierto era que la admiración hacia su persona se conservaba intacta en los hombres de su época, y muy en especial, por estos momentos, entre los hombres de la Defensa de Montevideo. Es sabido que éstos pretendieron arrancarlo a Artigas del Paraguay para traerlo a la ciudad de sus cariños.

Pues bien, en medio de la resurrección nacional, tocó a los hombres de la Defensa, por iniciativa del señor don Encarnación E. Zás, presentar el proyecto rindiendo a los restos del general Artigas los honores que correspondían a su rango militar, al traerse a la tierra nativa (1); los cuales debían depositarse en lugar preferente en el cementerio público.

El señor Zás decía, al fundar su proyecto: «Y ¿quién se ostenta más benemérito y conspicuo, en la historia de nuestra emancipación política, que el virtuoso ciudadano don José Gervasio Artigas, como fundador de la independencia oriental? Si hay alguno, que nos muestre sus títulos. Honrar la memoria de los héroes que supieron rendir

(1) Sesión del 3 de mayo de 1856.

eminentes servicios a la patria, es inspirar por ella el culto y sublime entusiasmo para sostener su gloria y su grandeza a la presente y a las generaciones sucesivas» (1).

De igual índole fué el proyecto presentado por el doctor Palomeque, por el cual se revalidaban las disposiciones del artículo 2.º de la ley de 10 de septiembre de 1850, acordando al abnegado ciudadano don Joaquín Suárez la suma de cincuenta mil pesos (2). El proyecto fué detenidamente fundado por su autor, y pasado a una Comisión Especial compuesta de los señores Palomeque, Bustamante y Rodríguez. Esta Comisión se expidió reconociendo que las virtudes cívicas y los servicios al país prestados por don Joaquín Suárez desde 1810, no quedarían suficientemente recompensados con la suma en cuestión; pero, que la notoria exigüidad del Tesoro Nacional no permitía hacer fuertes desembolsos, por lo que se veía obligada, muy a su pesar, a subordinar los vehementes deseos de su patriotismo al poder imperioso de las circunstancias, modificando la moción en el sentido de declarar benemérito de la patria a don Joaquín Suárez, asignándole una pensión de 3,600 pesos anuales; y mandando que esa ley le fuese presentada en copia autorizada por una comisión compuesta de un senador y dos representantes (3).

Fué con motivo de este proyecto que el señor Zás indicó se rectificara aquello de haberse prestado los servicios desde 1810, pues lo habían sido desde 1811. Entonces el doctor Palomeque descendió de su asiento, para exponer que «los servicios hechos a la revolución americana se cuentan generalmente desde el año 10; pero que al señor Suárez, no sólo debían contárseles esos servicios desde este año, sino desde mucho antes, es decir, desde 1809, en que fué perseguido por el gobernador Elio como uno de los enemigos del poder colonial».

El proyecto fué sancionado, dejándose constancia en el acta, por moción del señor Bustamante, de que la *sanción de este asunto fué unánime*, a la cual replicó el señor Martínez «que con excepción de su voto, porque él lo había dado en contra» (4). Este voto era una consecuencia natural del parentesco del señor Martínez con el señor Suárez.

LA INDEMNIZACIÓN POR PERJUICIOS DE GUERRA

Así, poco a poco, se iba marchando por la vía recta, en un país donde todo había que organizarlo. Aun no se cobraba la contribución directa, no obstante las leyes promulgadas. Ya conocemos cuál había

(1) Véase mi trabajo *Artigas y los pueblos del Rio de la Plata* y mi libro *Orígenes de la diplomacia Argentina*.

(2) Sesión del 28 de marzo.

(3) Sesiones del 18 de junio y 13 de julio de 1856.

(4) Respecto de este asunto puede verse mi trabajo publicado en *La Tribuna Popular* de 1880, y mi conferencia sobre don Joaquín Suárez leída en el Club

sido la causa de ello : la postración general de la nación. Ahora, se volvía a la brecha, porque sin rentas no podía marcharse. Y ahí estaba la Cámara ocupándose de dictar la ley, teniendo en cuenta, no sólo la pobreza de los habitantes, sino los medios deficientes de la administración para recaudar los impuestos. Se carecía de todo : de los empleados y de las oficinas respectivas. De ahí que para ello aun se ocuparan a los jueces de paz, a los alcaldes ordinarios, hombres no siempre preparados ni probos, para efectuar esa operación tan delicada y fundamental.

¡ Así serían los escollos morales y materiales con que la ley tocaría en la práctica !

Por el proyecto sancionado, los capitales pagarían 2 por mil, en el año 1857, debiendo los contribuyentes hacer sus declaraciones ante el juez de paz ; en caso contrario, lo harían dos vecinos, y el dicho funcionario. La época de las declaraciones sería el mes de octubre, quedando encargados de la recaudación, los jueces de paz, a quienes se daba retribuciones, debiendo remitirse su importe al alcalde ordinario, y por éste a la Tesorería. La recaudación se haría por semestres, no pagándola las propiedades que no alcanzaran a 1,000 pesos, las improductivas y las que abonaran cánón enfiteúutico. El producto de esta renta se destinaría exclusivamente a la amortización de la Deuda Consolidada (1).

Todo esto sería ilusorio, pues se carecía en absoluto de los elementos indispensables para dar vida a esta ley, cuya práctica parecía tan sencilla.

Allá por 1859 a 60 comenzaría a practicarse, contando con los beneficios de la paz y el desarraigo de muchos prejuicios, nacidos de la ignorancia y del caudillaje dominantes. Los ministros lucharían con muchas dificultades para implantarla.

De todos modos, los legisladores de 1856 se daban cuenta de su necesidad, y dictaban la ley ; por más que en esta misma se reflejara la conciencia de su impracticabilidad.

En efecto, como si se despreciara esa renta, por su insignificancia, ya que no por la impracticabilidad de su recaudación, la destinaban para valorizar la Deuda Consolidada. ¡ Siempre soñando con recursos artificiales, aunque con la sana intención de mejorar el estado delicado por que se atravesaba !

En efecto, el estado era delicado. Lo evidenciaba la interesante discusión sobre el reclamo de perjuicios.

El Senado, guiado de un propósito altamente moralizador, había resuelto que los reclamantes comparecieran personalmente ante la

Rivera, publicada en *El Día*, allá por los años de 1890 y tantos. Allí está explicada la intervención enérgica del doctor Palomeque en correspondencia inédita de Suarez, Herrera y Obes y el señor Martínez.

(1) Sesiones del 28 de mayo y 9 de julio de 1856.

Junta Clasificadora creada por la ley de 17 de abril del año corriente.

Por su parte, la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes compuesta de los señores Vázquez, Tezanos y Aguiar, aconsejaba su rechazo, fundada en que «era enteramente contrario a la legislación vigente, que permitía—decía,—con demasiada justicia, que a los hombres se les represente en todos sus asuntos por medio de poder en forma».

Al entrarse al debate, el doctor Palomeque descendió de la presidencia, inmediatamente que terminó su discurso el miembro informante, el señor Aguiar.

El acta dice que «combatió extensamente el dictamen de la Comisión, pues él no llenaba la necesidad que se sentía de poner un pronto remedio al abuso, al fraude cometido en una gran parte de los expedientes por indemnización de perjuicios». El doctor Palomeque aceptaba la Minuta de Decreto del Senado, con algunas modificaciones, las cuales se reservaba hacer en la discusión particular, en caso de ser desechado el informe en discusión. «Con motivo de estas observaciones, y muchísimas otras que emitió el orador, sosteniéndolas con varios expedientes—dice el acta,—promoviéndose un fortísimo y caluroso debate, por más de dos horas, en el que tomaron parte, por distintas ocasiones, en pro, los señores Aguiar y Arteaga, y por contra, los señores Palomeque y Bustamante» (1).

No aparecen en el acta los diversos discursos pronunciados por el doctor Palomeque, al discutirse, en ésta, y en las sucesivas sesiones, la grave cuestión de los perjuicios. Esos discursos, sin embargo, se salvaron (2). Son de una gravedad y valentía asombrosas. En ellos, el orador, excitado, olvidándolo todo, en su amor patriótico, y en presencia del robo organizado por abogados, escribanos y procuradores, que recorrían la campaña fraguando expedientes falsos, de perjuicios imaginarios, lanzó nombres, y citó, con pelos y señales, a los autores de tales escándalos. Indescriptible fué la impresión que todo ello causó. El legislador se colocó a la altura de las exigencias morales, exhibiéndose grande en la jornada, y consiguió que la Cámara secundara la acción sensata y correcta del Senado. En su consecuencia, fué desechado el dictamen de la Comisión de Legislación, nombrándose una especial, compuesta de los señores Palomeque, Bustamante, Fernández (Eugenio), Mayobre y Echenique, en substitución de la Comisión de Legislación, para que informara sobre el fondo del asunto, «de acuerdo con lo manifestado por la Cámara».

La Comisión Especial se expidió a la brevedad posible. Aconsejó que la Comisión Examinadora de expedientes no revisase ni despa-

(1) Sesión del 16 de junio de 1856.

(2) Están ampliamente comentados, aunque con las reservas del caso, respetando la voluntad de su autor, en mi estudio *El doctor Estrázulas y El Ambiente Educacional*, publicado en *El Día*, al morir el doctor Estrázulas.

chara expediente alguno que no se hallase representado por persona que lo acreditase con poder judicial legalmente otorgado.

La Comisión Examinadora, siempre que su mayoría lo declarase necesario, podía hacer presentar ante ella al propietario legítimo de los objetos reclamados. Este sería citado por el Poder Ejecutivo dándosele plazos para su comparecencia. Entendía por legítimo propietario el dueño de las cosas u objetos reclamados, sin permitir la intervención de quien hubiese comprado los derechos, los que, sin embargo, se dejaban a salvo.

En este asunto, los adversarios de las ideas expresadas por el doctor Palomeque olvidaron que eran legisladores, es decir, que hacían leyes, a cuyo efecto debían tener en cuenta las necesidades del país para el cual legislaban; que no tenían cortapisa alguna en ese sentido, pudiendo derogar o modificar la legislación existente. Para eso eran legisladores, y no jueces. Estos sí deben declarar que la ley les prohíbe avanzar hacia donde la conciencia de hombre les dictara, pues el legislador no puede decir: hay una ley que me prohíbe proceder de esa manera, desde que su misión es dictarla.

Por consiguiente, era sumamente curiosa la actitud de aquellos diputados al hacer semejante argumento en el dictamen, que, como hemos visto, fué racionalmente desechado por la Cámara. La Comisión Especial, comprendiendo mejor su misión legislativa, no siguió ese camino, sino que, consecuente con lo manifestado por la Cámara, e inspirada en los gritos de la opinión pública, condenatoria de tanto escándalo, iba al fondo de las cosas, y sostenía lo que el Senado proponía fundamentalmente.

Al discutirse el proyecto aconsejado por la Comisión, el señor Aguiar se manifestó disconforme con algunos artículos, siéndole «sensible—decía—tomarlos en consideración, por encontrar en tanta contradicción a los miembros de la Comisión con respecto a las ideas vertidas por ellos en este mismo asunto en la sesión anterior».

Las consideraciones emitidas por el señor Aguiar fueron «contestadas con calor y energía por los señores Bustamante y Palomeque», dice el acta.

Declarada libre la discusión, «se promueve un fortísimo debate en el que hacen uso de la palabra por diversas ocasiones, en pro, los señores Bustamante y Palomeque, y en contra los señores Aguiar y Arteaga», siendo entonces que este último presentó, con toda ironía, indigna de un Parlamento, y de la misma persona del autor, la moción para que «todos los individuos, cualquiera que sea la categoría a que pertenezcan, y sean comprendidos en los robos de expedientes por perjuicios, sean arcabuceados».

Como debe suponerse, esto cayó como una bomba en el campo de los adversarios, motivando un movimiento de ataque enérgico, a punto de mocionarse por el señor Bustamante para que se declarara que

tal «moción es el ridículo de la Cámara». Por su parte, el doctor Palomeque sostuvo, y nos parece que estuvo en lo justo, que el señor Arteaga había faltado al orden, y fuera llamado a él, de acuerdo con el artículo 106 del Reglamento. La Cámara resolvió que no, dando luego, el autor de tan ridícula moción, como decía el señor Bustamante, las explicaciones del caso. Por lo demás, la Cámara, en el hecho, declaró que se había faltado al orden, pues ni siquiera se preocupó de poner en discusión, ni pasar a comisión, la moción del señor Arteaga, la cual no se trató, condenándola al desprecio.

Si eso hubiera sido una moción digna del Cuerpo Legislativo, no habiendo el señor Arteaga «hecho otra cosa sino usar de su derecho proponiendo una moción», como sostuvo el señor Latorre, con toda seguridad se le hubieran hecho los honores de la discusión, pues si no, el presidente de la Cámara habría faltado a su deber al no darle el trámite debido. El silencio que al respecto guardó el autor, no reclamando el ejercicio de su supuesto derecho, sin duda porque nadie lo apoyó, muy distinto a cuando el señor Bustamante mocionó para que se declarara lo del *ridículo*, era la prueba evidente de que estaba fuera de juicio; quedando ello así declarado, implícitamente, por la Cámara, con el asentimiento del señor Arteaga, por más que se hubiera resuelto no hallarse comprendido el caso en el artículo 106 del Reglamento.

Serenados los ánimos en cuarto intermedio, debido a la oportuna intervención del señor Mayobre, al ver que «vuelve a trabarse un caluroso aunque corto debate entre los señores Bustamante y Aguiar», se sancionaron dos de los artículos del proyecto. Y, como la confusión continuara, volvióse a cuarto intermedio, por indicación del señor Aguiar, después del cual el señor Bustamante pidió, en nombre de la Comisión, se aplazara la discusión hasta el día siguiente, «en vista—decía—de muy fuertes y serias observaciones que se han hecho a la Comisión en el cuarto intermedio por algunos miembros de la Cámara y que la Comisión no quiere desatender».

¡El arcabuz del señor Arteaga había reventado, pero para producir el orden! (1).

El proyecto, sin embargo, no se consideró en la sesión siguiente, por más que el doctor Palomeque mocionó para que se tratara «con preferencia a cualquier otro asunto», sin olvidar, decía, la ley de presupuesto, también de carácter muy urgente.

Después de una larga discusión, en la que tomaron parte los señores Bustamante, Veira, Latorre, Arteaga, Magariños (Luis) y Palomeque, el proyecto fué sancionado, con diversos artículos nuevos; pero quedando incólume el pensamiento fundamental de constituir la Comisión Examinadora en las condiciones y con las facultades de de-

(1) En esta sesión fué donde el doctor Palomeque presentó su extenso y meditado proyecto sobre la Aduana, que vino a ser la ley vigente.

clarar inutilizados los expedientes que, a su juicio, se hallaren en ese caso, previo llamado a sus supuestos o verdaderos dueños (1).

El señor don Luis Magariños tuvo una idea feliz al afirmar que «el proyecto que acababa de sancionarse no era otra cosa, a su juicio, que la reglamentación de la ley de 17 de abril último». Era muy cierto. Lo que acababa de resolverse estaba basado en la inmoralidad revelada, que era necesario arrancarla de cuajo. A esa obra moralizadora todos habían contribuido, dejando la legislatura del 56 una estela de luz en la historia parlamentaria y política de la nación, digna de recuerdo imperecedero. Tuvo el valor de afrontar la lucha y buscar el remedio al mal. Lo hizo con toda resolución, destacándose en esa jornada, por su valentía y conocimiento perfecto de los hechos, el doctor Palomeque, a quien el caudillaje de Cerro Largo, dirigido y aconsejado por un círculo de letrados de la capital, como lo veremos oportunamente, nunca le perdonaría la sanción de una ley que echaba por tierra tantas esperanzas de riqueza fundadas en la ruina del erario público. Ya veremos cómo se diría por ese caudillaje, que el doctor Palomeque había negociado con la patria.

Por lo demás, el señor don Luis Magariños cerró la sesión, después de haber intervenido, con acierto, en el debate, proponiendo algo muy práctico, cual era, que «de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la ley de 14 de julio de 1853, la comisión revisadora de los expedientes por perjuicios procedería a la revisión de los que en virtud de la ley de 4 de julio de 1854 hayan sido convertidos» (2).

Esto era completar la obra, por lo que el proyecto fué pasado a la misma Comisión Especial que había entendido en el que acababa de sancionarse.

Los legisladores habían hecho cuanto creían práctico para contener la ola de la inmoralidad, pero la argucia humana acechaba, e inventaría los recursos para continuar en su obra destructora. Aun sería indispensable, para poner orden en ese laberinto, la intervención legislativa en la cuestión de los perjuicios iniciada a raíz de la conclusión de la guerra en 1851, y continuada por todas las legislaturas (3).

La experiencia demostró en seguida cuán necesario era admitir la personería de los hijos por los padres, y viceversa, como lo dicta el buen sentido, y así reconocido desde los orígenes de la legislación. Asimismo resultó la necesidad de admitir prueba supletoria a los reclamantes, cuando alegaren no poder exhibir los títulos de propiedad, o contrato de arrendamiento de que hablaba el artículo 1.º de la ley

(1) Sesión del 20 de junio de 1856.

(2) Sesión del 20 de junio de 1856.

(3) La Cámara no se conformó con las variaciones hechas, y se llevó el asunto a la Asamblea. Ignoro lo discutido, pues carezco del libro de actas de la Asamblea de 1856 y 1857. (Sesión del 26 de junio de 1856, y 13 de julio del mismo).

de 29 de julio último, por causa que creyese «atendible la comisión creada por la ley de 15 de abril próximo pasado, previa vista fiscal, y como la considerara de justicia».

Por último, se ampliaron las facultades de la Comisión, para resolver en todos los casos en que la ley no fuera expresa y terminante, admitiendo los justificativos o pruebas necesarios (1).

Hasta aquí los esfuerzos de la legislatura del 56 en la magna cuestión de los perjuicios. Veremos muy pronto las sorpresas que encerraban las leyes dictadas con tanta buena fe y con amor al terruño.

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 1857

Mientras tanto, el Poder Ejecutivo daba a conocer el estado de la Hacienda pública, para que se supiera el abismo adonde se iba, y lo supieran los legisladores al ocuparse del presupuesto general de gastos (2).

En efecto, la Cámara se ocupó, en seguida, de acuerdo con la moción del doctor Palomeque, de la ley de las leyes. La intervención de este legislador en la discusión del presupuesto se hizo ver desde un principio. Ni un momento permaneció en la presidencia, pues allí estuvo ilustrando la cuestión, dados sus conocimientos de la administración pública. Así era que mocionaba para que se incluyera en el presupuesto la suma de 342 pesos para manutención de caballos, en el capítulo referente a la presidencia de la República, la cual sólo costaba 12,180, incluyendo el presidente (6,000 pesos), dos edecanes, un conserje y un portero. La Cámara no quiso dar para caballos, como diciendo: el presidente es rico, que se los costee de su peculio propio. Y así lo hizo, porque tales eran los tiempos, y porque el señor Pereyra era muy generoso, aunque no así su señora, de quien se cuentan anécdotas muy curiosas. Se dice, por ejemplo, que cuando el presidente mandaba una onza de oro de regalo al jefe de la banda de música que había ido a saludarle, la señora salía por una puerta traviesa y quitaba al emisario la onza, dándole una moneda de valor ínfimo en su lugar.

Si bien el señor Palomeque fué vencido en lo de los caballos, no sucedió otro tanto cuando sostuvo la necesidad de colocar un oficial 2.º, con 900 pesos, en el ministerio de Relaciones Exteriores. Lo apoyaron los señores Bustamante y Vázquez, lo mismo que el señor ministro, contra la oposición del señor Labandera; siendo sancionada la enmienda.

Igual éxito obtuvo cuando al discutirse el presupuesto de policía, cuyo mecanismo conocía al dedillo, indicó la necesidad de incluir un Receptor con 1,000 pesos, una casa de vacuna con 600, el aumento

(1) Sesión del 14 de julio de 1856.

(2) Sesión del 30 de junio de 1856.

de 600 pesos más a la limpieza pública, la disminución de uno de los dos peones del cementerio de la Unión, y la reducción a la mitad de la dotación con que aparecía el carro fúnebre (1).

Al tratarse las partidas relativas a la Universidad «suscítase un sostenido debate entre el señor Bustamante, que quería se borrasen las partidas referentes a las cátedras científicas, y el señor Palomeque, que las sostenía». Luego se generalizó la discusión, tomando parte en ella el ministro, Neves y Labandera. El ministro sostuvo el restablecimiento de la cátedra de Cánones y Teología, suprimida por la Comisión de Hacienda. El señor Neves se opuso a las cátedras de Medicina y Cirugía, «por encontrar imposibilidades para su establecimiento, y propuso, en su lugar, dos aulas, una de Anatomía y otra de Fisiología Médica». El resultado fué el rechazo de las cátedras de Cánones y de Anatomía y Fisiología médicas.

Por lo demás, cuando se llegó a la partida *Gastos Generales*, se aumentaron, de acuerdo con lo indicado por el doctor Palomeque y el ministro, incluyéndose 1,000 pesos para refacción del templo de San Francisco (2).

Es del caso hacer notar que fué durante la discusión de este presupuesto que se resolvió que los actuarios no tuvieran sueldo, siendo de su peculio los proventos de las escribanías. El doctor Palomeque, que fué quien así lo propuso, daba por razón que en el Senado se había sancionado un proyecto, por el cual se mandaban arrendar todas las escribanías de los juzgados ordinarios; que dicho proyecto había pasado a la Cámara y estaba en la Comisión respectiva, por cuyo motivo creía que debían suprimirse las partidas asignadas para sueldos de dichos escribanos (3).

Sancionado el presupuesto, resultó que se destinaban : a) a la Sociedad del 48, para la extinción de su crédito importante 1.091,378 pesos, la suma de 153,543 pesos (octava parte de la renta aduanera); b) para los intereses del 3 % anual de la Deuda exigible y amortización, 72,000 pesos; c) para la amortización de la Deuda Consolidada, 120,000; d) y por intereses y amortización de la Deuda Gounouilhau, 48,000 (4).

El cálculo de recursos alcanzaba a 1.647,000 pesos.

¡Y con tan pequeño presupuesto, apenas si el país podía marchar! Pero, su propia vitalidad, y la honradez de los administradores públicos de la época, y de los que le seguirían, salvarían las dificultades, llegándose a solucionar todos los inconvenientes nacidos de las malas pasiones. Día llegaría en que en la Caja del Estado habría un ¡superavit!, el mismo que la anarquía se tragaría.

(1) Sesión del 21 de junio de 1856.

(2) Sesión del 25 de junio de 1856.

(3) Sesión del 26 de junio de 1856.

(4) Sesión del 30 de junio de 1856.

Pero, ¿era verdad que el país tuviera los recursos mencionados en el Presupuesto?

Desgraciadamente no lo era. Esto aparecía evidente del estado de la Hacienda pública a que nos hemos referido, presentado por el Poder Ejecutivo, por lo que, al discutirse el proyecto «Adición al Presupuesto General de Gastos», presentado, con carácter de urgencia, para ser tratado en una de las últimas sesiones de ese período legislativo, por el señor don Luis Magariños, el señor Labandera, en su informe oral, nos declaraba que era necesario sancionar el proyecto aludido para así «proveer al Poder Ejecutivo de una autorización que le habilitase a cubrir de alguna manera el déficit que tenía que dejar el sancionado para el año próximo, pues era sabido que éste era casi el doble del cálculo de recursos».

El dicho proyecto tendía, según el señor Labandera, a «aminorarse de este modo el déficit del presupuesto mencionado».

No podía pedirse una revelación más sincera, elocuente y brutal.

Pero, aunque se sostuviera que el pensamiento del señor Luis Magariños importaba cerrar la puerta al mal, la Cámara, que tenía fe en la fuerza reproductiva del país, a no sucederse acontecimientos desgraciados, dijo, con fe: no debe sancionarse tal ley. Y en efecto, el proyecto, que no era sino una reproducción de lo hecho en los presupuestos anteriores, fué rechazado, después que el señor representante López, que, por primera vez hablaba en la Cámara, y por dos veces en esta sesión, nos dijo que si el Poder Ejecutivo hubiese necesitado del contenido de la moción lo hubiera pedido en oportunidad, y no en los momentos en que se quería que la Cámara se ocupase de ello» (1).

Por el proyecto rechazado, se autorizaba al Poder Ejecutivo para hacer las economías y reducciones que creyera convenientes, como asimismo para facilitarse por medio de empréstitos los recursos necesarios para llenar el déficit; debiendo el Poder Ejecutivo dar cuenta del uso que hiciera de esa autorización. El señor López no quería que la Cámara sancionara tales autorizaciones, porque el Poder Ejecutivo no lo había pedido en oportunidad. Esto era coartarse sus facultades la propia Cámara, la cual, sin embargo, con la visión segura del porvenir, dijo que no, a la espera de que el Poder Ejecutivo golpeará las puertas y exclamara: ¡No hay recursos, necesito autorización para buscarlos!

ACUÑACIÓN DE MONEDAS

Se creía allanar el camino con aquel célebre Banco Montevideano de don Fernando Menck, a quien se le prorrogaba el término para su instalación, lo que era observado por el Poder Ejecutivo (2). De igual

(1) Sesión del 15 de julio de 1856.

(2) Sesiones del 19 y 30 de junio de 1856.

carácter, a fin de obtener economías, era el pensamiento del señor Bustamante para que el empleo de comisario de policía fuera desempeñado por oficiales del Estado Mayor Pasivo (1), y los muy fundamentales relativos a la acuñación de monedas, presentados por el doctor Palomeque, de los cuales conviene dar una idea completa (2).

Es de lamentarse que en el Diario de Sesiones no se encuentre el discurso que el autor de estos últimos proyectos pronunció para fundarlos, a fin de ilustrar el asunto.

Dichos proyectos tendían a adicionar la ley de 15 de julio de 1854, sobre acuñación de monedas de oro y plata.

El proyecto fué estudiado inmediatamente por la Comisión de Hacienda, como que era cuestión ya conocida (sesión del 7 de julio de 1856). En su consecuencia, el señor Arteaga mocionó para que se considerase sobre tablas, «siendo asunto de fácil resolución». Al oír esto, el señor presidente, que era el autor de los proyectos, manifestó que como «la orden del día había concluido, proponía pasar a cuarto intermedio».

Fué hábil, pues de esa manera discutía en antesalas lo que conviniere, si es que había alguna duda, y sabía cuál sería, más o menos, la suerte reservada a sus proyectos, para, según ella, abandonar o no la presidencia a fin de defender sus ideas.

El resultado fué, que *a los siete minutos* volvían a la sala los señores diputados, prueba concluyente de que las cosas marchaban bien, y la Comisión de Hacienda se expedía en cuatro líneas, diciendo que informaría *in voce*.

En efecto, el señor Labandera informó verbalmente sobre ellos, fundando su informe en «la conveniencia que había de facilitar los cambios menores de la plaza».

Nada más dice el acta; nadie hizo uso de la palabra, y los artículos de los proyectos «se votaron uno por uno, y fueron aprobados en general» y particular.

¿Qué decían esos proyectos?

Eran tres los proyectos. Por el primero, se autorizaba al Poder Ejecutivo, mientras no fuera posible la ejecución del artículo 1.º de la ley de 15 de julio de 1854, para acuñar, fuera de la República, monedas de oro de 16, 8, 4 y 2 pesos fuertes. La ley, peso y tipo de esas monedas serían los establecidos en la referida ley, debiendo el Poder Ejecutivo designar la proporción que debían guardar entre sí las cantidades a acuñarse de cada especie de moneda, y dictar las medidas necesarias para comprobar la ley y peso de las monedas que se introdujeran en la República. Otro tanto se mandaba en el segundo proyecto respecto a las monedas de plata del valor de $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{8}$ de pesos fuertes. Y por el tercero, se resolvía pasar al Poder Ejecutivo la solicitud de

(1) Sesión del 26 de junio de 1856.

(2) Sesión del 26 de junio de 1856.

don Juan Gard y C.^{ía} para que contratara la acuñación de 60,000 pesos en cobre, fuera de la República, debiendo el tipo de la moneda ser el establecido por la ley de 14 de junio de 1839, y el peso, el que detallaba la del 15 de julio de 1854.

Estos tres proyectos, tan importantes para el país, fueron sancionados a tambor batiente (1). La ley de 1854 iba al fin a cumplirse, facilitándose el cambio en la vida comercial. Esa ley llama la atención del extranjero, pues no poseyéndose, hasta ahora, ninguna moneda de oro, en circulación, nuestro oro es, sin embargo, considerado el más caro del mundo. Esto, en un principio, preocupa al extraño, pero una vez en conocimiento de las leyes mencionadas de 1839, 1854 y 1856, toda obscuridad desaparece.

Oímos una vez, en Buenos Aires, al célebre orador italiano Enrique Ferri, decir, con asombro: «*ese país tan chico*, donde tantas cosas monumentales se observan, hasta en su oro, que es el más caro del mundo, lo que me preocupa, y tengo que estudiar». Le oíamos, y estábamos a punto de gritarle desde nuestro asiento, que el secreto se hablaba en las leyes citadas, en el peso, tipo y ley de la moneda, por contener el quilate más rico de todas las existentes. Por eso, le hubiéramos dicho, la libra esterlina vale 4'70 de Montevideo, que viene a ser 5'00 de Buenos Aires (2). ¡Por eso, aquel país *a oro*, nunca ha querido entrar por el camino del papel! El comercio es sólido, y lo ha rechazado cada vez que ha pretendido introducirse, y se ha introducido, causando ello males incalculables. Es digna de recuerdo la época terrible del 75, en que la República fué invadida por el papel, después del atentado de la soldadesca al asesinar a los ciudadanos y deportar a los sobrevivientes, colocándose ella, con hombres salidos de los antrós del crimen, en el sillón reservado al talento y a la virtud. Ese papel llegó a valer lo que el *asignado* en Francia (3).

RÉGIMEN DE ADUANAS

La legislatura del 56 había abordado, como se ve, en cinco meses escasos, los más arduos problemas del país, y lo había hecho con patriotismo e ilustración. Ahora sólo le quedaba alguno que otro detalle, como el de la facultad del Senado para aplazar el proyecto sobre impuestos departamentales hasta el período del año próximo (4).

La Cámara sostenía que esa resolución no estaba conforme con el artículo 60 de la Constitución, al privarle a aquélla de la facultad acor-

(1) Sesión del 7 de julio de 1856.

(2) Para mejor inteligencia, véanse las leyes del 39 y del 54, como asimismo las dictadas con posterioridad al 56.

(3) Al ilustre Salvador Rueda le oíamos hablar, en Granada, en 1913 (agosto 18), lo mismo que a Ferri.

(4) Sesión del 1.º de julio de 1856.

dada por el artículo 67, por lo que devolvía al Senado el proyecto de impuestos departamentales.

Asimismo sancionaba el proyecto del doctor Palomeque sobre el contrabando, mandando que estas causas se juzgaran por un tribunal compuesto del fiscal general, el colector, dos comerciantes sacados a la suerte de una lista formada por el Tribunal Consular, y el juez de Hacienda en los casos de empate (1).

Despachaba el relativo al nombramiento del señor don Félix de Lizarza para jefe del Registro de Hipotecas, y el correspondiente a aduanas, ya mencionados anteriormente (2).

Es sumamente conveniente dar a conocer lo que era este último proyecto. Contenía 35 artículos, divididos en siete capítulos, denominados: De la importación, De la exportación, Del trasbordo o reembarco, De los puertos habilitados y depósitos, Receptorías y subreceptorías, Del almacenaje y eslingaje, y Disposiciones generales.

El título de las materias y la extensión del proyecto revelaban la labor del autor, quien no se asustaba ante ningún trabajo útil y necesario para el país. La Comisión Especial de Hacienda, compuesta, para el caso, del autor y de los señores Vázquez, Bustamante, Arteaga y Veira, se expidió favorablemente, sin aconsejar modificación alguna.

Había «examinado el proyecto con toda la atención posible, y con todo el interés que el asunto demandaba, encontrándolo aceptable».

Entre otras razones, exponía «que la constante y triste aunque elocuente experiencia de los hechos había demostrado que el alza exorbitante de los derechos presentaba el más bello incentivo al contrabando, y que, muy en breve, nuestra aduana no produciría otra cosa que el más completo alejamiento del comercio, limitando las entradas a nuestro solo y preciso consumo». «Es una verdad—decía—que nadie se atreve ya a negar, que, cuanto mayores son las franquicias y menores las trabas aduaneras, mayores son también las ventajas que la Hacienda pública reporta, por la sencilla razón de que el comercio, fiel apreciador de estos beneficios, por su verdadero valor, afluye más donde mejor se lo presentan. Era tiempo, pues, de sacudir esta pesada carga, impuesta por una práctica perniciosa y estacionaria, cuando no retrógrada, para afiliarnos a la marcha y cultura de los pueblos en que imperan las ideas progresistas y elevadas, mostrando así al mundo todo que, si la República Oriental del Uruguay no va a la vanguardia de las naciones que marchan bajo la saludable influencia de las ideas que predominan en este siglo, no es tampoco la que cierra la marcha».

La Comisión Especial, pues, encontraba en el proyecto de ley del doctor Palomeque, perfectamente armonizadas las franquicias ilimitadas que acordaba al comercio con la baja de los derechos, abogando por su sanción. Por el proyecto eran libres de todo derecho las máqui-

(1) Sesión del 9 de julio de 1856.

(2) Sesión del 11 de julio de 1856.

nas aplicables a la agricultura y a la industria ; las imprentas y útiles de su exclusivo uso ; libros impresos, mapas y globos geográficos ; instrumentos de ciencias ; carbón fósil ; cáscaras para curtir ; cenizas no beneficiadas, duelas y arcos de madera, los cueros al pelo, secos o salados, de novillo y vaca, de caballos, carneros, y demás pieles en general, no preparados ; sebo, grasa, lana, cerda, astas y demás productos animales, llamados del país ; la sal común ; oro, plata acuñada, en chafalonía ; y los animales vivos para el fomento de la industria o mejoras de las razas del país (1).

Esto da una idea de la importancia del proyecto, a la cual se unía la rebaja en el pago de los derechos. Debido a ello, el señor ministro de Hacienda terció en el debate, para apoyarlo, aunque con algunas ligeras modificaciones.

Sin embargo, hubo un impugnador, el señor Labandera, quien sostuvo que era inconveniente en esos momentos reformar la ley existente, por no ser aparentes las circunstancias del país.

Todo ello fué combatido por el doctor Bustamante, miembro informante de la Comisión Especial ; y, como el señor Labandera fuera contrariado al no declararse libre la discusión, se retiró, manifestando hallarse indispuerto. Así desapareció de la arena el único adversario, siendo el proyecto sancionado con las ligeras modificaciones hechas por el doctor Bustamante, de acuerdo con el señor ministro.

La tendencia liberal de esta ley habla muy a favor de su autor y de sus sostenedores. En ella se colocaba una base sólida para impedir los desastrosos efectos, no sólo del contrabando, sino de la carestía de la vida. A continuar el país en paz, quizá la doctrina hubiera tenido su amplio desarrollo ; pero, la guerra todo lo arrasaría, viéndose los Gobiernos en el caso de recurrir al aumento de los derechos aduaneros para poder subsistir la administración pública.

IMPUESTO DE LUCES

Y, por último, las ciudades y pueblos de la República necesitaban de la luz, que, como el vehículo, son el signo en que se reconoce la civilización de una sociedad. Era necesario que la antorcha entrara por los confines del país, en la seguridad de que no acontecería lo que en Madrid, durante el reinado de Carlos III, con el movimiento sedicioso conocido bajo el nombre de Esquilache.

En efecto, la Cámara se ocupó del proyecto de impuesto de luces, remitido por el Poder Ejecutivo.

Hubo su oposición, pues lo contrarió, desde el primer momento, el señor don Carlos Víctor López, diputado por Montevideo, una personalidad parlamentaria, sin reflejos intelectuales, a lo menos en el

(1) Sesión del 12 de julio de 1856.

recinto legislativo, que luego desaparece del escenario, sin que hayamos podido conocer su vida pública. Primero sostuvo que era un asunto grave, por lo que no podía tratarse sobre tablas (1); pero, luego «se opuso a su consideración, porque creía que en los últimos momentos que restaban para la clausura de las sesiones del Cuerpo Legislativo no eran los que en la Cámara debía ocuparse de impuestos como el que se presentaba». Además, se oponía también, porque, comprendiendo él a las casas de negocio, «a las que se hacía pagar hoy—decía—tres contribuciones, no podía estar por él, por cuya virtud le negaría su voto, a no ser que el impuesto sólo comprendiese a las casas que no fuesen de negocio».

El señor Labandera contestó, fundándose en las necesidades y penurias del Estado, y en que, si se había votado un presupuesto de gastos para el año próximo, era necesario dar los recursos con que había de hacerse efectivo su cumplimiento.

El proyecto fué sancionado, después de una discusión en que tomaron parte los señores Bustamante, Neves y Labandera. El segundo, propuso se rebajara el impuesto a la mitad de lo indicado en el proyecto, pero, empatada la votación, por tres veces, el doctor Palomeque resolvió por la afirmativa, bajando luego de la presidencia para proponer que el impuesto se pagara por los inquilinos, siendo de cuenta de los propietarios, lo que fué sancionado.

El impuesto distinguía los pisos de las casas y los de negocio, exceptuándose las que no fuesen de material, salvo que tuvieran algún giro sujeto a la ley de patentes; como asimismo las fincas que estuviesen desocupadas. El impuesto para casas situadas en el Cordón, Aguada y demás fuera de la capital, quedaba reducido a la mitad (2).

REPARACIÓN JUSTA

Por último, correspondió a la legislatura del 56 la sanción de una ley de reparación histórica, justa e incontrovertible, cual la de mandar se entregaran a las viudas de los «Treinta y Tres Orientales» los terrenos mandados adjudicar en 1838.

Al héroe de esa jornada se le habían secuestrado sus bienes en 1832. La ley del 38 mandó reparar este error, ordenando se le entregaran campos del Estado, pero éstos eran de propiedad particular o litigiosos. La viuda, que estaba en la miseria, reclamó del Gobierno, y éste, en presencia de la ley del 53, que prohibía la enajenación de los bienes públicos, se dirigió al Cuerpo Legislativo, para que resolviera el caso. El Cuerpo Legislativo, colocándose a la altura debida, reparó el

(1) Sesiones del 14 y 15 de julio de 1856.

(2) Más adelante veremos lo que proyectó el doctor Palomeque como jefe político en Cerro Largo.

mal, y declaró que el Poder Ejecutivo dispusiera de la propiedad pública para cumplir el compromiso contraído ante el país.

La reparación histórica fué un hecho, a pesar de cierta oposición franciscana hecha por el doctor Bustamante (1).

De esta manera clausuraba sus sesiones la Cámara, destacándose en ella la personalidad del doctor Palomeque y la de sus dignos compañeros de causa, en la era nueva inaugurada por el Gobierno de don Gabriel Antonio Pereyra. No podía pedirse mayor esfuerzo. ¡Bajo los pliegues de la bandera nacional cabían todos los orientales!

Vamos ahora a seguirlos en su jornada, hasta llegar a los luctuosos sucesos en los campos de Quinteros, que tan explotados fueron por los hombres de pasiones bravías, y en que se puso a prueba la energía y las convicciones del doctor Palomeque, a quien nada ni nadie le arredró en su marcha hacia el porvenir, en prosecución de sus altos ideales.

LA CÁMARA EN 1857

La personalidad había descollado. Los elementos de la Cámara se habían penetrado de lo que valía el ciudadano, quien, en el desempeño de sus funciones, nunca reveló parcialidad ni animadversión, dando a cada uno el lugar que le correspondía en las comisiones y en los debates. No sorprende, pues, que al incorporarse a la Cámara el hijo del presidente de la República, don Julio C. Pereyra, se prescindiera de éste y se designara nuevamente al doctor Palomeque para continuar dirigiendo las sesiones (2). No quiere esto decir que la reelección fuera por unanimidad. No; el elemento presidido por el doctor Bustamante, que siempre combatiría al doctor Palomeque, atacó su reelección, pero fué vencido, no obstante levantar la candidatura del bueno del señor Encarnación E. Zás. Otro tanto sucedió con el señor vicepresidente 1.º. Salió vencedor el señor Conde, contra el señor Zás; pero luego, al votarse el vice 2.º, resultó triunfante el señor Zás, no por el voto de los amigos del doctor Bustamante, sino por el de los del doctor Palomeque.

Debe dejarse constancia de un hecho: el doctor don Mateo Magariños había vivido ausente durante la mayor parte del tiempo del año anterior, pero ahora, al comenzar el período del 57, aparecía en la Cámara, cooperando a la política gubernamental. Por eso había dado su voto por el doctor Palomeque, su amigo y pariente.

El doctor Magariños aparece aquí, por primera vez, con el agregado de Cervantes, presentando dos interesantes proyectos. Otro tanto hacía el doctor Palomeque.

(1) Sesión del 13 de julio de 1856. Más adelante, en 1857, se verá lo que se hizo con esta ley. Otro tanto al exponer la interesante discusión que en 1858 y 1859 sostuvo el doctor Palomeque con el doctor Juanicó y otros.

(2) Sesión del 13 de febrero de 1857. Zás obtuvo 11 votos y Palomeque 13.

Ambos eran dos personalidades que se completaban, por lo que marcharon unidos, hasta que los sucesos los separaron para no encontrarse sino en el terreno de la amistad y de la familia.

El doctor Magariños Cervantes sostenía la necesidad de una contribución extraordinaria del 1 % sobre los capitales, a los fines de la ley de 14 de julio de 1853. Si su producto no alcanzare a la suma correspondiente a cada reformado, el Poder Ejecutivo dispondría, para cubrirla, de títulos de deuda denominada de *Reformas*, los cuales no ganarían interés, siendo amortizados con un fondo de cinco mil pesos mensuales. Para la recaudación y distribución de esta renta extraordinaria se constituiría una comisión de un senador y dos representantes, los que, asociados con otros que nombraría el Poder Ejecutivo, establecería sucursales en los Departamentos al solo objeto de hacer efectiva la percepción de la renta.

El otro proyecto del doctor Magariños Cervantes era el de habilitar como puertos francos, abiertos al tráfico y navegación de todos los buques mercantes, cualquiera que fuera su bandera, Maldonado, Colonia, Palmira, Paysandú y Salto.

Los dos proyectos eran buenos, pero muy en especial el segundo, que perseguía el propósito ya enunciado, del cual nos hemos ocupado en páginas anteriores al estudiar el pensamiento del doctor Palomeque y de la Comisión de Hacienda sobre las causas de contrabando.

Por su parte, el doctor Palomeque descendía de la presidencia y presentaba otros dos proyectos, muy prácticos y reclamados ya por las necesidades de la nación. El uno tendía a que los Bancos particulares funcionaran libremente en toda la República, pudiendo usar de su crédito del modo y en la forma que tuvieran más conveniente para sus intereses. Lo que sí, no podrían emitir billetes de circulación menores de veinte pesos, sin autorización del Cuerpo Legislativo, considerándose fallido todo establecimiento que no pagara uno solo de sus billetes. El otro proyecto tendía a abolir el uso del pasaporte para dentro y fuera de la República, declarándose derogada la obligación impuesta a los transeuntes de presentarse a la policía.

De esta manera se iniciaban las faenas legislativas por los dos *leaders* de la Cámara de Representantes.

La Comisión de Hacienda se expidió favorablemente en el proyecto sobre renta extraordinaria para hacer efectiva la Reforma Militar ordenada por la ley de 14 de julio de 1853, obra ésta del doctor don José María Muñoz. La Cámara sancionó el proyecto con algunas ligeras modificaciones; y el Senado lo reformó, pasándolo luego a la Honorable Asamblea General (1). En cuanto al otro proyecto, nada se hizo, porque era grave la cuestión, si bien tenía y tiene sus precedentes en países europeos.

(1) Sesiones del 26 de junio, 10 y 15 de julio de 1857.

El doctor Palomeque consiguió ver triunfante su pensamiento sobre abolición del pasaporte, de cuya cuestión práctica tendría ocasión de ocuparse más tarde, durante su administración política en Cerro Largo. La Comisión de Legislación se expidió favorablemente (sesión del 9 de marzo de 1857), siendo sancionado, y luego aprobado por el Senado (sesiones del 16 de marzo y 22 de mayo de 1857).

El otro proyecto sobre libertad de emisión bancaria quedaría absorbido por el proyecto magno de la fundación del Banco Mauá y C.^{ta}, que tanta influencia tuvo en el desarrollo de la riqueza pública del país, hasta que la guerra civil se encargaría de echar por tierra tan útil y progresista institución.

MAR DE FONDO

Mientras tanto, no faltaban jóvenes inexpertos que ponían piedras en el camino de la organización política. En esos días apareció una hoja impresa, que fué calificada de pasquín por el señor diputado don Patricio Vázquez. En ella se decía, bajo el título de *El Ministro y las Cámaras*: «Es verdad incontestable que debe haber entre el ministro y las Cámaras una fusión cordial. Es verdad incontestable que esa fusión no puede existir en las Cámaras y el Ministerio, porque aquéllas, ligadas a la voluntad de Manuel Oribe, no miran por la felicidad de la patria, sino por su ruina y el engrandecimiento personal, mientras por el Ministerio—con excepción del de la Guerra—mira, y mirará, si no nos equivocamos, por la felicidad de la patria» (1).

El señor Vázquez le dió importancia al *pasquín*, y pidió viniera el ministro a dar explicaciones. Hizo presente que había visto «la publicación de un nuevo periódico que no respetaba reputación alguna, y que a la vez vertía conceptos ofensivos sobre la Honorable Cámara».

Eran los tiempos iniciales de nuestra democracia turbulenta. Aun no se tenía un concepto claro y profundo de la misión de la Prensa. Se creía que el Estado debiera estar preocupado de lo que escribiera el periodista, para en seguida acusarlo; cuando la teoría es la contraria en los países que tienen instituciones liberales y saben lo que vale la libertad del pensamiento hablado y escrito. No hay mejor sistema que el de la absoluta libertad de imprenta. Ésta debe ser irresponsable, pues, como se ha dicho, ella cura las propias heridas que hace, como la lanza de Aquiles. Sólo los Gobiernos autócratas pueden tener interés en legislar sobre la Prensa (2). Era, pues, una grave error el del señor Vázquez al llamar al ministro y decirle que esa publicación del periódico *El Sol* «propendía a la anarquía, vertiéndose conceptos inju-

(1) Sesión del 26 de febrero de 1857.

(2) Al respecto he publicado un artículo, en Madrid, en la Revista General de Derecho y Legislación dirigida por el señor Dato e Iradier, en 1912 o 1913.

riosos contra las Honorables Cámaras, por lo que esperaba que el Poder Ejecutivo tomara las medidas conducentes», porque había en las publicaciones hechas «una completa transgresión a las adiciones a la ley de imprenta últimamente sancionadas».

No sorprende la teoría de entonces. Era el ambiente en que se vivía. Aun se vería al ilustrado doctor Acevedo, como ministro, y al señor Berro, como presidente, con el aplauso de todo el elemento conservador y sano del país, oponerse a que los periodistas, dos de los cuales en estos momentos se sentaban en el escaño legislativo, Mateo y Luis Magariños, hablaran de partidos tradicionales.

¡Eran los signos de la época!

El señor ministro contestó de una manera hábil, aunque sin asentir con el calificativo que el señor Vázquez diera al periódico *El Sol*. Recordó «al señor diputado que si la publicación a que se había referido en realidad concitaba a la anarquía y agravaba a los respetos debidos a los poderes públicos infringiendo la ley de imprenta, era el fiscal del Estado a quien correspondía la acusación: que por parte del Ministerio estimularía al fiscal general a usar de esa acción, puesto que aun estaba dentro del término en que podía deducirla; por cuya razón no había todavía motivo para creer que ese funcionario público descuidara el cumplimiento de sus deberes en el caso actual».

Dicho esto, acentuaba más su pensamiento, al declarar que «después de la calificación que hacía la Cámara, se harían, por parte del Gobierno, las prevenciones convenientes al ministerio fiscal, transmitiéndole la calificación que esa Honorable Cámara hace de ese periódico, y dando por hecho que la publicación es anárquica, alarmante u ofensiva a los poderes públicos». El ministro creía que, dada la calificación hecha por la Cámara, no podía dudarse que el fiscal cumpliría con su deber. Creía que después de lo manifestado, la Cámara no exigiría más, dándose por satisfecha.

Así sucedió: el señor Vázquez declaró que no había esperado otra cosa del señor ministro (1).

No sabemos lo que hizo el señor fiscal, pero, en verdad, la cosa no era para tanto. El artículo no era ofensivo ni incitaba a la anarquía. Era un suelto de tantos, más o menos benevolente para el Gobierno o la Cámara. El ministro parecía comprenderlo así, porque a cada rato recalaba la frase, haciendo presente que la calificación era de la Cámara, y que así lo comunicaría al señor fiscal. Es de suponerse que este funcionario se daría cuenta de su misión, y fuera la callada su respuesta. No están los fiscales para perseguir periodistas, sino para averiguar la verdad de las denuncias hechas por estos, en cuanto afecten intereses públicos. Todavía no estaba en boga la doctrina, aun actualmente sostenida, aunque erróneamente, a nuestro juicio, de que los

(1) Sesión del 26 de febrero de 1856.

cuerpos legislativos tienen el poder jurisdiccional de ordenar la prisión del escritor que, según ellos, ha ofendido la dignidad de la Asamblea. Si esa doctrina hubiese prevalecido entonces, indudablemente que el director de *El Sol* hubiera ido a parar a un calabozo.

A LA QUEMA

Pero la cuestión magna, la de los perjuicios, estaba ahí sobre el tapete, ella que tantos dolores causaría aún. La comisión nombrada, de acuerdo con la ley promulgada el año anterior, había encontrado dificultades para cumplir con la misión confiada. En su consecuencia, los señores Magariños (Luis) y Aguiar habían presentado sus renunci-
cias.

La Comisión Especial, compuesta de los señores Mayobre y Bustamante, aconsejaron su no aceptación, sosteniendo que aquellas dificultades emanaban de «no haberse la Comisión Clasificadora sujeta-
do en un todo a las disposiciones expresas y terminantes de las leyes» (1). Sostenía que lo que correspondía era «aplicar y ejecutar, en este trabajoso y desagradable negocio de expedientes, con toda severidad, y en cada caso particular, las leyes existentes sobre la materia, es decir, las leyes de 14 de julio de 1853, y 9 de abril, 28 de junio, 14 y 15 de julio de 1856». Por todo ello aconsejaba la no admisión de las renunciaciones. Ese dictamen fué combatido por los señores Luis Magariños, Palomeque, Neves y Labandera, siendo desechado.

Desechado el dictamen, el señor Labandera presentó un nuevo proyecto relativo al ingrato asunto de los expedientes por perjuicios, que todavía tanto daría que hacer, por más que los señores Bustamante y Mayobre nos dijeran, aquí que «no era del caso legislar de nuevo sobre el modo de proceder en este trabajoso y desagradable asunto».

El señor Labandera sostenía en su proyecto que los expedientes presentados a la Comisión Examinadora, dentro de los 45 días prefijados en la ley de 9 de abril de 1856, pasaran a la Junta de Crédito Público para su conversión, previa liquidación de los no liquidados. Los presentados después de los 45 días se devolverían, con la nota siguiente: *Prescripto por la ley*.

El proyecto fué pasado a una Comisión compuesta de los señores Palomeque, Vázquez y Labandera (2).

Ibase a asistir al gran debate sobre perjuicios de guerra, durante el cual se enardecerían los ánimos, llegándose al punto de maltratarse hombres cultos y estimados entre sí como los señores Palomeque y Mateo Magariños Cervantes.

(1) Esta Comisión se integró después con el señor Conde (sesión del 6 de abril de 1857).

(2) Esta Comisión se integró después con el señor Conde (sesión del 6 de abril de 1857).

La Comisión Especial se expidió de una manera radical. Propuso el cese de la Comisión Clasificadora de Expedientes por perjuicios, creada por la ley de 14 de abril de 1856, declarando nulos los expedientes iniciados conforme a esta ley, que se hallasen en tramitación u otra causa, los que se inventariarían por una comisión compuesta del contador general, del vicepresidente y de la Junta de Crédito Público, y del oficial mayor del ministerio de Hacienda. Realizado el inventario, y previo anuncio en los diarios, la Comisión quemaría, en paraje público, esos expedientes, labrándose acta, que se pasaría al Poder Ejecutivo, publicándose en todos los diarios durante ocho días. En ese mismo acto se quemarían todos los bonos de la Deuda Pública que la Junta de Crédito Público tuviese en caja, tomándose nota de su totalidad, inutilizándose asimismo las planchas y útiles destinados a litografiar los mencionados bonos. Después de treinta días de promulgada la ley, el Poder Ejecutivo enviaría al Cuerpo Legislativo un estado preciso del monto de la Deuda Consolidada y convertida, vencidos cuyos treinta días, el mismo Poder Ejecutivo declararía cerrada la conversión de la Deuda Pública.

Este proyecto radical, altamente moralizador, estaba firmado por los señores don Gregorio Conde y el doctor Palomeque, quienes formaban la Comisión Especial nombrada para dictaminar en el informe pasado por los miembros de la Cámara de Representantes pertenecientes a la Comisión de Expedientes, en la renuncia que éstos presentaban, y en el proyecto ya mencionado del señor Labandera.

Al expedirse, decían que reunían los tres asuntos en uno solo, porque debían formar un solo cuerpo, y ser una sola la resolución que dirimiera cuestión tan grave como importante. Habían estudiado todos los datos y documentos oficiales para poder ilustrar a la Cámara con acierto y verdad, y no habrían «cumplido bien—decían,—si al aconsejaros una resolución severa no se apoyase en esos elocuentes testimonios, que todo lo explican y se hallan comprobados por el sentir de la Comisión Clasificadora de Expedientes en su verídico como juicio informe». Sin el informe de la Comisión Clasificadora, decía, nunca se habría podido tomar una resolución que «una vez por todas pusiera coto al escándalo y al fraude».

Allí se hacía la historia de los trabajos efectuados y de los inconvenientes con que se había luchado, demostrando, «con hechos indudables, la deficiencia de las leyes en la materia, para una pronta como eficaz solución en un negocio que se hacía indefinido y por lo mismo gravoso a la nación y a sus acreedores». Esa Comisión reconocía «el escándalo, el dolo, y el más refinado fraude», por lo que había propuesto con «arraigada creencia» la quema de los expedientes, o se reconocieran por mitades las reclamaciones por perjuicios.

Los señores Conde y Palomeque veían «claro el problema». No puede ser dudosa la elección, decían ellos: «opta con conciencia por

la quema de todos los expedientes, porque halla, en esa medida, la única que podría restablecer el crédito y la moral pública altamente ofendidos». La Comisión Especial se fundaba en el informe aludido, porque «éste se hallaba basado en sanos y morales principios, que los hechos y la práctica de una escuela constante de nueve meses le fuerzan a presentar—decía—descarnadamente en su expresado informe». Lo que allí se afirmaba era «la verdad, la razón y la justicia». El consejo allí dado era «el único que podía contener la espantosa bancarrota de que se resentía ya nuestra aniquilada sociedad».

Dicho esto, que extractamos textualmente, se referían luego a informes de los delegados del Poder Ejecutivo en Colonia y Paysandú. El del primer Departamento hacía saber que «no sólo se habían adulterado las reclamaciones hasta duplicar algunos capitales, sino que se presentaban capitales apócrifos y algunos pertenecientes a personas que no han existido nunca, con testigos falsos, unas veces, y otras, supuestos». El del segundo Departamento, daba a conocer la «relación nominal de los que fraudulentamente habían reclamado indemnizaciones por perjuicios, el grosero aumento de esas reclamaciones, haciendo notar al Gobierno la conducta poco honesta en formalizar otros expedientes sin la personería de derecho, introduciéndose reclamaciones fuera de tiempo hábil o determinado por la ley».

A esto agregaban los señores Palomeque y Conde lo siguiente : «Si a esto se agregan las denuncias públicas de algunos otros—tales como los señores Illa, Anavitarte, Vázquez,—no hay la menor duda que una *hoguera* es lo que prudentemente cabe, para que desaparezcan de esta sociedad hasta los últimos vestigios del escandaloso extravío, que la ambición de los interesados, la negligencia de los jueces, y la tolerancia del Poder Ejecutivo, mantienen aún en pie y conserva las más vivas esperanzas de quienes sin piedad pretenden una improvisada fortuna con gran perjuicio del erario nacional, crédito y buen nombre de la República. Pero, hay más, Honorables Representantes : las leyes de 14 de abril, 28 de junio, 14 y 15 de julio de 1856, fueron dictadas ante la imperiosa necesidad de poner una barrera al escandaloso robo que la prensa denunciaba y el público entero conocía. Las discusiones que con ese motivo se ofrecieron en este recinto son tan recientes que no puede olvidarse la impresión que ellas causaron en el ánimo de Vuestras Honorabilidades y las razones de justicia, de moral y de conveniencia pública, que os decidieron a sancionar las leyes citadas, que al parecer ofrecían en su estricta ejecución el resultado definitivo que vuestra Comisión se atreve honrosamente a aconsejar ahora. Entonces Vuestra Honorabilidad, el Poder Ejecutivo y los habitantes todos veían en esas leyes la tumba en que para siempre debía sepultarse el escándalo de los escándalos. Pero, desgraciadamente, no ha sucedido así ; porque al paso que en la práctica se notó la deficiencia de las leyes, fueron además mutiladas por las distintas interpre-

taciones que ellas sufrieron, ora por la Comisión Examinadora de Expedientes, ora por algunos de los miembros que eran removidos cada dos o tres meses, ora por el Poder Ejecutivo, y últimamente por el ministerio fiscal. Ahí están esa serie de opiniones registradas en los diarios de la época, y no puede haber un solo honorable representante que no haya tenido ocasión de contemplarlas con el disgusto de patriota, con el sentimiento de hombre honrado. Ante este cúmulo de incoherencias, las leyes de la materia, reprimidas bajo el peso de falsas como indebidas interpretaciones, sólo han servido para alentar el fraude, que el crédito de la nación y el buen nombre de Vuestra Honorabilidad no permite se aventure nuevamente a leyes y comisiones».

Estas eran las razones fundamentales alegadas por el doctor Palomeque en su dictamen, las que eran muy conocidas, porque el escándalo había llegado a su colmo. Pero, como hombre decidido a todo, por tener bagaje intelectual y moral, una vez adoptada una resolución, eso sí, bien meditada, reservaba para el último extremo el gran argumento con que hundiría a los autores del robo y del escándalo. No se atrevía aún a exponerlo en su informe. Lo guardaba; pero, a la vez, cual hombre experimentado, hacía presente que conocía el secreto de todo lo obrado, y que no tendría inconveniente, si así lo exigía la situación, de echar mano de él. En efecto, eran duras las expresiones con que terminaba esta parte fundamental, que luego tuvo necesidad de hacer efectivas en el curso del debate, aunque para en seguida arrepentirse de haber ido tan lejos, a punto de recoger del archivo del Diario de Sesiones los discursos que tales denuncias contenían. Hasta en este acto reveló su grandeza de alma. No quiso que pasaran, en ese momento, a la historia, los nombres de los malos ciudadanos, de los ambiciosos, de los extraviados. Y en nuestro archivo privado se guardarán, respetando así su voluntad, hasta que pasado el tiempo pueda alguien darlos a la luz para la historia de tan trascendental cuestión nacional.

«La Comisión Especial—terminaba diciendo—puede aún con inmensa ventaja entrar en otras consideraciones, revelando ante Vuestra Honorabilidad hechos que ofenderían la moral pública y los sentimientos de nuestra nacionalidad. Doloroso es decirlo; conducida a este extremo, bien a su pesar, vendría indudablemente a herir individualidades que, puestas en transparencia, no evitarían la indignación de esta sociedad altamente ofendida.»

Esta cuestión era, como ya hemos dicho, la más fundamental de todas cuantas han afectado el porvenir nacional. El doctor Palomeque fué el alma del gran movimiento operado. No tuvo reparos que oponer y marchó decidido, convencido del bien que hacía a su patria. Iba a herir muchos intereses individuales, que se levantarían airados para oponerle dificultades en su camino; pero él estaba resuelto a todo,

fiado en la moralidad de lo que defendía, y en que la historia daría a cada cual lo que justamente le correspondía. Es esta una de las páginas más hermosas de su vida, en cuya lucha todo lo sacrificó, sin que le detuvieran la influencia de la amistad ni de la familia.

En el Diario de Sesiones se dice haberse «suscitado un detenido debate sobre si debía o no considerarse el referido informe, en el que tomaron parte, en pro, el señor Palomeque, y en contra, los señores Magariños (don Mateo) y Labandera, concluyendo por pedir el señor Magariños se suspendiese la consideración de este asunto por 48 horas, que sería el tiempo que tardaría en madurar otro proyecto, y presentó la siguiente moción : «Artículo único : La Junta de Crédito Público suspenderá la conversión de títulos de Deuda Consolidada de los Expedientes de reclamaciones por perjuicios, hasta nueva resolución de la Honorable Asamblea General».

Esta moción fué aprobada, después de un *corto debate*. Parecía como que se temiera entrar a la discusión, buscándose paliativos. Los intereses creados eran muy fuertes, por lo que mucho costaría extirparlos. Sin embargo, la palabra enérgica y convincente del doctor Palomeque, intérprete de las exigencias de la opinión, influyó de tal manera, que, cuando en la sesión siguiente, el doctor Magariños Cervantes presentó su proyecto, nadie lo apoyó, por lo que ni siquiera entró a discutirse (1). Y no era que el proyecto fuera malo. No ; era correcto y justo, pero no estaba en el ambiente de aquellos días, si bien llegaría el momento de hacerlo viable. La situación era extraordinaria, y a ella debiera ajustarse la ley. El doctor Magariños legislaba para un momento ordinario. En ese sentido, nada había que objetar a sus ideas.

Él decía, y con razón : no castigemos a los inocentes, sino a los culpables ; estúdiense esos expedientes por una comisión nombrada por la Asamblea, la cual dirá si hay expedientes viciosos o malos. Estos se pasarían a la justicia, donde la parte se defendería y ella resolvería sobre la quema. En el caso de condena se quemarían esos expedientes, previo aviso por los periódicos.

El proyecto tenía un fundamento incontestable, mirado fríamente el asunto. No era justo quemar los expedientes legales. Esto seducía, pero no convencía a la Cámara. Ésta se inspiraba en algo que es más grande que la justicia : en la misericordia. Quería ser humana, impidiendo el castigo de los culpables, quienes, en el fondo, no eran sino unos extraviados, unos seducidos, unos ambiciosos. Esa humanidad era la que los guiaba, a punto de aparecer cometiendo una injusticia. Sí, no había más que la apariencia de la injusticia, pues el verdadero acreedor siempre tenía abierto el camino para reclamar, y aun para solicitar ciertas medidas preventivas, antes de quemarse sus

(1) Sesión del 24 de abril de 1857.

expedientes, en garantía de sus derechos. Por lo demás, ningún propósito práctico llenaba el pensamiento del doctor Magariños Cervantes, al mandar quemar los expedientes donde se habían pronunciado sentencias condenatorias. No había para qué quemarlos, después del fallo. Lo que se quería evitar, con la quema, era precisamente que la sociedad de Montevideo presenciara hechos vergonzosos. Se quería un *bill* de indemnidad para hacer olvidar un mal social. Era innúmera la gente ¡y qué gente! comprometida en ese escándalo social. Y en ello consistía lo humano del pensamiento del doctor Palomeque. Quería imitar a San Martín, cuando se incautó de la correspondencia política de hombres eminentes, escrita después de Cancha Rayada, cuando todo lo consideraron perdido, que quemóla para que nadie conociera lo que había sido obra de un momento irreflexivo, de un cuarto de hora desgraciado. La sociedad tenía que salvarse, porque eran muchos los que habían caído en la tentación de hacerse ricos a costa del Estado. ¡Eran los tiempos en que no se consideraba delito estafar al Erario Nacional!

ATAQUE HIRIENTE

La lucha quedó circumscripita a los señores Palomeque y Magariños Cervantes. No concurrieron al debate los opositores, aquellos que lo habían iniciado y sostenido, hasta cierta altura, como ser, los señores Bustamante, Aguiar, Labandera y sus amigos.

Y fué entonces cuando, en el calor de la discusión, el noble amigo y querido pariente, el doctor Magariños Cervantes, perdió la serenidad, y le arrojó al doctor Palomeque, al hombre por quien tanto respeto tenía, y siempre tuvo, el epíteto de : ¡Quijote!

Todos sabemos la nobleza de este personaje. No ofende su referencia, si el espíritu medita tranquilamente; pero, lanzado el epíteto en el calor de la polémica, y con intención aviesa, significa todo lo contrario de lo que la literatura moderna nos enseña. Entonces no es un honor, sino una ofensa. Decirle a un hombre : usted es un Quijote que se bate con los molinos de viento, es tener la intención de decirle : usted carece de inteligencia ; es un imbécil ; no sabe de lo que se trata. Y el doctor Palomeque, que estaba vencedor, sintió el dardo en lo hondo, pero perdonó, porque se daba cuenta de la situación del doctor Magariños Cervantes, al verse vencido en un asunto que para él era de vida o muerte.

En efecto, y sin que esto importe una crítica o censura a la actitud del digno ciudadano citado, cuya honradez política es indiscutible, al seguir la corriente de sus ideas ; él no podía, al discutir este asunto, prescindir de sus intereses profesionales. Estaba solicitado por éstos, los cuales no siempre están reñidos con los generales, pues la dignidad profesional corre parejas con la del interés público, aunque al-

guien pueda servir de excepción a la regla. El doctor Magariños Cervantes, como abogado, se había hecho cargo de muchas de esas reclamaciones; justo era, por lo mismo, que las considerara legítimas, las defendiera, confundiendo unos y otros intereses, que, en el caso, no chocaban, por más que viniera a probar la necesidad o conveniencia de declarar la incompatibilidad en el ejercicio de la abogacía con el cargo de diputado, muy especialmente en aquellos países donde el representante del pueblo es retribuido.

El rompimiento de relaciones que siguió al incidente citado no duró mucho tiempo. Mi madre era una mujer amantísima de todos sus parientes. Amaba con cariño a sus sobrinos los Magariños, a quienes había cuidado como madre, por lo que no podía resignarse a la ruptura de aquella amistad, tanto más sabiendo lo mucho que ambos se querían. Así fué que, en el aniversario del cumpleaños de ella, pocos días después de este suceso, conmovedora del sentimiento de los protagonistas, preparó las cosas de manera que el asiento reservado a su querido sobrino Mateo no estuviera vacío. A la hora de comer, y cuando todos sus hijos estaban sentados alrededor de aquella mesa pobre, pero honrada, ella, la única de pie, como jefe de su rebaño numeroso, abrió la puerta contigua al comedor, y con voz imperante, pero conmovida por la emoción de adentro, dijo secamente: «*Entra Mateo, y abraza a tu primo!*» La escena era fuerte, como que aun, andando los años, al relatarla, le venían a ella ¡oh santa madre! las lágrimas a los ojos, palpitándole acelerado el corazón, y con el rostro amoratado, como me sucede a mí, ahora, al transmitirla al papel, con el recuerdo fijo en aquella figura inolvidable. Mateo obedeció; otro tanto hizo mi padre; y así se puso punto final a lo que hubiérase perpetuado, si no hubiera existido quien, en el trance de irse al abismo un afecto de amistad, no se atravesara y colocara su corazón para que sirviera de puente. ¡Ah! ¡cuántas veces falta un alma que así lo comprenda, así se inspire, y así lo haga!

Pues bien, aquel debate parlamentario, en cuyo final se hallaría la transacción que siempre encuentran los hombres de experiencia, dándose la razón a los dos combatientes, como se verá, continuó su desarrollo natural, es decir, lo que la opinión pública reclamaba en esos días, aunque se fuera al extremo, porque así son las pasiones populares. Después que el doctor Magariños Cervantes rebatió los argumentos expuestos por el doctor Palomeque, éste, al verse apurado por su hábil contrincante, recurrió, como lo había ofrecido, a exhibir la podredumbre, el cáncer de aquella sociedad. Comprendió que era el momento supremo, psicológico, del debate, y se lanzó a la arena, con toda arrogancia, para decidir definitivamente a sus amigos a sancionar aquel proyecto moralizador, contra el cual se estrellaba la razón fría y la dialéctica madura del adversario (1). Temió, y con razón, que

(1) Más adelante se verá cómo el barón de Mauá era partidario del proyecto.

la argumentación contraria entrara al fondo de los espíritus de quienes, al fin y al cabo, eran también compañeros del doctor Magariños Cervantes, y las filas ralearan, yéndose algunos al campo enemigo. Si su contrincante invocaba sesudamente la razón y la justicia jurídica, él, en cambio, tenía su fuerza poderosa en ese sentimiento de moral que está sobre todas las conveniencias sociales. Y fué así que cumplió su palabra, y arrojó al tapete de la discusión lo que, si bien era una revelación en el Parlamento, no era un secreto para los hombres de la época. Y pronunció entonces su famoso discurso, grande, valiente, sentido, con el que exhibía matemáticamente el gran robo, el gran escándalo.

El número de animales reclamados por los perjudicados era absolutamente imposible que pudiesen caber en el territorio de la República: necesitaban una extensión de tierra tres veces mayor para que pacieran las vacas y las ovejas que se decían arrebatadas durante la guerra. Demostró que allí aparecían nombres supuestos, cifras abultadas, procuradores, escribanos y abogados en comandita, siendo imposible, en una sociedad pequeña como aquélla, donde todos estaban vinculados por lazos de amistad y parentesco, poseer la independencia de carácter necesaria al extremo de hacer justicia verdadera contra los autores del fraude, llevándolos a los tribunales. Era una parte crecida de la alta sociedad la que se encontraría frente a los jueces. Allí estarían los amigos, los hermanos, quizá los padres, los hijos de altas personalidades, «todos descarriados, muchos inconscientes del acto ilícito que realizaban, inocentes quizá, arrastrados por otros, prestándose a desempeñar un papel cuyo alcance ignoraban. Y, ¿cómo iba a hallarse el juez inflexible que no recibiera la influencia de toda la sociedad que se había revolcado en aquel inmundo fango, sin saberlo, arrastrada por unos pocos avaros, los mismos que no aparecerían en la confabulación, para ser castigados? (1).

Este discurso *ad hominem*, debió producir su influencia en el ánimo de la falange parlamentaria, pero no lo bastante. Aun dudaría del éxito el doctor Palomeque, ante el poder de su adversario, hombre dotado de alta inteligencia y de un noble temperamento, que sabía poner en juego en todas y cada una de las circunstancias difíciles de su vida, pues era flemático y vehemente a la vez. Tenía, además, ese atractivo del orador elegante en la frase, imponente en el ademán, y seductor en el gesto. Era el más hermoso de los rostros varoniles que hayamos conocido en el mundo, unido a una elegancia en sus contornos físicos muy difícil de superar. Era un hombre en toda la fuerza muscular de la palabra. La lucha era entre los dos amigos. ¡Cómo gozarían los opositores! Por eso no asistían al debate. Mira-

(1) Estos discursos están, en lo fundamental, extractados en mi estudio *El Ambiente Educacional y el Doctor don Jaime Estrázulas*, publicado en *El Día*, a la época de la muerte del doctor Estrázulas.

ban de afuera, en la seguridad de que ellos utilizarían, llegado el momento, esta división que se operaba.

El doctor Palomeque sabía muy bien que en el Parlamento nunca está segura una batalla hasta que no se ha votado. Se trata de soldados que en el instante supremo desaparecen por entre el escotillón, para engrosar las filas adversarias, o para ganar cuarteles de invierno, sin que se les pueda infligir pena alguna, sino la moral, y esta misma no siempre con los caracteres del sentimiento general de la Cámara, o del Círculo. ¿Por qué? Porque la independencia de criterio es una bandera a desplegarse en lo más recio del combate. Es el único campo de batalla donde puede decirse que es posible cambiar caballos en medio del río. Allí se mudan de caballos, o sea de colores, como el camaleón.

Pues bien, el doctor Palomeque, para asegurar la victoria, recurrió al medio que su propio contrincante le había enseñado en otros tiempos, y mocionó para que la votación general fuera nominal. El doctor Magariños Cervantes, viejo parlamentario, no se quedó atrás; comprendió el golpe, y con toda maestría lo contestó. Como prueba de que no se intimidaba, y que aun pensaba vencer, dijo: «Sí, que sea nominal, pero fundado». La fuerza de resistencia de este luchador era heroica, pues se necesita mucho dominio de facultades para bregar en el recinto legislativo cuando uno siente que el terreno se mueve y se hunde. Y ese lo tuvo el doctor Magariños Cervantes. Acababa de ver que la moción del doctor Palomeque había sido casi unánimemente votada, pero él no se arredraba, y decía: «venga el fundamento del voto, con lo cual pondré en aprietos—como que los conocía muy bien, por ser sus mismos compañeros—a muchos de los votantes»; esos que también llenan su misión política en las Cámaras, como los soldados anónimos de carne de cañón en las batallas campales. El doctor Palomeque comprendió adónde iba el tiro, y fué rechazada la moción del doctor Magariños Cervantes.

La lucha, pues, había concluido, pero sólo al parecer. Ahí estuvo la votación nominal de los señores Palomeque, Durán, Solsona, Latorre, Fistera, Echenique, Arteaga, Tezanos, Rodríguez, Fernández (Román), López, Alvarez, Neves y Conde, contra la de los señores Magariños (Mateo) y Vázquez y Pereyra. ¡Catorce contra tres! Eran todos los diputados que habían asistido al gran debate. No concurrieron a él los señores Magariños (Luis), Aguiar, Veira, Martínez, Mayobre, Fernández (Eugenio), Bustamante, Campos, Acosta, La bandera y Bujareo (1).

Justo es que aquí conste esta ausencia, que bien podría calificarse de deserción, o de cobardía, cuando se trataba de una cuestión la más fundamental de cuantas afectaban el porvenir del país.

(1) Sesión del 24 de abril de 1857.

Es verdad, que, como pronto lo veremos, luego reaccionarían, y se les vería aparecer en la arena para tomar participación en la lucha, y acompañar con sus esfuerzos al doctor Palomeque, el autor enérgico de este vibrante movimiento. Una prueba de ello la tenemos en que votó en contra el hijo del presidente de la República, el joven don Julio C. Pereyra, en su inconsciencia política; sin reflexionar que el doctor Palomeque era el hombre que más adherido estaba a la administración pública, y quien mayor interés tenía en que no se cometieran errores que deslustraran el programa presidencial.

El proyecto fué sancionado, aunque con algunas ligeras modificaciones propuestas por el mismo doctor Palomeque, al discutirse en particular.

El triunfo *parecía* asegurado, pues aun faltaba la discusión en el Senado. Aquel voto del hijo del presidente era enigmático, y significativo a la vez. En el desarrollo de los sucesos se descubriría su alcance, y ese término medio, que siempre triunfa en la vida política y social, una vez más se exhibiría victorioso, con satisfacción de aquellos que, como el doctor Palomeque, habían ido hasta donde hemos visto, durante el fragor de la batalla.

TRIUNFO DE AMBAS IDEAS

Pero, cuando el asunto fué al Senado, allí se demoró algún tiempo. Los senadores meditaron con mayor detenimiento, y después de un mes devolvieron el proyecto a la Cámara, con las modificaciones substanciales que creyeron convenientes.

Ya el ambiente era otro. Los corazones de los combatientes no latían tan violentamente, y la misma opinión pública había empezado a aflojar, no siendo tan exigente, transando con los intereses creados. Todos habían reflexionado y comprendido que la medida extraordinaria de la quema de los expedientes aparejaba graves inconvenientes, y hasta enormes injusticias. El Senado estaba de parte de las ideas del doctor Magariños Cervantes, pero comprendía también que el doctor Palomeque pisaba en terreno altamente moralizador y simpático. Se colocó en el justo medio, y declaró cerrada la convención de la Deuda, según la tramitación de la ley de 15 de julio de 1853, mandando inutilizar las planchas y quemar los bonos existentes. Reconocía que no debían quemarse los expedientes, sino cumplirse, como lo habían indicado los señores Bustamante y Aguiar, desde un principio, al expedirse sobre las renunciaciones de Luis Magariños y J. J. Aguiar, con lo dispuesto en las leyes de 28 de junio y 15 de julio de 1856, y 14 de julio de 1853, con excepción de los expedientes ya sometidos al conocimiento de la justicia, por fraudulentos. Respetaba el término de los

45 días prefijados por la ley, para, según ello, mandarlos o no a la conversión (1).

Lo resuelto por el Senado fué pasado a la Comisión Especial de los señores Palomeque y Conde, y éstos, respetando esa opinión sesuda, no creyeron de su deber insistir en su pensamiento radical, desde que, al fin y al cabo, conseguían lo que se proponían, cual era, que la conversión no continuara, y cesara de funcionar esa guillotina con que se cortaba al pueblo la vida : ¡ las planchas de fabricar bonos !

La Comisión Especial, sin duda se sentiría flechada por el pensamiento del Poder Ejecutivo, interpretado fielmente en aquel voto del señor don Julio C. Pereyra, y no se sentiría inclinada a librar una segunda batalla, que, probablemente, perdería, al llevarse el asunto a la Asamblea General. Se contentó con lo fundamental, aunque se discrepara en la forma. En su consecuencia, creía que «ese proyecto, elevado a ley, podía aún evitar se llevaran adelante los abusos de un tráfico escandaloso».

Pero, al aconsejar la aceptación de lo resuelto por el Senado, no lo hacía sin protestar contra ello. Notaba «*con pesar* que el Senado no optara por la quema de los expedientes, pues creía que la medida adoptada podía traer más tarde un nuevo cúmulo de especulaciones doloosas» (2). Transigía, sin embargo, reconociendo «que para un legislador prudente hay siempre un peligro que no debe arrostrarse, sino en circunstancias dadas, puesto que en el orden general de la previsión y de la sabiduría humanas, no se puede hacer siempre una ley tan perfecta como completos deban ser sus beneficios». De aquí que elogiara la conducta del Senado. «Guiado—decía—de la prudencia que le caracteriza, aun en los actos más triviales, ha querido confiar al tiempo, a los hombres y a las cosas, lo que una palabra previsoras tal vez hubiera evitado.» Creía, y en eso tenía perfecta razón, que el caso era excepcional ; y por «lo mismo parece—decía—que la excepción ha debido *animar* (3) al prudente legislador, para arrostrar todo peligro, tanto más cuanto que cualquier procedimiento en ese sentido se justificaría en los fines, aunque no lo estuviese en los medios».

Iba, como se ve, aflojando en *los medios*, aunque dando palo al «prudente legislador» que no se «animaba» a «arrostrar todo peligro».

No suponía bastante la crítica hecha, por lo que «no queriendo ser extrema en su modo de encarar la resolución del Honorable Senado, se apresuraba a desentenderse de aquellas consideraciones que en definitiva no importarían otra cosa—decía con un valor asombroso—que declarar a Vuestra Honorabilidad que la sanción de la Honorable Cámara de Senadores es una sanción de timidez o de desconfianza en sus

(1) Sesión del 5 de junio de 1857.

(2) Fué una profecía.

(3) Así, subrayado, está en la sesión del 5 de junio de 1857.

propias facultades». Y atribuía esta debilidad o timidez o desconfianza, a «que, desde el primer día en que la ruidosa cuestión de expedientes había empezado a dilucidarse por los órganos de la opinión pública y en las discusiones del Cuerpo Legislativo, la Comisión había visto con asombro empeñarse en la lucha intereses bastardos». «Tales elementos—decía—son siempre temibles; y es prudente no fiar a la razón y a la justicia lo que el interés individual puede destruir.»

La Comisión no abandonaba sus opiniones. Las creía las únicas salvadoras, pero transigía, por lo que terminaba aconsejando que «la Cámara declinara de sus opiniones, y adhiriera a la sanción del Senado, a fin de que la Honorable Cámara de Representantes no hiciera con su demora y la reunión de la Asamblea General, decir a la República, y a su historia, que todo lo contempla, que el escándalo continúa, que el escándalo se aplaza, que el robo se protege, que la infamia queda en pie, como el más elocuente ejemplo de los tiempos remotos». De esta manera creía que «los malos trabajos no encontrarían asidero, respetándose la prudencia y el buen criterio de la Honorable Cámara de Senadores».

Al discutirse este dictamen, apareció en la arena el doctor Magariños Cervantes, con mayores bríos. Era de esos hombres a quienes el dolor les acrece. Combatió el dictamen y las explicaciones que en ese momento expuso el doctor Palomeque.

Se estableció, dice el acta, «un extenso, sostenido y calmoso debate, en el que hicieron uso de la palabra por distintas ocasiones los señores Palomeque y Bustamante, en pro del proyecto aconsejado por la Comisión, y en contra, los señores Magariños y Labandera».

Era sumamente curioso lo que sucedía. Así como el grupo de los señores Magariños y Palomeque se había dividido, otro tanto acontecía con el de los señores Labandera y Bustamante. Aquello era un desquicio. Esos «intereses bastardos», como decía la Comisión, en su exagerado radicalismo, o «esos intereses creados», como se dice actualmente, que han de respetarse, eran la causa de las acciones y reacciones.

En prueba de ello, se produjo el hecho inconcebible de que, mientras se debatía, el señor presidente anunció que se habían retirado por indispuestos los señores Fernández (Eugenio), Vázquez, Durán, Rodríguez, Veira, Magariños (don Luis) y Magariños (don Mateo).

¡Todos se habían indispuerto!

Algo parecido a lo de los cortesanos que todos casualmente se enfermaban de fístulas en el ano durante el reinado de Luis XIV para parecerse a su monarca y hacerse operar como él.

Y lo llamativo era que, junto con la retirada del *leader* de la oposición, se iban elementos que pertenecían a una y otra fracción. En presencia de este incidente inesperado, hubo quien, como el señor Alvarez, sostuvo que podía continuarse la sesión con catorce diputados,

mientras el doctor Palomeque manifestaba ser discutible si podía o no continuar la sesión, pero que era preferible suspenderla para continuarla al día siguiente «con el número mayor que fuera posible, para que no se dijese que la cuestión se había ganado porque había habido un muy corto número de señores representantes».

La actitud de esos diputados obedeció a un propósito laudable, pues, con excepción de uno solo de los que se habían retirado (el señor Eugenio Fernández), todos concurrieron al día siguiente a dar solución al punto. Habían tenido su cuarto de hora psicológico para meditar detenidamente. La cuestión era muy seria para jugar con los destinos del país. Todos tenían algo que perder o ganar. Y, al fin, el proyecto del Senado satisfacía todas las tendencias. El señor Bustamante estaría contento, porque se sostenía la aplicación de las leyes vigentes; el doctor Palomeque, porque se cerraba la conversión, se inutilizaban las planchas y se quemaban los bonos existentes; y el doctor Magariños porque no se quemaban los expedientes sin el previo juicio y el estudio debidos.

Cuando la discusión se reanudó, el único que usó de la palabra, para atacar el dictamen de la Comisión, fué el señor don Juan Antonio Labandera. Sostuvo que era «malo e inconducente con los principios que dicha Comisión había sostenido en otra sesión, y que debiera sostener en la presente». Los doctores Palomeque y Bustamante respondieron. Este último declaró que no se conformaba con algunos de los principios emitidos por la Comisión Especial en su dictamen, pero que aceptaba su proyecto.

La opinión estaba hecha. Los que no habían querido concurrir al debate, al principio, limitándose a contemplar a los dos luchadores y gozar al verlos divididos, para luego reinar sobre sus despojos, sintieron abrirse el suelo a sus pies y que caerían arrastrados por la fuerza absorbente del abismo. El instinto de propia conservación les obligó a descender a la arena y luchar. Pocos fueron los que, al final, no se presentaron. Estos pocos se llamaron Neves, Aguiar, de los Campos, Martínez, Mayobre y Fernández (Eugenio) (1). Por lo demás, allí estuvieron los tres *leaders* de la Cámara, los señores Palomeque, Magariños y Bustamante, frente al único opositor sistemático, el señor Labandera, hombre éste, inteligente, laborioso y de ideas firmes y arraigadas, pero sin la flexibilidad de espíritu necesaria para saber gambetear en política. En la hora del peligro todos se habían reunido, y comprendido que el único camino era el señalado desde el primer momento por la Comisión Especial compuesta de los señores Gregorio Conde y doctor Palomeque. Sólo el señor Labandera se batió en retirada, haciendo uso de todos los recursos, si no para vencer, a lo menos para obstruir, lo que era un grave error, dado el estado en que

(1) Sesión del 6 de junio de 1857.

se hallaban las cosas. Y fué debido a esa actitud que el doctor Palomeque hizo presente que, «conociéndose el interés que tenía el señor Labandera en dilatar la sanción de este asunto, convenía se pusiese a votación». El señor Labandera respondió e indicó algo que era muy razonable ; pero, como la Cámara ya estaba fastidiada, y deseaba concluir, no lo aceptó, votándose el proyecto tal cual la Comisión Especial lo había aconsejado.

La victoria pertenecía a todos, pues cada uno había aportado su grano de arena, y rivalizado en concesiones, para salvar lo fundamental de sus propias ideas. El Senado había sabido poner el dedo en la llaga, la Comisión Especial tenido tino y vencido sus pasiones ; el doctor Bustamante salvado su primitivo criterio jurídico, y el doctor Magariños, premiada su constancia, al mirar prevalentes los dictados de la razón y de la justicia. En todos ellos habían triunfado los fines, aunque fueran distintos los medios. El único que no pudo conseguir sus propósitos, al pretender que el asunto se llevara a la Asamblea, para allí disputar por sus ideales, fué el señor Labandera. Por eso, cuando el señor presidente proclamó la sanción de la Minuta de Resolución aconsejaba por la Comisión Especial, el doctor Palomeque quiso dejar constancia del proceder alto y sano de la Cámara, para ante la historia. Aspiró a que las generaciones del porvenir supieran cómo sus antecesores habían batallado, unidos en una aspiración común, pero grande, para salvar al país de aquel tembladeral en que todo se iba a hundir : ¡ Hacienda pública y honor nacional ! Y, entusiasmado ante el gran ejemplo dado, como para que se imitara en las grandes crisis, pidió, con alma emocionada, con sinceridad patriótica, que en el acta constara que el resultado obtenido, que, al fin, era el vencimiento de las pasiones de cada uno, había sido la obra de la voluntad de todos, menos el de un voto negativo. No quiso decir cuál fuera este voto, porque su objeto no era personalizar la idea, sino magnificarla ; ni menos ofender en nada la personalidad de quien había caído luchando, envuelto en la bandera de sus ideales, lo que hablaba muy a favor de su carácter y convicciones. Pero, ese único, ese voto negativo, se sintió herido, y, con toda la energía noble nacida del fondo de un alma templada a los rigores, dijo : «Sí ; conste en el acta (señores taquígrafos, tened la bondad de tomar mis palabras) que el diputado que estuvo por el voto negativo, fué el diputado Labandera ; el mismo que ahora dos años dió su voto en oposición a 23 señores representantes, los cuales a los 30 días pidieron la derogación de la resolución que ese diputado había combatido» (1):

El rasgo de altivez fué respetado y nadie discutió el derecho del señor Labandera ; por el contrario, en el fondo, aplaudirían su va-

(1) Cuentan que a la noche, el doctor Palomeque le llevó la ley al Presidente, y tomando la pluma, le dijo : «Firme usted la ley más honrada que se ha dictado».

liente y constante energía; y la sesión se clausuró, yendo todos a reposar, después de una fatiga larga, con la conciencia tranquila de haber cumplido con su deber y puesto, al parecer, un punto final a la grave cuestión de los perjuicios nacidos de la maldita guerra civil. Aquí estaban los frutos de estas guerras. El remedio aplicado parecía heroico; veríamos si los propios autores de tantas leyes, al conocer el abismo en que se había hallado el país, huirían, en el futuro, de las guerras fratricidas, evitando que la Deuda Pública creciera y creciera hasta agobiarse con su enorme peso, impidiendo la ascensión hacia la luz.

Quedaba, pues, cerrada la conversión de la Deuda Consolidada creada por ley de 1853.

¿Sería esto definitivo?

¿Los ecos del *arcabuceo* irónico del señor Arteaga volverían a oírse?

Por lo demás, esta ley daba lugar en seguida a una consulta del Poder Ejecutivo con motivo de las reclamaciones representadas por el señor don Fabio Maines (1). La Comisión Especial sostuvo que la ley era clara y que estaba cerrada la conversión. «Esto—decía,—que explica bien alto el error del Poder Ejecutivo habrá bastado para relevarle de la penosa tarea que se impuso dirigiéndose a la Asamblea General en consulta de dudas que carecen de fundamento.» La Cámara así lo resolvió, sin discrepancia alguna, pero, más tarde, se conformó con la Minuta de Decreto del Senado, que declaraba que esos expedientes, y todos los que se hallasen en su caso, estaban comprendidos en aquella de que trataban los artículos 3.º y 4.º de la ley dictada recientemente, promulgada el 6 de julio de este año (2).

PERSPECTIVAS POLÍTICAS Y FINANCIERAS

La situación financiera continuaba siendo mala. El Cuerpo Legislativo lo sabía, e ideaba proyectos para conseguir recursos. Uno de éstos era la creación de una patente extraordinaria semanal, cuyo importe sería de medio patacón, pagadero por todos los propietarios, comerciantes, industriales, maquinistas o artesanos a quienes la ley obligaba a tomar patentes. El producto se destinaría a los trabajos y medidas sanitarias para combatir la fiebre amarilla reinante.

El otro proyecto consistía en la imposición a los arrendatarios de los mercados públicos, del 50 % más de lo que abonaban a los rematadores del ramo, destinándose su producido a la limpieza de la ciudad y a los trabajos higiénicos, en presencia de aquella fiebre reinante.

Ambos proyectos pertenecían al doctor Palomeque, y fueron sancionados inmediatamente (3).

(1) Sesión del 6 de junio de 1857.

(2) Sesión del 13 de julio de 1857.

(3) Sesión del 6 de abril de 1857.

La fiebre amarilla azotaba la sociedad de una manera cruel. No parecían bastantes las tribulaciones pasadas, sino que venía a aumentarlas ese terrible mal. Su influencia se hizo sentir en el desarrollo de las finanzas, por lo que el Poder Ejecutivo fué autorizado para suspender, temporariamente, durante ella, la ejecución de todos los contratos que pesaban sobre las rentas, pudiendo el Gobierno iniciar arreglos con los acreedores para obtener de ese modo dicha suspensión (1).

La situación política empezaba a resentirse, pues se aproximaban las elecciones de diputados y senadores en ciertos Departamentos. Los elementos opositores iniciaron sus ataques al Poder Ejecutivo con una interpelación. El señor Vázquez interpeló a los señores ministros de Guerra y Gobierno sobre las levas que tenían lugar en esos días, por fuerzas de la Unión y Policías. Los ministros dieron las explicaciones pedidas, sin que el interpelante se sintiera satisfecho (2), por lo que presentó una Minuta de Comunicación en la que censuraba el sistema de las levas «como inmoral y contrario a la libertad de los ciudadanos» (3).

La Minuta fué pasada a una Comisión compuesta de los señores Veira, Magariños (Mateo) y Rodríguez, éste en reemplazo del señor Labandera, que no aceptó. La Comisión se expidió, en lo fundamental, de acuerdo con lo indicado por el señor Vázquez, mandando se procediera por el Poder Ejecutivo «al licenciamiento de los que hubiesen sido tomados para el servicio militar, por tratarse de la flagrante violación de la ley de 22 de marzo de 1853 (4).

Este dictamen fué combatido por los señores Palomeque, Bustamante y Alvarez, siendo sostenido por Magariños (Mateo), Vázquez y Veira. Votado, resultó empate; pero, pedida la rectificación por el doctor Palomeque, resultó desechado.

Mientras la Cámara se ocupaba de asuntos útiles, como ser, los proyectos de Reglamento interno (26 de febrero), de la sanción del Código Civil del doctor Acevedo (3 y 9 de marzo), de los honores a Rivadavia (9 de marzo), del local legislativo (23-26 marzo, 11 y 9 de mayo—27 de junio), de las minas (12 de abril), de la revisión de la Constitución, por moción del doctor Palomeque (15 de mayo y 17 de junio), de las monedas de cobre, oro y plata (27-29 de mayo—3 de junio), de los haberes de don José Ellauri (22 de junio), del catastro (30 de junio), de la reconstrucción de un mercado y enajenación de la mitad de sus rentas para cubrir lo que se gastara en su reconstrucción (1.º de julio), de la higiene pública en los terrenos de la Dársena (3 de julio), de la subvención de 3,000 pesos al doctor Adolfo Rodríguez por su obra de recopilación de leyes (30 de junio), de una cárcel pública

(1) Sesión del 28 de abril de 1857.

(2) Sesión del 4 de mayo de 1857.

(3) Sesión del 7 de mayo de 1857.

(4) Sesión del 22 de mayo de 1857.

(25 de abril), del terraplén y nivelación de la Dársena, comprendida dentro de las calles Cerrito, Juncal, Florida y la parte norte del Puerto y el terreno que se prolongaba entre éste y la calle Cerro Largo (27 de junio), de la aprobación del tratado comercial con Bélgica (27 de junio), de los sueldos devengados por don Francisco Magariños, como ministro plenipotenciario (2 de julio); de la manera de llenar las bajas del ejército con los individuos condenados a él por los jueces competentes (14 de julio), de las leyes anuales sobre contribución directa y demás impuestos (9 de julio), y del pago de tres pesos por vara lineal impuesto a los dueños de los terrenos desde la calle Ibicuy hasta Río Negro y de ésta hasta el tajamar de la Aduana Nueva.

La situación financiera no mejoraba, por más que el Gobierno hacía lo posible por obtener recursos, fundado en aquella «confianza» de que tanto se habló al discutir el convenio con los acreedores del 48.

Ahí estaba, proponiendo al Cuerpo Legislativo el proyecto de enajenación de la tercera parte de las utilidades reservadas al fisco en el remate de las rentas de corrales y mercados, celebrado el 18 de enero de 1856 (1).

Se trataba de hacer dinero de todo para subvenir a las necesidades del Estado, antes de recurrir a los empréstitos, a aquellos que se previeron por algunos diputados para salvar el déficit del presupuesto general de gastos sancionado para 1857, y a lo cual se opuso el espíritu entonces prevalente.

EL BANCO MAUÁ

En medio de este desbarajuste, se destacó la figura eminente del financista don Ireneo Evangelista de Souza, conocido en la historia con el nombre de barón de Mauá. Este era un personaje brasileño, que tenía sus estrechas vinculaciones con la República, desde la época de la Defensa de Montevideo. Era un hombre no sólo de gran talento, sino dotado de un corazón magnánimo y generoso. Dentro del interés de su capital había nobleza de sentimiento. Poseía un concepto muy elevado de su misión en la tierra. A él mucho le debe el Brasil, en el orden del progreso moral, intelectual y material. Otro tanto sucedió en la República del Uruguay, donde su figura no ha sido aún bien estudiada. Su influencia en el orden de la moral administrativa y de la organización de las finanzas, fué indiscutible. Su genio se impuso desde el primer momento, porque no sólo poseía ciencia, cultura y sentimiento, sino un capital propio, importante, dispuesto a desarrollarlo en el comercio general del país, a la vez que alentar las fuerzas decaídas del Erario Nacional.

Lo previsto al discutirse la ley sobre Deuda Pública ahí estaba: se carecía de fondos para el pago de intereses y amortización. De nada

(1) Sesión del 27 de abril de 1857.

habían servido todas las leyes dictadas, y, sin embargo, era necesario salir de la situación ficticia en que se hallaba, viviendo de prestado, al día, y de pequeños empréstitos usurarios.

Era indispensable la concurrencia de una gran casa bancaria que apoyara al Gobierno en los trances apurados. Y esa sería la que existía en el país, y giraba bajo la firma de Mauá y C.^{ía}.

Esta casa ya había servido al país y al Gobierno, como hemos visto, en momentos angustiosos. Su respetabilidad era indiscutible. Ella levantaría el buen nombre de la administración pública en el exterior e interior.

Como es natural, apenas se enunció el pensamiento de autorizarla para elevarse a Banco de emisión, depósito y descuentos, nadie lo atacó, salvo el señor don Fernando Menck, quien, por ahí andaba, desde tiempo atrás, obstaculizando la realización de aquel pensamiento, dada la concesión hecha a su favor bajo el título de Banco Montevideano.

Mauá fué autorizado, pues, para hacer aquello, siendo el capital del Banco la suma de 1.200,000 pesos, sin perjuicio de elevarlo según el desenvolvimiento futuro. El minimum del valor de los billetes que el Banco emitiría, sería de una onza de oro sellado; pero durante la escasez de cambio menor, y mientras no hubiera una ley prohibitiva, podía el Banco fraccionar sus emisiones hasta un octavo de patacón. La emisión de billetes menores sería de 10 % sobre el capital efectivo del Banco, no pudiendo exceder al triple del fondo efectivo. No era obligatoria la aceptación de esos billetes. Debería publicarse mensualmente un balance, pudiendo el Gobierno inspeccionar sus operaciones (1).

Y, como el país entraba en una verdadera «nueva era», se vió que al lado del Banco Mauá aparecía la Sociedad de Cambios, existente en el país, pretendiendo lo mismo que aquél. Ella empezaría a funcionar con un capital de 600,000 pesos, pudiendo elevarse a dos millones (2).

Cualquiera podría ver la idea opositora al Banco Mauá, no sólo en la sanción del proyecto referente a la Sociedad de Cambio, sino en la discusión de aquella ley.

Cuatro sesiones se invirtieron para discutir un asunto que venía perfectamente estudiado del Senado y sido extensamente discutido en la prensa periódica. A cada momento se oponían dificultades, ya queriendo que se discutiera previamente la solicitud del señor Menck, ya obstruyéndolo durante el debate.

Como era natural, al frente de esa oposición se encontraba el señor Labandera, junto con el doctor don Mateo Magariños Cervantes;

(1) Sesiones del 9, 13, 17 y 19 de junio de 1857.

(2) Sesión del 26 de junio de 1857. Los ministros eran Joaquín Requena, Carlos de San Vicente y Lorenzo Batlle.

mientras el señor Bustamante aparecía compartiendo las opiniones del doctor Palomeque. Había también quienes, como Arteaga y Conde, secundaban el propósito de entorpecer la marcha del asunto.

El doctor Magariños le llevó una carga fuerte, impugnando el artículo que autorizaba el fraccionamiento de los billetes hasta un octavo de patacón. Hubo un momento en que apareció vencedor, lo que hubiera sido la muerte del magno pensamiento; pero, el señor López tuvo la buena idea de pedir la rectificación, y resultó el triunfo del sano criterio, después de la intervención del doctor Palomeque.

Pero, donde se vió la tendencia de la oposición, fué cuando se discutió la moción del doctor Palomeque para que los billetes del Banco Mauá «fueran recibidos en las Oficinas de recaudación pública, mientras una disposición legislativa no lo prohibiera, o que por ella se estableciese el exclusivo a este respecto».

Los señores Magariños y Labandera, en el acto, la combatieron; mientras su autor, y el señor Alvarez, a nombre de la Comisión en minoría, la defendían.

Mientras esta discusión se mantenía, la Cámara se quedaba sin número, siendo ésta ya la tercera sesión levantada durante la discusión.

Cuando se celebró la cuarta sesión, el señor don Miguel Alvarez, a nombre de la Comisión de Hacienda, compuesta de los señores Gregorio Conde, Juan C. Neves y Francisco F. Fistera, aceptó aquella indicación; mas al votarse, la Cámara, a la que habían concurrido casi todos sus miembros (sólo faltaban cinco), desechó lo propuesto.

Este triunfo de la oposición era un golpe de muerte al Banco, y así lo declaró en seguida el doctor Palomeque. «Desechado el artículo 6.º —dijo,—no debía continuar la discusión, porque sin aquel artículo no habría Banco.»

¡Y bien que lo comprendían los adversarios!

Sin embargo, la idea seguiría su trayectoria, y el Banco Mauá sería el baluarte donde se refugiaría el crédito de la nación.

Con esta victoria, se alentaron los opositores, y el doctor Magariños Cervantes se atrevió a proponer una enormidad, cual era la de que «el Banco otorgara escritura de hipoteca a favor del Erario Nacional por la cantidad igual a la emisión que hiciera, representada en propiedades raíces en el territorio de la República».

Esto era un absurdo, por lo que la Cámara lo rechazó *in limine*, por más que su autor, y el señor Labandera, lo sostuvieran, siendo combatidos por los señores Bustamante, Palomeque y Alvarez.

Las modificaciones aconsejadas por la Cámara fueron aceptadas por el Senado, sin titubear (1), y el 2 de julio era ley de la nación el Banco Mauá y C.^{ta}.

(1) Sesión del 2 de julio de 1857.

Fué una institución floreciente, que contribuyó al desarrollo de las fuerzas productoras de la riqueza nacional, ayudando al Gobierno en todas sus dificultades, como lo venía haciendo desde tiempo atrás. Estuvo adherido a los Gobiernos constitucionales y honestos de los señores Pereyra y Berro. Llegó a llenar funciones de un Banco de Estado; y a ello habría arribado, si la maldita guerra civil no hubiera venido a destruir la obra de sensatez, prudencia y progreso, llevada a término con tanta constancia por los varones que tenían por programa guerra al caudillaje y al analfabetismo, para edificar la nacionalidad sobre la educación y la muerte de los partidos personales.

Algunos de los principales adversarios de Mauá, consecuentes con sus ideas, aquí expresadas, vendrían más tarde, en 1863, al frente de la invasión condenable, y realizarían su propósito de echar por tierra tan útil institución; en cuya jornada serían acompañados por quien, como el doctor Bustamante, batallaría inconsecuentemente por todo lo contrario de lo que había sostenido ahora con verdadero ahinco.

El Banco Mauá fué un maestro de moralidad administrativa, enseñando a los delegados del Poder Ejecutivo, como se verá, a llevar una contabilidad severa, con motivo de los fondos públicos que allí se depositaban, como si fuera una verdadera Caja Nacional.

El Banco Mauá aun no había empezado a funcionar, y ya se veía nuevamente solicitado para salvar al país de una situación azarosa. Es sabido que se carecía de recursos para pagar los intereses y amortización de la Deuda Consolidada, esa eterna pesadilla que no dejaba vivir tranquilamente. Pues bien, la Comisión de Hacienda, compuesta de los señores Bustamante y Alvarez, tuvieron la inspiración de proponer a la Cámara se autorizara al Poder Ejecutivo para obtener del Banco Mauá y C.^{ta} la suma mensual de 22,500 pesos para aquellos fines. El Estado garantizaría ese empréstito con el producto de la Contribución Directa, y de cualquiera otra renta creada en beneficio de la Deuda Pública. En cambio de este importante servicio hecho al país, pues la tal garantía ofrecida era esencialmente nominal, como ya lo hemos explicado en otro momento, se otorgaba al Banco Mauá, o al que hiciere la operación, por toda compensación, el privilegio exclusivo de emitir en billetes menores el 20 % sobre el valor total de la emisión realizada, y asimismo el que sus billetes fueran admitidos en las oficinas públicas de recaudación (1).

Por medio de este proyecto se volvía a poner en tela de juicio el pensamiento del doctor Palomeque, cuando había sido vencido al proponer que los billetes del Banco Mauá se admitieran en las oficinas públicas. Aquella derrota había sido obra de una sorpresa. Los propios amigos del Gobierno habían sido los autores del mal. Y ahora,

(1) Sesión del 2 de julio de 1857. Ya se verá más adelante lo que Mauá decía de esa garantía ofrecida.

pasada aquella tribulación, volvían sobre sus pasos, y aprovechaban la ocasión para renovar el debate. Era hábil el procedimiento adoptado. El proyecto a todos interesaba, pues, cual más, cual menos, buscaban los medios para levantar el crédito de la Deuda Consolidada. Por consiguiente, procedieron con tino práctico los señores Alvarez y Bustamante al aprovechar este instante. Nadie se opuso al proyecto, salvo el señor Labandera, a quien hubo que coartar en el uso de la palabra, empleando los remedios parlamentarios. Él era el único opositor, y quería prolongar la discusión general, haciéndola declarar libre. La Cámara, que estaba cansada del obstruccionismo, y resuelta a votar aquel proyecto, sin modificación alguna, salvo un agregado ampliatorio propuesto por la misma Comisión, declaró innecesario prolongar la discusión general. Y en seguida, para que la revancha fuera completa, y se viera que el país quería salvarse, costara lo que costara, por lo que merecen un recuerdo tan infatigables campeones del bien, el señor Alvarez propuso un artículo 5.º que decía así: «La concesión hecha por el Cuerpo Legislativo a los Bancos particulares de emitir billetes menores de una onza de oro de su capital efectivo, cesará desde el día de la celebración del adelanto mensual de que trata el artículo 1.º de esta ley.» Y el artículo fué sancionado, no obstante la oposición sistemática del señor Labandera.

LA SITUACIÓN POLÍTICA EN 1857

El doctor Palomeque podía ahora decir: ¡El Banco Mauá y C.^{ta} vivirá! Podría enorgullecerse de haber contribuido a tan trascendental suceso (1).

La Cámara del 57 iba a terminar sus sesiones, dejando muestra del interés tomado en el estudio de las leyes anuales de impuesto y presupuesto general de gastos. La ley de contribución directa contenía reformas, las que la experiencia había enseñado al quererse poner en práctica. Sería una ley difícil de practicar, mientras la paz no permitiera tener en los Departamentos a hombres competentes. Se creaban los recaudadores, siendo éstos los que directamente enviarían los fondos a la Tesorería General (2).

Pero, la pésima situación financiera, agobiada por el azote de la fiebre amarilla, a la que se juntaría el despliegue de las pasiones embravecidas, continuaba, a punto que el presupuesto arrojaba un déficit, que se quería cubrir por los paliativos ordinarios de la rebaja de un 25 % sobre el sueldo de los pobres empleados, o, como lo proponía el doctor Palomeque, por medio de un empréstito.

Ni uno ni otro procedimiento se adoptó, porque el uno era inhu-

(1) Es sumamente interesante la correspondencia que el doctor Palomeque mantuvo con Mauá y de la cual me ocupo más adelante.

(2) Sesión del 9 de julio de 1857.

mano, y el otro imposible, con todas las rentas afectadas como se hallaban (1).

Y al aproximarse aquella clausura, iba a la Cámara a nombrar su Comisión Permanente. Entonces se destacó imponente la personalidad de su *digno presidente*, como lo llamara el ilustrado escritor doctor don Juan Carlos Gómez. Había que premiar todos sus afanes, y colocar en la Comisión Permanente un hombre enérgico, capaz de ir a Roma por todo para sostener el edificio que tanto había costado levantar. El Gobierno y sus amigos así lo reconocieron. No vieron otro ciudadano de mejores condiciones; y, en 1857, reaccionaron en el sentido del buen criterio, desautorizando así el impolítico proceder de 1856. En efecto, el primer nombre que apareció votado para componer aquella Comisión fué el del doctor Palomeque.

Parecía como que se supiera cuáles sucesos iban a desarrollarse, y que era necesario colocar allí a quienes tuvieran el talento enérgico para dominarlos, y saber secundar la acción del gobernante y su digno e ilustrado Ministerio, compuesto de los señores Requena, San Vicente y Batlle.

No triunfó fácilmente, como que sus adversarios tenían sus relevantes prendas. Sabían que era el ser que encarnaba honradamente las nuevas ideas, con profunda sinceridad, y que no omitiría sacrificio alguno para llevarlas a la cumbre, hasta verlas triunfantes, de hecho y de derecho, en el respeto al principio de autoridad y en la organización de un verdadero partido gubernamental, apoyado en los elementos sanos y conservadores de la sociedad; sin entrar a averiguar el pasado luctuoso a que cada uno hubiera pertenecido, porque bajo la bandera de la patria cabían todos los orientales. Conocían la fuerza de voluntad de este ciudadano, surgida del dolor y de los rigores de la suerte, donde había aprendido lo mucho que sabía, puesto ahí de manifiesto en su constante y nerviosa tarea como presidente de la Cámara, y como escritor político.

Sus adversarios, pues, pretendían inutilizarlo, porque sabían que no lo doblegarían, y que nunca, ni ante la miseria, le harían desandar el camino andado, para volver a ceñirse divisas que sólo representaban la desgracia de la tierra nativa, cuando no el crimen. Había que enseñar con el ejemplo, y él lo daría grande y elocuente, hasta en el error. Para él no había pasado, sino hombres buenos o malos, en el presente, como lo había dicho el doctor don Andrés Lamas en su brillante opúsculo de 1855. Por eso, ya veremos lo que aconsejaría, como político consecuente con el programa trazado, cuando, en esos días, falleciera el general don Manuel Oribe, quien, por razones ya explicadas en mi estudio sobre *La Diplomacia de la Defensa de Montevideo*, había quedado en el país, violándose lo pactado en la alianza con Ur-

(1) Sesión del 12 de julio de 1857.

quizá y el Imperio del Brasil, y en lo cual él no tuvo influencia alguna, sino los hombres que a él lo combatirían.

El encontraría un *hecho consumado*, un factor incorporado a la máquina política, y respetaría la personalidad de Oribe, después de muerto, aunque en vida lo combatiera.

Y esto era lo noble y lo sano.

En 1856, como lo tengo demostrado en un estudio publicado en *La Razón*, en 1898, contestando a una crítica insubstancial e infundada que el diario *El Nacional* hizo a mi libro *El año fecundo*, el doctor Palomeque, de acuerdo con sus doctrinas gubernamentales, en unión de Magariños Cervantes (1), combatió al general Oribe, a la *influencia*, como entonces se llamaba, la cual pretendía vencer al Gobierno en la lucha electoral.

Entonces se pronunció claramente la tendencia contra el caudillaje de Flores y de Oribe. El primero se ausentó, y fué a dar a Entre Ríos, desde donde conservaba correspondencia amistosa con el doctor Palomeque, su amigo y compadre. El otro, moriría al año siguiente, cuando se incubaban acontecimientos graves; y fué entonces que, ante la muerte, el doctor Palomeque no vió en el general Oribe sino al militar pundonoroso que había luchado por la independencia de la patria americana. Y ante su féretro, todos los que opinaban sanamente, se descubrieron, porque debían descubrirse. Quienes, como Sarmiento, Mitre y Gómez, pondrían el grito en el cielo, lanzando anatemas contra el decreto del Poder Ejecutivo, decretando los honores correspondientes al militar, no se daban cuenta de la situación por la cual atravesaba la República Oriental del Uruguay. El general Oribe estaba en el país por obra del mismo presidente de la Confederación Argentina, que era quien había influido decididamente para que quedara, recurriendo a la inventiva de que le había salvado la vida en un momento dado.

Sarmiento, que tanto gritó contra el *asesino* Oribe, y quienes le decretaban los honores militares correspondientes a su grado de general y guerrero de la Independencia, sería, sin embargo, quien los decretaría para honrar la memoria del general Urquiza. ¡Y Dios sabe lo que hizo Urquiza, compañero de Oribe, hasta que cayó Rosas!

La política tiene sus exigencias; toma las cosas como se encuentran, y de ahí parte, para ir, poco a poco, modificando la situación. Lo que Sarmiento creía bueno en su país, respecto de Urquiza, no lo consideraba tal en la vecina orilla respecto de Oribe. ¡Qué criterio! Y él había sido el secretario de Urquiza, cuyas manos estaban tintas de sangre y manchadas por actos delictuosos de otra naturaleza, todo lo cual, y con razón, se olvida, ante la obra de Caseros. Sarmiento y Mitre, ¡cosa curiosa!, eran evolucionistas en su tierra nativa; pero no querían se fuera en la patria vecina.

(1) Véase *Revista Histórica*, de Montevideo, año 1914.

Pues bien, el doctor Palomeque fué designado para miembro de la Comisión Permanente. Obtuvo quince votos, contra el señor Acosta, que consiguió nueve, y los señores Alvarez y Zás, uno. El voto a favor del señor Zás fué el del doctor Palomeque, visto que el señor Acosta, que votó primero, no tuvo la caballerosidad de darlo por su adversario, sino por el señor Alvarez (1). Lo midió con la misma vara. Los demás candidatos triunfantes, fueron, para titulares, Luis Magariños, Echenique, Solsona, Fistera, y para suplentes, Labandera (2), Aguiar (16 votos, el que más obtuvo), Latorre, Arteaga y López.

Clausurada la Cámara, el doctor Palomeque continuó su tarea política en la prensa. Había llenado su misión como legislador, y ahora tenía que ir al corazón del pueblo, como tribuno y periodista, a darle forma completa a su pensamiento gubernamental.

Los ánimos estaban preocupados con la cuestión electoral a desenvolverse en noviembre y diciembre. Ya el doctor Bustamante había tocado el punto en la Cámara, presentando un proyecto adicional a la ley de elecciones, y otro derogando las leyes de 4 y 13 de junio de 1853 sobre ciudadanía legal y Registro Cívico, aunque sin resultado alguno (3).

La cuestión política, pues, iba a debatirse con las leyes existentes, las cuales garantían perfectamente los derechos de los ciudadanos, siempre que ellas se cumplieran por los Gobiernos patriarcales de la época.

Dos tendencias se dibujaban en el horizonte político: una, la de resucitar los viejos partidos del pasado; otra, la de formar una agrupación nueva con los elementos de ambas fracciones, sobre la base del sostenimiento del Gobierno constitucional existente. La tarea era difícil y escabrosa, en lo cual consistía el mérito de quien la realizara.

Ya el año anterior la lucha había tenido caracteres acentuados. El Gobierno había sido inflexible tratándose del caudillaje de Flores y Oribe, y les había hecho sentir su poder moral; a tal punto, que destituyó al comandante militar de Maldonado, el coronel don Bernardino Olid, por haberse mezclado en las elecciones para apoyar la candidatura de don Bernardo P. Berro, para senador.

El terreno estaba preparado desde 1851 por una prédica constante de hombres de todos los partidos. Todos estaban convencidos de la necesidad de concluir con esas fracciones atávicas, desde Herrera y Obes, Lamas, Berro y Acevedo, hasta los mismos caudillos como Flo-

(1) Es conveniente dejar constancia de que el señor Labandera votó por el doctor Palomeque y demás candidatos triunfantes. No así el doctor Bustamante.

(2) El señor Labandera tuvo 15 votos, dándolo por él el doctor Palomeque.

(3) Sesión del 9 de julio de 1857.

res y Oribe. Después de la paz de octubre del 51 la faz del país había cambiado, si bien los directores de entonces, muerto el benemérito general don Eugenio Garzón, no supieron tomar el camino recto y bueno : el de la candidatura de don Manuel Herrera y Obes, por la cual tanto trabajó, en Salto y Tacuarembó, el doctor Palomeque, en unión con su amigo don Mauricio Blanes.

Aquellas ideas eran combatidas por hombres como don Juan Carlos Gómez y Bustamante. Estos creían que debía persistirse en hacer flamear la bandera de la Defensa de Montevideo ; no creían que fuera práctico olvidar ese pasado, para que la historia lo juzgara desapasionadamente. El doctor Palomeque, por el contrario, fiel a sus pensamientos, desde India Muerta, vió llegado el instante de reunir a todos los hombres de buena voluntad alrededor del programa del presidente de la República, organizando un partido popular que encauzara esas grandes aspiraciones.

Pensaba sabiamente al vincular el pueblo y el Gobierno por medio de un pensamiento hondo. Su inteligencia de estadista le enseñaba claramente el derrotero a seguir, pues pudiera que no se le presentara otra ocasión más propicia para hacer prácticas sus ideas.

En las alturas del poder iban a hacerse viables, pero con un programa de principios, escrito y proclamado por los hombres desde el seno del pueblo donde se agitaban. Llevarían al Gobierno la fuerza necesaria en toda democracia, para demostrar que no era el gobernante quien imponía su voluntad al pueblo, sino que aquél se inspiraba en los dictados de éste, haciéndolos efectivos en las deliberaciones del poder. De esta manera, llegado el momento psicológico, el Gobierno encontraría una fuerza popular preparada en que apoyarse para el mantenimiento de las instituciones atacadas.

Para realizarlo, se necesitaba la prensa, el centro directivo, la reunión popular. Era indispensable la propaganda, para que la idea penetrara en el seno de las masas, ilustrándolas enérgicamente, y pudieran, llegado el instante supremo, saber qué era lo que defendían, y por qué lo defendían.

Esta tarea sería la que asumió el doctor Palomeque, rodeado de hombres tales como Mateo Magariños, Luis Magariños, Francisco J. Aguiar y otros (1). En su consecuencia, fundaron el diario *La Opinión Pública* invitando a los ciudadanos más expectables del país, de uno y otro centro tradicional, a una reunión que se celebraría en el salón de la Universidad.

La reunión se efectuó, y allí se constituyó el *Club de la Unión*, con su programa definido, donde se modelaba definitivamente la idea que por ahí había andado suelta, sin encontrar un punto de apoyo en el Gobierno constitucional y en el pueblo de donde él surgiera.

(1) Al respecto, véase el artículo de Mateo Magariños Cervantes publicado en la *Revista Histórica* (año 1914), tomo 7.º

Todos comprendieron que la hora había llegado de olvidar el pasado y de darle organización al nuevo partido surgido a la vida, denominado el Nacional. Los hombres del viejo partido de Oribe concurren a la invitación, lo mismo que los de la Defensa. Sin embargo, hubo quien, como el doctor Bustamante, se retiró indignado, declarando que allí no estaba su colectividad política. De este pensamiento participaba el doctor don Juan Carlos Gómez. Seguían viviendo en el pasado luctuoso, sin darse cuenta del progreso operado en el país. Lo curioso era, que el doctor Gómez, viviendo, como vivía, en Buenos Aires, no trajera al país las ideas evolutivas y de tolerancia que allí dominaban, desde la caída de Rosas.

Frente al diario *La Opinión Pública* se colocaron Juan Carlos Gómez, Bustamante y otros, con *El Nacional*.

Por su parte, el doctor Palomeque y sus amigos constituían aquel Club, poniendo de presidente al venerable y valiente guerrero de la Independencia, soldado de la Defensa de Montevideo, el general don Anacleto Medina, entonces en la plenitud de sus fuerzas morales, físicas e intelectuales.

Esta personalidad, llena de virtudes, estaba muy unida al doctor Palomeque desde los tiempos en que éste empezó a actuar en la Defensa de Montevideo. Es sabido que en 1847 el general Medina ya lo indicaba al doctor Palomeque para que lo acompañara en su tarea militar y administrativa en la Colonia. El general Medina era un hombre de una inteligencia muy despierta.

Era un *tape* de las Misiones, que, desde soldado, había rolado en los sucesos de la guerra de la Independencia. Tenía en su foja de servicios rasgos nobles, de gratitud imperecedera, cual el que realizó con el general Urquiza.

Nunca fué sanguinario, sino soldado obediente de la escuela honesta de entonces.

Había actuado heroicamente en la guerra del Brasil, en la batalla de Ituzaingó, Bacacay, etc. ; de regreso a Buenos Aires, como soldado a las órdenes de Lavalle, se halló combatiendo al general Rosas. Luchó en las *Viscacheras*, donde murió el ilustre militar de origen francés, el coronel Rauch. Era uno de los granaderos a caballo de Lavalle. Llegó a Buenos Aires, *solito*, dando, él, el parte *verbal* de la batalla librada, único que existe en los anales de la historia según lo afirma el doctor López. Siguió luego la corriente revolucionaria de la época, y cuando Oribe, al servicio de Rosas, invadió la tierra nativa, aquí estuvo Medina defendiendo la independencia nacional en todos los rincones de la República. Fué uno de los soldados más bien conceptuados de su época. No era un guerrillero vulgar, sino un militar, que, al conocimiento del terreno, unía el de la táctica. Por todo ello, cuando la paz del 51 fué un hecho, el *tape*, como se le llamaba, ya tenía su espíritu saturado de buenas ideas, porque había visto de cerca

las calamidades engendradas por el odio de las malditas guerras fraticidas. Su carácter humano así se revelaba, dentro de su obediencia a la ley y al superior. Vivía convencido de que el secreto del bienestar nacional se hallaba en la paz y en el sostenimiento de los Gobiernos constitucionales. De ahí que no se le viera participar del motín militar del 53, ni de ninguna de las revueltas, tan comunes en aquellos tiempos duros.

Tenía por el doctor Palomeque una verdadera afección, que nunca se entibió. Por lo tanto, cuando se trató de buscar al hombre de acción que se vinculara al hombre de pensamiento, a fin de sostener las ideas de unión de los orientales y la muerte de los viejos partidos personales, ahí estuvo el general don Anacleto Medina al lado del doctor Palomeque, proclamando la candidatura de Pereyra y sirviéndola fielmente. No había soldado de mayor capacidad que él, porque si bien no poseía las dotes literarias del general César Díaz, si no era un escritor de nota, si apenas sabía trazar los rasgos de su nombre y apellido, con letras parecidas a las del Gran Capitán o Napoleón, en cambio, al frente de sus soldados desarrollaba planes de batalla que le hacían temible al enemigo. ¡El nombre del general Medina sería para el revolucionario futuro, de 1863, como el del Cid para sus combatientes!

Fué este el ciudadano colocado como presidente del Club Unión, cuya influencia entre los hombres de acción del viejo partido de la Defensa era indiscutible. Él, y los doctores Palomeque y Magariños —éstos entre los ciudadanos de las letras y del pensamiento,—atrajeron al centro de opinión popular, el contingente de quienes pertenecieron a la Defensa, teniendo, además, en las altas esferas del Gobierno, a representantes de la misma, como ser, Pereyra, Requena, San Vicente, Batlle. Puede asegurarse, pues, que todo lo de mayor valía de esa colectividad había evolucionado y entrado por el camino de las nuevas ideas. Ellos contribuían a vigorizar el Partido Nacional, que, nacido a la vida, como símbolo, en distintos desgraciados momentos, iba, por último, a tomar su sello definitivo, organizándose políticamente desde el Gobierno a las filas populares, con su programa de principios, su prensa y su centro directivo.

Los que no quisieran marchar con la evolución, y recurrieran a la acción violenta, para combatir una situación creada por ellos mismos, surgida de sucesos forjados por su propia acción, como ser, el motín del 53, tumbando Gobiernos constitucionales, sin que hubiera un poder fuerte y legal que los castigara, por lo que se envalentonarían ante la impunidad, quedarían rezagados en el escenario de la vida pública. Esos vivirían como solitarios, sin poner al servicio del país las dotes de inteligencia de que estaban dotados, como sucedería con el doctor Juan Carlos Gómez, infecundo para su patria y sus ideas.

Si esto aportaba el partido de la Defensa, en inmensa mayoría,

como poder e idea, por su parte, los hombres del viejo partido de Oribe, muerto éste en esos días, diciendo, según se asegura, que sus amigos coadyuvaran al sostenimiento de la administración Pereyra, procedieron con suma habilidad al ver la actitud de Gómez y sus compañeros. En efecto, aceptaron las cosas tal cual venían, a la que ellos también habían cooperado, como revoltosos, en 1855, formando en las filas de quienes desalojaron del poder al general Flores. Contribuyeron con todo el capital moral y material de su colectividad, indudablemente poderosa, para entrar a la nueva organización, depurándose, en ese contacto de hombres y hechos, de los defectos y vicios, adquiridos durante la dominación personal de su caudillo.

Y así, esta gran fuerza moral, material e intelectual, que se había exhibido al proclamarse la candidatura de Pereyra, no encontraba otra al frente que programara principios superiores de honradez y moralidad política, capaces de arrollarla en la discusión y en la brega material.

Ella estaba dirigida, en el Gobierno, y en todas partes, por los hombres de la Defensa, sea dicho en honor de la verdad, como lo probaban los nombres ya citados de Pereyra, Batlle, Medina, Palomeque, Magariños, Aguiar, Requena, San Vicente, etc.

El mismo Bustamante y sus amigos a ello cooperaban, y cooperarían hasta el último momento, separándose del camino emprendido con tanto celo y honor, como se ha visto, sin que imperaran en la administración el despotismo y la tiranía, como para combatirlos reciamente. Ni siquiera podían sostener que en el diarismo tenían mejores cabezas políticas que las de Magariños y Palomeque, los dos *leaders* que aparecían en la *Opinión Pública* frente a *El Nacional* de Gómez. Por el contrario, como cerebros políticos se revelaron más robustos y pensadores los primeros que el último, prestando al país verdaderos e importantes servicios, lo que no hizo el distinguido escritor doctor Gómez (1).

LOS DOCTORES PALOMEQUE Y GÓMEZ

El Partido Nacional, pues, se presentaba fuerte en la arena política. Sus directores sabían lo que hacían; habían revelado talento para constituir una fuerza incommovible, siempre que perduraran en sus propósitos, en sus fines y en sus medios, y se diera a los autores de la obra el lugar correspondiente para preservarla de los ataques enemigos. ¡Desgraciado del día en que cayera en manos que no la comprendieran, y que, por lo mismo, la desnaturalizaran, incurriendo en el error de sus enemigos, en el hacerla atávica, volviéndola al pasado luctuoso, y no hacia el porvenir!

(1) El programa del Club Unión se encuentra en *La Opinión Pública*.

Gómez y sus amigos no quisieron acatar esa ley de la mayoría popular, la de la opinión pública, la idea evolutiva. No se dieron cuenta del enorme poder de un Gobierno que tenía su apoyo en el seno del pueblo. Se guiaron sólo por sus malos instintos, cuando los tenían buenos, y los odios del pasado les encegueció. Iniciaron, pues, la jornada política desde *El Nacional*, empleando esa fraseología cáustica de la prensa tigre de todas las épocas, y empezaron a sublevar las pasiones. No podían concebir que los hombres que en un tiempo estuvieron separados por un abismo de sangre y de rencores, se unieran, al fin, para buscar por los medios pacíficos y legales la felicidad de la República. ¡Querían tener siempre tendido el arco, sin recordar que día llegaría en que se rompería en sus propias manos, recogiendo el fruto de una propaganda que había sembrado vientos: la tempestad!

Asombra leer los artículos personales del doctor Gómez en contra del digno presidente de la Cámara de Representantes, como acababa de calificarle en carta privada.

El doctor Gómez tenía formado un concepto demasiado elevado de su personalidad, lo que le perdió en política. Acostumbrado al juego de las damas, en el que era muy afortunado, esperaba que todos lo consideraran y lo adoraran por su talento. Creía que él solo valía mucho más que sus adversarios, intelectual y políticamente, por lo que los despreciaba desde su olímpico asiento. Tenía toda la infatuación del círculo bonaerense donde actuó, hasta su arribo a Montevideo para fundar *El Nacional*. Venía infiltrado del espíritu despreciativo de Sarmiento y Mitre. Se consideraba bastante, por sí solo, para, con un artículo de diario, donde calificara de *pilluelo de café* al doctor Palomeque, echar por tierra al Gobierno y destruir la reputación de un ciudadano, forjada paso a paso, en medio de sufrimientos, privaciones y aureola de honestidad. No creía en el talento político del doctor Palomeque, ni siquiera en que tuviera influencia en el Gobierno para abatir sus altiveces de periodista. Más aún: en su endiosamiento, en la adoración de su personalidad, contemplándose, como aquellos servidores del Indú, a las orillas del Ganges, hasta producir el nirvana, no quería concebir que el doctor Palomeque, estando en la situación en que se hallaba, con elementos importantes de investigación a su alcance, pudiera conocer, estar al tanto, de cuanto proyectaban sus adversarios, en medio del secreto y en el misterio.

El doctor Palomeque no estaba dotado de la facundia literaria de su adversario, pero era un hombre de inteligencia muy fina, nacido para la vida pública. No exageraba su personalidad; le imprimía un sello de humildad y sencillez que sólo desaparecía cuando el adversario había ido demasiado lejos en el ataque. Tenía la paciencia de recibir el golpe, dejar que se repitiera, y sólo contestarlo después de agotados todos los recursos para evitar el duelo. Era hombre más tranquilo y reflexivo que el doctor Gómez, dotado de un valor proverbial

entre los de su familia, entre la gente bien nacida, formada en la escuela de la dignidad. Por consiguiente, le daba pena que un talento como el del doctor Gómez se perdiera estérilmente para la patria, y para sí mismo, dividiendo una fuerza que hasta entonces había marchado unida en el gobierno de la sociedad, dando frutos tan hermosos para el país. Y lo lamentaba, tanto más cuanto que se venía a dividir en los momentos precisos en que todas las dificultades de un orden económico y financiero se habían salvado, permitiendo al Gobierno ir recto a hacer vida esencialmente administrativa. Era necesario impedir que a éste se le pusieran piedras en el camino, que le distrajeran de las cuestiones a redondear. Se necesitaba la paz de los espíritus, a todo trance, para que no se fuera al diablo todo lo construído con tanta paciencia.

Una nueva revuelta traería gastos enormes para administración tan maltrecha, que recién tenía esperanzas de mejores días, con la instalación del Banco Mauá y C.^{ia}. Producido el hecho, el descrédito en el exterior la amenazaría de muerte. Cometería un crimen imperdonable quien se atreviera a producir el cataclismo, y sobre él debería caer, sin compasión, el peso de la ley, como lo dijo *El Comercio del Plata* al subir a la presidencia de la República el señor Pereyra, es decir, el diario de los amores políticos de Gómez, César Díaz y sus amigos.

Todo esto era lo que quería evitar el doctor Palomeque, conociendo el carácter vehemente del doctor Gómez, temeroso de las consecuencias fatales a sobrevenir. Podía distanciarlos la manera de encarar el problema de la situación. Esto no era un crimen, por lo que no desconocía en Gómez el derecho de pensar; pero lo que no comprendía era cómo, no siendo el gobernante un déspota, un tirano, un malversador de fondos públicos, y existiendo en el país la libertad de imprenta y la de reunión, se quería, al amparo de estas dos, hacer un mal uso de ella para lanzar al país en el camino del desorden, del desquicio, del derramamiento de la sangre. ¡Y no lo comprendía, porque sólo los pueblos oprimidos son los que tienen derecho a sublevarse! Y en este caso no se hallaba el Gobierno liberal y honrado del señor Pereyra.

A fin de traer al doctor Gómez al terreno de la razón, encargó a un amigo común, el caballero español don Gil Alfaro, lo visitase, y le rogase quisiera honrarle con una conferencia. Dicho señor aceptó, con el mayor placer, la delicada comisión confiada, y años, muchos años después, muertos ya los dos protagonistas, amigos muy queridos de aquel señor, éste nos relataba la escena desarrollada cuando se presentó ante el doctor Gómez.

El señor Alfaro tenía admiración por el doctor Gómez: no lo llamaba sino con el nombre de Juan Carlos. Esta admiración no llegaba hasta eclipsar el cariño que profesaba al doctor Palomeque, cuya amis-

tad resistió al tiempo, a los dolores y a la muerte. Es una de las pocas amistades dignas de ponerlas como ejemplo, mantenida entre dos hombres superiores, de una cultura exquisita. Ya se aquilatará todo ello al leer la hermosa correspondencia mantenida, que publicaremos a su tiempo, y en la que se revela la independencia de carácter de sus autores y los secretos de la política de la época. Allí se ven al desnudo sus almas nobles, y se conocen hasta los recursos de que más de una vez tuvieron que valerse, prueba de su ingenio, para conseguir el triunfo de la verdad.

Pues bien, el señor Alfaro llegó a la habitación donde moraba el doctor Gómez, encontrándolo en la cama. Allí, recostado el uno, y sentado el otro, tuvo lugar la corta pero expresiva entrevista entre un hombre de corazón sencillo y humilde y un alma altiva y lírica. Expuesto el objeto de la visita, Gómez comenzó por rechazarla, por no tener nada que tratar con el doctor Palomeque, a quien consideraba un ser inferior por su inteligencia y moralidad. No hubo medio de convencerlo. Y cuando ya el señor Alfaro, amigo que estimaba a ambos adversarios, por lo que lamentaba el distanciamiento, agotó toda su artillería ligera, se le ocurrió argumentar con la pesada, diciéndole sentenciosamente: «Mire, amigo, que Palomeque conoce todos sus planes, y los puede desbaratar en un momento, cuando él lo quiera; lo que si no ha hecho ya, inutilizándolo a usted y a sus amigos, según él, se debe a que espera el resultado de esta mi misión». Y Gómez, como si hubiera sentido una picadura, hizo a un lado su abrigo de cama, y saltando de ésta, cayó al suelo, diciendo, con el orgullo despreciativo del ser que se considera omnipotente: «¡Qué sabe ese Palomeque; es un pigmeo, mi amigo! ¡Dígale que haga lo que quiera!»

Agotado todo recurso, no quedaba al Gobierno más medida que la de cortar por lo sano, a fin de impedir la realización de los planes de los revoltosos; cosa fácil ésta en aquellos tiempos en que cuatro estudiantes, dirigidos por un desequilibrado, con escopetas rotas, pistolas viejas y trabucos de maricastaña debajo del poncho, tercerolas desvencijadas y sables mohosos, salían por esas calles de Dios a derribar, ¡y derribaban Gobiernos honrados y constitucionales, por ellos mismos organizados pocos días antes!

Gómez y sus elementos, entre los cuales se hallaban militares al servicio del Gobierno, desempeñando funciones civiles en los Departamentos, como sucedía con los coroneles Freire y Magariños, jefes políticos en Tacuarembó y Maldonado, respectivamente, se preparaban para celebrar una reunión política en el teatro San Felipe. Las pasiones estaban exaltadas y llevadas al paroxismo. La pluma vibrante de Gómez, y aun la lacerada de Bustamante, habían caldeado la atmósfera. Ya no se oía sino el pedido del niño griego, de pólvora y balas. Los adversarios del Gobierno habían comprendido que no podían, en

el atrio electoral, contrarrestar la fuerza poderosa de aquel nuevo partido surgido a la vida nacional. La correspondencia de Bustamante con los ciudadanos de Maldonado, en la cual se destaca una carta, bellísima en el fondo y en la forma, digna de su talento político y literario; la del general Medina con el coronel Freire, en la que se encuentra una epístola honrosa para este último militar, dan a conocer cómo laboraban ambas fracciones en la lucha electoral (1).

Este círculo pequeño resolvió hallar en la violencia lo que no encontraría en el juego eleccionario, porque realmente carecía de elementos para ello. No había querido entrar, o continuar, en la política evolutiva, ni celebrar Gómez aquella conferencia, en la que Palomeque propondría los medios de conciliar las cosas, dando al círculo de aquél, por medio de un acuerdo digno, lo que le correspondería en las Cámaras legislativas. Querían todo; lo querían a sangre y fuego, convencidos de su derrota política.

Buscaban su triunfo por ese camino, porque en 1853 y 1855 las cosas les había salido bien, no recibiendo el castigo severo que merecía el delito cometido. La impunidad los alentaba. Olvidaban que a la tercera sería la vencida, y que tantas veces iba el cántaro al agua que al fin se rompía. El partido conservador, o sea, el de las revueltas contra los Gobiernos constitucionales, persistiría en su pésima escuela, enseñando a la juventud el mal derrotero.

Desde luego, Gómez no podía olvidar que los hombres que estaban en el Gobierno pertenecían al partido de la Defensa, por su origen, aunque con ideas muy altruistas; pues aleccionados por las duras lecciones del pasado, no hacían exclusión de individuo alguno, con tal que no se contrariaran las tendencias generales del país. Este quería olvidar lo luctuoso, lo pasado. Y esto fué, aunque erróneamente, lo que invocó el Gobierno al prohibir la reunión a celebrarse en el Teatro San Felipe. Invocaba, como argumento fundamental, el hecho de querer resucitarse los viejos partidos, incitando con ello a la anarquía, a los odios y a la guerra civil. El propósito era muy noble, pero era un error fundamental querer impedir que el pueblo opinara como quisiera, siempre que con ello no atacara el derecho de un tercero. Resucitar el pasado, era un error, políticamente considerado. El país no podía vivir contemplando y derramando más sangre fratricida. Esto era indudable, pero también lo era que en nombre de la libertad no se podía impedir que cada cual opinara a su gusto, sin lesionar el derecho ajeno. Y levantar un programa, en el que cierto número de hombres se dijera partidarios de la Defensa de Montevideo, sería un extravío, un error político, un mal, dado al estado del país; pero no un delito, una acción que autorizara al Gobierno para convertirse en tutor político de los ciudadanos. Pero, era tal el noble fin que les

(1) Estas cartas van en el *Apéndice*.

guiaba, al interpretar la opinión pública, que el pueblo aplaudió aquella medida gubernativa, la cual lo salvaba de un movimiento anárquico a realizarse, que hubiera sido necesario reprimir a balazos. Y era aquí donde estaba el secreto de la medida adoptada. Se sabía cuáles eran los planes de los ciudadanos a reunirse en el Teatro San Felipe, tal cual el señor Alfaro se lo había hecho saber a su amigo don Juan Carlos. Lo que se iba a hacer era lo siguiente: embravecer las pasiones con discursos incendiarios, y luego lanzarse a la calle en son de revuelta. Era muy fácil entonces derrumbar Gobiernos, pues éstos carecían de ejército en que apoyarse, en caso necesario. El Gobierno no tenía más fuerza que la que surgía de la opinión pública. Esta tendencia revoltosa, ya conocida, fué más tarde confesada por uno de los jóvenes de la época, de los más exaltados, que luego figuró tristemente en las altas esferas del Estado, el señor don Cándido Bustamante. Así lo confesó noblemente, andando los años, en 1860, en el Jurado con el doctor Antonio de las Carreras.

El Gobierno, pues, puso en práctica la humana tesis sostenida por el presidente argentino Avellaneda, años después, en 1876, de que era mejor desarmar que esperar a que los revoltosos salieran a la calle para entonces ahogar en sangre el movimiento rebelde y sedicioso. Se tiró, pues, el decreto prohibiendo la reunión, firmado por el presidente de la República y su Ministerio, compuesto de Requena, San Vicente y Batlle. Y se completó la obra, desterrando al doctor Gómez y algunos de sus amigos para Buenos Aires.

LOS PREÁMBULOS DE LA REVUELTA

Estas resoluciones produjeron la impresión consiguiente. La Junta Económico-Administrativa se singularizó, tomando una actitud poco común, cual la de abogar por el respeto a las libertades individuales. Otro tanto sucedió cuando el asunto fué llevado a la Comisión Permanente, por el Poder Ejecutivo, al dar cuenta de las medidas adoptadas. Entonces se vió cuán acertadamente había procedido la Cámara al nombrar al doctor Palomeque para miembro de esta agrupación. Frente a la ilustrada personalidad del doctor don Florentino Castellanos, que sostuvo, en el terreno de la teoría, del precepto constitucional, que el Poder Ejecutivo no podía desterrar a ningún ciudadano, sin antes someterlo a las autoridades legales, se colocó, con toda convicción, el doctor Palomeque, ya consagrado el verdadero *leader* del Gobierno en el Cuerpo Legislativo y en la prensa periódica.

El doctor Castellanos fué el hombre de letras, colocado fuera de los sucesos, de lo terrenal, estudiando la cuestión desde el gabinete, con todo el gran talento jurídico que le distinguía. Consideraba el caso ordinario, con prescindencia de las pasiones políticas rugientes en la calle. No tenía presente que los mejores planes políticos conce-

bidos en la soledad, sin contar con esa masa, que luego merodea alrededor de sus directores, se vienen al suelo cuando se sale a la calle, y el pensador se confunde con la muchedumbre, ese ser anónimo, factor indiscutible que os arrastra a hacer todo lo contrario de cuanto habéis soñado y pensado en el silencio de vuestro gabinete. Ese delirio de la muchedumbre, existente en todas las épocas, era el que no había conocido, ni conocería nunca, un sabio jurisconsulto como el doctor Castellanos. No era un político sino un pensador, un filósofo, un hombre de consejo, para saber lo que se haría en un momento dado, de acuerdo con lo que las leyes disponían. Hasta ahí llegaba su acción. Fuera de ahí, él no era hombre resuelto a dar el salto, ya atrás, ya adelante, requerido por las circunstancias. Por eso ya hemos visto con qué dignidad legal cayó del Ministerio en 1853. No poseía la flexibilidad necesaria para cortar la corriente de la vida política. Ponía en su labor lo que atesoraba: su ciencia y su conciencia. Carecía de la ambición, ese acicate sin el cual nada hace el político. Era hombre público, de gran reputación por su honradez, en el fondo y en la forma, poseedor de fortuna seria que le permitía retirarse a su hogar cuando quisiera, sin que la política lo molestara ni afectara en lo más mínimo, sin perjuicio, eso sí, de volver a prestar su concurso de gabinete, pasivo, sin mezclarse en las pasiones populares, cuando se le reclamara su concurso desinteresado y sus servicios valiosos. Había sido ministro de Hacienda, honrado a carta cabal, jurisconsulto entendido, y miembro del Cuerpo Legislativo; y en la actualidad, muy digno presidente del Senado. En este honroso cargo lo hallarían más tarde los sucesos del 63 a 65, sin que pudiera prestar al país los servicios reclamados en aquellos días espantosos, porque, como lo veremos, no era el hombre de ambición política, capaz de arremangarse y salir a la arena a confundirse con los hombres y las cosas, codearse con ellos, y rozarse con la sangre derramada, aunque para salir siempre puro, como el ave que atraviesa el charco y luego remonta el vuelo sacudiendo las impurezas, y abillantando su plumaje con el calor del sol por el espacio que atraviesa.

Un hombre con tales condiciones de talento, de carácter, bondad, erudición y alma de puritano, se presentó en la lid, para honra del Gobierno y del Parlamento uruguayo. Pronunció un discurso lleno de ciencia; encantó con su palabra convincente y convencida; demostró su independencia de criterio, frente al Gobierno amigo; se remontó alto, e invocó aquel histórico apotegma de *sálvense los principios, aunque se hundan las colonias*. Fué el más honrado y el más impresionante de los discursos pronunciados en nuestro Parlamento, por la autoridad de quien emanaba, por las ideas sustentadas, y por el momento crítico en que se sostenían. El doctor Castellanos desempeñaba el papel del juez, inalterable, en el tempestuoso mar de las pasiones. No descendía de su asiento, no iba al anfiteatro, sino que, desde

su alto solio, dictaba el fallo, sucediera lo que sucediera, importándole un bledo que hiriera la persona o los intereses de sus allegados o enemigos. No se atrevía a forjar una nueva ley para salvar al reo, aunque su razón y sus sentimientos le dijeran que no debía condenarle, pues se limitaba a aplicarle la dictada, la escrita en el papel, y no la que su privilegiada inteligencia y su noble corazón eran capaces de improvisar como legislador.

Así como la tradición ha magnificado la oración que Pitt pronunciara en el Parlamento inglés, cuando abogaba por la causa de los independientes de Norte América, de la cual no ha quedado una línea escrita, conservada, sin embargo, en la *tradición de la casa*, y en la memoria de su pueblo, por la impresión que ella produjo, pareciendo oírse resonar aún aquella voz, en los momentos solemnes para la nación inglesa; así, el discurso del doctor Castellanos produjo una impresión inacabable, honda, muy fuerte, en la sociedad de entonces.

Se ha transmitido de viejos a jóvenes, de generación en generación, ese movimiento del alma de entonces a los que vivimos de los grandes recuerdos, describiéndonos la noble figura del orador cuando su voz sonora, acompañada de su ademán majestuoso y de su gesto sereno, cruzaba suave y tranquilo por las ondas del recinto legislativo, modulando, a veces, un ruego, otras tomando el acento del justo, del profeta que anuncia el porvenir. Fué honra de la época y de libertad parlamentaria tan celebrada oración. Hubo, pues, en todos los legisladores la más absoluta libertad para opinar y emitir sus ideas. A nadie se coartó, como prueba de la liberalidad del Gobierno y de la libertad reinante.

Pues bien, hemos dicho que en frente a este coloso del pensamiento se colocó el doctor Palomeque. En verdad que se necesitaba mucha conciencia de la misión a llenar, para presentarse en la arena a medirse con tal adversario. Era el discípulo delante del maestro; pero el discípulo que había aprendido en escuela muy distinta, en el libro de la vida. No era, como el doctor Castellanos, el estudiante de Charcas venido al terruño después de oír a ilustres catedráticos, para difundir entre sus coeterráneos la ciencia ya adquirida, sino el modesto discípulo de la ciudad de Buenos Aires, corrido a vergazos por la mazmorra, obligado a regresar a Montevideo, donde se educara por sí solo, hasta que fundara la Universidad, y el Instituto, para escuchar, en la primera, de los labios de su sabio amigo, el doctor Tristán Narvaja, las lecciones de Derecho civil que tanto le sirvieron en su lucha.

Acababa de recibirse de letrado, y tenía frescas las lecciones dadas en el aula, que tanto aprovechó, como ya hemos visto. No había aprendido el Derecho constitucional moderno, porque no existía esa cátedra en la Universidad. Los estudios de ciencia tan vasta no todos los poseían como para enseñarlos. Apenas si se habían destacado los señores don Santiago Vázquez y don José Ellauri, en la Constituyen-

te del año 30 ; y eso, no tanto por la lectura de obras interesantes, que no se conocían, que no llegaban al país, escritas en inglés, idioma ignorado, en general, por nuestros hombres, no traducidas aquéllas al español todavía, sino por los conocimientos que habían adquirido, ya actuando el uno, ya leyendo el otro, al imponerse de los discursos pronunciados en los Congresos de los años 13-16 y 26, al último de los cuales había pertenecido el doctor Vázquez como diputado por la Rioja. De esa ciencia era todo lo que se conocía, sirviendo de modelo las Constituciones de los años 19 y 26, la liberal de Cádiz de 1812, y los trabajos confeccionados por el deán Funes, que no salían del ambiente de la metrópoli, oliendo mucho aún a conservantismo religioso. Es del caso recordar que en 1857 ya eran conocidos, pero en francés, los notables estudios de Tocqueville sobre la democracia en América. Por lo demás, la ciencia constitucional, entonces, como hoy, sólo podía aprenderse en el idioma de los ingleses y norteamericanos, quienes la habían fundado para consolidar la libertad humana ; de manera que, como decía Lincoln, no pudiera un pueblo ser mitad libre y mitad esclavo.

En este sentido, los discursos de la época no se resentían de gran erudición científica. Los hombres del año 30 bastante habían hecho con copiar en la Constitución lo poco que conocían, ya que no nos dejaron sino fragmentos, algunos muy importantes, de sus discursos, donde poder encontrar la interpretación auténtica de los preceptos constitucionales. Eso se observa leyendo el mismo ponderado discurso del doctor Castellanos, ya citado.

Con este escaso bagaje se presentaba el doctor Palomeque al debate, el mismo que el doctor Castellanos había traído de la Universidad de Charcas, donde sólo se enseñaban la teología y el derecho civil español, porque la ciencia de la libertad constitucional no la conocían, ni la podían ni querían conocer, los hombres de entonces, dado el absolutismo de los tiempos.

Nada le arredró. Él no iba en busca de una satisfacción personal, de aplausos pasajeros, sino de un fin esencialmente político, por él perseguido de tiempo atrás. Iba a defender su obra en peligro, porque unos ilusos, unos poseídos, querían destruirla. Si el doctor Castellanos deslumbraba por su teoría científica y su verbo brillante, él se destacaría en el cuadro de los sucesos por el carácter esencialmente político de su discurso y la sequedad de la frase propia del estadista. Al grito de «sálvense los principios aunque perezcan las colonias», él respondería que se salvaran las dos cosas a su tiempo, en medio del naufragio a que se quería arrastrar el país. Primero vivir, luego filosofar. Los pueblos vírgenes, y sobre todo los que no han tenido escuela democrática, necesitan, primero, fortificarse, para luego poder conquistar la libertad. La caída de los Gobiernos constitucionales se debía a esa debilidad, a la falta de una musculatura sólida, capaz de resistir los

embates de la suerte. La fuerza, el poder muscular del hombre, es lo primero que se ha presentado en la sociedad. Ella ha sido el primer eslabón de la cadena de la civilización y del progreso. No ha mucho, Zola nos decía, en su santo y hermoso libro *Fecundidad*: ¡la humanidad nada ha hecho sin el número! La proclamación de los principios es el resultado de una serie de experimentos parciales. Los pueblos tienen su ciencia experimental, sobre la cual, después de un sinnúmero de observaciones, de casos, de tradición, fundan sus leyes, sus principios. Estos son los exponentes de los tropiezos sufridos en la marcha de la civilización, pues no se nace sabiendo. Ha sido necesario, en un comienzo, desgraciadamente, aplicar aquello de la letra con sangre entra, para arribar a la finalidad buscada, proclamada por la sociedad moderna; allí donde el pueblo se ha educado, a fuerza de golpes, de acciones y de reacciones. Aun la libre Inglaterra, y hasta la modelo Norte América, nos lo demuestran, cuando hay quienes pretenden romper el dique para que la corriente se desate.

El hombre político, pues, estaba en frente del jurisconsulto austero. Aquél, que vivía entre las ondas populares, sabía cuán cercano estaba el abismo, y cuán fuerte era la corriente que los iba a arrastrar a todos, si osada mano no la enfrenara. El uno vivía en el cielo, con sus ideas, y el otro en la tierra, con sus pasiones. No era con el lirismo de arriba con el que se dominaría el sentido práctico de abajo, causante, como otras veces, de situación esencialmente anárquica. El mar de fondo no lo sentía el doctor Castellanos, porque no salía de su gabinete ideal. En cambio, el político, que se hallaba al cabo del tembladeral en que se encontraba el país, a punto de conmoverse los cimientos del Gobierno, y echar abajo cuanto se había construido a fuerza de paciencia y patriotismo, decía: «No, éste es el momento en que todos los pueblos hacen uso del derecho de propia conservación, y aplican, bajo la denominación de estado de sitio, de suspensión de las garantías individuales, la fuerza, para salvarse. El primer deber del Gobierno es salvar el *principio* de autoridad. Si los ciudadanos invocan *principios* para conculcar las instituciones, el Gobierno, cuyo primer deber es vivir, invoca, a su vez, el *principio* fundamental de toda sociedad, sin el cual no se puede subsistir: su autoridad moral y material».

Las constituciones son para épocas ordinarias, no para cuando los gobernados pretenden derrumbar ese *principio* de conservación social. Se trata entonces de dos combatientes, que no van a *un asalto*, en el cual, sí, la posición académica ha de conservarse, no siendo admitidos sino los golpes dados con todo arte, con todas las reglas de la escuela. En el *asalto*, la elegancia en el cuerpo y el silencio en los labios son reclamados como indispensables. La postura ha de conservarse, aun en la derrota, como el gladiador romano al caer moribundo en medio de la arena. Pero, cuando no es ese el que entretiene a la

sociedad, la cual ha formado atletas durante la paz, es decir, durante *el asalto*, para luchar en el momento solemne, sino el *duelo* verdadero, en el que la vida va a jugarse, entonces es el éxito lo que salva al combatiente, siéndole permitido, sin recurrir a la traición y al crimen, triunfar por todos los medios a su alcance, con arte, o sin él, con elegancia o sin ella, con silencio a lo charrúa o con gritos a lo Lagardère. ¿Por qué? ¡Porque hay que vencer, cueste lo que cueste! Ya llegará el momento del *asalto*, otra vez, y entonces a la sociedad pacífica le será posible dar golpes con arte, deduciendo *principios* de esos hechos, para incorporarlos a la legislación ordinaria. Lo mismo le pasa a los pueblos al defenderse en los trances angustiosos. Entonces, cuando todo está fuera de quicio, es la ley del más fuerte la que impera, porque se vive en la acción.

Todo esto lo había aprendido el doctor Palomeque en el libro de la vida. Eso es lo que resalta de sus discursos. Se ve, leyéndolos, al político avezado, ducho, conocedor de los secretos planes del adversario, aquellos que en el momento dado él podía desbaratar, como lealmente lo había mandado decir por su amigo el señor don Gil Alfaro. Quizá Gómez, al sentir el recio golpe recibido, comprendería, aunque tarde, la verdad de lo que este caballero le había comunicado, y que no había enemigo pequeño, por lo que a nadie ha de despreciarse una vez lanzado a la lucha. Quizá entonces reconocería que, al querer el doctor Palomeque acercarse a su adversario, no lo hacía por temor, sino guiado por el elevado propósito de aunar esfuerzos para evitar acontecimientos de la mayor gravedad, por él entrevistos, a seguir las cosas en el camino adoptado.

La Comisión Permanente, después de oír a estos dos campeones, resolvió lo que era natural, lo reclamado por la situación: aprobar la conducta del Poder Ejecutivo, al adoptar las medidas políticas de que había dado cuenta. Y Gómez, César Díaz y otros amigos, allá quedaban en la ciudad de Buenos Aires, continuando en el extranjero la misma propaganda anárquica que acababan de hacer en Montevideo. Conviene dejar constancia de que la personalidad del doctor Gómez se había hecho antipática al país, porque había venido desde Buenos Aires con el propósito de predicar la anexión de la República Oriental del Uruguay a la Argentina, cosa que, sea por lo que sea, siempre fué, y lo ha sido, y lo será, rechazada por los orientales.

Por el momento, la sociedad se había salvado con prudencia y humanidad, sin necesidad de derramar sangre fratricida. El Gobierno había impedido que los hechos se desarrollaran en las calles de Montevideo, para no tener que sofocarlos a tiros. Esto era humano y político. Pero, los protagonistas en el drama eran constantes. Habían jurado derrocar al gobernante constitucional y honrado, y allá estaban, con el fuego pronto para encender la mecha del arma fratricida. ¡Y lo harían! Y entonces los hechos demostrarían cuán prudente y

humano había sido el Gobierno al desterrar aquellos ciudadanos, que volverían en seguida, con las armas en la cintura, para obligarle a hacer lo que había querido evitar por todos los medios, no siendo comprendido, y hasta rechazado.

Así terminaba el año 57. Iba, sin embargo, a dislocarse una parte de la fuerza tan hábilmente elaborada. Desde entonces cada uno seguiría sus tendencias. Los que creyeron conveniente desandar el camino andado, volvieron a ceñirse trapos ensangrentados; y los que vivían convencidos de que el hombre, como los pueblos, han nacido para morir al pie de la bandera del trabajo, que fecunda el porvenir, continuarían avanzando, sin importarles los prejuicios de una sociedad carcomida por pasiones personales, despreciando halagos e inactivas, y fiados en el fallo de la historia; convencidos de que no se cambian caballos en medio del río, y que no se redactan y firman programas políticos para un día o para abandonarlos porque se encuentren adversarios en el camino que «enarbolan banderas a los pueblos arrancando jirones a un sudario».

La impolítica de los teóricos, de los encarnizados enemigos de un Gobierno constitucional y honrado, iba a producir lo mismo que se quería impedir: el predominio de los hombres del viejo partido oribista, que habían aceptado «la nueva era» y puesto al servicio de ella todos sus elementos, siguiendo el programa redactado, proclamado y defendido por los hombres de la Defensa, desde el sillón presidencial a todas las esferas de la administración pública del señor Pereyra. El país acompañaba al Gobierno; sólo el círculo *conservador* lo atacaba. En su consecuencia, las elecciones se hicieron, y en ellas triunfaron los evolucionistas, quienes, desde entonces, aparecen en las páginas de la historia con el nombre de *nacionalistas*, es decir, refractarios a toda denominación o tendencia atávica.

Llegaban los albores del año 58, y ya se veían las antorchas de los revoltosos iluminando las aguas tranquilas del Plata, al atravesar el barco que llevaba la desgracia de Pompeyo y no la fortuna de César.

La personalidad del doctor Palomeque, como se ve, seguía destacándose y engrandeciéndose en medio de tan graves acontecimientos, revelando una energía y convicción a toda prueba. La manera rápida cómo los sucesos se desarrollaban, obligaba a los hombres a buscar, en un momento de inspiración, la solución a tanto problema preñado de dificultades. Y se inspiraban, al adoptar sus determinaciones, en el consenso general, tratando, a todo trance, de impedir que la obra se derrumbara.

¡El doctor Palomeque lo conseguiría, a fuerza de energía y amor a la tierra natal!

EFECTOS DE LA REBELIÓN

1858

¡QUINTEROS !

Los elementos opositores no se dieron cuenta de lo impolítico de la acción revolucionaria. Al fin y al cabo, eran los hombres de la Defensa quienes dominaban, llamáraseles como se les llamaran, floristas o conservadores. El señor Pereyra había sido fiel a su programa, no entregándose al caudillaje—ni a Flores ni a Oribe—sino respetando las creencias de unos y otros, pero dentro del criterio erróneo de la época, que prevalecería aún durante el gobierno de Berro : de convertirse la autoridad en tutor del pueblo, queriendo impedir la resurrección de los viejos partidos. A esto habían concurrido, de muy buena fe, hombres como don Joaquín Requena, Carlos de San Vicente y coronel don Lorenzo Batlle.

Desterrados los opositores, las elecciones se hicieron bajo el imperio ya de la nueva situación, creada por obra de los revoltosos.

Ante el trapo sangriento, muchos ciudadanos, como Batlle, Magariños y Bustamante, reaccionaron, y abandonaron sus posiciones. El elemento de los hombres de la Defensa, que ahí quedó, consecuente con sus ideas, como ser, Medina, Palomeque, Costa, Pagola, Latorre, Solsona, Pereyra, Echenique, etc., rodeó al gobernante, resuelto a defender el principio constitucional que representaban, pues el partido gubernamental continuaba su derrotero. El otro elemento, oriundo de Oribe, no se dividió por un instante. Comprendió que debía aprovechar la ocasión presentada por la falta de tino político de Juan Carlos Gómez y sus amigos, y esperar a que los sucesos se desarrollaran, para entonces actuar definitivamente, pues aun no era profundo el abismo que separaba a los hombres de la Defensa. Luego, sí, un arroyo de sangre los separaría, y entonces aquéllos lo aprovecharían para mantener la situación creada, no tanto por su inteligencia, cuanto por el error de los rebeldes y revoltosos. Lo que sí, ellos tendrían la habilidad de cavar ese abismo de sangre, pues había que dividir para reinar. Comprendían perfectamente cuán necesario era impedir que esas dos fracciones pudieran nunca más entenderse, y de ahí los esfuerzos, dignos de mejor causa, para conseguir que los revoltosos vencidos en Quinteros fueran ultimados. Alrededor del señor Pereyra, se

destacaron entonces, para esa obra, las figuras de don Cándido Juanicó y don Antonio de las Carreras (1).

Cuando los revoltosos se lanzaron a la lucha, el primero que allí estuvo para defender el principio de autoridad, fué el doctor Palomeque. El entonces joven don Joaquín Requena y García nos ha relatado la actitud enérgica del doctor Palomeque en esos momentos aflictivos (2).

Los rebeldes, dirigidos por el coronel don César Díaz, se embarcaron en Buenos Aires, en el buque *Maipú*; y, con una audacia sorprendente, se lanzaron sobre Montevideo, desembarcando detrás del Cerro. De aquí se dirigieron a la ciudad, donde, al parecer, pensaban penetrar, sin mayores obstáculos, contando con la defección de los pocos elementos militares que allí pernoctaban. Al practicar el ataque, fueron resistidos, y una bala de cañón, arrojada del propio cuerpo militar con el cual creían contar, arrancó la vida a uno de los jefes de los sublevados, que venían en son de victoria. Esto les hizo suponer que, a su vez, habían sido traicionados, y retrocedieron. Con toda seguridad, si hubieran persistido en su ataque, habrían triunfado, pues se carecía de fuerzas para la defensa. Quizá hasta de cabeza militar para hacerla.

Fueron perseguidos, después de una ligera brega en Cagancha, donde la fortuna se mostró varia con ambos. En ella murió el distinguido joven Luis de Herrera, cuyo hecho tendria gran influencia en el desarrollo de los sucesos, a estar a la carta escrita en esos días por una madre entregada a su dolor (3).

Alcanzados en Quinteros, fueron prisioneros. Aseguran los vencidos que hubo capitulación. Mientras tanto, el general Medina, jefe que se hallaba al frente del ejército nacional, afirmó, bajo su palabra de militar honrado, que lo era, que no la hubo. Esto es algo que ha quedado en el misterio. Pero, sea como sea, los prisioneros tuvieron sus vidas garantidas desde el primer momento. Nadie se atrevió a tocarles. El general Medina era su salvaguardia, por lo que sólo a él se entregaron.

Desde ese instante se trabó una intriga política, en la que jugaron su principal papel las personalidades de los doctores Juanicó y de las Carreras, alrededor del presidente de la República. La victoria se había obtenido con elementos materiales pertenecientes a los oribistas, pero bajo la inteligente dirección militar del general Medina. Esa circunstancia dió, a hombres como Juanicó y de las Carreras, una in-

(1) El doctor don Joaquín Requena, al producirse la revuelta, renunció al ministerio de Gobierno (enero de 1858), siendo nombrado en su reemplazo, para desgracia del país, el doctor don Antonio de las Carreras.

(2) Véase *Mi Expulsión*, por Alberto Palomeque.

(3) Esta carta fué indignamente dada a luz por un hombre sin juicio, asesorado por quien pareciera carecer de criterio moral. Véase *Correspondencia de don Gabriel Antonio Pereyra*.



Antonio de las Carreras

fluencia decisiva, pues la fuerza pública estaba en manos de caudillos pertenecientes a los hombres del Cerrito. Dos corrientes se forjaron alrededor del señor Pereyra: la de quienes, como el general don Antonio Díaz, y coronel Palomeque, querían el perdón de los vencidos, y quienes, como Juanicó y de las Carreras, aspiraban a abatir cabezas, para destruir partidos. Aquéllos respondían a sus antecedentes. Ni uno ni otro habían sido hombres que aconsejaran el derramamiento de la sangre, siendo enemigos del caudillaje. No obstante haber vivido el uno en el Cerrito y el otro en la Defensa, comulgaban en las mismas ideas. Los otros respondían a las tendencias del partido autoritario del Cerrito. Creían que era la fuerza material la que debía dominar en el escenario político, y concibieron el pensamiento erróneo de combatir a un partido, abatiendo cabezas.

El señor Pereyra no tuvo carácter para hacer frente a la situación. Consideró que como gobernante debía hacer cumplir el decreto tirado a raíz del movimiento sedicioso, asediado por los hombres que en ese instante dominaban en el ejército vencedor. Aquí estaban todos los caudillos, que, como Dionisio Coronel, Gervasio Burgueño, Bernardino Olid y Cipriano Cames eran los representantes genuinos del caudillaje del Cerrito. En su consecuencia, creyó que no le quedaba más camino que ordenar al general Medina cumpliera el decreto por medio del cual puso fuera de la ley a los rebeldes. Y allá fué la orden, ganando camino, para que cuanto antes se abatieran esas cabezas calenturientas, mal inspiradas.

Aquello fué una medida política, basada en lo mismo que pocos años después llevaría al general Flores a arrancar la vida al héroe de Paysandú, el general don Leandro Gómez. Se creía firmemente que matar hombres era arrancar ideas de cuajo. Se creía más: que se tenía el perfecto derecho de disponer de la vida del prisionero, sin siquiera llenar forma alguna de procedimiento, sin someterlo a un tribunal que lo juzgara con arreglo a la ley. Bastaba para ello un decreto firmado por el presidente y sus ministros, que los pusiera fuera de la ley, como sucedió en el caso; cuando no una comunicación verbal para fusilar al héroe de Paysandú y sus nobles compañeros.

La pasión no reflexionaba. Sangre se había derramado en Cagancha, y era necesario vengar la del digno joven Luis de Herrera, allí muerto, aunque en noble lid. ¡El dolor de los padres así lo exigía! Otro tanto haría el mismo general Flores, en la Florida, a los pocos años, al saber que su valiente hijo Venancio había caído en la refriega adonde él lo enviara, al asaltar el cantón donde se defendían briosamente Párraga y sus amigos. Invocaría el sagrado corazón del padre, ante el cadáver de su hijo, para no dar cuartel, e incendiar el recinto donde batallaban desesperados un núcleo de soldados defensores de un Gobierno constitucional. Y otro tanto se haría en Manantiales, en 1871, descuartizando el cadáver del noble general Medi-

na, haciendo maneadas de su epidermis. Más aún : se jugaría a las bochas con la cabeza de un hombre a quien las huestes del general Flores creían fuera el coronel Palomeque. ¡ Qué tiempos duros ! ¡ Que el impecable arroje la primera piedra !

Arrancada al gobernante la orden de fusilar a los prisioneros, los victoriosos en esta intriga política la remitieron *matando caballos*.

¡ Todo era muerte !

Los vencidos, y con ellos el mismo general Urquiza a su frente, que no querían sangre, obtuvieron también su victoria en batalla tan humanitaria ; pero la orden de perdón llegó tarde. Los vencedores, en cambio, habían corrido como el rayo. De esta hazaña, entre la frialdad del cerebro, que tenía toda la del acero homicida, y la del calor del alma, que poseía todo el de la sangre vaciada en el corazón, surgió un abismo. Aquello fué como la mancha de Macbeth ; nunca se limpiaría. Los autores de ese acto político morirían sin los honores a sus talentos y servicios ; los otros caerían viendo sembrado de flores su tránsito de la vida a la muerte. Los unos tendrían siempre los aplausos del caudillaje oribista ; los otros recogerían, hasta el día de su muerte, los anatemas de éste. Eran hombres de escuelas distintas. Los unos pensaban que matando se atraían el favor de los dioses, como en los tiempos paganos ; los otros que perdonando se vinculaban corazones, como en la época del cristianismo.

¡ Se consumó el sacrificio ! Desde ese momento, dominaron los hombres del Cerrito, con el doctor Juanicó a la cabeza, cuyo talento era indiscutible ; sin que esto quiera decir que lo utilizara, en este instante supremo, para encauzar la verdadera política nacional, cuyo fruto ahí se veía al regar con sangre fratricida el altar de la patria.

El doctor Juanicó fué, desde entonces, el alma de aquella situación. Él lo dirigía todo desde el Parlamento, donde actuaba como legislador, hasta el Tribunal de Justicia, donde dictaba sentencias. Eran los tiempos en que no se conocía la incompatibilidad de la ciencia moderna. Así como un ciudadano podía hacer las leyes para luego él mismo aplicarlas, dictadas quizá por un interés personal, lo mismo podía el Poder Ejecutivo tirar un decreto poniendo fuera de la ley a los gobernados, desempeñando a la vez las funciones del Poder Judicial, sin que éste protestara. Es verdad que el Tribunal Superior de Justicia acababa de ser arrojado a la calle.

Desde ese momento, una lucha sorda se trabó entre el doctor Palomeque y los doctores Juanicó y de las Carreras. Si bien el doctor Palomeque no había conseguido salvar a los jefes principales del movimiento, porque su influencia decayó desde que Gómez y sus amigos no se dieron cuenta del tortuoso camino adoptado, en cambio obtuvo la liberación de gran parte de aquellos que en un principio salvaron del grito de la pasión airada. En ese terreno le acompañó el señor don Juan Antonio Magariños Cervantes. Este era su pariente, su ami-

go y su subalterno, como secretario en la Cámara de Representantes. Era el intermediario entre los vencidos y el doctor Palomeque. Entre los papeles de éste se halla el importante documento citado ya en otro trabajo por el autor de este libro, en el cual aparece la lista de los prisioneros que debía hacer poner en libertad el doctor Palomeque.

Entre ellos se hallaba un ciudadano de méritos, el señor don Juan Manuel de la Sierra, que escribiera un libro, en aquellos días candentes, en que la pasión sólo hablaba, maltratando al doctor Palomeque. Más tarde, como se verá cuando nos ocupemos de la administración del doctor Palomeque en Cerro Largo, el autor de ese libro, con toda nobleza de alma, reconocería que nuestro protagonista no era, ni podía ser, el hombre que se maldecía en aquellas terribles circunstancias (1).

La situación del doctor Palomeque fué difícil, lo mismo que la de don Juan Antonio Magariños. A éste le arrojarían de la secretaría los vencedores en esta intriga palaciega, no obstante los esfuerzos hechos en su favor por el doctor Palomeque, como se verá (2).

En estas condiciones se inauguró el Cuerpo Legislativo. Su mayoría estaba compuesta, en la Cámara de Representantes, de gente del Cerrito. Cuando llegó el momento de designar al presidente de la Cámara, los diputados, dirigidos por el señor Juanicó, cometieron el grave error de nombrar al señor don Julio C. Pereyra. Esto era censurable, no sólo porque este caballero era el hijo del primer magistrado, lo que importaba una cortesanía nepótica, sino porque carecía de la preparación necesaria. Era muy difícil encontrar quien substituyera al doctor Palomeque, presidente, a la sazón, de dicha Cámara.

¿Hubo pacto al respecto, a fin de quedar el doctor Palomeque en su asiento de diputado, por así convenirlo, y acaparar a la vez la presidencia?

Quizá, porque del elemento intelectual capaz de oponerse a los adversarios, no había sino dicho ciudadano.

Por lo demás, las dos vicepresidencias correspondieron a los señores Aguirre y Pérez.

A estas elecciones concurrió el doctor Palomeque con su voto, ya porque así estuviera pactado, ya porque no quisiera aparecer contrariando la ley de la mayoría triunfante.

A esta legislatura no quisieron concurrir hombres como don Jacinto Vera, Andrés Lamas, Joaquín Suárez y Eduardo Acevedo, que renunciaron. No querían aparecer comprometidos en la obra. De ahí

(1) Véase *Mi Expulsión*, por el doctor don Alberto Palomeque. Andando el tiempo, y no mucho, hombres como los doctores José Ellauri, José Pedro Ramírez y otros de ese círculo conservador, se honrarían dándole el título de amigo, como consta de las cartas privadas en mi archivo.

(2) Entre otras pruebas, de las que más adelante hablaremos, están en mi archivo las cartas cambiadas entre el señor Palomeque y el señor Pereyra.

que el doctor Acevedo se quedara en Buenos Aires, adonde los sucesos lo habían arrastrado, después de los acontecimientos del 53, aunque para volver en 1860 a ocupar el puesto de ministro, que dignamente desempeñó. ¡Entonces en su Memoria hablaría de *crímenes*!

Por otra parte, el doctor Lamas permanecería en Río Janeiro, donde tan importantes servicios prestó al país cuando se produjo el movimiento sedicioso. Es sabido que el Gobierno del Brasil estaba resuelto a ayudar al presidente de la República, como lo estuvo también el general Urquiza; servicios que, felizmente, no tuvieron manifestaciones externas, respondiendo así a la política declarada de no quererse protección e intervención extranjera en el país.

EL CONFLICTO MORAL

El doctor Palomeque no pudo ni debió abandonar la posición adquirida. Él iba en pos de un ideal, del partido gubernamental. Quinteros había desviado la línea, pero no era el caso de renunciar al programa, ni cambiar de caballos en medio del río. Los partidos políticos no son dechado de perfecciones. Participan de los defectos de toda obra humana. Ellos presentan los inconvenientes de toda asociación, desde que al ingresar a esta nuestra libertad queda coartada por la voluntad de la mayoría. Bastante hacemos con salvar nuestra conciencia al pasar o atravesar el pantano humano. Él no había contribuido a la matanza. No había inclinado el ánimo del gobernante para que tal cosa hiciera, pues era impotente para ello en esos tristes días. Lo único que pudo conseguir, una vez pasada la vorágine, cuando ya las pasiones estaban más tranquilas, fué influir para que los desgraciados prisioneros salvados de aquella jornada, adquirieran su libertad, interviniendo noblemente, en el hecho, aunque en línea secundaria, el señor don Juan Antonio Magariños Cervantes.

Su programa se había salpicado de sangre nuevamente. Lo que había que hacer, era, no renegar de él, desde que sus ideales eran sanos y puros, sino persistir en la obra, para, con nuevos esfuerzos enérgicos, depurarla, y demostrar que todo ello no hacía sino resentirse de la imperfección de los medios en una sociedad dilacerada por las pasiones.

Por lo demás, el principio de autoridad constitucional se había salvado, en lo fundamental, y alrededor de ese eje podía girarse, a fin de que la honradez administrativa fuera una verdad, lo mismo que continuar la lucha contra el caudillaje, la ignorancia y las malas pasiones del pasado. Las acciones futuras pondrían en evidencia su criterio en esa jornada difícil. Haría todo lo posible, dentro de la esfera adonde iba a actuar, para desviar la corriente; y si era desgraciado en esa tarea, no por ello sería menos meritorio su esfuerzo. Ya se ha dicho, y con razón, que no siempre se magnifican en las páginas de la his-

toria quienes salieron victoriosos en la brega, sino los vencidos, pleróticos de valor moral en los grandes conflictos sobrehumanos. Así sucede, a medida que el tiempo todo lo descubre y abrillanta, dando firmeza a las ideas y esplendor al escenario, entonces obscuro, en que actuaron los protagonistas, perdidos en el rincón de la selva, iluminados, al final, por el resplandor de la justicia, que es cuando habla la posteridad.

Inmediatamente la sociedad de la época se dió cuenta de la trascendencia del hecho político realizado. Los vencidos, castigados tan cruelmente, eran los recalcitrantes revoltosos de 1853 y 1855. No dejaban que el país continuara en paz. Ellos habían detenido su marcha progresiva, en varias ocasiones, por simples cuestiones de prevalencia de personas, y no por algo fundamental. Por consiguiente, cuando el castigo se impuso, la sociedad creyó haber eliminado para siempre la causa del mal. El elemento extranjero, que, con su capital y su músculo, tanto ha contribuído al adelanto de la nación, lo aplaudió con calor.

Cuando las fuerzas vencedoras en Quinteros entraron a Montevideo, aquello fué un delirio. Los caudillos como Coronel, Burgueño, Olid, Cames y aun Aparicio, eran victoreados y aclamados. De todas partes llegaban plácemes al primer magistrado de la República. En la ciudad se levantaban arcos para que por ellos pasaran los soldados vencedores de la autoridad constitucional. Y en su entusiasmo popular, no se contentaban los poetas con las inscripciones puestas en los arcos triunfales, sino que empuñaban la péñola y entonaban himnos de gloria a los vencedores, cuyo triunfo, sin embargo, habría sido más trascendental, si no lo hubieran sombreado con el inútil derramamiento de sangre.

Ahora bien, la sociedad imparcial estaba contexta en que el movimiento armado había sido un acto impolítico e injusto, pues el Gobierno llenaba todas las exigencias de la situación difícil por que se atravesaba, siendo la honradez administrativa un hecho indiscutible. No tenía programa la revuelta a que fué provocado el Gobierno por los mismos que hasta la víspera habían sido sus buenos servidores. Esto era lo que condenaba la sociedad, a la vez que festejaba el triunfo de la autoridad. No aplaudía la sangre derramada, pero condenaba en los revoltosos el delito de lesa patria.

La sociedad se encontraba, pues, en un conflicto moral. El Gobierno era digno, y merecía ser apoyado, pero, a la vez, había cometido un grave error político al fusilar a los desgraciados prisioneros. Ni siquiera había tenido en cuenta la situación en que se hallaba el noble guerrero de la Independencia, el general don Anacleto Medina, que les había garantido la vida a los prisioneros, con o sin capitulación, lo que no hace al caso. Prueba elocuente de ello fué que el general Medina no se atrevió a pasarlos por las armas en el acto de

aprehenderlos. Es verdad que él cumplió con su deber, dando cuenta, y sometiéndose a las órdenes de su superior. El cumplimiento de su triste deber no puede afeársele. ¡Lamadrid asistió al fusilamiento de Dorrego, sin poderlo remediar, y sentía pena!

Ese conflicto moral, ¿cómo se resolvería? ¿Debería el político abandonar la posición adquirida, sólo porque el Gobierno honesto había cometido un error de tal magnitud? ¿Sería prudente ir a aumentar las filas de los insensatos revoltosos, para atacar a un Gobierno constitucional y honrado, colocado en el duro trance de defenderse ante el ataque injusto? ¿Qué primaria, el sentimiento del dolor ante la sangre derramada, o la conciencia del deber a cumplir, aun en medio de tantas dificultades?

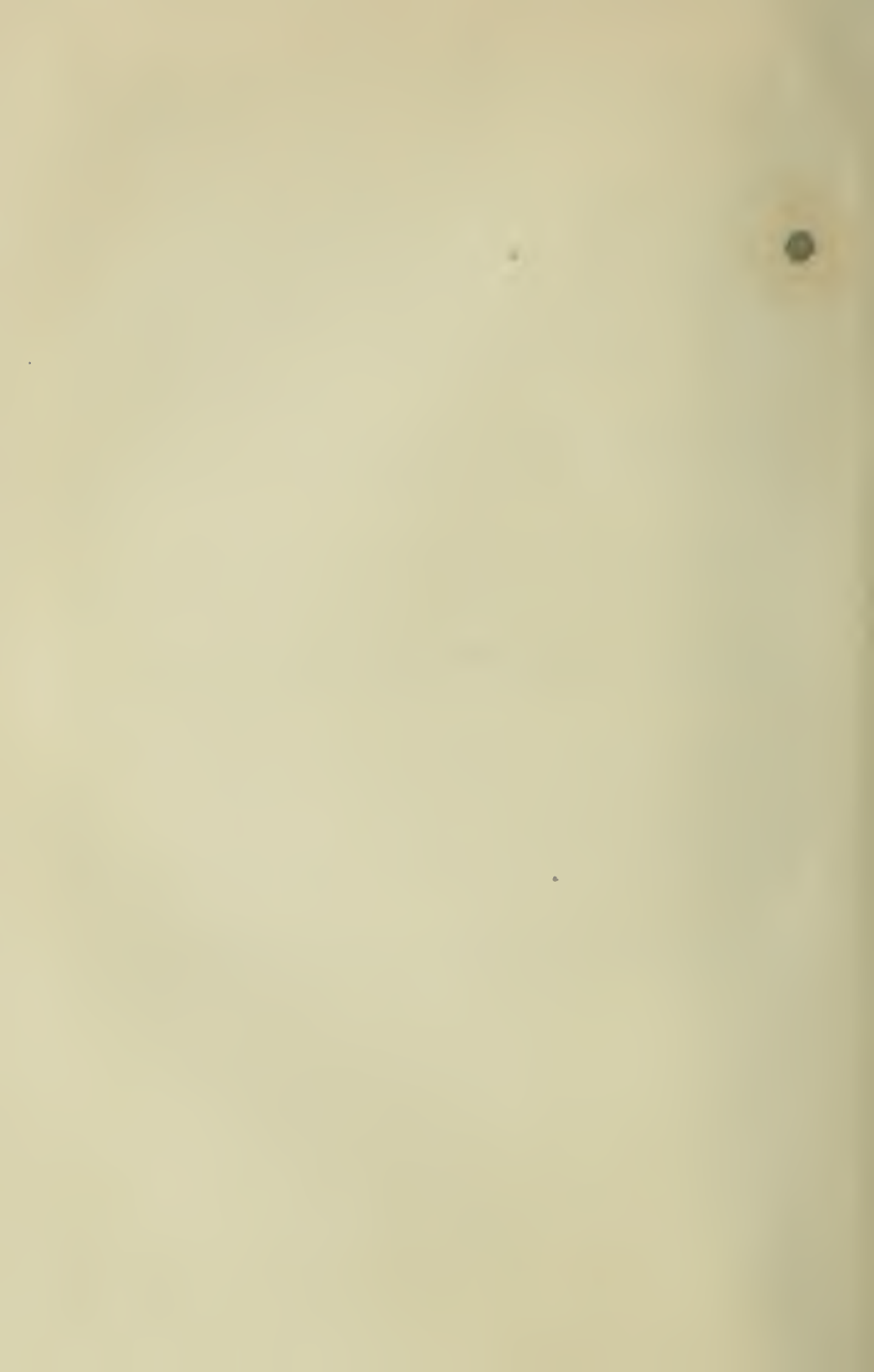
Mezclarse con los opositores era renegar de la causa defendida en el Parlamento, en la tribuna popular, y con las armas en la mano; pero permanecer en el puesto público, se decía, era sancionar el acto realizado.

En el conflicto moral a que fué sometido el doctor Palomeque, la conciencia del ciudadano, del hombre y del político, se reveló con la energía necesaria para afrontar el problema y dejar su solución a la posteridad. No podía retroceder, ni podía atacar; pero podía, sí, hacer todo lo posible por mantener lo bueno de su obra, a fin de impedir el derrumbe. Era un edificio al cual se le había arrebatado una de sus más hermosas facetas. No por eso el constructor lo abandonaría, para que el tiempo concluyera con él.

Dotado de saber, energía y ambición, tres cualidades indispensables en el político, para hacerse grande, se sobrepuso al dolor causado, y se le vió de pie, en medio de la tempestad, dispuesto a continuar, a recomenzar, si era necesario, lo destruído, tratando de impedir que los nuevos obreros desnaturalizaran el programa fundamental del Gobierno de 1856.

Desde entonces puso todo su conato para atraerse la buena voluntad del gobernante Pereyra, e impedir que éste, en lo posible, fuera dominado por el círculo dirigido por los doctores Juanicó y de las Carreras.

HONORES A PEREYRA



ACTITUD POLÍTICA

En su consecuencia, su primer paso político, una vez desalojado de la presidencia de la Cámara, fué demostrar que este hecho no le afectaba, hasta el punto de convertirlo en un adversario. Quiso, pues, no romper esa vinculación, y arrojó, a la faz de sus contrincantes, al frente de los cuales se hallaba el talentoso doctor Juanicó, dos proyectos de suma importancia (1).

Por uno de ellos declaraba al señor Pereyra, Gran Ciudadano Benemérito de la Patria, y por el otro se acordaba al brigadier general don Anacleto Medina la suma de veinte mil pesos «en recompensa de sus señalados servicios prestados al país» (2).

Es absolutamente necesario conocer los fundamentos de esos proyectos, y muy en especial los del primero, para darse cuenta del fin esencialmente político perseguido por su autor, y la fuerza de voluntad y amor a sus convicciones reveladas en quien así procedía.

El doctor Palomeque declaraba, en los Considerandos que precedían al proyecto, que el señor Pereyra llenaba «fielmente su programa de paz, de unión, de instituciones y libertad mediante la práctica perseverante de una política elevada, noble e imparcial», habiendo «establecido sólidamente el principio de autoridad y el imperio de la ley».

Esto era indiscutible. El señor Pereyra había llamado al Gobierno a todos los hombres de valía existentes en el país, antes y después de la revuelta. Sólo los eternos rebeldes habíanse negado al llamado. Y entonces, los hombres verdaderamente políticos, habían salvado «el principio de autoridad y el imperio de la ley». Mucho les había costado contener los latidos del corazón ante los mandatos del deber. Nada ni nadie les detenía con tal de salvar esas dos cosas fundamentales en toda sociedad bien organizada: el principio de autoridad y el imperio de la ley. De esto estaban orgullosos.

Se habían salvado por obra milagrosa. Era la primera vez que esos principios triunfaban, después de los escándalos del 53 y del 55. La

(1) Más adelante, al ocuparme de los sucesos tristes del 65, hago una ligera descripción del carácter y vida del doctor Juanicó.

(2) Sesión del 18 de febrero de 1858.

sociedad estaba cansada de tanta revuelta, y creyó que debía hacer un ejemplar con los autores del constante malestar, en nombre de la autoridad y de la ley.

Era esto lo que quería hacer resaltar el doctor Palomeque en su proyecto, fundado en lo que los amigos de los revoltosos habían dicho en *El Comercio del Plata* al darse posesión del mando al señor Pereyra. Entonces se dijo en ese diario que había que ser enérgicos con quienes en adelante atacaran el principio de autoridad constitucional, haciendo caer sobre ellos «todo el peso de la ley», si algún día alguien se atreviera a cometer ese crimen de lesa patria.

Con el principio de autoridad se había salvado el imperio de la ley, porque la Constitución y las disposiciones militares condenaban a quienes se rebelaban contra la autoridad constitucional. Era la primera vez que, aunque sin llenarse formalidades judiciales, se hacían efectivas esas leyes, por medio de un decreto presidencial, ante la faz del mundo, y no en el misterio y en la soledad de la noche, como con el duque d'Enghien, o como en más de un caso se había hecho por nuestros caudillos sanguinarios, sin autoridad para ello. Esto, a lo menos revelaba que existía un verdadero Gobierno, una entidad orgánica, funcionando dentro del rail de las instituciones. Ahí quedaba la resolución gubernativa, expedida con todas las formas externas, reveladora de que era un gobernante legal, constitucional, el que actuaba, y no un tirano que mandaba asesinar sin dejar la prueba de su orden.

Pero, sobre ese principio de autoridad e imperio de la ley, el doctor Palomeque sostenía que el señor Pereyra «había creado para la República, víctima antes de los odios de partido o de pretensiones personales, una época de estabilidad, de orden y de progreso, sobre las ruinas del caudillaje y de la demagogia». Y era exacto. A una época «de odios y de pretensiones personales» había sucedido otra de asimilación de todos los buenos elementos sociales. No era un círculo, un partido personal, el que dominaba, sino todos los elementos representativos del país, tratando, unos y otros, de cubrir, para siempre, con un gran puente, el abismo de sangre que había dividido a la sociedad uruguaya; abismo abierto sin ley en que apoyarse, ni autoridad legítima que invocar, respondiendo sólo a las pasiones desatadas de un caudillo.

Pero, lo que el doctor Palomeque quería incrustar en las páginas de la historia era que en ese programa político estaba comprendida la guerra sin cuartel «al caudillaje y a la demagogia». Él creía firmemente que sobre sus ruinas se había levantado una «época de estabilidad, de orden y de progreso», concluyendo con los «odios de partido y las pretensiones personales».

¡Desgraciadamente no sería verdad belleza tanta!

La sangre vertida en Quinteros, aunque invocando y aplicando la

ley, sería un nuevo abismo, y de ahí surgirían más fuertes los odios de partido, las pretensiones personales, la demagogia y el caudillaje de una y otra parte. El será la víctima de ese caudillaje y esa demagogia al quererlos contener en sus desmanes durante su actuación futura en Cerro Largo, Canelones y Salto. Por todas partes, el caudillaje que él creía abatido, renacería de sus cenizas, y los vería, ya de frente, con el invasor, ya a su alrededor, con el intrigante. Se vería en el caso de estar combatiendo con ambos caudillajes, con ambas demagogias, con los de arriba y con los de abajo.

Sin embargo, aquella declaración tenía una gran importancia, además de ser muy valiente, dado los momentos en que ella se hacía. Esto importaba recordar a los vencedores que el gobernante tenía su programa, el de abatir el caudillaje. Quería recordarlo, no sólo a los vencedores en el campo militar, sino al propio gobernante, para que lo cumpliera estrictamente, como lo venía haciendo desde Flores a Oribe. Conocedor de la política, temía sucediera algo que deslustrara la finalidad deseada. Buscaba el medio no sólo de salvar su creencia, sus ideales, sino de recordarle al magistrado el cumplimiento de su deber. Veía venir al caudillaje que estaba fuera del gobierno, y se adelantaba a colocarle esa banderilla. Ya lo veremos poniendo en práctica sus doctrinas, siendo consecuente con sus principios, dentro de la relatividad de las exigencias humanas.

Hecha aquella declaración, la acentuaba aún más en sus ansias patrióticas. Creía ver feliz a la República con «la extinción de esos dos elementos del desquicio nacional y de la destrucción de los pueblos». Todo esto lo conceptuaba un «beneficio grande para la República, que progresará—decía—sin obstáculo bajo la apacible sombra del orden y de las instituciones».

En esto sería profeta. Por el momento, pudo el gobernante contener ese caudillaje, y esa demagogia, dando al país, con su enérgico proceder, días de tranquilidad institucional. Desde ese instante, la sociedad vivió convencida de que el país tenía un verdadero gobernante, y que los anarquistas reconocían el poder de la autoridad constitucional, no volviendo, por el momento, a molestar con sus revueltas. El país se entregó confiado al trabajo, y la República gozó de paz, adelantando en todo sentido, durante los seis años subsiguientes; hasta que un caudillo vino a trastornarlo todo, y la impolítica e inhabilidad de los hombres directores echado a perder lo ganado.

Todo aquello era la obra de la *política*, decía el doctor Palomeque, cuyos «gloriosos efectos de *Callorda* y *Quinteros* sobre la rebelión, importan un verdadero y exclusivo triunfo de la autoridad y de las instituciones de la República, quedando así labrada la base inmutable del orden y la mejor garantía para la felicidad común».

Era un político que todo lo sacrificaba ante la paz y el principio de autoridad. Había que seguir adelante, costara lo que costara. No era posible detenerse en la marcha emprendida. De la paz surgirían

todos los bienes futuros, siempre que no se tuviera en el gobierno a un déspota o a un tirano.

Esos «benéficos resultados—decía—que el pueblo acepta con decisión y que presenta por primera vez un hermoso espectáculo sin ejemplo a los fastos de la República, excitan la gratitud nacional hacia el ilustre ciudadano que con sus virtudes ha sabido prepararlos y sabe contenerlos».

Inspirado, como «representantes del pueblo, en el deber de responder al sentimiento público», creía necesario reconocer «por un acto solemne, y en uso de las facultades constitucionales, tan grande servicio», declarando «Gran Ciudadano Benemérito de la Patria» al señor Pereyra.

Estos eran los fundamentos del primer proyecto. En cuanto al segundo, procedía igualmente con suma habilidad, al sostener que «el general Medina era uno de los monumentos de nuestra independencia que se conservaba entre nosotros, no haciendo una vida modesta, sino una vida de miseria, pareciendo extraño que después de prestar 40 años de servicios a la patria y a muchas Repúblicas de América, se encontrara a los bordes de la sepultura sin que tuviera tal vez con qué costear el transporte de su cadáver al cementerio». «Esto es muy extraño—decía,—pero no lo es en hombres de bien, porque el hombre de bien que ha vivido siempre con la espada en la cintura combatiendo en los campos de batalla, ese es su fin : ¡ morir pobre !»

Después de esta manifestación de un orden general, muy verdadera, aplicable a todos los guerreros de aquella época, que dejaron sus huesos blanqueando en los campos de batalla, hasta el Ecuador, a la espera de mejores días, en que la patria ya constituida y organizada los recogiera para depositarlos bajo el cielo de la tierra amada, hacía presente que «los últimos acontecimientos porque desgraciadamente había pasado el país colocaba a los Representantes de la octava legislatura en el deber de llenar en parte este vacío y las necesidades que sufría el general don Anacleto Medina». «Esa lealtad—decía,—esa fuerza de voluntad, y ese acierto en sus operaciones, creo que son todos motivos que lo recomiendan a la alta consideración de los pueblos, y más que nada a la octava legislatura, en quien están delegados sus poderes.»

En estos fundamentos se veía la tendencia política del autor. No quería premiar solamente al «veterano de la Independencia», como decía al final de sus palabras, sino al guerrero que con «fuerza de voluntad y acierto en sus operaciones» había sido el verdadero vencedor de los rebeldes, haciendo posible la instalación de la octava legislatura. Sin el general Medina, pareciase decir entre líneas al círculo de Juanicó y de las Carreras, y sin la inquebrantable energía del señor Pereyra, no estarían ustedes sentados en el escaño legislativo. Quería proclamar esta gran verdad : que no habían sido los caudillos

del Cerrito quienes triunfaran en Callorda y Quinteros, sino «el veterano de la Independencia» y la *política* (1) del gobernante del 1.º de marzo de 1856. Sin la perseverancia del uno, desde su alto asiento, no mirando en los rebeldes a sus viejos amigos de la Defensa, sino a soldados que habían delinquido, llamando a su alrededor, para combatirlos, a todos los ciudadanos que quisieran ceñir la escarapela nacional, y no una divisa sangrienta; y sin la disciplina, valor y sabiduría militares del otro, dada la escuela en que se había educado; el edificio se habría derrumbado, aplastándolos a todos en sus ruinas.

Esto quería hacer resaltar, para abatir el ensoberbecimiento y altanería de los elementos del caudillaje del Cerrito, que, a grito herido, pretendía proclamarse como el único autor de la victoria obtenida. Es cierto que a ello habían contribuido, pero bajo la hábil dirección de aquel veterano, presidente del Club Nacional surgido de los claustros de la Universidad de Montevideo, que inscribió en el programa político de la nueva asociación nacida a la vida, que la familia uruguaya no podía vivir rindiendo culto al pasado, a los odios, a las pretensiones personales, al caudillaje, a la demagogia, sino a los ideales del porvenir, a la unión, al mérito, a la Constitución, al imperio de la ley y al respeto de la autoridad constitucionalmente organizada.

Y todo eso quería proclamarlo, *urbi et orbe*, desde el escaño de la legislatura, otro servidor de la Defensa, el doctor Palomeque, que era el pensamiento, y también la acción política, de la «nueva era» inaugurada el 1.º de marzo de 1856. Esa «nueva era» no quería verla zozobrar, y de ahí sus esfuerzos, aun después del arroyo de sangre derramada.

Era eso lo que le preocupaba al doctor Palomeque. Temía ver destruida la obra, y quería demostrar que lo que dominaba en el Gobierno no era la voluntad personal de Juanicó y de las Carreras, sino el principio constitucional y la ley. Quería más: que se viera eficiente el poder de los hombres de la Defensa, que, como Pereyra, Medina y él, formaban la muralla contra la cual hasta entonces se habían estrellado los esfuerzos del caudillaje y de los hombres atávicos. ¡Quería que se supiera que allí no dominaba ninguna divisa del pasado, sino la bandera nacional! Y en este sentido, su lucha iba a ser meritoria, sometiendo a prueba la convicción de sus ideas, su honradez pública y privada y su talento político. Y esto es lo grande de su obra política y social, en lo que reveló su energía y su saber.

ACTITUD DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Los dos proyectos en cuestión encerraban un propósito político, cual era, el de obligar a los nuevos elementos ingresados al Cuerpo Legislativo a que decidieran definitivamente su actitud. Estos guarda-

(1) Así subrayado en el proyecto de honores a Pereyra.

ban silencio, trabajando a la sordina. Eran ellos quienes habían arrancado al señor Pereyra la orden del fusilamiento, e imposibilitado la acción generosa del general don Antonio Díaz, ese viejo veterano, buen servidor de la patria, que supo salvar su conciencia de la sangre que en el Cerrito se derramara. Y, sin embargo, se dejaban decir que esa sangre había sido vertida por hombres de la Defensa, por el general Medina, al cumplir la orden del Poder Ejecutivo. Así querían librarse de la responsabilidad contraída. No, el doctor Palomeque quería obligarles a que se decidieran, a que afrontaran la situación creada, porque aquello no era la obra del señor Pereyra, sino la del círculo que lo estrechó y lo obligó a adoptar la determinación fatal, sobre la cual, sea dicho en honor a su memoria, volvió en seguida, decretando el perdón, aunque tarde, porque la orden de matar había sido conducida *reventando caballos*.

Iba, pues, a colocarlos en una situación difícil. Ellos habían arrojado el guante, y él lo recogía, diciendo: «Sí, todo eso ha sucedido; pero si bien ello levanta el carácter del gobernante, cumple a ustedes hacerse solidarios de la obra que han realizado, aplaudiéndola desde el asiento legislativo».

Inmediatamente de presentado este proyecto, se iniciaron trabajos para imposibilitar su discusión. El señor Pereyra no se dió cuenta del fin perseguido por quienes le rodeaban, ni del auspiciado por el autor del proyecto. En su consecuencia, cayó en la trampa armada por su ministro de Gobierno, doctor de las Carreras, en combinación con el doctor Juanicó, y pasó un mensaje, o petición, a la Cámara, para que no se le confirieran tales títulos honoríficos, fundado en su amor a la democracia (1).

El argumento era del género simple. La democracia, el republicanismo, no están reñidos con los títulos que deba conferir la nación a sus hijos o habitantes. Para eso hay un artículo de la Constitución que lo autoriza al Cuerpo Legislativo, en el cual se fundaba el doctor Palomeque al dar las razones de su proyecto.

La Comisión, en su mayoría, con excepción del señor don Luis Lerena, se expidió aceptando el proyecto (2). Con este motivo se suscitó la discusión sobre si podía informar en minoría el señor Lerena. El doctor Palomeque sostuvo que la práctica era favorable. El doctor Juanicó manifestó que el punto no dejaba de presentar alguna dificultad y tener también alguna gravedad, especialmente cuando la

(1) Sesión del 6 de marzo de 1858.

(2) La Comisión estaba compuesta de los señores Jaime Illa y Viamont, Atanasio C. Aguirre, José G. Palomeque, Hermenegildo Solsona y Luis de Herrera. El señor Roxlo padece un error cuando dice que la Comisión se expidió en *minoría* (*Historia crítica de la literatura uruguaya*, por Carlos Roxlo). En un principio, se expidió en mayoría. El señor Roxlo confunde con un hecho posterior, del cual hablaremos a continuación.

Comisión en minoría, como en el caso, estaba constituida por uno solo de los miembros, lo que era apoyado por el doctor Palomeque. El señor Juanicó indicó la conveniencia de nombrar una comisión para que estudiara el punto (1).

Así se hizo, pero luego el doctor Palomeque observó que no era posible entrar a discutir lo fundamental, sin conocer lo que la Comisión en minoría exponía, cuyo informe no se había repartido. Él no tenía inconveniente en entrar al debate, pero, decía, «siempre sería bueno que estudiásemos un poco, porque pudiera suceder que las razones de la Comisión en minoría fuesen de tal naturaleza que yo, autor de las mociones, las reconociese de tal importancia, que pudiese convenir con ellas, y así en una discusión sobre tablas sería muy peligroso. Es preciso que se mande repartir : no puede ser de otro modo. Además no se pierde nada».

Ahora bien, como los señores Juanicó y Aguirre creyeran posible entrar al debate, el doctor Palomeque observó lo siguiente : «Hay—dijo—una Petición de Su Excelencia el señor presidente de la República rehusando los honores que la Comisión especial aconsejó a la Honorable Cámara le decrete ; hay una solicitud firmada por algunos ciudadanos que piden a la Honorable Cámara adopte esa disposición ; y hay un informe, que, al parecer, contraría el dictamen de la Comisión. Son tres cosas, señor presidente, para resolver este asunto, que es necesario que los representantes estudien bien, y, sobre todo, la Comisión, en los dos primeros puntos. Cuando dije antes que no necesitaba de otros datos para sostener el dictamen, no me acordé de estos dos puntos ; pero, ahora que lo recuerdo, hago presente a la Honorable Cámara que yo, por mi parte, no estaría habilitado para la discusión sin conocer los fundamentos del señor presidente de la República y de los ciudadanos». Por esta razón opinaba que sería bueno se repartiera el dictamen ; mientras tanto, la Comisión podría expedirse sobre esos dos asuntos y venir todos a la vez a considerarse a la Honorable Cámara.

En su virtud, el doctor Juanicó propuso se diera cuenta de todos esos antecedentes, para luego, instruida la Cámara, resolver si se suspendía o no la orden del día. Leídos esos documentos, resultó que los ciudadanos que apoyaban el proyecto del doctor Palomeque eran de los más conceptuados de la sociedad. Allí se leían los nombres de los señores Luis de Herrera, Joaquín Requena, Francisco S. de Antuña, Francisco Lasala, Juan Roballos, José R. Darrua, Indalecio Correa, Antonio Rius, Antonino D. Costa, Avelino Barbat, Guillermo Shuanon, Manuel Curbelo, Darío Brito del Pino, Manuel Méndez, Vicente Manrupe, Tristán Narvaja, Joaquín Requena y García, Torcuato Espinosa, Hipólito Gallinal, Federico Anavitarte, G. Rodríguez Larreta,

(1) Sesión del 6 de marzo de 1858.

Juan J. Segundo, Lucio Maciel y Sostoa, Juan D. Pestaña, Salvador Mandia, Martín Berinduagne, Gaspar de Latorre, Gregorio Brun, Carlos Lacalle, Gregorio Castro, Adolfo Areta, Juan Antonio Estomba, Belisario Estomba, Ignacio Mallada, Antonio M. de Camargos, Federico Espinosa, José M. Novoa, Melitón Aréchaga, J. Salvañach, Álvaro Salvañach, J. P. Salvañach (hijo), Adolfo Ydoyaga, Jaime Montero, Diógenes F. Latorre, Aureliano Nieto, Eladio Bacigaluz, Zenón Freire, Pantaleón Méndez Caldeira, Alfredo de Herrera y Feliz Quesada (1).

Después de una discusión sobre el fondo del asunto, se mandó que volviera a la Comisión. Por lo demás, se sancionó, sin mayor oposición, el proyecto referente al general Medina.

LOS DOS INFORMES DE LA COMISIÓN

Vuelto el asunto a la Comisión, ésta se dividió, convirtiéndose la mayoría en minoría. Los señores Luis Lerena, J. Illa y Viamont y Atanasio C. Aguirre sostuvieron se difiriera la consideración del asunto hasta la terminación de la presidencia del señor Pereyra. Se fundaban para ello, no obstante la opinión favorable manifestada antes por los señores Aguirre y Viamont, en las razones expuestas por el señor Pereyra. Creían ahora, y no entonces, que «no sentaban bien los honores y distinciones tributados al gobernante, mientras subsistiera en el gobierno» (2). Era sobrio el dictamen, «después de un maduro examen de este serio y delicado asunto». Reconocían «los grandes servicios del ciudadano presidente de la República», que habían merecido «la más alta expresión de estimación de la Honorable Cámara y los sentimientos de gratitud que habían inspirado las peticiones de tantos ciudadanos respetables de los Departamentos», como asimismo «el patriotismo, la abnegación y la fuerza de voluntad» del presidente, que habían «salvado a la República de peligros tan grandes como inminentes». Hoy mismo, decían, «volvería a aconsejárselo, y acaso en vista del pronunciamiento unánime de los habitantes del Estado, en vista del civismo y altura con que el propio ciudadano presidente resiste los honores que se trata de tributársele, la Comisión os propondría que, trayendo a la memoria la época y la carrera en que ese eminente servidor de la patria empezó a rendirle sus servicios, le acordaseis una distinción más conforme con nuestras costumbres republicanas y más análoga con aquellos distinguidos antecedentes». Pero, «la Comisión se detenía ante los principios y razones expuestos en la representación del mismo ciudadano presidente», y por eso, dos de sus miembros reaccionaban sobre su determinación anterior. Ya sabemos

(1) De los Departamentos llegaron otras solicitudes por el estilo. Entre otras véase la que se enuncia en la sesión del 22 de abril de 1858.

(2) Sesión del 29 de mayo de 1858.

cuán pueril era el argumento del señor Pereyra : ¡ no creía democrático el decretar honores !

Pues bien, ante la sobriedad de ese documento, que obedecía a un gran plan tramado, o a una manifestación de fino amor y respeto, ante la declaración del gobernante, se colocaban en minoría los señores Palomeque y Solsona, con toda independencia de criterio, para hacer notar el error, no sólo del presidente, sino de quienes, reconociendo los altos méritos del magistrado, no se atrevían a ir contra su voluntad expresada. Los señores nombrados hallaban elevados y nobles los sentimientos patrióticos y de modestia que tanto caracterizaban al señor Pereyra, pero se ocupaban de combatir cuanto había expuesto. En ese dictamen, detenido y lleno de lógica, se destruían los tres argumentos alegados en la petición del señor Pereyra ; obra indiscutiblemente de su impulsivo ministro de Gobierno doctor don Antonio de las Carreras, quien tenía miedo a decretar honores, cuando no lo tenía para mandar fusilar prisioneros y asumir la responsabilidad del hecho para ante la historia, con una audacia que asombra, como lo proclamó en el Jurado con José Cándido Bustamante, y en su diario *La Discusión*, en 1860, lo que le valió el epíteto de *asesino de guante blanco*.

En esa petición decía el señor Pereyra que los títulos honoríficos estaban en «oposición a los principios democráticos que profesa el país». No ; decían los señores Palomeque y Solsona, eso «envuelve un notorio error ; sería desconocer la incuestionable facultad de que se halla revestida la Asamblea General, explícitamente consignada en el artículo 17, inciso 13, de la Constitución del Estado», que dice que a ella le corresponde «decretar honores públicos a los grandes servicios». Esos títulos y declaraciones honoríficas, pues, se ajustaban y armonizaban con los principios republicanos que estatuye el Código fundamental. Destruído así este principal argumento, otro tanto hacían con aquél, curioso y peregrino, de que el artículo 78 de la Constitución hablaba de señalarse al presidente, en cada elección, la renta anual con que se compensan sus servicios, sin que se pueda aumentar ni disminuir mientras dure en el desempeño de sus funciones.

«Esa renta anual no es el título honorífico de que ahora se trata, ni el título es la renta de que habla el artículo 78», decía la Comisión en minoría, y con razón. En un caso se limitaba la facultad de la Asamblea, no pudiendo aumentar ni disminuir la renta, y en el otro la dejaba entregada al buen criterio de los legisladores al decretar los honores, sin especificar la época. No podían «confundirse, sin exponerse a un error o a una interpretación arbitraria».

Rebatidos así estos dos argumentos, entraban luego a estudiar el tercero, «el más notable, el más grave y el que había llamado más seriamente la atención de la Comisión, argumento que, con toda energía y convicción, decía ella, «tiene en contra de sí lo inaplicable al Gobierno constitucional del 1.º de marzo».

Los sentimientos de dignidad se sentían heridos al leer en la petición del señor Pereyra aquello de que «por desgracia, en algunas de las Repúblicas americanas, declaratorias y títulos semejantes habían sido conferidos a los que (1) las gobernaban, en los más afligentes episodios de la historia política de esos pueblos, y el descrédito en que necesariamente han caído tales manifestaciones, debe también influir en el ánimo de Vuestra Honorabilidad para no prestar su sanción a lo que se proyecta en su seno, como influyen en el mío para suplicarlo así encarecidamente».

La Comisión sostuvo, indignada, que «había una gran diferencia entre un ciudadano que había subido al poder constitucionalmente y aquellos a quienes la fuerza material había elevado a la dirección de los pueblos, sofocando la opinión, corrompiendo las ideas y convirtiéndose en tiranos, en cuyo caso, el temor que ejerce superioridad sobre la conciencia de los ciudadanos, dicta esas declaraciones de que por desgracia se encuentran ejemplos en la historia de algunos pueblos hermanos».

Y aquí se veía clara la alusión que la Comisión en minoría hacía a las ideas predominantes durante la tiranía de Rosas, y de su instrumento el general Oribe, a quienes tanto habían servido los que ahora sostenían la errónea doctrina que se rebatía. Se sentían heridos, como se ha dicho; y mucho más el autor de la moción, por lo que ya veremos lo que más adelante alegaba al personalizarse el asunto.

De ahí que hiciera presente, que «esas declaraciones eran usurpadas al verdadero mérito, y por lo mismo debían necesariamente morir, y murieron siempre, con la muerte política del individuo; pero hoy es muy diverso el carácter de las distinciones honoríficas que la nación entera, se puede decir, quiere que Vuestra Honorabilidad acuerde al ciudadano Pereyra».

Y, con esa altivez nacida de la tranquilidad de una conciencia honrada, declaraba, el autor de la moción, que ésta había «sido presentada por un Representante cuya independencia es bien notoria, agregando, con referencia al señor Pereyra, que éste era incapaz «de imponer a un diputado la obligación de promover en su favor títulos ni recompensas; como imposible en los representantes del pueblo la aceptación de una imposición que les degradaría y humillaría».

Luego, se traía a colación las manifestaciones de los habitantes de Montevideo, Tacuarembó, Maldonado, Colonia, Cerro Largo, Soriano, Florida, Paysandú y Minas, que «explicaban bien alto la opinión del país y la necesidad de que no se retardara por más tiempo una distinción que correspondiera a los merecidos y recomendables servicios de Su Excelencia el Excelentísimo señor presidente de la República».

La Comisión en minoría, teniendo en cuenta ese sentimiento nacio-

(1) Debió decirse a quienes, y no a los que.

nal, y la actitud del señor Pereyra, sostenía que «en vez del título de *Gran Ciudadano Benemérito de la Patria*, digno por cierto—decía,—se reemplace por otro que signifique una más honorífica ofrenda a sus notorios servicios, a su civismo y a la justicia que merecidamente reclaman sus altos antecedentes».

Así el doctor Palomeque salvaba la situación en que lo había colocado «la negativa de Su Excelencia y la petición de los habitantes de la República». En su consecuencia, aconsejaba se promoviera al empleo de brigadier general de la República al ciudadano don Gabriel A. Pereyra.

CONTUNDENTE RÉPLICA DEL DOCTOR PALOMEQUE

Las líneas estaban tendidas, e iba al fin a librarse la gran batalla, en la que se destacaría la personalidad vibrante del autor de la moción; durante la cual revelaría su profunda convicción, serenidad de ánimo y enérgico pensamiento.

Iniciado el debate, el señor Aguirre, miembro informante de la mayoría, se limitó a exponer que, al aconsejar aquello, «consultaba rigurosamente los principios republicanos y la alta moral que debían regir las resoluciones de la Cámara».

Ni una palabra más, ni una palabra menos. Hablaba con toda la autoridad de un ser superior que no se digna discutir sus mandatos. No creía de su deber descender a contestar los extensos argumentos expuestos por la Comisión en minoría. Se quería dar un golpe de maza, como para cortar toda discusión, y así ganarla. Y esto, porque no podía creerse que el orador viviera convencido de la procedencia de los argumentos del señor Pereyra, por más que nos hablara de «principios republicanos y de la alta moral a regir las resoluciones de la Cámara».

En este procedimiento se veía clara, una vez más, la tendencia del círculo dominante en el Parlamento, de abatir la personalidad del doctor Palomeque, contrariándole en cuanto pensamiento emitiera, como él se los diría en oportunidad. Sin embargo, él conseguiría que el señor Aguirre entrara a la discusión, saliendo así del olímpico asiento en que se había colocado.

El doctor Palomeque, como miembro informante de la Comisión en minoría, a la vez que autor de la moción, contestó extensamente, ilustrando el punto bajo todas sus facetas. Empezó por recordar que, «hablar de moralidad sobre las resoluciones de la Cámara» era olvidar «que la moralidad del Cuerpo Legislativo debe estar fundada en sus preceptos constitucionales; y desde que sus resoluciones se basan en esos preceptos, la moralidad se muestra al pueblo».

Dado este arresto magistral, lamentaba no haber comprendido las razones alegadas por el miembro informante. Esto era una ironía,

pues ningunas se habían expuesto y desarrollado. Parecía quererse ganar la cuestión sólo con las asentaderas, contándose con la mayoría ya hecha. Pero, como el doctor Palomeque así lo comprendía, se resolvió a magnificar el debate y a castigar la arrogancia de quienes venían a invocar «principios republicanos y alta moral», de una manera tan seca y absoluta. Después de hacer presente que la Constitución facultaba al Cuerpo Legislativo para decretar honores y distinciones a los grandes servicios, se preguntaba : «¿Habrá cometido, pues, el Cuerpo Legislativo un acto inmoral, usando de la facultad que le concede el Código Fundamental? Me parece que el argumento, lejos de favorecer a la comisión en mayoría, la aleja de la razón, de la justicia y del deber también, que imponen a un Representante».

Si contundente era esta argumentación, no menos lo era cuando decía, con referencia a la oportunidad para decretar los honores, que no se establecía tal cosa en la Constitución, ni existía ley alguna prohibitiva, por lo que la moción no estaba en pugna con los principios republicanos. «Jamás—decía—se ha levantado una voz en este recinto para decir que esos hechos están en oposición con los principios republicanos : jamás se ha levantado una voz para decir que es inmoral.»

En su peroración llegaba hasta declarar que «si el señor diputado hubiera tenido el trabajo de revisar un poco ese libro, que hace la regla de los procedimientos del ciudadano ; si hubiese tenido el trabajo de revisar un poco nuestro Reglamento, de cierto que no habría aconsejado tal resolución. Esa resolución, sí, señor presidente, está en oposición a los principios republicanos, a los principios constitucionales, porque va más allá de lo que la Constitución ha señalado a un representante».

Hombre conocedor de los procedimientos parlamentarios, avezado a su lucha, no se desconcertaba fácilmente, por lo que la lucidez y serenidad de su espíritu le permitían encontrar los argumentos pertinentes. Era así que, le recordaba al señor Aguirre que no podía una Cámara declarar que dejaba pendiente el debate para cuando terminara la presidencia del señor Pereyra. Su deber era desechar o aprobar el proyecto, porque la Constitución prohibía presentar durante un mismo período el proyecto desechado. «El señor diputado dice : para cuando concluya la presidencia. No es para el período que viene ; a ningún representante le es dado el año que viene venir con el mismo asunto ; yo no quiero que se haga lo que la Constitución no ha mandado», decía con este motivo.

Después de estas consideraciones, entraba al fondo del asunto. Había limpiado el camino de inmoralidades y levantado los principios republicanos. Podía marchar airoso hasta su fin. Con ese motivo colocaba una banderilla de fuego en la mente del adversario cuando le preguntaba :

«¿La cuestión, el asunto, de que se trata hoy, es un premio a los importantes y grandes servicios (reconocidos por el señor Aguirre) que ha prestado el veterano más antiguo que tiene la República, o es por los servicios que va a prestar de hoy en adelante hasta el año 60, o es por los grandísimos servicios que ha prestado hasta hoy? Si es para allá, es un juicio temerario adelantarse y decir: para entonces premiaremos a usted. Si es que se han de premiar los servicios prestados hasta hoy, es un absurdo decir: no, no los premiamos, dejemos que concluya su presidencia. Sólo en un caso convendría yo, y desearía que la Comisión se explicase, y convendría en que no se considerase el asunto, en que se aplazase, y es, si la Comisión dice que se aplase el conocimiento de este asunto, para ver si el presidente de la República continúa en su senda honorable y patriótica hasta entonces. Si se quiere tener en rehenes al presidente de la República, eso es otra cosa; entonces sí; pero yo no puedo creerlo, no puedo hacer la injusticia a la Comisión de creer que esa sea su mente; pero eso es lo que se deduce de la proposición de la Comisión».

No se contentó con tan formidable ataque a quienes habían hablado de moralidad y de principios republicanos, queriendo así justificar sus errores e inconsecuente proceder, al rechazar ahora lo que habían aceptado días antes, sino que quiso acentuar mayormente la personalidad consular del señor Pereyra. Él había dicho que este ciudadano era el veterano más antiguo que tenía la República, y, «sin pretender hacer su biografía, porque eso sería emplear tal vez la noche, sólo citaré—decía—un hecho para probar la evidencia de mi aserto. El año 11, cuando nuestros padres abandonaron su bienestar y su fortuna para derramar su sangre, a fin de darnos libertad, y demostrar al mundo que la nación oriental era grande, el ciudadano don Gabriel Antonio Pereyra, en esa memorable jornada de las Piedras, selló con su sangre y con su espada la independencia de la República; y el ciudadano que cuenta hoy 64 años de edad, manifiesta bien que no excedía de 17 cuando servía a la patria. Es verdad, pues, entonces, que él es el veterano más antiguo».

Y así, después de afirmar su aserto, concluía firmemente diciendo: «¿Es verdad, también, como lo ha reconocido la Comisión, que el presidente de la República ha prestado grandes e importantes servicios, y que ha salvado a la patria? Si se reconoce esto, señor presidente, ¿por qué aplazar la cuestión de darle un título de brigadier general, cuando el país tiene otros que tal vez con menos sacrificios los han adquirido? No puedo persuadirme que el Cuerpo Legislativo pretenda aplazar la cuestión. El dilema es este: o merece o no merece el presidente de la República un título. Si lo merece, es preciso dárselo; si no lo merece, es preciso negárselo. Esa es la cuestión».

Era formidable el final de su exposición. Contenía un ataque de mano maestra. Iba recto a obligar a sus adversarios a que una vez por

todas entraran a la liza y explicaran francamente su opinión : si aceptaban o no lo que ellos, y sólo ellos, habían realizado en Quinteros. Por lo demás, la actitud personal del señor Pereyra, podría tener una explicación, si es que él hubiera escrito esa solicitud, o la hubiera inspirado. El fenómeno psicológico, en este caso, se explicaría diciendo que no quería recibir honores, por haber ordenado el derramamiento inútil de la sangre de sus hermanos. Esto podría ser el grito de su conciencia honrada, lo que lo dignificaría y ennoblecería. En parte alguna consta que el señor Pereyra, a diferencia de su ministro de las Carreras, proclamara la justicia de su actitud y se envaneciera del hecho, asumiendo la responsabilidad histórica. Esa protesta revela, a lo menos, un carácter honrado. No quería honores por haber cumplido con un deber tan triste. Libre ya de la violencia moral ejercida sobre su espíritu, en aquella hora fatal, su natural humano, bueno, noble, aparecía, diciendo : ¡ la honra con mancha no es honra ! Esto sería lo que no se atrevían a decir quienes se apoyaban en su solicitud para postergar el debate.

DEFENSA FRANCISCANA DEL SEÑOR AGUIRRE

Cuando el señor don Atanasio C. Aguirre usó de la palabra, manifestó que el doctor Palomeque había hecho del informe de la mayoría «un fantasma para combatirme». Se redujo a explicar los conceptos de «inmoralidad y principios republicanos» empleados en el dictamen, porque comprendía que esto era un error y lo que había herido al autor de la moción. Los términos de principio republicano los había usado «porque así lo pensaba, así lo decía el señor presidente de la República, desechando esa distinción, y así se entiende ese desprendimiento, esa franca demostración de desinterés, de limitarse a mirar debidamente recompensados los servicios, por eminentes que sean, con la gratitud de sus conciudadanos».

Esto era lo que entendía por principios republicanos. Pensaba, y sentía así, porque así pensaba y sentía el presidente. El principio republicano lo veía en el desinterés del magistrado al rechazar el título honorífico. ¡ También Rosas los rechazaba !

Si era pueril y cándida la explicación de esas palabras, mucho más lo era la de la «inmoralidad», tan ligeramente empleada. Para explicar ésta se halló en una situación más embarazosa, pues ya no podía pensar y sentir con el presidente. Y tan lo comprendió (porque el señor Aguirre no era hombre de ingenio ni de genio para desenvolverse en situaciones difíciles), que cuando se vió en el caso de explicarla, se expresó así : «Moralidad, dije, es verdad. Pude haber dicho circunspección, pero dije moralidad porque la Cámara, aplazando la consideración de este asunto, no violenta los principios manifestados por el



Atanasio C. Aguirre



presidente de la República, por el ciudadano don Gabriel Antonio Pereyra. Es en este sentido que he dicho más moralmente».

Reconocía que el señor presidente merecía los honores, pero que «no era la oportunidad de hacerlo».

Y luego, se defendía del cargo de inconsecuencia que se les había hecho a los dos miembros de la mayoría, manifestando que si en el primer momento sostuvo el pensamiento del doctor Palomeque, había sido porque «el presidente de la República no había recibido aún ninguna manifestación de aprecio y de consideración por sus eminentes servicios, pero que ahora ya lo había recibido al contestar la Asamblea el Mensaje del presidente al inaugurar las Cámaras».

Sostenía que «era circunspecto no violentar con una demostración que la rechaza, que la resiste la misma persona a quien se quiere agradecer». «La Comisión—terminaba diciendo—no ha tenido otro norte que el deseo de respetar las indicaciones de la persona a quien se proponía la Cámara agradecer.»

El doctor Palomeque, con suma habilidad, paró el golpe del señor Aguirre. No, le respondía, ya aquí no está en juego el título honorífico de benemérito ciudadano, contenido en el primitivo proyecto, sino el de promover al señor Pereyra a brigadier general. Esto no afecta los principios republicanos, porque hay un artículo constitucional que autoriza al Cuerpo Legislativo para conferir ese empleo.

El autor del proyecto lo había retirado, y la comisión en minoría presentaba otro. Era inútil, pues, discutir lo que estaba fuera de discusión. Y ese empleo no lo había renunciado el señor Pereyra. No constaba en parte alguna, como lo informaba, en ese acto, la secretaria, que el señor Pereyra hubiera renunciado tal cosa. Su renuncia había sido para el título honorífico de *Benemérito Ciudadano*. Y la Comisión en mayoría, bien que conocía lo expuesto, porque así se había discutido en su seno, e impreso y repartido y llevado al conocimiento de todos los Representantes.

En este sentido, él decía : «El presidente de la República ha rehusado un título honorífico, porque ha creído, en su conciencia, que eso no se ajustaba a los principios republicanos. Está bien, dice la Comisión ; aceptados, señor presidente, esos sentimientos patrióticos ; pero yo no puedo, ni debo, ni quiero desoir a los pueblos, y en presencia de su clamor, yo vengo a recordar otra cosa, a lo que, por cierto no habrá objeción que hacerle. Es ahí adonde debía contraerse el señor diputado, a lo nuevo : no es título tampoco : es un empleo el que se le confiere, el empleo de brigadier general. No es el título honorífico de Gran Ciudadano Benemérito de la Patria».

Por lo demás, el argumento del señor Aguirre de haberse hecho ya una manifestación de aprecio al señor presidente, lo destruía, diciendo que eso no era bastante para los Representantes del pueblo, aunque lo fuera todo para el magistrado. «Debe hacerse—decía—alguna

otra cosa más para destruir ciertos cargos, ciertas cartas, ciertas comunicaciones que se han visto en la Prensa. Es preciso destruirlos, y que las naciones del viejo mundo vean que el Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay se encuentra al lado del Cuerpo Legislativo, y el Cuerpo Legislativo al lado del Poder Ejecutivo. Es preciso destruir eso con sanciones de esta naturaleza; pero, con resistencias semejantes, se viene en apoyo de lo que algunos han escrito, de lo que hemos visto todos».

Aquí se veía al político que buscaba los medios de fortificar el poder del Gobierno. Quería que la obra del 1.º de marzo de 1856 no se viniera al suelo, y que todos marcharan unidos hacia el fin buscado. Empezaba a sentirse cierta desviación de la línea trazada, y era necesario enderezarla, para que se marchara por el camino recto, iniciado desde un principio. Si la desunión se operaba, no sería extraño se volviera a las andadas, y un movimiento anárquico tumbara al gobernante; o éste se viera en el caso de arrancar de cuajo la causa del malestar que comenzaba a sentirse, y cuya manifestación ahí estaba en las cartas y comunicaciones publicadas (1).

Y, convencido de haber cumplido con su deber de ciudadano y de Representante, así lo declaraba, dejando a la Cámara que resolviera lo que creyera más conveniente, haciendo presente que no volvería a tomar la palabra. Quedaba tranquilo, y dejaba a otros la responsabilidad de lo que sucediera. Él había agotado todas sus fuerzas.

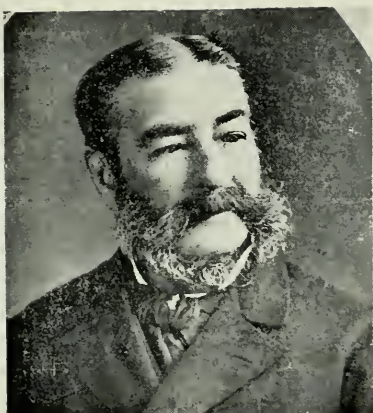
Otro tanto declaraba el señor Aguirre, después de una ligera exposición, terminando por decir que no pensaba pudiera creérsele animado de otros sentimientos que los de proceder, como lo había hecho, con circunspección.

PERSONALIDAD DEL DOCTOR ARRASCAETA

Y fué a esta altura del debate, cuando ya el presidente (que lo era don Martín Pérez) pronunciaba las palabras sacramentales de votarse si no había quien hiciera uso de la palabra, que la pidieron los señores doctor don Enrique de Arrascaeta y don Avelino Lerena.

El doctor Arrascaeta era un hombre entero, de sanos principios, de gran erudición, de mucha labor, de carácter enérgico y de humildad y bondad características del sabio. Algún día el historiador concienzudo ha de desentrañar esta personalidad de las páginas polvorientas de la historia, para enseñar a las futuras generaciones el tesoro intelectual y moral que se encerraba en aquel cuerpo pequeño con alma gigante. Aun lo vemos en su derruida casucha de la calle Alzaybar, si mal no recordamos, rodeado de papeles llenos de polvo, escribiendo sus delicadas poesías, o sus concienzudas exposiciones sobre

(1) No tengo los diarios de la época, para dar una idea de lo que en ellos se decía.



Enrique de Arrascaeta

la tendencia de la literatura americana, a publicarse en las páginas de *La Revista Uruguaya*, en 1875. Era un espíritu abierto a todos los grandes ideales, dotado de liberalidad y gran entusiasmo. Amaba la juventud, a la que alentaba, no sólo con su verba candente, sino con el ejemplo austero. Por eso, cuando terció en el debate, lo hizo para reflejar en su discurso ese amor a los principios republicanos a que tanto culto rendía, y rindió, cuando el sol de la libertad se vió obscurecido en la patria hollada por la planta del invasor extranjero, en complicidad con un mal hijo descarriado de la buena senda.

El doctor Arrascaeta no podía consentir que así, sin razón ni fundamento, se quisiera abatir la personalidad del doctor Palomeque, que era lo que en el fondo se escondía. Amante de la justicia, vino en su ayuda, forjándose, desde entonces, entre ambos ciudadanos, una amistad tan sincera y noble, que la muerte no rompió. Más tarde se ató el corazón del joven hijo del doctor Palomeque al de aquel anciano vigoroso y decidido, que un día saliera de su choza, de su encierro, sólo para recorrer las calles de la ciudad, y honrar las virtudes del último sobreviviente de los guerreros de la Independencia, el general don Cipriano Miro (1).

El doctor Arrascaeta hizo, con el talento que lo distinguía, una sucinta y clara exposición de lo que entendía por principios republicanos derivados del precepto constitucional. No creía que éste autorizara a la Cámara para conferir *títulos personales* que no tuvieran designado una jerarquía cualquiera, pero sí, que la facultaba para proveer empleos. Hecha esta distinción, la ilustraba con citas históricas tomadas de la historia griega y romana. Venían a sus labios los nombres de Arístides y de Cicerón, para demostrar que eran los pueblos los que discernían espontáneamente esos títulos, transmitidos luego a la historia, sin necesidad de una resolución gubernativa. El pueblo había dado a Arístides el título de *justo*, y a Cicerón el de Padre de la Patria, cuando la conspiración de Catilina. Otro tanto, decía, ha sucedido en nuestro pueblo. «Eso es lo que ha sentido vivamente y ha mostrado su gratitud a los altos servicios prestados por el presidente de la República. En esas manifestaciones espontáneas y grandes, está traducida su gratitud a esos servicios, que han colocado sobre las sienes del anciano presidente de la República la corona cívica de la gratitud popular.»

Y así, según su criterio científico, deslindada la cuestión constitucional, sostenía que se dejaban intactos los principios republicanos al sancionarse lo que proponía la Comisión en minoría.

(1) Véase *La Opinión Pública* de 1889.

EL EPICUREÍSTA HERRERA

Esta peroración, corta, pero nutrida, dentro de la cual se declaraba que el señor Pereyra «había salvado la patria, su nacionalidad y sus instituciones», produjo una honda impresión en el seno de la Cámara. Era una voz imparcial e ilustrada la que se incorporaba a las filas de los miembros de la minoría, quienes la escuchaban con respeto y la acogían con entusiasmo. Arrancó asimismo un *apoyado* a otro hombre joven, el doctor don Juan José de Herrera, recién nacido a la vida pública, lleno de sensatez y energía, perteneciente a ese grupo de hombres elegantes de la frase y del cuerpo, que pasaron su existencia en medio de una inalterable placidez de espíritu. Fueron filósofos de la época florida de Roma, con un concepto profundo del epicureísmo, trasplantado a la Edad Moderna; éste que encierra grandes virtudes, como nos lo ha explicado en nuestros días el ilustre Caro.

También en ese ambiente parlamentario, y en esos días caliginosos, se abrirían los corazones de Herrera y Palomeque para confundir dolores y entusiasmos, que ni el tiempo ni la muerte romperían.

La jornada empezaba a tomar un giro imprevisto. La victoria, que se creía asegurada por la mayoría, empezaba a cambiarse en derrota. Un presentimiento político, ese del cual había hablado el doctor Palomeque, los conducía a unir los esfuerzos para demostrar a todos que un mismo pensamiento y un mismo sentimiento los embargaba en ese instante psicológico de la sociedad oriental.

EL SESUDO LERENA

En efecto, el señor don Avelino Lerena se incorporó al debate, para manifestar que se felicitaba del giro que había tomado la cuestión «al prescindirse del título de Gran Ciudadano, sin desconocer por eso los eminentes servicios que el presidente de la República—decía—ha rendido a la patria, especialmente en la última crisis revolucionaria por que acaba de pasar el país».

Sostenía que había cosas que «un cuerpo representativo republicano no podía jamás conceder, por oponerse al principio de igualdad, base del sistema democrático, que quería ver ileso y puro para gloria y dignidad de la República».

Creía profundamente que el señor Pereyra, al asumir aquella actitud, se «había elevado a la altura de sus antecedentes, que había cumplido con su deber, honrándose a sí mismo y a su patria».



Juan José de Herrera

Con este criterio, erróneo a nuestro juicio, pues la democracia no está reñida con la aristocracia del talento y de la virtud, se preguntaba y se contestaba el señor Lerena: «¿Se quiere saber hasta qué punto el presidente de la República ha cumplido sus deberes? Se encuentra en su renuncia misma, en ese documento clásico que sólo tiene igual en el programa de la presidencia de 1.º de marzo de 1856».

El señor Lerena, con el despejo intelectual que le caracterizaba, buscó un término medio. Llegó al campo de la lucha en el momento álgido. En su consecuencia, presentó un proyecto conciliador. Por él se acordaba el dicho título de brigadier general, el cual sería remitido, a nombre de la Asamblea, el día del cese en la presidencia de la República. Esta moción, la creía «digna de un pueblo libre, y del veterano de la Independencia» (1).

EL DOCTOR LAPIDO

Era tal la animadversión que sentían los hombres que habían servido en el Cerrito, o pertenecían a esta escuela, que no querían oír hablar de *títulos honoríficos*. Estaban hartos de los usados durante esa época ominosa. Por eso, al lado de las muy levantadas frases del señor Lerena, se oían, en seguida, las del señor Lapidó, un ciudadano de criterio sano y de equilibrado juicio. Rechazaba el título, no porque lo considerara impolítico o inconstitucional, reñido con las buenas prácticas democráticas, sino porque venía a su memoria el recuerdo del pasado triste, en que tanto se había abusado de estos honores. Creía que sería «espléndido el día en que bajase ese ciudadano del poder, y fuese el Cuerpo Legislativo a presentarle un título honorífico; que sería magnífico en el sentido de la libertad». No obstante declaraba sinceramente: «Si todavía no estuvieran tan próximas las tristes épocas en que tanto se han vilipendiado los honores *que tienen derecho a tributar los pueblos a sus representantes*. Pero, está tan próxima esa época, que, en cuanto a mí, cuando se presentó la moción que trataba de conceder al presidente de la República el título de Gran Ciudadano Benemérito de la Patria, sin embargo de ser tan distinta la situación, sin embargo de haber tanta diferencia en la noble figura del presidente de la República con la odiosa y abominable *figura de los otros hombres a quienes se han concedido títulos semejantes*, creía que nosotros debíamos hacer algo en el sentido de no sancionar esa moción, *como una reprobación a esas malas épocas*».

Estas palabras fueron acogidas por la Cámara en medio de grandes apoyados. Justo es dejar constancia del hecho honroso. No hubo entonces una sola voz que se levantara para defender esa época degradada. Rechazaban el título honorífico, no porque los principios republi-

(1) El señor Fuentes se opuso a lo de transferir el cumplimiento de la ley.

canos y la moralidad lo aconsejaran, sino para demostrar que condenaban enérgicamente *esas malas épocas* en que un Rosas presidía los destinos de la República con su *odiosa y abominable figura*. Ahí se veía el sentimiento noble de aquellos ciudadanos, verdaderos fundadores del partido nuevo, nacido a la vida durante la administración del señor Pereyra, con el programa presidencial redactado por hombres como Alejandro Magariños Cervantes y José Gabriel Palomeque, y con el Manifiesto del Club Unión, en 1857. Esto era lo que defendían, y no querían se deslustrara. Por eso el señor Lerena recordaba ese programa del 1.º de marzo de 1856; y por eso el señor Lapidó pronunciaba aquellas palabras vibrantes, apoyadas por toda la Cámara, para enseñanza de las generaciones futuras.

Esos hombres no querían ninguna vinculación con el pasado luctuoso. Buscaban el porvenir, y no lo deseaban hallar en las tristes encrucijadas de una época sangrienta. Y en su obsesión de espíritu, llegaban hasta desechar un proyecto que consideraban justo y constitucional, sólo porque de esta manera condenaban, *reprobaban las malas épocas* en que se destacaba la *abominable figura* de los hombres que habían *vilipendiado los honores*, que, sin embargo, decían, TIENEN DERECHO A TRIBUTAR LOS PUEBLOS A SUS REPRESENTANTES.

El horror a aquella época les hacía incurrir en una injusticia. Si creían, como creían, que la Cámara tenía derecho a tributar esos honores, debieron cumplir con su conciencia. Pero, ésta se sentía inclinada a no hacerlo, porque así reprobaba lo malo de otras épocas.

DOCTRINA TRIUNFANTE

La doctrina, pues, sostenida por el doctor Palomeque, desde un principio, salía triunfante. Por lo demás, tan título honorífico era el de Gran Ciudadano, como el de Brigadier General, porque el señor Pereyra no era militar. Siempre era un honor el que se le discernía. Tampoco cambiaba de especie el hecho de que el Cuerpo Legislativo entregara el diploma o la ley el día del cese en la presidencia, o durante ésta; pues lo cierto era que el honor se había discernido estando el gobernante en el desempeño de sus funciones. Era, pues, una superchería, una hipocresía política, lo que se ponía en juego.

El doctor Palomeque lo comprendió desde el primer momento, y no tuvo inconveniente en cambiar el nombre honorífico, desde que aquí estaba el quid de la cuestión. Sólo se trataba de nombres distintos, que, en el fondo, importaban la misma cosa. Por consiguiente, hombre político en toda la extensión de la palabra, no iba a malograr su proyecto por un capricho. Él sabía transar en el momento decisivo. Sabía que en política no hay que aferrarse a los extremos, ni dar coces contra el aguijón. De ahí que hubiera traído la cuestión al terreno en que los espíritus conciliarían. El señor Lerena había llenado esa

misión parlamentaria ; y al autor del proyecto, que sólo buscaba la faz moral del asunto, poco le importaba se declarara que la ley se la entregarían al presidente en tal o cual día, con tal que la Asamblea decretara el honor. Esto era lo político y lo práctico, y a esto se iba. La cuestión era conseguir el rechazo del dictamen de la Comisión en mayoría, que postergaba el debate para las kalendas griegas.

Ese dictamen fué rechazado, mientras los *Considerandos políticos* del proyecto del doctor Palomeque se sancionaban, aceptándose la forma indicada por el señor don Avelino Lerena.

Se declaró, en resumidas cuentas, brigadier general al señor Pereyra, y que ese título del empleo le sería presentado, en nombre de la Asamblea, el día de su cese en la presidencia.

Pero no se llegó a este resultado sino después que el señor Lapido manifestó que era necesario «trabajar en el sentido de buscar una solución que reuniese en la manifestación a todos los miembros de la Cámara».

Por su parte, el señor Errazquin se opuso decididamente al título y al grado, si bien le parecía más conforme «una demostración honorífica, como una medalla con las armas del Estado, como un voto de gracias». El señor Errazquin recordó, además, que la concesión de ese grado era facultad exclusiva del Senado, al cual no podía arrebatar-sela.

Las cosas iban prolongándose, cuando el señor Aguirre propuso se pasara a cuarto intermedio, lo que así se hizo. De ello resultó que se pusieron de acuerdo, uniformándose «la opinión para dar mayor apoyo moral al asunto», como lo deseaba el señor Lapido ; agregando a los *Considerandos* algún otro que expresase los servicios prestados por el ciudadano Pereyra en la carrera militar ; servicios hechos a la Independencia y libertad del país, puesto que no se hacía de ellos ninguna mención». Así lo expuso el doctor Palomeque, miembro informante de la Comisión en minoría. Hubo, sin embargo, su oposición, formada por los señores Errazquin, Basáñez, Herrera y Lerena (Luis) (1).

De esta manera quedó solucionado asunto tan grave, mientras se llevaban adelante nuevos pensamientos. Por lo demás, la Cámara resolvía, de acuerdo con las ideas aquí manifestadas, aprobar la resolución tomada por la Comisión Permanente con motivo de las medidas de seguridad adoptadas por el Poder Ejecutivo al desterrar al doctor J. C. Gómez y otros ciudadanos.

(1) Más adelante se verá el fin que tuvo este proyecto, en el Senado, cuando ya no estaba ahí el doctor Palomeque para defenderlo.

VIEJOS PARTIDOS PERSONALES

LA PRIMERA INJUSTICIA PARLAMENTARIA

Todo parecía marchar muy de acuerdo, pero no era así. En lo político había mar de fondo. Los elementos presididos por el señor Juanicó cometieron una acción indebida. El señor don Juan Antonio Magariños era el secretario de la Cámara. Como joven partidario, tenía ideas radicales. No creía que el Gobierno hubiera procedido bien en los últimos acontecimientos políticos desarrollados. Este criterio le había enajenado la buena voluntad del gobernante y de los hombres que lo rodeaban. En su consecuencia, resolvieron desalojarlo de su puesto, sin darse cuenta de lo impolítico del acto. El doctor Palomeque sostuvo que era inamovible el puesto de secretario, por lo que no podía separársele sin causa legítima. El doctor Juanicó, con aquel su talento avasallador, desarrolló la tesis contraria, fundado en que «la naturaleza del cargo de secretario era tal, que suponía la necesidad de la confianza de la mayoría de cada una de las Cámaras en los individuos que habían desempeñado las funciones especiales». En apoyo de su doctrina, recordaba (diciendo que estaba *cierto*) que en 1852 hubo una resolución semejante, y que debía constar en las actas de la Cámara de Representantes. El señor presidente confirmaba la cita hecha por el señor Juanicó. «Indudablemente consta—decía,—porque ha habido una resolución de la Cámara que establece, a más de lo que el Reglamento prescribe, que el nombramiento de secretario se haga en cada período.» El doctor Palomeque quería que se discutiera el asunto, y se llegara a una solución llenándose las formas reglamentarias, pero ante esta terminante declaración de la presidencia, se limitó a decir : «Bien, con esto basta, y no se tiene objeción alguna que hacer ; no se pierde tiempo y los Representantes sabremos lo que votamos».

Sin embargo, el doctor Juanicó quiso se aclarara el punto. De ello resultó que no había sino *un proyecto* del doctor Acevedo estableciendo que los secretarios se nombrarían para toda la época de las sesiones de cada año (1). Con este motivo, el doctor Palomeque manifestaba que así quedaban justificadas sus palabras anteriores, pues el doctor Acevedo, a quien no podía «negársele conocimientos—decía,—reconoció la necesidad de presentar una moción para la elección de secretarios y modificar el Reglamento, porque no está explícito. La mo-

(1) Sesión del 3 de febrero de 1858.

ción está ahí. De consiguiente, está muy de acuerdo lo que hizo el doctor Acevedo con lo que yo he propuesto ahora. Que se presente una moción que modifique el Reglamento, que se pida la elección, pero como corresponde, para que cada Representante comparemos la moción con las disposiciones del Reglamento y de la Constitución que hay vigentes, y con la práctica, y podamos, con conciencia, venir a fallar en la separación de los actuales secretarios o en la elección de ellos. Creo que el país no pierde nada con que este asunto se demore un día o dos más : no es tan urgente».

El doctor Arrascaeta, con ese criterio característico en él, observó cuán necesario era conocer la resolución recaída en el proyecto del doctor Acevedo. El doctor Juanicó no asentía a ello, por lo que el doctor Palomeque observó que nada habría perdido el país con aceptar la indicación del doctor Arrascaeta. Hacía presente que de esa manera evitarían una discusión, que, decía, «podría ser para mí muy desagradable, porque, desgraciadamente, media entre uno de los secretarios y yo relaciones de familia que no puedo mirar con indiferencia». El doctor Juanicó apoyó entonces, y la *discusión del asunto*, como dijo el doctor Palomeque, se dejó para otra sesión.

Y fué en la dicha sesión donde se vió descarnada la tendencia autoritaria. Se le cercaba al doctor Palomeque por todos lados. El señor presidente comenzó por manifestar que se entraría a la orden del día, que era la *elección de secretario*. No, decía el doctor Palomeque, la orden del día es la *discusión* sobre las dudas del Reglamento para la elección de secretarios. No lo entendía así el doctor Aguirre, pues creía que después de la discusión sobre esas dudas, venía «necesariamente la elección de secretarios». Era un craso error, pues si la Cámara resolvía que era inamovible el cargo, no había elección. Esto dependía de la interpretación que se diera al artículo reglamentario. Por eso el doctor Palomeque observaba, con propiedad, que cuando se ponía algún asunto en discusión, y se ofrecían dudas sobre el cumplimiento del Reglamento, no se entraba a aquélla mientras no se resolviera ese punto previo.

Puesto en claro este punto, pidió la palabra el doctor Palomeque para entrar al fondo de la cuestión ; mas apenas había dicho que haría algunas observaciones «con el Reglamento a la vista y leyendo sus palabras, cosa que no haya dudas», cuando el señor Aguirre le interrumpió diciéndole que no podía hacerlo, pues era tarea «del secretario leer los artículos del Reglamento, o cualquiera otra cita que el señor Representante quisiera hacernos conocer».

Con oportunidad respondió el interrumpido, tuviera el señor Aguirre la bondad de citar el artículo del Reglamento que ordenaba eso, que él obedecería ; por más que creía que el Reglamento sólo disponía que en la mesa no se podía leer nada escrito ni manuscrito si no lo acordaba la Cámara. El interruptor no lo citó, pero, eso sí, se per-

mitió hablar sobre el fondo del asunto, coartando al interrumpido en la palabra; por lo que éste, defendiendo su derecho, replicaba que «la Cámara no podía resolver sin que los que querramos hablar, hablemos; es preciso ilustrar el punto para que la Cámara resuelva. No se puede resolver—decía con cierta indignación, al ver todos los medios puestos en juego para impedir que hablara,—sin discusión, a no ser que también esté prohibida la discusión, como la lectura de los artículos; entonces no diré nada; pero si la discusión ha de tener lugar, si la Cámara ha de resolver, no puede resolver sin que se discuta. El señor presidente dirá si puedo hablar» (1).

Y el presidente concedía la palabra al Representante, pero no sin que el doctor Arrascaeta volviera a interrumpirle para sostener que no tenía derecho a leer los artículos del Reglamento. Y ya, cansado el orador ante tanta impertinencia, volvió a defender su derecho, concluyendo por declarar que «no quería hacer de ello discusión, por lo que no leería sino que citaría, para que el señor secretario leyera, que era lo mismo».

Así consiguió que lo dejaran libre y poder exponer sus consideraciones, tendientes a demostrar cuán necesaria era una moción en forma para modificar el Reglamento, a fin de dejar establecido que el secretario se nombrara cada período legislativo.

El sabía, desde luego, que la «elección vendría, que no tenía duda, pero oponiéndose él al modo como quería hacerse». Quería que se respetara el Reglamento, porque si no, éste «entraría en desprecio y a cada instante—decía—el que tenga más votos en la Honorable Cámara vendrá a vencer en las cuestiones». Hacía presente otra vez que no peligraba la patria y que la elección podía hacerse otro día, pero por los trámites regulares. Era todo lo que deseaba. No quería que «el Reglamento fuera un papel escrito para la octava legislatura, sino marchar desde los primeros pasos con él en la mano».

Su sana intención se ponía de manifiesto cuando expresaba se presentara la moción, que él propondría se despachase en cuarto intermedio, y que *hoy mismo fuesen satisfechos sus deseos, y tal vez los de todos nosotros: la elección de nuevo secretario*.

Analizada esta cuestión de forma, pasó luego a la de fondo, y, con acopio de argumentación incontestable, demostró que los secretarios eran inamovibles, salvo causa justificada. Trajo a colación la tradición de la casa. Puso en evidencia que sólo se habían nombrado nuevos secretarios cuando se habían jubilado, o una revuelta destruídolo todo, como sucedió en 1832 y 1838. Las funciones de secretario, decía, «son de tal naturaleza, que conservan el hilo y los conocimientos todos de los trabajos del Cuerpo Legislativo, y sobre todo del archivo, tan importante para las deliberaciones de la corporación». Recordaba que

(1) Sesión del 21 de febrero de 1858.

nadie había interpretado el Reglamento como ahora se pretendía, y eso que habían transcurrido ocho legislaturas. Luchaba por la sana doctrina, la que ha triunfado, porque hoy a nadie se le ocurrirá sostener lo que mantuvieron Juanicó, Aguirre, Arrascaeta, Vázquez Sagastume, Lapido, etc., en 1858. Por eso, cuando se iba a votar la moción de si la elección debía hacerse cada período o cada legislatura, según el Reglamento, como lo indicaba el doctor Vázquez Sagastume, el doctor Palomeque declaraba «no estar dispuesto a cometer herejías», es decir, que «se diga lo que no prescribe el artículo».

El orador había luchado con denuedo. El hombre superior de aquel grupo, el doctor Juanicó, no había entrado al debate. Apenas si un apoyado, o una sola palabra dicha al pasar. Comprendía que pisaba en terreno falso, y quería dejar a otros la tarea de la discusión. Él dirigía de afuera, como dirían don Tomás Villalba y el diputado don Nicolás Lenguas años después, al ocuparse de una de las tantas vacantes ministeriales producidas durante el gobierno del señor Berro; en cuya época ya se había conocido mejor el carácter político de aquel ciudadano.

La verdadera teoría fué vencida, y los hombres que habían entrado a dominar, en 1858, arrojaron de la secretaría de la Cámara al señor don Juan Antonio Magariños, guiados de un propósito esencialmente personal. El doctor Palomeque agotó todos sus recursos de dialéctica, y hasta su influencia cerca del señor presidente de la República, para que no se cometiera esa injusticia (1).

Todo fué inútil. La pasión pudo más que el buen sentido. En su lugar se nombró al señor don Aurelio Berro, quien no aceptó, recayendo la elección en don Justino García (2).

No obstante esta derrota, el doctor Palomeque continuaría con constancia en su puesto. No lo abandonaría sino para llenar una misión fundamental y civilizadora en Cerro Largo. Y no abandonaba el cargo de Representante, porque quería estar allí para defender su obra de 1856. Él sabía que el hombre político debe permanecer en su puesto, aun en situaciones oprobiosas, para reflejar en su persona, y defenderlos, los ideales acariciados y llevados a la cima del poder. Allí estaría hasta que su ciencia y conciencia le dictaran una nueva y más ardua jornada, en la que se destacaría su personalidad, al luchar con el caudillaje, con el atavismo político y con los hombres, que, como de las Carreras, marchaban por un sendero lleno de espinas y escabrosidades, debido a su intransigencia y apasionamiento, cuando tenían el ya trillado para el bien.

(1) En mi archivo se hallan las cartas que lo comprueban.

(2) Sesión del 2 de marzo de 1856.

LOS VIEJOS PARTIDOS PERSONALES

En la Cámara se había recordado una manifestación de aprecio al presidente de la República, cuando se discutió lo referente al grado o título honorífico.

Es necesario saber en qué consistió, para que la historia aprecie luego, con imparcialidad, el juicio que aquel suceso mereció, en su época, a hombres que luego hemos visto actuar en nuestros días con varia fortuna y criterio distinto.

El Poder Ejecutivo, al inaugurarse las sesiones legislativas, tuvo necesidad, naturalmente, de referirse a los sucesos extraordinarios desarrollados. Ese Mensaje fué contestado por la Cámara de Representantes, por lo especial del caso, como lo manifestó el señor Lapido; y porque se quería, a la vez, hacer un acto de solidaridad política con el Poder Ejecutivo, a fin de continuar la obra emprendida y desvanecer los rumores corridos en esos días, sobre una dislocación entre las fuerzas gubernamentales.

El documento en cuestión, suscripto por los señores Jaime Illa y Viamont, Avelino Lerena, Juan José de Herrera, Octavio Lapido y Olegario Rodríguez, es muy interesante para la historia, por las declaraciones políticas en él contenidas, confirmatorias de los ideales levantados que las generaciones futuras recogimos, aunque para verlos luego adulterados por sus principales porta-estandartes de la presente época.

En él, satisfaciendo, se decía, «el sentimiento nacional, se manifiesta la alta estimación que le merecen los servicios prestados durante los sucesos ocurridos». Se reconocía que «la Providencia Divina (como si ésta se mezclara en estas cosas, y menos en luchas sangrientas) había velado por la suerte de la República puesta al borde de su completa perdición por los hombres que en los últimos seis años—decía—la han ensangrentado y arruinado sin piedad».

En lo expuesto había indudablemente un error. La Providencia Divina, si es que tal cosa existe, nada tenía que ver con la cuestión. Es una costumbre añeja de nuestros gobernantes la de implorar la protección divina para la resolución de los grandes problemas nacionales. El único gobernante que se atrevió a romper esa vulgaridad tradicional, incorporada a nuestros labios por la costumbre de escuchar tal frase en todos nuestros actos sociales, fué don Domingo Faustino Sarmiento, al inaugurar anualmente el Congreso Nacional Argen-

tino. Y ese mismo ciudadano reaccionó en sus dos últimos Mensajes. En éstos ya usó la frase sacramental de todos los presidentes argentinos, la de poner bajo la protección de la Providencia las resoluciones del Congreso. No sólo es algo curioso eso de la protección divina, sino que no es el Poder Ejecutivo quien debe declarar tal hecho, sino el mismo Congreso. Parece natural que sean los representantes del pueblo quienes llamen a sí, no ya la Providencia, sino los dictados de su ciencia y conciencia, únicos invocados al prestar juramentos en el momento de tomar posesión de sus cargos.

Había exageración al declarar que los revoltosos caídos en Quinteros habían comprometido los destinos del país durante los últimos seis años. Eso era la obra también de los protestantes, quienes no poco habían contribuido a la caída del Gobierno del general Flores, en 1855, en revancha de lo sucedido en 1853. No se habrían presentado en la revuelta armada encabezada por el doctor don José María Muñoz para derrocar al gobernante constitucionalmente electo, pero ellos, en esos días, se incorporaron a la obra, y la aplaudieron. Había, pues, pecados comunes. Eran muy pocos quienes podían decir que en esos *seis años* habían seguido el camino recto de respetar el principio de autoridad constitucional, sacrificando escrúpulos del momento ante la necesidad de conservar la paz, siempre que el despotismo o la tiranía no imperaran en las altas esferas del Gobierno. El doctor Palomeque fué felizmente uno de esos pocos ciudadanos. Fué un sesudo servidor de los Gobiernos constitucionales de Giró, de Flores y ahora de Pereyra, como lo sería de Berro; fiel a su programa de guerra a los tradicionales, al caudillaje y a la ignorancia. Si en algún movimiento armado entró, fué, como se verá, en 1870, para combatir lo que era fruto de la invasión extranjera; y eso mismo contra su voluntad.

Ahora bien, después de aquel preámbulo, los señores nombrados decían, y en beneplácito de la opinión pública, que el señor Pereyra había cumplido con sus deberes, «llenando con fidelidad el programa de unión, de concordia, de *extinción de los viejos partidos personales*, y de obediencia a la ley, defendiendo con valor y perseverancia los principios de orden, de moralidad y de justicia, sin los cuales no hay sociedad *civilizada* ni regularmente constituida, sin las cuales la democracia y el sistema representativo son imposibles».

Habría en esto una fraseología insulsa, más que un pensamiento profundo y arraigado, nacido del estudio del país y de sus exigencias políticas, por parte de los hombres que en seguida dominaron alrededor de Pereyra.

Ellos, con excepción de ciudadanos como Acevedo, Arrascaeta, Palomeque, Vilardebó, Lenguas y otros, no sentirían hondo aquello de *extinción de los viejos partidos personales*. Sería una frase muy bonita en sus labios, pues los volveríamos a ver, respondiendo al atavismo de su escuela, endiosando a los caudillos del Cerrito, y aun, al sobre-

vivirse en los sucesos, ser, en nuestros días, los portavoces de hombres de lanza criados al lado de tales centauros.

De todos modos, es sumamente satisfactorio leer, en un documento político de aquella época, tan importante declaración, para que los herederos de tales apellidos, y quienes viven dentro de los ideales del nacionalismo, reconozcan cuáles fueron las tendencias de los iniciadores y fundadores de la nueva asociación. Ellos repudiaban las guerras civiles, y condenaban la perpetuación de las antiguas denominaciones atávicas. No querían caudillaje ni tradicionalismo. Ese es el verdadero programa del nacionalismo. No ha de olvidarse, por lo que conviene proclamarlo en las páginas de la historia. Vino a la vida como entidad civil, sin que nunca pensaran sus autores en colocar en su salón de sesiones el busto de un caudillo, vestido de poncho, para que les inspirara en el cumplimiento de sus deberes.

En ese documento había una alusión velada a la muerte sensible, pero en lucha leal, del joven don Luis de Herrera, a la cual ya hemos hecho referencia. Este joven murió en Cagancha, siendo su fallecimiento muy sentido. Casi puede decirse que ello influyó poderosamente en el ánimo de los vencedores, para producir la hecatombe que tantos daños trajo al país; por más que éste aplaudiera la victoria del principio de autoridad, como lo tenemos explicado. Ahí estaba el corazón herido de una madre, clamando, ¿qué?, la reparación de una desgracia fortuita en las batallas. El señor don Juan José de Herrera era el hermano de este distinguido joven, y empezado a tener influencia política. De ahí que en el documento examinado, firmado por él, quizá redactado por él, se lee un párrafo, en el que, después de aludir a los «hechos oprobiosos y brutales perpetrados por los rebeldes en hombres indefensos y mujeres débiles», se declara que «aunque ha sido necesario para salvar la patria el sacrificio de víctimas nobles y generosas que han vendido su vida en defensa de las instituciones, la Asamblea se complace de que la severidad de la ley no haya sido aplicada a los principales autores de tantas desgracias y de tantos crímenes, sino en el último extremo».

Había injusticia al atribuir a los inmolados en Quinteros responsabilidad alguna en los atentados cometidos por las fuerzas rebeldes, en su persecución. Es cierto que los soldados revoltosos cometieron hechos condenables en el trayecto recorrido desde Cagancha a Quinteros; pero, ni el general César Díaz, ni sus nobles compañeros, eran ciudadanos pertenecientes a tan triste escuela. En toda guerra se responsabiliza por hechos tales a sus autores, o a los jefes que los mandan ejecutar. Las «víctimas nobles y generosas», como Luis de Herrera, caídas en lucha abierta, en los campos de Cagancha, no podían pedir venganza. Los principales autores de la rebelión no eran responsables, como se decía, de «tantas desgracias y de tantos crímenes»; otro era su delito, y por eso fueron castigados. ¿Fue político? ¿Fue

humano? En aquellos días caliginosos, los hombres de la época, aun los que no habían aconsejado el hecho, lo aplaudían, unos, y aceptaban las consecuencias del hecho consumado, otros, mientras la sociedad imparcial creía ver en esa resolución la única manera de mantener el respeto al principio de autoridad constitucional. Después, quizá los mismos que lo aconsejaron, y que lo aplaudieron, o que aceptaron sus consecuencias, pensaron que había sido un grave error político, que ellos y sus hijos purgarían eternamente.

En dicho documento se declaraba que «la Comisión Permanente había llenado ampliamente su deber, prestando al Poder Ejecutivo el apoyo necesario en esos difíciles momentos» y que «la cooperación prestada por los Gobiernos del Brasil y la Confederación Argentina, merecían la gratitud del pueblo oriental».

Con este motivo, se sostenía que «la rebelión había sido preparada y auxiliada por el Gobierno de Buenos Aires», y habría afectado, decían, «en sus consecuencias aniquiladoras no sólo a la República Oriental y al Río de la Plata, sino a toda esta parte de la América del Sur». Por lo tanto, aplaudía la idea «de estrechar por medio de estipulaciones convenientes los vínculos que unían a la República con la Confederación Argentina y el Imperio del Brasil», debiendo «las relaciones e intereses asentarse sobre bases sólidas y durables que garantizaran a estos países su paz, su prosperidad y sus instituciones». Por lo demás, esperaba, en cuanto a Buenos Aires, «un cambio de política que hiciera posible el comercio de las relaciones y afecciones íntimas que ligan al pueblo oriental con el de Buenos Aires».

Las relaciones internacionales estaban rotas con Buenos Aires, por lo que el señor cónsul de Francia, marqués de Forbin Jauron, se había hecho cargo del archivo del consulado uruguayo, acordando a los súbditos orientales «su respetable protección», se decía en el documento.

Había mucha exageración y mucho error. Los políticos de la época extremaron la nota, pretendiendo hacer creer a la historia que Urquiza y el Brasil nos habían protegido en el momento aflictivo, influyendo en la resolución de la contienda. Nada más inexacto, pues no hubo tal ayuda, si bien a los directores de entonces les convenía aparentar esa protección decidida. Lo único que hicieron esos poderes vecinos fué defenderse, preparándose para un evento. A la distancia vieron lo mismo que verían seis años después, cuando el general Flores invadía el país, con la aparente protección del Gobierno del general Mitre, como ahora sucedía.

Era indudable que la invasión de César Díaz salió de Buenos Aires a ciencia y paciencia de todos, como también que Urquiza y el Brasil se alarmaron, porque supusieron que Buenos Aires, cuya actitud era de hostilidad a la Confederación, la cual mantenía muy estrechas relaciones de amistad con el Brasil—asumiría una resolución decidida, a cara descubierta, interviniendo descaradamente en el Uruguay.

Ni al Imperio ni a Urquiza podía convenirles que Buenos Aires ejerciera hegemonía alguna en el Río de la Plata. Eso habría sido un peligro serio para la política tradicional del Brasil, y para la estabilidad de Urquiza en la Confederación.

No prestaron, sin embargo, ninguna ayuda, al Gobierno uruguayo, sino que estuvieron a la expectativa de los acontecimientos, como lo harían en 1863. Felizmente, el Gobierno uruguayo venció por sí solo, bajo la hábil e ilustrada dirección del general Medina, en cuya persona concentró, desde luego, todos los elementos de guerra, impidiendo que los caudillos encelados pretendieran hacer la guerra por su cuenta, debilitando la acción militar y produciendo el caos, como sucedería cuando seis años después invadiera el general Flores el país.

En aquella declaración, sin embargo, había una profecía, la que se realizaría por obra de los mismos profetas. Cuando decía que la rebelión preparada en Buenos Aires tendría «consecuencias aniquiladoras para toda esta parte de la América del Sur», declaraban un hecho a realizarse en 1863 a 65. Ellos se veían trabajados por la idea de que el Gobierno de Buenos Aires se lanzaría a una intervención en el Uruguay. Ese pensamiento les llevó a buscar en el Paraguay y en Urquiza aliados futuros para derrocar la *demagogia* de Buenos Aires, como ellos la calificaban, según se verá en páginas posteriores. Y así, sin saberlo, ponían en juego medios que darían por resultado el desarrollo de los acontecimientos que querían evitar. Un exceso de desconfianza les condujo a buscar prematuramente alianzas con el Paraguay y Urquiza, a fin de desmembrar a la República Argentina, arrebatándole la llave del Río de la Plata, para entregársela al tirano paraguayo. Como se verá, el sentimiento de amor a la patria impidió al general Urquiza cooperar a planes liberticidas.

El pueblo oriental, pues, no debía gratitud alguna a sus vecinos. Se había salvado por su solo esfuerzo, felizmente, sin que esta vez fuera necesario ver al soldado extranjero hollando el territorio patrio. Lo único verdadero, era que los intereses políticos de los tres pueblos les hacía unirse, para defenderse de Buenos Aires, a la que consideraban con ideas anexionistas; a lo que mucho había contribuido, con su ligereza, el doctor don Juan Carlos Gómez y sus amigos Mitre, Sarmiento y Vélez Sársfield, en aquel célebre banquete dado al primero, al retirarse para Montevideo, en 1857, y fundar aquí su diario *El Nacional* para combatir al Gobierno honesto de Pereyra, preparando los acontecimientos desgraciados ya narrados.

No faltaba en esa exposición una referencia al hecho de haberse «separado el Tribunal de Apelaciones por el Poder Ejecutivo», el cual, decía, «no llenaba por cierto las condiciones y objetos de la ley. La necesidad de constituirlo debidamente era por todos sentida y reclamada, y la Asamblea ha visto con satisfacción la reposición del ciuda-

dano don Cándido Juanicó, cuya rectitud e ilustración son notorias» (1).

Aquí se veía la influencia de aquella revuelta, que todo lo había trastornado. Esta declaración de la Asamblea era una consecuencia del desquicio operado. El Tribunal había venido al suelo, y allí se colocaba al director áulico de aquella época difícil de nuestra historia. El doctor Juanicó era un coloso de Rodas, que tenía puesto un pie en el Cuerpo Legislativo y otro en el Poder Judicial, sin perjuicio de posar su pensamiento en el Poder Ejecutivo, por intermedio del impulsivo ministro de Gobierno doctor de las Carreras. En aquellos tiempos aun no se conocía la ley de incompatibilidades legales y morales, que aconsejaban a un ciudadano no viviera en el recinto donde se dictaban las leyes que luego él aplicaría como juez, ni menos las que reconocían los graves inconvenientes de que un magistrado, que debe ser todo serenidad e imparcialidad, estuviera confundido con las pasiones políticas que todo lo consumen y devoran.

El doctor Juanicó estaba en todas partes, dominando con su poderío intelectual. Vivía en un trono muy elevado; y cuando hablaba, lo hacía con olímpica autoridad, para ser escuchado y obedecido. En el Tribunal, fallaba; en la Cámara, legislaba, y en la política, imponía. Cuando hablaba lo hacía con toda la solemnidad del *magister dixit*!

Por lo demás, el documento en cuestión terminaba reconociendo que se trataba de una «nueva época que la administración del señor Pereyra había abierto a la República, época de reconstrucción moral y de reconstrucción material, época de salvación que es necesario aprovecharla, decía, teniendo «la octava legislatura por bandera la enarbolada por Vuestra Excelencia el 1.º de marzo de 1856: *Paz, Unión, Progreso y Libertad*».

Así dejaba la Cámara consagrado su programa de principios. Había sentido la necesidad de proclamar *urbi et orbe* su solidaridad con los hechos producidos, pero poniendo en claro que aquellos hombres no querían la resurrección de los viejos partidos personales, sino su completa extinción, con nuevas ideas, en una época de reconstrucción moral y material, sobre la base del programa redactado por los señores Alejandro Magariños Cervantes y José G. Palomeque, que el señor Pereyra había lanzado al país el 1.º de marzo de 1856. Aspiraban a la Paz, Unión, Progreso y Libertad.

Estas eran las ideas fundamentales de aquellos ciudadanos, muchas de las cuales las sostendrían con el pensamiento y en la acción, mientras otros, desgraciadamente, deslustrarían tan hermosa obra. Estos no tendrían carácter suficiente para luchar contra la corriente de esa masa, invocada siempre, en todos los instantes difíciles, a fin de encubrir apostasías, y atribuirse a ella, para salvar responsabilida-

(1) Sesión del 29 de marzo de 1858.

des, lo que el pobre instrumento no ha pensado en su incapacidad mental.

A estas hermosas declaraciones coadyuvaban hombres como don Bernardo P. Berro, desde su alto asiento de presidente del Senado, el hombre de pensamiento político más maduro de aquella época, dotado del don admirable de hablar en oportunidad, de escribir con corrección, y de saber cortar la corriente en momentos difíciles. Sin embargo, no quiere ello decir que poseyera todas las perfecciones del político. Ya lo veremos olvidar sus ideales de fusión.

Cuando aquel documento se sometió a la discusión, allí estuvo el doctor Palomeque para aplaudirlo, aunque haciendo presente que la actitud de la Comisión Permanente no había sido unánime al apoyar las resoluciones adoptadas por el Poder Ejecutivo, por lo que deseaba se hiciera constar que ello había sido por la mayoría de esa corporación, híbrida en nuestros anales parlamentarios y arcaica en las instituciones libres. Como era natural, el doctor Juanicó observó, y con justicia, que las resoluciones de un cuerpo deliberante son del cuerpo deliberante y no de la mayoría.

El doctor Palomeque, que proseguía su propósito político, el de cambiar la fisonomía acerada de nuestros partidos, aplaudió todo aquello, por las razones antes de ahora expuestas; con satisfacción veía que se aconsejaba «lo que en justicia el pueblo oriental debía a su primer magistrado, una muestra de aprecio y gratitud por la perseverancia y energía con que había sabido sostener las instituciones y mantener la paz pública». Declaraba la necesidad de que «el Cuerpo Legislativo manifestase a sus comitentes que cumplía bien con su deber, que sabía apreciar en alto grado los importantes servicios que la República siempre apreciaría en la persona del presidente». Declaraba que lo que la Comisión Especial aconsejaba era merecido, justo y regular. Como se ve, estos hombres eran estadistas, y no líricos soñadores.

Así quedó aprobado todo lo hecho; así la obra fué solidaria; así aquel pueblo la apreció en su momento histórico. Todo lo sacrificó en aras de la paz pública. El hombre prudente se abismaba al pensar en que por tercera vez, en el término de seis años, el espíritu de la revuelta triunfara, echando por tierra un gobierno honrado, cuyos propósitos no podían ser mayormente nobles. Por ello aplaudía el triunfo del principio de la autoridad constitucional, aun a costa de aquellas *nobles y generosas víctimas*, de una y otra parte, inmoladas, unas, en defensa de las instituciones, y otras, en castigo de su rebelión.

La sociedad se había salvado, no por obra de la Providencia y de los Gobiernos vecinos, sino del músculo, inteligencia y valor de los ciudadanos colocados alrededor del primer magistrado de la República. Y a costa de esa sangre se comprarían algunos años de paz, durante los cuales progresaría el país, aunque en lucha con los malos ele-

mentos que esa misma rebelión vencida había desgraciadamente llevado a las altas esferas del Gobierno. Es el lote de las sociedades convulsionadas; surge entonces a la superficie la mala ralea, como después de una lluvia salen a la calle, por la cloaca, las inmundicias escondidas. ¡Es en épocas tales que aparecen los centauros! Y fué contra ellos que tuvo que bregar el doctor Palomeque para que no se deslustrara ese programa del 1.º de marzo de 1856, que proclamaba la guerra al caudillaje y a los viejos partidos personales.

Y para acentuar mejor la tendencia progresista de esa época, en la misma sesión donde tales hermosas declaraciones se hacían, aparecía el señor Alvarez abogando por que se recomendara al Senado el pronto despacho del proyecto referente a la sanción del Código Civil redactado por el doctor don Eduardo Acevedo; pensamiento perseguido desde tiempo atrás por todos los hombres ilustrados del país, sin distinción de colores políticos, desde Mateo Magariños Cervantes, uno de sus primeros y más antiguos propagandistas, hasta el doctor don Pedro Bustamante, y el ahora señor Alvarez. Sin embargo, esa gloria la haría imposible el espíritu de revuelta, a cuyo frente se hallarían Magariños y Bustamante. La ola avanzaría, y todo se llevaría por delante. Es verdad que de entre las ruinas surgiría una llama iluminando la figura meditativa y pálida del eminente jurisconsulto don Tristán Narvaja, quien, encerrado en su gabinete de estudio, durante años, consagrado a una labor ímproba, daría a la República los frutos opimos de su talento indiscutible, reflejado en el Código que actualmente nos rige, aunque con las reformas liberales introducidas más tarde, reclamadas por las sociedades que no se detienen en su marcha hacia el progreso.

LA TIERRA PÚBLICA

DENUNCIA DE LA TIERRA PÚBLICA

Una de las cuestiones interesantes debatidas en esos momentos, fué la relativa a las denuncias de la tierra pública.

El señor Errazquin proponía no se admitieran más denuncias, y se suspendiera el curso de los expedientes en tramitación, hasta nueva resolución. La Comisión, compuesta de los señores Enrique de Arrascaeta, Pedro Fuentes y Manuel N. Tapia, aceptaba el proyecto, con una ligera cambiante en la redacción.

Este asunto había sido pasado indebidamente a la Comisión de Legislación, como lo demostró elocuentemente el doctor Palomeque, por pertenecer a la de Hacienda (1). Sin embargo, se entró a discutirlo.

El doctor Palomeque tenía una preparación especial en estas cuestiones de tierras públicas. Su estudio se revelaba en la tesis presentada para optar al grado de doctor, que no fué sino la base y el fundamento de la ley interpretativa de la de 1835 sobre prescripción de ese bien público.

Después que el doctor Arrascaeta informó sobre el asunto, el doctor Palomeque hizo uso de la palabra, pronunciando un extenso y erudito discurso, con el que se oponía a la sanción de lo aconsejado. Sostuvo que la denuncia no perjudicaba la propiedad pública, sino que la beneficiaba, dándole al Gobierno los datos y conocimientos de que carecía al hacerle saber dónde estaba la tierra pública de su propiedad. Recordaba las dificultades con que luchaba el Gobierno para hacer la mensura general, y venir en conocimiento de la tierra que le pertenecía. Mientras esto no se hiciera, la denuncia llenaba un fin plausible. Indudablemente que muchos aplaudirían el proyecto, pero sería, decía, porque si bien «algunos tienen títulos de propiedad por dos o tres leguas, poseen 25 o 30, y no quieren que se denuncie esas 25, o 15 o 5 leguas restantes, que no son suyas». De aquí deducía que la suspensión de las denuncias perjudicaba al Estado. Creía que, lejos de restringir la libertad de denuncia, debía hacerse algo en favor del denunciante. Recordaba que a nadie se le había ocurrido privar las denuncias, siendo la tendencia de las leyes y decretos favorecer esa libertad. Mencionaba, en prueba del conocimiento perfecto que tenía de la cuestión, las leyes vigentes desde mayo de 1853, que autorizaban las denuncias, hasta la de 1835, interpretada en la última legislatura, y a

(1) Sesión del 8 de abril de 1858.

que se refirió su tesis de 1857. Demostraba luego, cómo lo aconsejado venía a perjudicar al Estado, favoreciendo a quienes detentaban indebidamente la tierra en su carácter enfiteútico, no pagando ni el canon correspondiente.

Después de estas consideraciones generales, decía: «Setecientas denuncias, se ha dicho. Eso es maravilloso, y debemos complacernos. Yo desearía ver 1,500 denuncias, porque eso importa que el Estado está muy rico y muy poderoso, que está en aptitud de hacer lo que ha dicho el señor diputado, que se dice que vienen proyectos de ley. ¡Setecientas denuncias! Podemos calcular que una con la otra no podrá denunciarse menos de tres leguas; ya tenemos 2,100 leguas; y si habilitamos para que nos vengan con otras 700, serán 4,200 leguas. De aquí pueden cercenarse algunas, porque muchas estarán duplicadas, otras estarán mal hechas, no tendrán pruebas ni datos, porque muchas denuncias se hacen en Montevideo sin conocer las localidades. De 4,200 leguas siempre nos quedaría una área de campo para sacar al país de la postración en que está, porque pensar en mensurar con los fondos del Estado es imposible. Es cierto que nuestra Comisión Topográfica está descuidada, que hay falta de todos los mapas, de todos los libros y anotaciones que se necesitan para saber, cuando se presenta alguna denuncia, si está denunciada ya, si ese terreno es de propiedad particular o propiedad pública (1); pero eso no dificulta el beneficio que el país reporta con que se hagan las denuncias, absolutamente».

Y después de todo esto, terminaba declarando: «Y entiéndase bien, señor presidente, que yo no tengo denuncias, y que cuando vengo a aquí no vengo a hablar por los intereses particulares: no tengo una sola denuncia; vengo a sostener lo contrario de la moción, porque mi conciencia me dice que es perjudicial a los intereses fiscales, y diciendo a los intereses fiscales, digo a los intereses particulares de todos los habitantes del país, que es a lo que debe atender el legislador».

ATAQUE A LA LIBERTAD PARLAMENTARIA

La respuesta que el ilustrado doctor Arrascaeta dió, fué débil. No consiguió destruir aquella argumentación. Fué ligero en su exposición, como quien está seguro del triunfo, descontado de antemano. De ahí que, cuando el doctor Palomeque propuso se declarara libre la discusión, para contestar, nadie lo apoyó, lo que dió motivo para que exclamara, con cierta tristeza, y como censura a ese ataque a la libertad parlamentaria: «*¡Es una desventaja!*»

En efecto, así lo era. Y lo decía con amargura, porque este recurso

(1) Ya se verá lo que proyectó durante su administración en Cerro Largo.



Cándido Juanicó

estuvo excluido del Parlamento uruguayo, hasta aquella época. Allí había dominado la más amplia libertad de discusión. No se colocaba a la minoría en situación de no poder dejar constancia de sus ideas, para que así la historia, con ese antecedente, juzgara lo sucedido con toda imparcialidad. Se veía en esa maniobra la mano del doctor Juanicó, quien intervino en el debate, en seguida, para aprovechar la ocasión que se le presentaba de hablar, sin que el doctor Palomeque pudiera responderle. No tuvo la hidalguía parlamentaria de apoyar aquella moción para declarar libre la discusión general.

El doctor Palomeque tuvo varias veces que batirse con ese coloso de la palabra, que hablaba no sólo con la autoridad de su saber, sino con la tranquilidad de quien dispone de una mayoría hecha para triturar al adversario. En esto consistía el mérito de la labor parlamentaria del doctor Palomeque. Sacaba fuerzas de sus convicciones profundas y de su tranquilidad de espíritu, no obstante su vehemencia en ciertos momentos. A veces parece vérselo en sus discursos temeroso de ponerse por delante de tal contrincante. Habla, en ciertos instantes, con esa timidez de quien reconoce la superioridad del adversario, llegando hasta apoyar sus observaciones; pero, luego reacciona, y se le ve ágil, mirando para todos lados, frente a tantos enemigos que le acosan, resueltos a hacer con él lo que Mirabeau y Danton tantas veces hicieron con Robespierre, sin que éste, vencido, abandonara su jornada del día siguiente.

Juanicó comprendió que no bastaba lo dicho por Arrascaeta para rebatir al doctor Palomeque, y, aunque aprovechando la circunstancia de que éste no contestaría, tuvo, sin embargo, la nobleza de enaltecer la actitud de su opositor. Luego, cual si hablase desde la cátedra, decía a los diputados, como si fueran discípulos: «Esto justifica, repito, el interés que hemos visto manifestar por el señor diputado, pero yo recomendaría a la Cámara el tener presente dos preceptos: un precepto, si se quiere, que abraza dos objetos. Le está encomendado el interés de la nación, en cuanto a lo que pertenece al dominio de la nación, a su interés especial, pero no puede olvidar que el interés de la nación abraza en su sentido más lato el interés fiscal, el fomento de la población, la generalidad de sus intereses. En este sentido, sí, hay una ventaja, y la deseamos todos, de que aparezcan los bienes públicos: la hay muy grande. Hay un interés capital en que se fije por último la propiedad del Estado. En un Estado en que la propiedad está vacilante, no hay fomento ni vida posible. Un Estado donde siempre estará expuesto el propietario a que venga un denunciante a obligarle, cuando menos a separarse de su domicilio, y a cada momento interrumpirlo en sus ocupaciones, para ir a atender a las pretensiones de un especulador de tierra o de otro cualquier especulante, es una situación fatal».

Este era el argumento fundamental hecho por el ilustre doctor

Arrascaeta al informar por primera vez, y éste era el que al oírse nuevamente en labios de Juanicó, al contestar a Palomeque, se *apoyaba* decididamente por la Cámara. Era un argumento débil, pero que halagaba a los latifundistas con propiedades del Estado. *Apoyados* se oían, dice el acta de la sesión respectiva. Era el interés privado de los hombres pertenecientes al partido en el Gobierno el que se defendía de esa manera. Ese temor era un argumento que siempre podría hacerse contra todas las leyes protectoras de la vida y propiedad, porque nadie está exento de un atentado, aun habiendo leyes que nos garantan. Lo único que podía reclamar el país era la revisión de las leyes agrarias. Esto lo reconocía el doctor Palomeque, apoyando unas palabras del doctor Juanicó, quien consideraba como «medida previa para llegar a eso, el proyecto en discusión, tendiente a traer al Cuerpo Legislativo los antecedentes para luego dictar medidas que pongan coto a abusos de tanto tamaño—decía,—que todo el mundo teme».

El proyecto mandaba, en su segundo artículo, que el Poder Ejecutivo pasaría al Cuerpo Legislativo una relación circunstanciada de los terrenos dados en enfiteusis y de los expedientes en tramitación. De aquí las consideraciones del doctor Juanicó. En verdad que no se comprendía para qué el Cuerpo Legislativo atraería a sí el conocimiento de los expedientes en tramitación. ¿Iba a constituirse en Poder Judicial? Lo cierto era que se atacaban derechos adquiridos por los denunciantes.

UN BUSCAPIÉ LEGISLATIVO

A pesar del triunfo obtenido, negando el derecho de la réplica al doctor Palomeque, y sancionado en general el proyecto, la luz se iba haciendo. En su consecuencia, el señor Lapido comprendió la monstruosidad de *no admitirse* las denuncias, por lo que propuso se admitieran, pero que *no se despacharan*, a la espera de esa ley agraria, con que Juanicó alucinó, dorando la píldora, a dictarse para las kalendas griegas.

El mismo Juanicó reconoció la fuerza de lo alegado, y apoyó a Lapido, mientras el doctor Palomeque sacaba fuerzas de su propia derrota y volvía al ataque. Conocedor perfecto de la legislación nacional, y en especial de la de tierras públicas, volvió a la brecha, y lanzó un buscapié que produjo espanto en la hueste enemiga. Desaba que la Comisión explicase cómo quedaban las sucesiones de Alzaybar y de Lavalleja, a las cuales el Cuerpo Legislativo le había acordado derechos sobre permutas de campos que el Estado les había tomado, autorizadas para denunciar bienes públicos a fin de serles adjudicados en pago de los suyos.

El señor Errazquin, autor del proyecto, no supo qué decir; se en-

redó en las cuartas. Habló de abusos y de especulaciones, en general, pero no entró a la pica, por lo que el doctor Palomeque le observaba que estaban en discusión particular. Vino en su ayuda el ilustrado doctor Arrascaeta, quien sostuvo que la Comisión sostenía el proyecto tal cual estaba, «porque con la enmienda que se propone—decía,—se desvirtúa y se destruye el objeto de la ley». Sostenía que había que «esperar a dictar una buena ley que salvara la propiedad pública : que ése era el objeto de la moción, ganando en ello el Estado y la tranquilidad de los habitantes de la campaña». Arrascaeta se agarraba al argumento de la nueva ley agraria, inventado por Juanicó, sosteniendo que lo del abuso, a que se refería Errazquin, era insignificante ante la necesidad de esa suspirada ley agraria : que esto era lo fundamental y lo que imponía el rechazo de cualquier excepción a lo proyectado. Todo lo sacrificaba ante el propósito de salvar la tierra pública, la que creía perdida.

Juanicó apoyó a Arrascaeta desde que estaba «establecido revisar la ley sobre denuncias, como todas las demás sobre tierras» ; por lo que había «conveniencia en que se suspendiera toda tramitación en la materia hasta que el asunto se estudiara con toda la importancia que tenía, para dictar—decía—medidas que salven al Estado bajo el aspecto del interés particular y bajo el aspecto del interés fiscal, ambas cosas del resorte del legislador : de las dos no sé cuál más importante».

El doctor Palomeque no se dió por vencido. Usó de la palabra una vez más para recordar atinadamente que cuando se notaban defectos como los mencionados parecía lo más regular empezar por examinar esas leyes defectuosas. Creía muy práctico lo de aplicar una pena al denunciante falso, pero que debía hacerse igual cosa con el detentador de la propiedad pública que no había cumplido con las disposiciones vigentes. Apoyaba el pensamiento del señor Lapidó ; pero concluía por pedir a la Comisión explicase en qué situación quedaban las familias de Alzaybar y Lavalleja.

Por su parte, el señor Lapidó sacaba en limpio «no que las denuncias fueran malas (en cuyo solo caso no deberían admitirse), sino que eran malas las leyes que las reglamentaban, el giro dado a las denuncias, y las garantías que se debían buscar para que un individuo no fuera a perturbar maliciosamente la legítima propiedad de otro». Insistía en que *se admitieran* las denuncias, pero que *no se despacharan* ; pero no decía una palabra sobre la interpelación del doctor Palomeque.

Todos rehuían una explicación al respecto, porque la cosa era ardua. La banderilla estaba bien puesta, y se esperaba al diestro maestro para que resolviera el punto. Y ese maestro salió a la palestra en seguida. El doctor Juanicó apoyó la indicación del señor Lapidó, pero el doctor Arrascaeta, consecuente con el fin perseguido, la rechazó con energía. «No comprendo—decía—cuál es la bondad que se prome-

tiese de las denuncias, si no se les da curso. Creo que tanto importa el decir que no se les dará curso hasta dictar una nueva resolución, que decir : se suspenden las denuncias ; y esto es más lógico, que no hacer las cosas así a medias. Suspéndanse, señor, sin vacilación ; cuando la nación dice : voy a ver dónde están mis tierras, me interesa, porque es lo único que tengo, y por el valor que tiene la propiedad territorial, como dijo la Comisión, el Estado está en aptitud de poder hacer mucho con esas tierras. Es un gran elemento de crédito público, es un gran elemento para la inmigración, es un gran elemento para muchas cosas que son de grande importancia social en un país como el nuestro».

Ni una palabra, como se ve, sobre lo observado por el doctor Palomeque. Sólo consideraban el pensamiento del doctor Lapido. Éste rebatió enérgicamente, a su vez, al doctor Arrascaeta, sosteniendo que a nadie podía privarse del derecho de denuncia, lo que era apoyado por los señores Juanicó y Palomeque. Y con este discurso creía el señor presidente concluida la discusión, diciendo la frase sacramental : SE VOTARÁ. No, decía entonces el doctor Palomeque, «insisto por tercera vez, en que la Comisión se digne (creo que la Honorable Cámara tiene derecho a esperarlo de la Honorable Comisión) expresar si el artículo 4.º que está en discusión comprende los derechos que han adquirido la familia del general Lavalleja, la del señor Alzaybar y otras». Y fué recién después de esta tenaz insistencia del parlamentarista avezado a la lucha, que consiguió, no que le contestara el señor miembro informante de la Comisión, el doctor Arrascaeta, sino el señor Fuentes, quien, con toda sequedad, dijo cuatro palabras claras y terminantes, a nombre de la Comisión. No consideraba que pudiera «ser materia de duda—decía—el que la disposición del artículo abraza una disposición general que comprenda toda clase de denuncias, y que no hace distinción alguna. De consiguiente, la explicación está en la misma lectura del artículo», que pidió se leyera por el secretario.

¡ Y todo esto se expresaba en medio de *apoyados* ! Era indudable que la opinión estaba hecha, pero lo era también que el doctor Palomeque no abandonaba la liza fácilmente, y que iba a comenzar la gran batalla, en la que diría a la Cámara lo que de ella pensaba, en lo que a su persona se refería.

DERECHOS ADQUIRIDOS

Conseguido su objeto, entró al fondo del asunto. No podía «persuadirse que aquellos derechos adquiridos por sanciones legislativas pudieran suspenderse por una mera resolución de la Cámara para revisar las leyes. No podía persuadirse que el derecho del ciudadano y la propiedad estuviesen tan poco garantidos, por lo que había pedido explicaciones». Él se había adherido al artículo en cuestión con la

modificación propuesta por el señor Lápido, pero con lo que había escuchado, «*aunque mi voto—decía— no puede hacer nada en la balanza, no se lo prestaré, porque no puedo votar contra una ley que he contribuido a sancionar en esta Cámara, y a la cual creo que no puede en ningún modo comprender la disposición que se pone en debate. Son derechos adquiridos, derechos perfectos, que no se pueden violar, que no se pueden atacar.*»

Para robustecer su juicio, hacía presente la situación en que se hallaría el Poder Ejecutivo si la familia Lavalleja se presentara diciéndole que en tal parte había 10 leguas de campo, y en virtud de la ley de abril de 1857 mandara se le escrituraran, desde que había una ley que obligaba al Poder Ejecutivo a cumplir eso. Y con este motivo el doctor Palomeque se preguntaba si el Poder Ejecutivo podría decir que no le escrituraba hasta que el Cuerpo Legislativo revisara la legislación sobre tierras públicas. «Si estas familias están comprendidas—terminaba diciendo—(lo que no puede hacer la Cámara), no le daré mi voto.»

Pero, como el orador veía claro que aquella Cámara le era hostil, y que no gozaba de la influencia de otros tiempos, no pudo menos, al ver cuánto le había costado que la Comisión se dignara evacuar su pregunta, que declarar : «En fin, señor presidente, *mi voz no sirve ni aún para la justicia*; daré mi voto negativo, de corazón, al artículo del proyecto».

El doctor Juanicó se sintió tambaleante ante esta arremetida, y creyó de su deber tomar parte en el debate para colocarse en el término medio correspondiente. Comprendía que el asunto era grave para que «un diputado *improvisara* sin todos los datos que son necesarios, sin consultar en cierto modo al Gobierno en sus legítimos representantes, que pueden venir a la sesión a tomar parte en la discusión; sin todos los medios, en una palabra, que conduzcan al mejor resultado en asunto de tanta gravedad y trascendencia». Y dicho esto, sostenía una gran verdad : «que no se podía quitar al Estado el derecho que en general tenía para establecer las reglas relativas a tierras públicas».

Sostenía que «no se trataba de revocar ni perjudicar derechos adquiridos, sino de revisar las leyes en esa materia, a fin de que los individuos a quienes se había reconocido, no derecho de propiedad, sino de denuncia, vinieran a hacerlo sin perjudicar los intereses del fisco ni los particulares. ¿Cómo se dice que se hiere la propiedad cuando se trata de cosas que están por denunciar? ¿Y se llama esto propiedad? No lo comprendo así. Por ese motivo, no he recibido igual alarma que el señor diputado que se opone a la moción propuesta».

No había firmeza en la exposición del doctor Juanicó. Al comienzo creía grave y trascendental la cuestión. Creía que no podía resolverse sin que el ministro diera los datos necesarios, y luego terminaba

por oponerse decididamente, diciendo que no había sentido alarma alguna, cuando acababa de declarar que dudaba (1). Planteaba la cuestión con aquella su habilidad notoria, en un terreno distinto. La dificultad no consistía en saber lo que era el derecho de propiedad, ni si era dominio lo que ejercía la familia Lavalleja o cualquiera otra, sino que el doctor Juanicó olvidaba que hay leyes-contratos, que imponen a las partes, como persona jurídica, la una, y como particular, la otra, obligaciones que deben cumplirse, sin que en ella esté comprendida la facultad potestativa, salvo que así se estableciera, especificando el o los casos. Aquello era un contrato-ley, por medio del cual, como ya se ha visto en su lugar respectivo, el Estado se consideraba obligado a indemnizar a la sucesión Lavalleja, y otras, los campos que indebidamente les habían secuestrado, conviniendo en que esa indemnización se haría en tal o cual forma, es decir, entregando campos fiscales que denunciaría el acreedor perjudicado. Ese contrato-ley no podía romperlo el Estado porque se le ocurriera al Cuerpo Legislativo decir que terceros que nada tenían que ver con el contrato estaban denunciando a poseedores legítimos o ilegítimos, trastornando a familias que se consideraban o no buenas poseedoras de tierras públicas. La razón alegada nada tenía que ver con ese contrato-ley. El Estado no podía romperlo, ni aun por intermedio del Cuerpo Legislativo. Si había o no derecho de propiedad o dominio, no era del caso. Si el Cuerpo Legislativo lo violaba, o quería que el Ejecutivo lo violara, el Poder Judicial estaría ahí para amparar los derechos del particular. No se podía, pues, a título de revisar las leyes de tierras públicas, derecho indiscutible en el Estado, entrar a dejar sin efecto el convenio celebrado. El Cuerpo Legislativo no tenía personería para ello. Sólo el Poder Judicial podía conocer de ese asunto. Pero, como el doctor Juanicó era legislador y juez a la vez, nada extraño que procediera como se ha visto.

HABILIDAD DEL DOCTOR JUANICÓ

1 El doctor Juanicó consiguió, con su suma habilidad, atraer al doctor Palomeque al terreno débil; y éste cometió el error de seguirlo. No debió discutir el punto respecto a si era o no una propiedad el derecho que nacía del contrato-ley, sino que allí había obligaciones contraídas que debían cumplirse. Por lo demás, sostuvo, con fundamento, que se atacaban los derechos del contratante.

511 Daba la circunstancia de hallarse presente en la sesión el señor ministro de Gobierno. Aludido, como lo había sido, por el doctor Juanicó, terció en el debate, declarando que, a su juicio, «se herían dere-

(1) Más adelante cambiaría de opinión, y sostendría, junto con el doctor Palomeque, lo que éste venía defendiendo aquí.

chos adquiridos sobre denuncias ya hechas, en tramitación, y que el Poder Ejecutivo se vería muy embarazado, ante la resolución de la Cámara, tratándose de resolver cuestiones que afectaban a esas personas para continuar expedientes en tramitación.»

«Creo—decía—que el Poder Ejecutivo se verá en el caso de pedir a la Cámara la explicación clara, terminante, de esta disposición, y para entonces la Cámara podrá ocuparse de este asunto tal vez con mejores datos que los que hoy tiene».

El doctor Juanicó, sin embargo, con toda buena fe, abandonó el terreno referente al dominio, y reconoció que la cuestión era sobre *derechos adquiridos*. «La ha planteado muy bien el señor Palomeque—decía—estableciéndola, y la ha apoyado, en ese sentido, el señor ministro: si se perjudican derechos adquiridos por las familias de quienes se trata, mandando suspender los procedimientos sobre las denuncias que a virtud de una sanción anterior están hechas. ¿Es ésa la cuestión?» (1).

—Esa es, señor diputado—contestaba el doctor Palomeque.

De aquí deducía el doctor Juanicó la conveniencia de suspender la discusión, desde que entendía que el ministro se proponía consultar al Poder Ejecutivo y venir a traer datos a la Cámara sobre el particular.

Esto daba motivo para que el ministro acentuara más su pensamiento, y declarase terminantemente que los interesados «reclamarían los perjuicios que se les ocasionaran por la suspensión de esos expedientes». «No se pueden perjudicar—decía—por una disposición, así en general, derechos adquiridos, como son esos.»

Al oír esto, el doctor Palomeque, lo apoyaba, sosteniendo que «por lo menos debía hacerse una excepción para esos casos excepcionales, que no pueden ser comprendidos en casos generales». Y para sostener aquello, el ministro hacía los mismos argumentos alegados por el doctor Palomeque, de no hallarse la familia Lavalleja en el caso de los especuladores aludidos en la discusión.

Al ver el doctor Palomeque que las cosas se ponían tan favorables a su pensamiento, se apresuró a decir que él propondría esa excepción en oportunidad, por lo que podría continuarse la discusión particular sobre el artículo 1.º. Creía que la declaración ministerial influiría decisivamente en el ánimo de la Cámara. Pero el señor presidente desvió la corriente.

Quizá si en aquel instante, tan hábilmente elegido por el doctor Palomeque, que había visto y sentido la impresión causada, se hubiera seguido la discusión, con seguridad habría resultado vencedor.

Era el momento psicológico de toda discusión parlamentaria, a aprovecharse por quien conoce su entraña, como le sucedía al doctor

(1) Ya veremos cómo luego sostendría lo contrario. Es que no se tenían ideas precisas. El único era el doctor Arrascaeta, como contrario del doctor Palomeque.

Palomeque. El presidente lo torció, diciendo que había una moción previa de suspensión de la discusión. No era verdad, como lo manifestó el señor Juanicó. Sólo se trataba de una *indicación*, fundada en si el ministro traería datos a la Cámara. El ministro aludido declaró entonces que todo lo que podía comunicar, era cuánto había recibido la sucesión Lavalleja, cuántos expedientes tenía en curso, y cuánto le faltaba. «Para esto, decía, no hay necesidad de esperar otra sesión (1), para saber que no alcanza lo cobrado y los expedientes en curso para cubrir el monto de lo que se le adeuda. Lo que importa, es, si pueden suspenderse los expedientes en curso de la familia de Lavalleja: si el decreto puede comprender esos casos especiales: Yo creo que no».

Y, haciéndose a un lado la indicación de la presidencia, sobre la moción previa, volvió a tratarse el fondo del asunto.

Al oír aquella terminante declaración ministerial, el señor Fuentes arremetió enérgicamente, expresando que esa excepción sería *odiosa*. Odiosa, no, le respondía el ministro, recordando que era distinta la situación de la familia Lavalleja, y otras, a la de los especuladores: «es un caso especial, puramente especial, que debe ser considerado», decía.

El doctor Palomeque había conseguido traer las cosas a su terreno. La Cámara empezaba a vacilar. El doctor Arrascaeta se llamaba a silencio, dejando que el señor Fuentes se batiera con el ministro. Se reconcentraba, para meditar sobre la actitud a asumir. Por su parte, el doctor Palomeque hacía otro tanto, dejando que su aliado ministerial, venido al debate por una insinuación del doctor Juanicó, sostuviera la cuestión con toda su autoridad y talento.

En este momento, el doctor Juanicó, al oír la controversia entre Fuentes y el ministro, sobre lo odioso de la excepción, y si era o no un privilegio lo acordado a la familia Lavalleja, creyó conveniente declarar, con cierto autoritarismo personal, que «estaría dispuesto a hacer una distinción» con respecto a las denuncias ya hechas, las cuales podrían continuar, pero suspendiéndose para lo sucesivo.

Ya algo se iba consiguiendo. El director de aquella conjuración empezaba por ceder. En su espíritu se sentía la duda. Al principio *indicaba* una suspensión para meditar con nuevos datos. Ahora, ya creía en la *justicia y equidad* de una parte al menos de la doctrina sostenida por su contrincante, de aquel que había declarado que no se le oía para hacer justicia. Y el ministro, que había entrado al debate, a última hora, con su espíritu fresco, se debatió con el omnipotente doctor Juanicó, para sostener que era inadmisible esa distinción que *estaría dispuesto a hacer*, como él lo expresaba, con autoridad y buena fe.

(1) He aquí la contradicción con lo dicho antes, a que se refiere la nota precedente.

El ministro doctor de las Carreras discrepaba con su influyente amigo, hallándose de acuerdo con el doctor Palomeque, y hasta el mismo Juanicó entraba por las ideas del adversario.

«Eso sería siempre establecer un límite a esos derechos que no pueden limitarse sin desconocerlos», decía de las Carreras, con todo fundamento. Y se apoyaba en lo argumentado por el doctor Palomeque. «Como ha dicho—agregaba—el señor diputado por Tacuarembó, la reglamentación de esas leyes puede ser muy remota, puede durar tres a cuatro años, o quién sabe cuándo se dicta una legislación conveniente sobre tierras (1), y la sucesión Lavalleja estar parada, perjudicada, porque la ley general no se sanciona... Es preciso tener presente esos derechos y no herirlos, porque no hay derecho para ello, sin entrar a considerar la ley que los ha reconocido; o derogarla, o declararla vigente y hacerla cumplir: no hay más que ese camino».

El argumento era de hierro: no tenía levante. El doctor Palomeque se sentía fortalecido ante aquel empuje ministerial. «¡*Perfectamente!*», exclamaba desde su asiento, al oír tal argumentación. Y lo hacía para alentar, no sólo al ministro, sino al mismo doctor Juanicó, para que una vez por todas sostuviera la consecuencia a deducirse de sus propias palabras cuando manifestaba que «si hay privilegio, está en haberse hecho esa concesión; ahí está el privilegio, pero no nos pertenece a nosotros ahora buscar...» Aquí se veía cómo el doctor Juanicó reconocía la fuerza de esos contratos-leyes. Si el privilegio existía, había que respetarlo; no se atrevía siquiera a sostener que podía la Cámara derogarlo de por sí, sin el acuerdo del contratante. No se atrevía, ni se atrevería, en esta sesión, a ir tan lejos como el señor ministro.

Ya veremos cómo reconoció explícitamente la fuerza obligatoria de ese contrato-ley. La conciencia jurídica y humana lo atarían y lo conducirían, por el momento al menos, a darle el triunfo a su adversario, tenaz y hábil, que había conseguido, sin saberlo, y solo por la justicia de su causa, atraerse la ayuda poderosa del ministro, debido a la inconsciente indicación del mismo contrincante para que ese funcionario entrara al debate. ¡Y esto, por no suponerlo su adversario! Luego, éste desaparecería de la escena, y las cosas cambiarían. ¡Ah! ¡Si se hubiera votado en aquel momento psicológico! Es verdad que el mismo doctor Palomeque contribuyó, como va a verse, a que ello se produjera, engañándose sobre el resultado futuro de la cuestión. ¡Ya se veía la reacción operada en el espíritu del jefe de aquella Cámara! La lucha continuaría, exhibiéndose una vez más la justicia de la causa sostenida por el diputado por Tacuarembó, dándole ocasión, en la derrota, para exhibir su preparación y sus elevadas cualidades parlamentarias.

(1) No se ha dictado aún, en 1914.

A esta altura del debate se incorporó el doctor Lápido, para sostener que «los derechos de la familia de Lavalleja que pueden encontrarse comprometidos por esta disposición—decía—podrían atenderse sin perjuicio de dictar esta disposición en general». Creía que una vez dictada esa resolución, iría al Poder Ejecutivo, el cual la observaría, siendo «entonces el caso de que la Cámara se ocupara del asunto de la familia de Lavalleja». Sostenía que esto no podía «obstar a dictar una disposición general sobre tierras públicas, tan urgentemente reclamada y reconocida por la población». Era sumamente curioso el argumento. Desde luego, el legislador partía del hecho ignorado de si el Poder Ejecutivo *observaba* la ley, la cual se dictaba a la espera de ese *veto*, para luego «resolver con arreglo a la justicia y a la conveniencia general», como lo decía. Luego, se afirmaba, con todo candor, que se trataba de dictar «una disposición general sobre tierras públicas», cuando sólo se trataba de defender a los latifundistas, a los terratenientes, poseedores de enormes extensiones de campos.

Como era de suponerse, no escapó a la inteligencia del doctor Palomeque el error en que se incurría, e inmediatamente respondió que «no había necesidad de sancionar esto, y esperar a la observación del Poder Ejecutivo para entonces reconocer derechos que no están en duda». El doctor Palomeque no se refería solamente a la familia Lavalleja, sino a todos los que estuvieran en igual caso. Por eso proponía se hiciera una nueva redacción, o «presentarse una modificación al artículo, por ejemplo, que dijera : con excepción de todas aquellas que hayan obtenido derechos por resoluciones legislativas». Sostenía que así se economizaba tiempo «y se conciliaban los deseos de los señores diputados que no querían que hubiera denuncias, conservándose al mismo tiempo intactos esos derechos citados». «La Cámara—decía—mire bien lo que hace. Es muy delicado atacar derechos así adquiridos.» Y después de esta sabia advertencia, de este llamado a la razón, contestaba el argumento de la *odiosidad*, hecho por el señor diputado Fuentes. «El denunciante—decía—no tiene derecho alguno, mientras que esas familias tienen derecho para que les den los campos, porque han dado los suyos»; y el Cuerpo Legislativo, reconociendo que han dado sus campos, ha dicho al Poder Ejecutivo : «Páguelos usted en tierras lo que les ha tomado»; mientras que un denunciante que va al Poder Ejecutivo y le dice : «Denuncio tierras, tantas y cuáles leguas de campo», no se puede equiparar : no hay igualdad de ningún género». Por lo demás, y para demostrar la sinceridad con que procedía, y el ningún desinterés, se adhería a la opinión del ministro, ya apoyada con aquel *Perfectamente*. «Revísese—continuaba diciendo—la ley que dió derechos a la familia de Lavalleja, y échese por tierra, que yo votaré así. Ese es el modo; pero disposiciones ambiguas que no sirven sino para cuestiones, para poner en choque a los Poderes, es preciso mirarse mucho en sancionarlas. Por eso pedí la discusión libre al princi-

pio (1), y por eso he pedido que se suspenda la discusión, porque tal vez, en la sesión siguiente, vendríamos con más datos y podríamos hacer algo mejor que lo que se hiciese de este modo.»

Aquí estuvo el error del doctor Palomeque, pues no debió mocionar por la suspensión del debate. Esto probaba la sinceridad de su ánimo. Creía firmemente que el señor ministro concurriría a la próxima sesión, y que el doctor Juanicó se mantendría en los pensamientos emitidos. Y persistió, después de oír la declaración del distinguido doctor Arrascaeta, y las reiteradas manifestaciones del dicho doctor Juanicó; todo lo cual contribuyó a mantenerlo en su equivocado procedimiento. Por el instante, tenía a su favor la influencia moral de la presencia del señor ministro, la cual desaparecería una vez que se alejara, galvanizando la del doctor Juanicó. Ido aquél, la Cámara recuperaría su habitual carácter, y triunfaría la eminencia Gris, ahí dominante. Nada de esto previó. Creyó en la buena fe del parlamentarismo, cuando nadie mejor que él sabía cuán movedizas son las opiniones de quienes allí viven durante horas. Ya veremos cómo el doctor Juanicó se aprovechó de este estado de ánimo de su contrincante, para batirlo.

El doctor Arrascaeta volvió a terciar en el debate, con toda su buena fe y convicción sincera, sin preocuparle la actitud del ministro ni la de Juanicó. Era hombre de ideas independientes, nacidas al calor del estudio, por lo que no reaccionaba con facilidad, una vez que aquéllas se habían incrustado en su entendimiento. Fué uno de los ciudadanos firmes en las tendencias de la concordia nacional y en la condena de todo atavismo. Perteneciente al grupo de hombres intelectuales de la época de 1843, en que figuraban los Juanicó, Gómez, Berro, Lamas y Pacheco y Obes, rindió culto a los ideales sanos, y murió fiel a ellos, repudiando al gaucho, al caudillaje y a los trapos ensangrentados.

En su nueva arremetida sostenía que «por los inconvenientes graves conocidos, se trataba de dar una medida general, hacer una suspensión puramente transitoria respecto de una ley sobre enfiteusis, que nada tiene que ver—decía—«con la ley sobre denuncias, que nada tiene que ver con tal o cual individualidad o especialidad». Argumentaba con que si el proyecto respecto «de la disposición general iba a suspender su disposición, podía también hacerlo respecto de esas especialidades o individualidades, sin que por eso hiriera cualesquier derechos que, bien o mal dados, se hubieran dado». Exponía, y no sin cierta lógica, que el Cuerpo Legislativo había acordado a la familia Lavalleja el derecho de indemnizarse con tierras públicas. Por consiguiente, «la suspensión del derecho de denunciar tierras públicas no le afecta—decía,—porque concedido el derecho a indemnizarse con tierra pública, si la hay, cualquier medida que tienda a conocer esa pro-

(1) A lo que la mayoría se opuso, como ya se ha visto, para ahogar el pensamiento, lo que no consiguió, dada la tenacidad del doctor Palomeque.

piedad pública, y salvarla, es una garantía para esos mismos individuos a quienes con tierras públicas se ha decretado pagarles sus perjuicios. No hay derechos lastimados. Habrá una suspensión para llegar al objeto, de más o menos tiempo; pero la nación está en el deber de mirar altos intereses, que no puede sacrificar por dos o tres individualidades. ¿Y el interés de la nación? Esto es lo grave».

Como se ha dicho, el doctor Palomeque había conseguido, a fuerza de paciencia y constancia, que se entrara al fondo del asunto. Por eso ahora se le presentaba la ocasión de decir lo que pensaba respecto al argumento, al parecer formidable, alegado por el ilustrado doctor Arrascaeta; sin perjuicio de desarrollar extensamente el tema, en las ulteriores del debate, que terminaría en la próxima sesión.

Por el momento declaraba que si realmente la salvación de la patria dependiese de dos o tres individualidades, él sería el primero en sacrificarlas. Pero no era de eso de lo que se trataba. «Es—decía—la fe pública la que se sacrifica aquí: es el honor de la Representación Nacional que sancionó una ley ayer y hoy viene a darle un puntapié: es el cúmplase que ha puesto el Poder Ejecutivo a esa ley: son los compromisos que tiene pendientes con los acreedores.» Luego, sostenía que si se tratara de un acreedor que recién viniera a solicitar se le pagara con tierra pública, entonces, sí, el Cuerpo Legislativo podía conceder o negar. Ahora no, se trata de una ley de la nación, en virtud de la cual las personas a quienes ella favorece «han contraído compromisos serios, grandes; que no pueden aventurar su fortuna por una suspensión indefinida». Luego, volvía a recordar, lo que sería una verdad, aquello de que nadie podía asegurar cuándo quedarían revisadas las leyes sobre tierras públicas. Insistía en que la dificultad se salvaba, desde que el doctor Arrascaeta sostenía que por el proyecto no se atacaban los derechos adquiridos, «con poner un poco más claro el artículo y decir que esos derechos adquiridos por disposiciones legislativas no estaban comprendidos en el proyecto». «Y así decía—queda más claro, para que lo comprendamos todos. El legislador debe sancionar leyes claras, que las comprenda hasta el último changador.»

Y, como si estuviera cansado, o creyera hallarse con la victoria asegurada, se apresuraba a declarar que se pasara a la votación, a fin de no perder tiempo.

Pero, apenas había concluido su peroración, cuando el hábil parlamentarista doctor Juanicó, que parecía temer la presencia del señor ministro, y aun la influencia que en ese momento tuvieran las palabras que él había pronunciado, lo mismo que las del doctor Arrascaeta, tan acertadamente utilizadas por el doctor Palomeque, se apresuró, usando de una diplomacia maquiavélica, con la que envolvió al diputado por Tacuarembó, a exponer que «al hablar en términos generales sobre un artículo esencialmente general en su redacción, lo había hecho sin conocimiento de los derechos particulares que se alegaban. «No sé—

decía—hasta dónde alcanzan ; protesté antes, y repito ahora, que *donde haya derechos adquiridos, bajo la cabeza; es preciso: la salvación está en la fe pública.*»

Al oírse esta elocuente manifestación, casi las mismas palabras pronunciadas por el pertinaz doctor Palomeque, éste no pudo menos que exclamar : «¡Apoyado!». Son mis ideas triunfantes, parecía oírsele decir, sostenidas nada menos que por la poderosa inteligencia del *leader* de la mayoría. Al fin creía haber conquistado esa justicia que, según él, no se hacía cuando él la sostenía. Su espíritu desbordaba de satisfacción en ese *apoyado*. Se sentía orgulloso de haber atraído a su causa a tan encumbrada personalidad. Y ésta, que sabía lo que buscaba y lo que quería pescar, que no se envanecía fácilmente ante los apoyados de los enemigos, cual años después lo haría Bismarck, dejó que el adversario tragara el anzuelo, a fin de hacerlo caer en la trampa que le tendía. Bien sabía el doctor Juanicó lo que había en esa reclamación de Lavalleja y otras, pero él buscaba el medio de salir de la situación difícil en que se hallaba la Cámara, si procedía a votar, en seguida, bajo la impresión de lo que se había dicho en un momento de improvisación, en que se habló pensando, por el ministro, el doctor Arrascaeta y el mismo Juanicó. De ahí que, ante aquel *apoyado*, y para atraer más y más al enemigo, continuó diciendo : «La salvación está en que lo que se ha sancionado en las formas debidas, tenga su debido cumplimiento ; es decir, que el principio eterno de la justicia y de las obligaciones sea una verdad. Después de los argumentos, de los hechos que se alegan, yo juzgo para mí, particularmente, necesario suspender esta discusión. Desearía que se hiciese así hasta tomar más conocimientos. Ahora propongo que se suspenda la discusión».

Y el doctor Palomeque, entusiasmado ante semejantes declaraciones, y por los *apoyados* que en seguida se escucharon, se adelantó a dictar su sentencia de muerte. «Y yo hago *la moción* para que se suspenda», dijo, con el corazón en la mano. ¡Qué malo es tenerlo en ciertos instantes ! Y éste fué uno de ellos. El doctor Juanicó había conseguido lo propuesto. La sesión fué suspendida. Ahora asistiremos al desarrollo del debate en la próxima, y a la actitud asumida por el *leader* de la mayoría (1). Van a destacarse mejor las cualidades morales e intelectuales de los protagonistas en la lucha parlamentaria.

LOS TERRATENIENTES EN ACCIÓN

El salón de la Cámara se vió concurrido. Sólo faltaron los señores Moreno, Lecocq y Villaurreta. El elemento conservador de la sociedad no abandonaba su pleito. Los terratenientes iban a defender sus posesiones. Aun no habían llegado los tiempos en que el proletariado

(1) Sesión del 8 de abril de 1858.

subiera las gradas de los poderes públicos para plantear la cuestión agraria.

Tocó al señor Fuentes iniciar el debate. En una exposición corta y substanciosa resumió cuanto la Comisión creía de su deber alegar, a esta altura del debate, para impugnar la enmienda propuesta por el doctor Palomeque. Tres eran los argumentos que alegaba. Los fines principales de la medida contenida en el proyecto, al mandar suspender las denuncias de tierras públicas, eran, según el miembro informante, las siguientes: «primero, fijar la propiedad territorial para hacerla verdaderamente efectiva; segundo, cortar el abuso en grande escala introducido por las sociedades de especuladores, que tienen su asiento en la capital y sucursales en los Departamentos, y cuyo abuso se dirige a monopolizar las tierras públicas; tercero, a hacer cesar la guerra sorda y creciente que a causa de esas denuncias existe entre los propietarios y poseedores de tierras y los especuladores. Esta situación, decía el señor Fuentes, «es un peligro inminente para la tranquilidad pública y otra nueva causa de rencillas y división que vendría a aumentar la que desgraciadamente mantiene todavía desunidos a los habitantes de la República».

Estas razones eran las alegadas para no admitir la enmienda del diputado por Tacuarembó, calificada de «excepción odiosa y perjudicial a la cosa pública». «Es odiosa—decía—porque se dirige a establecer una excepción en favor de determinadas personas, para que ellas puedan únicamente hacer denuncias, cuando se trata de suspender las denuncias. Es perjudicial a la cosa pública, porque se quiere dejar una puerta abierta a los abusos y males que se trata de cortar.» Volvía a repetir, en nombre de la Comisión, que «la suspensión temporal de las denuncias no daba ni quitaba derechos. Suspender un derecho no es quitar ni desconocer ese derecho. Lo que se trata es de suspender provisoriamente las denuncias, para que revisando la Asamblea General las leyes agrarias, dicte una medida general que corte los abusos que se cometen».

Hemos creído necesario reproducir esta exposición, hecha en el momento álgido del debate, para que el lector pueda darse cuenta del sesudo discurso pronunciado por el doctor Palomeque, el cual, junto con el que produjo al discutirse el proyecto sobre Guardias nacionales, de que más adelante se hablará, pondrían de relieve las cualidades de parlamentarista que le adornaban, si no fuera que ya las había exhibido suficientemente en épocas anteriores. Sin embargo, aquí tenían un mérito especial, porque las utilizaba para batirse contra toda una Cámara dispuesta a anonadarlo; en cuya lucha él representaría el partido del proletariado contra la burguesía millonaria, detentadora de la tierra pública, que ha impedido, en aquel país (1), por sus múltiples

(1) No hay que olvidar que escribo desde el extranjero, en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

recursos, se dicte la ley agraria que entregaría a la circulación los fundos indebidamente retenidos.

El doctor Palomeque comenzó por recordar que había poseedores, detentadores y ocupantes de la tierra pública, distinción indispensable para darse cuenta de lo que significaba eso de «*fixar*» la propiedad territorial, a fin de evitar, como se decía, los tales «abusos de los especuladores de tierras públicas». En ese sentido, al citar esa palabra *fixar* la propiedad, usada por el señor Fuentes, él decía que sin duda se había querido decir : *garantirla*. Luego, argumentaba sesudamente, cuando afirmaba que los que poseían título de propiedad ningún temor podían tener a la denuncia. «Yo, por ejemplo—decía,—qué temor podría tener de que se me denunciase mi propiedad, la casa que tengo en la calle de Buenos Aires? Tengo mi título : ¿tendría algún temor? Ninguno absolutamente. Pues están en el mismo caso los poseedores con títulos legítimos en la campaña ; a éstos, por más que haya interés en inquietárseles, no se les puede inquietar jamás ; pero se inquieta a los *detentadores* de la propiedad pública ; a éstos, sí. A éstos se incomoda ; no se les incomoda, se incomodan ellos, porque el placer de disfrutar lo ajeno por 30 años de existencia que tiene la República, no se abandona así no más. ¿No se puede incomodar a ese detentador autorizando a todos los ciudadanos a que denuncien lo que posee, una cosa que no es suya, y que nunca se ha presentado a las autoridades del país para declararla y cumplir con sus disposiciones?»

La guerra sorda entre especuladores y propietarios, de la que había hablado el señor Fuentes, le daba motivo para manifestar que no veía esa guerra, pero que, en cambio, había «visto en el país dos o tres veces que se habían disputado el deseo de que nuestra campaña progrese y que en los campos abandonados, incultos, se encuentren pobladores y hombres de capital, y ese bien al país lo hacen las denuncias. No es esta, decía, la primera vez que he visto llenarse las oficinas públicas de denuncias de tierras, probando ese hecho el deseo de que el país prospere».

Aquí se veía al hombre conocedor de su territorio. Hablaba con conocimiento de causa, sin que nadie le hubiese contado las cosas sucedidas. Él, como buen estanciero, todo eso lo conocía, porque lo había visto, y, en su consecuencia, estudiado a fondo el problema agrario del país. No había hecho lo que muchos : mirar y no ver ; él había mirado, visto y penetrado en lo hondo del malestar, para buscar el remedio. Y éste consistía en poblar la tierra, pero para entregarla a su legítimo dueño, una vez que la denunciara y la pagara. No quería que se detuviera la marcha económica, financiera y comercial de la nación, porque de todo participaba el problema de la tierra pública estancada. Una vez que ella se entregara al verdadero poseedor, se aumentaría el capital del erario por la renta que ese bien produciría y la relación del intercambio comercial.

Aseguraba que nadie había visto la tal guerra sorda o abierta, a pesar de haberse asegurado que las denuncias eran ; 700 ! Ningún habitante se había quejado ni salido de su domicilio a defenderse contra el denunciante. «No hay guerra—decía—ni sorda ni a gritos ; es una majadería, bien dicho.»

Luego, entraba a ocuparse de los derechos adquiridos por la sucesión Lavalleja y otros, para rebatir un rumor que hasta él había llegado. «Creo—decía—que en este recinto se ha dicho que éste era un negocio ruinoso, escandaloso, lleno de robos, de especuladores fraudulentos ; pero cuando esto se dice en el seno de la Honorable Cámara, en presencia de un pueblo, es preciso decirlo con todos sus nombres, como lo ha hecho el Representante que habla, cuando ha dicho : ¿Hay robo? Ahí está el robo, señor, y el individuo está ahí ; pero no se acusa así a una sociedad sin presentar los justificativos, y, si no se tienen, se calla la boca.»

Con esto se refería a la actitud enérgica por él asumida cuando la discusión relativa al reclamo de perjuicios, cuyos antecedentes hemos relatado en páginas anteriores.

Indicó la necesidad, cuando menos, de establecer en la ley que la suspensión de las denuncias sería por un término de uno, dos o tres meses.

Recordó que las leyes de la materia estaban en desuso, pues no las cumplían esos poseedores que aquí tanto se defendían. Y, con ese motivo, aseguraba a la Cámara que ningún bien vendría al país de la tal suspensión de las denuncias. «Recuérdelo bien la Honorable Cámara : no ha de venir ningún bien con esa medida, mientras que por la otra ha de venir ; porque por la otra se llega al fin, de descubrir la propiedad pública, saber dónde está.»

Y esta profecía se cumplió. Nada se conseguiría con tal medida, mientras que, andando el tiempo, se haría lo fundamental, lo científico, lo que en seguida enunciaba : lo que él mismo, dentro de su limitada esfera de acción, con el conocimiento teórico y práctico del asunto, realizaría en Cerro Largo, como se verá en las páginas posteriores de este libro.

A medida que improvisaba su discurso, es decir, la frase, la forma de expresar su pensamiento, porque lo que era el asunto lo conocía muy a fondo, teniéndolo en la mente, brotaban los argumentos convincentes. Trajo a colación la ley de 1835 y el Decreto de 5 de septiembre de 1857, que la Comisión había recordado por intermedio de uno de sus miembros. Demostró, de una manera concluyente, que la Comisión no se había tomado «el trabajo de examinar ese Decreto de 5 de septiembre, e ir a las oficinas públicas a sacar los datos de los resultados que había dado ese decreto», pues a haberlo hecho, «de cierto—decía—que no hubieran venido con tanto calor a sostener el proyecto». Por ese Decreto se había mandado que los jefes políticos nom-

brasen una comisión de dos vecinos respetables y el comisario de la sección respectiva, para formar un registro de los derechos (se puede decir así) de cada uno de los pobladores, consignando la circunstancia de poseerse o no títulos de propiedad o ser agregados, etc. En ese Decreto se disponía que quien no tuviera título debería denunciar dentro de un plazo. «Pues bien—decía el doctor Palomeque,—a esos que se llaman saqueados de sus títulos y gritan por las calles : «mis títulos están en un baúl, allí, en tal parte», y no han llegado hasta el juez del crimen para acusar ; pues a esos que dicen que sus títulos están escondidos, que han sido substraídos, se les ha presentado la oportunidad de declararlo, desde que se les ha dicho que los que se hallan en tal caso, denuncien, vengan a hacerse de un derecho mejor. ¿Se ha tomado la Comisión el trabajo de ir a examinar en las oficinas del ministerio respectivo si ese decreto se ha cumplido? No ha sido cumplido. El único Departamento que ha hecho alguna cosa, y muy ínfima, es el de Soriano. Los demás se han resistido al cumplimiento del decreto. Aquí está, pues, el resultado que han dado los poseedores, a quienes se quiere favorecer y privilegiar por esta medida».

Con este motivo sostenía, y con fundamento indiscutible, que no se debía empezar por donde se debía acabar. Con cuánta razón decía entonces : «Si se quiere hacer alguna cosa regular en beneficio del país, es preciso comenzar por lo que el Poder Ejecutivo remitió en 1857, y de lo que, por desgracia, la séptima legislatura hizo muy poco caso. Sancione eso la Honorable Cámara de la octava legislatura, para llevarse ese lauro : crear una oficina de ingenieros. Por aquí debemos empezar, por tener hombres inteligentes y científicos, para proceder a la mensura general ; porque ésta es la única y verdadera medida para averiguar y llegar a conocer la propiedad, a fin de no perjudicar el interés fiscal, y que la propiedad particular no sufra. Después de tener una ley como esa, tan importante, entonces podremos venir con otra cosa. Después de mensuradas las tierras, o sancionada esa ley, con conocimiento del jefe de esa oficina, y otros datos necesarios, indudablemente entonces el Cuerpo Legislativo podrá tomar esa medida, y otras muchas.»

El doctor Palomeque había puesto el dedo en la llaga. No era con suspensión de denuncias de tierras públicas con lo que se resolvía el problema. Eso era ahondar el mal, porque, fuera como fuera, las denuncias favorecían el interés fiscal, dando a conocer dónde estaba lo que era propiedad del Estado. Por lo demás, el orador desafiaba a sus colegas a que denunciaran a los supuestos ladrones de títulos, en cuyo hecho no creía. Declaraba que votaría en contra del proyecto, de todo corazón, para concluir por repetir que «no era denunciante, que no tenía una cuarta de tierra, ni quería nada del Miguelete para allá, que no especulaba nunca con la cosa pública, ni con la posición que ocupaba».

PENSAMIENTO DEL SEÑOR LERENA

A este discurso contestaron los señores Aguirre y Errazquin, muy débilmente, limitándose a sostener que había una sociedad de denunciante que explotaban la circunstancia, según ellos, de haberse robado a los poseedores sus títulos de propiedad, para producir la intranquilidad en el país. Esto no era serio, porque esa cuestión de hecho y de derecho sería materia de discusión ante los jueces, quienes la resolverían. Adelantarse, por medio de una ley, a suponer verídico el hecho del robo del título, era perjudicar al fisco precisamente. Podía ser verdadero, como podía ser falso, y ello correspondía discutirse ante el juez. El Cuerpo Legislativo no podía convertirse en Poder Judicial. La mejor garantía del poseedor era la justicia, a la cual pertenecía el doctor Juanicó, el *leader* de la mayoría parlamentaria. A ella debía ocurrirse.

En este estado de la cuestión, intervino el señor don Avelino Lerena para empezar por hacer un cargo fundado a la Comisión de Legislación. Recordó que el Poder Ejecutivo, en esos momentos, se preocupaba de una medida general sobre tierras públicas, y que el orador había esperado esa iniciativa para someter a la consideración de la Cámara «un proyecto análogo que estableciese esas y otras importantísimas cuestiones económicas». En su consecuencia, creía que la Comisión «debía aplazar la discusión de este asunto puramente incidental, hasta tanto que el Poder Ejecutivo, o el que tiene el honor de la palabra—decía,—hubieran presentado un plan general de todas las vistas que le son relativas. Esto mismo hizo conocer el señor ministro a la Comisión de Legislación. Por mi parte, lo mismo hice sentir a todos de sus miembros». Dicho esto, sostenía que «no alcanzaba, a la verdad, el motivo, la conveniencia que hubiera en que las denuncias se aplazaran; y lo que era más grave aún, aplazar las que emanaban de contrato o de resoluciones legislativas. Lejos de ser aplazadas las denuncias—decía,—opino que la nación debe un voto de gracias a los denunciante. Sentiría decir una cosa mal dicha, pero es mi creencia. Opino que la nación debe dar un voto de gracias a los denunciante que, siendo otros tantos agentes fiscales, han podido decirle: «Aquí está vuestra riqueza, vuestra propiedad, vuestro territorio, ora detenido por la mala fe de los particulares, ora prescripto o expuesto a prescribirse por el vicio, por el fraude o por la corruptela». Sostenía que era debido a los denunciante, a la ley «salvadora» de 1857, interpretativa de la de 30 de abril de 1835, que el fisco contaba todavía con un millón de leguas cuadradas de territorio, mientras que antes no tenía dónde volver los ojos para encontrar cien cuadradas donde colocar una simple colonia agrícola.

De acuerdo con estas ideas, el señor Lerena propuso que, sin perjuicio del derecho de revisión que la Asamblea se reservaba acerca de las leyes autorizando al Poder Ejecutivo para adjudicar tierras públicas a la sucesión Lavalleja, Alzaybar y otros que estaban en su caso, se suspendiera el curso de las denuncias hasta nueva resolución general. Esto no impediría la admisión de las denuncias a los efectos de ganar derecho de preferencia, las que quedarían paralizadas en su secuela, hasta la adopción de la medida general de que se trataba en el artículo propuesto.

Al leerse esto, se oyeron dos apoyados en la Cámara. Eran los de los señores Tapia y Palomeque. Las ideas parecía que empezaban a marchar.

HERMOSA DIALÉCTICA DEL DOCTOR ARRASCAETA

Pero ahí estaba el enemigo alerta, pronto a defenderse y a atacar, no durmiéndose sobre los laureles. En efecto, volvió a presentarse la simpática personalidad del doctor Arrascaeta, para levantar el debate a la altura en que él sabía colocarlo, dada su erudición y dialéctica. Lo que el señor Fuentes había hecho era algo así como lanzar un buscapié, para ver si se ahuyentaba al adversario. El resultado no se había obtenido, por lo que venía el doctor Arrascaeta a robustecer el ataque, ahora que el enemigo había encontrado aliados serios, como indudablemente lo eran el señor don Avelino Lerena y el señor Tapia.

El doctor Arrascaeta manifestó que haría un resumen de las razones aducidas por la Comisión para oponerse a la enmienda. Procedía así, porque creía que nada nuevo se había traído al debate, tanto por una como por otra parte. Ese resumen es sumamente interesante, además de poner en evidencia el conocimiento que el orador tenía de la materia y la conciencia de sus opiniones. Fué un resumen habilísimo.

«Altas conveniencias de política y de economía social—decía—son las que la Comisión ha tenido en vista al aconsejar el artículo. La Comisión ha dicho que las leyes agrarias y sus decretos reglamentarios fueron dictados como ensayos, y nada más, en la época en que se dictaron, sobre esas tierras, sobre esa propiedad. A causa del estado agitado del país, no ha podido tampoco conocerse si esos ensayos eran buenos o malos; sin embargo, ha podido conocerse, sí, que abrían la puerta a grandes abusos. La Comisión, pues, ha sostenido y sostendrá la conveniencia que tiene la nación en revisar esas leyes agrarias y esos reglamentos, porque se abusa grandemente, a la sombra de esas leyes, no sólo sobre la propiedad pública, sino sobre la particular: se la tiene vacilante, no se la deja establecer: se la tiene asustada, se la perjudica, se la despoja, como se ha probado, y hay numerosos ejemplos.»

El doctor Arrascaeta se iba arriba; creía firmemente que el pro-

yecto tendía a buscar una solución al problema agrario. No creía que ahí se estancarian las cosas, limitándose a la suspensión de las denuncias. En ese sentido, era muy loable su propósito. Había necesidad de abordar la cuestión, y resolverla de una manera científica, echando los fundamentos de una verdadera legislación agraria, protectora de los derechos de los poseedores, facilitando la adquisición de esa tierra, no sólo en el interés del particular, sino del erario. ¡Cuántas leguas de tierra poseídas sin abonarse contribución! Esas tierras sólo servían para pastar los animales. Ninguna operación comercial era posible sobre ellas, por carecerse de título. Al respecto, todos estaban de acuerdo. Nadie, ni el doctor Palomeque, desconocía, como se ha visto, la necesidad de dictar esa ley. En lo que se discrepaba era en la forma del procedimiento. Los unos querían que desde luego se desconociera el derecho de denunciar al Estado dónde se hallaban sus propiedades, para luego entrar a estudiar detenidamente el problema agrario. Los otros sostenían que podía, desde luego, entrarse a la cuestión, sin desconocer al Estado el derecho de averiguar, por intermedio de los denunciantes, que hacían, en el caso, de agentes fiscales, dónde se hallaban las tierras públicas. Pensaban lo mismo sobre el fondo, aunque discrepaban en los detalles.

En seguida se ocupaba del decreto del año 57, afirmando que el doctor Palomeque, al hacer sus referencias, no había sido muy exacto. Hacía conocer el fundamento de tal decreto, sosteniendo que se había dado, porque se veía a la propiedad pública y a la privada amenazadas por el detentador. Por eso, sostenía que el tal decreto empeza recordando las leyes «que estaban menospreciadas, olvidadas, habiendo tenido el Gobierno que venir las a recordar, y pedir su observancia. ¡Cuánto no habrá sido el abuso—decía,—si las leyes se daban como no existentes y se hacía lo contrario de lo que ellas disponían! Ese decreto tuvo que recordar que había una ley del año 35 que no permitía entrar en los terrenos que estaban bajo de límites naturales, o bajo de marcas conocidas; y lo hizo, porque el Gobierno sabía que existían esas sociedades a que se ha aludido, y que es de notoriedad pública existen perfectamente organizadas con todos los elementos: tienen en su seno agrimensores, abogados, etc.». Afirmaba que el objeto era promover cuestiones a los propietarios de campaña, a quienes se les amenazaba con pleitos, o se les proponía transacciones haciendo de esto un negocio, un abuso escandaloso. Esto quiso evitarse con el decreto, pero «no se evita el mal», terminaba diciendo, al ocuparse de esta faz del asunto.

En seguida entraba a lo que llamaba *punto de los principios*. Hacía un silogismo que seducía. Lo que la ley ha dicho es que a la familia de Lavalleja *se le pague con tierras*; luego, decía, el Gobierno pagará cuando sepa dónde tiene tierras y en qué parte. No se atacaba, pues, el derecho adquirido con suspender las denuncias. El doctor Arrascae-

ta olvidaba que la ley autorizaba al acreedor para decirle a su deudor dónde estaba esa tierra con que debía pagársele lo que a él indebidamente le secuestraron. Autorizar al acreedor para cobrarse con determinado bien del deudor, pero, en seguida, querer negarle el derecho de denunciar dónde está ese bien, haciendo depender el abono de la sola voluntad del deudor, único que debe designar dónde se encuentran sus bienes, era algo duro, difícil de comprender. Recordábase aquello del árbol de Bertoldo. Era algo así como una facultad potestativa concedida al obligado para dejar sin efecto el contrato celebrado ; y esa facultad tenía que ser explícita, clara, terminante ! Y esto era lo que el ilustrado doctor Arrascaeta llamaba *garantir los créditos*. «Todavía—decía—no se ha hecho lo bastante con garantizarles sus créditos ; es preciso hacerlo todo, sacrificarlo todo.» Y, enardecido el ánimo del orador, se lanzaba, en aras de su improvisación, para decirnos algo que tenía, en parte, mucho de verdad, aunque olvidando que los países están llamados a «hacerlo todo, a sacrificarlo todo» para conservar su honor financiero y comercial, sobre todo cuando se trata de devolver lo que indebidamente arrebataron a sus dueños, como aquí sucedía.

Con todo entusiasmo, como para impresionar el sentimiento nacional, nos decía : «No, eso no puede ser. La nación, a causa de esa vida agitada e inquieta por que ha pasado, nada ha podido cimentar, ningún principio ha podido fijar ; le ha costado en política introducir sus principios ; en la ciencia social nada se le ha permitido hacer ; ha querido hacer ensayos y no ha podido llevarlos a cabo ; no ha podido fijar la propiedad particular, ni descubrir ni fijar la propiedad pública ; no ha podido hacer nada, en una palabra. Es preciso que la nación se detenga y trate de empezar a atender sus propios intereses, atraviésete quien se atraviése».

Era la doctrina del Gobierno fuerte. Se quería, en nombre de los intereses de la nación, llevarse por delante los intereses de los particulares heridos brutalmente en otro tiempo. No bastaba uno ; era necesario repetir el atropello, dejando en suspenso la ley que reparaba el mal hecho. ¡ Se quería garantizar la propiedad privada, y se la atacaba ! La única manera de respetarla, era no tocando el derecho reconocido en una ley-contrato.

EL AMOR DE LA PATRIA

Mientras tanto, este final de discurso, que importaba deificar la omnipotencia del Estado, causó su efecto en el ánimo de uno de los jóvenes oradores, nacidos recién a la vida política, después de los graves sucesos de esos días. El joven doctor don Juan José Herrera se levantó iracundo, cual Júpiter Tonante, para pronunciar un discurso *chauviniste*, y con él anonadar al señor diputado por Tacuarembó. Su

verba, que nunca la conocimos elocuente, sino mesurada y solemne, cual su majestuoso andar, lleno de placidez, como hombre que nunca atravesara dificultades en la vida, se hizo sentir con todo el ardor de la juventud, y vibró en el Parlamento. Fué una peroración pirotécnica. Se atacó la cuestión diciendo que estaban «en pugna el interés individual, de tal o cual casa, la casa de Lavalleja y otras, con el interés público». De aquí deducía que este último debía primar. El doctor Herrera confundía el derecho adquirido, reconocido por el Cuerpo Legislativo en una ley, con el interés individual. No se trataba de dictar una ley discutiendo si al interés público convenía o no reconocer el interés de tal o cual individuo, sino de si promulgada una ley, podía el Cuerpo Legislativo, sin derogarla, dejarla en suspenso de una manera indirecta. Fundaba su voto en que se pretendía «abrir una puerta al fraude y a la desmoralización; se pretende—decía—seguir la rutina, y se levanta la voz de los sostenedores de los intereses individuales, y no tienen reparo en pararse de frente a las necesidades e intereses públicos».

Todo esto no era sino pura fraseología, pues tan respetables son los intereses del particular como los del Estado. Cuando aquéllos chocan, ceden naturalmente el paso a los de la colectividad; pero, cuando no chocan, como sucedía aquí, era innecesario hablar de intereses contrarios. Por un lado, un individuo pedía se cumpliera la ley que le mandaba entregar lo suyo; y por el otro, ¿qué pedía el Estado? ¿qué interés invocaba que se le hiriera? Ninguno, porque no lo tenía como deudor contra su acreedor! En su *ardor patriótico*, en su emoción nerviosa, el orador llegaba hasta decir que «no se ofenden derechos suspendiendo las denuncias de tierras, el robo de las tierras públicas: no se desconoce ningún derecho; se usa de un gran derecho, del inalienable derecho que tiene la patria de vivir, y no ser robada».

¿Quién sería esta patria, sino los mismos habitantes del territorio? ¿quién constituía esa patria, sino sus habitantes?

Esta invocación de patria era ridícula, pero sonaba bien en labios de un hombre joven, lleno de pensamientos amorosos. Lo malo era que ese amor de la patria, inflamable en su pecho ardiente, lo llevaba hasta el ataque hiriente contra quienes no pensaban como él, como si el tener criterio distinto fuera un crimen. Era la escuela de la intransigencia política y religiosa de ese elemento conservador de la sociedad, que no sabía respetar las opiniones ajenas, la que llevaba al doctor Juan José de Herrera a herir la nobleza de alma del doctor Palomeque, y de los señores Lerena y Tapia, cuando en su improvisación decía: «Es de conciencia pública, como de la conciencia del Representante por Tacuarembó, como de la del Representante por Canelones (señor Lerena), que las denuncias están siendo un foco de ladrones, de robo; que hay gavillas organizadas, con abogados en su seno; que hay procuradores, que hay escribanos que sólo se lanzan en la cam-

pañá a perturbar la propiedad, a saquear a los propietarios. ¡ Volvamos, por Dios, la vista al pasado, al lamentable pasado, y después de estudiarlo, de comprenderlo, de leerlo, hagamos pie firme en la actualidad, y miremos al porvenir, por Dios ! Veamos a la nación ultrajada, vilipendiada, herida, presentarse a la legislatura del año 58 a pedir amparo contra el ultraje, contra el robo y el saqueo : ¡ veámosla hasta desnuda del pabellón azul y blanco, de ese pabellón azul y blanco que está sirviendo de alfombra al Directorio de Aduana ! »

Nada de esto tenía que ver con el asunto agrario, pero el joven orador necesitaba calentar los ánimos con « amor de patria », por lo que en seguida se oyeron bravos y aplausos en la barra, como si celebraran aquello de la falta de conciencia que tenían los diputados por Tacuarembó y Canelones respecto « al foco de ladrones, al robo y a las gavillas », junto a la alfombra para el Directorio de Aduana. Y ya en ese camino, entusiasmado con los vítores de la barra, el orador se desbordó y se le oía decir calenturiento de patriotismo : « Y yo pregunto, después de ver hecha pedazos esa bandera, después de ver hollados los derechos soberanos de la nación, si hay algunos miembros de la octava legislatura que, volviendo la vista al pasado, levanten la voz en favor de los intereses individuales. ¡ Los intereses individuales ! Vergüenza me da el decirlo, no debieran tener una sola voz que se levantase en este recinto. ¿Cuál derecho más alto que el derecho de vivir ? »

Era incomprensible que un hombre ya de edad madura, pues el doctor Herrera tenía, en esos momentos, treinta años, encarara las cuestiones parlamentarias con tanto carácter impulsivo, que le llevaba hasta sostener el garrafal error de darle vergüenza que en el Parlamento se levantara una voz para sostener los derechos de tales o cuales personas. Sin duda el doctor Herrera creía que los diputados estaban allí para no preocuparse de los intereses primordiales de los habitantes, cuales eran, las garantías individuales, entre las que se hallaba la propiedad. ¡ La familia A o B, a la que se había robado sus bienes, por el Estado, no tenía derecho a invocar la garantía individual ! ¡ Y si un diputado la defendía, lo hacía con conciencia de la vergüenza del hecho ! Y esto el orador lo calificaba de *excepción odiosísima* en el curso de su peroración ; de « privilegio exclusivo de hacer fraude » ; « de abogar por la inmoralidad y el fraude ». El torrente se desbordaba en frases fuertes, llegando al extremo de observar al doctor Palomeque « sobre algunas palabras que pronunció en la sesión pasada, que considero ofensivas a la Cámara—decía,—pues en una de las veces que tomó la palabra se permitió decir que la voz de la justicia no encontraba eco en los bancos de la representación. Es un error del señor Representante ; la equidad, la razón, el buen derecho y la justicia tienen eco en cada uno de los señores Representantes que se sientan en estos bancos ».

Y, como todo esto lo dijera enérgicamente, airado, encarándose con el doctor Palomeque, el señor presidente de la Cámara creyó de

su deber intervenir para manifestar que el orador no podía dirigirse a ningún Representante en particular. «¡Déjelo, señor presidente!—decía con toda tranquilidad el doctor Palomeque, como hombre de mayor mundo y de más peso que el impugnador, a quien, sin embargo, mucho apreciaba por sus bellas cualidades morales e intelectuales.—El desahogo es muy justo; estamos todos en nuestro derecho—agregaba el doctor Palomeque. A lo que el señor presidente, desde su asiento, con toda entereza, como cansado de haber oído tanto ataque y palabra hiriente, respondía: «No puedo permitirlo, señor Representante». Y así terminó el fogoso discurso.

Como era natural, el doctor Palomeque tomó la palabra. La ansiedad de los colegas era indiscutible. Se presumía que la respuesta sería dura y enérgica, para reprimir aquella insólita vocinglería. Pero, no fué así. No imitó al contrincante, a quien, como hemos dicho, apreciaba verdaderamente. Por el contrario, tuvo que sorprenderle semejante salida de tono. De ahí que opuso la prudencia a la imprudencia, y, consecuente con aquella mansedumbre ya demostrada, comenzó por declarar que no pedía la palabra para hacer ninguna alusión personal. Sólo quería, a ese respecto, explicar dos palabras. «No dije, señor presidente—manifestó,—que en la octava legislatura no se acogía la justicia. Lo único que dije fué: que la justicia en mi voz nunca se encontraba. Nada más. Dicho esto, entraré al asunto.» No podía pedirse una respuesta más seria y contundente. Pudo el doctor Palomeque hacer presente al doctor Herrera que no era el momento de tratar ese incidente; que debió provocarlo en la sesión donde tales palabras se pronunciaron. Pero, como el ánimo del atacado no era dar mayor importancia al asunto, bastóle con lo dicho, y entró al fondo de la cuestión. Empezó por expresar que era *un bellissimo discurso* el pronunciado, en el que, ciertamente, no había dejado de tocarse algunos puntos importantes y seductores a la vez. En esto se veía al hombre de más edad, de mayor experiencia de la vida y del Parlamento, a quien los ataques personales no le arrebataban la serenidad, como tampoco la invocación del nombre de la patria le entusiasmaba hasta distraerle de su misión legislativa. Sentía que «en una cuestión de una naturaleza tan importante—decía—se descienda a individuos, a personas, y siento muchísimo que lo haya hecho el señor diputado por Canelones, a quien respeto tanto». La lección de buen sentimiento estaba dada al joven nacido a la vida, cuya orgullosa personalidad siempre se exhibiría en el escenario político, con acciones y reacciones dignas de estudio, por más que no fuera una intelectualidad poderosa, sino una intelectualidad con suerte, en un partido donde la plutocracia abate a los hombres pensadores desheredados de la fortuna.

El doctor Palomeque hizo presente, y con mucho fundamento, que no era con decir que había una sociedad, abogados y escribanos, que defraudaban al Estado, ni con lamentar la desnudez del pabellón orien-

tal, con lo que se probaba la conveniencia del proyecto. Había que mostrar esa conveniencia, diciendo : ¡ aquí está ! Deseaba encontrar una razón, aunque fuese muy pequeña, le decía a su contrincante, para hacerla muy grande y adherirse al pensamiento propuesto, porque más amigo del país que yo, no hay ; tanto como yo, sí, pero más, no. No vengo aquí a proteger el fraude ; no vengo aquí a proteger los intereses individuales. Nunca he venido a sostener intereses individuales. He venido a sostener los intereses del país por el juramento que he prestado ; a sostener las instituciones y el derecho del ciudadano : a eso he venido aquí. Puedo estar equivocado ; eso es otra cosa ; y para eso el señor diputado ha podido decir muy bien : está equivocado el señor Representante ; pero no decir que se levanta aquí una voz que protege el fraude. El señor diputado dice : está en la conciencia del señor Representante. ¿ Cómo es eso, señor presidente ? ¿ No es esto una acusación ? Leerle a uno la conciencia y decirle : ¡ se viene a sostener el fraude ! » Dicho esto, volvía a repetir lo que tantas veces había dicho : que se entrara a discutir la ley que reconoció a los acreedores sus derechos indiscutibles, y se derogara, si para ello había motivo ; que este era el único camino legal. Ofrecía acompañar, si se demostraba que había fraude, pues él no venía a defenderlo. Al respecto declaraba : « me parece que soy bien conocido en Montevideo ». Invitaba al señor diputado a ocuparse de la ley promulgada, para derogarla, pero suspendiendo el asunto en discusión, pues que él es, decía, el fondo de la cuestión. « Examinemos, recorramos los antecedentes, y volvamos a la Cámara a derogar esa ley. »

La discusión parecía terminada. De ella resultaba un hecho elocuente, que ningún orador se había atrevido a calificar de ley injusta la que había reconocido a la familia Lavalleja el derecho a recuperar los campos que el Estado le había arrebatado en época de convulsiones políticas. Este antecedente muy importante hay que hacerlo resaltar para honor del doctor Palomeque, y aun de los propios impugnadores. Era tal la conciencia del doctor Palomeque al respecto, que incitaba a sus adversarios a estudiar aquellos antecedentes, y derogar la ley, si se le probaba que allí había fraude. Ni una palabra se pronunció en contra, en el recinto de la Cámara, para honra de la séptima legislatura, que tal ley había sancionado.

EL LEÓN DE LA PALABRA

Pero cuando todos creían concluido el debate, después que el doctor Herrera dió sus explicaciones al doctor Palomeque, apareció en la escena la avasalladora inteligencia del doctor Juanicó. Necesitaba el diputado por Tacuarembó recibir la recia acometida de ese león de la palabra, para que quedara constancia de sus energías. Iba a batirse todavía con tal adalid, después de haberlo hecho, con más o menos

éxito, con hombres como Fuentes, Arrascaeta y Herrera. El *leader* de la mayoría parlamentaria sintió la necesidad de dar el golpe de gracia, y, por lo mismo, se reservó para lo último, cuando ya el luchador estuviera cansado de la lid. Iba, pues, a ser sometido a la dura prueba de quien ya sabe que está vencido, y ve por delante a un adversario temible. Se hallaría en el caso de sacar fuerzas de flaqueza, para que la fama del parlamentarista no desapareciera. Y esto es lo que enaltece el valor del doctor Palomeque en esta jornada, consagrandó su nombre intelectual.

¿Qué dijo el doctor Juanicó, cuando ya no tenía por delante al ministro doctor de las Carreras? ¿Cómo encaró el asunto después de las categóricas manifestaciones ya conocidas?

Vamos a conocer uno de los más fortificantes discursos del doctor Juanicó, ahí perdido en las páginas no estudiadas de nuestra historia parlamentaria, donde tantas riquezas se hallan para quien sabe rastrear documentos del pasado. Las generaciones del futuro encontrarán en ellos los elementos necesarios para pintar caracteres nacionales. Allí se oirá hasta el canto de algún cisne político, con el que honró la literatura política del país. El doctor Juanicó tenía ganada la batalla, pero pretendió ser cruel con su adversario, sin saber lo que le acontecería. Le había lanzado aquellos franco-tiradores para que lo cansaran, y luego, él, como el espada en la plaza de toros, quería darle la estocada de muerte. Pero el adversario iba a demostrar que conservaba fuerzas hasta el último momento, y que caería con gracia en la jornada.

Fué magno el discurso de Juanicó. Con olímpica actitud, reflejada en la frase, pues ésta sirve, al través del tiempo, para darnos a conocer el gesto de la persona que habla; seguro de su triunfo, como quien pisa en terreno firme, resguardadas las espaldas, hizo leer la ley del 52, porque deseaba, decía, «que la Cámara viniese a los términos más sobrios y verdaderos de la cuestión». Una vez leída esa ley, hacía presente que la voz del legislador sería la que podría traerlos otra vez al fondo de la cuestión, que calificaba de grave, por sus tendencias, más que por la resolución inmediata del proyecto en discusión. Sostenía que el proyecto sólo se proponía suspender las denuncias, las que, afirmaba, «están prohibidas por la legislación vigente» de acuerdo con la ley del 52 que acaba de leerse.

Esto era un error evidente, como lo puso en claro el doctor Palomeque con su argumentación ilevantable. Si la ley del 52 prohibía las denuncias, le decía inmediatamente al doctor Juanicó, no hay para qué dictar una ley, igual a la vigente, pues con decirle al Poder Ejecutivo que la cumpla, basta. Pero, no era exacto lo que afirmaba el doctor Juanicó. La ley del 52 había prohibido las denuncias *a los efectos solamente de enajenar las tierras públicas*. Esto era lo prohibido; y era así como esa ley se había aplicado en la práctica. Vino después

la del 53, que autorizó las denuncias en general, a los fines de saber el Estado cuáles eran sus propiedades, y darlas en enfiteusis, obteniendo así un rendimiento. Era absurdo suponer que el Estado se hubiera condenado a *no querer* saber dónde estaban sus tierras públicas, quiénes las poseían o detentaban, para luego darlas en arrendamiento, a la espera de la ley agraria a dictarse. Era lógica y razonable la argumentación del doctor Palomeque. Si la ley existía, se estaba perdiendo el tiempo lamentablemente. Era el caso del militar que tiraba otro cañonazo, cuando no alcanzaba el primero. No; lo único que el doctor Juanicó hizo en su magno discurso, pronunciado *ex cathedra*, fué revelar su ciencia y arte; pero no pudo demostrar que la ley del 52 declarara lo que él aseguraba. Tan lo comprendía así, que sostenía la necesidad de sancionar el proyecto que, según él, ¡diría lo mismo que estaba dicho desde 1852! Este absurdo no podía concebirse en un hombre de talento, cómo indiscutiblemente él lo era. De ahí que tratara de salvar la situación pronunciando un hermoso discurso sobre la cuestión agraria, respecto de la cual todos estaban de acuerdo. En este sentido, no debe conservarse en el polvo del archivo el dicho discurso, honra y prez de su autor y del Parlamento a que pertenecía. Por eso vamos a dar una idea completa de él.

El doctor Juanicó, siempre en su carácter de *magister*, como si tuviera por delante a sus discípulos, o hablara de jurisprudencia con Vélez Sársfield en aquella su correspondencia epistolar, de maestro a maestro, que se halla entre sus destruidos papeles, confesaba que le «placía muchísimo (lo protesto, decía, para darse el verdadero carácter de autoridad en la materia) el ver que se daba mucha importancia a una cuestión de esta naturaleza. Un país donde la tierra vale, donde se considera ese valer, ¡oh señor!... ya empieza a valer algo».

Estas exclamaciones, dentro de la oración, retratan al personaje. Es olímpico; parece vérselo echándose para atrás, en su sillón, mirando hacia arriba, con los brazos y las manos abiertos, acentuando, cual una pitonisa, su dominación intelectual sobre aquella Asamblea. Algo de eso se le había pegado al doctor Juan José de Herrera, y aun al distinguido ciudadano don Ildefonso García Lagos, su aventajado discípulo y practicante, y su secretario en la embajada a Europa en 1865, de la que nos ocupamos en el lugar respectivo. Quizá puedan darse una idea de esa exterioridad solemne los que hayan conocido a su pariente el señor don F. Lerena Juanicó, con aquel andar majestuoso y aquella cabeza erguida que tanto realzaba su porte y su conjunto.

Después de aquella exclamación, de la que muchos ejemplares se verían en el discurso, junto con los puntos suspensivos, para suplir argumentos, seguía diciendo a sus oyentes ensimismados, mientras el eco de la voz se perdía o rompía en las bóvedas de aquel estrecho recinto legislativo, cuyo aspecto es, en la actualidad, el mismo que entonces: «Cuando el valor de la tierra es insignificante, cuando no se

ambiciona, entonces se puede decir que no tiene valor. Cuando se suscita un vivo interés por cualquier medida que tienda a conocerlas, y se excita el interés público, ¡ oh señor ! ¡ hermosa señal ! El valor del suelo de la República crece, llama la atención de todo el mundo...»

Aquí volvían a aparecer las exclamaciones y los puntos suspensivos, para en seguida destacarse el *yo* del personaje consular, que parece tuviera sus contactos con Rivadavia. En efecto, «gran cosa a mis ojos—decía, cerrando el párrafo,—porque tengo por entendido que lo primero, el primer síntoma que se puede dar de que un país progresa, es el valor de la propiedad. En el estado nómada de los pueblos, es decir, en ese estado en que las instituciones no tienen fijeza, no hay propiedad. El primero, si no el más grave, el más importante, es aquel en que la propiedad va fijándose ; porque, entonces, de lo pastoril se pasa a lo agrícola, de lo agrícola entonces se puede decir que se entra a un nuevo orden de instituciones, al verdadero, al gran paso de la civilización, a eso que significa pasar de la infancia a la pubertad de los pueblos ! ¡ Alta, gran cosa, señor presidente ! Repito que por eso me place infinitamente el ver la importancia que se da a esta cuestión. Desearía que bajo este punto de vista se examinara, se discutiera, antes que esgrimirnos con sociedades, enemigos ocultos y otras cosas más».

Se veía aquí la preparación científica del orador, y su talento para exponer las ideas. Pudo, en verdad, desarrollar más clara y ampliamente el argumento, sosteniendo la tesis que Rivadavia había traído de Inglaterra, en la que se fundaba el carácter enfiteútico del problema agrario, para concluir por sostener que la propiedad valía, en esos momentos, porque empezaban a sentirse las garantías que el Gobierno daba a la vida y a las cosas en campaña. La propiedad vale, allí donde hay autoridad que la haga respetar. No basta que haya instituciones que la fijen, que la deslinden, como decía el doctor Juanicó. Es necesario que haya garantía para la vida del poseedor, es decir, autoridad pública, digna de respeto, y que sepa hacerse respetar por su energía moral. De nada vale un territorio feraz, cruzado de ríos y arroyos que lo fecunden, aunque tenga instituciones escritas, si éstas, como sucedía en el caso, a estar al criterio del doctor Juanicó, carecía de autoridades que las hicieran cumplir. Es verdad que si el Poder Ejecutivo hubiera hecho eficaz la ley del 52, tal cual la interpretaba el doctor Juanicó, nunca habría conocido una gran parte de la propiedad pública, no para utilizarla con interés fiscal, sino para entregarla, como la entregaba, a la circulación comercial, en beneficio del poseedor y del Estado. Y ese fruto bueno era el que quería impedirse ahora con la suspensión de las denuncias. Si la tierra empezaba a valer, era porque las leyes comenzaban a cumplirse, en parte, dadas las autoridades que se establecían para afianzar el orden y concluir con las guerras civiles.

El doctor Juanicó combatía esa tendencia de levantar el interés fiscal sobre el interés particular ; quería que la propiedad particular se

asegurara, pues ella era la que realmente convenía al país. Y en esto estaba de acuerdo con el doctor Palomeque, pues éste no hacía sino bregar por ese interés individual, para que el interés fiscal cediera ante los derechos adquiridos de los particulares, que invocaban leyes a su favor, dictadas ante el inicuo despojo de que habían sido víctimas.

El doctor Juanicó nos dejó un lindo discurso científico, que nadie podía impugnar, porque todos estaban conformes en estudiar el fondo de la cuestión agraria, para dictar una ley que subsanara los defectos que pudieran existir. Su discurso era irreprochable, en ese sentido. Lo único que no demostró, limitándose a afirmarlo, era lo discutible, es decir, que era malo el sistema de autorizar la denuncia de la tierra pública, y que era correcto y serio suspender los efectos de una ley, de una manera indirecta, cuando por ella adquirirían derechos los particulares. En su peroración, llegaba a reflejar la duda de su espíritu. Él reconocía que la sucesión Solsona, por ejemplo, tenía derechos adquiridos. Llegaba al extremo de no acompañar a quienes querían que «*no se admitieran* más denuncias». Estaba conforme en que se admitieran, tal cual lo proponía el señor Lerena, «con el objeto de guardar la preferencia del mejor derecho que para su tiempo pudiera resultar». Era que, en el fondo, no había otro procedimiento que el de la denuncia, ya fuera para dar en enfiteusis o en venta la tierra pública. Otro tanto sucedía cuando decía: «Si las leyes requieren modificaciones, que se hagan, repito; si el camino es malo, no continuemos por él». Nada firme había respecto del hecho concreto en discusión. No se indicaba argumento alguno para probar que las denuncias eran malas, y que el legislador podía ir en contra de derechos adquiridos, que se reconocían tales.

En su dogmatismo jurídico llegaba hasta sostener que cuando la ley del 52 prohibió las denuncias a los efectos de la venta, también se había referido a la enfiteusis. Entonces, el doctor Palomeque sostenía que todo lo hecho desde el 52 era nulo. No, decía el doctor Juanicó; la enfiteusis es una *enajenación*. Para probarlo, sostuvo el absurdo que la hipoteca es una *enajenación*, porque quien *afecta*, *enajena*. Esto, decía, es muy sencillo y muy fácil. Luego, la ley del 52 prohibía el enfiteusis, porque allí se prohibía la *enajenación* de la tierra pública, «chicas como grandes, absolutas como menos absolutas, perfectas como menos perfectas». Sostenía que esa era la ley que «regía en la República, y a la que se había faltado». Llegaba, en su apasionamiento, hasta sostener que «muchas veces se ve repetido, aun en distintos tiempos, un mismo mandato por el legislador, que no se ha cumplido, y se ve la necesidad de dictar la regla de nuevo».

Todo eso era un error. El contrato de enfiteusis no es ninguna venta. Es un derecho real, pero no una venta. La ley del 52, lo que mandó fué que *no se vendiera* la tierra pública que se denunciara, sin perjuicio de continuar dándola en arrendamiento, en enfiteusis, pues no

se iba a tener estancada, beneficiando al poseedor, sin que se pagara el *dominio útil*. En ninguna parte de la legislación se dijo nunca que no se pudieran arrendar las tierras públicas, que eso es lo que quiere decir enfiteusis. Y para arrendarlas, era necesario que el arrendatario dijera : ¡ aquí está la tierra !

Sin duda, como el maestro se sintiera en terreno débil, y no lo agradara que un discípulo se le viniera a las barbas para demostrarle que un derecho real como la hipoteca, la enfiteusis, no es una venta, quiso cortar la cuestión, y con altanería científica, sostuvo que «la Cámara se ocupaba de algo más serio» que de enfiteusis, y que en su opinión el punto estaba suficientemente discutido, por lo que proponía así se declarara. Fué un recurso hábil, para impedir la respuesta del adversario. ¡ Así se cerró la discusión, lo mismo que cuando no se quiso declarar libre el debate ! Felizmente, el doctor Juanicó no ha podido hacer igual moción ante el tribunal de la historia, donde todo se analiza, y ésta reconoce hoy que aquella actitud no fué sino un recurso parlamentario para triunfar materialmente, ¡ después de haber declarado en la sesión anterior que donde había un derecho adquirido bajaba la cabeza ! ¡ Lo había, pero él alzaba la cabeza, y calzaba el coturno para sostener que la enfiteusis era una venta, y, por lo tanto, prohibida por la ley del 52, y que debía dictarse *una nueva ley sobre lo mismo, para que se cumpliera por el Poder Ejecutivo, en vez de interpe-larlo para saber por qué no la cumplía !*

Y así, cerrado el debate, se votó el proyecto que mandaba *no se admitieran* las denuncias. Y en la legislación aparecerían dos leyes iguales (1), porque, según la doctrina del doctor Juanicó, ¡ el Poder Ejecutivo no cumplía la primera ! Al genio le es permitido inventar sistemas. ¡ Es privilegio otorgado por los dioses al nacer aquél !

(1) Nosotros sostenemos que no había tales *dos leyes iguales*, pues la del 52 no se refería sino a la *renta* de las tierras públicas, y no al contrato de enfiteusis, de arriendo.

LA GUARDIA NACIONAL

CRÍTICA DEL PROYECTO

Vamos ahora a asistir al gran debate relativo a la ley de Guardias nacionales. Otra vez el doctor Palomeque volvería a exhibir sus ideas hechas, que el tiempo se encargaría de defenderlas, contra sus eternos adversarios.

Su personalidad ya había asumido verdaderos contornos, por más que espíritus jóvenes y exaltados recogerían más tarde el barro que los hombres se arrojaban en el calor de la lucha, para impedir que la posteridad los viera tales como fueron. Ese barro se secaría al calor del sol de la inmortalidad, y vendría al suelo, para hacernos ver lo noble del alma humana, desprovista de miserias. Por eso, cuando en nuestros días, el señor don Carlos Onetto y Viana, un joven extraviado, poco conocedor de las cosas y del corazón humano, lanzó una diatriba contra el doctor Palomeque, fundada solamente en lo que sus enemigos habían escrito, sin estudiar lo que el atacado había dicho en su defensa, no faltó quien, como el malogrado talento de Julio Herrera y Reissig, le dijera: «también has olvidado la fría serenidad del escalpelo en manos del autopsista por la *tanda* de cuartel, al ocuparte de don José Gabriel Palomeque, Estrázulas, Acevedo y otras figuras muy dignas, cuyos ideales fueron siempre la inhumación del pasado, para dar lugar a una época saludable de reconstitución y sosiego, que bien la necesitaba este gorgojo territorial, pisoteado miserablemente por la ambición de las logías, por los camastrones de la funambulía maquiavélica, y por el guarangaje ensoberbecido de nuestra campaña indómita» (1).

Ibase a asistir a una nueva batalla, hermosa, simpática, a librarse entre quienes creían que los soldados eran los llamados a sostener la autoridad, y quienes, contra ese argumento, alegaban la fuerza de la opinión pública.

El doctor don José Vázquez Sagastume, autor del proyecto, sostenía que la Guardia nacional se creaba para la defensa de la independencia e instituciones de la República, perteneciendo a ella todo ciudadano de 17 a 47 años, salvo los exceptuados. El proyecto fué fundado por su autor, en la sesión del 13 de abril. Sostuvo que la ley vigente, del año 35, tenía excepciones odiosas. Daba tal importancia a esa institución, que, con convicción, declaraba que a haber existido en

(1) *Epílogo Wagneriano a «La política de fusión», con surtidos de psicología sobre el imperio de Zapican*, por Julio Herrera y Reissig, publicado en *Vida Moderna* de Montevideo, tomo VIII, página 9, dirigida por los señores don Rafael Alberto Palomeque y don Raúl Montero Bustamente.

el país, desde hacía muchos años, una ley como la proyectada, «no hubiéramos visto—decía—a nuestra pobre sociedad tan frecuentemente combatida por la guerra civil; porque no hay elemento más organizador, no hay defensor más leal y más firme de las instituciones, de las garantías del ciudadano, de la paz y del orden, que el ciudadano mismo cuando está armado para defenderla. Los cuerpos de Guardias nacionales no pueden ser nunca sino elementos de orden y de paz. Jamás con ellos ha podido propagarse la anarquía; ni el caudillaje ha establecido su dominio cuando los ciudadanos han estado armados para defender las instituciones. La misma dignidad nacional se ha visto muchas veces atacada por falta del espíritu público, que sólo se forma concurriendo todos los ciudadanos a llenar el deber que tienen de consagrar su vida al servicio de la patria. Por falta de ese respeto material, nos hemos visto atacados continuamente hasta del extranjero. Su falta ha sido causa de que algunos Gobiernos extraños hayan pretendido tener ingerencia hasta en el ejercicio de nuestra soberanía. Eso es también causa de que la prensa asalariada de Buenos Aires esté continuamente arrojando al rostro de nuestro país y de nuestro Gobierno, inculpaciones indignas, que sólo pueden aplicarse a los hombres de esa política desleal e innoble, que cuando hacen protestas de amistad a un pueblo hermano, pagan mercenarios extranjeros que vengán a ensangrentarlo» (1). Decía que «cuando todos los ciudadanos echen su fusil al hombro para defender las instituciones, la libertad, la independencia y la dignidad de la República, entonces tendrá más respetabilidad del extranjero; entonces no se insultará impunemente su pabellón». Creía que «sancionado una vez, el país tendría en los cuerpos de Guardias nacionales el más firme sostén del orden, de la paz, de las instituciones y del Gobierno; y la anarquía, así como el caudillaje, se harán imposibles en adelante en nuestro país».

Hemos creído conveniente exponer los fundamentos del proyecto, como asimismo la fraseología en que abundaba su distinguido y elocuente autor. Ahí está todo el candor de un alma que siempre se mantuvo joven, aunque llegara a la edad de la vejez. Lo sorprendente era que un hombre de experiencia, de edad madura, como el señor Errazquin, manifestara estar conforme con lo que calificaba de «razones aducidas por el señor diputado que le había precedido en la palabra». Todo lo expuesto por el doctor Sagastume carecía de base en un suelo como aquél, y en una época como aquélla. Aun no estaba maduro el espíritu público para encarnar semejante noble institución nacional. Había mucha falta de educación cívica. Los hombres vivían de pasiones a lo indio. La misma impolítica actitud del autor del proyecto revelaba la triste situación por la que atravesaban los ánimos, dado el apoyado del señor Errazquin y los bravos y aplausos estallados al pro-

(1) ¡ Bravos y aplausos!—dice el acta.

nunciarse aquellas palabras imprudentes e innecesarias contra la llamada «prensa asalariada de Buenos Aires y hombres de política desleal e innoble». Parecía como que quisiera sostenerse una paz armada para contener a ese pueblo hermano que pagaba mercenarios que vieran a ensangrentar al vecino. Si tal era el pensamiento, como los sucesos lo demostraron más tarde, era impolítico manifestarlo en público. Por lo demás, el establecimiento de la tal Guardia nacional no sólo no llenaría los fines en vista, sino que, por el contrario, produciría la anarquía y fortificaría el caudillaje.

El doctor Palomeque vió claro el pensamiento, y, como si previera que a él le tocaría sufrir las consecuencias de la ley a dictarse, que sólo serviría para entronizar el caudillaje y con él la anarquía en el Departamento de Cerro Largo, no trepidó un momento en el partido a adoptar, conocedor de los hombres y del estado de las cosas. De ahí que, cuando se inició el debate, en la sesión del 21 de abril, fué el único que tomó la palabra para combatir el proyecto. Fué un rasgo de energía, nacido de sus convicciones acendradas. Él ya sabía que el proyecto iba a sancionarse, pues se había tratado en Comisión General y la Cámara lo había aceptado. No podía, sin embargo, decía, «respetar esas opiniones», por considerar que, «estudiado un poco más el proyecto, lo creía inoportuno cuando menos».

Y tenía perfecta razón para sostenerlo. Se fundaba, para ello, en que «el país había pasado por una guerra desastrosa, cruel, bárbara, que no sólo ha diezmado a sus hijos, sino que ha hecho desaparecer las fortunas». De aquí deducía que «la primera obligación del legislador, como del administrador, era dar ensanche a los habitantes para que fueran a reparar los restos de esas fortunas quebrantadas por los extravíos de todos». Esto «no se podía hacer movilizándolo el país, como se pretendía por dicho proyecto, arrancando a los laboriosos ciudadanos de sus tareas para llevarlos a los ejercicios doctrinales».

Esta consideración iba recta al labrador, al estanciero; se refería a los Departamentos de campaña. Era la doctrina del socialismo moderno la que predicaba. Ponía en evidencia «dos grandes inconvenientes: el primero, el abandono que hace el industrial, bien sea de su trabajo personal, bien sea de la atención de sus bienes; y el segundo, que quedan las fortunas y las familias a merced del vago, de quien comúnmente llamamos gaucho, del hombre sin hogar, sin oficio, sin patria, se puede decir; porque ése no va a la Guardia nacional; a ése que, por hábitud, vive en las breñas, en los bosques, no se le toma nunca, nunca se le encuentra, y sólo se le ve en aquellas reuniones naturales de nuestros paisanos, como son, las hierras, las carreras, las siegas, etcétera, a donde pocas veces la justicia va a perseguir a quien no cumple con su deber». Hecho resaltar este inconveniente gravísimo, se preguntaba si «sería prudente, en esta situación, obligar al habitante de la campaña, que tantos sacrificios ha hecho, que ahora mismo los

está haciendo por conservar la paz, porque las instituciones no fueran atropelladas, porque la autoridad constitucional se conservara en su puesto y se elevara a la altura que el país lo reclamaba».

Después de este argumento fundamental, pleno de lógica, que la práctica de la ley pondría en claro más de una vez, entraba a criticar la parte aquella de obligar al servicio a los hombres del foro, estudiantes, practicantes, empleados civiles y escribanos. Encontraba odiosas las no excepciones consignadas, como inconveniente la facultad de nombrar un jefe militar para comandar a los ciudadanos. Bregaba por que las profesiones liberales y científicas tuvieran sus regalías, muy especialmente entre nosotros, por los importantes y eminentes servicios que ellas prestaban a la sociedad. Se fundaba en la escasez de hombres inteligentes que, por lo mismo, eran «llamados a sacrificarse en los puestos públicos, lugar del sacrificio—decía,—por muy honorífico que sea». No pretendía eximirlos del deber de defender la patria en caso necesario. «Venga, santo y bueno—decía ;—todo ciudadano tiene la obligación de derramar su sangre en defensa de la patria ; pero para ir a hacer una ostentación, una parada, un ejercicio, un paseo militar», no comprendía se les exigiera tal sacrificio.

Luego, con todo el entusiasmo y energía debidos, entraba a defender lo que se llamaría la inviolabilidad del estudiante. Recordaba lo que se hacía en Francia, enrolando a los estudiantes, pero sin obligarlos a las fatigas ordinarias del Guardia nacional ; si bien, cuando la patria los reclamaba, todos salían de las universidades y colegios a formar un cuerpo. «Entre nosotros—decía,—que somos un país tan nuevo, que necesitamos de tantas luces, todavía vamos a poner una traba a la instrucción. No hay paz, no hay patria posible, no hay libertad, si no hay instrucción, si no hay ciencia, y ésta no se va a buscar en los ejercicios doctrinales, en las marchas y contramarchas, en las filas, en la formación de un cuadro muy lindo, en el despliegue de una línea de batalla, en el destaque de una guerrilla. No se va a ganar ; por el contrario, se va a perder, porque la juventud se alucina muchísimo con el placer de verse con el fusil al hombro, con las flores que recoge, con las guirnaldas que le tiran de los balcones, con un ¡ viva ! que le dan. La juventud puede ser más útil a la sociedad.»

En el curso de su nutrida peroración, bien pudo agregar que en un país guerrero como el nuestro, era pernicioso desarrollar más y más ese carácter militar. Nuestros hombres no necesitan, en campaña, muchos estudios prácticos de milicia, que despiertan mayormente el amor de la gloria, tan fatal para nuestra democracia, de por sí batalladora.

No menos contundente era la argumentación demostrativa de que los escribanos empleados de la nación, los del Gobierno, de la Corte y del Cuerpo Legislativo, los jueces, fiscales y alcaldes ordinarios, debían libertarse de ese servicio. En cambio, encontraba odiosa la ex-

cepción a favor del hermano que tuviera hermanos huérfanos a su cargo fuera de los pueblos, ciudades o villas de los Departamentos. Para demostrarlo, citaba ejemplos contundentes de pueblos cabeza de Departamento distantes dos cuadras o diez varas. «A dos cuadras o diez varas—decía—está un exceptuado, y a esa misma distancia está otro que es obligado a ir a la Guardia nacional.» Esos ejemplos eran los de Tacuarembó y Salto.

No menos contundente era su dialéctica cuando se ocupaba del jefe militar al comando de los ciudadanos. «Esa elección—decía—podría traer continuamente conflictos de sangre, porque es sabido que los hábitos del militar y sus leyes son tan rigurosos, que, ejercidos sobre el ciudadano, por la costumbre inveterada de mandar veteranos, vendría a traer un conflicto, indispensablemente.»

Era el socialista verdadero, en toda la extensión de la palabra, que luchaba para que no se oprimiera al trabajador ni se sometiera a esclavitud al hombre libre. Y lo sostenía, porque conocía lo que era la férrea institución militar, que arrebató al hombre su autonomía, convirtiéndolo en una máquina. Esto era mucho más sensible en nuestras costumbres, aún rudimentarias, en las que el caudillo era un señor de horca y cuchillo, que se imponía con su vestimenta militar. Era tanto más sensato lo expuesto, desde que se trataba de comarcas extensas, siendo el resultado obligar a un hombre laborioso a recorrer grandes extensiones de tierra, con pérdida de tiempo y gastos consiguientes. La organización de la tal Guardia nacional, con un jefe militar al frente, no era sino el medio de conservar ese caudillaje y esa anarquía que quería desterrar y enterrar el doctor Vázquez Sagastume. ¡El Gobierno colocaría, para su dirección, al caudillo del Departamento, quien, como se verá oportunamente, no haría sino causar disturbios y perturbar el desarrollo comercial en la zona donde campaba por sus respetos!

El doctor Palomeque ahondaba aún más el asunto, con aquel su criterio práctico, con esa su educación aprendida en el mundo, que es la que vale, después de la adquirida en el hogar y en la escuela. «Por otra parte—decía,—la elección de un militar a la cabeza de la Guardia nacional, haría que desapareciesen totalmente los objetos de la institución. Se ha querido que sus jefes, sus oficiales, todo nazca del centro de los hombres del pueblo, de los ciudadanos; y poner un jefe militar a la cabeza de la Guardia nacional, es movilizarla veteranamente. El jefe de la Guardia nacional, siendo simple ciudadano, tiene una independencia que no tiene el jefe militar, porque éste no puede tenerla. El jefe superior del Estado le dice a ese jefe: «marche usted con su Guardia nacional a tal punto»; y marcha, no tiene que observar, nada más que hacer que marchar; pero el ciudadano que es comandante, puede.» El orador agregaba que hay que distinguir el caso de hallarse con el enemigo al frente, cuando el país estaba en guerra, pues entonces todos se hallaban en la misma situación.

El doctor Palomeque era el representante de la escuela liberal, que todo lo esperaba del esfuerzo popular, por obra de la educación, y no de la fuerza material, analfabeta. Por eso chocaba a cada instante con los nuevos elementos ingresados al Parlamento, cuyo aprendizaje político, por lo general, había sido el del Gobierno fuerte, militar, del Cerrito. En el caso, él hablaba «del servicio ordinario de la Guardia nacional, porque para el extraordinario nada tenía que decir».

La Guardia nacional no era una fuerza de línea dependiente del Gobierno, sino el ciudadano que tiene el derecho de poseer y llevar armas, a cuyo fin se adiestra en su manejo para cuando llegue el momento de defender el territorio invadido por hueste extranjera, o ir a donde la necesidad nacional lo reclame. En este último caso, sí, depende del Gobierno, porque la unidad militar lo reclama. Mientras tanto, el habitante goza del derecho de tener en su hogar el arma ofensiva y defensiva, para concurrir, de acuerdo con su organización propia, a ejercitarse en su manejo. La Guardia nacional viene a ser, en el hecho, lo que el Tiro Federal Suizo, que en la actualidad se ha implantado en los países donde la educación política ha progresado, y sabe el ciudadano cómo ha de usar de sus derechos y cumplir con sus deberes. Por el contrario, allí donde la fe púnica domina, y los ciudadanos sólo aguardan la ocasión de estar en el puesto público, al frente de la fuerza confiada para salvaguardar el orden, a fin de levantarse contra el Gobierno que fió en su lealtad; entonces la institución es imposible, y no nos queda más remedio que contemplar ese malestar nacido de la desconfianza entre el gobernante y el gobernado. Entonces, el primero, se precave contra el segundo, y busca en la fuerza de línea, organizada a su placer, el recurso para mantenerse en el poder y librarse de las asechanzas de quienes viven eternamente conspirando. Cuando los partidos políticos renuncien a las malas prácticas, y reconozcan que la lealtad es la primera condición de su existencia, entonces la verdad democrática será posible. Pero, cuando, como aquí sucedía, se quería constituir una fuerza pretoriana, que, al fin y al cabo, no se organizaría debidamente, porque ni oficialidad ni dinero se tendría para ello, se desvirtuaba el principio fundamental de la institución esencialmente popular. El doctor Palomeque estaba, pues, en el buen terreno, y sus ideas las vería triunfantes, cuando, al poco tiempo, fuera enviado a Cerro Largo a administrar aquel Departamento hondamente perturbado por esa anarquía y ese caudillaje, de los cuales hablaba el doctor Vázquez Sagastume, apoyados en esa mal llamada fuerza nacional, para combatir las sanas tendencias del recto administrador público. De aquí que el orador terminaba su peroración declarando que «el jefe militar al frente de la Guardia nacional es muy peligroso, trae muchísima inquietud» (1).

(1) Sesión del 21 de abril de 1858.

RÉPLICA DE VÁZQUEZ SAGASTUME

Como era natural, estas manifestaciones causaron impresión en el ánimo del doctor Vázquez Sagastume, quien no se había «figurado se vería en la ingrata necesidad de disentir en opiniones con el señor diputado por Tacuarembó, cuyos juicios mucho respetaba, porque tenía la conciencia de que eran la emanación del mejor deseo por el amor de la patria» (1).

Esto venía de la distinta manera de considerar el problema. El doctor Sagastume veía en la Guardia nacional algo permanente, formando parte de la máquina del Poder Administrador, destinada «si no para combatir la anarquía, felizmente terminada—decía,—por lo menos para garantizar la paz, tan necesaria en nuestro desventurado país». Estas palabras arrancaban aplausos en la barra, la que, maldito si entendía la cuestión. Esa anarquía, que felizmente se creía terminada, ahí estaría, sin embargo; sería el caballo de Troya dentro de la situación. La Guardia nacional no tenía que llenar la función permanente de cuidar el orden público; eso era misión de las autoridades creadas por la ley. De este error se deducía la consecuencia natural, incrustada en el proyecto, llegando su autor hasta decirnos que «los ciudadanos dispersos, sin un centro de acción, sin dirección, sin espíritu de cuerpo, sin esa organización militar que hace fructíferos sus servicios al país, son un elemento inútil para la defensa de la Constitución y las leyes». En su concepto, «esa era la razón por que las revoluciones se habían sucedido en el país tan frecuentemente». Creía firmemente que «organizados los cuerpos de Guardias nacionales regularmente, el país podría contar con la seguridad de que la paz no había de ser perturbada, de que la Constitución y las leyes no serían atacadas ni violadas, que las garantías y los derechos del pueblo y de los ciudadanos habían de ser un hecho».

Aquí se veía bien el distinto concepto que cada uno de los oradores tenía de la institución. El uno, daba a la Guardia nacional la misión permanente de guardián del orden público; y el otro, la consideraba como el ciudadano que, por sí, y sin necesidad del Gobierno, se adiestra en el arma que esgrimirá el día que sea necesario defender el territorio. La Guardia nacional, tal cual quería instituirse, sería un instrumento del Gobierno, figurando en ella solamente aquellos que voluntaria o forzosamente le sirvieran. Sería una agrupación de partido. A tal punto lo era así, que no se reconocía el derecho de tener y llevar las armas, de poseerlas cada uno en su hogar, para salir, en el momento oportuno, a defender la libertad atacada en uno de los habi-

(1) El doctor Sagastume abusaba demasiado de la expresión *patria*, por lo que se le llamaba: ¡Viva la Patria!

tantes del país. Las armas las tendría (si es que las tendría) el Gobierno para cuando él llamara a los ciudadanos a hacer ejercicios, ¡bajo la dirección de jefes y oficiales, no ya desconocidos, sino impuestos, carentes de conocimientos en el arte de la milicia, sin urbanidad y de antecedentes negros! Y, cuando los sucesos se produjeran, no se vería a *todos* los ciudadanos defendiendo al Gobierno, sino divididos, con sus trapos ensangrentados, como divisas de esa patria anarquizada, víctima del caudillaje imperante en uno y otro lado. Por lo demás, el doctor Sagastume llegaba hasta declarar que «no insistiría en el artículo—decía,—porque concibo que pueden darse razones fuertes que hagan palpitante la conveniencia de que los cuerpos de la Guardia nacional *sean mandados por ciudadanos de la plena confianza del Gobierno*; por consiguiente, no contestaré a ese cargo del señor Representante». El doctor Sagastume, hombre de gran corazón, tuvo una palabra de justicia para el doctor Palomeque, cuando declaraba que «esa juventud que se educa en la Universidad y por la que tanto hace (me complace en reconocerlo) el señor diputado por Tlaxuarembó...»

LOS ESTUDIANTES

Cuando el doctor Palomeque volvió a usar de la palabra, se ocupó de los estudiantes, haciendo presente que eran tan pocos que apenas alcanzarían al número de veinte, que, «a la vuelta de seis u ocho años, podrían ser más útiles que sabiendo hacer ejercicio; que el país nunca se había perdido por falta del estudiante, y que debido a su protección la República tenía un número capaz de llenar los puestos públicos». Sostenía que necesitábamos más. «Los estudiantes—decía,—cuando esta tierra pasaba por una guerra de venganza; cuando, por desgracia, nos bayoneteábamos a veinte cuadras de donde estamos en este momento; cuando las bombas cruzaban por encima de los edificios, el profesor y el estudiante estaban firmes en su aula; nunca fueron incomodados, nunca fueron obligados a hacer un ejercicio. Si esto se puede hacer en la guerra, si esta necesidad se reconocía entonces, ¿cómo no se ha de reconocer en plena paz?»

Esto arrancaba aplausos en la barra, por lo que el presidente de la Cámara manifestaba que, si ella no se abstenía, haría cumplir el Reglamento.

Luego, hacía resaltar la inconsecuencia y error de obligar al estudiante al ejercicio, pero excepcionando al catedrático. «¿Para qué sirve el catedrático sin los discípulos?—preguntaba, en medio de aplausos.—¡O todos, o ninguno!», exclamaba en seguida.

Pero no se detenía aquí, pues recordaba que era algo inconcebible obligar a los jueces de lo civil y del crimen a prestar ese servicio. Si ese juez no va, decía, irá el sargento de su compañía a arrancarle de su casa o del juzgado, y tendremos un escándalo. Por eso sostenía

que era mejor no exponerse a producir conflictos, dando el escándalo de verse, como se había visto, «asaltada la Universidad, en esos días, por un sargento de Guardias nacionales y arrancado a un profesor de su puesto». Con este motivo decía que «por cierto eso no es obra del comandante, ni de ninguno de sus oficiales : es la obra de la falta de educar al pueblo. Y por ahí es por donde debemos empezar, para que tengamos buena Guardia nacional, para que tengamos buenos ciudadanos, y para que las leyes sean cumplidas».

El hecho denunciado era una demostración elocuente del concepto que se tenía formado de la institución popular. Se la consideraba obligatoria y como un ejército de línea, y no voluntaria, para el aprendizaje del manejo del arma, en uso del derecho de todo ciudadano de tenerla en su casa y llevarla en los momentos necesarios. Tenía, pues, perfecta razón cuando hablaba de la necesidad de educar al pueblo para tener buena Guardia nacional. Aquel sargento que había atropellado el recinto universitario y arrancado al profesor de su puesto, no era, seguramente, un ciudadano, un trabajador, sino un soldado de línea, con carácter permanente, que vivía dependiendo de la consigna militar. ¡ De ahí que no entendiera sino la pasividad de obedecer ! Y se procedía así, porque, como iba a decirnoslo, con toda ligereza, el distinguido señor don Juan José de Herrera, se estaba sobre el volcán, en una época de guerra, necesitándose «soldados» para mantener el orden y la paz amenazados. No se buscaba lo que aquella institución era en sí, sino un verdadero soldado, designado con el nombre de Guardia nacional !

HACER SOLDADOS

En efecto, apenas había concluido de hablar el doctor Palomeque, cuando, con todo aplomo, expuso el doctor Herrera que «esas razones serían muy atendibles si estuviéramos legislando para tiempos ordinarios, si nos encontrásemos en tiempos normales, en que no se considerase necesario que cada ciudadano hiciese un sacrificio para mantener el orden que hoy gozamos».

Este era el modo de pensar de esos hombres : vivían viendo asechanzas por todos lados. A cada rato gritaban : ¡ al lobo ! ¡ al lobo ! asustando a la gente trabajadora, hasta producir el hecho brutal. Así convulsionaban ellos mismos el país, deteniendo su vida comercial al llamar a las armas a los buenos y laboriosos habitantes. En su consecuencia, querían militarizarlo todo, desconfiando de sus vecinos, hasta entrar en caminos vedados con el Paraguay. En su obsesión de espíritu no veían todo el mal que hacían al país, cuando debían dejar a los ciudadanos entregados a su labor. Era este erróneo y perjudicial criterio el que les conducía hasta declarar que era «necesario vigorizar la institución de la Guardia nacional, única garantía que tenía el país de

orden y de paz», por no ser posible «salir por un momento del terreno práctico, de lo que pasa y de lo que vemos todos los días». «Era necesario, volvía a repetir el orador citado, organizar rigurosamente la Guardia nacional.» Querían que esos ciudadanos «contribuyesen como todos los demás a aumentar las filas de los sostenedores del orden, que son los *sostenedores del Gobierno*». «La ley de Guardias nacionales—decía entusiasmado el orador—pretende atraer alrededor del Gobierno *al mayor número de soldados posible*, y en ese concepto, señor presidente, ¡QUIERE HACER SOLDADOS!»

No se sale aún, a pesar del tiempo transcurrido, del estupor que causaron estas palabras, reveladoras de la falta absoluta de criterio político, en aquellos hombres que veían en la *fuerza bruta* el remedio a los males, con olvido de que estaba en la moral del Gobierno atraerse la opinión pública para poder administrar sin temor. Ahí estaba revelado lo que se quería: hacer soldados para sostener al Gobierno, para que estuviesen a su alrededor. Esto era trastornarlo todo. Los ciudadanos no estaban obligados a ser soldados para colocarse alrededor del Gobierno y sostenerlo. Su misión era conocer el manejo del arma, no para sostener y rodear al gobernante, como soldado mandado, sino para saber defender sus derechos y cumplir con sus deberes en los casos necesarios. Esos casos necesarios podían ser a favor o en contra del Gobierno, o contra el invasor extranjero.

Como es natural, el doctor Palomeque se quedó sorprendido al oír tan impolíticas cuan contraproducentes declaraciones, lo que hizo asumir una actitud decidida. Él era un hombre político en toda la extensión de la palabra, dotado de carácter, esa fuerza sobresaliente en el hombre valadero, como lo sostiene Le Bon en nuestros días, cuando sienta aquel aforismo: «el hombre no se conduce con su inteligencia, pero sí con su carácter». El doctor Palomeque era un hombre de verdad, de moral, esa que contribuye a la formación del carácter. No podía, como factor principal de la situación política nacida el 1.º de marzo de 1856, y muy al cabo de los secretos del Gobierno, permitir que en pleno Parlamento se hicieran declaraciones que perjudicaban la marcha administrativa. «Esto hace pensar—dijo inmediatamente—que el país estuviese amenazado de alguna conmoción interior o exterior; pero yo, señor presidente, que estoy tan tranquilo de que nadie nos amenaza, de que nadie nos viene a invadir ni a hacer revolución, he considerado que estamos en una época normal a ese respecto. De otro modo, habríamos visto dónde está el peligro. Yo no lo veo. Estamos legislando en una época normal».

Todo esto era contundente. Nadie pensaba en revueltas, pues la que desgraciadamente se había ahogado en sangre en Quinteros había enseñado algo por el momento. El partido de los revoltosos había quedado decapitado. Lo que había era que los nuevos elementos venidos a la escena pensaban en vinculaciones condenables con persona-

lidades argentinas. Olvidaban la guerra de los nueve años, y aun persistían en aproximarse a los partidos militantes en la otra orilla. ¡Creían en Urquiza, en los federales; mientras odiaban a Mitre, los unitarios! De aquí aquellas estupendas palabras del entusiasta Sagastume contra los hombres de Buenos Aires. Buscaban complicar al gobernante de 1856 en una política que sería fatal para la nación, o para el partido que la sostendría desgraciadamente, viendo visiones por todas partes, hasta llegar a cometer el mayor de los errores internacionales, y así precipitar su caída.

Iba a entrarse a una encrucijada en donde el enemigo se sentiría alarmado. Era un hombre solo quien se batía, sabiendo, desde un principio, que el proyecto se sancionaría tal cual estaba. Luchaba «sin miedo y sin esperanza». Pero, ese hombre sólo iba a salvar su conciencia, y a dejar exhibida, en las páginas de la historia, la tendencia característica del proyecto, y su inutilidad en la práctica, en el instante supremo de peligrar las libertades. Entonces se demostraría que no existía la tal Guardia nacional, sino un núcleo de *soldados alrededor del Gobierno!*, dirigidos por caudillos encelados, mezclados en la política, aspirantes a la primera magistratura, sin conocimientos militares para organizar una campaña y defender, en los campos de batalla, el principio de autoridad constitucional.

Había llegado el momento álgido de toda discusión parlamentaria, en especial cuando es mantenida por uno contra todos, y ese uno tiene de su parte toda la razón. Los ánimos habían empezado a calentarse, sobre todo después de las declaraciones impolíticas que acababan de hacerse, y que no podían admitirse en el interés del propio país. Era nada menos que un diputado gubernista quien se encargaba de sembrar la duda sobre la paz del territorio, lo que de ningún modo podía convenir al comercio de la nación. Después de aquella rectificación terminante, hecha en beneficio de la sociedad, el doctor Palomeque, ya algo nervioso con lo que sucedía, al ver la falta de sabiduría en aquellos hombres que, por casualidad, y hasta por la inhabilidad de sus adversarios, habían llegado a apoderarse del Cuerpo Legislativo, tuvo un arranque final, y dijo: «Estamos legislando en una época normal; pero, se dice que se quiere traer alrededor del Gobierno soldados para conservar la paz y las instituciones, porque primro es la paz. ¡Es verdad! Pero, señor, ¿es la Guardia nacional la que va a conservar la paz? ¿Quién hizo la revolución de Agosto? ¡Los hombres de la Guardia nacional!»

¡Y aquí fué Troya! Aplausos y signos de desaprobación en la barra. El presidente se apresuró a declarar que se haría cumplir el reglamento. El doctor Palomeque levantaba la voz, a fin de hacerse oír en medio de aquel vocinglerío, diciendo que «no había cuidado, que no era la primera vez», para continuar, con toda serenidad, y decir: «¿Quién hizo la revolución de Noviembre? ¡Los soldados de la Guar-

dia nacional! Esto no es una regla general, porque hay excepciones. Yo no he dicho la Guardia nacional, ¡no! he dicho: los soldados de la Guardia nacional. Y, ¿quién sabe si con la mejor intención, en lugar de armar amigos, viene a armarse enemigos para que nos hagan una revolución?»

¡Y aquí volvió a ser Troya!

«No me altero: no hay cuidado, señor presidente», exclamaba el orador con su voz potente, al escuchar el tono solemne e indignado del doctor don Juan José de Herrera, no acostumbrado éste a contemplar estas mareas de la muchedumbre, quien reclamaba se hiciera despejar la barra. A ello respondía incontinenti el diputado por Tacuarembó, hombre ducho en estos entreveros democráticos: «No, señor presidente. ¡Pobre barra! ¿Para qué? ¡Déjela que se divierta!»

Era un ciudadano conocedor de esos desbordes, que sabía muy bien que la onda popular se apaciguaba por sí misma, sin necesidad de contrariarla. Pero, no eran así sus adversarios, educados en la escuela de la obediencia pasiva y de la fuerza militar, que desconocían el poder de las asambleas del pueblo. Eran seres que celebraban sus reuniones políticas, a puerta cerrada, con toda solemnidad, sin rugido de tempestad cívica, y que cuando salían a la calle pública, en corporación, a ejercitar sus derechos, lo hacían con toda gravedad, de frac y guante blanco, sin vivas, yendo solemnes por las veredas como en festividad monástica. No conocían el encanto de los movimientos del alma de la tierra baja. Por eso, cuando ésta estalló en bravos y reprobaciones, no alteró en nada el espíritu del doctor Palomeque. Pero, aquellos que habían vivido en otra atmósfera, a lo menos en los últimos tiempos, se apresuraron, por la acción del *leader* de la mayoría parlamentaria, a venir en ayuda del orador, como si hubiese un peligro y éste no se bastara y sobrara para defenderse.

«Pido la palabra—decía el doctor Juanicó—para solicitar que se haga efectiva y perfecta la libertad del voto y de la liberación.»

¡Nunca lo hubiera dicho el doctor Juanicó, pues el doctor Palomeque, como si hubiera sentido que un áspid lo picara, se levantó, enérgico, pero sereno, como lo revela su frase, y exclamó, con una voz que impuso a todos, a Cámara y barra: «A mí, nadie me quita mi libertad; no, señor, no me la quita nadie. Ya he dado algunas pruebas de eso. No es la primera vez. Unas en otra época, otras en ésta; porque así es el mundo, se cambia.»

Aplacada la tormenta, por obra de la actitud del orador, sin necesidad de despejarse esa *pobre barra*, que él quería *se divirtiera*, continuó hablando incontinenti, sin más trámite, a lo fray Luis de León, en esta forma: «Decía, señor presidente, que la Comisión Militar, con la mejor intención, tal vez, nos va a armar hombres, y poner alrededor del Gobierno, en lugar de amigos, enemigos; y entonces, ¿habríamos arribado al objeto deseado? De ningún modo. Cuando quisiésemos acor-

dar, en lo más tranquilo y sosegado del cuartel tendríamos un sacudimiento, una revolución, bayoneteándonos por las calles».

No creía que la principal razón, la fundamental del proyecto, fuera la alegada por el doctor Herrera. Él sostenía, de acuerdo con el miembro informante de la Comisión Militar, que la verdadera razón era la de «popularizar el prestigio de la Guardia nacional». «Esa es la principal intención de la Comisión», decía, para que no se echen en olvido los deberes del ciudadano ; pero no es, a mi modo de ver, para *traer soldados alrededor del Gobierno*. El Gobierno tiene todo el país, no necesita hoy de soldados. Es preciso que el Cuerpo Legislativo se ocupe de dar leyes sabias, equitativas y morales, para reconstruir nuestra sociedad. Eso es preciso ; leyes que protejan el trabajo, la industria y el comercio ; leyes que den franquicias a nuestro comercio ; leyes liberales, eso necesita el país. No necesita soldados, y mucho menos soldados cuando se dice que van a estorbar (1). De cierto, señor presidente, que esos estudiantes no han estorbado en diciembre : han estado en la vanguardia...

Y aquí la voz del orador era apagada por los aplausos y murmullos de la barra, mientras se le oía todavía aquello de «ni fué necesario irlos a buscar a sus casas», pues «creía que cuando llegaba el peligro, no había necesidad de leyes para compeler al ciudadano : todo el mundo iba a las armas».

Y como los aplausos y murmullos recrudecieran, entonces, él, que había aplacado la pasión entusiasta de aquella barra con su actitud enérgica y serena, sin herirla, terminó con estas sencillas, prudentes y oportunas palabras : «No continúo, señor presidente. Si me silbasen, continuaría ; pero me aplauden, y callo».

Este final fué saludado con *bravos y aplausos de la barra*. Así se había atraído la simpatía de aquella masa ; así la había dominado ; así se había impuesto a la Cámara y a la presidencia, que no se resolvieron a hacer despejar el recinto.

Pero el doctor Herrera no pudo callar al oír aquellos *bravos y aplausos* que iban contra lo que él había sostenido respecto de los estudiantes, y, en medio del vacío, se atrevió a decir que pedía se observara el reglamento. «Es un escándalo esto», decía. ¡ Era que no estaba acostumbrado a oír el rugido de esa fiera del pueblo !

Nadie, desde la presidencia abajo, dijo una palabra, y el doctor Sagastume salió a la palestra, con su arrogancia oratoria, para responder, atento y cultamente, al orador que acababa de decir su última expresión en éste incidente. Sensible es que el doctor Sagastume sostu-

(1) El doctor Herrera había dicho : «Si se exceptuasen los estudiantes de la educación que es indispensable para ser guardia nacional, vendrían a ser completamente inútiles, algo más que inútiles, vendrían a estorbar en las filas cuando fuese necesaria la concurrencia general : en caso de conmoción interior o ataque exterior».

viera el error de que «la paz no se encontraba sino en los cuerpos de las Guardias nacionales».

¿Y los guardianes del orden público creados por ese Cuerpo Legislativo?

LOS SACRISTANES

Nunca falta una nota cómica en los debates parlamentarios. Aquí la hubo. Cuando se discutía el inciso 3.º del artículo 12 que decía no serían alistados «los miembros del clero», el doctor Herrera expresó que la intención de la Comisión era «exceptuar del servicio a los empleados permanentes del clero, es decir, los clérigos, los sacerdotes, y también entrar en la excepción los sacristanes permanentes». Con este motivo el señor Echenique observó que «era demasiado lata la disposición, porque no hacía mucho tiempo que con el carácter de sacristanes ha habido templo que ha tenido siete u ocho sacristanes. En la Matriz—decía—había seis o siete, en San Francisco cinco o seis, en el Cordón cuatro o cinco; en todas partes había sacristanes». Los sacristanes fueron exceptuados, lo mismo que «los miembros del clero y empleados permanentes del servicio del culto». ¡Mientras tanto, no lo eran dignísimos ciudadanos! ¡Era que el elemento dominante tenía, y tendría, sus íntimas vinculaciones con la Iglesia!

EL MAYORDOMO DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL O DE PASTORES

La discusión del proyecto dió margen a otras cuestiones. Una de ellas fué la referente a exceptuar del servicio al principal mayordomo o capataz de establecimientos industriales o de pastores, cuyo capital excediera de 4,000 pesos, sin incluir el valor del suelo.

El doctor Palomeque abogó por el proletariado, pues no comprendía esa excepción que favorecía al rico. Sostenía, y con mucho fundamento, que todos los capataces de establecimientos debieran estar exceptuados. Con ese motivo, trató de paso la cuestión de los latifundios. «Es evidente—decía—que el pobre, el capital más pequeño, es el que más se expone en la campaña, y que esa distribución de capitales en fracciones pequeñas viene a dar más resultado que tres, cuatro o cinco capitales fuertes, y eso es lo que establece la riqueza pública. El artículo obedece al feudalismo; que quien tiene cincuenta leguas de campo no deje poblar a nadie allí. Eso es lo malo que hay en el país. ¡Ojalá estuviese el territorio dividido en leguas, nada más!»

En su deseo de servir esas ideas, llegaba hasta sostener que mejor sería establecer que «los estancieros que tengan capital por menos de 4,000 pesos, están exceptuados de la Guardia nacional». «Entonces, sí—decía,—tendría la ley algo de equitativa, porque tendería a proteger al desgraciado; pero favorecer al opulento, al rico, y poner una

carga al pobre, no conviene al país, y no conviene tampoco al honor de la octava legislatura.» (1).

Sus esfuerzos no fueron coronados con el éxito, y la ley sobre la Guardia nacional fué sancionada.

ACTITUD IMPOLÍTICA

El doctor Palomeque, ya sabemos por qué, no concurrió a la Cámara desde el 23 de abril hasta el 1.º de junio de 1858. Durante su ausencia se sancionaron las leyes referentes al papel sellado, aprobación de los actos de la Comisión Permanente, determinación de la cantidad de cobre que podían entregarse en los pagos, administración de justicia, arrendamiento y desalojo de fincas urbanas, y prórroga por ocho años de los beneficios acordados por la ley de junio de 1853 sobre inmigración.

Mientras tanto, aquella impolítica de que se ha hablado al estudiar el proyecto de la Guardia nacional, resaltaba en el informe que la Comisión Militar presentaba sobre la aprobación de la Memoria del ministerio de la Guerra. Allí se leía ser «altamente satisfactorio ver consignados en la Memoria los servicios prestados a la patria por los valientes cuerpos de la guarnición de Montevideo, las tropas de campaña y el ejército que tuvo la gloria de anonadar a la anarquía en los campos de Quinteros. Salvada la República de las calamidades que sus malos hijos, en unión con un Gobierno extranjero desleal, le deparaban; salvada por el decidido esfuerzo de los buenos que corrieron con entusiasmo a sacrificar sus vidas para salvar LA VIDA y el honor nacional, es un deber para todos el tributar homenaje y reconocimiento a los invencibles soldados de la ley, entre los que se señala el coronel don Andrés Gómez, a quien cupo el honor de desempeñar la cartera de la Guerra en los momentos de peligro (2).

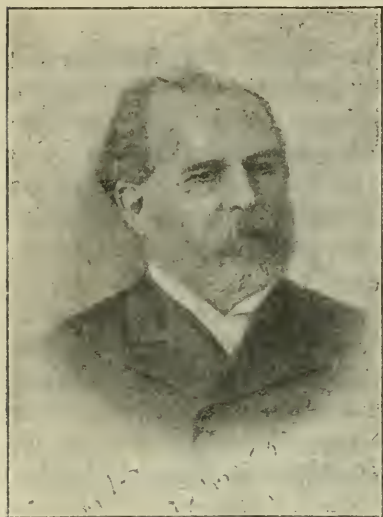
La redacción de este documento era pésima, en el fondo y en la forma. Era exagerado aquello de *invencibles* soldados. Estaba escrito con saña. No era digno de un Parlamento. Era a todas luces impolítico, a la vez que falso. Impolítico, porque se atacaba a un Gobierno vecino, que ninguna participación, como tal Gobierno, había tenido en la revuelta del general César Díaz. Falso, porque era una exageración decir que había habido gloria en vencer a un enemigo que carecía de elementos para contrarrestar la acción del Gobierno constitucional. La revuelta estaba anonadada de por sí, como una prueba elocuente de la opinión del Gobierno, pues nadie se adhirió a semejante movimiento. Insistir, en un documento que debiera ser serio, en aquello de «anona-

(1) Sesión del 22 de abril de 1858.

(2) La Comisión la formaban los señores Juan José de Herrera, Jaime Illa y Viamont, Francisco Lecocq y Rafael Fernández Echenique. Sesión del 26 de marzo de 1858.

dar la anarquía», bueno para decirlo en esos días caliginosos, y en medio de la multitud vocinglera, cuando la pasión no reflexiona, era dar una prueba de irreflexión política. Era grosero ese verbo *anonadar*. Por lo demás, la anarquía estaría dentro y fuera, como la hidra. Se veía la manera precipitada y ardiente con que se había procedido al con-

feccionar ese desdichado papel. No había tranquilidad en el espíritu de su redactor. Se abusaba del verbo *salvar* y de la expresión *vida*. Aquella República *salvada* de las calamidades, *salvada* por los buenos, sacrificando sus *vidas*, para *salvar* asimismo la *vida* nacional, ¡es un colmo! Su autor, el doctor don Juan José de Herrera, miembro informante de la Comisión, no podía conservar la serenidad debida, porque a cada momento se le presentaría la sombra de aquel deudo, para él querido, muerto en Cagancha! Así se explican sus actitudes impolíticas, su ataque al Gobierno vecino, sus expresiones fuertes, y hasta la pésima redacción del documento. Este era el



JOSÉ VÁZQUEZ SAGASTUME

sedimento con que se elaboraría la nueva política del futuro, cuyos frutos desgraciados ya conoceremos. El odio nada bueno podía engendrar.

PREÁMBULO DE UN GRAN DEBATE

EL BANCO COMERCIAL Y OTROS

Un debate importante fué el del Banco Comercial. Los señores Duplessis, Sáenz de Zumarán, Tomkinson, Cruzet y Fernández, Navia, Lafone y Cibils se habían presentado pidiendo se convirtiera la Sociedad de Cambios y Banco Comercial en otra anónima y con el mismo título de Banco Comercial. La Comisión de Hacienda se había expedido favorablemente, hallando conformes los estatutos presentados (1).

A la discusión de este asunto concurrió el señor ministro de Hacienda, don Federico Nin Reyes, ciudadano que tenía amor por la ciencia económica. Sostuvo la sana doctrina de que convenía se dictara una ley general sobre Bancos, en vez de estar cada día estudiando estatutos de empresas particulares. De esa tesis participó el doctor Palomeque, como asimismo el ilustrado doctor Arrascaeta, quien, durante el largo debate sostenido, al entrarse al fondo de la cuestión, pronunció un profundo discurso sobre la materia.

Recién empezaba el país a estudiar estos tópicos. La gente no había tenido tiempo para ocuparse de ellos, consagrada, como había estado, a matarse en las encrucijadas campesinas y urbanas. Esa discusión era una exposición de ideas, que, con el tiempo, serviría para que las futuras generaciones las utilizaran, dictando la ley general sobre Bancos que rige actualmente. Se estaba en el comienzo de nuestra vida institucional. Hasta entonces nada estable se había construido, pues las guerras fratricidas todo lo arrasaban. Recién podía decirse que el país empezaba a desarrollar sus fuerzas. Por eso salían a bailar los capitales, y los legisladores se iniciaban en las cuestiones bancarias, discutiendo la importancia de una sociedad anónima, su duración, su capital, su emisión, etc., que de todo eso se trató en el debate de la conversión del Banco de Cambios y Banco Comercial, de sociedad en comandita, que lo era, en sociedad esencialmente anónima. Tocaba a la octava legislatura de 1858 el honor de tales iniciativas. Ella dejaría dos sanas y nobles empresas comerciales, adheridas al progreso del país: el Banco Mauá y el Banco Comercial. El primero sería un verdadero factor moral en el movimiento gubernativo, para ser sacrificado más tarde en aras del sentimiento partidario; mientras el segundo se mantendría en medio de todas las convulsiones, operando de una manera cuidadosa, sin comprometer su posición.

(1) La Comisión estaba compuesta de Errazquin, Lerena, Alvarez, Fernández Fistera, Victorica, Lapuente y Lapido. Sesión del 4 de junio de 1858.

De igual índole era el Banco instituido en el Salto con la denominación de Sociedad de Cambios. Respondiendo a la evolución que se operaba, bajo la égida de la paz y de la honradez administrativa, también aquél aspiraba a dar mayor amplitud a sus operaciones. Al efecto, autorizaba al señor Leandro Gómez, ciudadano que reunía a sus cualidades bélicas, espíritu comercial, para que obtuviera del Cuerpo Legislativo el permiso necesario para dar nuevo empuje a sus operaciones (1).

LA BANCARROTA DEL GOBIERNO

La confianza pública renacía. A ello contribuía la indiscutible honradez del presidente de la República, secundado por hombres de sus mismas condiciones. La aspiración de todos era sacar al país de la triste situación por la que atravesaba. Esa tendencia se ponía muy de manifiesto en la moción del señor don Estanislao Camino para que se dirigiera una Minuta de Comunicación al Poder Ejecutivo a fin de suspender la venta de tierras públicas, que, a estar al rumor público, se iba a efectuar a ínfimo precio.

Era tal el sentimiento de honradez dominante en el Gobierno, que, apenas se conoció aquella moción, el ministro de Hacienda se apresuró a declarar, en el Parlamento, que el hecho no existía, no quedando más que la inconveniencia de una censura anticipada a los actos del Gobierno. El ministro se apresuró a dar los conocimientos del caso, para impedir se «aumentara el descrédito—decía—que pesa ya sobre la administración. El Gobierno conoce todo lo que vale hoy la propiedad pública, conoce las leyes que prohíben la venta de esas propiedades, y está trabajando para hacer la inscripción de esas propiedades perdidas, porque ni rastros han quedado». El Gobierno había detenido todos los expedientes sobre transacciones de esas propiedades, porque los libros que podían dar algún conocimiento sobre ellas habían desaparecido. Estaba tratando de establecer el orden, de establecer un método para llegar a conocer la propiedad pública, para persuadirse de lo que existía. «Por consiguiente—decía el señor Nin Reyes,—no es el Gobierno el que iría a lanzar mayor desorden del que existe sobre eso. Las ventas, además, no pueden hacerse sin autorizarlas el presidente de la República, y el presidente de la República, al saber hoy el espíritu de la moción de anoche, no ha podido menos que afectarse, porque todos los actos de su administración están sellados con la más elevada moralidad, y no podría consentir que pasase esa moción los trámites ordinarios de las demás mociones, que pasase a una comisión

(1) Sesión del 14 de mayo de 1858.

y se le diese publicidad, ¡recibiendo así un voto de censura anticipado!» (1).

Estas palabras del señor ministro fueron recibidas con *apoyados* en la Cámara, y con *bravos y aplausos* en la barra. Por lo demás, discutida, en su oportunidad, la Minuta de Comunicación presentada por el señor Camino, fué unánimemente rechazada, hasta con el beneplácito de su propio autor, después de conocidos todos los antecedentes presentados por el Gobierno. La honradez administrativa se imponía (2). En el debate respectivo tomaron parte los señores Lapido, Camino, el ministro de Hacienda, Errazquin, Arrascaeta, Juanicó, Palomeque, Fuentes y Caravia, hablando, unos, sobre el punto, y otros, sobre el procedimiento a seguirse en la discusión. El señor ministro Nin Reyes, al ocuparse de un detalle del asunto, relativo a haber ido el señor Camino a recorrer las oficinas en busca de datos, exageró el hecho, pues el señor diputado procedía dentro de sus facultades, y entusiasmado decía: «Eso es mucho más que el deseo de hacer el bien. Eso es producir un escándalo; ¡en qué momentos, señor presidente! En los momentos en que todos nos consagramos a salvar el crédito de este pobre país, en que todos quisiéramos verlo levantarse del lodo en que está sumido. Vienen a arrojarle ese descrédito, y ¿por qué? ¡Por los actos que tienden a elevarlo!»

Todo esto era apoyado por la Cámara, porque, en verdad, era indiscutible la honradez de la administración pública, como asimismo las dificultades financieras. Estas aparecían al desnudo en el Mensaje que el Poder Ejecutivo enviaba a la Asamblea General referente a la confección y presentación del Presupuesto General de Gastos. No podía pedirse nada más desastroso, obra todo ello exclusivamente de las pasiones de aquellos hombres, incansables en la tarea de manejar la chuz, la lanza, el sable y el fusil viejo para con ello hundir la nacionalidad naciente. El aprendizaje de ese pueblo no fué el de la democracia práctica, como debió serlo, dados los progresos operados en la humanidad, al venir él al mundo político, sino el del espíritu guerrero. Derramó la sangre hasta el cansancio, en vez de gastar la tinta, el pensamiento, la palabra, la acción pacífica. Lo que se veía era la consecuencia de tantos extravíos y errores de unos y otros.

El Poder Ejecutivo trazaba el cuadro triste de aquella situación, en el dicho Mensaje, firmado por sus ministros Antonio de las Carreras, Antonio Díaz y Federico Nin Reyes (3). ¡Era ella la que obligaba al Poder Ejecutivo nada menos que a pedir se le relevara del deber constitucional de presentar anualmente el Presupuesto General de Gastos! ¡A qué extremos habían llegado las cosas! En efecto, las malditas con-

(1) Sesión del 23 de abril de 1858.

(2) Sesión del 21 de mayo de 1858.

(3) Sesión del 8 de junio de 1858.

vulsiones no habían dejado tiempo para preocuparse de confeccionar el presupuesto a regir en el dicho año de 1858. Recién ahora se había empezado a prepararlo. Ya lo tenía pronto, decía el Poder Ejecutivo, pero no podía resolverse a someterlo a la sanción del Cuerpo Legislativo, «porque él no representaba su pensamiento». Y no representaba su pensamiento, porque tenía por delante la brutalidad de los hechos que allí, en el Mensaje, exhibía elocuentemente. Ese presupuesto, ya preparado, no era sino la reproducción de los anteriores, «discutidos hasta ahora—decía,—y que la experiencia ha sobradamente demostrado que, tanto la Legislatura como el Poder Ejecutivo se ocuparían de una ley que no puede tener su cumplimiento; porque no pudiendo equilibrarse los gastos que demanda la Administración General de la República con las rentas que deben sufragarlos, no puede, es absolutamente imposible, llenar los preceptos de esa ley, violación que, por otra parte, no puede pesar sobre la responsabilidad ministerial».

El Poder Ejecutivo quería una ley que pudiera cumplirse, y «salir de una rutina que sólo había ocasionado perturbaciones, causantes de esos desórdenes de que por tanto tiempo había sido víctima el país». Quería una ley de verdad, y no farisaica, que sólo existía en el papel, pero imposible en la práctica. «No podía ni debía por más tiempo—decía—someterse al imperio de una costumbre que bajo la apariencia del cumplimiento de un precepto constitucional, mina esa misma Constitución, desde que se da el ejemplo inevitable y pernicioso de una infracción de ley, de la ley más importante que anualmente ocupa a la legislatura y al Gobierno.»

La Constitución preceptuaba que el presidente debía anualmente presentar a la Asamblea General el presupuesto del año entrante, y dar cuenta invertida de la inversión hecha en el anterior. Pero, el Poder Ejecutivo se preguntaba «cómo podía presentemente llenarse a la letra ese precepto» en presencia del presupuesto vigente que requería una suma de 2.328,000 pesos, mientras los recursos se habían calculado ¡en 1.648,000! Estos no había esperanzas de que aumentaran; por el contrario, todo inducía a suponer que disminuirían. En efecto, el rendimiento del papel sellado y patentes se había calculado en 300,000 pesos, «cuando su producto disponible—decía el Poder Ejecutivo—no puede ser mayor de 114,000 pesos, por causa de las afectaciones del crédito Mauá y otros que pesaban sobre él en este año. Esa diferencia de 186,000 pesos, unida a la que resulta en los derechos departamentales de cuarenta mil pesos, vienen a adicionarse al déficit, que resulta así ser de más de 800,000 pesos, sin contar con los gastos extraordinarios ocasionados por la conservación de la paz pública, que bien notorio es ascienden a una cantidad considerable. La facultad para llenar el servicio público está, por consiguiente, limitada a la mitad de lo que es necesario. ¿Qué servicio, o qué servicios son los que deberían suprimirse? Las afectaciones que no pueden alterarse, porque

proceden de reconocimiento de créditos diplomáticos, de contratos por servicios indispensables, ascienden a un valor de más de 700,000 pesos. De manera que la cantidad disponible para llenar los demás servicios, que importan 1.628,000 pesos, es próximamente de sólo 500,000».

Era horrible, como se ve, la situación financiera. Es de admirarse el valor de aquellos hombres para permanecer en sus puestos. Asustaba el abismo a cuyo borde se hallaban. Pero, con fe en el porvenir, no desmayaban, no se arredraban. Así se decía en el Mensaje; y ello, porque el Poder Ejecutivo «quería levantar, de en medio de tantos insuperables inconvenientes, la nacionalidad oriental, que le había confiado la dirección de sus destinos: nacionalidad que quiere elevar a la altura de la mayor civilización, que haga la felicidad del pueblo de la República».

Para realizar esta «gigantesca obra», como ellos la calificaban, se necesitaba carácter, constancia, labor, sabiduría y honradez. Y aquellos hombres lo poseían. Por eso habían arrostrado los anatemas del momento y sacrificado hombres, de valer indiscutiblemente, pero extraviados. Y ahora, de acuerdo con ese levantado criterio, que los llevaría a salir de aquella espantosa situación, colocando al país en un pie de moralidad y progreso envidiables, lo que hace la honra de las dos administraciones de Pereyra y Berro, decían terminantemente que «esa gigantesca obra no puede realizarse empleando los medios gastados, desacreditados, que sólo han servido hasta aquí para prolongar nuestra incapacidad de llenar los altos fines de toda asociación política».

El Poder Ejecutivo, para salir de los embarazos de la situación, encontraba que uno de los medios más eficaces y más apropiados a las circunstancias, era, declarar que el año financiero principiaría, desde el año 1859, en 1.º de marzo, terminando el último día de febrero del año siguiente. Con este tiempo por delante, el Poder Ejecutivo podría «presentar entonces con exactitud, antes de la apertura de las sesiones del segundo período de la octava legislatura, un presupuesto que representase la verdad, si se le facultaba para reformar, dentro de los límites del presupuesto en ejercicio, la Administración, de una manera conforme a la facultad de llenar los gastos que ocasione, sin que se le pudiera oponer como derechos las prescripciones establecidas por ese Presupuesto».

Este era el remedio que hallaba el Poder Ejecutivo, pues, decía, «en el tiempo que queda de sesiones, Vuestra Honorabilidad sólo tendrá que ocuparse de las leyes de impuestos y tratar de aumentar los recursos actuales a una suma de 40,000 pesos mensuales, que son absolutamente indispensables para no tropezar con dificultades insuperables en la marcha que se ha trazado el Gobierno para restable-

cer el orden, afianzar las instituciones e impulsar al país un progreso sólido y permanente!»

Esta era la horripilante situación en junio de 1858. Pero, la honradez y carácter de aquellos hombres todo lo salvarían, porque todo lo arrostrarían. El cuadro pintado no era sino la consecuencia natural y forzosa de las convulsiones intestinas, que colocaban al borde del precipicio la salud de la nacionalidad. En verdad que no habían escarmentado, ni escarmentarían.

¡Qué días grises estaban reservados todavía a ese hermoso cuan desgraciado país!

La Cámara de Representantes se dió cuenta de la situación, por lo que pasó el mensaje a las comisiones de hacienda y legislación.

Estas se expidieron de conformidad con las indicaciones del Poder Ejecutivo autorizándole «para hacer en la Administración, dentro de las cifras del presupuesto actual, las reformas y reducciones que considerara necesarias, a fin de igualar los ingresos con los egresos», estando de acuerdo en un todo con el establecimiento del nuevo año económico (1).

Fué durante el debate de este asunto cuando se vió clara la tendencia hostil del círculo de Juanicó hacia el doctor Palomeque, el único hombre que constantemente les salía a la palestra para provocar cuestiones de verdadera influencia en los destinos nacionales; sin que esto quiera decir que los ciudadanos que componían la legislatura no fueran dignos, por sus cualidades, de perpetuar su memoria, y servir de ejemplo en muchas de sus enérgicas resoluciones.

El doctor Palomeque era un hombre que estaba adherido al Gobierno venido a la vida política el 1.º de marzo de 1856. Casi puede decirse que era su obra. Tenía ese egoísmo que en nosotros se despierta cuando miramos al ser a quien hemos dado la vida. De ahí que pusiera en todos sus actos entusiasmo ardiente, el que surge del amor a lo que no deseamos ver muerto. Ninguno de los hombres dirigentes sentados en aquellos escaños legislativos, se encontraba en su situación. Estos buscaban los medios para atraerse al gobernante y dominarlo, a fin de apoderarse definitivamente del poder; mientras el doctor Palomeque, que lo veía, no quería se torciera la corriente política, ni perder la influencia que había conquistado a costa de tanto esfuerzo y sacrificio. La quería conservar para contribuir al bienestar general. De ahí que pensara en cuanto medio le fuera posible para salir de la triste situación. Y uno de éstos, en este instante, fué el de acordarse de aquella deuda consolidada, que por ahí andaba maltrecha y cariacontecida. En su consecuencia, propuso que a la vez se autorizara «al Poder Ejecutivo para verificar y ejecutar todos los arreglos

(1) Sesión del 18 de junio de 1858.

que la Deuda Pública reclamara, teniendo por base levantar el crédito de la nación, conforme a las leyes de la materia».

El pensamiento fué en seguida apoyado con calor, en general, y por los señores Gómez, Echenique y Lapido, en particular; pero, como terciara el señor Errazquin observando que era «un artículo adicional, sobre el que nadie había meditado», se adoptó el incorrecto procedimiento de no tomarlo en consideración y ¡mandarlo repartir! Este era un procedimiento parlamentario lo más irregular, del cual a cada rato se había hecho uso en el proyecto del Banco Comercial, no obstante la oposición sensata y prudente de los señores Arrascaeta y Palomeque, a quienes, más de una vez, en la discusión de dicho asunto, como lo dijo el primero, y lo repitió el segundo, les pusieron una mordaza. Lo natural y lo lógico era discutir los artículos propuestos, desde que los legisladores ya conocían el fondo del asunto. El resultado era que no sólo se mandaba repartir un artículo presentado durante el debate, sino que se hacía algo más estupendo e inconcebible: continuar la discusión del proyecto hasta quererlo sancionar.

Al ver esto, el doctor Palomeque indicó la conveniencia de conocer la opinión del ministro de Hacienda allí presente, quien no tuvo inconveniente en aceptar el artículo propuesto. En su virtud, el autor de él propuso se pasara a cuarto intermedio y que la Comisión aconsejara lo que se debía hacer. Así quedaría concluida la ley esa noche,—decía,—bien aceptándose el artículo o «bien desechándose». Su moción no fué admitida, pero se consiguió la suspensión de la discusión hasta que la Comisión se expidiera en el artículo en cuestión. De esta manera se dió tiempo a que desapareciera la buena impresión del primer momento, y a que no concurriera el señor ministro de Hacienda a la otra sesión a celebrarse, donde se discutiría el artículo en cuestión. Los adversarios usaban aquí la misma táctica observada cuando alejaron al ministro de Gobierno de la discusión sobre las denuncias de tierras públicas. Eran hombres hábiles en los pequeños medios; conocían muy bien la fe púnica.

Llegado el momento, el señor Errazquin, ciudadano bien intencionado, pero estrecho de pensamiento, lleno de orgullo, cifrado en su situación de terrateniente, como lo eran, por lo general, todos los hombres del Cerrito, se expresó atacando el artículo, como ya se preveía desde que habló en la sesión anterior. Sostuvo que ese artículo contravenía el precepto constitucional que dispone ser de la competencia del Cuerpo Legislativo «contraer la deuda nacional, consolidarla, designar sus garantías, y reglamentar el crédito público». Al efecto, recordó que en la Asamblea «del 52 o 53, cuando el Poder Ejecutivo se hallaba en circunstancias casi semejantes a ésta—decía,—no se

atrevió la Cámara a concederle más que la facultad de iniciar arreglos y proponerlos a la sanción de la Cámara» (1).

El argumento era débil, por lo que al doctor Palomeque le fué fácil destruirlo. En el acto demostró cuán distintas eran las épocas y la situación. No negaba que el Cuerpo Legislativo tuviese la facultad de consolidar la deuda; pero, eso, decía, ya está hecho por la ley de 6 de julio de 1852, en virtud de la cual se vino, en 1854, a sancionar la ley de consolidación. Esta ley era la que no se cumplía, y la que había que hacer práctica en parte, cuando menos. De ahí el artículo propuesto. Lo que se estaba haciendo era engañar al pueblo, diciendo que «todos los meses tendrá diez mil pesos de amortización y un 3 % de interés». Esto fué un error del legislador. «No vamos a legislar—decía—sobre la consolidación de la Deuda, ni el modo de beneficiarla. Se está legislando hace muchísimos años, y tenemos sobre la materia seis o siete leyes.»

Y, para dar una muestra del dominio de la materia, como que era conocedor perfecto de todas las necesidades del país y de su legislación, en lo que más primordialmente le tocara, recordaba que «la primera ley sancionada por el Cuerpo Legislativo fué mandando afectar el tesoro público en garantía de la Deuda nacional. La segunda ley fué autorizando al Poder Ejecutivo para que iniciase arreglos con los acreedores, dando cuenta al Cuerpo Legislativo. La tercera ley, ¡ley fatal, funesta!, señor presidente, es la ley de reconocimiento de perjuicios. La cuarta ley es la de consolidación; y quinta y sexta las que mandan crearse el derecho de contribución directa, afecto única y exclusivamente a la amortización de la deuda pública. Si todo está hecho, y en virtud de sanciones legislativas, ¿qué tenemos que ver ahora con que compete al Cuerpo Legislativo consolidar, cuando ya lo está?»

El señor Errazquin estaba, como se ve, pisando en un terreno falso. La argumentación del adversario era formidable. Por eso, en el momento supremo, fué necesario que apareciera, como va a verse, el talentoso doctor Juanicó, para, con su olímpica actitud, cambiar la faz de la batalla. Él daría la palabra de orden, la de ultimar al enemigo, aunque se careciera de razón y se emplearan armas vedadas, a las cuales, despiadadamente, recurrese siempre, en todas las acciones de la vida, sea entre individuos aislados, o muchedumbre, o pueblos entre sí.

No se contentó el doctor Palomeque con lo expuesto. Aun hacía presente muchas consideraciones de un orden moral y legal. Declaraba que suponer que recién iba a dictarse la ley de consolidación, era hacer creer a los tenedores de la Deuda que era una mentira todo lo legislado. Por consiguiente, hacía leer los artículos 8.º y 9.º de la ley de

consolidación, para demostrar que la Deuda estaba consolidada, y afectados al pago de la amortización e intereses todas las rentas de la nación; considerándose nulas, írritas y de ningún valor las que se distrajeran de ese primordial objeto. En su consecuencia, traía a colación el artículo 9.º de dicha ley, que autorizaba al Poder Ejecutivo para que hiciera arreglos con los acreedores: «arreglos—decía—de la línea que le señala la ley, para adentro; pues si puede hacer arreglos más ventajosos que los que por la ley le señala, los haga, y que dé cuenta». Con este motivo, sostenía acertadamente, preguntando: «¿Qué otra cosa, pues, es lo que se le da al Poder Ejecutivo por el artículo que está en discusión? ¿Qué otra cosa se le dice? Arregle usted, señor, si es posible; pero dentro de las leyes de la materia, dentro de la ley de consolidación, dentro de las facultades que hoy tiene ya, y dentro de los recursos y medios que las siete leyes que he citado le han señalado. Eso es lo que quiere decir, y eso es lo que dice el artículo en cuestión. No delega en el Poder Ejecutivo para que conceda y establezca los medios y las formas como ha de pagar a los acreedores, porque eso está ya deslindado, concluído; no hay nada que hacer».

Todavía era más explícito, a fin de no dejar obscuro su pensamiento, pues decía: «Es así, pues, que hay una ley que manda amortizar o poner diez mil pesos en caja mensualmente, que manda pagar intereses; y no pudiendo hacer ni una ni otra cosa, le autorizamos para que haga lo que le sea posible hacer: si puede, bien; si no puede, no hay caso. Pero ¿cómo? Como dice el artículo: dentro de las leyes, o conforme a las leyes de la materia.»

Así, con el criterio bien formado, después de haber estudiado detenidamente el asunto, dominándolo en absoluto, sostenía, de paso, que la ley de consolidación de 1854, dictada en virtud de la que autorizó, en 14 de julio de 1853, al Poder Ejecutivo, para iniciar los arreglos, era «muy mala, muy mala». «Si mala—decía—ha sido la ley de reconocimiento de perjuicios, mala ha sido la ley de consolidación; porque, sin duda, o no se conocía el país, o no se miraba por él.»

El orador sabía con quiénes tenía que habérselas, si bien es verdad que él, como aquel lord del Parlamento inglés, no hablaba sino para el pueblo. Su actitud la conocería la posteridad, dándosele en la historia la recompensa merecida a quienes supieron cumplir con su deber. Aspiraba a dejar constancia de la causa fundamental de su resolución, con la que estaba de acuerdo el Poder Ejecutivo, según manifestación de su ministro de Hacienda, señor Nin Reyes. Por eso agotaba la materia, puesto que tenía la convicción profunda de que sería estudiada algún día esta página interesante de nuestra historia. No veía a su frente hombres que tuvieran la resolución de adoptar las ideas por él patrocinadas; si bien en seguida reaccionaba, teniendo en cuenta la bondad de ellas, y el propósito noble que lo guiaba. Era así, que declaraba que sus «palabras no debían influir en el ánimo de la Cá-

mara para nada; pero sí deben—decía—influir en el ánimo de la Cámara puesto que ha manifestado en todas ocasiones el patriotismo de ayudar al Poder Ejecutivo. Debe influir en el ánimo de ella la aceptación que de plano hace el señor ministro de Hacienda, en nombre del Poder Ejecutivo, del artículo que está en discusión. Eso explica todo, explica todo».

Luego, le daba al señor Errazquin una lanzada fuerte al exhibir su inconsecuencia, pues por un lado autorizaba al Poder Ejecutivo para hacer las reformas y reducciones que consideraba necesarias en el Presupuesto, a pesar del precepto constitucional que faculta sólo al Cuerpo Legislativo para hacer el Presupuesto y aumentar y disminuir los empleos. Sin embargo, reconocía que estas medidas se adoptaban en casos extraordinarios, a cuyo efecto recordaba la actitud de Mirabeau durante la Revolución francesa, al discutirse un proyecto de finanzas; en cuyo momento decía, parodiando a un alto personaje, que ¡todo se justifica ante la salvación de la patria!

No quería que quedara la menor duda respecto de sus intenciones. «Puede ser—decía, al terminar—que mi defensa sea mal interpretada; pero debo declarar que yo no soy comerciante; y que no tengo Deuda pública, absolutamente. Mi único interés es el crédito de la Administración del 1.º de marzo. Quiero que el Gobierno del 1.º de marzo nos saque del caos en que por desgracia otros Gobiernos nos han dejado. Eso es lo que yo quiero; eso es lo que yo deseo, porque de eso vendrá la felicidad de la patria, y de la felicidad de la patria vendrá la individual, vendrá la mía; pero con el descrédito de la nación no puede haber patria, no puede haber felicidad, no puede haber honor para ningún Gobierno.» Deseaba ardientemente se hiciera lo «posible en favor de los acreedores del Estado, en favor de los habitantes de esta tierra—decía,—que tantas veces han ayudado al país y a la patria, en favor de sus hijos que tanta sangre han derramado para conservarnos la paz de que se disfruta hoy».

Ante esta formidable arremetida, nada pudo hacer el señor Errazquin. Apenas si pronunció unas cortas frases, pretendiendo desvirtuar los términos del artículo, lo que no consiguió, porque ahí estuvo su autor para impedirlo. Viéndose perdido, sostuvo que en el artículo no se decía que el Poder Ejecutivo procediera *conforme a las leyes*. Para probarlo leía hasta cierta altura. Aquí se detenía, lo que daba motivo para que el doctor Palomeque le dijera: «*Pero concluya el señor diputado*». Y el señor Errazquin concluía leyendo aquello que allí se decía, de que el Poder Ejecutivo procedería *conforme a las leyes de la materia*. «¡Pues entonces!», exclamaba el autor del artículo. Y el señor Errazquin se batía en retirada, declarando que «por última vez hablaría sobre esa materia», limitándose a hacer leer el artículo 17 de la Constitución que faculta al Cuerpo Legislativo para contraer la Deu-

da nacional, consolidarla, designar sus garantías y reglamentar el crédito público.

El diputado por Tacuarembó no cejó. Demostró una vez más que la Deuda estaba consolidada y designadas sus garantías por el Cuerpo Legislativo, por lo que nada se delegaba en el Poder Ejecutivo, sino que se mandaba se cumplieran las leyes dictadas, en cuanto se pudiera. Insistía en que era «necesario salvar la mala situación ; porque —decía— es necesario que este país marche y venga al centro de la moralidad, al centro de sus recursos y su engrandecimiento ; porque es necesario no vivir más en el caos en que vive, engañando al pueblo, viviendo aquí con un presupuesto de dos millones de pesos, cuando nuestras rentas no dan más de un millón ; designando a un empleado trescientos pesos de sueldo y no darle sino veinticinco. Eso es engañar al pueblo, y a evitar eso es a lo que yo tiendo».

La Deuda estaba naturalmente por el suelo. Se vendía el ciento de ella a cuatro reales. No era posible cumplir con las leyes. Si se cumplían, esa Deuda se absorbía mensualmente 35,000 pesos. Y el presupuesto era de ¡ 45,000 pesos mensuales ! para pagar empleados. Quedaban sólo diez mil pesos. ¿De dónde se sacaban los 35,000 que se llevaba la Deuda? De ahí que no se cumplieran las leyes que garantían su pago. El doctor Palomeque no se obstinaba. Lamentaba que el señor Errazquin no presentara una modificación regular, razonable, al artículo, que el autor de él no estaba distante de aceptarlo. Por lo demás, se atenía a lo que la Cámara creyera conveniente, mocionando para que se cerrara el debate ; a lo que, con razón, no se hizo lugar, porque había diputado que, como el doctor Juanicó, aun no había hablado.

En este momento aparece el señor Fuentes haciendo lo que había el doctor Palomeque indicado al señor Errazquin, es decir, proponiendo algo que los condujera al propósito perseguido de valorizar la Deuda despreciada. No era posible cruzarse de brazos ante la enormidad del suceso. En efecto, el señor Fuentes, que apoyaba el pensamiento, creía que se daba «mucho latitud y que habría una especie de delegación de facultades que únicamente competiría al Cuerpo Legislativo». «Así es que —decía,—tratando de salvar ese inconveniente, presento una modificación al artículo que está en discusión.» En su consecuencia, dictó lo siguiente : «Se autoriza también al Poder Ejecutivo para hacer el arreglo general que juzgue conveniente de la Deuda Pública, sometiéndolo a la aprobación del Cuerpo Legislativo».

Por su parte, el diputado Gómez apoyaba el artículo tal cual lo había presentado el doctor Palomeque.

LA IRONÍA DE JUANICÓ

Y así las cosas, ocupó la escena parlamentaria el doctor Juanicó, quien iba de nuevo a exhibir su olímpica figura, a pronunciar una pieza hermosa, y hasta usar de la ironía en su lucha constante con el doctor Palomeque; todo lo cual no sería bastante a hacerle perder a éste su serenidad de juicio. Iba a encontrarse una vez más frente al coloso de la palabra y del pensamiento, del hábil dialéctico, del *leader* que contaba de antemano con la derrota de su adversario.

El doctor Juanicó adoptó su carácter de maestro, de hombre superior, como si previera que este debate, aparentemente incidental, fuera a ser histórico, y a tener una trascendencia importante. Por esta razón es que nos ocupamos detenidamente de él, por ser como va a verse, los prolegómenos del arreglo de la Deuda Pública durante la administración Pereyra, hecho fecundo en las páginas de la historia nacional, al cual, para su honra, está vinculada la personalidad del doctor Palomeque.

El doctor Juanicó, con ese estilo declamatorio que lo caracterizaba, comenzó declarando que la materia era «*desgraciadamente*» profunda, asunto para muchas reflexiones, mucho estudio y muchos trastornos para la pobre tierra».

«¡Tamaña verdad!», exclamaba, siguiendo su sistema de hablar.

Estaba de acuerdo con el doctor Palomeque en que las leyes dictadas habían sido precipitadas.

Y volvía a exclamar olímpicamente: «¡Cuidado con que caigamos de nuevo en la precipitación sobre materias semejantes!»

Sus oyentes, a quienes dominaba, le daban sendos *apoyados*, como si estuviera discutiendo el asunto de la Deuda Pública; lo que motivaba una nueva exclamación: «¡Cuidado con la precipitación!», lo que era nuevamente *apoyado*.

De esa precipitación había nacido, para él, la enorme deuda que pesaba «indebidamente sobre el Estado; la miseria de tantas familias y las especulaciones, que habían venido a ocupar el lugar de los créditos reales, legítimos, verdaderos contra el Estado, y el hallarse en un verdadero laberinto».

En lo dicho había algo de fantasía y palabreo. No era de la precipitación solamente de donde había resultado todo eso, sino de la vida escandalosa que políticamente se había llevado, teniendo al país en una revuelta constante. Por lo demás, era impertinente todo ello, porque aquí no se trataba de legislar sobre la Deuda Pública, sino de llamar la atención del Poder Ejecutivo para que hiciera los arreglos que pudiera, de acuerdo con las leyes promulgadas.

Luego, con todo aquel talento en él notorio, sostenía que no existía la consolidación de la Deuda, porque la ley no se cumplía. «La Deuda—decía—está y no está consolidada. Hay una ley que se llama de consolidación. Es una palabra vacía... (y esto era apoyado). Es un abuso inmenso de las palabras. Ha sido una de nuestras fatalidades. Una ley consolidada, es una ley obligada, exigida. Una Deuda obligada, exigida, es garantida, y garantida significa con los medios adecuados para responder a la efectividad del pago, el que por la ley se reconoce deber. ¡La *efectividad*! y no una generalidad, como la de decir : ¡nuestras rentas! El Estado no puede tocar a ellas. *Consolidación*, no hay ; sin embargo de que hay una ley que tiene esa palabra : *consolidación*. Deuda consolidada es aquella en que estando reconocido, después de la debida liquidación, el monto de la Deuda, a los títulos de ella se le afectan rentas especiales que no pueden ser destinadas a otro objeto ; y mientras esta consolidación recíproca no exista, mientras no existan los fondos que deben responder a esos créditos, la consolidación está en la palabra, no está en la realidad : es una falsedad.»

Todo esto era un sofisma. La Deuda estaba liquidaba. Después de liquidada se consolidó, afectando diversas garantías, que ahí estaban, pero de las cuales disponía el deudor, para vivir, pagando sus empleados. No por eso dejaba de ser consolidada, liquidada. Es como si se sostuviera que una deuda afianzada deja de ser tal porque la garantía es insolvente o no alcanza a pagarse la hipoteca. Podrá no hacerse efectiva una fianza, pero la deuda no deja de ser tal. Podría el Estado acapararse los 35,000 pesos asignados al pago de la Deuda Consolidada, cuyo carácter constaba en el título, en el bono emitido por el Estado, pero esa imposibilidad de hacer efectiva la garantía, o el pago, más bien dicho, no le quitaba el carácter de consolidada. La liquidación ya estaba hecha, y en su virtud se había emitido el bono, afectando a su pago determinadas rentas. No era posible volver a liquidar y a consolidar lo que estaba liquidado y consolidado de común acuerdo entre los acreedores y el deudor. La bancarrota del deudor no le quitaba a la deuda su carácter. No podía colocarse en situación de Deuda flotante.

Y, como si se tratara aquí de un proyecto de ley sobre la Deuda Pública, volvía a repetir que no precipitaran las cosas para no caer otra vez en la misma. Llevado de su entusiasmo, decía que «el artículo propuesto significa arreglos parciales o significa un arreglo general. Arreglos parciales es lo más inmoral que puede imaginarse» (1). Y esto era apoyado. «Arreglo general, sí, que se haga. Lo deseo con el alma», continuaba diciendo. «El primero que ofreciese una verdadera solución en la cuestión de la Deuda Pública, haría el más grandioso servicio que hoy se puede prestar a este pobre país. Lo apoyaría con

(1) Ya veremos cómo se hizo, con Mauá, y de acuerdo con lo sostenido por el doctor Palomeque, siendo entonces el doctor Juanicó su entusiasta sostenedor.

toda mi alma. Que se faciliten todos los medios, sí. Que se incite el celo del Gobierno, sí. ¿Pero, que verifique y ejecute? ¡Ah! no comprendo cómo pueda hacerse sin la sanción del Cuerpo Legislativo, ni estando a la Constitución, ni a la razón general de las cosas.»

Por todo esto, apoyaba el artículo propuesto por el señor diputado Fuentes, en substitución del presentado por el doctor Palomeque.

Como era natural, el doctor Palomeque pidió la palabra para rebatir el discurso del doctor Juanicó. Si antes consiguiera batir al señor Errazquin, ahora iba a hacer otro tanto con el doctor Juanicó, aunque por el momento no le acompañara el éxito material. Más tarde, lo obtendría, siendo su aliado el mismo Juanicó. Sostuvo que su adversario no había tenido más que palabras elocuentes, haciendo un discurso muy patriótico. Demostró que con la misma definición dada por el doctor Juanicó de lo que era consolidación, se exhibía su error. Si toda ley de esa índole tenía por base el señalamiento de rentas especiales, él decía: «¿Y negaría el señor diputado que la ley de consolidación de la República Oriental del Uruguay tuvo rentas especiales? ¿No recuerda el señor diputado que en la legislatura del año 52, votó un 5 % sobre las rentas generales para la Caja de Amortización de la Deuda General del Estado? ¿No es una renta especial ésta? ¿No recuerda el señor diputado que en nuestro código de leyes patrias existen las dos leyes sobre la Contribución Directa, aplicando única y exclusivamente esos fondos a la amortización de la Deuda?»

Con esto quedaba por el suelo cuanto olímpicamente había expuesto el doctor Juanicó. Pero, no se detuvo aquí el orador. Él también, aunque sin las grandes dotes oratorias de su adversario, tenía talento para desarrollar su pensamiento, y para comprender hasta las intenciones aviesas del contrincante. Muy atacada había sido la ley de consolidación de 1854 por el doctor Juanicó; y, como el doctor Palomeque se diera cuenta del por qué de esa atropellada, no tuvo empacho en observar que al hablarse de *precipitación*, el doctor Juanicó se había «encarado más que nada con la ley de consolidación». «Yo habría ido a otra, señor diputado—decía;—me habría fijado más que en ésta, en otra que no hay necesidad de nombrar.» ¡Con esto quería recordar que en la legislatura del 53, a la que perteneció el doctor Juanicó, se había cometido el gran error de dictar la ley de perjuicios de guerra, que era realmente la que agobiaba al país! Por lo demás, sostenía, y con razón sobrada, que no había para qué hablar de *precipitación* ni de *leyes nuevas*. «Se trata, señor presidente—decía,—de que, en la imposibilidad de cumplir las leyes vigentes, no se lleve adelante la desgracia de esas familias que el señor diputado con voz muy patriótica ha dicho que están en las puertas de la miseria. Eso es de lo que se trata, de ver si de algún modo se puede evitar que la ruina continúe, facultando al Poder Ejecutivo dentro de las leyes vigentes.» Asimismo rechazaba aquella intención que le habría atribuido de querer que



Bernardo P. Berro

el Poder Ejecutivo hiciera arreglos parciales. Esto, le decía al adversario, ha sido un recurso hábil «como para que influya en el ánimo de la Cámara». Y al oírlo, el doctor Juanicó le interrumpía, para hacer notar que «entonces estamos de acuerdo». Él continuaba, sin contestar la interrupción, sosteniendo que «todo decía el artículo menos que se hiciera un arreglo parcial; absolutamente. Que haga el Poder Ejecutivo los arreglos que reclame la Deuda Pública, conforme a las leyes de la materia, eso es lo que dice el artículo. Por consiguiente, no se trata, señor presidente, de una ley nueva, no se trata de arreglos parciales; se trata precisamente de salvar de la ruina a esas familias».

Por lo demás, el doctor Palomeque conservaba su serenidad. Era así que, a pesar de comprender que no era del momento estudiar lo fundamental del pensamiento del señor Fuentes, reconocía que era «aceptable en cuanto era posible, muy juicioso, muy atendible», pero que se diferenciaba del suyo en que él quería se *hiciera algo en el día por la Deuda*, sin entrar a hacer nuevas leyes, con las leyes que tenemos, mientras que, según el criterio del señor Fuentes, los acreedores tendrían que esperar al período que venía».

Fué al llegar al final de esta exposición del doctor Palomeque, que el doctor Juanicó usó de la ironía, sin que el doctor Palomeque le diera una respuesta. Sin duda el gran orador comprendió que su adversario le había herido a fondo, y pretendía buscar en la ironía el triunfo que no había obtenido en la discusión, por más formidable que fuera su dialéctica. Se sentiría un poco fastidiado al ver que su inferior se las mantenía tiesas. Por eso, cuando al hablar de la falta de rentas o fondos especiales, el doctor Palomeque dijo: «entonces valdría más que en dos renglones dijera el Cuerpo Legislativo: quedan derogadas todas las leyes que existen; y entonces, el que tuviere bonos, sabría que debía hacer su puchero con ellos», el doctor Juanicó, con mucha oportunidad, interrumpió diciendo: «¡Poca substancia darian!» La ironía de la frase causó impresión de risa en la barra. Nada respondió el orador interrumpido, siendo luego rechazado su proyecto y sancionado el del señor Fuentes, pero con el concurso del mismo doctor Palomeque. En efecto, allí se leen estas palabras: «Como mi principal objeto es que se haga algo con la Deuda, sin embargo de haber sostenido el artículo que acaba de ser desechado por toda la Cámara, no obstante las simpatías que recibió en esta Cámara por parte de algunos señores diputados, y como mi ánimo, decía, es que se haga algo por la Deuda Pública, yo votaré por el artículo, porque yo veo al pueblo y nada más. Quiero algo, y eso es algo más que nada.» A estas manifestaciones adhirieron los señores Lerena (Luis) y Gómez, que habían acompañado al doctor Palomeque en la jornada que, aparentemente, concluía.

CONTRATO CON MAUÁ



Manuel Errazquin

LA DEUDA PÚBLICA Y EL BARÓN DE MAUÁ

¡ En efecto, aparentemente concluía !

Era necesario dar detenida cuenta de todo lo expuesto para así comprender lo que se iba a desarrollar.

Esta discusión fué el prolegómeno del gran debate sobre la Deuda Pública, en la cual estaba encerrada la estabilidad del país. En ese debate, como siempre, se destacarían las personalidades de Juanicó, Arrascaeta y Palomeque, directores del magno pensamiento que el pueblo acariciaba. Sin el arreglo de la Deuda Pública, que subía a más de cien millones, por errores de unos y de otros, no había marcha posible hacia el progreso. Aquello era una montaña que gravitaba sobre todos, y de la que pendía el porvenir de un sinnúmero de familias. Más aún : esa Deuda Pública estaba vinculada a la vida internacional del país, en sus relaciones con el entonces Imperio del Brasil, como consta de los antecedentes ya expuestos en páginas anteriores, nacidos del Tratado de 1851.

Ahora bien, el ministro de Hacienda, don Federico Nin Reyes, uno de los hombres no bien estudiados aún, porque ha faltado tiempo, preocupados todos de matarse y calumniarse, se entregó a la obra seria del arreglo de la Deuda, no ya sólo en virtud del artículo que acababa de sancionarse por iniciativa del doctor Palomeque, en combinación con el Poder Ejecutivo, sino porque de ello ya venía preocupado, convencido de que no había administración, ni finanzas, ni organización, ni bienestar general, sin despejar antes el camino de lo que tanto dificultaba la ascensión hacia el progreso.

En su consecuencia, al iniciarse los trabajos legislativos, en 1859, ya el Poder Ejecutivo remitía al Cuerpo Legislativo el contrato celebrado en Río de Janeiro con el barón de Mauá, para la conversión de la Deuda Pública del Estado (1).

Se había encontrado ese hombre por quien clamaba el doctor Juanicó, pero se le había hallado doblemente. No era sólo el barón de Mauá quien, con su talento y gran corazón, venía a abrir nuevos horizontes al país, sino que allí estaba la noble personalidad del doctor Andrés Lamas, nuestro ministro plenipotenciario en Río de Janeiro, contribuyendo a fortificar la obra de consolidación nacional. El doctor Lamas, que había hallado a Mauá, en 1847 a 50, durante la época horrible del Sitio de Montevideo, vinculándolo, desde entonces, a la vida política y financiera de la República Oriental del Uruguay, era quien, también con su talento y corazón, iba a contribuir a galvanizar el espíritu público del país. Y esa obra colosal tendría sus ardientes

(1) Sesión del 15 de abril de 1859.

defensores en los doctores Palomeque, Arrascaeta y Juanicó, secundando así los nobilísimos esfuerzos de todos, desde el presidente de la República, don Gabriel Antonio Pereyra, al último de los buenos ciudadanos.

El doctor Palomeque se había impuesto en la Cámara. Los que habían creído que se intimidaría, por hallarse solo, ante la poderosa inteligencia del doctor Juanicó, y de la mayoría organizada, se habían convencido de su error. No era hombre que se le llevara con el encuentro del caballo. Había demostrado sabiduría, carácter y constancia serena. Era así que, al iniciarse las labores legislativas, en 1859, y durante ellas, se le nombraba *por unanimidad* para presidir algunas de las sesiones (1). Además, había conseguido mantener su prestigio al lado del señor Pereyra, a fuerza de energía personal, revelada en sus actos privados.

Por consiguiente, en este magno asunto, él estaba al cabo de cuanto se hacía, explicándose así su actitud desde un principio. No sólo se demostraba por lo que había luchado para que pasara ese artículo 5.º, tal cual él lo proponía, sino por su correspondencia privada con el mismo barón de Mauá. Los sucesos probarían que se haría lo que él había sostenido, y que tanto el doctor Juanicó, como sus amigos, nada observarían, llegado el momento supremo. No se haría ningún *arreglo general* de la Deuda Pública, sino los arreglos que se pudieran. ¡Y entonces, ya no vendrían a los labios aquellas expresiones de inmoralidad que pronunciara el doctor Juanicó, y apoyaran sus amigos!

Ahí estaba el contrato con el barón de Mauá, presentado por el Poder Ejecutivo. Inmediatamente que se dió cuenta, el doctor Palomeque, que era, puede decirse, el *leader* del Gobierno en la Cámara, mientras el doctor Juanicó lo era de la mayoría, para ver de imponerse a ese mismo Gobierno en el juego de la vida política, pidió la palabra para recordar que «se trataba de un asunto que preocupaba los ánimos de todos los habitantes de la República». Como «era un asunto grave y de una importancia inmensa para el país», pedía que se agregase la Comisión de Legislación a la de Hacienda; pues, decía, «siempre las luces en una materia difícil e importante, importan a los intereses del país». La moción no fué aceptada; pero, a los cuatro días, insistía, aunque en otra forma, pues mocionaba para que se recomendara a la Comisión de Hacienda el pronto despacho, lo que así se resolvía (2).

La Comisión de Hacienda se expidió (3) haciendo cinco observaciones. El Poder Ejecutivo tuvo conocimiento de ellas, de una manera extraoficial, y, sin esperar a su discusión, se apresuró a manifestar

(1) Sesión del 21 de febrero de 1859.

(2) Sesión del 18 de abril de 1859.

(3) En las actas publicadas no está el dictamen de la Comisión de Hacienda.

que ellas quedaban salvadas, sin más trámite, pues el barón de Mauá, «a consecuencia de conferencias tenidas con el ministro del ramo», convenía en aceptarlas. De esta manera el Poder Ejecutivo «apuraba todos los medios a su alcance—decía,—a fin de alejar hasta el menor motivo que pueda servir de pretexto para defraudar al país del gran beneficio de libertarlo de su inmensa Deuda, estableciendo su crédito, haciendo posible la disponibilidad de sus rentas y la liberación de las tierras públicas; fundando así, sobre bases sólidas, un sistema financiero con que poder atender a todas las exigencias del servicio nacional, e impulsar el adelanto progresivo a que se encamina nuestra sociedad» (1).

El Poder Ejecutivo esperaba que, «satisfechas esas observaciones, no se opondría ninguna dificultad atendible para privar al país del gran bien de libertarlo de su enorme deuda, y al Poder Ejecutivo de la gloria de haberlo realizado».

Esto, que el Poder Ejecutivo decía en su Mensaje, fué confirmado y ampliado por el señor ministro de Hacienda, con un detalle muy importante, sobre el cual no se recalcó durante la discusión, insinuado así al pasar, y del que se trataría al finalizar la jornada, haciéndose el campeón de él la robusta cabeza del doctor Juanicó.

En efecto, el señor ministro de Hacienda Nin Reyes se adelantó a declarar que «nuestros errores pasados habían imposibilitado» la marcha progresiva del país, pero que el Poder Ejecutivo, «después de haber negociado un tratado que debía formar la base política del Estado», buscó los medios de salvarla de una de las mayores dificultades que podía tener la República, esto es, una Deuda consolidada y otra exigible, de un monto de más de cien millones».

El ministro había puesto en práctica aquello de dadme buena política y os daré buenas finanzas. Había asegurado la faz política del país con las modificaciones introducidas en el tratado de comercio celebrado con el Brasil en 1851, de lo cual nos ocuparemos en oportunidad, para así exhibir abundantemente, en las páginas de la historia, toda la obra fundamental e importante de los hombres que sirvieron a la administración inaugurada en 1856 con el presidente Pereyra a la cabeza. El recuerdo era oportuno.

Luego, exponía la situación desastrosa, «la imposibilidad de atender al servicio de una Deuda fundada, de una Deuda consolidada, de una Deuda constituida, el servicio de cuyos intereses solos, importaba más que todo el servicio administrativo que tenía la República».

La insolvencia en que estaba el Gobierno era un hecho brutal. «Para salvar al país de esa calamidad—decía el ministro,—no puede hacerlo de otro modo, del que está manifestado en el contrato celebrado en Río de Janeiro con el barón de Mauá.»

(1) Sesión del 16 de mayo de 1859.

Este contrato se había presentado a la Cámara el 15 de abril; es decir, que hacía un mes, y aun estaba en los primeros trámites. La Comisión de Hacienda se había expedido en aquella forma, lo que daba motivo para que el ministro dijera: «Sin embargo, con sorpresa se ha visto que la Comisión de Hacienda duda aún, desconoce el deber, hasta de la discusión de este asunto. Los efectos que esto ha producido, la duda sobre el espíritu que puede animar esa resolución, han obligado al Gobierno a pasar a la Cámara esta nota, para expresarle que todas las indicaciones hechas por la Comisión que podrían servir de obstáculo a ese arreglo, se han salvado. Se han salvado aún las que tienden a satisfacer susceptibilidades llevadas hasta la exageración. Nada se ha omitido para facilitar la consecución de este gran objeto. Todas esas observaciones hubiesen podido obtener su modificación, las que surgieran del contrato, con una simple conferencia del ministro de Hacienda. En asuntos de muy pequeña gravedad, es llamado el ministro a esa Comisión; en éste, que importa el crédito, el honor y la salvación de la República, no se ha creído deber llamarlo, y se ha lanzado ese informe, se ha aconsejado el rechazo del proyecto. Es considerando la gravedad de ese rechazo, que el Poder Ejecutivo ha querido hacer presente a la Cámara, que no existen los inconvenientes señalados en el proyecto de la Deuda, y viene, en consecuencia, a sostener la discusión y a introducir las modificaciones que sean necesarias en ese contrato» (1).

Bajo estos auspicios iba a iniciarse el gran debate. El Mensaje, junto con todo lo actuado, volvió a la Comisión de Hacienda, para que introdujera las cinco modificaciones anteriormente aconsejadas, y se expidiera sobre el fondo de él. Así se resolvió, no obstante la opinión del señor Errazquin, que quería que el Gobierno, cuya causa secreta ya expondremos, retirara el contrato y lo presentara con las variaciones que indicaba.

Esto lo sostenía el señor Errazquin, impugnando el criterio de los doctores Palomeque y Arrascaeta, quienes triunfaron, después de adherirse a ellos la palabra del doctor Juanicó.

Al fin se iban comprendiendo hombres como Juanicó, Arrascaeta y Palomeque.

Todos ellos, con estos esfuerzos enérgicos, iban demostrando, ante la posteridad, que si habían sido inflexibles y crueles con los revoltosos caídos en Quinteros, aconsejando, unos, el hecho, y solidarizándose políticamente con él, otros, rescataban ese error, ese crimen político, con todos los beneficios que sembraban en el desempeño de sus funciones públicas. Revelaban de esta manera cuán profundo era el amor por el país que encontraban esquilmo, en bancarrota, preocupados

(1) Sesión del 16 de mayo de 1859. Véanse algunos rasgos biográficos del señor Nin Reyes, aparecidos en *La Democracia* de Montevideo en 1914 (enero 3).

seriamente de su salvación y prosperidad. El ministro Nin Reyes recibía una cartera de Hacienda donde nada había. Todo tenía que producirlo su inteligencia activa. El presidente ponía a disposición de todos su indiscutible honradez y serena energía. Se rodeaba de cuanto elemento útil podía incorporar a la administración pública. Continuaba la tradición diplomática de la Defensa, manteniendo en Río de Janeiro la conspicua personalidad del doctor don Andrés Lamas, alma y nervio de todo lo que se venía practicando en el propósito de mejorar la Hacienda y encarrilar el país. Era una administración que preparaba el terreno para los que vinieran a sucederle. Con razón el Poder Ejecutivo reivindicaba para sí «la gloria» de lo que iba a discutirse, después de la sanción de las modificaciones introducidas en el Tratado de Comercio de 1851; obra, estas modificaciones, de quien lo celebrara en un momento angustioso para la nacionalidad, cuando todo parecía derrumbarse, y sobre los escombros de la Defensa de Montevideo asentarse el poder del tirano argentino y su aliado el general Oribe! Nin Reyes organizaría esa Hacienda, dentro de la aflictiva situación, para decirnos, cuando fuera desalojado de su poltrona: «Me han arrancado de mi casa hasta la pobre mesa escritorio en la que escribí mucho de lo útil en materia de Hacienda, y me han despedido como a un sirviente que ha sido infiel a su amo» (1). Todos esos ciudadanos fueron calumniados, como vendidos al oro del Imperio; y, cuando la hora suprema llegara, lucharían con denuedo contra él, ostentando una sola fortuna: la que habían, material y moralmente, recibido de sus padres. En el destierro no ostentarían riquezas, sino que vivirían sometidos a la hermosa ley del trabajo.

EL PRIMER ATAQUE

En la atmósfera se respiraba, sin embargo, algo hostil al contrato presentado. Se notaba el movimiento de cierto personaje de importancia, al verse la actitud del señor Errazquin. La tendencia opositora se manifestó clara y evidente cuando al entrar a la orden del día, para discutir el asunto, se apresuró a pedir la palabra el dicho señor Errazquin, a fin de que se leyera «una moción que había hecho como cuestión previa» (2).

Era una moción antirreglamentaria, llena de *considerandos*, en la que se sostenía, entre otras cosas impolíticas, la necesidad de conocer primero la Memoria del ministro de Hacienda, que aun no se había presentado, para luego entrar a la discusión de la conversión de la Deuda. Por todo ello mocionaba para que se suspendiera la conside-

(1) Carta privada del señor don Federico Nin Reyes al doctor Palomeque, en mi archivo, que, en su lugar, se publicará íntegra, con los comentarios del caso.

(2) Sesión del 22 de mayo de 1859.

ración del contrato celebrado entre el ministro plenipotenciario de la República en Río de Janeiro y el barón de Mauá, hasta que por el ministerio de Hacienda se diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución y a la ley de 12 de julio de 1858». Esta moción fué apoyada, y se puso a la consideración de la Cámara. Su autor se limitó a fundarla, diciendo que «nada tenía que agregar después de los considerandos que ella encerraba y que se habían leído».

El señor Fuentes manifestó que nada tenía que ver la presentación de las memorias ministeriales con el asunto en discusión. Por su parte, el doctor Palomeque, fastidiado ante la impertinencia, que tal lo era, del señor Errazquin, tuvo palabras duras, desde un principio, porque nadie como él estaba en el secreto de lo que sucedía. Él sabía muy bien que en la oposición de Errazquin había una cuestión escondida; y ésta era la caída del ministro Nin Reyes, para llevar adelante la jornada presidencial, *ad portas*. El señor Errazquin no era hombre de ideas propias, en política, sino un elemento de su pariente y amigo don Bernardo P. Berro, a la sazón presidente del Senado. Desde luego, las cosas empezaban a moverse alrededor del gobernante. Esos celos naturales, esas aspiraciones políticas iban a dividir la mayoría parlamentaria que hasta entonces había estado manejada por el doctor Juanicó. Esta división se notó cuando la discusión sobre modificaciones del Tratado con el Brasil (1).

LAS TRES PERSONALIDADES INFLUYENTES

Puede decirse que eran tres las personalidades que se destacaban en esos momentos para suceder al señor Pereyra; las tres con cualidades salientes, aunque alguna con más servicios verdaderos al país y en situación de continuar la tradición política. Esas eran: el doctor don Andrés Lamas, el doctor don Cándido Juanicó, y el señor don Bernardo P. Berro (2). De los que actuaban, cualquiera de ellos se imponía. Sin embargo, uno, el doctor Lamas, era el mejor, pues en su roce con los hombres y con las cosas había adquirido mayor ecuanimidad de juicio como para vivir en las alturas, lejos de las *miserias* a que pronto se referiría el doctor Juanicó. Poseía un capital enorme, del cual carecían los otros, exhibido, en esos instantes, al celebrarse el tratado de modificaciones con el Brasil y el contrato con Mauá. Sin él nada se hubiera hecho. Aun la faz política; ¿quién sabe! qué giro habría tomado, al desarrollarse la revuelta terminada en Quinteros, si su influencia legítima no se hubiera hecho sentir en el Gabinete brasileño. Para él no había trapos ensangrentados. Estaba muy lejos de

(1) Este asunto fué tratado y sancionado antes que el contrato con Mauá. En seguida nos ocuparemos de su estudio.

(2) No cito al doctor don Manuel Herrera y Obes, porque hablo de las personalidades en juego en ese momento.

ellos, después de la Paz de Octubre de 1851. Era algo así como el nuevo espíritu de un pueblo, enseñando horizontes desconocidos a las generaciones que aun combatían por resabios del pasado luctuoso.

Por su parte, el doctor Juanicó aportaba su talento indiscutible, y los servicios importantes que empezó a prestar desde la Defensa de Montevideo, y que ahora continuaba. No podía parangonarse su capital político con el de Lamas. Juanicó tenía egoísmos y perezas. Recién en esta época reveló una actividad política extraordinaria, resistida por su robusta naturaleza física, moral e intelectual. Era indiscutible que estaba dotado de cualidades superiores para el mando, con un poder de dominación admirable, y con un atractivo personal poderoso. No sólo le ayudaba su talento, sino su porte, su físico encantador. Pero, no tenía en su foja de servicios el capital de Lamas, porque había carecido del valor de lanzarse al combate donde las pasiones queman y enlodan, pero purifican. Lamas había pasado, y aun pasaría, por la prueba del agua y del fuego, desde muy joven. Conocía las ingratitudes y las calumnias. Juanicó había vivido lejos de ellas, encerrado en sus negocios, rico, puede decirse, sin conocer el dolor humano. No había tenido personalidad acentuada, dentro de un partido, como para despertar pasiones. Educado en Europa, lejos de nuestros disturbios, vivió con placidez, dentro de la plaza de Montevideo, alejado, puede decirse, de aquel *pandemonium*, aunque prestando sus servicios judiciales y educacionales en modesta esfera.

Allá, al final del Sitio, se le ocurrió, como a algunos otros que creyeron perdida la causa de la plaza de Montevideo, irse al Cerrito, en lo que no poco influiría la correspondencia mantenida con su amigo el doctor don Eduardo Acevedo (1).

Juanicó, pues, no estaba adherido a las pasiones extremas, si bien era un hombre de impulsos animados, pero que trataba de contener por medio de su voluntad educada. Era un espíritu accesible a la reacción, dentro de un carácter terco y orgulloso. Obedeciendo a todo eso, fácil le fué aceptar la evolución política que iniciaron los ciudadanos que, como Medina, Palomeque, Magariños, Aguiar, Fernández Echénique, Fernández Fistera, etc., levantaron la candidatura de don Gabriel Antonio Pereyra para presidente de la República, redactando el programa hermoso del 1.º de marzo de 1856, que arrojaba al olvido, al examen de la historia, los partidos ensangrentados. Lamas había llegado a repudiar éstos, después de pasar por ellos, por lo que en su hermoso folleto de 1855 declaraba que no le volvería a salpicar la sangre de sus hermanos. Juanicó comenzaría por no pasar por ellos, para concluir por contagiarse y servir a caudillos. Por eso, en la contienda a que vamos a asistir, diría, con su voz entonada y entusiasmo ardiente,

(1) En ella se halla una sentida epístola en la que éste le describe una escena de la muerte del padre de Juanicó, y lo que hizo en ese instante, honrando al autor de los días de su amigo.

al darse cuenta de la tendencia del señor Errazquin y sus amigos : «Sea el que fuere el Ministerio, sea cual fuere también el color político (yo he protestado siempre no tener que ver con los colores políticos), desde que haya algo nacional, algo salvador, estaré por ello : no me importa...»

Eran dos hombres superiores, que se daban cuenta de lo que reclamaba el país, por lo que estrechaban filas y se unían para servir un pensamiento fecundo, que el pueblo aplaudía, desde la barra, enunciando en aquellas palabras salidas de los labios del doctor Juanicó (1).

La tercera personalidad, don Bernardo P. Berro, era un hombre de capital político dentro del círculo extremo donde se había educado. Tenía talento y dotes para el mando. Había pregonado *Ideas de Fusión*, de conformidad con Lamas, como resulta del folleto de 1855. Era una personalidad curiosa. Siempre, en el hecho, actuó con su círculo extremo, por más que tuviera en los labios y en la pluma frases de concordia y de unión. No atrajo a su Ministerio, cuando fué presidente, a hombres que, como el doctor Palomeque, habían sido el alma de la evolución política iniciada en 1856. El sentimiento atávico se reflejaba en sus relaciones con el caudillaje del Cerrito. En éste buscó su fuerza para llegar al Senado, y en éste se apoyó, una vez en el Gobierno, para mantener una dualidad inconcebible en los Departamentos de campaña, ante la autoridad civil emanada de la Constitución. Era un político surgido de nuestra escuela tumultuosa, autoritaria, a quien, sin embargo, como se verá más adelante, ese caudillaje se le sublevaría en muchas ocasiones. Su talento le decía que, dadas las cosas como habían marchado, sería presidente quien más y mejor presionara sobre ese elemento de acción alrededor del gobernante del 1.º de marzo de 1856. De ahí la conducta del señor Errazquin, en el asunto de la Deuda, portavoz del señor Berro. El tiro iba dirigido al ministro de Hacienda Nin Reyes, ciudadano de cualidades indiscutibles, a quien era necesario inutilizar, porque se le conocían sus aspiraciones presidenciales, las que siempre conservó, hasta en las horas supremas de la guerra civil, cuando todavía se mantenía indecisa la suerte de la batalla, que, al fin, sería fatal para los revolucionarios de 1870, como se verá en su lugar respectivo.

ATAQUES A ERRAZQUIN

Cuando Juanicó se dió cuenta de aquello, decía : «Vamos a engolfar, a envolver, a imposibilitar la marcha gubernativa, aun cambiando de ministro ; porque para mí yo no sé quién sería el ministro, a la altura en que están las cosas, que pudiese hacer marchar la máquina del Estado, mientras no estuviese esta cuestión de la Deuda comple-

(1) Página 86, tomo 6.º del Diario de Sesiones, año 1859.

tamente arreglada ; sobre todo cuando entre diversos opositores a un ministro (que ya dije antes no me importa la cuestión ministerial), no he visto anunciar por nadie un plan. Cuando se hace una oposición al Ministerio, se presentan ideas, se presentan bases, se presentan planes, a ver si el Poder Legislativo, junto con el Poder Ejecutivo, pueden hacer marchar, hacer salir adelante la nación. Lo demás es ¡ miseria ! ¡ miseria ! Y, por más que hagan protestas, caen ante los hechos reales y positivos. Si hay un hombre entre nosotros que se presente y diga : aquí está el plan que satisfaga esas necesidades, yo, señor, yo lo saludo y le pongo el hombro hasta donde pueda. Y no soy de los que me hallo en ese caso ; pero estaré pronto a ayudarlo. Lo demás, oposiciones personales, etc., todo lo sacrifico mientras no hay ideas, principios, bases reconocidas ; y esto, en medio de las circunstancias en que el Poder Ejecutivo se encuentra (en lo general y en lo particular), de una elección presidencial», etc., etc. (1).

Pues bien, el señor Berro y su círculo trataban de reproducir la escena del 53, con aquella doctrina de estar con el Gobierno, pero desconfiar del ministro. Así tumbaron al doctor don Florentino Castellanos. Ahora querían tumbar a Nin Reyes, pero alabando al gobernante. Además, se hacía una guerra de *boutique*. Se quería que no fuera el Banco Mauá el autor del negociado de la Deuda, sino el Banco Comercial, en donde estaba refugiado el elemento conservador de la sociedad, por lo general, egoísta y cerrado a los grandes movimientos del alma nacional. El Banco Mauá puede decirse que reflejaba el sentimiento democrático del pueblo, al cual su fundador ayudaría decidida y constantemente, en la buena como en la mala fortuna, hasta caer postrado en una lucha que lo honra en las páginas de la historia uruguaya. En su virtud, el doctor Juanicó no se contentaría con darle aquella lanzada a su amigo Errazquin, defensor decidido del Banco Comercial, cuyos estatutos como sociedad anónima acababan de aprobarse, para colocarlo frente al de Mauá, en igualdad de categoría. En efecto, el doctor Juanicó se le iría a fondo, durante la discusión de la célebre moción con *Considerandos*, tendiente a aplazar la cuestión, y le diría : « Pero, el aplazamiento, así como se propone, para mí, es inútil ; importa algo más serio que *los intereses mezquinos y miserables*, que, al fin y a la postre, están en juego en materia de la Deuda, sobre si hay un arreglo tal o cual, y en que *sea un Banco u otro*, y otras cosas parecidas » (2).

No menos enérgicos estuvieron los doctores Palomeque, Lapido y Arrascaeta, y el señor Fuentes, quienes no llegaron hasta hablar de *miserias*, ni de *intereses mezquinos y miserables*, lo cual, sin embargo, no irritaba la epidermis delicada del señor Errazquin ; sin duda,

(1) Página 98, tomo 6.º del Diario de Sesiones, año 1859.

(2) Página 98, tomo 6.º del Diario de Sesiones, año 1859.

porque quien se lo decía era el doctor Juanicó, su jefe superior, hasta esos momentos. En cambio, ya veremos cómo se levantaría indignado, cuando el doctor Palomeque se expresara menos enérgicamente para calificar la improcedencia de la tal moción.

Era indudable que el señor Berro y su pariente Errazquin habían preparado el golpe con aquellos *Considerandos*. Llevaron a la Cámara un núcleo importante, hecho, unido como una tabla, para tenérselas tías con el mismo doctor Juanicó.

El señor Errazquin guardaría todas las formas sociales con el doctor Juanicó, pero, en cambio, uno de los de ese centro opositor, el señor Lerena (Avelino), se le iría a las barbas, como aquí se explicará.

El señor Errazquin no contestaría (y así lo diría) al doctor Juanicó, ni aun cuando éste le dijera que lo propuesto, «*de veras, no tiene ni sentido gramatical*» (1).

Idéntica actitud asumiría con los doctores Arrascaeta y Lapido, y señor Fuentes, quienes no andarían con medias tintas para calificar la forma y fondo de la moción.

El señor Lapido hablaba de «una resolución con un cúmulo de Considerandos, que importan ni más ni menos que una gravísima acusación al Ministerio».

Por su parte, el señor Arrascaeta sentía, decía, «que a esta Cámara, a corporaciones tan dignas, que tienen sus procedimientos señalados, se traigan por hombres que a fuer de su ancianidad y sus conocimientos en el manejo de los negocios, se traiga eso que se llama en el Foro : *chicaneos*, o medios de eternizar un derecho o la adquisición de una justicia merecida. Es con sentimiento que veo usan de ello aquí. Como representante del pueblo no tengo inconveniente en declararlo : me causa dolor que se traigan aquí a esta Cámara, esas *chicanas* que impedirían cualquier resolución parlamentaria...» «Pero venir aquí a sacar como escamoteados los asuntos... esto no es digno» (2).

Asimismo el señor Fuentes insistía, como el doctor Arrascaeta, en que el señor Errazquin usaba de una *chicana*. Toda esta energía se debía a que los autores de los *Considerandos* habían querido presionar el ánimo de los legisladores, llevando una barra favorable que, a cada rato, aplaudía o silbaba, según las tendencias de cada uno de los oradores.

El doctor Palomeque fué el primero en iniciar la lucha y en calificar el papel curioso, lleno de *Considerandos*, presentado por el señor Errazquin. Apenas leído, el doctor Palomeque dijo que «no sabía qué era lo que había leído la mesa, pues el galimatías que se había leído, no lo entendía ; porque, a estar a lo dispuesto por el Reglamento, nadie necesariamente debía entenderlo».

(1) Página 104, tomo 6.º del Diario de Sesiones, año 1859.

(2) Páginas 92 y 93, tomo 6.º del Diario de Sesiones, año 1859.

El Reglamento «prohibía dar la razón de cualquier proyecto que se presentara. Por eso no entendía lo que había leído la mesa : si era una Memoria del señor diputado, si era una acusación al Ministerio, o si era un voto de reprobación a la orden del día que debía salvar al país».

Estas últimas palabras eran aprobadas por las demostraciones de la barra, lo que daba motivo para que el orador dijera que cuando él hablaba, no hablaba para la barra, y que se retiraría. Calificaba de «*moción in folio*» la hecha ; la cual, para él, «no era otra cosa sino una acusación al Ministerio, por sus palabras, aunque no en la forma, porque carecía de forma». Decía más : que pedir «el aplazamiento de la orden del día, con un proyecto de esa naturaleza, le parecía que era hasta hacer burla de la Representación Nacional», concluyendo por aconsejar al señor Errazquin formulara una moción en forma, en antesalas, para poderla tomar en consideración.

Estas palabras del doctor Palomeque dieron motivo para que el doctor Lapido declarara que la moción era inadmisible, revistiendo el carácter de una acusación al Gobierno de la República.

El señor Errazquin estuvo débil al defenderse, por más que indiscutiblemente la moción era improcedente en la forma y en el fondo. Al batirse en retirada, sostenía que la Cámara, o la mayor parte de los diputados, «no se habían tomado el trabajo que él, de tomar informes, y que no podían formar juicio en un asunto en que carecían de esos conocimientos, que, al parecer, él era el único que los poseía».

«No—le decía el doctor Palomeque,—yo también he tomado esos datos o informes, y los traigo en el bolsillo.»

Y, contestando el señor Errazquin a lo de ser su moción una acusación al Gobierno, declaraba que lo único que quería decir su moción era «recordar al Ministerio un deber que tiene que cumplir ; y entonces, cumplido ese deber, dados esos conocimientos a la Cámara, la Cámara se puede ocupar del asunto con pleno conocimiento de él, pero ahora no puede porque no los tiene».

El ministro así atacado, allí estaba presente. No pudo escuchar impasible semejantes aserciones, que iban rectas a desprestigiar la autoridad ejecutiva. Dijo, en consecuencia, que el diputado «acababa de hacer otra acusación insostenible, injustificable, al Poder Ejecutivo». Hizo presente que los datos de la referencia se hallaban en la «Contaduría General, montada como modelo, pues una Deuda constituida no era de esas vaguedades que era necesario ir a buscar de puerta en puerta». «Existe—decía—el libro donde está asentada, y si el señor diputado hubiera querido esos datos, no tenía más que dar un paso.» Por lo demás, y lo decía fundadamente, «aunque faltasen esos datos, ello no era motivo para no considerar el asunto, porque no se supiera si eran ciento o ciento diez los millones de la Deuda. «¡ Perdón ! ¡ Perdón !—decía.—Veo en esto la verdadera intención de aplazar este asun-

to ; asunto que tiene el Poder Ejecutivo interés en que se sancione, interés en que se ponga a la consideración de la Cámara.» Y luego, refiriéndose al hecho de la no presentación de la Memoria, exponía que era «porque de ese caos que se llama Administración, de ese hondo abismo que se ha llamado finanzas en este país (que el señor diputado conoce perfectamente), no podía el Poder Ejecutivo sacar conocimientos ni dilucidar cuestión alguna. Lo hizo el año pasado. ¿De qué sirvió? Para quedar debajo de las mesas de las Comisiones. Este año se proponía dar esos conocimientos, dilucidar esas cuestiones, desenvolver un plan, plan que nunca ha habido ; pero para ello necesitaba una base. No es sobre el deshonor, sobre el descrédito, sobre la insolvencia del país, que va a fundarse un edificio de crédito, un edificio para el porvenir».

Estas palabras, justas y enérgicas, eran apoyadas, dándose muestras de aprobación en la barra.

«Por eso—concluía diciendo—no ha presentado su Memoria, ni la presentará ; no hará más que poner en relieve el deshonor de la República.»

Por su parte, el señor Errazquin consideraba que «hacer, sin esos datos, un arreglo así, parcial, le parecía una de las cosas más peregrinas que se podían haber presentado a la Cámara».

De esto participaba el señor Camino, quien sostenía, y tenía razón, que la Cámara había autorizado arreglos generales, pero «rechazando los arreglos parciales como funestos».

No pudo el señor Camino continuar desarrollando sus argumentos, porque el doctor Palomeque, con una tenacidad admirable, lo persiguió, sosteniendo que estaba fuera de la cuestión, hasta obligarlo a renunciar a hablar, porque, decía, «como soy interrumpido a cada momento».

Sin embargo, el grupo opositor contaba con el señor Aguirre y el señor Basáñez. El primero hizo uso de la palabra, mientras el segundo lo apoyaba. La actitud del señor Aguirre volvió a obligar al ministro Nin Reyes a terciar en el debate, siendo muy interesante el discurso que pronunció, por lo que merece hacerse un detenido examen de él. Vamos a tentarlo.

EL MINISTRO NIN REYES

Comenzó manifestando que necesitaba un poco de recogimiento, porque no sabía si caía de la luna o de alguna otra parte que lo alejaba de este mundo. Oía aberraciones del espíritu, dudando si se trataba seriamente de la cuestión. Oía preguntar si el Poder Ejecutivo había llenado el mandato de arreglar la Deuda, y él se preguntaba a su vez : Pero ¿qué significa esto? ¿de qué se trata? ¿De arreglar las deudas? Y se contestaba con mucho seso : «¿Cómo violentar a los acreedores?

¿Cómo ir a arrebatarles lo que es suyo? Desde que están constituidas las deudas, no hay más que hacer sobre la Deuda: lo demás es un acto puramente convencional. No puede la Legislatura, no puede el Gobierno, nadie puede disponer, una vez que la ley ha mandado, ha determinado, ha garantido la forma de esa Deuda: esa Deuda constituida, llamada Consolidada y la Deuda Exigible, que están en la forma que la ley las ha determinado, con las garantías que la ley les ha dado. Las tierras públicas, las rentas, la fe pública comprometida: he aquí su precio, he aquí su valor. ¡Qué! ¿se quiere mandar al Poder Ejecutivo que arregle, que haga arreglos del todo? Pero, ¿qué clase de arreglos? Pagar los tres millones de intereses cuando menos; es lo único que se puede obligar al Poder Ejecutivo para tomar esos aires de mandato».

Tenía toda la razón el señor ministro Nin Reyes. El arreglo de la Deuda era un hecho indiscutible, sobre el cual no podía volverse sino por un convenio especial con los poseedores de los títulos anotados en los libros de la Contaduría. El ministro sostenía la misma tesis sustentada por el doctor Palomeque en aquella porfiada lucha con el doctor Juanicó, al discutir el artículo 5.º de la ley que autorizó al Poder Ejecutivo para hacer las alteraciones en el Presupuesto.

Luego, avanzando en su peroración, recordaba que «era necesario entrar en el verdadero terreno de la legalidad, en la buena fe de la cosa, y entonces, decía, «no hay arreglo posible, no hay más que pagar lo que se ha comprometido la nación a pagar.» Sostenía que era necesario «salir de ella, porque se habían cometido errores de gran magnitud, a punto de haberse apoderado de nosotros—decía—un vértigo, que parece todavía no abandonarnos, para creer que se pueden crear millones, que se puede decretar el pago de intereses sin calcular las fuerzas productivas del país, sin conocer sus recursos económicos». Llegaba un momento como el actual, y «no podían salir del paso, ciertamente, porque—lo declaraba con solemnidad—queremos dar nombre a cosas que no los comportan; esos arreglos no los podía hacer el Poder Ejecutivo sino de una manera convencional. No pudiendo hacerlo totalmente, no podía arreglar, y se ha considerado muy afortunado de haber podido encontrar el medio de sacar ese cáncer en sus tres cuartas o cuatro quintas partes, con esperanza, que es casi una evidencia, de entrar toda ella».

Eso no podía hacerse sin un acto espontáneo de los tenedores de los títulos. Y, producido, esos acreedores «deberían merecer del país la consideración de su abnegación, de su interés para venir en ayuda de él a preparar su porvenir, estorbado por esa espantosa Deuda. ¡Y en lugar de esos agradecimientos y de esa consideración—decía,—vemos que dentro de poco, el Poder Ejecutivo y los acreedores han de ser condenados por la indignación pública!» Por eso el señor ministro no podía «salir de la sorpresa que esto le ocasionaba».

El ministro sentía la punta de la espada de su adversario rozar su epidermis, por lo que se apresuraba a desviar el golpe, diciendo, de una manera tranquila y contundente, al señor Errazquin, a este ciudadano que había sido secretario de Hacienda, y que conocía o debía conocer mejor que otros la situación económica y financiera: que en cuanto a «la necesidad de los conocimientos, de las Memorias, de los planes»—y aquí se detenía, poniendo unos puntos suspensivos, cual si le recordara al contrincante que él nunca, desde el ministerio de Hacienda, había abordado la ardua tarea de esbozar un plan de tal naturaleza,—que «sin duda se habría «olvidado» que salimos de una anarquía espantosa, que ha sido necesario hacer esfuerzos espantosos para librarnos de envolvernos en otros diez años de calamidades como las que hemos pasado. ¡Cuánto ha tenido que hacer el Gobierno para atraer las cosas gradualmente a este terreno!»

El señor Nin Reyes había estado ocupado asiduamente, desde su entrada al Ministerio, en el estudio de la historia financiera del país. Le faltaba hallar la Memoria de 1852 y 53, por lo que no había podido continuar su trabajo. ¡Tal era el desbarajuste de aquella administración pública! Las guerras, motines, asonadas y escándalos no habían dado tiempo a un ministro para dejar su Memoria en el archivo, o, si la dejó, aquellas mismas la habían hecho desaparecer. El ministro necesitaba para su trabajo «una base, y esta base era el arreglo proyectado». Al pretenderse una postergación, «no se preveían las consecuencias; no se sabía reconocer—decía—al Gobierno ese bien que ha hecho». Por lo demás, terminaba exclamando: «¡Que vengan las memorias ministeriales! Pero, si ahí están las leyes de finanzas en las Comisiones; ahí está todo lo que puede servir de conocimiento a un hombre que tiene la intención y la capacidad para conocer la Deuda».

El ministro había dado el golpe mortal a la moción del señor Errazquin. Quedaba plenamente demostrado que la Deuda Consolidada, como lo decía su palabra, liquidada y garantida, de cuyo convenio se trataba, ahí estaba, constando no sólo en el Gran Libro de la Deuda, en Contaduría, sino detallada, como asimismo las otras deudas, en la Memoria ya presentada, abandonada en las Comisiones.

EL GENIO REBELDE

Pero no había tocado un argumento importante hecho por el señor Camino. Éste había sostenido, y era una verdad, que el Cuerpo Legislativo sólo había autorizado al Poder Ejecutivo para hacer un *arreglo general* de la Deuda. De aquí deducía que el arreglo presentado era parcial, es decir, *funesto*, o, más bien dicho, *inmoral*, como así lo calificó enérgicamente el doctor Juanicó al oponerse al artículo presentado por el doctor Palomeque, como se recordará, al discutirse la autorización dada al Poder Ejecutivo para hacer el arreglo.

Todos estaban de acuerdo, como el mismo doctor Palomeque lo sostuvo al defender su pensamiento, en aquel entonces, que no se trataba de *arreglos parciales*.

Los sucesos iban a exhibir la actitud correcta del doctor Palomeque, encargándose de darle toda la razón el mismo doctor Juanicó, con su talento fácil, y ese carácter dúctil que tanto le servía para actuar en política, en un país recién nacido a la vida, donde tan difícil es actuar, aun a los genios, a los llamados superhombres en nuestros días. Esa ductilidad para saber adaptarse a las situaciones, la revelaría en este incidente, como en el del arreglo de la Deuda Lavalleja y Solsona, según veremos.

Juanicó entró al debate con la gallardía y arrogancia naturales de su carácter y de la confianza de sus fuerzas, por más que supiera que su ejército parlamentario venía sufriendo crisis, y que iba a tener de aliado, impuesto por las circunstancias, a su enemigo de la víspera, el doctor Palomeque, y de adversario, a su amigo de siempre : ¡ el señor Errazquin !

Lo diremos en honor de la verdad. En esta jornada, como en todas en las que se vió obligado a actuar con el doctor Palomeque, aun hasta en los últimos instantes de la vida de éste, en los sucesos relativos a la Paz de Abril de 1872, como se verá oportunamente, el doctor Juanicó reveló su altanería intelectual, teniendo, en el fondo, un profundo desprecio por su contrincante. ¿ Por qué ? Por la muy sencilla razón de que así es el genio : ama la sombra que él mismo proyecta con su alta sabiduría, para descansar, y no la que le ofrece el humilde obrero, de corazón fuerte y de robusto músculo. El genio no gusta del fruto del árbol sencillo, humilde, silvestre ; le agrada la palma flexible y elevada, el roble añoso, el cedro perfumado, el jacarandá lustroso. ¡ Y, sin embargo, no siempre el poder, ni la riqueza, ni la gloria, alcanzan, como lo explica Junqueiro en su hermosa alocución poética *La Lágrima*, a atraer la lluvia fecundante del amor, que produce flor bermeja, en cuyo cáliz virginal, la abeja liba miel rosada !

Cuando Juanicó rebatió al señor Camino, sostuvo que no se había autorizado al Poder Ejecutivo para hacer un *arreglo general* de la Deuda de la República, sino un « arreglo general de lo que se llama *Deuda Consolidada*, única que hasta ahora tiene carácter positivo ».

Sin embargo, cuando combatió al doctor Palomeque, había dicho, en su entusiasmo, y aliado entonces al señor Errazquin, que « desgraciadamente, no hay nada hecho en materia de Deuda Pública, nada de lo que está decretado se puede cumplir. Es necesario volver al principio » (1). ¡ Ahora afirmaba que la Deuda Consolidada era la única que tenía carácter positivo ! Era lo que entonces había sostenido el doctor Palomeque, al pugnar por que se le recomendara al Poder Ejecu-

(1) Páginas 206 y 207, tomo 6.º del Diario de Sesiones, año 1859.

tivo que hiciera los arreglos de acuerdo con las leyes existentes. Entre ellas estaba la de Consolidación, que, por su artículo 9.º, autorizaba precisamente al Poder Ejecutivo para hacer los arreglos y *someterlos al Cuerpo Legislativo*.

Creemos que el doctor Juanicó restringía su tesis. La moción que triunfó, como lo sostenía el señor Camino, era para hacer arreglos generales de la Deuda Pública. No se limitó a la Consolidada.

Pero, por su parte, estaba equivocado el señor Camino (y en esto tenía razón el doctor Juanicó), cuando creía que esa autorización amplia le impedía al Poder Ejecutivo hacer arreglos, a medida que pudiera, sobre todas y cada una de las Deudas, en total o en parte, desde que las sometiera al fallo de las Cámaras.

Sin necesidad de autorización legislativa, podía el Poder Ejecutivo hacer los arreglos totales o parciales que creyera convenientes, y someterlos a la consideración del Cuerpo Legislativo. Su carácter de administrador general y de colegislador lo autorizaban para ello. Y fué ése el procedimiento observado en el país. Fué el Poder Ejecutivo quien, en 1853 y 1854, se dirigió al Cuerpo Legislativo enviándole los proyectos de ley para consolidar la Deuda Pública, de acuerdo con el tratado celebrado con el Brasil en 1851. En este mismo tratado se autorizaba al Poder Ejecutivo para hacer arreglos con los acreedores, sin perjuicio de lo determinado en la ley. Y fué por eso que en la ley de consolidación de 1854 así se preceptuó.

Como se ve, bajo cualquier aspecto que se estudiara el asunto, era inconsistente y baladí, tanto lo que ahora sostenía el señor Camino, como lo que en aquel otro momento sostuvo el doctor Juanicó.

El Poder Ejecutivo podía hacer arreglos, con nueva autorización, o sin nueva autorización del Poder Ejecutivo, ya porque así lo preceptuaba la ley del 54, ya porque en su carácter de poder colegislador estaba facultado para presentar proyectos de ley, que allá la Cámara discutiría, sancionaría o rechazaría.

Era evidente, pues, que el Poder Ejecutivo podía someter todo lo que creyera conveniente a la deliberación de la Cámara, fuera cual fuera la Deuda, ya la consolidada, la exigible, la francesa, la inglesa, la brasileña, en todo o en parte, sin que la Cámara pudiera decirle: «Yo no le he autorizado para ello». Tan legislador era uno como otro. Ahora, el único camino que le quedaba al Cuerpo Legislativo era aprobar o reprobar el proyecto de ley presentado por quien tenía personería para ello.

Todo, pues, lo que en contrario expuso el doctor Juanicó, fué débil e inconsistente. No estuvo feliz en cuanto a la doctrina, si bien rebatió al señor Camino demostrándole que el proyecto presentado era un arreglo general sobre la Deuda Consolidada, comprendido dentro del artículo 5.º sancionado por la Cámara, de acuerdo con la moción del señor Fuentes, en la sesión del 19 de junio de 1858.

El doctor Juanicó creyó necesario hacer destacar la personalidad del señor Errazquin, «muy amigo, muy honorable, a quien respeto mucho, a quien lamento inmensamente en esta ocasión no encontrar en el mismo sentido en que yo me encuentro. Lamento inmensamente, decía, «porque lo he considerado muy patriota siempre. Y es la segunda vez que me hallo en el caso de poder decir estas palabras, porque cuando el Tratado de Modificaciones, el año pasado, fué el único en la votación unánime del Cuerpo Legislativo que separó su persona, muy importante, de la votación».

Quien así se expresaba, ya sabemos lo que en seguida dijo a quienes se oponían al proyecto del Poder Ejecutivo, que «había cumplido magníficamente, prodigiosamente bien—decía,—con ese encargo que la Cámara le hizo».

No sólo dijo aquello relativo al ataque al ministro, de las *miserias*, de la falta de *sentido gramatical*, en el calor de la improvisación, sino que, a raíz de esos elogios a su amigo Errazquin, declaraba que «tres, cuatro meses, llevaban del período legislativo, y ¡por cuestiones miserables! la época que más prometía al país y a los sostenedores de la situación, ha pasado en trabajos estériles! ¡Es lamentable!... Y creo que tarde o temprano, todos los que en poco o en mucho contribuyan a esto, lo han de lamentar».

No se contentaba con esto, pues «no comprendía que se trajera, a la altura en que se estaba, una cuestión, una moción que *no significaba*, real y verdaderamente, ilustrar la materia, porque todos estamos sobradamente ilustrados».

INCIDENTES PERSONALES

Y quien todo esto, y aquello, había dicho a su amigo Errazquin, se levantaría, cual va a verse, con soberbia y desprecio, a contestar las palabras que el doctor Palomeque pronunciaría en seguida, que no serían tan rudas como las del doctor Juanicó para con su amigo Errazquin. ¡Era que su orgullo, su ensimismamiento, lo que lo anuló para siempre en la vida política, se revolvía adentro, no permitiéndole soportar la compañía de un ser a quien consideraba adversario, y lo era, para atacar a su amigo patriota! Y saldría a defenderlo, haciendo recordar aquella escena sainetesca de la mujer mundana que dice: ¡A mi marido nadie le pega sino yo!

En efecto, el doctor Palomeque sostenía que la moción, con sus *Considerandos*, importaba «una censura al Gobierno del 1.º de marzo, un rechazo a su política, a sus principios, y que aceptar esa moción era un bofetón odioso que se le pegaba al ciudadano don Gabriel Antonio Pereyra».

El doctor Palomeque estaba en lo verdadero. ¡Y bien que resalta de los tales *Considerandos* y del contexto de la moción! Así lo

veían claro todos los legisladores, a punto de haberse visto obligados a publicar «una declaración que—decía el doctor Palomeque—circula en los diarios públicos, sobre el Tratado, es decir, que aceptan la política del Gobierno del 1.º de marzo».

Ahora bien, el señor Errazquin protestó contra esa suposición, pues su mente no había sido hacer tal censura, y entonces el doctor Palomeque contestó que *él no suponía*. Y, en su virtud, decía: «Repetiré lo que ha dicho un señor diputado: es la segunda vez que el señor diputado por Montevideo se encuentra en la oposición; la primera vez en el Tratado de Modificaciones al de 1851, y la segunda en el proyecto de la Deuda».

¡Nunca lo hubiera dicho! Como un tigre saltó el doctor Juanicó a defender a su amigo Errazquin, a ese a quien él ponía como chupa de dómine, motejándolo con términos fuertes, hirientes y personales, que el aludido soportaba franciscanamente. El doctor Juanicó no permitía que otro sino él pudiera atacar al adversario común. No admitía, decía, «la interpretación que sobre el particular ha hecho de mis palabras el señor diputado por Tacuarembó». Volvía a declarar que lamentaba esas dos ocasiones en que estaban separados, pero «habiendo tenido siempre mucha satisfacción al hallarme muy conforme con la marcha que ha seguido el señor diputado antes de la moción». Y, como lo dicho por el doctor Palomeque era la verdad, y lo afirmado por el doctor Juanicó una falsedad, inmediatamente aquél respondió: «No es exacto lo que acaba de decir el señor diputado. El señor diputado, recordando lo que ha sucedido en el tratado, en el año próximo pasado, dijo estas palabras: «Cuando la Cámara en masa votaba por el Tratado, señor diputado, fué el único que se separó». Esto lo traducía el doctor Palomeque por «un bofetón». Sin duda no estaría bien «empleada la palabra—decía él,—pero esta es la verdad». Y, enardecido ante la incomprensible actitud del doctor Juanicó, declaraba que como tenía «la conciencia de haber interpretado bien el escrito presentado» por el señor Errazquin, en los términos en que lo había hecho antes, votaría en contra, «porque quiero hallarme—decía—siempre al lado del Gobierno del 1.º de marzo, que nos ha dado paz, que nos ha dado leyes, instituciones, seguridad individual, etc., etc.».

Apenas había pronunciado el doctor Palomeque estas palabras sinceras, venidas a los labios en presencia de aquellas *miserias*, y otras cosas más, que el doctor Juanicó había mencionado al atacar la moción del señor Errazquin, este caballero se sulfuró, como si un áspid le hubiera picado, cuando para nada se le había ofendido, y dijo estas inconveniencias: «Me parece que el Gobierno no ha tenido necesidad de buscar, para que esté a su lado, al señor Representante que habló. Ni para hacer todos los servicios que ha hecho. Cuando llegue la ocasión sabremos quién ha estado al lado del Gobierno».

Y aquella barra, que se había llevado expresamente para presio-

nar en el ánimo de los legisladores, al oír todo esto, se desataba en gritos y aplausos, a los que hacían coro los amigos del señor Errazquin, con sendos y estentóreos apoyados. De esa manera creían imponerse al doctor Palomeque, quien, de alma fuerte, con su conciencia hecha, acostumbrado a afrontar situaciones serias, miró de frente al autor de tan ex abrupta peroración, nacida del luchador que se ve perdido, y, en la derrota, arroja cuanto halla a mano. De ahí que, con toda serenidad, ironía, y hasta humildad enérgica, con esa que posee el vencedor justo, en la contienda leal, replicó: «Yo no he dicho que el señor presidente me haya buscado para ponerme a su lado. Soy una persona tan insignificante... Pero, de cierto, que he hecho más que el señor diputado».

Nunca hubiera dicho el doctor Palomeque esta gran verdad como un templo, pues era indiscutible que el señor Errazquin no tenía los servicios prestados al país por el doctor Palomeque; pues, en seguida, en esa Cámara y en esa barra, donde se hallaban sus encarnizados enemigos, contra los cuales él solo venía luchando desde los desgraciados sucesos de Quinteros, no se oían más que muestras de desaprobación; admirados, asombrados de que un hombre honesto, laborioso, patriota y enérgico, tuviera el valor de ponerse frente a todos aquellos que así le herían en lo más hondo de su dignidad personal y política. ¡Al orden! ¡al orden! gritaban varios diputados. Otro tanto hacía el presidente, con olvido todos ellos de que el culpable era el señor Errazquin, a quien ese presidente y esos diputados debieron llamarle al orden desde un principio, cuando se expresó en aquellos términos absolutamente inconvenientes. No lo hicieron, porque aquella Cámara era hostil al doctor Palomeque, ¡como que estaba compuesta de los hombres del Cerrito! Y aun tenía el *tupé* el señor Errazquin de decir que «había concluido, porque la discusión degeneraba en personalidades que no eran de ese lugar». ¡Cómo es de recordarse el hermoso artículo de Larra sobre la polémica literaria! ¡El atacante convertido en atacado!

A REGAÑADIENTES SE RETIRAN LOS CONSIDERANDOS

Calmados los ánimos, hicieron uso de la palabra el señor Camino (1), a favor de la moción, y los señores Fuentes y Juanicó en contra de ella. Estuvo oportuno el señor Fuentes, cuando le decía al señor Errazquin que debía saber, si había leído la Memoria del ministerio

(1) Este señor, queriendo esconder el pensamiento que los guiaba, decía con mucho candor: «*Se está tratando de una cuestión económica y no de una cuestión política.*» Y el doctor Juanicó les apostrofaba exclamando: «Tres, cuatro meses llevamos del período legislativo, y por ¡cuestiones miserables! la época que más prometía al país y a los sostenedores de la situación, ha pasado en trabajos estériles. ¡Es lamentable!»

de Hacienda del año pasado, que allí había un cuadro de la Deuda Pública, y que en toda ella estaba la exigible, consolidada, francesa, brasileña, etc., etc., y que en ese cuadro debía estar el conocimiento que el señor Errazquin necesitaba; que era su deber haber visto esa Memoria y los Estados anexos a ella, y que, por consiguiente, tenía todos los datos necesarios. El señor Fuentes opinaba por que, de acuerdo con los artículos 56 y 57 del Reglamento, se devolviera al autor la moción, para que la presentara en forma, y que si quería la hiciera para que se aplazara la cuestión; lo cual era apoyado por el doctor Palomeque, «porque—decía—eso es lo mismo que yo propuse al principio».

La luz no se iba haciendo, sino que ya estaba hecha. El criterio con que el doctor Palomeque encaró el asunto, desde un principio, en el fondo y en la forma, ya estaba triunfante, hasta el punto de que al señor Errazquin le sucedería las del fondero del cuento de Daudet.

El señor Errazquin, dominado, como siempre lo estuvo, por el talento del doctor Juanicó, mas no por el buen sentido del doctor Palomeque, como una prueba de ese orgullo revelado en el incidente acaecido (1), al fin *retiró los Considerandos*, declarando, aunque a regañadientes, según lo hizo notar su amigo de causa el señor Aguirre, que «se suprimieran los Considerandos, y se votase la parte dispositiva». Pero, como esto no lo dijera con toda esa claridad reveladora de quien procede con conciencia, sino obligadamente, su propio amigo el señor Aguirre, a quien no le parecía bien esa actitud, desde que no daba importancia al retiro o no de los Considerandos, declaraba, al referirse a la manera como pronunció sus palabras el señor Errazquin: «*Porque lo pudo hacer en voz un poco más alta de lo que lo hizo el autor de la moción*».

Por lo demás, el señor Lapido sostenía que la moción, tal cual estaba presentada, fuera con los Considerandos, o sin los Considerandos, no estaba en la forma que establecía el Reglamento. Hacía resaltar que la moción tenía una porción de Considerandos sobre puntos de gravedad. «Establecen—decía—una censura al Poder Ejecutivo sobre sus procedimientos, sobre su conducta, sobre sus promesas, sobre puntos completamente distintos de la cuestión que debe preocuparnos, la cuestión de la Deuda. ¿Cómo se pretende que se vote como una sencilla cuestión previa? (2). La cuestión previa, la cuestión de orden, que se podría votar como lo establece el Reglamento hablando de las mo-

(1) El doctor Palomeque había dicho al principio: «La Mesa no puede quitarle a ese escrito lo más importante de él, a no ser que el señor Representante haya retirado (lo que yo no creo) los considerandos». Y como el presidente observara que eso no era lo que iba a sancionar la Cámara, entonces el doctor Palomeque decía: «Si eso lo ha presentado el señor representante por Montevideo, ¿cómo ha de permitir que se corten sus ideas?»

(2) Aquí el presidente interrumpía para hacer presente que el autor de la

ciones previas, es la de si la Cámara se ha de ocupar de la orden del día o de la moción del señor Representante ; porque la moción del señor Representante no es una moción previa, sencilla, sino muy seria, de interpelación, de censura al Poder Ejecutivo ; no es una simple moción de orden. Cada uno de los Considerandos merece la pena de una discusión». De ahí deducía que la cuestión debía precisarse, para votarse, así : si la Cámara quería ocuparse de la orden del día, o si quería ocuparse de la moción del señor Errazquin.

Y ésta era la verdadera manera de encarar el asunto, y no de saber, como lo había indicado el señor Juanicó, para salvar a su amigo del atolladero, si se retiraban los Considerandos y se discutía el punto promovido.

Con mucha oportunidad terció entonces en el debate el señor Fuentes para sostener que el señor Errazquin no podía retirar los malditos Considerandos, sin una votación de la Cámara, siendo lo que se pretendía, decía, «*un nuevo manejo* que aparece aquí».

Por su parte, el doctor Palomeque, que había pedido la palabra al mismo tiempo que el señor Fuentes, para expresar igual pensamiento, lo robustecía sosteniendo que «ese *arrepentimiento* tenía que resolverlo la Cámara». «No puede ya—decía,—así no más, un Representante, después de haber hecho una censura de esta naturaleza, recogerla así no más. Es necesario que esté ahí. Si es gloria, para él será ; si es ignominia, que cargue con todas sus consecuencias».

El presidente, al oír esta frase, creyó conveniente interrumpir al orador, para manifestar que esas expresiones no se permitían en ese recinto, a lo que el interrumpido contestaba con energía : «Hoy me han silbado, y, ¿cómo se ha permitido?»

El doctor Palomeque era un luchador incansable. No fácilmente se le dominaba, cuando pisaba, como aquí, en buen terreno. Había dicho bien aquello de *arrepentimiento*. La expresión le escocía al señor Errazquin, y a su aliado el señor presidente don Julio C. Pereyra, por lo que el primero no creyó del caso guardar silencio, aunque no se preocupara de aquello que el señor Fuentes había declarado respecto al *nuevo manejo* que aparecía, que hacía *pendant* con las expresiones fuertes del doctor Juanicó. El señor Errazquin preguntaba quién le había dicho al diputado que él se arrepentía, y que eso no era de la discusión.

LOS SEIS DISCURSOS DE JUANICÓ

Hemos querido reservar para lo último la exposición detallada, con sus consideraciones, de los varios discursos pronunciados por el doctor Juanicó en este debate previo, en el que quedaron deslindadas las

moción había retirado sus considerandos. El presidente Pereyra fué parcial en la dirección de la discusión. En prueba de sus sentimientos, al final se le vio votando por la moción del señor Errazquin.

posiciones de los combatientes, si bien ya hemos extractado algo pertinente a los puntos estudiados, en lo referente a la situación personal del señor Errazquin.

Seis veces usó de la palabra el doctor Juanicó, tratando de hacer equilibrios, sin conseguirlo. Pretendía salvar a su amigo Errazquin, pero, a lo mejor, después de censurar, entre líneas, los *personalismos*, *sarcasmos*, etc., caía en ellos, empleando las frases duras ya conocidas. No estuvo a la altura de su legítima fama, ni trajo al debate ningún argumento nuevo, ni en la forma, ni en el fondo, que no hubieran enunciado los otros oradores. Parecía como que no quisiera participar de la discusión, no obstante haber hablado tantas veces. Recién a lo último, como si todo lo alegado hubiera sido una improvisación, dió en el clavo, proponiendo lo mismo que el presidente y demás oradores habían sostenido, que se rechazara la moción, no entrando a la discusión particular. Recordó que el señor Errazquin tenía el derecho de proponer su moción, y la Cámara el de considerar si convenía ese aplazamiento, sin dar mayor importancia a lo de los Considerandos, si bien podía tener inconvenientes. Le admiraba «el esfuerzo y la premeditación que veía en este caso», para concluir por una de esas exclamaciones tan naturales en él: «¡Vengan los Considerandos!» No quería aplausos de la barra, aunque se «admiraba de que alguno que pedía aplausos, alguna vez se opusiera a la reprobación», lo que era apoyado por el doctor Palomeque. Traía a colación el hecho del atraso del Cuerpo Legislativo, manifestando que no se ocuparía de lo relativo a la Memoria de Hacienda, pues quería «tratar de la cuestión de actualidad, de esta cuestión de la Deuda, sin la cual—a su juicio—no había presupuesto, no había arreglo financiero de ninguna naturaleza». La Deuda «ya era muy grande para medirla, no se necesitaba ir en busca de detalles, ni de instrumentos especiales, para valorar lo que tenía de espantoso esa masa enorme que pesaba sobre la República, que montaba a millones y millones, cientos de millones». Su convicción profunda era que no había Memoria de Hacienda, no había plan de Hacienda, mientras no estuviera completamente eliminada esa cuestión, por lo que ya la Cámara le había dado esa preferencia, sin necesidad de la Memoria de Hacienda, ni cosa que se le pareciera». No comprendía que «en los momentos mismos en que no había razones que oponer, porque todas habían sido completamente satisfechas, en el último instante se viniera a decir: ¡oh! venga la Memoria de Hacienda, para que veamos si esa Deuda de cien millones ha de pesar o no sobre el país; y que esto lo dijera su muy honorable amigo, que había sido ministro de Hacienda, y visto nacer ese fantasma enorme!!!!.... (Y aquí ponía cuatro admiraciones, y otros tantos puntos suspensivos). Recordaba las guerras fratricidas, de donde dimanaban esas deudas, por lo que lo primero que necesitaba el país era despojarse, presentarse al mundo entero con su cabeza descubierta, diciendo

aquí estoy, cubriendo hasta *las iniquidades* que han pesado sobre mí!!!!.... (Y aquí otras cuatro exclamaciones y otros tantos puntos suspensivos). El pueblo, que no había hecho esto, según él, no había dado un paso adelante, porque sin finanzas, sin Hacienda, no había administración. Hacía presente que la moción no significaba ilustrar la materia, porque todos estaban sobradamente ilustrados, sabiendo los millones que pesaban sobre ellos, pues diez millones más o menos importaba muy poco cuando se trataba de números enormes como los que pesaban sobre la nación. Le daba tal importancia a la cuestión, que pedía fuera nominal la votación al sancionarse definitivamente el asunto, pues quería que figurara su nombre en ella.

Así terminaba su primera exposición. Era contundente; pero el señor Errazquin, si bien era hombre de pocas palabras, tenía tenacidad, y contestó, aunque nada fundamental, manifestando que desafiaba al ministro de Hacienda que le dijera cuál era el estado del país.

Sin duda creyó que iba a anonadar con esta pregunta al señor Nin Reyes, a quien no consideraba preparado para responderle. Recibió, en cambio, un soberano chasco, pues el secretario de Estado le interrumpió, con una contestación de no te muevas, en la que se veía cuán conocedor era de lo que tenía entre manos.

¡EL CAOS!, exclamó inmediatamente el señor ministro, sin agregar una frase más.

En esa expresión estaba encerrado cuanto pudiera desarrollar al respecto, y justificada la necesidad de entrar cuanto antes al estudio del contrato Mauá, cuyo aplazamiento pretendía el señor Errazquin, tan sin fundamento.

Lo que decía el ministro de Hacienda era apoyado por el doctor Palomeque, pues éste observaba que «lo que daba una tristísima idea de un diputado era, cuando se presentaba un documento de esa consideración, y no se sabía explicar, pues el señor diputado no lo había explicado hasta entonces».

Y vuelta el presidente Pereyra a interrumpir al orador, diciendo que el Reglamento prohibía las alusiones personales. El orador declaraba que no hacía tales alusiones personales, y que, como lo quería el señor presidente, iba a la cuestión.

«Los conocimientos—decía—que el señor Errazquin pedía, no los había dado mejores cuando fué ministro. Ellos estaban en la Contaduría, de donde el mismo mocionante los había tomado, no excediendo toda la Deuda de 110 millones, incluso la inglesa, francesa, norteamericana, y la llamada como brasilera. «Este sería—decía el doctor Palomeque—el principal conocimiento que necesitaría el señor diputado para entrar en la materia: lo que debemos, porque lo que tenemos es bien conocido. Pues bien: tenemos una Deuda de 110 millones. ¿Cómo pagaremos esta Deuda? ¿Con el proyecto que ha pasado el Poder

Ejecutivo? Y ¿para eso se necesitan Memorias, se necesitan conocimientos financieros, se necesitan las cuentas, los estados de lo que se tiene y de lo que se recibe? Quién sabe si el señor diputado quiere alguna otra cosa... Por eso sería bueno que explicase su pensamiento.»

Y volvía el señor presidente a interrumpirle, diciendo que el Reglamento prohibía dirigirse individualmente a ningún diputado; mientras el orador sostenía que él hablaba *del diputado*, pues lo prohibido era llamarlo por su nombre. Él hablaba *del diputado* autor de la moción. El presidente quería se dirigiera a la Cámara en general o a la mesa.

Dirigirse a la Cámara o a la mesa, que era lo que el orador hacía, era una cosa; pero manifestar que el diputado explicase su pensamiento era otra distinta, y admisible en todo Congreso. El doctor Palomeque no se había *dirigido* al diputado, sino a la Mesa, diciendo que *sería bueno que el diputado explicase* su pensamiento, sin darle *su nombre*. Lo que no puede hacerse es dar el *nombre y apellido*, pero sí indicar al *diputado por tal o cual Departamento*.

Ante la insistencia del presidente, el orador tuvo un gesto irónico, y dijo: «Así es, entonces diremos... que la moción ha sido presentada por la Cámara en general»; lo que produjo hilaridad en la barra. Luego se decía: «Pero, ¿cómo distinguiremos aquí al autor del pensamiento?». Y, como no aflojara la presidencia, él decía: «Muy bien, muy bien. Un diputado ha dicho... ¿Podré expresarme así, señor presidente?», lo que producía nuevas risas en la barra. Y siguió hablando en esta forma: «Un diputado ha dicho... El señor diputado... Otro señor diputado (es verdad que no se puede señalar) ha hecho un discurso muy bonito, muy teórico; pero no ha entrado a la verdad. Yo, un poco más tosco, voy a explicarme. He leído en los diarios de la capital, de dos o tres días a esta parte, que se prepara un proyecto que reemplaza al que tiene la Cámara en consideración...»

Y el presidente volvía a interrumpirle, a título de que ésa no era la cuestión. Era un absurdo, pues se ignoraba lo que el legislador iba a decir. ¡Y así, fastidiado, el orador echó en cara a la presidencia que otro diputado antes que él había salido de la cuestión, sin que la Mesa cumpliera con su deber, siendo él el único así tratado!

Esto era apoyado, en medio de la agitación de la barra.

El presidente entonces se amostazó y pidió silencio, amenazando con dar cumplimiento al Reglamento. Y el doctor Palomeque, con ironía serena, concluyó por decir, en medio de las risas de la barra: «Yo iba a hablar del Banco Comercial!... Veo que no puedo hablar». «Hable el señor Representante, pero en la cuestión», decía el presidente. «No, señor», contestaba el doctor Palomeque.

¡Y así concluía este atentado a la libertad de la palabra, sin que ninguno de los miembros de esa Cámara tuviera el valor de cumplir con su deber y pugnar por los fueros de su compañero! En el fondo,

se felicitarían al ver que el presidente de la Cámara, hijo del presidente de la República, a quien el doctor Palomeque defendía, era quien procedía de esa manera incalificable. El señor Pereyra no veía, a pesar de tener ojos, que detrás de esa moción previa había un propósito político : el de aplazar el asunto, clausurarse las Cámaras, y no volver a tratar el punto sino en el próximo período legislativo, cuando ya no fuera presidente de la República el señor Pereyra y dominaran los elementos conservadores del Banco Comercial contra los elementos democráticos del Banco Mauá ! Esto era, sin embargo, lo que veían los buenos ciudadanos, con Palomeque y Juanicó a la cabeza, por lo que este último se apresuraba a hacer presente que la Cámara «no llenaba su misión, *pasando en trabajos estériles*, perdiendo el tiempo, sin dictar las leyes fundamentales, y todo por CUESTIONES MISERABLES !»

Pero, si el señor presidente había conseguido, sólo por el momento, pues el doctor Palomeque reaccionaría, y no abandonaría así no más la palestra, que éste no continuara desarrollando su pensamiento para demostrar que aquí había «algo más serio que los intereses *mezquinos y miserables* que al fin y al postre estaban en juego en materia de la Deuda, sobre si había un arreglo tal o cual, y en que *fuera un Banco u otro Banco*, y otras cosas parecidas» (1) ; ello lo diría, en seguida, así textualmente, con esas palabras crudas, el doctor Juanicó, sin que entonces, ese mismo presidente, ignorante de su elevada misión, se atreviera a decirle al doctor Juanicó : «¡ A la cuestión ! ¡ a la cuestión ! ¡ Usted no puede hablar de eso ni de esa manera !» ; Ya veremos cómo el doctor Juanicó así lo expresó, después que el doctor Palomeque lo había insinuado, y así manifestado, pero sin hablar de *intereses mezquinos y miserables* ! Esto sí que el señor presidente pudo decir que no se permitía ; ; pero Juanicó era el jefe de la mayoría, y se sentía su dominación sobre la Mesa !

Sin embargo, después de aquel incidente, apareció en la liza la dulce y melancólica figura del doctor Arrascaeta, con todas las energías que lo adornaban. Venía a pugnar por la buena causa, sin arrearle la actitud inconsulta de la presidencia. No comprendía cómo una interpelación podía servir de fundamento a la moción de aplazamiento de una cuestión tan importante. No desconocía el derecho de interpellar. Hizo la historia de las demoras sufridas, recordando que la Comisión de Hacienda primero había presentado un informe desviando la discusión de la Cámara por medio de una Minuta de Comunicación al Poder Ejecutivo ; haciendo resaltar que el Poder Ejecutivo, con la atención y el celo que merecía el asunto, había tratado de evitar el aplazamiento, reconociendo los puntos criticados por la Comisión (2). Cuando después de tres meses parecía que nada dificultaba la discu-

(1) Página 98 del Diario de Sesiones.

(2) La Comisión de Hacienda guardó un silencio sepulcral en este debate. El miembro informante, el doctor Vázquez Sagastume, nada decía.

sión, resultaba que se estaba condenado a no tratar el proyecto. No podía concebir que se sentara el precedente para paralizar la acción parlamentaria en esa forma, pues después vendría otra moción, y así nunca se acabaría. Sostenía que al crédito del país convenía entrar cuanto antes a discutir públicamente el proyecto, por lo que la orden del día debía considerarla la Cámara. «Ella—decía—resolverá, ella formará su opinión, apreciará el contrato y declarará si ha de ser una obligación de la nación o no. Este es el orden; esto es lo propio de un pueblo, de un Parlamento ilustrado. Pero, venir aquí a *sacar como escamoteados los asuntos*... esto no es digno. Por mi parte, votaré en contra, y lo rechazo como representante del pueblo.»

El señor presidente veía que la tormenta arreciaba, y que si la discusión continuaba, no iban a triunfar así no más los obstruccionistas, por lo que se apresuraba a que se votara en seguida. Era indudable que cuanto más se discutiera, más clara se exhibiría la tendencia de la oposición, y que muchos, o algunos amigos del señor Errazquin, que también lo eran del doctor Juanicó, quizá no se atreverían a persistir en el camino adoptado. Y, como era parcial el señor presidente, procedía de aquella manera, inmediatamente que terminaba su discurso el doctor Arrascaeta. Y fué entonces que volvió a intervenir el doctor Palomeque, produciéndose el incidente desagradable con el señor Errazquin de que ya hemos dado cuenta, para luego usar de la palabra, en los términos ya expuestos, los señores Fuentes y Camino.

Vino luego el segundo discurso el doctor Juanicó. Aspiraba a traer «la cuestión a su verdadero terreno, dejando todo lo que tuviera de personal y lo que hubiera de desagradable en apreciaciones, alusiones y sarcasmos que hubieran podido surgir». Volvía a declarar que a pesar de estarse en los últimos días del período ordinario, no se había aún siquiera tomado en consideración el Presupuesto, el papel sellado, la Contribución Directa, etc.; y que no era del caso estar *marchando siempre en el fango*, enredándonos, sin contribuir a que el país se desenvolviera como correspondía al Cuerpo Legislativo y a la Cámara de Representantes». Tenía la persuasión de que la mayoría de los diputados *sabían de sobra en materia de la Deuda*, y que era cosa insignificante eso de diez millones más o menos, siendo cosa despreciable relativamente a los números totales. Lo importante era que se trataba de convertir al 5 %, es decir, que si eran diez millones, serán 5, si 80, serán 4. Estaba completamente habilitado, como asimismo la generalidad de los compañeros, para entrar en la cuestión principal, hallando que no les sobraba tiempo para andar buscando datos, que para él eran completamente insignificantes. A su juicio, el ministro de Hacienda no podía formular ningún plan mientras no se supiera si había arreglo de la Deuda. La moción de aplazamiento, fundada en la presentación de la Memoria en la que se hablaba de todos los ramos de Hacienda, la rechazaba. «Todavía—decía—si la moción dijera que faltaban ta-

les o cuales datos en materia de Deuda y que se pidieran por ser necesario tenerlos a la vista, él no se opondría.» No quería que se jugara con estos negocios, e insistía en que estaba preparado completamente para la cuestión, creyendo difícil traer nuevos y verdaderos datos sobre el particular, que real y verdaderamente importaran. El aplazamiento importaba perder un tiempo del cual sus comitentes tenían que pedirles estrecha cuenta. Y expuesto esto, fué cuando habló de todo aquello ya citado sobre oposición al Ministerio, de oposiciones personales, sin ideas, sin bases, sin planes, sin principios, en medio de las circunstancias que se atravesaba, con la elección presidencial al frente. Fué entonces cuando dijo aquello de que *«¡lo demás es miseria! ¡miseria! e inútil el aplazamiento»* hablando de *«los intereses miserables y mezquinos*, que, al fin y al postre, estuvieran en juego en materia de la Deuda, sobre si había un arreglo con tal o cual, y en que fuera un Banco u otro Banco, y otras cosas parecidas».

Con este nuevo discurso del doctor Juanicó, en el que, como se ve, el orador sintió la necesidad de repetir muchos de los argumentos aducidos por él y por otros, y de insistir sobre su preparación y la de la generalidad de los legisladores, parecía terminado el debate, y se puso a votación si el punto estaba suficientemente discutido. Así lo declaró la Cámara, para después de una discusión enredada concluir por rechazarse la moción del señor Errazquin, no sin antes casi proclamarse su triunfo, por aparecer dudoso el resultado, según lo proclamaba el secretario!

Cuando claramente se dijo por el señor secretario: ¡Negativa!, hubo agitación en esa barra que expresamente había ido, como otras veces, a hacer una de las suyas.

Se iba al fin a entrar a la orden del día, después de tantos meses de demoras, miserias, chicanas, malos manejos y escamoteos, como lo habían dicho los señores diputados. Y en esos momentos, en que la victoria se pronunciaba, después de un debate prolongado, agitado, personal, en el cual se habían puesto a prueba las facultades de hombres como Juanicó, Arrascaeta, Palomeque y Fuentes, frente a las de los señores Errazquin y Camino, se oía la voz del doctor Palomeque que decía: «Desearía que los señores Representantes no se ausentasen, pues vamos a entrar a la orden del día». Parecía como que hablara desde el sillón presidencial, donde tantas veces se sentara para dirigir la discusión con imparcialidad, rectitud y competencia. Él había iniciado el debate, y él era el último en hablar, siendo sorprendente que durante todo él ningún miembro de la Comisión de Hacienda tomara participación (1).

Iniciado el debate, se leyeron el contrato celebrado con Mauá, el

(1) La componían los señores Luis C. de la Torre, Juan F. Pagola, José Vázquez Sagastume y José A. Iturriaga.

dictamen de la Comisión de Hacienda, y el Proyecto aconsejado, «con las modificaciones convenidas en conferencias con el señor ministro del ramo y el señor barón de Mauá». Puesto en discusión general, nadie lo atacó. Votado nominalmente, dió el resultado siguiente:

NEGATIVA.—Pereyra, Aguirre, Lerena (Luis), Echenique, Tapia, Camino, Basáñez, Díaz.

AFIRMATIVA.—Alvarez, Victorica, Antuña, Fuentes, Pérez (Antonio), Illa, Lapido, Barboza, Arrascaeta, Juanicó, Pérez (Martín), Lerena (Avelino), Vázquez Sagastume, Rodríguez, Sierra, Gómez, Latorre (Pedro), Palomeque, Fisterra, Lafuente, Latorre (Luis), Buceta, Moreno, Molina y Haedo, Pagola, Iturriaga, Cavia.

Así, por 27 votos contra 8, fué sancionado, en general, el proyecto, dejando allí su nombre cada legislador para que la historia le otorgara el galardón merecido. Por cierto que ésta glorifica a quienes solucionaron la cuestión. El tiempo se ha encargado de hacer esa declaración.

EL GLADIADOR PARLAMENTARIO

No estaba concluído el debate. La cosa aun era dura de pelar. No sólo existían los enemigos del proyecto, en sí mismo, sino que de esa mayoría surgirían quienes, como Lerena (Avelino), Alvarez y Moreno, estuvieran en desacuerdo sobre puntos muy fundamentales, y en especial el relativo al impuesto del 4 % a las carnes y a las harinas. Se emplearon seis sesiones consecutivas, de día y de noche, en las cuales luchó brillantemente el talento del doctor Juanicó (1). Fué el héroe de esa jornada parlamentaria, en la que se destacaron su agilidad de espíritu y su manera dominadora. Nunca dió mayores pruebas de resistencia física e intelectual. Atendía a todas las objeciones, pues no quería que se votara tan magno proyecto sin una ilustración amplia y completa, de cuyo pensamiento participaban quienes lo acompañaban en la brega. Se daba cuenta de lo que las generaciones futuras dirían respecto del asunto, aspirando a dejarles todos los elementos para su estudio imparcial y su fallo justiciero. Por eso incitaba a los adversarios del proyecto a que expusieran todos sus argumentos, sin pretender coartarlos en el uso de la libertad parlamentaria. Se discutió hasta el cansancio, sin que el obstruccionismo de los impugnadores fuera suficiente a impedir el fallo parlamentario. A veces se llegó hasta tocar la personalidad de Juanicó, y éste se levantaba indignado, iracundo, en el fondo, pero culto en la forma, hasta obligar al combatiente a dar explicaciones, que él, en su natural soberbia, no admitía ni rechaza-

(1) Sesiones del 28 al 31 de mayo de 1859. Comprenden 281 páginas del Diario de Sesiones.

ba, guardando un silencio significativo y elocuente. Durante esa batalla, el orador tuvo que presentar diversos flancos y hacer contramarchas; de tal manera lo acosaban los adversarios. De repente sostenía una idea; luego, en el terreno, al verse rodeado por tanto enemigo, se batía en retirada, y cambiaba de sendero, yendo, a veces, a confundirse hasta con el mismo combatiente, para luego retroceder a ocupar sus antiguas posiciones. Cuando parecía resuelto a no proceder como se le exigía, resistiéndose con toda energía y decisión, he aquí que practicaba un cambio de frente, desarmando al atacante con su suavidad arrobadora, metiéndose en la entraña de su corazón. En seguida, cuando ya se le creía aliado, escapaba del terreno donde pisaba, después de haber inspeccionado a fondo las rochelas contrarias, y, dando un salto gigantesco, enristraba nuevamente su espada, que era la verba iluminada por el genio, y arremetía sin piedad, pero nunca hasta ultimar al vencido. Conservaba, en todos sus arrebatos, en sus impulsos, cuando la voz tronaba bajo la cúpula de aquel pequeño salón, aun cuando increpaba, un dominio absoluto de sus facultades, que le hacían contener el golpe de muerte que parecía iba a caer sin consideración ni pena, destrozando cuanto encontrara en su marcha vencedora. Nunca abusó de la victoria, porque era hombre conocedor del mundo, y sabía, mucho más, en el caso, tratándose de sus amigos, que el adversario de hoy puede ser el aliado de mañana, por lo que no hay que cavarse un abismo adonde arrojar el corazón adverso. Por el contrario, su cultura hacía que atrajera, aun cuando atacaba.

Tenía una manera especial de combatir. Pocas veces era el primero en descender a la arena. Dejaba que sus compañeros despejaran primeramente el campo de acción. Era algo así como el espada en el toreo. Luego, cuando los ánimos estaban enardecidos, y la cuestión se desviaba de su curso, allí aparecía él pidiendo la palabra para restablecer el orden, calmar las pasiones y colocar las cosas en su lugar. Y la pedía a veces de una manera humilde y graciosa lo que producía risas en la barra: ¡Para cuando me llegue el turno!, solía decir. El turno era el del espada para concluir con el toro.

Ahora bien, ahí estaban el proyecto de la Comisión de Hacienda y el contrato con Mauá. La Comisión, en mayoría (1), aconsejaba se aprobara el contrato, pero con las modificaciones aceptadas por el ministro y por Mauá.

La primera cuestión suscitada, que lo fué por don Avelino Lerena, consistió en lo que iba a discutirse, si artículo por artículo del contrato, o sólo el proyecto de la Comisión, que aconsejaba su aprobación, indicando las modificaciones.

El contrato constaba de 22 artículos; el proyecto de la Comisión, sólo de dos. Del pensamiento del señor Lerena participaba el señor

(1) Ya hemos indicado quiénes componían esa mayoría, en nota anterior.

presidente. El señor Juanicó sostuvo entonces que en un asunto de tanta importancia, no debía evadirse ninguna discusión. Aspiraba a que la discusión fuera profunda, sin dejar punto alguno dudoso por aclarar, debiendo discutirse todo—ambas cosas—el dictamen de la Comisión, y el contrato. Pero, como no se trataba de un proyecto de ley sino de un contrato sujeto a varias voluntades, el Cuerpo Legislativo debía limitarse a hacer lo que se había hecho cuando se discutió el tratado de modificaciones al de 1851, es decir, *discutir* los artículos, para que cada cual salvara su opinión, y sólo *votar* el dictamen de la Comisión. Esto fué lo que quiso proponer el doctor Juanicó, pero no lo hizo claramente. Luego, ante las observaciones de los señores Fuentes y Lerena, el primero de los cuales estuvo muy acertado al indicar se discutiera el proyecto de la Comisión, mientras el segundo persistía en su pensamiento, tomó nuevamente la palabra el doctor Juanicó y explicó mejor su propósito, el que fué secundado por el doctor Palomeque. Éste, sin embargo, quiso dejar constancia de la negligencia de la Comisión de Hacienda, la cual guardaba silencio, sin informar debidamente, para que el debate rolara alrededor de lo que ella expusiera. La Cámara, de una manera tácita, aceptó el procedimiento de *discutir*, pero *sin votar*, artículo por artículo del contrato, para luego votar el dictamen de la Comisión. No hubo una resolución expresa de la Cámara. El presidente se adelantó a decir, por sí y ante sí, que «iba a ponerse a consideración de la sala el artículo 1.º» (1).

Cuatro horas hacía que se discutía. El doctor Juanicó estaba algo enfermo, por lo que pidió se levantara la sesión. Y así se hizo, porque, al fin y al cabo, él era el verdadero miembro informante de la Comisión de Hacienda, la cual, a lo último, ya ni existía, tal era el desquicio de ideas de sus miembros.

ORATORIA DEL MINISTRO NIN REYES

En la sesión siguiente, el ministro de Hacienda, señor Nin Reyes, al discutirse el artículo 1.º del contrato, hizo una exposición lo más sesuda sobre el origen de la Deuda, dando a conocer antecedentes importantes (2). En la primera legislatura constitucional, nos lo hacía saber, el Poder Ejecutivo había declarado que el Estado debía 200,000 pesos. Y esto había desalentado, desesperanzado a los legisladores. Mientras tanto, «hoy—decía—es habitual entre nosotros oír hablar de 200 millones; oír decir que nada importa deberlos, que es un mal remediable. Hemos estado bajo la influencia de esa opinión durante diez años ya. Cómo ha podido operarse ese cambio, creo que merece considerarse». Tuvo un recuerdo honroso para los administradores de

(1) Sesión del 28 de mayo de 1859, página 119, tomo 6.º

(2) El señor don Antonio Díaz dice en su obra, en mucha parte llena de parcialidad y superficial, que Nin Reyes no era orador, lo que es un gran error.

otras épocas, tanto por su competencia como por su honradez. Reconoció que ellos habían montado bien la máquina, pero que movimientos convulsivos y violentos no la habían dejado marchar. Al llegar a la «época desgraciada de 1843, la República debía 10 millones al empezar la guerra que duró 10 años». Desde entonces fué milagroso que quedara un solo valor en la República. Pero lo que debía extrañarse, lo que más sorprendía, era que después de haber salido de esa época calamitosa, en vez de ocuparnos—decía el señor Nin Reyes—«de echar una mirada retrospectiva sobre el pasado, buscar, coordinar los únicos elementos que podían servir a la reconstrucción del edificio social, la Administración que debía regirlo, nos lanzamos, como locos furiosos, a exagerar, a pervertir las doctrinas financieras, y creíamos muy posible que podríamos reconocer millones, más arriba del número de la población, de todos los valores fundados, circulantes, fijos de un Estado. Imbuídos de esas ideas, se sabe con qué velocidad fué aumentando el número de esas deudas». En esta situación, se buscaron todas las inteligencias competentes para estudiar la cuestión, sin que dieran solución al problema «ni en los momentos en que sus números eran muy diferentes de los que hoy servían de base a los cálculos». «El mal—decía—estaba hecho. La Deuda debía tener su fijación legal. Una legislatura creyó deber dar la ley que constituyese la Deuda de la República, la consolidase y fijase su servicio corriente. Desde ese momento, señores, no puede hablarse sino con respeto, de lo que es una obligación de la nación, legalmente establecido.»

La ley había garantido el pago de esa Deuda con todas las rentas, con todas las propiedades dominiales del Estado, «un resto de esa pingüe herencia que nuestros padres nos habían podido conservar».

Pero la buena voluntad no bastaba. El caos era un hecho. ¡No se podían pagar los dos millones de la Administración, por lo que era imposible abonar los tres millones de intereses de la Deuda! Para conseguir el resultado suspirado, era necesario que las propiedades y valores de la República alcanzasen a la proporción en que debían estar para poder soportar las imposiciones con que atender al servicio. Y esa creación de valores no era cosa imaginativa, por ser hechos que se producen como fruto del trabajo del hombre, reducido a población. Era pretender milagros que la población produjera más de lo que podía producir. Ni siquiera podía contarse con el trabajo anterior acumulado o los capitales que reemplazaban la falta de individuos, porque las guerras y los trastornos pasados habían quitado esa potencia de creación. El esfuerzo del hombre sólo había sido posible sobre una muy pequeña parte de lo que había quedado subsistente. Lo quedado eran escombros, representativos de esa Deuda, que nada valía, porque no había con qué saldarla.

El señor Nin Reyes recordaba que ese aumento de población había sido imposible, porque la inmigración retrocedía ante el peligro de ver

amagado anticipadamnte el trabajo, la producción, con una amenaza viva. Se había tratado de atraer esa inmigración, pero imposible. «Se encuentra, pues, la República—decía—girando en un círculo vicioso, y en este dilema : no habrá inmigración mientras no haya paz, o a lo menos no esté tan amenazado el trabajo del nuevo habitante ; y no habrá posibilidad de salir de esa imperfecta condición, mientras no venga inmigración. Hemos estado luchando diez años con esa dificultad.»

Es con íntima satisfacción que se exhuman documentos como éstos, extractados extensamente, para que aparezcan fulgurantes en las páginas de la historia los hombres desaparecidos, y no sólo desconocidos, sino calumniados en sus intenciones y hasta en sus talentos. A medida que se estudia la época política que examinamos, se ve cuán grandes eran los personajes, y nobles los propósitos de quienes aparecían en la escena. El pueblo y sus poderes tenían representantes honestos y sabios, que no sólo conocían la materia, sino que vivían entregados, en cuerpo y alma, a la cosa pública, para con sus talentos y virtudes sacar al país del caos en que se hallaba. De esa índole eran, desde el presidente Pereyra a sus ministros y legisladores, no superados en ninguna época de la historia. Por eso esa nueva administración inaugurada el 1.º de marzo de 1856, que recibió aquello en un horrible desorden, en una bancarrota espantosa, en la que a nadie se pagaba, ni siquiera a los tristes empleados, pudo, con tales colaboradores decididos, enérgicos, honrados y competentes, despejar el horizonte y entregar a la administración siguiente, la de don Bernardo P. Berro, el país en paz, con rentas propias y con una corriente inmigratoria ya iniciada. Desgraciadamente esa evolución constitucional sería interrumpida, y la nación volvería a ser el juguete del caudillaje de arriba y de abajo. El historiador futuro, desapasionado, amante de la verdad, hará justicia a aquellos hombres, y entonces se destacará en la conciencia nacional la figura del gobernante que la presidió y la de sus laboriosos colaboradores. Muchas veces la grandeza del primer mandatario no consiste tanto en los destellos de su genio, ni en lo que él mismo produzca bajo su firma, cuanto lo que consiente que se haga por quienes ha sabido elegir para colaborar en la obra. En ese sentido, las personalidades que Pereyra tuvo a su alrededor, como Requena, Batlle, San Vicente, Díaz, Nin Reyes, de las Carreras, etc., revelan el buen sentido común de que estaba dotado para elegir, según los momentos, los hombres que debían acompañarlo. Nin Reyes era uno de ellos. Su preparación financiera era indiscutible. En los momentos en que actuaba fué uno de los más brillantes de su vida. Estaba en toda la fuerza de sus facultades. Poseía, además, esa sutileza, malicia y diplomacia necesarias para la intriga política, en la que era ducho. Las generaciones de estos últimos tiempos, al verlo, viejo ya, decaído, pobre, miserable, quizá representando, en ciertos actos públicos, papeles indignos de una

personalidad como la suya, sin que esto quiera decir que afectaran su honestidad, no han podido darse cuenta de lo que ese hombre había sido, y lo mucho que había trabajado para sacar al país del lodazal en que yacía. No se conoce a nuestros hombres. No se les estudia. Es verdad que no ha habido tiempo para ello. Y cuando se ha hecho, la pluma los ha pintado bajo el cariz partidario, mixtificando los hechos, quizá inconscientemente, para deprimir a unos y exaltar a otros. La obra de Nin Reyes, en lo que respecta al arreglo de la Deuda, es muy grande, muy meritoria. Ella sola lo exhibe y acredita como hombre de Estado, que tenía miras elevadas, y que sabía adonde debía dirigirse la nave para hacerla anclar en puerto seguro. El discurso anterior, y este de que nos ocupamos ahora, nos muestran la serenidad del espíritu y la profundidad del pensamiento. Era un razonador que buscaba el medio de convencer, exponiendo al lado del hecho brutal, el precepto de la ciencia. Y hecho esto, a fin de levantar la cuestión, en lo que todos estaban interesados, iba a terminar con una noble y substancial defensa de sus tareas ministeriales. Era un derecho legítimo, después de tanto ataque, y permitido a quien tal exposición, sesuda, acababa de hacer, sin herir, pero, eso sí, honrando a los anteriores administradores. Oigamos hoy esa palabra de ultratumba, diríase, que tanto lo levanta.

«La primera ocupación—decía—que tuve al hacerme cargo del Ministerio, fué considerar, analizar, estudiar en la historia administrativa de este país, las causas de tantos embarazos para alcanzar pronto esta prosperidad a que está llamado el país. No he descansado un momento en esta averiguación, en este estudio. El primer año, el año pasado, ocupado en los primeros trabajos de reorganización de nuestra administración, fuí atacado, se me acusó de despreciar la Deuda. En efecto, en la Memoria ministerial que tuve el honor de presentar a la Honorable Cámara, tuve que indicar, de una manera breve, una opinión, sobre esa monstruosidad. Sin embargo, se quería que hiciese algo para la Deuda; se acusaba de negligencia al Ministerio por no hacerlo. A todos contestaba del mismo modo, que no pudiendo pagar el servicio de la Deuda, era inútil esforzarse en darle un valor ficticio, en darle un aumento que sólo sirviese a especulaciones, que sólo sirviese al movimiento de la Bolsa. Expuse a muchas de las personas que me instaban para que hiciese algo sobre eso, cuáles eran las opiniones del Gobierno, cuáles eran las mías. La misión del Gobierno era mucho más alta, mucho más elevada que satisfacer intereses particulares, que halagar intereses individuales en este asunto. Por consiguiente, buscó conseguir su objeto. Su objeto era grande: era inspirar una resolución en las ideas pervertidas, sobre esa materia, y hacer conocer que era un imposible lo que se pretendía; que no había en la desproporción de esa Deuda medios de hacer nada, sin calcular y conciliar una operación, que, satisfaciendo las necesidades del país, de-

jase su honor intacto. No ha podido encontrar otro medio que el realizado en el contrato que nos ocupa.» Por lo demás, declaraba que sólo los acreedores podían hacer abandono de las leyes que se acababan de citar en el preámbulo del contrato y de todos los derechos adquiridos. «De este modo—concluía diciendo, como si recordara aquellas palabras de *«la gloria para el Poder Ejecutivo»* citadas en el primer Mensaje—verá el país desaparecer su monstruosa Deuda, sin faltar a ningún compromiso, sin violar la fe que es hoy su más caro respeto» (1).

EL ÚLTIMO ATRINCHERAMIENTO DE LOS OPOSITORES

La Cámara se engolfó en un debate sobre la forma en que debía dirigirse la discusión, en el que tomaron parte los señores Lerena (Avelino), Juanicó, Lapido, Arrascaeta, Palomeque, Vázquez Sagastume y Fuentes. Entonces el señor Lerena decía al doctor Juanicó que éste, «como de costumbre, abordaba la cuestión por los extremos, hablando de *aprobar o reprobar*, sin ponerse jamás en un término medio»; a lo que el aludido respondía dando las gracias (2).

El doctor Juanicó lo consideraba «un abuso mayor de los que pudiera atribuirle en ningún caso el señor diputado». No sabía cómo podía establecerse eso cuando se usaba de una absoluta libertad en la exposición de las ideas de cada uno. «Si es un medio de discusión—decía,—no vale la pena de contestar; si es para dar mérito a las razones que se den, es demasiado ligero.» Reconocía que se podía hablar «con algún calor en asunto que consideraba de gravísimo interés, pero que el Reglamento no lo prohibía». Y creía que se hallaba con derecho para rechazar del modo más absoluto la suposición de que la especialidad de los términos de que se valía en la discusión, imputara violencia o preponderancia de ningún género en el debate» (3).

Al fin, después de una discusión *majadera*, como la calificó el doctor Palomeque, con el apoyo del doctor Juanicó, se declaró que el debate y votación versaría, no ya sobre el artículo 1.º del contrato, sino sobre el proyecto de la Comisión. Para llegar a ello se perdió un tiempo precioso, del cual dan cuenta 50 páginas del Diario de Sesiones. Sólo el final de la sesión fué práctico y útil, sancionándose el inciso 1.º del artículo 1.º (4).

En la sesión siguiente sólo se votó el inciso 2.º.

El inciso 3.º dió lugar a una interesante discusión, no terminada en dicho acto, la que merece ser conocida detalladamente en las páginas de la historia.

(1) Página 125, tomo 6.º del Diario de Sesiones, año 1859.

(2) Página 128, tomo 6.º del Diario de Sesiones, año 1859.

(3) Mayo 30 de 1859.

(4) Desde aquí en adelante se celebraron dos sesiones, una de día, y otra de noche.

El inciso 3.º decía: «Los impuestos establecidos para el pago de los intereses y amortización de la Deuda, fundada en el artículo 12 del contrato, quedan reducidos a lo siguiente: 2 % adicional sobre los valores de importación; 4 % de exportación a los productos del país».

El señor Alvarez, uno de los miembros de la minoría de la Comisión, sostuvo que las carnes y las harinas no entrasen en el impuesto del 4 %, manifestando que Mauá estaba conforme en eliminar las carnes, «para evitar discusiones estériles en la Cámara y facilitar el arreglo de la Deuda». Sostenía que, establecer ese impuesto, era hacer ilusiones, en una parte, las concesiones obtenidas en el Tratado de Modificaciones de 1851. Creía sobrados los impuestos del 2 % de importación y 4 % a los demás productos del país. Afirmaba que Mauá así también lo creía. Pero, declaraba que la Comisión en minoría había tenido «el sinsabor de encontrar que el Poder Ejecutivo tenía sus razones para no aceptarlas». Agregaba asimismo que por el artículo 3.º o 5.º del citado Tratado, no se podía establecer impuesto alguno a las carnes que se exportaran por las fronteras, lo que importaría favorecer a los hacendados brasileños, en las fronteras, con perjuicio de los establecimientos en Montevideo y en el litoral. Y concluía exponiendo que tenía una carta de Mauá aceptando «se autorizara al Poder Ejecutivo para establecer un impuesto sobre las carnes, sólo en el caso de no alcanzar los otros para la amortización y los intereses».

El ministro de Hacienda no dejó sin respuesta esta exposición, aparentemente consistente y sólida. Poco le costó exhibir el error padecido. Al señor ministro no se le hallaba sin perros. Sabía todo lo que la oposición había dicho del contrato, y conocía los recursos de que se había valido. La prensa de la época lo había atacado de firme. Ni Lamas, ni Pereyra, ni Juanicó, ni Palomeque, ni Arrascaeta, se habían salvado de sus personales ataques. Allí, en Buenos Aires, era donde se fabricaban los artículos de combate. Las plumas de Sarmiento, de Gómez, de Mitre y de Obligado, siempre estaban listas para atacar a los hombres de Montevideo. Esa prédica sin fundamento, como los sucesos lo demostraron, era la que influía en el ánimo de Mauá, hasta el punto de hacer «sentir al Ministerio más de una vez su intención de retirar el contrato, si el Gobierno—decía el señor Nin Reyes—encontraba un medio de retirarlo de la discusión sin desdoro, sin inconvenientes de otro orden». Bajo esa disposición de espíritu, Mauá «hubiese estado dispuesto a todas las concesiones». Pero, no sucedía otro tanto con el Ministerio. Éste tenía la energía suficiente para llevar adelante «uno de los asuntos más importantes, en el que se fundaba el crédito del país». «Por eso es—decía—que he resistido, y aunque el mismo señor barón de Mauá, en el sentido del interés de su contrato, hubiese querido la abolición, por mi parte la habría resistido.» A tal punto era verdad esto, que declaraba haber accedido, de muy mala gana, al pensamiento consignado en el artículo 2.º de autorizar al Po-

der Ejecutivo para reducir o suprimir el derecho de exportación sobre las carnes y las harinas, en el caso de que el fondo destinado al servicio de los intereses y de la amortización excediera la cantidad exigida para ese servicio».

Con talento económico abordó el tema. No era uno de esos ministros que van a la poltrona a estudiar recién los asuntos, es decir, a aprender en ellos, a costa de los intereses generales del país, incurriendo en errores nacidos de la improvisación, y dando largas a lo que debiera resolverse inmediatamente, si es que estuvieran preparados para el puesto. Demostró cómo el punto en debate era de impuestos simplemente, a los que un país recurría cuando la necesidad lo reclamaba, sin preocuparse de lo que pudiera pensar el país extraño y sus Cámaras, los cuales podían discutirlos, si les interesaba. «El Gobierno—decía,—cuando lo ha hecho, está seguro de su derecho; por consiguiente, no cree violar ninguna de las estipulaciones del Tratado.» Reconocía que sería una fortuna poder librar de impuestos a las carnes, como de cualquier otro impuesto, pues cuando éstos no son necesarios es un mal crearlos. Con una claridad envidiable demostraba cómo la prima que el saladerista gozaba ahora en el país consumidor, en el Brasil, al abolirse, por el nuevo Tratado, el 15 % a la entrada allí del ganado en pie, no era ningún obstáculo, pues el impuesto a crearse aquí no era para favorecer al país consumidor, «sino para quedar a llenar los servicios del país productor». Destruía, con una lógica de fierro, otro de los argumentos hechos, cuando decía que «el saladero, en cualquier parte donde estuviera, era un taller, una fábrica, que estaba dentro de la República, estuviese situada en Montevideo o sobre la línea de la frontera. Los establecimientos dentro de la nación, están sujetos a todas las ventajas y desventajas de los demás».

Libre así el terreno, pues estaba demostrado que la nación podía establecer impuestos sobre sus producciones, sin tener en cuenta el interés del extraño, sostenía entonces, con una corrección admirable, que la cuestión se reducía a saber si convenía entrar en el sistema protector de una de las industrias del país. Él no era proteccionista, ni aún con respecto a las harinas, «en un país en donde su agricultura—decía—principia recién, donde es necesario entrar en las transacciones, al cambio de una producción nueva». En cuanto a las harinas, «quizá accedería, aunque lo miraría con repugnancia, porque creía que era un sistema vicioso». Lo propuesto era malo, porque entonces todos los productores tendrían derecho a exigir una compensación igual, un favor igual, nulificándose la posibilidad de haber materia de impuesto moderado a los artículos de exportación. Con este motivo, recordaba que el año anterior había tenido que combatir opiniones extraviadas, tendientes a variar el sistema tributario, quitándole su base principal, es decir, abolir o disminuir inmensamente los derechos de importación.

Con conocimiento de causa sostenía la verdadera doctrina económica, de que en materia de impuestos, en último resultado, el trabajo es el que lo paga, pues los demás que intervienen, que lo pagan en las oficinas del Estado, no son más que los agentes intermediarios ; quien paga es el productor, el trabajo. Esta teoría encontraba su mejor asiento tratándose de la importación y exportación. No era posible olvidarla, pues si hoy se cedía a las carnes y a las harinas, mañana se solicitaría igual reducción para los cueros y demás artículos. El impuesto debería gravar a todos los artículos de exportación. Por lo demás, las carnes estaban beneficiadas. Antes pagaban un 15 %. Por las modificaciones hechas en el Tratado, ya nada pagaban. Pues bien, el 4 % con que ahora se les gravaba, les daba un beneficio de un 11 %. Aseguraba que «en Europa se sorprenderían de un país lleno de cargas, que llevara su liberalidad hasta eximir de impuestos a las producciones que tienen una demanda prodigiosa en el extranjero».

Este sobrio y concienzudo discurso no tuvo el poder de convencer al señor diputado Díaz, quien insistió en que se violaba el Tratado de Modificaciones.

Entonces intervino el doctor Juanicó para robustecer lo que había sostenido y demostrado el ministro. Deseaba que la noticia del arreglo llegara a Europa. «En momentos—decía—en que tal vez una conflagración espantosa haga huir a los hombres pacíficos de aquellas ciudades poderosas, algo hubiera importado el que se dijera : esa República sobre la cual pesaban cien millones de Deuda, hoy, sin haber violentado a ningún acreedor, con el perfecto acuerdo de todos sus acreedores, en lugar de cien millones no debe más que cinco.»

De los miembros de la Comisión en minoría habían hablado los señores Alvarez y Díaz. Faltaba que lo hiciera el señor Lapuente, quien se adhirió a sus dos citados colegas, insistiendo en aquello del Tratado, y preocupado de demostrar, como si fuera lo cuestionado, que las modificaciones de éste no eran tan benéficas para el país como se había sostenido.

Ahí estaba de nuevo el doctor Juanicó, siempre en la brecha, para responder, mientras volvía a aparecer en la palestra el señor Alvarez, con quien se batía el señor ministro.

Entonces pidió la palabra, *por única vez*, el señor Errrazquin. Deseaba, a pesar de hallarse bastante enfermo, dejar constancia de su opinión contraria en un todo al contrato ; lo consideraba perjudicialísimo, que iba a atacar el crédito, «porque antes de mucho—decía—el país tendrá una Deuda mucho mayor de la que hoy tiene, considero que va a contraer obligaciones que no satisfará y que le harán una Deuda enorme». Hablaba de una manera deshilvanada, sin rumbo, sosteniendo que «el medio de levantar el crédito, no era atendiendo únicamente a la Deuda, cuando el inválido, la viuda y el huérfano, lloran en silencio, comiendo el pan de la misericordia».

Y después de esta inocente y pobre argumentación, revolvía heridas, como prueba de ser un hombre de pasiones fuertes, carente de pensamiento amplio para encarar los asuntos del Estado. Se iba a retirar porque estaba enfermo, pero arrojaba la flecha de Parthos, aunque sin herir, porque estaba ciego para dirigir el dardo. Por lo demás, aunque velada la alusión a hacerse, la recogería quien sabía muy bien iba recta hacia él. En efecto, no tuvo el talento, ya que se retiraba, de dejar una impresión afectuosa, consejo dado a todo combatiente parlamentario, para que el perfume de la bondad sólo despierte cariño y no se ataque a quien se aleja de la lid; sobre todo, cuando, como hemos visto, él la había provocado imprudentemente, colocándola en tan espinoso terreno, que hasta su amigo Juanicó lo lamentaba,teniéndolo por adversario.

Ahora bien, como se había hecho alusión a su persona, al criticar el Tratado de Modificaciones al de 1851, declaraba que no contestaría. «Puedo haberme equivocado», decía. Agradecía los benévolos conceptos de que había sido objeto, y agregaba, aunque sin ilación: «Porque, como se ha dicho aquí antes, la gloria o la ignominia debe ser del diputado por su conducta en la sala».

El doctor Palomeque comprendió que esto iba para él, y, aunque el señor presidente no llamara al orden al señor Errazquin, como lo había hecho cuando el doctor Palomeque pronunciara esas mismas palabras, se apresuró a interrumpir al adversario con un formidable *apoyado*, como diciéndole: lo dicho fué bien dicho, y usted respira por la herida. Por eso acentuaba bien su pensamiento el señor Errazquin, declarando, después de ese *apoyado*, que «aceptaba todos los incidentes de esta sesión, y acepto la gloria o la ignominia de mis opiniones. Los resultados son los que justifican los hechos, y yo los espero tranquilos».

Como se ve, el señor Errazquin, a pesar de su enfermedad, conservaba sus bríos. Aunque inoportuno, pues había pasado la ocasión de discutir el punto, era a la vez una imprudencia injustificable la de renovar un incidente terminado. Sólo el despecho nacido de la derrota podía explicar esta conducta extraviada. Felizmente, el doctor Palomeque, vencedor, por lo que tenía la sangre dulce y debía ser generoso, se mostró prudente, y apenas si se limitó a aquel *apoyado*, que era lo menos que podía contestarse ante el guante arrojado. Por lo demás, el señor Errazquin se retiró, dejando una moción que murió nonata. Era natural que así sucediera, pues en los Parlamentos, como en toda brega, sólo triunfan quienes persisten en la defensa de sus ideas. Bueno es dejar constancia que el tiempo, aquél del cual hablaba Esquilo cuando entregaba sus obras a la posteridad, justificaría a los sostenedores del contrato, y que la Deuda no aumentaría, sino que, por el contrario, disminuiría, siendo de ello un ejemplo lo que iba a acontecer en la subsiguiente administración del señor Berro, el pariente y amigo del señor Errazquin, a la cual éste serviría abnegadamente.

El retiro del señor Errazquin trae a la memoria el incidente del ministro de Luis XVIII, quien, al abandonar su puesto en la corte, reaccionó, ante la sensata observación de su ilustrada esposa, la que exclamó diciéndole : «¡ Desgraciado ! ¡ te ausentas ! ¡ cuando tus enemigos quedan en el Parlamento, sin que tú estés allí para defenderte ! » Pues así le sucedió al señor Errazquin. El ministro, allí presente, al responderle, le decía, entre otras cosas, que en Montevideo «no veía arriba de cuatro o cinco estropeados, arriba de cuatro o cinco hombres verdaderamente inválidos ; entre tanto ¡ seiscientos mil pesos ! importan las subvenciones que anualmente hay que dar » (1). Y luego, en presencia de la prosperidad ascendente del país, decía que «era tiempo ya de que buscaran los que estaban inscriptos indebidamente entre esos pensionistas, como todos los demás habitantes, honrosos medios de vivir por el trabajo ». Se preocupaba de esa cuestión económica y moral, por más que previera tocaría con dificultades mucho mayores que las que había tocado en el asunto de la Deuda. Pero, no porque «hoy —decía— no se puede atender completamente a ese servicio, nos quedaremos de brazos cruzados esperando de la Providencia el aumento ocasional, casual de los recursos. Eso no es digno del Gobierno de un país. ¡ Deben esforzarse los hombres que están en la dirección de los negocios públicos a conducir la sociedad ; deben torturar su imaginación ; deben hacer esfuerzos supremos para encontrar los medios de salir de ese abatimiento, de esa postración dolorosa, en un país rico, que proverbial y falsamente se ha dicho que está en la miseria ! No hemos buscado los medios de encontrar los recursos que tiene. Esa piedra a que se ha hecho alusión, puesta sobre esa planta que no puede vegetar, es preciso removerla, cultivar esa tierra, regar ese vástago, y veremos su fruto dentro de muy poco tiempo. Pero, para eso, es necesario pasar por todas las gradaciones a que obliga la conducción de un estado deplorable y terrible a otro próspero y feliz. Es por eso que desde un principio he acariciado tanto este importante asunto.

» Cuando era un horror hablar de Bonos en este país, porque no había hombre que tocase ese asunto sin mancharse, he tenido el coraje de abordar ese asunto de la Deuda, seguro de que no podía llegar hasta mí ninguna sospecha. Y ¿ por qué ? Porque veía que allí debía empezar la obra de la reorganización ; porque allí estaba la inmoralidad, porque allí era necesario ir a buscar el abuso que había llegado a penetrar en todas partes.

» Yo he explicado en esta Cámara el origen de muchos de estos títulos de que depende la Deuda ; he recordado los expedientes ; he señalado hasta qué punto de corrupción había conducido a esta sociedad, donde se faltaba a la fe pública. Todos los medios administrativos, toda la comprobación testimonial, todo venía a quedar perdido,

(1) Página 200, Diario de Sesiones.

y no había posibilidad de reconstruir una sociedad dejándola continuar en esa viciosa marcha.

»¡Faltaban escrituras, señores!, que es la base de una sociedad: la propiedad territorial.

»Allí también estudiaba el medio de destruir los abusos.

»Señores: debíamos buscar la propiedad que habíamos perdido, porque no hay sociedad donde falta la propiedad territorial, y ¿cómo buscarla donde falta la base que la justifica y hace posible la vida en asociación?

»Creyendo, pues, encontrar en este primer paso la llave de la primera puerta por donde hemos de entrar en el sendero de la reorganización, no puedo comprender los temores del señor diputado ausente.

»No es el momento de entregarme a una meditación que me conduzca donde pueda existir ese temor.

»He tenido que hacer esfuerzos grandiosos de inteligencia para ver de comprender la aberración de los espíritus desde el principio de la discusión de este asunto.

»Yo encuentro el obstáculo de cien millones, de una cantidad desproporcional con la riqueza pública del país; veo su reducción a cinco, y, ¿es un temor para el crédito del país esa reducción?

»En verdad que no puede a primera vista comprenderse, y creo que (si todos participan de mi confusión establecida por esas opiniones) la cuestión debería reducirse a una proposición simple.

»Quiero encontrar en el Contrato, en sus detalles, todos los defectos, todos los inconvenientes que la imaginación más susceptible pudiera señalarle. ¿El nos da, sí o no, el hecho de una reducción honrosa de cien a cinco? Y cinco, señores, que son dos y medio millones, porque nunca los capitales pueden estar representados sino por la renta, por los valores que produce la renta, y renta al seis por ciento en un país que está el interés al doce y diez y ocho por ciento, no puede ser más de dos millones, o dos millones y medio. Si nos da el hecho de esa reducción, ¿qué importan los inconvenientes del Contrato?

»Tendremos los medios de salir de esa enorme piedra ya muy gastada, reducida a un átomo comparativamente a lo que es. Entonces no serían necesarios ya hombres hercúleos para levantarla; un puntapié, una operación cualquiera en un país que no debe, podría encontrar dos millones, o dos millones y medio; y eso que sucede con respecto a la extinción de ese resto de tan monstruosa Deuda, sucedería con todas las demás.

»Extingamos la Deuda que imposibilita al crédito, y encontraremos los medios de llenar el presupuesto, de atender a las demás necesidades. No lo haremos de golpe, porque no se puede. Es fenomenal lo que hay; no se puede exigir que por encanto se varíe la situación de un país; pero debemos llamarnos muy afortunados de haber ido en un espacio de tiempo tan corto, de reconquista en reconquista, de recons-

trucción en reconstrucción, de una en otra ; y la base, repito, es ésta, lejos de ser el temor que infunde a la Cámara el señor diputado que se ausentó.»

UN RASGO DEL CARÁCTER DE ERRAZQUIN

El carácter del señor Errazquin está reflejado en el hecho que vamos a relatar.

El doctor Palomeque, siendo jefe político de Cerro Largo, se vió en el caso de acusar un artículo publicado en el diario *La Discusión*, redactado por el doctor Carreras. El artículo fué garantido, como testamento, por don Juan Etcheverry. Constituido el jurado, la suerte designó al señor Errazquin, quien formaba parte, en esos momentos, del círculo de Carreras, defensor del caudillo con Dionisio Coronel, en Cerro Largo, y a quien respondía Etcheverry. Citado para que compareciera a la audiencia, en la forma legal, el señor Errazquin contestó así : «Mañana 10 se reúne la Cámara de Senadores a la una, que entra a sesión antes y después, tiene trabajos de Comisión ; y por consiguiente no puedo asistir.—*Manuel J. Errazquin*». En esta forma inusitada, sin dirección alguna, sin respeto, se expidió el señor Errazquin, como una prueba de lo entonados que estaban los hombres reinantes. ¡ Un juez no era nada, porque el señor Errazquin era de la familia del señor Berro ! El juez, el doctor Leopoldo Olave, creyó que la justicia era algo, y que el senador Errazquin debiera respetarla. Por ello dictó este auto : «No ha lugar a la excusación expuesta, y hágase saber al solicitante comparezca al juzgado a la hora para que ha sido citado, bajo la responsabilidad de lo que dispone el artículo 5.º de la ley de 1830». El juez citaba la ley terminante, que no exceptuaba al senador de la carga del jurado. Ella sería inconveniente, y debería derogarse, como más tarde se hizo, pero, mientras tanto, debía cumplirse, dando ejemplo todo un senador. Pues sucedió lo contrario. La insolencia creció, y el señor juez recibió un papel, concebido así : «Al senador que suscribe le importa muy poco la insolente amenaza del juez. Ha dicho que no puede asistir, por tener que hacerlo al Senado ; y ahora dice que no asiste, porque no quiere asistir.—*Errazquin*».

Cuando se leen documentos de esta naturaleza, el espíritu se abisma al imponerse del concepto que todo un senador tenía formado de la justicia. ¡ Declarar *amenaza insolente* el auto de un juez dictado dentro de sus facultades, de acuerdo con la ley, sin personalizarse para nada con el interesado !

La ley imponía responsabilidad al jurado inasistente, la de una multa. El juez, por segunda vez, hizo presente al senador Errazquin que incurría en ella si no asistía, como era de práctica consignarlo en la cédula respectiva. La insolencia partía del señor Errazquin, que creía que la ley no le alcanzaba. De ahí que el señor juez Olave dicta-

ra una resolución justa y correcta, diciendo : «No pudiendo el juzgado imponer al señor don Manuel Errazquin, por su calidad de senador, la pena correccional a que se ha hecho acreedor con su reprobado proceder, atentatorio a los respetos del Juzgado (1) ; proceder tanto más inexplicable y punible, en un senador que debe dar ejemplo de obediencia a la ley, y a los mandatos de los jueces encargados de aplicarla, elévese testimonio de los antecedentes relativos a este incidente al Tribunal Superior de Justicia, para que se sirva determinar lo que considere en justicia. Y habiendo incurrido el referido Errazquin, por su inasistencia al llamado del juzgado, en la multa de 25 pesos, el alguacil del Juzgado haga efectivo, en el día, el cobro de dicha multa. Publíquese este auto con los antecedentes de la referencia.—*Olave*».

El señor Errazquin aun tuvo el valor de llevar el caso al Senado. En su ceguera, o apasionamiento, creía que la ley no podía aplicársele. Al instruirse el Senado, hubo quien, como el señor Aguirre, sostuvo que, «sancionado por el Senado, el proyecto de ley pasado por la Cámara de Representantes en días anteriores, que exime a los miembros de la Asamblea General del cargo de jurados, quedaba por el hecho resuelto el caso presente». «No—le decía con razón el señor Martínez,—eso no puede aplicarse a casos anteriores, por lo que siempre quedaría en pie la cuestión de que se trata. Creía que ella debía ser resuelta, y aun dictarse una ley general.» Propuso se suspendiera la sesión, y una vez vueltos a ella, el señor Errazquin presentó estos originales proyectos : que «el juez del crimen no había podido negar la excusación hecha por el senador por Tacuarembó, y que no podía anunciarse (2) ni imponerse pena correccional a ningún senador, sin el consentimiento de su Cámara». Es de advertir que el proyecto remitido por la Cámara de Representantes aun no había sido estudiado en el Senado, por lo que era ridículo invocar un *proyecto* para aplicarlo en el caso. Todavía si hubiera estado sancionado, no era malo el expediente para salir del paso. No se contentó el señor Errazquin con aquellos curiosos proyectos. Quería salir del tembladeral en que se había metido, y se le ocurrió que el Senado debía dirigirse al Poder Ejecutivo para que éste previniera al señor juez del crimen, doctor Olave, que debía aceptar las excusaciones verbales de los miembros del Senado, en los casos que se les citara para integrar el jurado de imprenta». Además, pedía a la Mesa recomendara a la Comisión de Legislación el breve despacho de la Cámara de Representantes «que exceptúa—decía—a los miembros de ambas Cámaras del cargo de jurados, y el proyecto que ahora presento, si mereciese apoyo». Todo esto probaba con-

(1) Esto era un error. El juez puede y debe castigar al senador delincuente. Lo que sí, ha de instruir el proceso, y luego, con él, pedir el desafuero del legislador.

(2) Esto lo decía porque el auto del juez Olave se había publicado en los diarios.

cluyentemente que el propio señor Errazquin sabía que no había ley que lo favoreciera, y que era indispensable dictarla para que el juez la cumpliera. ¡ En su apasionamiento creía que el Senado podía pasar una *Minuta de Comunicación al Poder Ejecutivo para que éste intimara al juez doctor Olave aceptara las excusaciones verbales de los senadores!* Esto era un colmo : ¡ mandar al Poder Ejecutivo que cumpliera una ley inexistente, constituyéndolo en dictador, como para ordenar al Poder Judicial ! Como era de suponerse, la opinión pública se manifestó decididamente en contra de Errazquin, reflejándose esto hasta en el mismo Senado, el cual, por intermedio de su Comisión de Legislación, desechó semejantes curiosos e improcedentes proyectos (1). Los señores doctor don Ambrosio Velazco y don Narciso del Castillo, que formaban la dicha Comisión, tuvieron la satisfacción de hacer sentir su error al senador Errazquin, quien, viéndose perdido, retiró sus mociones.

Pero, una opinión autorizada y enérgica se había emitido en este asunto. Por todas partes se veía acorralado el señor Errazquin, y de ahí su actitud de retirada. El ilustrado doctor don Alejandro Magariños Cervantes, fiscal entonces, se expidió con motivo del incidente sobre la imposición de la multa, sosteniendo que Errazquin, « en su calidad de senador, no estaba libre de la acción de la justicia y de las leyes cuando se trata de cumplir mandatos judiciales que en nada afectan la inviolabilidad de su persona, único caso a que deben aplicarse las prerrogativas constitucionales que establecen los artículos 50 y 51 de nuestro código político ; pues como dice un excelente publicista : *La severidad democrática no permite extender más allá los privilegios de la diputación* ». Citaba las constituciones sud-americanas, para decirnos que « ninguna de ellas los autoriza a desobedecer las órdenes judiciales cuando ellas comprometan la libertad del individuo. Si pudiera ser de otro modo, vendrían esos señores a ser una especie de seres privilegiados, para practicar cuanto les placiese, con entera prescindencia de la justicia civil ; serían, en una palabra, un Estado dentro de otro ». Después de poner varios ejemplos para demostrar que « las inmunidades establecidas en la Constitución no importaban la emancipación de las obligaciones contraídas por los legisladores, ni ponerse ellos fuera de la acción de las leyes y de los tribunales que ordenan su cumplimiento », calificaba de *principios singulares* los que sentaba el señor Errazquin para desobedecer los decretos del juez. Allí hablaba de « toda la absurdidad de las doctrinas del señor Errazquin » al constituirse « en abierta rebelión y desacato a la autoridad judicial ». « Es lástima—decía—que todo un senador de la República, esté tan atrasado en estas materias que debían serle preliminares, y que su atraso le conduzca a producir el escándalo de vejar al magistrado, bajo

(1) Sesión del 8 de mayo de 1862.

cuya dirección se encuentra por el ministerio de la ley, aunque él no lo crea así. Lo que corresponde, pues, es que Vuestra Señoría haga cumplir sus providencias, con el auxilio de la fuerza pública. Sólo así quedará ilesa la majestad de la Justicia, y Vuestra Señoría habrá sostenido su dignidad, evitando que quede en pie este precedente vergonzoso y que tanto cede en mengua y desprestigio de la Magistratura y del Poder Judicial, tercer Poder del Estado, según el artículo 14 de la Constitución.» (1).

En presencia de todo esto que se le había caído encima, el señor Errazquin, al ir a discutirse sus proyectos, los retiró. Era lo mejor que podía hacer después del escándalo dado, como lo decía el señor Magariños Cervantes (2).

Una vez eliminadas todas esas mociones del señor Errazquin, la Comisión de Legislación recién se creyó autorizada para ocuparse del proyecto remitido por la Cámara de Representantes. Esta Cámara, obedeciendo a influencias de Carreras, había sancionado, a la disparada, un proyecto de ley, compuesto de un solo artículo, *ad usum delphini*, para salvar la situación de Errazquin. Los señores Velazco y Castillo no quisieron pasar por ello, y esperaron a que se solucionara el incidente provocado por Errazquin. Así lo manifestaron (3). Resuelto, estudiaron con toda tranquilidad el proyecto enviado por la Cámara de Representantes, limitado a decir: «Es justa causa de excusación para aceptar el cargo de Jurado la calidad de miembro del Cuerpo Legislativo». Esto no era sino un recurso del momento para servir al señor Errazquin, pariente del presidente de la República. Esto lo vieron claro, desde el primer momento, los señores Velazco y Castillo, por lo que no quisieron prestarse a cosas pequeñas. Demoraron el despacho de lo fundamental hasta conseguir el rechazo de las ridículas pretensiones del señor Errazquin, no obstante el apuro del señor don Luis de Herrera para que se despachara cuanto antes. Llegado el momento, presentaron un proyecto cual correspondía, con prescindencia de los intereses personales del senador A o B. Se fueron a lo hondo de la cuestión. Recordaron que la incompatibilidad no debía declararse sólo para el caso del Jurado, sino para el desempeño del cargo de jueces. Esto era indiscutible. Era contrario al espíritu de la división de los poderes públicos ver a un miembro del Tribunal Superior de Justicia, como el doctor Juanicó, desempeñando, a la vez, el cargo de Representante. No se contentaban con esto, sino que la estocada iba más a fondo, cuando aconsejaban se declarara incompatible el cargo legislativo con el de contratistas con el Estado, y con el de las personas ligadas con los gobernantes por parentesco. Esto se veía que iba

(1) Sesión del Senado de 9 de mayo de 1862.

(2) Sesión del Senado de 12 de mayo de 1862.

(3) Sesión del Senado de 12 de mayo de 1862.

contra el señor Errazquin. A su respecto decía la Comisión que «los hechos de abusos de este género tienen lugar (1) ; y, si no se les pone límite, puede suceder que llegue a falsear el sistema representativo, llevando los gobernantes a las Cámaras sus parientes en no pequeña mayoría. Esto no será otra cosa que una mixtificación del Poder Legislativo ; pero es posible que suceda, si se dejan violar las prohibiciones que establece la Constitución de la República, para que la Asamblea Nacional sea lo que debe ser, y preste los servicios que debe a la causa pública, y a la moralidad administrativa». Inspirados en muy buenas ideas aconsejaban igualmente el alejamiento de las cuestiones políticas a los ministros de la religión y a los prelados de la Iglesia.

El proyecto de ley, así fundado, no fué aceptado en todas sus partes. Se desechaban las incompatibilidades de los contratistas, recaudadores de rentas públicas, parientes consanguíneos y afines del presidente y ministros, y ministros de la Iglesia, pero se aceptaron las relativas a los jueces, miembros de las Juntas y Jurados (2). Debe dejarse constancia de que el señor Juanicó (hermano de don Cándido) declaró que encontraba bueno el proyecto, pero lo consideraba inaplicable a la actualidad del país». El doctor Velazco sostuvo que lo propuesto era «una necesidad y conveniencia política que al fin había de reconocerse en el andar del tiempo». Y tan era así, que en ese mismo instante se produjo una reacción, pues desechado el proyecto en la primera discusión particular, hubo de triunfar en la segunda, al dilucidarse algo fundamental. El señor don Vicente V. Vázquez propuso entonces que el inciso 4.º se votara así : «Los parientes consanguíneos del presidente de la República y de sus ministros secretarios de Estado, hasta el 2.º grado inclusive». La votación dió este resultado : los señores Velazco, Vázquez, Ruiz, Brid, Méndez y Castillo votaron a su favor, mientras los señores Errazquin, Juanicó, de Herrera (don Luis), Aguirre, Giró y Martínez, en contra. ¡ Eran 6 contra 6 ! Producido el empate, ¡ el doctor don Florentino Castellanos resolvió adherirse a la negativa ! En verdad que en este caso el principista de 1858 no estuvo a la altura de sus antecedentes recomendables.

El detalle, al parecer insignificante, del señor Errazquin, al afrentar la justicia, puso de relieve una tendencia democrática de cierta parte de los hombres que actuaban dentro de la situación, cuyas manifestaciones se sentirían en las postrimerías del Gobierno del señor Berro, y de las que hablaremos en oportunidad (3).

(1) El señor Berro llevó el abuso hasta el extremo de tener de ministros, a la vez, al coronel don Luis de Herrera y al doctor don Juan José de Herrera, a padre y a hijo.

(2) Sesiones del 26 y 28 de mayo de 1862.

(3) De ellas nos hemos ocupado extensamente en nuestro estudio : *El Am-*

UNA OBJECCIÓN FORMIDABLE

Leyendo y estudiando todos estos documentos, es como uno llega a persuadirse del sentimiento hondo de aquellos hombres y de su carácter perseverante para buscar la solución del grave problema en que estaban comprometidos. Todo tenían que hacerlo, y muy especialmente atender a la Deuda, para levantar el crédito del país, como se venía pretendiendo por todos los buenos ciudadanos desde 1851 en adelante. En ese sentido, fueron meritorios los esfuerzos del doctor Palomeque, una vez que se inició en las tareas parlamentarias. Comprendió que sin las modificaciones al Tratado de Comercio de 1851, y sin el arreglo de la Deuda, el país no podría marchar. Luego, vendría lo demás, el arreglo de las clases pasivas, porque el final ordenado de esas dos cuestiones internacionales, que tal lo era también la de la Deuda, permitiría hacer lo que pretendían los señores Errazquin y demás opositores. Debemos honrar la memoria de éstos, reconociendo que ellos, y muy en especial el señor Errazquin, sabían muy bien que el proceso no podía desenvolverse de otra manera, si bien era cierto que un propósito político, y hasta de interés comercial, los guiaba aquí al proceder como procedían. Por otra parte, no dejaban de tener razón en alguna parte de sus argumentos, influyendo en la reforma del contrato. Lo útil y práctico que alegaron no cayó en terreno estéril; no así aquello inspirado en una oposición *à outrance*. Debe reconocerse que algunos de los adversarios del inciso que se discutía, no lo eran, en el fondo, del contrato. Ellos querían salvar del impuesto a las carnes y a las harinas, creyendo firmemente que de no hacerlo así se produciría un conflicto con el Brasil, dados los artículos 3.º y 5.º del Tratado de 4 de septiembre de 1857. Lucharon heroicamente; no se desanimaron ni huyeron, como Errazquin. Allí estarían, al pie del cañón, por más que a uno de ellos, en esos instantes de calor, le dijera el doctor Palomeque que podía retirarse del recinto legislativo, a lo que él contestaba, con cierta candidez de criatura enojada: «No me quiero ir; aquí estaré». Por eso, después del interesante discurso del señor ministro de Hacienda, volvía a la brecha el señor Díaz, para sostener que «la Cámara estaba imposibilitada para establecer impuestos que habían sido abolidos para tener compensación en el Imperio». Otro tanto sostenían los señores Lapuente y Moreno. Este último se hacía cargo de un argumento del señor Fuentes al sostener que el Tratado sería aplicable a las carnes exportadas por la frontera terrestre al Brasil, pero no a las que se llevasen para otros puertos, como los es-

pañoles. Esto, decía el señor Moreno, «es establecer un impuesto diferencial, porque si lo que se exporte por la frontera terrestre ha de gozar un beneficio, que no tiene lo que se exporte por la capital, que entonces viene a tener un recargo, tiene, a mi modo de ver, gravísimas consecuencias que la Honorable Cámara debe tomar en consideración». Volvía a recordar que los artículos 3.º, 5.º y 12.º del Tratado establecían que no podían imponerse derechos a nuestras producciones a exportarse por la frontera terrestre, que todos nuestros productos nacionales pagarían el impuesto del 4 %, y que la República lo mismo que el Brasil no podían gravar las producciones orientales con más derechos que los que tenían el 4 de septiembre, día en que se firmó el Tratado. ¿Entrarían en el derecho adicional que vamos a establecer por este artículo, los productos brasileños?, se preguntaba el señor Moreno, para concluir por manifestar que deseaba saber cómo el ministro definía la situación que vendría a crear la sanción de ese artículo.

El ministro, que veía bien, se salía por la tangente, sosteniendo que él se ocupaba de defender los intereses puramente orientales, que su conducta era observar, respetar las convenciones establecidas, y que, en ese sentido, él sería quien zanjaría la dificultad, si existía, pues no se presentaba todavía.

Sin embargo, el señor Moreno no cedió, exponiendo argumentos que robustecían los anteriores. Era un legislador sesudo, culto, persistente, y que hablaba con perfecto conocimiento del asunto. A cada rato insistía en que el ministro explicara su pensamiento, a quien realmente ponía en apuros, por lo que vino el doctor Juanicó en su ayuda, aunque estando flojo en su argumentación. La actitud del señor Moreno alentó al señor Díaz para pedir, «dada la gravedad del punto, aplazar el negocio, o bien que el ministro diera explicaciones que satisficieran». El ministro no las rehusaba, limitándose a decir que el Gobierno no había de violar ninguna estipulación internacional; a lo que el señor Díaz replicaba que ni la Cámara ni él como diputado debían permitir la violación del Tratado, preguntando si acaso el Poder Ejecutivo tenía más poder que el Cuerpo Legislativo. El ministro entonces insistía sencillamente en que «sería el ministro brasileño quien haría esas sugerencias». El doctor Juanicó aparecía luego para detener aquellos ataques, usando de toda su dialéctica al improvisar argumentos, para ganar tiempo y poder luego reflexionar maduramente sobre lo que convenía hacer. El argumento del ministro era más aparente que real, pues con razón sostenía el señor Díaz que como eran ellos quienes sancionaban la ley, «perdíamos nuestras ventajas; no siendo el Brasil, por cierto, el que iba a perder». Juanicó sostuvo la tesis que no habría violación del Tratado, si bien entendía que pudiera haber violación de obligaciones contraídas para con otros Estados, que pudiese traer consigo gravísimas consecuencias. No le asus-

taba que en último resultado se dijera que no pagaban derechos las carnes que salieran por la frontera terrestre, y sí pagaran las carnes y demás productos que salieran por los otros puertos de la República. Hacía presente que no se trataba de violación de tratados, sino, en todo caso, de despojarnos de las ventajas obtenidas; y que, en último resultado, como lo había dicho el ministro, sería de cuenta de Mauá el inconveniente que sobreviniera, por ser éste un súbdito brasileño, por quien no podía el Brasil venir a decir: «sostengo los derechos de mi súbdito, exijo que se pague tal y cual derecho de importación o exportación contra el Tratado que yo sostengo y al cual no se puede faltar».

No porque el doctor Juanicó interviniera, abandonaría su puesto el señor Moreno. Allí estuvo luchando hábilmente, demostrando que con lo proyectado se alejaría el comercio de carnes con la Habana. «Con esa eliminación—decía—rechazamos los artículos similares del Brasil, que están en posición muy favorable, y vamos a recargarlos con un dos por ciento, lo que importa negarles la entrada en nuestro puerto, porque no pueden competir con la producción brasileña.»

La discusión cada vez se hacía más intrincada. De repente se hablaba de la exención a las carnes, y en otros momentos del 2 % adicional sobre los derechos de importación. Aquello era una confusión. No se habían dividido los términos del inciso para discutirlo. Pero, aun asimismo, la ley iba haciéndose, ante la tenacidad de los opositores. El doctor Juanicó sentía que el terreno no era muy sólido. Reconocía que los adversarios tenían alguna razón. Se veía obligado a improvisar, por lo que no era extraño que no se mantuviera firme en esta parte del debate. Cuando el señor Alvarez habló de que el 2 % *adicional* sobre los valores de importación, atacaba el artículo 5.º del Tratado, el doctor Juanicó reconoció que en esa argumentación había algo que le hacía fuerza. En su improvisación, indicó la conveniencia de suprimir la palabra *adicional*, quedando entendido que el 2 % era sobre el actual derecho de importación. Indicaba se consignara lo que se leía en el contrato modificado en el inciso discutido, presentado por la Comisión de Hacienda. Al proponer esta modificación, consultaba a la Comisión y al ministro; pero declaraba que esta reforma «hacía imposible la supresión del derecho de exportación a las carnes». El ministro, que ya se encontraba envuelto en aquella confusión, después de cuatro largas horas de discusión, contestó, sin meditarlo mucho, que estaba conforme con lo que se establecía en el primitivo contrato, es decir, que el 2 % no fuera *adicional*, sino que se tomara de la renta actual. Nunca hubiese consentido, pues el señor Lapuente, no obstante conseguir lo que él deseaba, le cayó indignado al ministro, porque siendo «el caos más horroroso» el estado financiero del país, no concebía cómo no pudiendo satisfacer las necesidades diarias ni pagar el servicio interno, iba a substraerse rentas, decía, para amortizar una Deuda que



EDUARDO ACEVEDO
Ministro de Gobierno y
Relaciones Exteriores

BERNARDO P. BERRO
Presidente de la República

DIEGO LAMAS
Ministro de la Guerra



Juan Evangelista de Souza, Barón de Maná

podía arreglarse muy bien de otro modo. Esto último daba motivo para que el ministro interrumpiera al orador rogándole indicara cuáles eran esos medios a que él se refería, a lo que, como es natural, no pudo contestar el señor Lapuente, limitándose a decir ¡ que ése no era el momento ! ¿ Cuál sería entonces ? ¡ Con razón el señor Nin Reyes lo calificó de iluso !

Ahora bien, el único que no se dejó llevar de la corriente, fué el doctor Palomeque, pues sostuvo que se votara de acuerdo con lo aconsejado por la Comisión de Hacienda, porque, decía, es muy bueno no dejar malos precedentes. Si se hiciera como se propone, las razones que se han dado debían prevalecer para el futuro, y tendríamos que en el año que viene, al sancionar una ley de aduana, no podríamos aumentar los derechos, porque el Tratado sancionado el año próximo pasado se oponía, y podríamos perjudicar a las demás naciones por esta ley. Es un mal muy grande el que nos haríamos, y no podríamos legislar en cuestiones aduaneras, ya aumentando, ya disminuyendo derechos. El orador manifestaba que votaría así, porque «ello importaba declarar la perfecta facultad que tenía la República para aumentar los derechos cuando le conviniera ; lo demás, sería negarlo».

Los ánimos estaban cansados. Se levantó la sesión después de cuatro horas de debate, para, a las 7 y media de la noche, volver a reunirse y reanudar la discusión. Ese intermedio dió tiempo a reflexionar y a combinar ideas. El doctor Juanicó tomaría una nueva orientación.

UN CUARTO DE HORA FELIZ

Al reanudarse el debate, sostuvo algo que estaba de acuerdo con el sentir de los opositores, y aun de los sostenedores del proyecto (1).

El doctor Vázquez Sagastume, miembro informante de la Comisión de Hacienda, expresó que los artículos o efectos que por las leyes existentes estaban excluidos o exceptuados de pagar derechos, no estaban comprendidos en el 2 % *adicional*, sino que gravitaban solamente sobre los valores que estaban sujetos a derecho de importación. El doctor Juanicó manifestaba que esto «no era traer luz sobre el negocio». Por su parte, creía traerla reaccionando sobre lo sostenido antes. Aceptaba lo referente al 2 % adicional, pero agregaba algo, a la vez que alteraba algunos de los términos del inciso de la Comisión. El inciso decía simplemente : «Dos por ciento adicional sobre los valores de importación». El doctor Juanicó proponía : «Dos por ciento adicional sobre el derecho de importación a los artículos sujetos a este impuesto, exceptuándose los que comprende el artículo 5.º del Tratado de 4 de septiembre de 1857 y sus similares».

Como era natural, el doctor Vázquez Sagastume se sintió mortifi-

(1) Sesión del 30 de mayo de 1859.

cado por las palabras del doctor Juanicó, de «no haber traído luz sobre el negocio», y le devolvió la pelota, sosteniendo que la actitud del doctor Juanicó era contradictoria. Recordó que la mayoría de la Cámara «había declarado muy alta y enérgicamente, y especialmente el autor de la moción que acababa de ser presentada, que los artículos del contrato eran una especie de *cosa sagrada* que no podía tocarse». El doctor Juanicó se defendía, sosteniendo que lo había hecho previa manifestación de conformidad del señor ministro, la que éste ratificaba en ese acto. Consideraba agotada la discusión, por lo que no creía del caso eternizar el negocio, perdiéndose el tiempo.

Y el tiempo se perdería, pues el señor Camino aprovechaba la oportunidad que le presentaba el doctor Juanicó con su actitud, y proponía nada menos que modificar los artículos 5, 8, 9, 10, 11, 12 y 14. También le pedía «al ministro manifestara si estaba habilitado para consentir en que la Cámara hiciera esas supresiones». Como esto era salir de la discusión, el doctor Juanicó llamó la atención sobre ello, y las cosas se colocaron en su lugar.

La moción del doctor Juanicó la rechazó el señor Lapuente, miembro de la Comisión, mientras la aceptó el señor don Luis Latorre, miembro de la mayoría de la misma. Por su parte, los señores Iturriaga y Pagola creían que no debía por el momento aceptarse ninguna modificación hasta no discutirse y votarse lo propuesto por la Comisión de la cual ellos formaban parte.

A su vez el doctor Vázquez Sagastume, si bien manifestaba que la Comisión en mayoría no aceptaba, concluía por felicitarse del nuevo giro que las cosas tomaban «si de ello resultaba algo ventajoso para el país». Al responder el doctor Juanicó al doctor Vázquez Sagastume nos hablaba que le «*encocoraba* mucho esto de barón de Mauá». Y, cuando el señor Nin Reyes respondía a las observaciones del señor Camino, hacía resaltar que en la última crisis comercial la casa de Mauá «había sido casi sola en el Río de la Plata, de las muy pocas que en el Brasil y en Inglaterra mismo se han aceptado sus giros a pesar de ese cataclismo comercial». Fué en estos momentos cuando el doctor Palomeque decía aquello de : «Cuando hay aplausos, señor presidente, imponga silencio a la barra ; cuando hay silbidos, déjela, pues me gustan, porque he tenido la suerte, siempre que he estado en las buenas causas, de haber sido silbado por la barra». Los ánimos empezaban nuevamente a acalorarse. El doctor Juanicó levantaba la voz y hablaba de *tramoyas y vivezas* que podían dar por resultado ser *excluida la cosa*, contra lo que protestaba el señor Alvarez diciendo no se fuera a creer que *era por viveza o por otra cosa* que él no prestaría su voto al inciso en cuestión, pero sí a la moción del doctor Juanicó. No pudo el doctor Vázquez Sagastume, y con fundamento, dejar de aludir a las *tramoyas y vivezas*, pues no sabía que tuvieran lugar absolutamente en el recinto, extrañándole mucho esas palabras—decía—«es-

pecialmente en un señor Representante que, por su lenguaje alto, conciliador, digno y moderado, ha sido siempre muy recomendable, diré que no está en el seno parlamentario ni dentro del Reglamento».

La discusión avanzó, ilustrándose el punto, en la cual intervinieron los oradores citados, hasta obligar al doctor Juanicó a poner en juego su habilidad parlamentaria. Una vez que el doctor Palomeque volvió a hablar para sostener lo que la Comisión proponía, el doctor Juanicó dijo : «votaré el inciso tal cual ha sido redactado por la Comisión de Hacienda ; pero, lo que he propuesto como artículo, lo voy a modificar como adición». El doctor Iturriaga aceptó, y después de oído al señor Vázquez Sagastume y al ministro Nin Reyes, el señor Lapido pidió se diera por suficientemente discutido el punto. En su consecuencia, se votó el inciso, quedando sancionado, de acuerdo con la primera redacción propuesta por el doctor Juanicó, en esta forma : *«El dos por ciento adicional sobre los valores de importación, exceptuándose los productos naturales y agrícolas que comprende el artículo 5.º del Tratado del 4 de septiembre de 1857, y sus similares»*. ¡ Todos habían sido vencedores ! La discusión, para llegar a ese fin, sin embargo, fué detenida. El señor Moreno criticaba aquello de *sus similares*, pues lo creía perjudicial al comercio del país. El doctor Juanicó se mostraba conciliador e invitaba al señor Moreno para que propusiera cualquiera modificación, «siempre que—decía—salvara lo substancial de la cosa» (1). El señor Moreno no se consideraba habilitado, en ese momento, para proponerla, porque «eso necesitaba reflexión» ; observación que utilizaba el señor Lapuente para pedir se postergara el debate para el día siguiente. A ello decididamente se opuso el doctor Palomeque, dando motivo a muestras de desaprobación en la barra, por lo que el presidente exclamaba : «¡ Silencio en la barra !», mientras el orador contestaba : «Déjela que se divierta ; ha de ser algún fabricante de expedientes» (2). El doctor Palomeque sostenía que no debían retirarse sin concluir el debate sobre la adición, cuando menos, por ser ése su deber y estar en su honor. Y, como el señor Lapuente insistiera, manifestando que si se ponía a votación la moción se quedaría perplejo y no sabría qué decir, fué entonces cuando el doctor Palomeque dijo aquello de : «¡ Pues, váyase !», a lo que el aludido respondió : «Pues no me he de ir ; he de estar aquí mientras la Cámara esté en sesión», produciéndose la consiguiente hilaridad en la barra tumultuosa. El doctor Juanicó opinaba como el doctor Palomeque : no creía que debía suspenderse la sesión, a lo menos en cuanto a discutir la adición ; mientras el doctor Vázquez Sagastume la apoyaba. Como era de suponerse, la moción de suspensión no fué vo-

(1) Esta expresión *cosa* era muy del natural del doctor Juanicó.

(2) Esto se refería al latrocinio en la reclamación de perjuicios al Gobierno.

tada ; ni aun aquella que, en el fondo, era la misma, de repartirse la adición y luego venir a discutirla.

Después de siete horas de discusión, se votó la adición propuesta por el doctor Juanicó, que había sido combinada en aquel feliz cuarto de hora de descanso, tan indispensable en toda lucha parlamentaria, levantándose la sesión para, al día siguiente, a las 12, continuar la tarea. Aun se celebrarían dos sesiones, de mañana y tarde, el día 31 de mayo. No aflojaban los luchadores, a quienes se había incorporado decididamente, a última hora, como opositor, el doctor Vázquez Sagastume.

LAS CARNES Y LAS HARINAS

Había llegado el momento de discutirse el inciso 4.º, que establecía «el 4 % de exportación a los productos del país». El señor don Avellino Lerena proponía se eximieran las carnes y las harinas, a lo que no adhería el señor Luis Latorre, aunque sí los señores Iturriaga y Pagola, ambos miembros de la Comisión. Ésta, en el hecho, no existía, pues estaba dividida. El miembro informante de la mayoría ni siquiera se hallaba presente al principiar la discusión. El doctor Juanicó siguió en este caso el mismo procedimiento observado al discutirse el inciso anterior : preguntó al ministro si estaba autorizado para admitir la adición. El secretario de Estado contestó que no sólo no estaba autorizado, sino que, aunque lo estuviera, no consentiría en ello. Conocidas son las razones que a su respecto había expuesto antes de ahora, al combatir ese sistema proteccionista. En su consecuencia, el doctor Juanicó declaró que «votar la adición propuesta era votar el rechazo del contrato, votar el rechazo del arreglo de la Deuda, desde que el contratista no la aceptaba». No quedaba otro recurso que votar por separado el inciso tal cual lo proponía la Comisión, y después la adición. En ese sentido, el doctor Juanicó esperaba conocer la opinión de la Comisión de Hacienda. La Comisión no existía, tal cual lo declaró el señor Iturriaga, por lo que nada podía decir al respecto, si bien tres de sus miembros, presentes, opinaban individualmente—dos a favor y uno en contra.—El señor Lapuente trajo la discusión a un terreno general, desagradable. Habló de Mauá y de *ser leales* en la discusión, y de rebatir con *razones leales*. Contra estas expresiones se revolvía el doctor Juanicó, diciendo que «si quiere decir el señor Representante que lo sea él, que lo seamos todos, está muy bien ; pero que por eso se entienda que no ha habido lealtad en mis argumentos anteriores, no puedo aceptarlo de ninguna manera». El señor Lapuente se apresuró a dar una satisfacción al doctor Juanicó, explicando que aquello de *leal* lo había dicho porque creía que muchos señores tenían conocimiento de la carta que él tenía del barón de Mauá. No tenía motivo para decir tal cosa del señor doctor Juanicó, y pedía le excusara.

El doctor Juanicó, en su arrogancia, no se dignó siquiera dar las gracias. Era una personalidad tan absorbente y dominadora, que no admitía explicaciones; pero, eso sí, se levantaba para contestar a cualquier cosa, diría él, que tocara su epidermis, sin acordarse de la manera avasalladora como él solía tratar a sus elementos, sin que éstos se atrevieran a usar de represalias. Era un jefe de círculo que no permitía se le subieran a las barbas. Pertenecía a la escuela autoritaria, a la disciplina monástica, a esa religión a la cual muy pronto declararía servir el señor don Bernardo P. Berro, al prestar su juramento como presidente de la República (1).

El doctor Juanicó, que pertenecía a esa escuela, era un hábil abogado, de esos que sabían ganar los pleitos por medio de cuestiones dilatorias, de incidentes de procedimientos, que luego afectaban lo fundamental. Hacía las del general experto, que iniciaba la lucha con guerrillas más o menos grandes, hasta traer el enemigo al campo favorable y entonces comprometer la batalla decisiva. En el caso, los opositores pretendían que la Comisión de Hacienda estaba representada en el seno de la Cámara, como para poder hacer suya la moción

(1) Es sabido que el presidente de la Asamblea General, el doctor don Florentino Castellanos, le decía, en ese acto, al señor Berro, que debía «contar con la decidida cooperación del Cuerpo Legislativo, principalmente cuando se trata de proteger la religión del Estado.» Por su parte, el señor Berro, nos hablaba de «la observancia de la religión; de la protección a la religión del Estado, como uno de sus primeros deberes». También nos hablaba del juramento prestado «sobre este libro sagrado, e invocando el nombre del Altísimo.» (Diario de Sesiones de la Asamblea General, página 264, tomo 3.º). Este fué el ambiente respirado por tales hombres, y, por eso llevaron hasta la exageración la doctrina del *principio de autoridad*, que los arrastraría al abismo, a causa de no saber permanecer en el *medio veritas*. Y eso sería una contradicción con sus palabras, entiéndase bien, con sus palabras, pues ese autoritarismo chocaba con las divisas ensangrentadas. Querían hacer partido de coparticipación, pero sólo en el nombre. Llegados al poder, imitarían a los revoltosos del 53: tomarían todas las posiciones para los suyos, no trayendo a los puestos elevados a adversarios caracterizados, que, sin embargo, opinaban por la concordia. Y esas ideas las expresaban en sus documentos públicos, con toda sinceridad, pero, cuando llegaba el momento de practicarlas, no les daban todo el desenvolvimiento debido, como tendríamos ocasión de observar al estudiar la honrada administración de Berro. En prueba de ese nobilísimo propósito, he aquí lo que el señor Berro nos decía en su Mensaje a la Asamblea: «Las malas pasiones políticas hánse amortiguado en gran manera; y en su lugar reina un espíritu de paz, y se pronuncia en propios y extraños, un empeño tal por sostenerla, que hará del todo impotente, ya que no imposible, cualquier conato de perturbación. Hay, sin embargo, todavía, por desgracia, quienes pretenden especular para fines depravados con las viejas divisas de partido, empeñados en fundar una lucha de exterminio, más que de dominación; y en cuyo término sólo puede hallarse, con la aniquilación de todos, la postración y la muerte de la patria. Espero que serán seguidos de pocos, y que el vigor de las inteligencias y la energía de los sentimientos, se contraerán a una competencia legítima, más conforme con los intereses primordiales de la sociedad, y más en armonía con los principios de nuestro sistema de gobierno.» (Diario de Sesiones de la Asamblea General, año 1861, tomo III, páginas 302 y 303).

del señor Lerena. El doctor Juanicó, lo mismo que los doctores Arrascaeta y Palomeque, sostenían que no había tal mayoría de Comisión. El punto en cuestión era de vida o muerte. Si la Comisión existía, se temía que se aceptara la moción de exceptuar las carnes y las harinas, y que puesta en discusión se sancionara. Juanicó le había tomado el pulso a la Cámara y la veía inclinada en ese sentido. Por eso sostenía que no había Comisión en mayoría, en el recinto, como para hacer suya la moción y darle la primacía. Y Juanicó triunfó, votándose el inciso de la Comisión que únicamente hablaba del «4 % sobre la exportación de los productos del país». Pero, todo esto no se había conseguido sino después de una lucha tenaz, de largas horas, durante la cual los opositores sostenían que *se votaba sin discusión*, contra lo cual el doctor Juanicó, en verdad, decía: «Ayer cuatro horas, desde medio día hasta después de las cuatro, se ha discutido este punto».

Ahora bien, vino el debate, al fin, de la adición relativa a la excepción de las carnes y de las harinas, para discutirse por separado. ¡Qué gran debate! ¡Cómo lucharon aquellos hombres! En esa jornada no había, por ambas partes, más que un propósito noble y desinteresado. Los unos creían que no establecer esa excepción era ir contra el Tratado de Modificaciones de 1851, mientras los otros sostenían lo contrario. El señor Lapuente quiso anonadar al ministro de Hacienda. Este se había opuesto a la adición, y el dicho señor, para demostrar que en nada se afectaba el contrato, presentó una carta del señor barón de Mauá, cuya lectura dió lugar a diversos comentarios. Esa carta no aparece en el Diario de Sesiones, pero fué objeto de observaciones más o menos interesantes. El doctor Arrascaeta se sublevaba declarando que «cuando se trataba de medidas administrativas, de impuestos, la opinión del señor Mauá la considero yo—decía—y debe considerarla la Cámara, como la opinión individual de cualquier habitante del Estado. Las materias de administración son de la incumbencia de los Poderes Públicos y debe tener su sistema general. El señor ministro del ramo tendrá su sistema financiero, la Administración lo tendrá, su voluntad es la que debe atenderse, y la de esta Cámara, que es la de la nación. Pero, cuando se trata de impuestos, decíamos de sistemas de administración, ¿qué vale la opinión del señor barón de Mauá? ¿Estamos todavía en que la voluntad de un individuo ha de venir a servir para nuestro sistema? No, señor. El sistema de administración es suyo, es único». Llegaba hasta decirnos que «era una opinión que se oye, que no puede dejarse de oír desde que uno tiene oídos, pero que no puede pasar de ahí». Por su parte, el señor Lapidó decía muy bien que no entraba a apreciar la opinión del doctor Arrascaeta, pero aseguraba que la carta leída probaba todo lo contrario de lo que se había propuesto quien la presentara. Mauá reconocía que no podía cumplir el compromiso contraído, y pedía el señor Lapuente su interposición para con la Cámara para que en virtud del aveni-

miento con el Gobierno se retirara el contrato, «pues prefería esto a que se le admitiera la proposición que se le había hecho antes». El ministro de Hacienda hacía presente que Mauá «había sido acosado, por decirlo, por las exigencias, en su deseo de acceder y atender hasta las susceptibilidades más mínimas, llegando hasta la última concesión, y, por último, hasta la cesación del contrato, encontrando el Poder Ejecutivo un medio honroso de retirarlo de la discusión». El ministro declaraba que «aunque viese en el barón de Mauá ese deseo de conciliar hasta el extremo, yo no he consentido. Yo soy el que he rechazado esa excepción, porque no podía mirar en ese punto al señor barón de Mauá sino en la parte que tenía en el contrato. En cuanto a lo relativo a la Administración, a las doctrinas económicas que debían sustentarse en materia de impuestos, me consideraba el único juez en ellas». Este criterio era apoyado por el doctor Palomeque desde que así lo indicó el doctor Arrascaeta, sosteniendo que «al señor barón de Mauá no se le podía hacer la injusticia que se le había hecho antes de que era brasileño y representante del Río Grande, por lo que miraría por los intereses de su patria». «El señor barón de Mauá—decía—ha probado a los orientales que es amigo de esta patria. No se le puede hacer esa injusticia, y esa carta lo revela, pues en ella dice que siente no poder aceptar la modificación que se propone, porque ligando su nombre al crédito del país tendría que faltar». Luego, cuando el doctor Juanicó usó de la palabra para defender las modificaciones del Tratado, volvió a manifestar aquello que le *«encocoraba»* esto de barón de Mauá en este negocio, porque en el barón de Mauá—decía—yo no veo sino al representante de la masa de acreedores: no es el barón de Mauá sino el representante de 80 y tantos millones de títulos sobre el Estado, y él solo no es dueño de ellos». Le parecía más lógico considerar las cosas como eran, deudor y acreedor, y no fijarse en el individuo y siempre en el individuo, pues parecía que de éste también se quería sacar partido». Y el orador, que se *«encocoraba»*, que no quería hablar del barón, he aquí que en un rapto de nobleza, de generosidad de sentimiento, se expresaba en términos tales, que merecen consignarse aquí para honrar así la memoria de ese gran estadista, que tanto bien hizo al país, contribuyendo no sólo al arreglo de la Deuda, sino a moralizar la Administración, introduciendo hábitos de verdadera transcendencia en el manejo de la renta pública, como se verá en oportunidad. El doctor Juanicó decía: «Entretanto, el barón de Mauá se ha mostrado, ya que es preciso hablar del barón de Mauá, muy amable... muy obsecuente... *porque iba facilitando*... En esto mismo de que se trata hay algo en lo del barón de Mauá, que yo no comprendo. Es un hombre que tiene caudales y se ha establecido en la República, y que representa mucho desde que tiene propiedades en ella y puede traer muchos caudales para desenvolver sus operaciones... Tanto mejor para el país; no está tanto en tener capital, sino en tener hombres inteli-

gentes que se sacrifiquen con sus propios intereses. Para mí, desgraciadamente, a más de lo de representante del Río Grande, etc., hay para mí, hablo en mis convicciones, hay algo más en este asunto. El barón de Mauá, ya no la masa de acreedores, es la aristocracia mercantil... La aristocracia nobiliaria tiene sus exclusivismos, tiene gravísimos defectos, y, sin embargo, tiene sus méritos en el país donde ella existe : más de una vez ha sido la salvación de los Estados. Lo que yo no reconozco con esos méritos ni creo que nadie en materia política, son esos aristócratas mercantiles...»

Todo esto había sido apoyado por el doctor Palomeque ; pero, cuando llegó aquí el doctor Juanicó, entonces el señor Moreno, que veía muy bien adónde iba el tiro, es decir, al Banco Comercial, sostuvo que se alejaba de la cuestión, encontrándose con la serenidad del orador que decía esperaba lo resolviera la Cámara ; mientras el señor Lápido sostenía que se había querido la más amplia discusión y que en ella estaban.

Serenados los ánimos, continuó el doctor Juanicó, sosteniendo que el espíritu, la tendencia de la aristocracia mercantil, como de la nobiliaria, era el exclusivismo, era el ver con enojo cualquier nuevo elemento que se introdujera, lo que estaba en su naturaleza y en el orden civil. «Los individuos mismos—decía—que forman parte de ella, como en la otra aristocracia, se ven arrastrados por esa tendencia que surge de la naturaleza misma de las cosas. Creo que si este barón de Mauá no hubiese tenido un Banco en Montevideo, cuatro cuartas partes de las dificultades que ha ofrecido la idea no hubiesen aparecido. Para mí, en la existencia de este Banco, y en el desenvolvimiento de él por medio de sus títulos que aparezcan en grande escala, veo ventaja para la República ; en la competencia de los capitales para que haya abundancia de dinero, veo ventajas y tamañas ventajas, y que tras de ese Banco venga otro Banco, y tras de éste otros... que merezcan crédito, por supuesto, eso es lo que importa ; lo demás dejémoslo... Porque se ha hablado tanto del barón de Mauá, que es preciso dar estos detalles.»

LA DEUDA PÚBLICA Y EL BARÓN DE MAUÁ

LA NOBLE PERSONALIDAD DE MAUÁ

Es necesario hacer resaltar la noble personalidad de Mauá en este asunto. No basta recordar lo que se lee en el Diario de Sesiones. Es indispensable conocer lo que consta de documentos privados. En la correspondencia que el señor Mauá sostuvo con el doctor Palomeque, parte de la cual, desgraciadamente, se nos ha extraviado, hay detalles que exhiben la elevación de ideas de ese personaje. Vamos a citar algunos, ya que la oportunidad se nos presenta, lamentando no estar en el país para mencionar otros no menos importantes existentes en los papeles públicos de la época.

El señor Mauá había accedido a las tres primitivas modificaciones aconsejadas por la Comisión de Hacienda, ya que ellas «satisficían a todos los hombres sensatos y patriotas hasta el escrúpulo» (1). Pero las *ideas nuevas* a introducirse en el contrato no las aceptaba, pues «desde que *se rechazaba el contrato actual* para, aprovechando sus bases, hacer uno nuevo—decía—no será de cierto conmigo que se realizará». Hacía presente que la ilustre Comisión de Hacienda podía proponer a la Cámara las ideas que quisiera, pues ahí estaba el Banco Comercial, que, después de autorizar a su directorio por sus accionistas, se prestaría tal vez a un arreglo satisfactorio, y que nada le sería *más agradable* que ver el arreglo de la Deuda hecho *con otro* que dé las garantías necesarias. Declaraba asimismo que si el Banco Comercial aceptaba las obligaciones que imponía el artículo 17 del contrato actual, los 47 acreedores que eran *sus amigos*, que representaban 37 millones de Deuda, suscribirían el acuerdo. No respondía de los otros 44 millones, porque eran de personas que no conocía, o con quienes apenas tenía relaciones de cortesía. Dicho esto, declaraba que el contrato con él tenía un doble pensamiento: «el de una vez reducida la Deuda a un logaritmo *módico*, estableciendo un medio de pagarla *el más suave para el país, levantar al mismo tiempo, en un plazo cortísimo, el crédito de la República*».

¡Con qué gallardía y franqueza exponía que para realizar lo primero *no se precisaba* de él, pero que para la realización «de la segunda y no menos importante idea, precisaba y precisaba mucho, porque no había, ni dentro ni fuera del país, ningún individuo o establecimiento que *quisiera o pudiera* hacer lo que él *quería y podía* hacer en

(1) Todo lo subrayado, desde aquí en adelante, pertenece a la correspondencia privada de Mauá en mi archivo.

bien del país» ! Terminaba, con toda convicción y energía, diciendo : «Finalmente, repito, suscribiré ese contrato con la idea fija de prestar un gran servicio al Estado Oriental (ya se entiende sin perjudicar mis intereses). Lo que observo es que no he sido comprendido : por eso *prefiero y prefiero mejor* que sea rechazado *in limine*» (1).

Aquí se ve al hombre bien intencionado, pero con ideas muy hechas en la materia. Era realmente una personalidad curiosa. Después de haber derramado a raudales su talento y su fortuna en la tierra brasileña, abriendo caminos y fomentando la industria y la agricultura, por lo que frente al puerto de Río de Janeiro hoy se levanta orgullosa su estatua, venía al Río de la Plata, y se ponía en relación con sus prohombres, para hacer, en beneficio de él, lo que sólo podría concebirse en un hijo de la tierra. Y era tan sincero el propósito de ese hombre singular, que los hechos confirmaron plenamente ese *doble pensamiento* de que nos hablaba en esta carta. No sólo aspiraba a que el deudor amortizara lo debido, de una manera suave, sino a levantar el crédito del país. Y ambas cosas las conseguiría. Su Banco sería el medio de que se serviría para llegar al fin propuesto : ese Banco que tanto costó fundar, en medio de los arañosos de esa aristocracia mercantil tan bien pintada por el doctor Juanicó, refugiada detrás de las cajas del Banco Comercial, al cual, como se ha visto, ninguna ñoña guardaba el alma superior de esa grande e ilustre personalidad brasileña.

Mauá había fundado un *Banco particular*, como entonces se decía. Él había supuesto, dados sus principios liberales, que no necesitaba ley alguna para establecerlo, desde que la Constitución amparaba la libertad de industria. Su casa bancaria se había fundado el 1.º de julio de 1856. No se le había ocurrido que el artículo 17 de la Constitución, que exige aprobación previa de los estatutos y reglamentos de Bancos, pudiese tener aplicación a establecimientos particulares. Y tenía razón, pues bastaba una ley general de Bancos, como en su oportunidad, según ya se ha visto al discutirse los estatutos del Banco Comercial, lo sostuvo el doctor Palomeque. Sostenía que no teniendo favor o excepción alguna que solicitar de los Poderes públicos, le parecía estar, claramente, fuera del espíritu del artículo constitucional. Lamentaba que esa intervención oficial viniera después de haber fundado su casa, de una manera tan pública, y con conocimiento de los ministros de Estado. De ahí que Mauá se presentara en 16 de febrero de 1857 a las Honorables Cámaras para colocarse dentro de esa situación legal, pidiendo a la vez autorización para aumentar el fondo del Banco con capitales de terceros, y fortalecer así los recursos del establecimiento, en bien del país. «Esas concesiones—decía—no encierran onus alguno

(1) Copia de una carta de Mauá dirigida a «Ilustrísimo señor». Supongo sea la que se leyó en esta sesión. No tiene fecha.

para el país, ni siquiera importa idea alguna de favor o excepción, y mucho menos de privilegio. De acuerdo con mis ideas, acepto el gran principio de la libre concurrencia, ofreciendo las garantías posibles : el examen y la publicidad.» Declaraba que si se quería el bien era forzoso no poner embarazos a quien se proponía realizarlo. Estaba conforme con las modificaciones que se hacían a su representación, sosteniendo que la limitación de la circulación de billetes menores de una onza se vincularía al pensamiento de no emitirse por el Banco tales billetes arriba de una cuarta parte del monto de la emisión total en cualquiera época (1).

Con este motivo se estableció una verdadera y noble amistad entre el doctor Palomeque y el señor barón de Mauá, basada en el desinterés particular más completo, como que ambos eran dos caballeros en toda la extensión de la palabra. Se vincularon en interés del país, de su crédito, a fin de salvarlo de la situación en que se hallaba. Puede que el doctor don Andrés Lamas, o el doctor don Manuel Herrera y Obes, fueran quienes pusieran en contacto a esos dos hombres, el uno, desde Río de Janeiro, y el otro, en Montevideo, pues es sabido que Mauá ya era un viejo conocido de esos señores desde los tiempos de la Defensa. O también que Palomeque y Mauá se hubieran conocido en esta misma época. Lo cierto fué que su amistad sobrevivió a la muerte de uno de ellos, teniendo así, el sobreviviente, la dulce satisfacción de calmar los sufrimientos físicos, cuando menos, de la familia empobrecida. Eso es lo noble de la vida. Y eso fué lo que ordenó Mauá se hiciera con la viuda del doctor Palomeque. La auxilió con una miserable suma, pero de gran importancia, en tan tristes momentos, y, cuando mi vieja madre fué a saldar la letra que había firmado, el rostro dulce del doctor José L. Terra, con delicada satisfacción se sonreía, y en sus labios se oían modulaciones como esta : *¡El barón de Mauá ha ordenado no se cobre semejante letra!* La humanidad no es mala. Con ella nos reconciliamos cuando encontramos seres superiores. ¡ Así pagaba Mauá las deudas del corazón !

Esa nobleza de vínculos se esfuma en la correspondencia privada, de donde resulta la importancia e influencia que el barón de Mauá daba al doctor Palomeque en esos momentos, tratándolo con toda la delicadeza que él merecía. Una vez que Mauá se presentó al Cuerpo Legislativo para normalizar la situación de su Banco, tuvo ocasión de entrevistarse con el doctor Palomeque. A ello hacía referencia en carta privada, cuando decía que «la bondad y delicada atención con que Vuestra Señoría se dignó recibirme cuando ha días tuve el honor de visitarlo para manifestarle mi resolución respecto del Banco, anímanme a presentarle a Vuestra Señoría las alteraciones que juzgo *indispensables* a fin de ser una realidad el Banco proyectado». Las «alteraciones se redu-

(1) Circular de Mauá a los legisladores, del 2 de abril de 1857.

cían a poca cosa, porque su intención no era crear dificultades». En seguida le hablaba de las alteraciones aconsejadas por la Comisión de Hacienda relativas a no poder exceder del 25 % de la emisión realizada y a la recepción de los billetes de Banco en las oficinas de Recaudación pública mientras una disposición legislativa no lo prohibiera, o un decreto del Poder Ejecutivo dado el caso de duda respecto de la situación del Banco o moralidad de su administración. Esta autorización dada al Poder Ejecutivo le hacía decir a Mauá que «el Poder Ejecutivo podía querer *negociar* esa concesión, e imponer condiciones onerosas, y eso no me conviene; estoy dispuesto a auxiliar la marcha del país y su Gobierno, y siempre en condiciones razonables, y aun de un modo equitativo; no quiero, sin embargo, quedar sujeto al *arbitrio* de calidad alguna, porque, en rigor, aunque severo respetuoso de las leyes de cualquier país donde tengo intereses, soy enemigo de lo *arbitrario*». El hombre tenía razón; y apuraba la decisión, porque deseaba embarcarse para Río de Janeiro «con idea fija en lo que tenía que hacer».

Por lo demás, aprovechaba la ocasión para hablarle al doctor Palomeque de un asunto de interés para el país. El doctor Palomeque le había consultado sobre si podría hacer un empréstito al Gobierno para la amortización gradual de la Deuda Pública, afectándose las rentas del papel sellado, contribución directa, u otra que pudiera hallarse disponible o crearse. Mauá no tenía inconveniente en facilitar 20,000 pesos mensuales, con un interés del 1 %, obligándose a disminuirlo cuando las circunstancias lo permitieran. Y lo hacía, decía, por tratarse de «un fin tan justo, tan altamente reclamado y de tan trascendental utilidad para el país». Para hacerlo, sólo esperaba la ley autorizando al Gobierno completamente para semejante fin» (1).

La correspondencia revela el alto aprecio que el barón de Mauá tenía por la inteligencia y patriotismo del doctor Palomeque. Eran muy interesantes las observaciones que en una de sus epístolas hacía, al retirarse para Buenos Aires, referentes a la limitación de la emisión de billetes de fracción de una onza. Allí se veía al hombre conocedor perfecto de la materia. Después de la crítica hecha a ese respecto, a la resolución del Senado, manifestaba que le constaba corría la idea de hacer pasar el proyecto del doctor Palomeque, autorizando al Gobierno para contratar la circulación con un establecimiento, sacando de ahí ventajas para el Estado. «Tal vez—decía—sea preferible eso: establecer la libertad absoluta para todos los establecimientos de crédito que emitiesen billetes de una onza arriba, y autorizar al Gobierno para contratar la circulación de billetes menores.» Se contentaría, en este caso, con funcionar como Banco particular. No deseaba, y lo decía,

(1) Carta en mi archivo, fecha 8 de abril de 1859. Más adelante se verá por qué no facilitó ese préstamo.

servir directa ni indirectamente, de obstáculo a que se adoptaran las medidas que los legisladores del país consideraran convenientes sobre tan importante asunto. «Mi deseo, mi deseo ardiente, convénzase Vuestra Señoría—le decía—es auxiliar la marcha de este país, y no embarazar medida alguna útil». Aceptaba lo que el Senado había resuelto en su Banco, pero «si los honrados Representantes prefiriesen una medida general sobre Bancos, prefería quedar colocado en las condiciones generales, porque era enemigo de toda exclusividad». Su carta era la de un caballero en toda la extensión de la palabra. Había penetrado hondamente al doctor Palomeque. Por eso lo hacía depositario de sus pensamientos, al retirarse para Buenos Aires, declarándole que «no solamente se sentía obligado al doctor Palomeque por haber sido el primero en abrazar la idea capital por él enunciada en la circular, sino que juzgó ver, al través de la corta conversación que tuvo la honra de tener con él en su casa, sentimientos tan nobles y patrióticos, que entendía, decía, «deber confiar enteramente en Vuestra Señoría la dirección de una cuestión que interesa vivamente el futuro de este bello país». Sin embargo, terminaba siempre con su *Delenda est Carthago!* Él se sometía sin murmurar a lo que se resolviera, pero se reservaba el derecho de retirar su establecimiento, «de liquidar mi casa—terminaba diciendo,—si las condiciones impuestas no me agradasen» (1).

Sin embargo, el gran financista regresó a Montevideo, y no encontró resuelta su solicitud, viéndose obligado a partir para Río de Janeiro, después de una ligera enfermedad. Y fué al retirarse, que acentuaba las atenciones guardadas, que «llevaba grabadas en su mente». Él regresaría, después de seis meses, y demoraría algún tiempo «para arrancar a este bello país de la situación deplorable en que se encuentran sus finanzas—decía—siempre que tuviese andamio inmediato y obtuviese una resolución favorable su solicitud bancaria». De lo contrario, era «irrevocable su resolución de liquidar su casa, no siendo necesario para ello su presencia en Montevideo». Era tal la confianza depositada en el doctor Palomeque, que dejaba el asunto del Banco entregado exclusivamente a su protección. Según él, «no podía estar en mejores manos, visto que Vuestra Excelencia—decía—había comprendido toda la importancia para este país de la realización de mi proyecto». Deseaba, sin embargo, que la resolución fuera rápida. «Cualquiera que sea el resultado de la cuestión—terminaba diciendo,—me acordaré siempre con gratitud del interés que Vuestra Excelencia se dignó manifestar para que mi establecimiento obtuviese lo que le falta para poder prestar al país servicios de orden elevado.» (2).

Este era el pie nobilísimo en que se mantenían las relaciones de

(1) Carta en mi archivo, sin fecha.

(2) Carta fecha 15 de abril de 1857.

estos dos hombres, quienes, teniendo en vista el fin perseguido, despreciaron las calumnias de la época, a la espera de lo que la posteridad les reconocería. Eran dos fuerzas morales e intelectuales poderosas, que se habían comprendido, después de un maduro estudio de sí mismas, y de las necesidades apremiantes de aquella sociedad dilacerada por las pasiones de los hombres y las inclemencias de la Naturaleza. En efecto, en esos días grises, la ciudad se vió atacada por la fiebre amarilla. De ese azote hablaba, desde Río de Janeiro, el barón de Mauá, en una de sus epístolas, haciendo votos por su desaparición, para que «al fin pudiera ese bello país entrar de nuevo en la vía de la prosperidad». Y era en esta carta donde comunicaba a su amigo un hecho grave, que ponía obstáculos al pensamiento del empréstito de los 20,000 pesos mensuales para la amortización gradual de la Deuda Pública, de que ya hemos hablado. Era muy serio el incidente, pues aparecía nada menos que la persona del propio presidente de la República realizando un acto indebido. El señor barón de Mauá le hacía presente al doctor Palomeque que «habiendo mandado copiar de los diarios de Montevideo una lista de las declaraciones hechas para el pago de la contribución directa, quedé asombrado—decía—de ver la impudencia (permítame la expresión) con que hombres de todas las clases hacen declaraciones falsas a su respecto. El mismo presidente de la República declara 120,000 pesos, cuando nadie en Montevideo le da una fortuna inferior a medio millón de patacones, mientras algunos la hacen ascender a mucho más».

Este hecho, inconcebible en el primer magistrado de la República, daba motivo, con fundamento, para que el señor de Mauá le declarara al doctor Palomeque que «esto llevó el desánimo a su espíritu con referencia al empréstito garantido con esa renta». «Es preciso—decía—que la ley sea *severa* y su ejecución *inejorable*, imponiendo una multa *tremenda* a quien hiciese declaraciones falsas; que esa multa sea *rigurosamente* impuesta a media docena de *personas notables*, a ver si es posible *moralizar* el impuesto, y el país sacar de él la renta que debe sacar,—de lo contrario de nada vale elevar la tasa para que resulte una renta menor todavía.»

Sin duda esta *impudencia*, como decía Mauá, unida a la demora en resolver la solicitud presentada a las Cámaras sobre su Banco, era lo que influía en el ánimo de los *amigos* de ese caballero para inclinarle a que levantara su casa; pero él, «a pesar de esa opinión y de los *prejuicios*, insistía: aguardaba la decisión de las Honorables Cámaras respecto de su solicitud; o la legislación sobre Bancos particulares, para decidirse» (1).

La correspondencia ponía de manifiesto la sinceridad de esos dos hombres, vinculados para realizar un programa de moralidad adminis-

(1) Carta fechada en Río de Janeiro a 30 de abril de 1857.

trativa. Llegaban, en sus confidencias íntimas, hasta juzgar con toda independencia de juicio los actos de los magistrados y personas notables que obstaculizaban la marcha del buen pensamiento. De ahí que el doctor Palomeque le dijera a Mauá: «Mucho me duele decir a Vuestra Excelencia que participo de las ideas que se ha dignado expresarme en lo relativo a las falsas declaraciones que se hacen de los capitales, que, por la ley, están sujetos a la Contribución Directa. Mucho, mucho lamento, proceder tan inaudito, y lo lamento tanto más cuanto que veo, envuelto en ese *delito*, la ineficacia de los medios que hemos puesto para salir de nuestra pésima como extraordinaria situación. Pero, ¿qué hacer, señor, cuando la libertad se lleva al extremo de considerarse un derecho el desobedecimiento a las leyes? ¿Qué remedio poner a un mal tan radicado en esta sociedad? Allá veremos el modo y la forma de evitar abusos».

Como era natural, el doctor Palomeque «no podía conformarse con el desistimiento que indirectamente le anunciaba respecto de la amortización y pago de intereses de la Deuda Consolidada, cuando estamos—decía—a punto de realizar lo que sólo Vuestra Excelencia puede. Es necesario que Vuestra Excelencia no se acobarde, y que los vehementes deseos que le animan por el progreso y prosperidad de esta patria no se hagan estériles ante consideraciones que pueden ser remediadas. ¡Adelante, señor barón!».

La luz que esta correspondencia proyecta para juzgar la influencia decisiva que esos dos hombres tuvieron en el desarrollo de la potencialidad comercial, económica y financiera del país, es clara, y alcanza a iluminar lo más recóndito del problema. Se habían trazado un plan, sobre la base del Banco. Sin éste no era posible levantar el crédito del país. Luego, había necesidad de abrir horizontes al comercio vecino, iniciando una nueva política de confianza. De ahí las modificaciones al Tratado de 1851. Sobre buena política externa e interna, era posible tener buenas finanzas. Y con todo eso preparado, podía entonces venir el arreglo de la Deuda Pública, acaparada, en su gran parte, por el hábil financista fluminense. Era un plan hermoso, por ellos concebido; siendo muy justo que Mauá, y no otro, lo realizara con su influencia indiscutible en el seno del Gobierno brasileño, y con el poder de su riqueza sólida y talento honrado en el Río de la Plata. ¡Por eso, el doctor Palomeque insistía en darle ánimo, en presencia de aquel hecho que tanto le contrariaba, cual era, el de las falsas declaraciones de capitales para el pago de la Contribución Directa!

En este sentido, el doctor Palomeque le transmitía noticias muy favorables sobre su solicitud a las Cámaras. Le participaba que aun no estaba resuelta por el Cuerpo Legislativo, habiendo sido necesario aplazarla para que el resultado fuera tan favorable como las exigencias públicas lo reclamaban. «Mucho he hecho—le decía,—y mucho espero; pero, todo es la obra del reposo y de la prudencia.» Le

hablaba de modificaciones a los artículos 5.º y 7.º del proyecto de la Comisión de Hacienda, y de haber sido acogido por ésta el proyecto ligado a esos artículos «para el adelanto de los 22,500 pesos bajo la garantía de la Contribución Directa, acordando el exclusivo de la emisión del 25 % en billetes menores, y de ser éstos admitidos como dinero efectivo en las oficinas de recaudación pública al Banco que tales adelantos realizara. Con este motivo hacía una pregunta : «¿No cree Vuestra Excelencia que debo felicitarle y felicitarle?». Esperaba enviarle la ley en los términos expuestos, por el próximo paquete, «y entonces—le decía—no debe haber por parte de Vuestra Excelencia consideración humana que le obligue a desistir de *nuestro pensamiento*».

¡Sí, así, *nuestro pensamiento*! Él no era un simple colaborador en tan magna obra ; era autor principal, en la que había expuesto todo su saber y energía para salvar al país de la triste situación en que se encontraba. Había expuesto más : ¡su reputación! Como hombre de carácter, y de carácter honrado, poco le había importado cuanto sus adversarios dijeran, recurriendo, como arma de combate, y no porque lo creyeran, pues era conocida la proverbial honradez del ciudadano, a la mixtificación de *¡estar vendido al oro del Brasil!* Nada le arredraría ni le detendría. Él contribuiría a la fundación del Banco Mauá, seguro del bien que hacía al país, en todo sentido. Y ahí quedaría, para que sirviera de base al arreglo de la Deuda y a la moralidad administrativa. Y eso era lo que Juanicó y sus amigos cosechaban en estos momentos, por lo que levantaban la personalidad de Mauá a la altura que se debía. Sin el Banco nada se habría realizado.

Pero, era indispensable demostrar que se quería vivir no sólo en paz sino honradamente. Así se explica que el doctor Palomeque buscara por todos los medios convencer a Mauá de que la sociedad política, en aquellos momentos, aspiraba a matar todo un pasado triste y bochornoso, levantando el prestigio de la ley y colocando en lugar debido la moral administrativa. En ese sentido, le anunciaba, «y lo hacía con sumo placer, que mi gran proyecto—decía,—proyecto salvador, y que se liga con los intereses de Vuestra Excelencia, ya está sancionado por la Honorable Cámara de Representantes, y hoy precisamente lo discute y resuelve el Honorable Senado. Hasta aquí Vuestra Excelencia verá un misterio, cuando hablo de proyecto salvador. ¿Y no lo será en el ánimo de Vuestra Excelencia el que se lleven a las llamas todos los escandalosos expedientes por perjuicios? Pues bien, a esto llamo yo proyecto salvador». Creía poderle comunicar que el Senado mandaría también que se quemara lo que no era sino «*un robo a la nación*» (1).

De esta manera el uno transmitía al otro sus pensamientos, para que los meditara, por si ellos no iban rectos a solucionar el problema

(1) Carta fecha 17 de mayo de 1857. En el estudio ya hecho de este asunto, hemos expuesto la modificación que el proyecto sufrió en el Senado.

perseguido. El barón de Mauá se sentía atraído por el espíritu altruista del hombre en quien había depositado sus ideas, por lo que, al tener conocimiento de aquello, expresaba que «esos expedientes fraudulentos comprometían atrozmente la fortuna pública y los intereses de los legítimos acreedores del Estado». «Permita Dios—decía—que el Honorable Senado no se deje llevar por camino menos conveniente, y no ponga obstáculos al paso de un pensamiento de salvación pública, por lo cual Vuestra Señoría merecerá las bendiciones de su país y la gratitud de los hombres de bien». Luego volvía a hablar de su Banco, a la espera de lo que se resolviera. Según ello, «se ocuparía de ver si conseguía hacer bajar ahí—decía—el interés del dinero, que absorbía, según su entender, el interés posible de cualesquier operaciones que se realicen en el país». Y en cuanto al empréstito garantido por la Contribución Directa, «era asunto para ser meditado, en presencia del vergonzoso *fraude* en la manifestación de los capitales : haré, sin embargo—decía,—lo que fuese posible, porque grande es mi deseo de auxiliar al bienestar de ese bello país» (1).

Todo ese largo trayecto habían recorrido juntos. Ahí estaba el Banco y la ley sobre revisación y quema de los expedientes fraudulentos. Ahora era necesario el arreglo de la Deuda Consolidada. En esa tarea no escatimó esfuerzos el doctor Palomeque. Apuró el asunto, desde aquella discutida ley autorizando al Poder Ejecutivo, en 1858, para introducir alteraciones en el Presupuesto ; y ahora, al fin, en 1859, ahí estaban luchando por coronar la obra iniciada en 1856, y en la que Lamas, Mauá y Palomeque, sostenidos por el ministro de Hacienda don Federico Nin Reyes, se destacaban siempre como iniciadores del pensamiento ; mientras aparecen luego hombres como Juanicó, Arrascaeta, Lapido, Lerena, etc., etc., utilizando todos esos trabajos, para cooperar, con su talento, energía y honradez, a la consumación del ideal acariciado en medio de la miseria.

Toda esa correspondencia viene a explicar la actitud del doctor Palomeque, desde 1856, en la cuestión de la Deuda Consolidada y bancaria. Conocía al dedillo el asunto, como que lo tenía estudiado, sólo, al principio, y acompañado, luego, nada menos que por un cerebro tan versado en la materia como el barón de Mauá. Éste, desde el primer momento, apenas cambió ideas y palabras con el doctor Palomeque ; comprendió que había encontrado el hombre que sabría secundar sus propósitos sanos y elevados. De ahí que pusiera bajo su protección la idea de la fundación del Banco, y no tuviera secretos para él en el negociado. Por su parte, el doctor Palomeque, fiel a la confianza en él depositada, lo tuvo al corriente de todo lo que pudiera interesar al

(1) Carta de Río de Janeiro, de 27 de mayo de 1857. Aquí estaba escondida la verdadera causa que hizo imposible el empréstito. Nunca se atrevió el Gobierno a decirla, porque habría tenido necesidad de delatarse a sí mismo el presidente de la República.

ilustre financista, preparando hábilmente el terreno para el arreglo de la Deuda. En ese sentido, libró la batalla con Juanicó y compañeros, que ya conocemos, para incluir en aquella ley de julio de 1858, el artículo que facultaba al Poder Ejecutivo para hacer los arreglos sobre la Deuda, de acuerdo con las leyes existentes. En esa tarea ya hemos visto que no estaba solo. Alguien lo acompañaba, y ése era nada menos que el ministro de Hacienda don Federico Nin Reyes, al tanto de lo que acontecía.

LA VICTORIA DE AMBOS COMBATIENTES

Ahora bien, el arreglo de la Deuda Consolidada, de lo cual ahora se trataba, era el final de la primera parte de la obra ideada. Ya tenían el Banco y el Tratado de Modificaciones, es decir, lo interno y lo externo, lo político y lo financiero, faltando sólo consolidar la Deuda. Y en esa tarea, la tenacidad del doctor Palomeque no decayó por un momento. Arrostró todo, las iras de los adversarios y la calumnia de su tiempo. Esa injusticia con que era tratado, le hacía estallar, y así atacar, a veces rudamente, a sus enemigos, a quienes los veía saturados de un prejuicio personal, cual era, el de abatir la personalidad de Mauá, y con ella su Banco, que tanto le había costado levantar, para colocar en su lugar al elemento aristocrático refugiado en el Banco Comercial; ése que Juanicó había pintado tan hábilmente, aunque le *encocorara* la individualidad de Mauá, de la que había tenido al fin que ocuparse para hacerle debida justicia.

La mala voluntad contra Mauá se reflejó claramente en el primer informe de la Comisión de Hacienda, donde también se veía toda la tirria guardada contra el ilustre ciudadano doctor don Andrés Lamas. Esa Comisión, compuesta de los señores Javier Alvarez, Avelino Lerena, Juan F. Pagola, Adolfo de Lapuente, José A. Iturriaga, José Vázquez Sagastume y Luis C. de la Torre, había dicho, en su primitivo informe, que el contrato «podía ser insostenible y consiguientemente inaceptable», porque no abrazaba una operación general de conversión de Deuda, sino una operación parcial y limitada a poco más de la mitad de su monto. Atacaba de inconsecuente al doctor Lamas, dado lo que se establecía en el contrato y lo que decía en la nota explicativa al remitirlo al Poder Ejecutivo. Consideraba «el contrato Mauá de carácter y condiciones parcialísimas». Para la Comisión era un arreglo parcial, porque Mauá sólo poseía cincuenta y tantos millones, cuando la Deuda era de cien millones arriba. Afirmaba que tal como se presentaban las cosas, sólo se favorecerían los intereses de Mauá.

No todas sus observaciones eran injustas. Había una que nadie discutió, y que el mismo Mauá se apresuró a aceptar: la de la inter-

vención del Brasil para el caso de una violación del contrato por parte del Gobierno.

Sin embargo, todas las modificaciones allí indicadas, fueron inmediatamente admitidas por el Poder Ejecutivo y Mauá, sin que en el informe se observara absolutamente nada respecto al derecho de exportación. La Comisión lo aceptaba sin limitación. Fué después, en la guerra *à outrance*, que salió a bailar ese argumento, por lo que Juanicó se sublevaba diciendo que una vez por todas se manifestara claramente si se quería o no aprobar el contrato. La actitud mansa del Gobierno había desbaratado el plan de los atacantes. No habían presumido que el Poder Ejecutivo se apresurara a manifestar a la Cámara que no quería discusión, y que aceptaba todas las modificaciones proyectadas por la Comisión. Así desbaratado el plan de ataque, todos creyeron que la aprobación del contrato era cuestión de unas pocas horas de conversación amigable. Mas cuando se vió que no era así, y que el señor Errazquin y sus amigos dirigían sus tiros al Gobierno, ya hemos visto cómo el barón de Mauá tomaba alturas y decía : «Pues venga ese Banco Comercial y haga el negocio, en la seguridad de que los acreedores que represente, coadyuvarán a esa obra». No, decían Juanicó, Palomeque, Arrascaeta y Lapido ; adelante con el pensamiento, que es bueno y honrado. Y la jornada duraba aún, después de un buen número de sesiones, calentando los ánimos, hasta el punto de sacarlo de quicio a Juanicó y obligarle a ser duro con sus compañeros. Estos protestaban su buena fe, pero Juanicó les replicaba : *Obras son amores y no buenas razones*. Juanicó se vió obligado a hablar de Mauá y a estudiar las ventajas de las modificaciones del Tratado del 51, en su discusión con el señor don Avelino Lerena, quien, sea dicho en honor a la verdad, trajo al debate muy interesantes argumentos. El doctor Juanicó se sentía fastidiado ante la resistencia. No le convencían de la necesidad de la excepción del impuesto a las carnes y harinas. Y, apurado, en presencia de la carta de Mauá, decía : «No basta que un contratista diga tal cosa, o que se saque una carta de él en la que manifieste su sentir. Nosotros debemos estar a lo que el ministro dice ; y si vale lo que individualmente uno pueda asegurar, yo, al salir de la sesión, he ido precisamente cerca del barón de Mauá para convencerme por mis propios oídos y no tener que repetir lo que está muy repetido, y me ha dicho terminantemente que no le es posible hacer más de lo que ha hecho. Valga lo que valga esto en cuanto a lo que ha pasado ; el que quiera creerlo, que lo crea, el que no, que no lo crea. Hablo de mis creencias, de mis convicciones, y si hay algún señor diputado que me considere indigno de ser creído en la Cámara cuando hago alguna referencia (y sobre todo creo no estar en esta situación), para él no tendrá ningún valor ; no me creerá. Yo recelo que echamos por tierra, que fracasa el contrato ; y ante esa duda, ante ese solo recelo, cuando por otra parte estoy enteramente satis-

fecho y creo son ilusorios los inconvenientes que se ponen, no vacilaré absolutamente en votar en contra de la moción» (1).

El radicalismo del doctor Juanicó surgía del calor de la discusión y de su temor de ver fracasado el contrato si se persistía en votar la adición. Él no las tenía todas consigo. En el fondo reconocía la justicia de la excepción, pues así la imponía el Tratado modificado. Por eso había recurrido al último argumento, quemando su postrer cartucho. ¡Él declaraba, en plena Cámara, invocando su caballerosidad, que acababa de hablar con Mauá, y que éste no aceptaba la adición! Aceptar ésta, pues, era ir derecho al fracaso del contrato. Por consiguiente, aspiraba a decir su última palabra para impresionar a los amigos, y aun a los que proponían la adición, pues éstos deseaban la sanción de lo fundamental del contrato. Veía que después de tanta labor, de tanto desgaste intelectual, cuando ya iba a llegar a la orilla, el buque estaba expuesto a naufragar por culpa de una mala maniobra de los mismos pilotos que querían conducir la nave a buen puerto; y les gritaba: «Por ahí no; ése es un escollo y vamos al abismo». Las dos fuerzas se temían. Eran respetables sus elementos. Ambos, ante este grito de salvación común, y ante las responsabilidades a contraer, tuvieron un momento de inspiración, y se dijeron, con el presidente a la cabeza: «Démonos un momento de descanso, y meditemos lo que conviene». Y así se hizo, para luego, encalmado el espíritu fatigado por una tarea tan ruda, volver a la arena y lanzar el ¡eureka!

Vamos a asistir al final del drama. No todos los actores permanecerían en el terreno al llegar la hora suprema. Allí faltaron Pereyra, Lecocq, Victorica (éste con licencia), Ramos, Pagola, Fernández Fistera, Irureta, Caravia, Basáñez, Vázquez Sagastume, Echenique y Villaurreta. El señor Lapuente agotó la argumentación, llegando a sostener que «si se le establecía ese derecho a las carnes, era solamente por cohonestar, no porque en realidad hubiera tal necesidad para el servicio de la Deuda, porque, decía, «se ha considerado en varias conferencias que se han tenido a ese respecto, que eso es superabundante». Para probarlo, recordaba el artículo del contrato que preveía esa superabundancia. El señor Lerena apoyaba al señor Lapuente; y, cuando Juanicó respondía, declaraba que no reconocía razón en ninguno de los argumentos expuestos. No podía «dejar de reconocer que en todo este asunto y otros, para mí—decía,—hablo de mí, creo ver una *oposición sistemada*». Los señores Lapuente y Lerena negaban. Juanicó y Lapidó retrucaban. El presidente llamaba ¡al orden! en medio de la protesta del señor Lerena y de la voz estentórea de Juanicó que exclamaba: ¡*Obras son amores y no buenas razones!* Luego, Juanicó pronunció un extenso discurso. Y, declarado suficientemente discutido el punto, el

(1) Sesión del 31 de mayo de 1859, de día, página 324, tomo VI.

señor Lerena hizo moción para que la votación fuera nominal, en medio de los *bravos de la barra*. Así se hizo, dando el resultado siguiente :

AFIRMATIVA.—Aguirre, Alvarez, Lerena (Luis), Lerena (Avelino), Moreno, Tapia, Camino, Lapuente, Iturriaga, Díaz.

NEGATIVA.—Antuña, Arrascaeta, Lapido, Fuentes, Pérez (Antonio), Barboza, Pérez (Martín), Juanicó, Sienra, Gómez, Rodríguez, Latorre (Pedro), Palomeque, Illa, Molina y Haedo, Latorre (Luis), Cavia.

La adición fué rechazada ; pero, cuando el proyecto pasó al Senado, este inciso se modificó con esta adición : «*con excepción de aquellos a que se refiere el artículo 3.º del expresado Tratado*». Y esta modificación, que daba el triunfo a la minoría de la Cámara de Representantes, fué aceptada por Mauá y por la misma citada Cámara (1). Fué en ese acto cuando Juanicó declaró que esa modificación él la hubiese aceptado desde un principio, «*si no hubiese habido tanto empeño y tanto ahinco y también algún hincapié en el sistema de oposición*».

Quedaba, pues, terminado el magno proyecto.

LA POLÍTICA Y MAUÁ

¿Qué decía Mauá, con este motivo, al doctor Palomeque? ¿Se manifestaba grato a los servicios prestados?

Vamos a saberlo, y, continuar así la tarea de dar a conocer las relaciones de esos dos hombres hasta en la desgracia, aunque sea adelantándonos a los sucesos.

Mauá, inmediatamente que recibió la nota de sanción del proyecto, escribió al doctor Palomeque para «felicitarlo y tributarle la expresión de su sincero reconocimiento por la franca y leal cooperación que se dignó prestarle en el sentido de tornar efectivas las ventajas que la República debía gozar de la reorganización de sus finanzas y del establecimiento sobre bases seguras del crédito nacional». «Su elevado carácter y su reconocido patriotismo—le decía—éranme garantías bastantes de que semejante propósito encontraría en usted el más eficaz e ilustrado apoyo.» Agradecíale «el valioso servicio de sus luces», por lo que le hacía «protestas de gratitud, dándole las seguridades de su particular estima» (2). Esas manifestaciones de amistad sincera se hicieron efectivas. El doctor Palomeque tuvo ocasión de experimentarlo en su buena y mala fortuna. El Banco Mauá tuvo con él ciertas distinciones, ya en su carácter privado, ya en el desempeño de sus funciones públicas. Como particular, le facilitó ¡1,000 patacones! en una letra, a treinta días de plazo, garantida con títulos de la Deuda, la que

(1) Sesión del 27 de junio de 1859.

(2) Carta de Río de Janeiro, de fecha 6 de junio de 1859.

fué reformada por treinta días más (1). Como funcionario, pidió al señor Mauá contribuyera a la construcción de la cárcel en Cerro Largo. En su carta privada le exponía que el presupuesto de la obra, ya emprendida, subía a 12,000 patacones. El Gobierno le había autorizado para emplear cuatro, tres tenía obtenidos de subscripción de los habitantes del Departamento. «Le faltaban cinco mil, y necesitaba reunirlos entre los buenos amigos—decía,—interesados en mi crédito y mi nombre.» Entre esos amigos señalaba a Mauá en «primera escala, queriendo fuera el primero a quien invitar para un sacrificio pecuniario». «Vuestra Excelencia—agregaba,—que tantas pruebas de generosidad y de interés ha manifestado en favor de este país, no ha de negarse a aumentar el catálogo de aquéllas, subscribiéndose con una cantidad para la construcción de una cárcel, que siempre es una obra pía mirada bajo cierto aspecto. El servicio que Vuestra Excelencia haga en aquel sentido es a mí expresamente, después de lo que importa al país. Cuento con él, y espero que sabrá disculparme, atenta la especialidad en que me encuentro.» Dicho esto, en el que se ve la altura moral del hombre, que ponía su influencia personal al servicio de los intereses

(1) He aquí los documentos de la referencia :

«Vale por mil patacones que pagaré a los señores Mauá & Comp.^a a un mes de la fecha, en oro o plata, con exclusión de todo papel moneda creado o por crear, por igual valor recibido en la misma especie.—Montevideo, 22 de julio de 1859.—José G. Palomeque. Son \$ 1.000.» A través del documento: «Reformado a treinta días.—Palomeque.» En el margen superior, con tinta colorada: C/ número 101.—\$ 1.200, p.^a 22 de agosto 1859.»

«Rio de Janeiro, 20 de Julho de 1859.

»Illm.^o Exm.^o Snr. D. José Gabriel Palomeque, Montevideo.

»Tive a honra de receber o prezado favor de V. Ex. a cujo contendo dei a devida attenção e a que me cumpre responder que sempre tive em vistas proporcionar aos possuidores de titulos da divida dessa Republica por meio do meu estabelecimento bancario dessa praça, adiantamentos de parte do capital nelles compregados, concorrendo desse modo para sustentar o valor de semelhantes titulos. Na actualidade, porem, nao se havendo ainda emitido os novos titulos, nem se podendo avuliar com segurança o producto das lendas affectas ao pagamento dos juros e amortisação, que neste semestre serán provavelmente insufficientes para tal fim, nao julguei prudente autorisar essas operações como regra geral, comquanto permittiese ao meu procurador fazé-las em casos excep-cionaes.

»Se pois V. Ex. ou algum amigo desejar que se lhe adiante alguma quantia sobre esses titulos, nao haverá nisso a menor duvida.

»Brevemente espero achar-me de todo restabelecido e entao terei o prazer de escrever pessoal e mais detallhadamente a V. Ex. o que por agora me nao e possivle por me ser expressamente recommendado o mais completo reponso.

»Permitta V. Ex. no entanto que lhe reitere as expressoes de perfeita estima e consideração com que son

»De V. Ex.

»Am.^o affm.^o e att.^o

»BARAO DE MAUÁ.»



Ambrosio Velazco

públicos que le habían sido confiados en su carácter de jefe político de Cerro Largo durante la administración del señor Berro, aprovechaba la ocasión para indicarle al señor Mauá la conveniencia de establecer en Melo una sucursal bancaria, bien con dependencia de la de Montevideo, bien fuera de la de Pelotas. «Lo que Vuestra Excelencia tiene por ahora aquí—le decía—no llena las exigencias de este comercio, ni el hombre que está al frente responde, ni está a la altura de Vuestra Excelencia ni de sus intereses : propondré una cosa mejor en todo sentido.»

Mauá contestaba, en el acto, manifestándole que «estaba al corriente de los importantes servicios que Vuestra Señoría ha prestado al Departamento en que fué llamado a desenvolver su energía y actividad reconocidas, bien como de la gratitud que le tributan los pueblos sobre los que hace sentir la acción benéfica de su autoridad protectora del derecho y de la razón. Como interesado en el bienestar de la República participo de esa gratitud, aparte los otros motivos que ya me atan a Vuestra Excelencia». En su consecuencia, Mauá daba sus órdenes al señor Guimaraens para que pusiera a disposición del doctor Palomeque la suma que le indicaba. Por lo demás, esperaba con interés las ideas que el doctor Palomeque ofrecía indicarle sobre las condiciones económicas de Cerro Largo, y la consiguiente posibilidad de poder extender la influencia de sus establecimientos de crédito en la República y en la localidad de Melo (1).

Otro tanto hizo, como se verá en su lugar oportunamente, en el Salto, cuando allá fué enviado, en las postrimerías del Gobierno de Aguirre, a defender una plaza perdida. Cuando llegó a esa ciudad, tuvo necesidad de dineros para atender a las exigencias de la Defensa. No lo había. El Gobierno carecía de todo ya, hasta de la fuerza moral que da la justicia de la causa que se defiende. Todo se había perdido, a consecuencia de la inhabilidad de los directores de la política, y de ese caudillaje indómito del Cerrito, que aspiraba a vivir en el pasado, persiguiendo a los hombres de pensamientos fieles a sus ideales de concordia y de repudio de trapos ensangrentados. El doctor Palomeque puso entonces su crédito personal al servicio del Gobierno. El Banco Mauá no podía negarse a ayudarlo en aquel trance, y, bajo la firma particular del doctor Palomeque, se dieron al Gobierno *nueve mil pesos* para los gastos de la administración. ¡Nueve mil pesos! ¡Con esta *gran* suma haría frente a las necesidades de una plaza sitiada! Luego, rendiría cuenta de ella al Gobierno, devolviéndole todavía dos mil y tantos pesos, como se verá oportunamente. Y aun la pasión de los hombres vencedores, en 1865, haría que llamaran al desterrado, por los diarios, para que rindiera cuenta, una vez más, de lo que había recibido para el Gobierno, y por el Gobierno, pero con su firma par-

(1) Carta fechada en Janeiro a 24 de junio de 1861.

ticular. Él despreciaría tal llamado, infamante para quien, como el ciudadano don Tomás Villalva, lo autorizara ; pero tocónos a nosotros la suerte de volverla a rendir, amplia y comprobada, ante el tribunal de la opinión pública, cuando alguien, revolviendo el pasado, no para calmar, sino para irritar, trajo a colación esa página negra de nuestras dilaceradas jornadas políticas. Fué una cuenta rendida desde ultratumba. ¡ Cómo se sentiría halagado su espíritu al ver que su hijo, siguiendo su noble tradición, para llevarla aún más lejos, si cabe, exhibía aquella documentación sagrada, guardada por si alguien algún día pretendiera infamar su memoria ! Y allí aparecían los nueve mil pesos que su amigo verdadero, el noble barón de Mauá, facilitara en el Salto, al doctor Palomeque, de los cuales él rindió cuenta acabada.

El barón de Mauá fué un hombre leal con los Gobiernos de Perera y Berro, como agradecido a los ciudadanos que le ayudaron en su empresa moralizadora. Durante la revuelta encabezada por el general Flores, no escatimó esfuerzos en pro del Gobierno constitucional. Era una fuerza de sumo valor al servicio del país. Por eso los revoltosos no escatimaron medios para anular su personalidad, la cual, para sus relaciones comerciales, no miraba en los hombres el color político sino la honradez y el principio constitucional que representaban, es decir, la estabilidad del Gobierno con quien contrataba. Ya lo veremos así declararlo en carta dirigida al señor don Tomás Villalva. Pues bien, a fin de atacar esa fuerza bancaria puesta al servicio de un Gobierno constitucional, los hombres que, como los doctores Pedro Bustamante y Fermín Ferreira, y señor don Juan José Aguiar, estaban al frente de la revuelta de Flores, en Buenos Aires, en 1863, indicaron a este militar la conveniencia inmediata de protestar contra todo y cualquier empréstito que el barón de Mauá hiciera al Gobierno de Berro. Este pensamiento iba unido a otro : el de un empréstito por un millón de pesos, que los revoltosos debieran devolver al 50 %, recibéndolo en mensualidades de a 100,000 pesos (1). Don Pedro Bustamante escribía a su hermano Cándido, secretario del general Flores, diciéndole que «el enemigo más temible que tenían en Montevideo era Mauá y sus millones, sin cuya cooperación y ayuda Berro no podría continuar la lucha». Luego, le hablaba del contrato de Mauá para facilitar dos millones y medio de pesos al Gobierno al 40 %, en condiciones onerosas, con afectación de las rentas públicas. Esto «lo consideraba una estafa que vendría a completar la ruina del país y a hacer más vergonzosa su condición, y a crearle nuevas dificultades y conflictos para lo futuro ; y para la Revolución, una vez triunfante, dejarla privada de recursos para marchar y entrar en la vía de la reorganización. No hay, pues, más que un recurso, decía, «para salvar de esos peligros al país y a la Revolución, y es que el general Flores, como jefe de la Revolu-

(1) Puede verse toda la documentación publicada en *La Reforma Pacífica* de 14 de noviembre de 1863, número 1544.

ción, declare categóricamente, por medio de un documento público, que protesta en nombre de ella contra ese y cualquier otro empréstito o préstamo que se haga al Gobierno para alimentar y prolongar la guerra, y que ella no reconocerá la validez y asequibilidad de los contratos y estipulaciones que se hagan con tal objeto, ni creará obligado al país por razón de semejantes actos». Esta medida hostil, que no hay como criticarla, tratándose de un arma de combate, para herir al enemigo, y quitarle, si puede, los elementos de lucha, la apoyaba el doctor Bustamante en que Mauá les «había proporcionado uno de los fundamentos más sólidos para apoyar esa declaración», pues aseguraba que «Mauá había pasado al Gobierno de Berro una nota en la que se expresaba como partidario ultra, apostrofándonos—decía—de *rebeldes y anarquistas*, lo que da a su empréstito el carácter, no de una especulación puramente mercantil, sino el de una ayuda y cooperación de partidario político». El doctor Bustamante no cesaba de encarecer a su hermano José Cándido influyera en el sentido indicado, mientras ellos, en Buenos Aires, en la Prensa, hacían lo posible «para sublevar la opinión contra el barón de Mauá, en Montevideo, previniendo a aquella población de los serios peligros con que amenazaba al Estado y a los acreedores del Banco la identificación de éste con el Gobierno blanco». Esta guerra a Mauá se haría, y daría sus resultados desastrosos, una vez triunfante la revuelta, no por sus elementos propios, materiales y morales, de los cuales siempre careció, sino por la ayuda y decisión del Imperio del Brasil y del general Mitre, a lo que no poco contribuyó la inhabilidad política de los directores de la cosa pública en el Gobierno de Montevideo.

Mauá, una vez vencido el Gobierno constitucional, vió claro en el problema. De ahí que, obedeciendo a su criterio mercantil, inmediatamente se dirigiera al señor don Tomás Villalva, desde Londres, expresándole su «más vivo reconocimiento por el importantísimo servicio prestado a la República Oriental, donde tengo—decía—tantos y tan valiosos intereses, al extremo de hallarse mi suerte ligada también a los destinos de su bello país. Salvando Vuestra Excelencia a la República, y especialmente la capital, de los horrores inherentes a una resistencia imposible, tiene derecho a la gratitud de todos los hombres buenos que se interesan por la suerte de su tierra. Espero con calma los sucesos; ninguno debe ahí ignorar que soy *brasileño*, pero *brasileño* que alimenta los sentimientos más generosos para con los vecinos más próximos del Brasil, distinguiéndome todavía de otros *brasileños* que por ahí andan, diciéndose *blancos* o *colorados*, mientras que yo no quiero, ni nunca quise saber cuál es el partido que gobierna, mayormente estando convencido, como estoy, desde ha tiempo, que los viejos partidos orientales hoy ya no tienen razón de ser, que es hora de que todos los hombres buenos y sanos se unan en estrecha alianza para trabajar con ahinco y conducir la República por el sen-

dero de la prosperidad. En mis combinaciones financieras y económicas, siempre se ha tenido presente el desenvolvimiento de los gérmenes de riqueza que ahí abundan» (1).

Mauá continuó en sus relaciones con el doctor Palomeque después que éste salió desterrado de su país en 1865. En 10 de julio de 1867 el doctor Palomeque pagaba, en Buenos Aires, al Banco Mauá, la suma de 2,500 patacones que se le habían facilitado (2). Más adelante se le facilitaba la suma de *dos mil patacones* para cancelar una deuda que el doctor Palomeque tenía pendiente, como fiador de los Magariños, con el cónsul brasileño don Tomás L. de Campos. El barón de Mauá se la facilitaba para que los devolviese *cuando le fuera más cómodo* (3).

(1) Carta en mi archivo, fechada en Londres, a 9 de abril de 1865.

(2) He aquí el documento que lo comprueba:

«Recibí do Sr. D. José G. Palomeque a quantia de *dos mil i quinhientos* patacoes (2.500), equivalentes a igual importancia que do banco Mauá y Companhia dito Sr. recebeu segundo m' carta de credito a seu favor no referido Banco.—Buenos Aures, 10 de julho de 1867.—*Antonio da C. Silv.^a*»

(3) Carta de Mauá, fecha 11 de abril de 1870.

ACCIONISTAS DEL 48

ARREGLO CELEBRADO

Poco a poco se iba despejando la situación. Ya se tenían Bancos Mauá, Comercial y del Salto, con el carácter de sociedad anónima, levantando el crédito personal; y ahí estaba ahora el arreglo de la Deuda sobre la base del primero de los citados establecimientos, sosteniendo el crédito público. Para llegar a ello mucho había costado. Todo estaba vendido, y fué necesario mucho patriotismo e inteligencia.

Uno de estos asuntos difíciles fué el de los accionistas del 48. Ya sabemos cómo el Gobierno, autorizado por el Cuerpo Legislativo, había entregado la administración de la Aduana a los acreedores del 48, aunque reservándose ciertas facultades. Durante los sucesos terminados en Quinteros, y aun después, el directorio de la Aduana había practicado ciertos actos desagradables para la nueva política iniciada. Desde ese momento se estableció una lucha, que tuvo su resonancia en la Cámara de Representantes, motivando una interpelación al Poder Ejecutivo. Más adelante, el Poder Ejecutivo se dirigió a la Asamblea pidiendo autorización, que le fué concedida, para llevar a efecto los arreglos convenientes a fin de recuperar la completa dirección de las Aduanas, dando en garantía, si fuere necesario, al pago de los créditos representados por la Sociedad del 48, la renta de sellos y patentes, u otra que considerara conveniente (1). Y así autorizado, el Poder Ejecutivo celebró el respectivo convenio con los accionistas, con la intervención del señor ministro británico. La Deuda alcanzaba, en esa época, a 796,689 pesos 7 reales 46 centavos. Por el arreglo se entregaba la administración del papel sellado y patentes. Los acreedores se cobrarían, al año, 144,000 pesos fuertes. El resto sería del Gobierno. La Administración podía nombrar y remover los empleados, con excepción del contador-interventor, a nombrarse por el Gobierno, el cual estaría asimismo facultado para designar los interventores que estimase convenientes. Al fin de cada mes, los accionistas rendirían cuenta, para su verificación por la contaduría y correspondiente publicidad. Si no alcanzare la renta, se tomaría el déficit de la de Aduana. El Encargado de Negocios británico resolvería cualquier dificultad relativa a la inteligencia y cumplimiento del contrato, y en lo demás intervendría el Gobierno. Era entendido que si había remanente en las rentas, se pagaría con él, al doctor José Ellaury, hasta la suma de 36,000 pesos anuales (2).

(1) Sesiones del 25 y 26 de junio y 10 de julio de 1858.

(2) Sesión del 17 de junio de 1859.

ACTITUD DE VÁZQUEZ SAGASTUME

El doctor Vázquez Sagastume abordó, con todo el calor de su alma, la cuestión de los créditos del 48. Decía que «entre las muchas gabelas que el Gobierno actual heredó de nuestras miserias pasadas, figura una deuda contraída contra la nación, por préstamos, con la garantía de los derechos de Aduana, en el año 48. Esa Deuda obtuvo después la garantía o el reconocimiento diplomático de la Inglaterra».

Como hemos expuesto en páginas anteriores, esa Deuda fué garantida con la octava parte de los derechos de Aduana, concediéndose a los acreedores su administración. El directorio de estos acreedores, «compuesto en su mayor parte de extranjeros—decía el doctor Vázquez Sagastume,—abusando de la deferencia del Poder Ejecutivo, se convirtió hasta en un poder político, y en los momentos de conflicto que atravesó la República en la última rebelión, cuando el Gobierno tenía necesidad de lo que legítimamente le pertenecía en esa renta para atender a las urgencias premiosas del momento, el directorio de Aduana se levantó frente a frente del Gobierno y le declaró hostilidad, negándole hasta lo que era de la propiedad del Gobierno, y colocándolo así en conflictos que pudieron muy bien traer por resultado la pérdida de la causa legal y el triunfo de la anarquía. El Gobierno de la República, consecuente siempre a esa política conciliadora que había observado con el directorio, permitió que su autoridad fuese ajada impunemente». «Esto—decía el orador—lo alentó (al directorio) hasta el extremo de desconocer en el Poder Ejecutivo la facultad que tenía de nombrar y remover los empleados que pagaba con el Tesoro público.» Recordaba luego que el Gobierno había nombrado una comisión que inspeccionase las cuentas del directorio, compuesta de personas muy respetables, y que se había descubierto que sus miembros hacían contrabando.

Fundado en todo esto, el doctor Vázquez Sagastume presentaba una moción para que se autorizara al Poder Ejecutivo a fin de «salvar el decoro nacional, aunque respetando y cumpliendo los compromisos contraídos con los acreedores del año 48» (1).

La moción se pasó a una comisión, mientras se convocaba al señor ministro de Hacienda para que diera las explicaciones del caso, y el país supiera lo que sucedía.

Llegado el momento, el ministro declaró que el Poder Ejecutivo «trabajaba con instancia para restablecer las cosas en el modo más

(1) Sesión del 25 de junio de 1858.

digno posible; que si un ataque a la dignidad nacional se hubiese inferido, el Gobierno habría sido el primero en arrostrar (1) la responsabilidad de las medidas que hubiera necesitado tomar para librar al país de esa ignominia, pero que los hechos todavía no presentaban todo el carácter de gravedad para una resolución inmediata» (2).

Después de atinadas consideraciones, expuestas por el ministro, y por los señores Lapido, Vázquez Sagastume y Palomeque, el autor de la moción la retiró.

El efecto moral se había obtenido. El país sabía que sus autoridades vivían consagradas a la defensa del decoro nacional, y confiaban en que todo se resolvería en debida forma. En efecto, el Poder Ejecutivo, a los pocos días, se dirigía al Cuerpo Legislativo solicitando la autorización necesaria «para llevar a efecto los arreglos convenientes a fin de recuperar la completa dirección de las Aduanas, dando en garantía, si necesario fuese, la renta de sellos y patentes, u otra que se considerara conveniente» (3).

A las veinticuatro horas se expidieron las comisiones de Hacienda y Legislación, compuestas de los señores Caravia, Errazquin, Fuentes, Lerena, Lapido, Fernández Fisterra, Arrascaeta, Juanicó, de la Puente y Gómez (Andrés A.) (4).

La autorización fué concedida, de acuerdo con el convenio firmado el 7 de septiembre de 1858, el cual fué aprobado por el Cuerpo Legislativo recién el 17 de junio de 1859. De ese convenio resultaba que la Deuda alcanzaba a 796,689 pesos 7 reales 46 centavos, la que se pagaría a razón de 12,000 pesos mensuales, o sea, 144,000 pesos fuertes al año.

Estos arreglos, que facilitaban la marcha de la administración pública, completaban el de modificaciones al Tratado con el Brasil de 1851, al cual tantas referencias se habían hecho en la discusión del contrato de Mauá sobre la Deuda. Este asunto fué de suma trascendencia en la vida política y comercial del país. Su discusión fué muy interesante, pues durante ella se destacaron una vez más la altanería y el carácter olímpico del doctor Juanicó, presentándose como un verdadero dictador intelectual. No consintió la menor observación, y, cuando ésta se hacía, la contestaba de una manera despreciativa. Quería andar a la disparada en la sanción de ese Tratado, a fin de oponer el hecho consumado a la gritería de los adversarios que dentro y fuera del país fustigaban sin piedad a quienes, como los doctores Lamas, Juanicó, Arrascaeta y Palomeque, se destacaban en la escena. La pluma de Juan Carlos Gómez no cesó por un momento en el ata-

(1) En el Diario de Sesiones se dice *arrostrar*.

(2) Sesión del 26 de junio de 1858.

(3) Sesión del 9 de julio de 1858. Así está repetida la palabra *conveniente*.

(4) Sesión del 10 de julio de 1858.

que hiriente y personal, signo inequívoco de aquella época brava ; a la cual respondían los atacados, también sin consideración, no sólo desde la Prensa, sino hasta desde el asiento de legislador, como vamos a verlo (1).

(1) Este tratado fué enviado por el Poder Ejecutivo para tratarse en sesiones extraordinarias. Apenas conocido, se le hizo una fuerte oposición, tomándolo como bandera electoral. Entonces el doctor Palomeque propuso la suspensión de su debate hasta que el Poder Ejecutivo sometiera al Cuerpo Legislativo los protocolos que precedieron a su negociación. La Cámara de Representantes no lo quiso, resolviéndolo por una votación nominal. Votaron, a favor, los señores Magariños (Luis), Aguiar, Solsona, Echenique, Fistera, Latorre, Bujareo, Pereyra, Palomeque, Magariños (Mateo) y Labandera ; y en contra, los señores Mayobre, Alvarez, Neves, López, Veira, Tezanos, Durán, Rodríguez, Bustamante, Vázquez, Arteaga, de los Campos, Conde, Fernández (Román) y Zás (sesión del 29 de octubre de 1857). Entonces el Poder Ejecutivo, el mismo día, se dirigió a la Honorable Asamblea General clausurando las sesiones extraordinarias en nombre de la tranquilidad pública. (Sesiones de la Asamblea General del 5 y 30 de octubre de 1857). El asunto, pues, quedó postergado, y vino a tratarse al año siguiente, ya dominados los adversarios.

RASGOS DE LA VIDA DE ANDRÉS LAMAS

LOS DOS AMIGOS

Ya que nombramos al doctor don Andrés Lamas, *alma mater* de esa negociación diplomática, en la que se escondía un fin político, vamos a exponer aquí algunos antecedentes de su persona, olvidados en otra parte de este libro cuando tratamos lo relativo al arreglo de la Deuda. Bueno es que no se pierdan, a fin de ser utilizados por el futuro historiador de la República (1).

El doctor don Andrés Lamas fué, desde muy joven, amigo íntimo del doctor don Manuel Herrera y Obes. Éste era mayor en edad y en vida pública, de manera que en un principio se ve el ascendiente que ejercía sobre aquél. Eran dos jóvenes honrados, que marcharon al unísono, aun cuando discreparon en ideas, en cierto momento de la vida, como aquí sucedía. En 1842 era juez el doctor Lamas, y secretario de Hacienda el doctor Herrera y Obes, manteniendo una vinculación estrecha con otro mozo de talento, de su época, el doctor don Eduardo Acevedo. Lamas substituía a Acevedo en muchos juicios civiles, por impedimento, hasta que el tribunal le nombró a este último defensor de pobres en lo civil. De ello le hablaba Lamas a Herrera y Obes para preguntarle qué debía hacer. Esa amistad le permitía poner bajo el patrocinio de Herrera y Obes una reclamación del padre de Lamas para que el Gobierno le devolviera una de sus pequeñas propiedades (2). En esos días, Lamas, como juez del crimen, le hablaba a su buen amigo de un homicidio cometido «por el francés Legris, en el saladero». Quería saber lo que el Gobierno pensaba hacer, para, según ello, él proceder, por considerar que había «positivo interés en ejemplarizar con su castigo».

En seguida, Lamas ocupaba la jefatura política, y desde ese puesto apuraba a su compañero para «que no perdiesen la noche, pues temía que si no se limpiase esto de algunos alborotadores de baja esfera, enviándolos a otros puntos, habrían de tener aún que seguir ocupándose de estas porquerías». La pobreza que había encontrado en la jefatura era tal, que allí hacía mucho no tenía «ni la llave de un *guardilla* (3), pues todo lo que había tenido, y más, le había sido poco para

(1) Véase mi trabajo sobre Lamas, publicado en *Mi año político*.

(2) Todo lo que se expone aquí está fundado en la correspondencia de Lamas con Herrera y Obes, en mi archivo, desde 1842 a 1874.

(3) Así está escrito por el doctor Lamas. En esta carta decía: «El acuerdo a que Béjar se ha referido fué el de que se habló allí en el Consejo.»

atender al diluvio de familias que aun tenía encima». Ya en este momento el doctor Herrera y Obes era juez de lo civil.

Las tareas judiciales y políticas no les impedían ocuparse de otros asuntos relativos al progreso del país, por lo que se les veía atareados en la fundación del *Instituto Histórico y Geográfico Nacional*, a cuyo fin se reunían en la casa de su secretario el doctor don Teodoro Miguel Vilardebó. Era así que en sus epístolas Lamas se ocupaba de política y del Instituto. En una de ellas se hablaba de la manera insólita como se procedía en el Consejo de Estado, «sin arribar, como es de costumbre, a resolución alguna». Por eso decía que «en el camino que llevaban esas cosas él era hombre inútil hasta para escribir. El palabreo oficial—decía—es el peor de los palabreos, cuando, como sucede, no produce otra cosa que darle a la autoridad la apariencia de fanfarrona. ¿No recuerda usted la nota sobre Bustamante? ¿Qué es de Bustamante? ¿No recuerda usted aquello de que el Gobierno no sería arbitrario ni para castigar : que el que la hiciera había de pagarla? ¡Y bien ! ¿no estamos como antes, y peor que antes, porque dijimos lo que dijimos, y hacemos lo que hacemos? Yo acepto por entero todas las consecuencias lógicas de los empeños que una vez he contraído, y no puedo sino proceder lógicamente sin pararme en el mal que de ello me resulte ; y en nuestra situación actual lo que menos veo es eso. Estoy, pues, sin saber qué podemos hacer, dejando correr las cosas con la única esperanza de que su misma fuerza las traiga al punto de que creo nos hemos separado. Le voy, pues, a volver a Béjar los papeles».

Aquí se ve al doctor Lamas de los primeros años de su vida política : audaz e impulsivo. La situación de fuerza en que se hallaba, lo conducía a la acción, sin detenerse ante ningún obstáculo. Entonces eso no le arredraba. Más tarde, allá por 1855, sería otro hombre : estaría arrepentido de la sangre que le había salpicado, y nunca más le salpicaría. El espíritu de concordia lo circundaría. No habría, para él, *vencidos ni vencedores*. Sería el servidor desinteresado del país, el cual no supo utilizar la vasta preparación de este hombre, como tampoco la del doctor Herrera y Obes, para colocarlo en el sillón presidencial.

INSTITUTO HISTÓRICO-GEOGRÁFICO

En esta misma carta le hablaba de su *Instituto*. «Antes de anoche —le decía—estuve con Mitre en casa de Béjar ; no había nadie a pesar de ser día de reunión. Anoche no fui porque no estábamos citados ; hoy iré si puedo vencer esta pereza indomable que suele apoderarse de mí en algunos días. Si no lo consigo, como a usted le toca presidir, le ruego haga que la Comisión se concrete al Reglamento y al nombramiento de los delegados.» Y aprovechaba la ocasión para recordar la

conveniencia de recibir algunos de los candidatos admitidos, proponiendo él a Hordeñana.

Eran espíritus selectos. Ni aun en medio de la guerra olvidaban que los pueblos no se levantan con el caudillaje sino con la ilustración. Ahí estaban justificando con los hechos que la *Defensa de Montevideo no tenía más caudillo que la idea de independencia nacional que la movía*.

Por lo demás, la *mala situación* por la que se atravesaba le hacía decir a Lamas que tanto él como «Muñoz habían creído conveniente dar en el día algunos pasos con el objeto de poner término a la mala situación». De aquí que contaran con Herrera y Obes, invitándolo para reunírseles en el despacho de la jefatura a las once.

Su noble corazón se revela cuando Pacheco y Obes cae enfermo. El no puede hacer lo que desearía por su querido amigo. Sin embargo, se pone a disposición del doctor Herrera y Obes «envidiándole, de veras, su noble hospedaje», porque era en casa de éste donde Pacheco y Obes se atendía y curaba.

Pero no olvidaba el *Instituto Histórico*, si bien las atenciones y los cuidados de que habían estado rodeados, les había impedido reunirse. Además, algunos miembros de la Comisión estaban ausentes, como sucedía con el mismo secretario doctor Vilardebó. En esos instantes ultimaban los trabajos preliminares. «Creo—decía—que nuestras tareas, verdaderamente tales, no pueden principiar hasta después de la paz, cuando todo se haya encajonado y puesto en su lugar; pero, en mi opinión, no haríamos bien en descuidar los trabajos preparatorios, ya acordados, y que son indispensables para abrirlas con suceso.»

En 1845 pensaba en la paz, cuando ella tardaría muy mucho en venir; y para ese entonces quería que los preliminares estuvieran prontos, a fin de inaugurar solemnemente la noble y útil institución. Pensaría en aquellos ciudadanos que vivían fuera de la ciudad sitiada, también con derecho, por su sabiduría, a tomar participación en tan magno suceso; cuando esa maldita guerra, como otras muchas, no dejaría crecer el árbol de la ciencia. En su consecuencia, utilizaba la buena idea que habían tenido, dada la situación excepcional en que se hallaban, de autorizar a los individuos de la mesa, tratándose de resoluciones de forma, para solicitar individualmente los votos, y con constancia de ellos dar por celebrada la sesión. Pedía, pues, opinión sobre diversos puntos, como ser: nombramiento de secretario provisorio; dirección de una carta de pésame a la familia del finado doctor don Julián Alvarez, miembro fundador del Instituto; adopción, como sello del Instituto, de las armas de la República, con la leyenda *Instituto Histórico-Geográfico Nacional*; integración de las comisiones de Archivo y Reglamento, recomendando a éstas la prosecución de sus trabajos, y diligenciamiento, por parte de la Mesa, de las comisiones

que le habían sido encomendadas, para, una vez terminadas, convocar a sesión.

Era tal su amor por el estudio de nuestro pasado, que recordaba al doctor Herrera y Obes su generoso ofrecimiento sobre los papeles de don Lucas J. Obes. Los necesitaba «para un trabajito que pensaba emprender para presentar a ustedes—decía—luego que pasen estas borrascas y podamos ocuparnos del Instituto formalmente y darle existencia, para lo que cuento mucho con usted» (1).

¡Cuánta ilusión candorosa! El Instituto no viviría, porque la hierba no crece donde se ha asentado el casco del caballo de Atila, ni donde los ciudadanos viven calumniándose y matándose. Las guerras fratricidas son engendradoras de odios, y la ciencia necesita la placidez del espíritu nacida del respeto y del amor. Esa bella creación del cerebro de Lamas moriría. Él sería arrastrado por la vorágine de aquellas pasiones crueles. Vagaría de un lado a otro, con su tiempo absorbido por esas reyertas de familia, a fin de poner la paz en los corazones, sin conseguirlo, aunque sí para ser herido. Nunca tendría tiempo para escribir todos los libros ideados, si bien en la conversación transmitiría a sus oyentes el gran tesoro de sabiduría almacenado en su cabeza. Dejó mucho documento diplomático y político, porque forzosamente tuvo que hacerlo así, desde que era actor en el drama. En ellos hay bastante que estudiar y aprender. No dejó libros históricos completos, sino fragmentos, que por ahí andan desparramados en diarios y revistas, en los que colaboró generosamente. Creyó en la eficiencia artiguista, sin que nunca escribiera el libro que tenía pensado, cuyos materiales regaló al ilustrado señor don Clemente L. Fregeiro, quien tampoco nunca se pondría a la obra. Su personalidad sólo se conocerá a fondo cuando se edite lo mucho que dejó acumulado. Esa será la misión del Gobierno. Y entonces brillará su genio, rindiéndosele el culto que merece en la estatua levantada, depurada su figura de las calumnias de que fué víctima.

VACILACIONES DEL ESPÍRITU

No obstante haber abandonado sus tareas oficiales en la jefatura política, vivió para la Justicia y la Prensa. Desde esta última continuaba su correspondencia con el doctor Herrera y Obes, quien, a la sazón, en 1846, se hallaba en la Cámara de Representantes, a la vez que desempeñaba su puesto de juez de primera instancia. Los sucesos arreciaban, pues esa paz tan deseada por Lamas, no llegaba, haciéndose difícil la vida institucional del Poder Legislativo. El país convulsionado no permitía la renovación de la Representación Nacional. El

(1) En esos días se creía inminente la paz. Véase el decreto de amnistía del Gobierno de fecha 10 de mayo de 1845, en la página 628 del Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes.

mandato de los legisladores había terminado el 15 de julio de 1845. Estaban colocados en una situación *de hecho*. Ya el año anterior, en 1845, se había declarado que los senadores y representantes no cesaban mientras no fueran reemplazados por los nuevamente electos, conforme a la ley. Ahora se reanudaba la discusión con el proyecto del Senado declarando que «la plenitud del Poder Legislativo en su ejercicio constitucional residía en la actual legislatura mientras no se reuniera la que debía reemplazarla» (1).

Ahora bien, el doctor Herrera y Obes acababa de obtener un triunfo parlamentario en la sesión del 28 de enero de 1846, al discutirse esa nueva prórroga de los poderes legislativos, y Lamas no sólo lo felicitaba, al tener conocimiento de ello por don Santiago Vázquez, sino que le pedía su discurso para publicarlo en *El Nacional*.

Lamas no abandonaba, pues, la brecha política; pero, eso sí, buscando siempre la unión de su amigo. Y en verdad que merecía Herrera y Obes esa felicitación; su tesis era aceptable dentro de la situación de hecho producida, al limitar la acción del Cuerpo Legislativo a los casos fundamentales de la Constitución, y a lo que el Poder Ejecutivo indicara, o el Cuerpo Legislativo creyera comprendido en el caso.

A los pocos días de esta felicitación, volvía Lamas a pedir a su amigo un artículo para el primer número del nuevo diario, a aparecer en febrero de 1846.

Este año fué, para Lamas, de una actividad asombrosa en el orden político y literario. En este último se le veía preocupado del estudio de las personalidades de don Nicolás Herrera, Lucas J. Obes y Julián Alvarez. Apuraba por datos a Herrera y Obes, llegando hasta pedirle escribiera la biografía de su señor padre, don Nicolás Herrera, que él luego la completaría. Al respecto le decía que «meditando uno de mis proyectos, y recorriendo mis papeles, se han ensanchado mucho mis ideas y mis aspiraciones, y me preparo a poner mano a una obra extensa y que creo de interés, pero para la que necesito reunir aún muchos materiales, y reunirlos breve, porque como he dicho a usted he resuelto dejar el país tan pronto como pueda.»

El hecho verdadero sería que no escribiría esa obra extensa, ni abandonaría el país. Lo primero, no lo haría, porque su índole no era la de escritor de libros; a lo que se agregaba la fatal manía que algunos estudiosos poseen, de no resolverse a producir una obra histórica sino después de buscar cuanto exista sobre la materia. ¡Y así se mueren! No; el historiador nunca ha de suponer que pueda instruirse de cuanto existe sobre el asunto. Le ha de bastar lo que obtenga en un momento dado, utilizándolo en seguida, dándolo a conocer, para que otros lo aprecien y lo completen con lo que aun queda oculto. La vida humana es corta para acumular manuscritos, muy especialmente en nuestro país. Ese fué el error de Lamas, y por eso no nos dejó su

(1) Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, tomo iv del año 46 (página 702).

obra extensa, en la que siempre pensó, hasta sus últimos años, aunque dándonos, entre otros, fragmentos importantes, como los publicados en los *Anales del Museo de La Plata* y en la introducción al libro de Lozano.

En estos instantes parecía vacilar el espíritu de Lamas, pues estaba resuelto a dejar el país *cuando pudiera*. Nunca llegaría ese *pudiera*, pues continuaría constantemente sirviendo a su tierra, dentro y fuera de ella.

Lo que sucedía era que se hallaba, como otros muchos, bajo la impresión del motín militar que trajo al país el general Rivera. No podía concebir que aquello fuera transitorio. Veía a todos sus amigos, especialmente a la falange intelectual en que actuaban hombres como Pacheco y Obes, Santiago Vázquez, Muñoz, Paz, Mitre, Herrera y Obes, Díaz, etc., abrumados bajo el peso de aquel suceso que había costado la vida a hombres como Vedia y Estivao. De ahí que pensara en alejarse cuando *pudiera*. Pero, mientras tanto, para arrancar de sí esa mala idea, buscaba, como tenía por costumbre, un refugio en las letras, dejando su sentimiento y su pensamiento bien definidos en ese difícil instante, cuando nos decía: «Como usted ve, estoy ocupando estos días, y disminuyendo las angustias que en ellos padezco, con esta tarea que no sé si me producirá algo, pero que, aviniéndose con mi vocación decidida, es la única de que puedo ocuparme. En cuanto a salir de aquí, mi amigo, mi resolución es irrevocable; ella no depende de peligros personales. No tengo ilusión alguna sobre lo que esto será por algunos años: tengo pereciendo a mis hijos, y la convicción de que estando en el país así han de estar porque yo no he de poder consagrarles mi tiempo. En cualquier parte me irá, en ese sentido, mejor que aquí, y no esterilizaré mi vida y mi inteligencia en una lucha tan ingrata. Si hay algo de egoísmo en esto, creo que mi anterior sacrificio, y mi situación presente, lo justifican» (1).

Pasaba por uno de esos momentos muy naturales y comunes en la vida de los hombres ilustres. Creía haber dado a su patria cuanto podía darle, considerándose ya sin fuerzas para la lucha al contemplar la desolación del hogar. Quería buscar nuevos horizontes. Aquella situación surgida del movimiento sedicioso de la tropa, el 1.º de abril de 1846, para traer al caudillo Rivera a Montevideo, le había ido a lo hondo, y de ahí su aparente desencanto. Pero en seguida reaccionaría, sin duda porque no tendría adonde dirigirse, careciendo de los recursos para moverse con su familia.

Su pensamiento, sin embargo, tuvo un principio de ejecución, pues renunció el puesto que ocupaba en la Asamblea de Notables, fundado en las consideraciones que había expuesto en nota dirigida al Gobierno, entre las que alegaba la de «querer ausentarse del país por las ra-

(1) Carta en mi archivo de fecha 6 de mayo de 1846.

zones que expone en la solicitud hecha al Gobierno y que adjunta», dice el acta de la sesión respectiva (1).

Es indudable que su amigo Herrera y Obes compartió su opinión, pues no se le ve figurando en la Asamblea de Notables, después del 1.º de mayo, ni siquiera dando aviso de su ausencia, por lo que, indudablemente, fué declarado cesante según resolución adoptada en la sesión del 11 de julio de 1846 para con los que, citados, no comparecieron. Su medida fué más radical que la de Lamas, y llena de un profundo desprecio, pues no se dignó siquiera hacer la renuncia, si bien es cierto, a estar a lo que se dice en el acta de la sesión del 1.º de mayo, lo que es sorprendente, que él votó para presidente de la Asamblea por el general Rivera, victorioso en la jornada sangrienta (2). Mientras tanto, Lamas, sin dar aviso, no asistió, desde la sesión del 27 de abril; si bien empezó a darlo desde el 6 de mayo hasta el 2 de junio, presentando luego su renuncia en la citada sesión del 18 de este mismo mes.

SUS PREOCUPACIONES

Allá, a mediados de 1847, Lamas, que había permanecido en Montevideo, se ocupaba de un encargo hecho por Herrera y Obes y sus amigos del *Instituto de Instrucción Pública*. Este encargo se refería a la obra de Echeverría, la cual consistía en un proyecto sobre programa de enseñanza en las escuelas primarias (3). A la vez necesitaba, en esos momentos, algo sobre la empresa de los «Treinta y Tres», y «como recuerdo—decía—que el borrador que me leyó de una carta suya a Florencio tenía algo que se relaciona con ese suceso, le ruego que si no tiene inconveniente, y lo halla a mano, tenga la bondad de facilitármelo. Si algo más tiene, es excusado le diga cuánto se lo agradeceré».

Así el juez de lo civil e intestados, o el abogado, distraía sus ratos, en aquella ciudad sitiada. No vivía sino pensando en lo mucho bueno que podía hacer por las letras sud-americanas. Ello, sin embargo, no le impedía echar su cuarto a espadas sobre la política. Mezclaba las letras con la ciencia de gobernar a los pueblos. No podía ser insensible a las desgracias de la nación. Por ello, al final de su

(1) La renuncia se presentó en la sesión del 18 de junio y le fué admitida en la del 22 de agosto de 1846. En estos momentos era juez de lo civil e intestados.

(2) Allí se dice: «Pedida la votación, empezando por la derecha de la línea exterior de asientos, votaron todos los señores presentes por el brigadier general don Fructuoso Rivera.»

(3) Los borradores de ese proyecto, de puño y letra de Echeverría, que mi padre conservaba, los regalé al señor don Enrique de Vedia, de Buenos Aires, ya que él fué el iniciador de la estatua de aquel prócer, colocada en Palermo.

misiva, de fecha 10 de mayo de 1847, le preguntaba: «¿Qué le parece a usted la nueva situación? Es grave bajo varios aspectos, pero, tal vez, por lo mucho que me aíslan mis ocupaciones, me parece que no se le consagra la atención que requiere».

En efecto, la situación era grave. En esos momentos se retiraban dos buenos amigos de la causa de la Plaza de Montevideo, los señores Deffaudis y Lainé, mientras llegaban los señores Ousseley y Walewski, para continuar en los arreglos de paz de la misión Hood. Lamas se agitaba para que se despidiera dignamente a Deffaudis y Lainé, a cuyo efecto, de acuerdo con amigos como Vega y Cabral, que también se preocupaban de lo mismo, se reunían en casa del provisor Fernández. A esa reunión asistían Juan Miguel Martínez Batlle, Tajes, Chain, Díaz, etc., lo que Lamas hacía saber a Herrera y Obes para que a su vez concurriera al acto. Lamas, con ese instinto natural en el hombre político, salía de su aislamiento, y buscaba a su amigo Herrera y Obes. Parecía estuviera seguro de haberse presentado la ocasión de tomar una resolución enérgica, de la que resultaría que las personalidades de ambos irían al fin a destacarse, y a ocupar el lugar que dignamente les correspondía en los graves sucesos desarrollados desde 1842.

EL INSTITUTO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Herrera y Obes había entrado al ministerio de Relaciones Exteriores en 1847, con motivo del fallecimiento del doctor don Santiago Vázquez. Entre otros de los actos practicados durante su Ministerio, que duró hasta 1851, estuvo el de la creación del Instituto de Instrucción Pública, a cuyo frente se hallaba Lamas, por lo que éste le recordaba a su amigo el despacho de varios asuntos de pertenencia de esa corporación. Entre ellos estaban los referentes *a)* a la cesación de la comisión nombrada para el examen del *Manual de Enseñanza* del señor Echeverría, encargando al Instituto de su despacho; *b)* a unos versos, destinados a las escuelas por el señor Figueroa; *c)* a la propuesta para la enseñanza de presos; y *d)* a la ortografía del señor Bonifaz.

Aparte de estos asuntos, Lamas encarecía el despacho de un oficio, que creía muy oportuno, recomendando al Instituto se ocupara, a la mayor brevedad, de un proyecto de organización primaria de la enseñanza pública en todos sus ramos, designando los textos que en ellos hubieran de emplearse. Lamas daba mucha importancia a esto último. «Esta recomendación—decía—acelerará de cierto el desempeño de un trabajo ya acordado, y que, a mi juicio, es el único que puede dar seguro cimiento a la creación de usted. Sancionado ese proyecto orgánico de la instrucción pública, desaparecen todas las cuestiones de legalidad que ya se inician, y deja la existencia de este

cuerpo de depender de la voluntad caprichosa o apasionada de los ministros que puedan venir al puesto de usted. Vivirá el Instituto por una ley de conocidísima, de palpable conveniencia nacional, y no bastará entonces una simple orden ministerial para aniquilarlo» (1).

Lamas, colocado al frente del Instituto, secundaba los esfuerzos de su amigo; pero allí había también un hombre, que sería el verdadero mantenedor de la obra, como Herrera y Obes lo reconocería, andando los años: ¡el doctor Palomeque! El doctor Lamas no permanecería sino días al frente del Instituto. Sus tendencias lo llevarían a otra parte, para bien del país.

MISIÓN AL BRASIL

A los cuatro días de escrita esa epístola, ya Lamas, más político y diplomático que educacionista, se preocupaba, en carta *privada*, de su plenipotencia en el Brasil. Él era quien redactaba el proyecto de carta de retiro «que llenaría los deseos del señor Magariños—decía,—nuestro ministro diplomático en Janeiro». Con ese motivo, él, que al fin iba a realizar su deseo de 1846, de irse del país, pero con su representación externa, repetía a su amigo Herrera y Obes no tener «el mínimo interés personal en la misión de Janeiro». No quería se mezclara «ninguna consideración o *exigencia* personal, y suya, mucho menos que de nadie». La única exigencia, ya que se le había ofrecido la misión, era si se podía o no despachar en seguida, fundado en el «solo hecho de estar sesenta días sufriendo los perjuicios que me ha traído la idea del viaje», pues «abogado que está de viaje—decía—tiene como cerrado su estudio». Necesitaba saberlo para asimismo comunicárselo a su señor padre. «Sus dudas» eran hijas «de la incertidumbre de todas nuestras cosas».

En verdad que, si bien nada pedía, en el fondo no le disgustaba la misión; la deseaba. Por eso hablaba de sus «dudas» y de «incertidumbres», queriendo precipitar el hecho, por aquello de que *a Segura lo llevan preso*. Su interés vehemente se revelaba en esa carta de retiro del señor Magariños, que él redactaba, y cuyo envío apuraba por la *Januaria*, que, decía en su epístola a Herrera y Obes, salía pasado mañana.

La caída del señor Magariños era un hecho indiscutible. Así lo imponía la política de aquel momento, pues Herrera y Obes y Lamas eran los rivales de Rivera y su círculo, en el cual figuraba, como director, el señor Magariños.

A las razones de un orden privado, Lamas unía otras de carácter político. Sostenía que todos opinaban que a fines de noviembre sería «tal vez tarde para hacer lo que es de nuestro deber en el Brasil, sino

(1) Carta fecha octubre 26 de 1847.

es que estamos resignados a esperar con los brazos cruzados la suerte que nos destine la política europea. Si al fin voy, decía, «quiero ir a tiempo, por el país y por mí, que en algo tengo mi propia reputación». Deseaba saberlo para comunicarlo por la *Januaria*. Él conocía «la voluntad» de su amigo, pero «ignoraba si tenía los medios de realizarla». «Esos medios», Lamas había «tratado de facilitarlos cuanto podía, como es fácil verlo—agregaba—comparando lo que había pedido con lo que señalaban, en cuanto a la cantidad y modo de darse, los acuerdos vigentes». Y para el caso de que ambas personalidades llevaran adelante la obra, «sería conveniente», declaraba, «obtener la autorización que expresa el adjunto proyecto de comunicación a la Asamblea, pues como usted comprende, desde luego los arreglos que indico pueden facilitar nuestras relaciones y traernos a tocar la navegación del Uruguay de que Rosas quiso excluir a todos» (1).

PIDIENDO DATOS

Allá fué, y luchó denodadamente hasta traer el Brasil a la alianza para derrocar a Rosas y a Oribe. Luego, derrumbado este poder dictatorial, continuó desempeñando sus funciones diplomáticas en Janeiro, con muy ligeras alternativas. Desde aquí, en 1853, escribió una de sus mejores cartas políticas a su amigo Herrera y Obes, con motivo de los sucesos del 18 de julio de ese año, parte de la cual Lamas la utiliza en su notable folleto de 1855, tan trascendental en la vida histórica del país, por lo que consideramos indispensable arrancarla del olvido y publicarla en este libro (2).

Fué en esa época fecunda de su vida que firmó los Tratados del 51 sobre comercio, límites, préstamo, etc., tan criticados, y con los cuales se entregó a la impopularidad nacional, como él lo decía. Él no fué sino el hombre que resumió en su persona una situación espantosa, a fin de salvar el país, a cualquier precio y como pudiera. Hizo las de Thiers en Francia. Es muy ilustrativa la correspondencia que al respecto mantuvo con el doctor Herrera y Obes desde 1847 a 1854, parte de la cual ya la hemos publicado, con el título de *Correspondencia diplomática privada de la Defensa de Montevideo* (3).

Por lo demás, el folleto de 1855, recibido con aplausos, en el Río de la Plata, por todos los que pensaban en la paz, dió un resultado contrario, pues produjo una nueva revuelta.

(1) Carta en mi archivo de 30 de octubre de 1847, que publico en el libro «Correspondencia Diplomática de la Defensa», tomo III.

(2) La he publicado en mi folleto sobre el Motín militar del 53, que forma parte de esta obra histórica, como también en la *Revista Histórica* de Montevideo.

(3) Son tres tomos, cuya publicación se terminará en 1915. Hemos defendido a Lamas en la Cámara de Representantes, en 1894. Véase *Mi año político*, donde se halla el discurso respectivo.

En los momentos en que Lamas se proponía lanzar ese Manifiesto, se ocupaba, en su correspondencia con el doctor Herrera y Obes, de los sucesos que se desarrollaban dentro y fuera del país, relacionados con el Imperio del Brasil. Entonces pesaba mucho la influencia de éste en el Río de la Plata. Había convicción profunda de que la alianza con el Brasil era indispensable, en presencia de la anarquía existente y de la inmixción de los partidos argentinos. Lamas, en esos momentos, no podía escribir mucho, pues, como él decía, «a todas las dificultades creadas por mi posición y por mis abrumantes ocupaciones, ha querido Dios añadir un poco de reumatismo en el brazo derecho, lo que me mortifica singularmente». Pero aun así, escribía sus cartas y su folleto. Versado en los secretos de la política internacional, pues pocos hombres la conocieron como él, daba importancia a la «entente cordial entre el general Urquiza y Buenos Aires celebrada en esos momentos». Esto, le decía Herrera y Obes a Lamas, «no sería sorprendente *cambiase* las disposiciones en que Urquiza se encuentra con el del Imperio».

Herrera y Obes había conservado una verdadera amistad política y personal con el general Urquiza, después de los sucesos del 51, y Lamas le había pedido a aquél le escribiera a éste sobre los que se desarrollaban en esos instantes. Herrera y Obes lo había hecho, y Lamas «no creía prudente avanzar un paso más, puesto que no podía hacerlo sin aventura y sin compromiso». Se colocaba a la expectativa, a la espera de lo que resultara de esa «entente cordial». Él abundaba en las ideas de Herrera y Obes, expuestas por éste, según decía, en carta de 4 de enero, pero «no podía servir las sin tener pleno conocimiento del estado de las cosas, puntos de partida formales». Le preguntaba «con quiénes, cómo y para qué se puede contar». Esto era todo lo que podía decirle sobre la política que llamaba continental. En cuanto a la política interna, le hacía presente que «el país podía encontrar *apoyo*, pero no *iniciativa* externa». Esto, para él, era un hecho incontrastable. «Si el país—decía—no inicia, si no se mueve, si no se queja, nadie iniciará, nadie se moverá, nadie se quejará por él. ¿Cómo, por qué medios el país se colocará en el camino de la paz sólida, de la reorganización verdadera y fecunda? Es esto lo que no alcanzo desde aquí. ¿Lo alcanza usted? Las decepciones por que he pasado me dan poca confianza en mi propio juicio sobre las cosas internas del país. Permítame, pues, que lo provoque, de nuevo, a que no me prive del concurso que encontraba en sus opiniones para mí tan respetables» (1).

(1) Carta de fecha 8 de marzo de 1855.

POLÍTICA DEL 55

De esta manera iba orientándose, con un mentor tan competente, para preparar su folleto. Éste llegó al Río de la Plata, y toda la Prensa y hombres ilustrados, con don Félix Frías a la cabeza, lo estudiaron, lo comentaron, aplaudiéndolo, unos, criticándolo, otros; mientras se reproducía en las columnas de los diarios. Ese folleto tendía a levantar la alianza brasileña y a exhibir la situación difícil del Gobierno del general Flores. Fué contestado por el doctor don Juan Carlos Gómez, en lo relativo a la alianza brasileña, en un ilustrativo folleto, que, por la razón dada, respecto del de Lamas, creemos muy conveniente reproducir aquí (1).

El país se debatía en medio de dolores, y los ciudadanos buscaban los recursos para curarlos. La situación era muy difícil, por lo que eran meritorios esos esfuerzos. Los unos creían que convenía mantenerse fieles a la alianza brasileña, mientras otros, como Gómez, a la sazón en el Brasil, la consideraban perjudicial. En la respuesta de Gómez, muy ilustrativa y levantada, llena de antecedentes importantes, se reconocen los méritos del doctor Lamas, como asimismo que la opinión pública aceptaba el pensamiento de este último. En un punto coincidían: ambos atacaban al general Flores. Éste había mantenido una lucha fuerte con el elemento conservador, triunfante después del *motín* del 53 (así lo califica Gómez en su carta a Lamas). En prueba de ello, ahí estaban Gómez, en el Brasil, y Herrera y Obes, en Buenos Aires (2). Podía agregarse, aunque no a título de

(1) Va en el *Apéndice* de este tomo.

(2) He aquí la carta que el doctor Herrera y Obes le escribía al doctor Palomeque desde su destierro:

«Señor don José G. Palomeque.

»Buenos Aires, enero 27 de 1854.

»Mi querido amigo:

»Mucho placer me ha causado su apreciable de del corriente. Ha hecho usted muy poca justicia a lo mucho en que aprecio su sincera amistad, cuando empieza usted por darme disculpas. Hombres que saben dar pruebas de afecto como usted me las ha dado, tienen derecho a ser juzgados como merecen y a quejarse si así no se hace. Su demora en contestarme estaba explicada en sí misma.

»Por falta de tiempo no escribí a usted antes, para sermonearlo. Es indispensable, mi amigo, que usted modere el ardor de su corazón y los movimientos de su bella alma. La explicación que tuvo usted con Flores sobre mi destino, es una imprudencia. Usted tiene hijos y una familia con derechos sagrados a que usted no los olvide; y en cada uno de aquellos lances, usted los olvida, porque se expone a perder una posición con que los alimenta y atiende en sus demás necesidades. Milagrosamente, no ha recibido usted el pago de su imprudencia, perdiendo su empleo; y vea usted lo que de ahí habría resultado, y el disgusto que me hubiera usted ocasionado. Cuando supe lo que usted había hecho, crea

conservador, al propio Lamas, que acababa de ser separado de su plenipotencia. Esos intereses heridos se unieron a los opositores del general Flores. Lamas, en su folleto, había sabido halagarlos. Les decía, únanse, para combatir al enemigo común. Y así sucedió, que, no obstante los propósitos honestos del general Flores, revelados en el presupuesto general de gastos sancionado para 1856, que alcanzaba a 2.157,546\$462, todo aquello se levantó, con el doctor don José María Muñoz a la cabeza. Ese movimiento fué alentado por el ministro del Brasil don José María de Amaral.

que tuve un mal rato. Yo no necesito de esas pruebas para medir la extensión de su amistad. Así, pues, ruégole muy formalmente que se contenga y sufra. Persuádase usted de que en el mundo es preciso vivir con él, y que el día en que usted no tenga su empleo ni como adquirir, nadie le ha de dar de comer a su familia, recompensando así la nobleza y generosidad de sus acciones. En mi caso, todo lo partiría con usted; pero, ¿yo qué podría darle, aun cuando es tanto lo que he robado? Cuento, pues, con que usted me complacerá siguiendo los consejos de la experiencia y de un verdadero amigo de usted.

»Sentiré no estar ahí para el día de su función Universitaria. Mucho he aplaudido la resolución de usted y recibiré con gusto el trabajo que me ofrece.

»Allá ha ido Nicolás a dar su examen y recibir el grado. ¿Comprende usted mi martirio?

»Me dicen que Lucas ha lucido en su función. ¡Figúrese usted mi placer! Eso era de esperar de su aplicación. A lo menos mi amor de padre así me lo hace creer.

»Pero dejemos ésto que me hace mal.

»Me aseguran que la resolución del Imperio, en lo que nos concierne, ha sido malísimamente recibida por la gente de *Chuzas* y nuestros distinguidos *conservadores*. Ya yo lo esperaba. La actitud del Brasil nos asegura paz, orden, libertad, garantías, poder en la autoridad de la ley, con la población, los capitales, la industria, el trabajo y el bienestar que traerían aquellos elementos. ¿Puede eso convenir a los que viven, y no pueden vivir, sino con las revueltas y las orgías que les son inherentes?

»Pero esos son los menos. La *inmensa mayoría* del país, ha de recibir la misión de Amaral de otra manera bien diferente. Ella ha de apoyarla enérgicamente, y las malas pasiones no tendrán más remedio que someterse.

»Por otra parte, ¿qué pide el Imperio que sea humillante para el país? ¿qué, que ese Gobierno, sino fuese lo que es, no debiese anticiparse a hacer, por su propio decoro y dignidad, por su más notoria conveniencia, por egoísmo, pues que, para esa gente, la voz *patria* no tiene otra significación que su interés? Pero aunque así no fuese, ¿el Imperio pide más de lo que tiene derecho a pedir por los pactos vigentes? ¿por qué, pues, no ceder? ¿por qué comprometer al país, en los conflictos que son consiguientes? ¿por qué preparar así el triunfo de los *blancos*, ya que se ha querido evocar y resucitar a los antiguos partidos con sus odios y bárbaros rencores?

»Repito: tengo fe viva en que eso no ha de suceder; y no sucediendo, que la causa de los principios, de los verdaderos intereses del país, en su actualidad, causa a que sólo pertenezco y es mi partido hoy, como lo fué en la Defensa de Montevideo, ha triunfado, sean cuales sean los hombres que vengan al poder.

»Así es que con orgullo digo y siempre diré la parte que me cabe en la resolución del Imperio, que es *toda* la que ha obrado en ella. El país me lo ha de agradecer algún día. No esperando ni queriendo nada de los hombres, y menos de mis contemporáneos, usted ve que no tengo por qué dar importancia a

Se decía que el general Flores pretendía hacerse reelegir presidente. La Prensa se había ido muy lejos, por lo que el gobernante, mal aconsejado, creyó del caso prohibir la publicación de diario alguno, sin la previa autorización del ministro de Gobierno, una fianza de diez mil pesos y aprobación por parte del Ministerio del programa del periódico. No obstante, el diario *La Libertad*, que había cesado, reapareció para continuar enérgicamente en sus ataques. Se cerraron imprentas y se redujeron a prisión varias personas; pero todo fué inútil para contener el desborde de las pasiones, a pesar, justo es decirlo, en honor del mandatario, de haberse dejado sin efecto el decreto coartando la libertad de imprenta, de fecha 10 de agosto (1).

Al frente de esa oposición, como tribuno y periodista, estaba el doctor Muñoz, que era diputado. El mandatario le mandó prender. Muñoz se atrincheró en su domicilio, invocando sus fueros parlamentarios, viéndose rodeado de sus numerosos partidarios. El mandatario puso a prueba su bondad y valor personal, en esos momentos, y, después de ciertos trámites, en los cuales apareció el doctor don Manuel Herrera y Obes, pudo aplacar la ola revoltosa (2); pero, a las 48 horas (el 28 de agosto), ella avanzó, llevándose todo por delante. A su frente se hallaban Muñoz, Tajés, Batlle, Solsona, y como cooperadores, Regúnaga, Bustamante, Mayobre, Estrázulas, Ferreira, Va-

lo que ellos piensen o digan, desde que no traduzcan sino sus pasiones y sus bastardos intereses.

»Usted conoce mis opiniones sobre la doble Asamblea. El doctor Gómez ha de arrepentirse algún día de haberla promovido y sostenido. Con todo, si el Imperio garante la paz y la tranquilidad del país, los inconvenientes de la medida se modifican considerablemente. Lástima será que Amaral no trabaje porque ella no se lleve adelante.

»Por lo demás, ¿necesito yo saber quiénes son H. Martínez, Aguiar, Díaz, Zubillaga, etc., etc.? ¿acaso no lo sé ha mucho tiempo? ¿hay en Montevideo quien lo ignore? Pero, Dios los libre de caer bajo mis uñas.

»Nada me preocupa menos que el levantamiento de mi destierro. Mi resolución es no volver al país, sino después de electo el nuevo Gobierno; y aún así, veremos. No se empeñe, pues, en que lo levanten, ni hable sobre ello una palabra. Me conviene eso.

»Su recomendado no ha venido: lo visitaré.

»A Dios, mi amigo, que él le dé salud, calma y dinero, es lo que le pide su amigo muy afecto y sincero,

»MANUEL HERRERA Y OBES.

»A mi comadre, mis afectuosos recuerdos.»

(1) Se dejó sin efecto el 22 de agosto de 1855. El decreto del 10 de agosto estaba firmado por Salvador Tort, Enrique Martínez y Francisco Agell, como ministros de Flores.

(2) El doctor don Julio Herrera y Obes incurre en un grave error al afirmar que el general Flores fué a prender al doctor Muñoz, con un batallón. Fué solo, con todo valor, y se mezcló entre los alborotadores, para convencer a Muñoz de que las cosas podían hacerse en paz. Es uno de los muchos errores en que incurre Julio Herrera y Obes en su apasionado y parcial artículo publicado en *El Siglo* al historiar la vida de este diario.

rela (Jacobo), Hordeñana, Antonio de las Carreras, Lerena (Ambrosio), Rodríguez (Adolfo), Muñoz (Enrique), Gregorio Pérez, Ferreira (Mariano), Castagnet, Villasboas, Luna, Olave, García (Guillermo), Zavalla, Fernández (Eduardo), Villagran, Garzón (Vicente), Gowland, Herrera (Nicolás), Escalada, Del Campo (Adolfo), Lamas (Luis, hijo), Muñoz (Gervasio), Lavalleja (Constantino), etc.

El general Flores salió a campaña y reunió elementos, teniendo la inspiración de aproximarse a la ciudad para proteger la fuga del presidente del Senado, don Manuel Basilio Bustamante, en quien los revoltosos querían que recayera el mando.

En todo esto apareció la figura del doctor Herrera y Obes dirigiendo la palabra al pueblo, y pidiendo se nombrara un Gobierno provisorio en la persona de don Luis Lamas, lo que se hizo tumultuariamente.

Por su parte, el general Flores trataba de atraerse a su lado, en la Villa de la Unión, a cuanto legislador podía (1). A la vez se dirigía a la Comisión Permanente dándole cuenta de los sucesos y de lo hecho para desenmascarar al ministro Amaral. En su mensaje declaraba que los conspiradores habían celebrado sus reuniones en la propia casa de Amaral, y que se había visto en el caso de declarar rotas las relaciones con el ministro, haciéndolo así saber al Gobierno impe-

(1) He aquí la cartas que dirigía al doctor Palomeque, quien no tuvo inconveniente, respondiendo a sus ideas ya hechas, en colocarse donde se hallaba la autoridad constitucional:

«Señor don José G. Palomeque.

»Muy señor mío:

»A la una del día de hoy, lo espera en su despacho su afectísimo amigo y seguro servidor, Flores.—Agosto 21/855.

«Señor don José G. Palomeque.

»Paso del Molino, septiembre, 3/855.

»Mi querido amigo:

»Aquí reside la autoridad legítima de la Nación, por la que usted tanto ha trabajado, y aquí también está la unión sincera de todos los orientales.

»Véngase, pues, que como oriental patriota le pertenece, para que la guerra civil tenga su término.

»Su amo. affmo.,

»FLORES.»

rial a los efectos de la intervención, pidiendo el relevo del diplomático «por tener tan justos como dobles motivos de queja» (1). Hacía saber, además, que, como arma revolucionaria, se había hecho «circular en las oficinas de la República, por medio de agentes de los conspiradores, que se hallaba a disposición del doctor Herrera toda la influencia y poder de la intervención». No olvidaba la participación que Lamas tenía en estos sucesos, pues su Manifiesto había sido confeccionado seguramente de acuerdo con Herrera, Amaral y Muñoz, para que la chispa saltara y produjera el incendio.

EL FOLLETO POLÍTICO DEL 55

El documento de Lamas era notable, y estaba redactado con toda la habilidad política notoria en su autor, o más bien dicho, autores, porque Herrera y Obes, que había regresado del destierro, y estaba con sangre en el ojo, había contribuido a suministrar los datos y antecedentes necesarios. Lamas, como hemos visto, le había preguntado cómo y con quiénes podíase contar para la obra, en la inteligencia de que era necesario que en Montevideo se movieran, se agitaran y se quejaran para que el Gobierno imperial saliera de su actitud. Y esos datos eran los que aparecían en el folleto político, halagando a unos y a otros, para atraerlos al movimiento. Y ahí estaban hombres jóvenes, recién nacidos a la vida pública, que al leer aquellos hermosos párrafos de amor a la concordia y unión de los orientales, para formar un *gran partido nacional*, que nada tuviese que ver con los partidos ensangrentados del pasado, salían a la calle a derramar su sangre para con ella salpicar a las nuevas generaciones. Y Lamas declaraba en su folleto que no quería que volviera a salpicarle la sangre que le salpicó.

El general Flores comprendía perfectamente la influencia que en todo esto tenía el Brasil, y con él, la personalidad de Lamas. Por eso, en su Mensaje, se ocupaba también de las notas dirigidas al señor de Amaral «relativas a la explicación de conceptos vertidos en el *libelo publicado por don Andrés Lamas*, y a la posición que guardarían las tropas del Imperio en cualquier caso de una conmoción interior».

Era indiscutible que el general Flores, como jefe de una fracción política, había influido, sin descender a la violencia, para que en las elecciones de noviembre del año anterior triunfaran sus amigos políticos. Como demostración de ello, ahí está la carta, en nuestro archivo, dirigida al coronel don Jerónimo Silvera, el mismo que al año siguiente

(1) Mensaje de 9 de septiembre de 1855.

te formaría, en campaña, entre los revoltosos (1). Esa carta a nadie sorprenderá, dada la evolución operada en las ideas. Hoy un gobernante puede aconsejar a sus amigos políticos, y hasta ser candidato a la presidencia, allí donde se admite la reelección, defendiendo su candidatura, siempre que no utilice la fuerza pública, para con ella coartar los derechos de los ciudadanos. La Asamblea, pues, se había constituido bajo su dirección, y de ahí el rumor público, explotado por sus adversarios, y hasta por Lamas, como se ha visto, de que aspiraba a hacerse reelegir en la presidencia de la República. Era una explosión; con ella se quería causar efecto en el ánimo del pueblo. Lo mismo hubiera sucedido a no estar el general Flores en la presidencia. Era al candidato a quien se combatía, empleando todos los medios. No podían perdonarle la derrota de 1854, en la doble Asamblea. El general Flores desempeñaba sus funciones para *completar* los cuatro años de Giró. Era, pues, discutible, si podía o no ser reelecto quien no había sido presidente durante los cuatro años presidenciales. La Constitución hablaba de un presidente por *cuatro años*. Éste era quien no podía ser reelecto por otros *cuatro años*. Pero fuera como fuera, el hecho era que el general Flores no había cometido ninguno de esos atenta-

(1) He aquí esa carta:

»Señor don Gerónimo Silvera.

»Montevideo, noviembre 1.º/855.

»Estimado amigo:

»La importancia de la votación a que es llamado el país para el día 26 del corriente es de tal trascendencia para el presente y futuro bienestar de la República, que como ciudadano no puedo dejar de tomar la parte que en ella me corresponde.

»Encargado de conservar el orden público, es mi primer deber dirigir la opinión y resguardarla también de las asechanzas de círculos políticos en circunstancias solemnes como las presentes usando de mi influencia particular para que esa opinión se encamine hacia el bien y felicidad de la Nación.

»Amante como el que más de la tranquilidad y prosperidad Nacional, desmentiría estos antecedentes de mi carrera sino concurriese a tomar parte con mis conciudadanos en las trascendentales votaciones próximas, y traicionaría mis deberes como tal ciudadano sino prestara la cooperación debida en el acto más solemne en la vida republicana.

»Llevado de estos sentimientos y seguro de que toda mi vida pública ha de oponerse a toda mala interpretación que algunos espíritus quieran darle, me dirijo a usted acompañándole las candidaturas que he formado y creo llenarán el bien de la patria, para que usted las presente en mi nombre a los ciudadanos de ese Departamento y les invite a contribuir con sus votos a la formación de una Asamblea que ha de exceder en sentimientos de paz, estabilidad, orden y progreso.

»Mi amigo, en esto creo llenar un deber de conciencia ejerciendo un derecho que tiene hasta el último de mis conciudadanos; por tanto ahora sólo me resta aprovechar la ocasión para repetirme de usted atento servidor y afectísimo compatriota Q. B. S. M.,

»FLORES.»

dos inauditos, que hacen que un pueblo se yerga revolucionariamente para reivindicar su soberanía. Los mismos que aquí aparecían levantándose con el santo y la limosna, lo habían acompañado hasta *después de constituidas las Cámaras*, en 1855, bajo su influencia, y hasta bajo la de esos mismos alborotadores recalcitrantes. Eran los motineros del 18 de julio del 53, los revoltosos de septiembre del mismo año, ya acostumbrados ¡a voltear presidentes! por un quitame esas pajas, creando así, o continuando, la escuela del desorden. En prueba de ello, ahí teníamos al señor coronel don Lorenzo Batlle, ministro del general Flores hasta *después* de hechas las elecciones del 54, y de constituidas las Cámaras en febrero del 55, que recién *en abril 14 de 1855* renunciaba el Ministerio. Y desde esta fecha, hasta agosto, no se había realizado acto alguno que pudiera considerarse tiránico o despótico, como para levantar la bandera de la revuelta. Es verdad que el decreto del 10 de agosto sobre la restricción de la Prensa, aprobado por la Comisión Permanente, podía criticarse, en principio, tomando las cosas fuera del terreno donde se actuaba; pero el Poder Ejecutivo lo había hecho dentro del artículo 81 de la Constitución, adoptando medidas prontas de seguridad, visto el desborde de la Prensa. Prefirió este temperamento, para no verse en el caso de deportar. Así lo decía en su Mensaje a la Comisión Permanente, la cual aprobó la medida. No se trataba, pues, de actos dictatoriales, sino de medidas de seguridad que el Poder Ejecutivo podía adoptar en caso grave, pero dando cuenta al Cuerpo Legislativo, estando a su resolución. Las formas constitucionales estaban llenadas. Por lo demás, esa medida de seguridad, como la orden de prisión contra el doctor Muñoz, y otras más, todas ellas quedaron sin efecto inmediatamente.

Sin embargo, el general Flores acató los hechos, y no desoyó las exhortaciones de la Comisión de nacionales y extranjeros que lo vieron, presentando inmediatamente su renuncia al Cuerpo Legislativo, la que fué aceptada, declarándosele benemérito de la patria (1), por

(1) He aquí los decretos respectivos:

MINISTERIO DE GOBIERNO

DECRETO

Montevideo, septiembre 11 de 1855.

Habiéndose comunicado oficialmente al Gobierno Provisorio, que la Asamblea General ha aceptado la renuncia que de la Presidencia del Estado le presentó el general don Venancio Flores, el Gobierno Provisorio ha acordado y decreta:

Artículo 1.º Queda desde esta fecha en posesión del Poder Ejecutivo de la República el Presidente del Senado ciudadano don Manuel Basilio Bustamante, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución del Estado.

2.º Comuníquese a todas las autoridades, imprímase e insértese en el Registro Nacional.

Lamas.—Francisco S. de Antuña.—Lorenzo Batlle.—Manuel Herrera y Obes.

lo que asumió el mando el presidente del Senado don Manuel Basilio Bustamante, nombrando ministro general interino a don Juan Miguel Martínez (1) ; mientras a los nueve días (21 de septiembre) constituía su Ministerio en esta forma : Guerra y Marina, general don José Brito del Pino ; de Hacienda, don Jaime Illa y Viamont, y Gobierno y Relaciones Exteriores, don Juan Miguel Martínez. Este último renunciaba, y el 29 se le substituía con el doctor don Adolfo Rodríguez, uno de los revoltosos.

DESTIERRO DE DIPUTADOS REVOLTOSOS

Una de las primeras medidas del nuevo gobernante fué la de apresurar la salida del ejército imperial, a cuyo efecto se dictó el Acuerdo de octubre 19, de conformidad con el Enviado Extraordinario y ministro plenipotenciario en misión especial del Brasil, venido en substitución de Amaral. Así se hacía efectivo lo que el general Flores había declarado en 5 de septiembre al Imperio, por intermedio de su representante en Río de Janeiro, el doctor don Adolfo Rodríguez, reemplazante de Lamas. El retiro de la división tuvo lugar el 13 de noviembre de 1855, y a los once días estallaba un nuevo movimiento, encabezado por los mismos revoltosos. Esto motivó el cese del doctor don Florentino Castellanos, que había sido nombrado ministro general para contentar a los disidentes, designándose para el de la Guerra al general don José Antonio Costa. Se declaró en estado de sitio a la capital, mientras no se «sometieran a la autoridad los promotores de la anarquía de la noche del 24 y días siguientes». La fracción armada se había apoderado de la Casa de Gobierno, y estaba acaudillada por los diputados Muñoz, Torres y Bertrán, por lo que el Poder Ejecutivo los declaraba «responsables de las consecuencias de la perturbación de la tranquilidad pública que principió con el desautorizado armamento que ellos promovieron—decía,—y existe desde el día

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA

DECRETO

Montevideo, septiembre 12 de 1855.

El Presidente de la República acuerda y decreta :

Artículo 1.º Nómbrase Ministro General interino mientras no se organizan los respectivos ministerios al ciudadano don Juan Miguel Martínez.

2.º Comuníquesele el presente decreto, para que a las dos de la tarde de este día se apersona a prestar el juramento.

3.º Queda sin efecto el decreto del día anterior por el que se autorizaba a los oficiales mayores para el despacho.

4.º Comuníquese, publíquese, etc.

BUSTAMANTE.

CARLOS DE SAN VICENTE.

25 del corriente». Por lo demás, el general Flores era nombrado comandante general de armas y encargado de organizar un batallón con los Guardias nacionales.

Los sucesos no habían sido favorables para los revoltosos. Volvió a sucederles lo que en 1853 y en agosto de 1855. Ellos consiguieron desalojar a los presidentes de la República en esas dos ocasiones, pero a su vez fueron derrocados por sí mismos. Aquí, don Basilio Bustamante, y todos los elementos del Cuerpo Legislativo, se dieron cuenta inmediatamente del abismo adonde iban a caer, y ya no quisieron conciliar más con tales procedimientos ni con tales hombres. Por consiguiente, no transaron con ellos, vista la inutilidad del sacrificio hecho al aceptar la renuncia del general Flores, lo que no saciaba las aspiraciones de aquellos espíritus inquietos, perturbadores hondamente de la marcha del país. Y uniéndose todos, para poner fin a aquella bochornosa situación, rodearon al presidente constitucional, y concluyeron con la anarquía. Los generales Flores y Oribe se pusieron al frente de ese gran pensamiento político, para lo cual, días antes de estallar la segunda insurrección, subscribieron el *Pacto de Unión*, en la Villa de la Unión, el 11 de noviembre de 1855.

Vencido ese elemento, salieron desterrados los diputados Muñoz, Torres y Bertrán, yendo a Buenos Aires, cuyos colazos ya los hemos enunciado en páginas anteriores.

EL PACTO DE LOS CAUDILLOS ORIBE Y FLORES

Estos acontecimientos se habían forjado a raíz del célebre Manifiesto de Lamas. Sus ideas fueron proclamadas en agosto al triunfar el primer movimiento. Se declaró, en un documento público, que «los ciudadanos se reunían en asociación política con el designio de formar un gran partido nacional», siendo bases fundamentales: «promover y sostener la existencia de Gobiernos regulares» que «radiquen su existencia en la observancia de la Constitución; aceptar leal y decididamente como medio de arribar a ese grande objeto, la alianza brasileña, digna y benéficamente entendida; trabajar en la extinción de los odios y prevenciones que ha dejado la lucha de los dos grandes partidos, predicando la unión entre los orientales; y aceptar la actualidad creada por los acontecimientos, a que, decía, «ha dado lugar la marcha arbitraria y atentatoria de la presidencia del general Flores» (1).

En una reunión celebrada el 7 de octubre de 1855, en el trinquete del señor Casanave, calle Rincón 212, se aprobó el programa de la *Unión Liberal*, a cuyo frente se hallaba lo más intelectual y social

(1) Esto dice el señor Díaz, página 124, tomo ix, pero en los Estatutos de la *Unión Liberal* nada se dice del Brasil, ni se ataca al general Flores. Esto último era muy natural, pues en el nuevo partido entraron hombres de todos los círculos y colores.

del país, como ser, Luis Lamas, Herrera y Obes, Juanicó, Antuña, Brito del Pino, Lerena, Velazco, Herrera, Aguirre, Vidal, Estrázulas, Solsona, Regúnaga, Muñoz, Bermúdez, Fuentes, Illa y Viamont, Soto, de las Carreras, Villagrán, Costa, Tapia, Lasala, Platero, Anavitarte, Berro, de la Sierra, Brid, Viana, Gómez (Leandro), Reyes, Vilardebó, Olave, Maciel, Estomba, Aldecoa, Lavalleya, Gowland, Rodríguez, Núñez, Requena, del Castillo, Ximénez, Giró, Conde, García (Salvador), Brito, Pérez, Laguna, Idoyaga, Fajardo, Curbelo, Grané, Escalada, Villasboas, Vargas, Tomé, Solsona, Rivera, Quincoces, Palomeque, Nin Reyes, Villademoros, Pagola, Ferreira, Arrué, Arrascaeta, Susviela, Vargas, Giró, Zavalla, Zorrilla, Pereda, Barbat, Labandera, Lapidó, Bustamante (José Cándido), Gómez (Andrés A.), Vilaza, Gadea (constituyente), Errazquin, Estévez, Correa, Forteza, Miró (Cipriano), Santiago, Camusso, Trapani, Díaz (Teófilo), Bustamante (Pedro), Antagaveytia, Alvarez (Julián), Uriarte, Aguirre (Martín J.), Algorta, Caravia (Antonio J.), Anaya, Iturriaga, Lacalle, García de Zúñiga, Barbat, Montoro, Casalla, Barreyro, Arizaga, Vázquez (Patricio), Velazco (Ernesto), etc., etc. (1).

Las ideas de Lamas estaban triunfantes en el papel y en los hechos. Ahí estaba el nuevo gran partido nacional, y depuesto el general Flores. Faltaba ahora la buena dirección política, es decir, la prudencia. Ésta no apareció. El doctor don José María Muñoz y sus amigos se apercibieron de que el golpe una vez más les había salido errado, pues don Manuel Basilio Bustamante, como la casi unanimidad del Cuerpo Legislativo, respondían a la política del general Flores. Hubo quienes, al constituirse *La Unión Liberal*, pretendieron (y eran consecuentes con su criterio revoltoso) derrocar la Asamblea. La revuelta se detuvo, y por eso fué vencida. El mismo doctor Muñoz, en un principio, habría declarado que se separaría de *La Unión Liberal*, si tal cosa se resolvía (2). Sin embargo, esa tendencia de arrasar con todo, para producir un nuevo caos, como en 1853, y entorpecer la marcha progresista del país, empezó a dibujarse claramente. Muñoz y sus amigos se vieron perdidos, a subsistir la Asamblea que debía nombrar presidente de la República a los tres meses de los sucesos que estaban desarrollándose, al retirarse la intervención brasileña, esa, que, con su prescindencia y política activa, había contribuido a la caída del general Flores. Ahora, quedaban los orientales entregados a sus solas fuerzas. *La Unión Liberal* comprendió que sus tendencias se desvirtuaban ante la actitud de Muñoz, de la que no compartió al lanzarse ese ciudadano a la nueva revuelta

(1) Recomendamos el laborioso estudio del señor don Doroteo Márquez Valdés, sobre *La Unión Liberal*, publicado en los tomos VI y VII de *Vida Moderna*, revista dirigida por los señores Rafael Alberto Palomeque y Raúl Montero Bustamante, en Montevideo, año 1902.

(2) Véase el trabajo citado del señor Márquez Valdés.

del 24 de noviembre, para arrancar del poder al señor Bustamante, fundado en que el gobernante mantenía vinculaciones con los generales Flores y Oribe. En efecto, apercibidos éstos de lo que se venía tramando, unieron sus elementos, debilitando así el poder moral y material de *La Unión Liberal*, la que, al fin y al cabo, se pasó con armas y bagajes, al finalizar la lucha presidencial que llevó al señor don Gabriel Antonio Pereyra al poder. Y al unirse, aquéllos buscaron en el gobernante la palanca indispensable para la realización de sus propósitos. Declararon que renunciaban a toda aspiración presidencial, invitando a sus compatriotas «a formar un solo partido de la familia oriental». Dieron el programa de esa nueva asociación, que era, *mutatis mutandi*, el mismo de *La Unión Liberal*, a lo menos el que consta en los Estatutos. Lo que sí, para nada se hablaba de la alianza brasileña, *leal y dignamente entendida*, como decía el documento público subscrito por los revoltosos, cuando los primeros desórdenes de agosto. Ese movimiento nacional, iniciado por Oribe y Flores, que tanto los levanta en las páginas de la historia, se impuso a la conciencia popular. Ahí se veía al fin la paz ansiada y el descrédito completo de los alborotadores, que habían ido a purgar su delito en el destierro.

La conmoción apenas duró cinco días. Fué sofocada y vencida. Nada pudieron hacer Batlle, Muñoz, Solsona, Bertrán y Torres. La opinión los condenó (1). Pretendieron inducir al general Medina para que se pusiera al frente de ese escandaloso movimiento, pero desoyó las indicaciones, permaneciendo al lado del gobernante y del doctor Palomeque.

IDEAS TRIUNFANTES

Este, por su parte, había seguido la línea de conducta que se había trazado desde tiempo atrás. Había condenado el atentado de agosto, oponiéndose a cuanto pretendieron los sediciosos. Éstos llegaron al extremo de atropellar su domicilio, registrarlo y llevarse presos a dos jóvenes que allí encontraron. Estas medidas violentas respondían al propósito de reunir el Cuerpo Legislativo, al cual pertenecía el doctor Palomeque, para así legalizar la situación creada con dos Luis Lamas a la cabeza. Eran tan firmes las ideas del doctor Palomeque, que ni las personalidades de Lamas y Herrera y Obes, a quienes tanto respetaba, fueron bastantes a arrancarlo de su puesto. Se mantuvo fiel a la autoridad constitucional en los dos escandalosos movimientos realizados, sin perjuicio de haber contribuido a fortalecer el *nuevo gran par-*

(1) Vencida la revuelta, el doctor Adolfo Rodríguez era nombrado ministro de Gobierno y de Relaciones Exteriores, y don Juan José Durán de Hacienda, en 10 de diciembre de 1855. El 20 de diciembre era nombrado el general Flores comandante general de armas sin más gasto que el de su secretaría, mientras durara la presidencia.

tido nacional, ideado por Lamas, que tenía por base el repudio del pasado. Para esto era materia dispuesta; pero, cuando algunos miembros de esa *Unión Liberal* falsearon el programa y levantaron el pendón de la revuelta, entonces corrió a unirse con quienes rodeaban al mandatario constitucional. Las líneas quedaron tendidas desde entonces. Nada tendría que ver el doctor Palomeque, en el futuro, con los hombres del criterio de Muñoz, Gómez, Batlle, César Díaz, Tajés, etc. Estos eran de escuela revolucionaria y sediciosa; él, de la unión y del respeto a la autoridad constitucional. Los separaban principios completamente distintos. No podían conciliar. El mismo Lamas, y aun Herrera y Obes, reaccionarían, en más o menos tiempo, y se les vería a los tres reunidos nuevamente para servir los intereses permanentes del país, con prescindencia de trapos y caudillos. Lamas, muy especialmente, se quedaría sorprendido de que sus ideas necesitaran verter sangre, por lo que muy pronto estaría ahí, sirviendo al Gobierno de Pereyra. Herrera y Obes tardaría un poco más; pero, durante la administración de Berro, se le hallaría, en el Senado, junto con Villalva, para condenar la revuelta de 1863, encabezada por el general Flores.

El doctor Lamas vió perdida su esperanza, si es que la tuvo, y muy legítima, por otra parte, de ocupar la presidencia de la República. Pero no podía quejarse: sus ideas altruístas habían triunfado, hasta en el corazón de los dos grandes caudillos. Ellos no sólo querían la formación de un nuevo partido que tendiera a hacer desaparecer los odios nacidos de las guerras civiles, sino que llegaban hasta declarar aquello de «propender a la marcha progresiva del espíritu público para radicar en el pueblo la adhesión al orden y a las instituciones, *a fin de extirpar por este medio el germen de la anarquía y el sistema de caudillaje*».

Lamas debió sentirse halagado. Pudo decir que eran sus ideas que pasaban, sin importarle de quién las predicaba. Ellas habían penetrado hasta lo hondo en el corazón de los propios caudillos. ¿Qué más se quería? Nunca se verá en la historia una declaración más extraordinaria. ¡Los caudillos condenando el caudillaje, y arrojando la idea del nuevo partido! Era de todos el pensamiento. Luego, ¿por qué no estaban todos allí para festejar el triunfo, en la hora de proclamarse la candidatura del tipo consular de la República, el prócer don Gabriel Antonio Pereyra?

Lamas miraba las cosas desde Río de Janeiro, mientras su amigo Herrera y Obes le tenía al corriente de lo que sucedía. Entonces no había telégrafo para saber lo que pasaba en Montevideo. Por eso Lamas, al acusar recibo a una epístola del doctor Herrera y Obes, de fecha 5 de enero de ese año, le decía que el Imperio «se abstenía, y que, si por la elección les era hostil, se preparaban en su frontera (1), y en

(1) Esto está confirmado en la presente carta:

sus relaciones con la Confederación. De acá no tenemos, pues, nada, ¿Qué va a suceder el 1.º de marzo? Ya usted se hace cargo de la ansiedad con que aguardo las noticias de ese día. Démelas usted con extensión, porque ellas serán un nuevo punto de partida» (1).

El doctor Lamas estaba intranquilo. Toda su fuerza se había desgastado. La revuelta no había servido para él ni para sus amigos. La ayuda del Imperio a nada había conducido. Y ahora que esta alianza brasileña desaparecía, y que los soldados imperialistas, traídos precisamente por el caudillo, en 1854, se ausentaban, triunfaban las ideas políticas del doctor Lamas. Ahí estaban los representantes de esos dos partidos políticos, unidos, proclamando el olvido del pasado, y condenando el caudillaje, para levantar la candidatura de un hombre civil, un prócer de la patria, servidor de la Independencia Nacional, que se había destacado en los anales del país, sirviendo en la Defensa de Montevideo, ésa a la cual pertenecieron los dos protagonistas en el drama sangriento comenzado en agosto, y continuado, para concluirse, en noviembre del mismo año. Éstos no habían triunfado material y personalmente, pero sus ideas habían caído en tierra fértil, y eran

«Señor don José G. Palomeque.

»Montevideo.

»San Fructuoso, noviembre 9/855.

»Mi estimado amigo: Aunque sin ninguna suya a que contestarle, no quiero tenerlo ajeno de las noticias que hay por esta parte de frontera.

»Por un amigo mío llegado de la Cachuera, provincia del Río Grande, me dice lo siguiente: que el Gobierno Imperial ha mandado reunir todos los Guardias Nacionales de caballería de aquel país, debiendo marchar luego que se haga la reunión a Acegüá, donde hacen cuartel general por aquella parte de la frontera. Canalabarro, jefe de esta frontera, aun no ha tomado medida alguna. Tan pronto como desenvuelva algo se lo comunicaré a usted para lo que pueda importar. Dicen también que el Gobierno Imperial ha dado libre la tercera parte de la Esclavatura, pagando a cada propietario 600.000 reis por cada esclavo. Todo esto dicen los brasileños que es con motivo de la guerra con el Paraguav, pero, mi amigo, las fuerzas las ponen sobre nuestras fronteras, en lugar de ponerlas sobre la frontera Paraguaya. Al emperador lo esperan en Puerto Alegre. Dicen que viene con motivo del cólera que se ha declarado en el Janeiro. En fin, veremos.

»De este Departamento ya habrá usted visto los embustes que estampan en los diarios respecto a nuestro amigo López. Todo es una solemne mentira y aspiración al mando por tres o cuatro locos que hay, y que usted bien los conoce. Yo desearía que el Gobierno no mudase a López, y si lo mudan para poner alguno de los que le digo, será un barullo y grande.

»Adiós, mi amigo, recuerdos a misia Petronita y chicos, y usted no deje ociosa la buena voluntad de su siempre amigo y s. s.—*Pedro Chucarro*.

»Nota.—Hágame el gusto de ver al señor Vicario Apostólico respecto a una licencia o dispensa sobre un casamiento que yo le recomendé y que le presentó el señor don Francisco Olaste, pues se han empeñado conmigo para su pronto despacho.—*Chucarro*.»

(1) Carta de Lamas a Herrera de fecha 13 de febrero de 1856, en mi archivo.

los caudillos Oribe y Flores, con todo el poder de la nación, que las sustentaban, para echar las bases de ese *gran partido nacional*, desde el Poder Ejecutivo de la República.

Así, desde el Gobierno, era cómo Lamas había concebido la fundación y organización del Partido Nacional, después de los sucesos de julio de 1853, en aquella sesuda carta dirigida a Herrera y Obes desde Río de Janeiro. No podía quejarse de que no marcharan sus ideas, por las cuales se venía bregando, desde la paz de octubre de 1851, por los hombres de pensamiento y de acción. Lamas lo había dicho en su *Manifiesto* de 1855 : a nadie ha de excluirse del nuevo partido : el que es bueno hoy es bueno ; no le preguntemos su pasado ; no lo recordemos, porque sino no nos entenderemos ; que no nos salpique más la sangre que nos ha salpicado.

Esto había dicho, y acentuado, en el programa, que, bajo su inspiración y la del doctor Herrera y Obes, se dió *La Unión Liberal*, estando a su frente el autor de sus días, el venerable ciudadano don Luis Lamas.

«*Je prends mon bien où je le trouve*», era del caso decir. Poco importaba quiénes fueran los que recogieran el pensamiento y se colocaran al frente de él. Su semilla ahí había quedado en el campo de batalla. Ambos combatientes entraban a la liza al grito simpático de *Unión de los Orientales*. Si Lamas, desde Río de Janeiro, lo proclamaba en su *Manifiesto*, el general Flores, desde la Villa de la Unión, llamaba a su alrededor a todos los ciudadanos, empleando esas mismas expresiones. Así se lo decía al doctor Palomeque en la epístola que ya hemos dado a conocer. «Véngase—le decía,—que aquí está la verdadera unión de los orientales, por la cual tanto ha trabajado usted.»

¿Quién realizaría mejor el pensamiento?

Eso sería la obra del tiempo.

Por ahora ahí estaban ambos proclamándolo, con esta sola diferencia : que ya no se buscaba el apoyo brasileño ni el argentino para practicarlo. Era la obra de los orientales, quienes, al fin, habían conseguido quedar solos, aunque fuera por cortos instantes, para discutir y arreglar sus asuntos.

Y este es el mérito de aquel noble, útil y patriótico *Pacto de Unión*, que reunió a su alrededor a todo el país, con excepción de un pequeño círculo de hombres que acababan de ser batidos y condenados por la gente sesuda. La unanimidad en política nunca existe, ni existirá. ¡ Sólo la tiranía la impone ! El *Pacto de Unión*, para aquellos tiempos en que la democracia embrionaria depositaba en un caudillo el derecho de regir los destinos de los partidos, como aun ha sucedido en nuestros días progresistas, no era sino la consagración de las ideas dominantes. El programa de *La Unión Liberal* decía que se aspiraba a «reunir en el supremo interés de la patria a todos los orientales, trabajando en la extinción de los odios y prevenciones de partido, y re-

nunciando, al efecto, no sólo a toda recriminación sobre el pasado que feneció en 1851, sino, aun, al derecho de defenderse por la Prensa sobre opiniones o actos políticos de aquel pasado». Esto era lo mismo que se decía en el *Pacto de Unión*, pero con una diferencia notable: que no lo *programaban*, sino que lo *practicaban*. Y lo practicaban con sinceridad, hasta en el momento de la muerte.

Los hombres que subscribieron el programa de *La Unión Liberal* no tuvieron inconveniente ni escrúpulo en aceptar el *Pacto de Unión* y la política de éste derivada. Por eso declararon, con dos Luis Lamas a la cabeza, que aceptaban la candidatura del señor Pereyra (1), y, consecuentes con su idea, no tuvieron inconveniente en rendir, al general Oribe, en la hora de la muerte, los honores que merecía el guerrero de la Independencia. Por eso la política surgida de ese *Pacto de Unión* fué, con el tiempo, la aceptada por el doctor don Andrés Lamas, sirviéndola desde Río de Janeiro; como asimismo por todos los que habían formado parte de *La Unión Liberal*, y que no habían tomado participación en la revuelta de noviembre, por más que hasta algunos de éstos luego reaccionarían. Por eso se veía que, hombres como el general don Lorenzo Batlle, aceptaran esa política, siendo el ministro de la Guerra que, consecuente con sus ideas de *La Unión Liberal*, después de las honras fúnebres decretadas por el Gobierno al general Oribe, firmara el decreto de noviembre 1.º de 1857, que prohibía la reunión pública a celebrarse en el teatro San Felipe por los señores Gómez, Bustamante y otros, invocando, para ello, «la realización del programa que regula la política del Gobierno y que ha sido aceptado por el país; así como es también el único medio de anarquizar el país el levantar la bandera de alguno de los viejos partidos». Fundado en ello prohibía esa y «toda otra reunión en que se levantara la bandera de cualquiera de los antiguos partidos».

Lo que *La Unión Liberal* y el *Pacto de Unión* practicaban era una idea sana. Quizá el Gobierno ultrapasaba su acción, conocedor del

(1) Los representantes del pueblo procedían a la obra con toda independencia. He aquí una carta del señor don Juan Manuel de la Sota:

«Señor don José G. Palomeque.

»Mi amigo: Se acerca el 1.º de marzo, y es forzoso uniformar la opinión de los Representantes acerca de la candidatura a la Presidencia.

»Sus relaciones para con algunos, que juzgo puedan estar perplejos, pueden influir en el acierto, y si es que hemos de dar en ese día paz a la República y respeto a la autoridad, es, sin duda, el más recomendable acto hacia nuestros comitentes.

»Espero, pues, mi amigo, que, en tal sentido, no dejará usted de proceder con toda la decisión y energía que en casos iguales ha sabido usted observar.

»Queda de usted siempre affmo. Q. B. S. M.,

»JUAN MANUEL DE LA SOTA.

»Febrero 6/856.»

sentimiento enérgico de su pueblo. Pero, la idea era tan buena, que hasta durante el Gobierno de Berro, siendo ministro el doctor Acevedo, se prohibió, y se hizo, en 1860, lo mismo que Pereyra y sus ministros Requena, San Vicente y Batlle hicieron en 1857 (1).

El doctor Lamas continuó su vida política, y en 1874 residía en Buenos Aires, dedicado a sus estudios históricos (2). En esos días daba a luz la obra de Lozano, y al enviarle el primer volumen a su amigo Herrera y Obes, le decía: «Si usted recorre las páginas de la introducción, ellas le dirán en qué se emplea mi tiempo, y cuáles son las cuestiones que me están preocupando. De lo que ocurre actualmente no sé nada, ni de acá ni de allá. Pero esta ignorancia no es indiferencia: me satisface el hecho notorio de que exista la paz, y no necesito nada más para creer en que ella dará sus buenos frutos para el país, que no olvido, y para los amigos en cuyo bienestar me intereso» (3).

Lamas había llegado a esa edad en que se mira todo tranquilamente. Se refugiaba en los secretos de la vida pasada, rindiendo culto a lo que había sido el objeto constante de sus preocupaciones. Cuando no podía ocuparse del país, ahí estaban los manuscritos, llamándole, para que nos dejara el tesoro de sus experiencias. En 1874 así lo hacía con la obra de Lozano. Luego, vinieron acontecimientos que no podemos juzgar, porque, aunque jóvenes, tomamos participación en ellos, ocupando las filas contrarias. ¡Quién sabe lo que dirá la historia! Conste, sin embargo, que tanto Lamas como su amigo Herrera y Obes siguieron unidos en estos difíciles momentos para el país.

(1) Véase Díaz, página 309, tomo x.

(2) No hacemos aquí una biografía completa del doctor Lamas, sino lo muy necesario para darse cuenta de lo que pensaba en la época que estudiamos. Por eso no hablamos de su actitud cuando la revuelta del general Flores en 1863, de su plenipotencia en 1867 en el Brasil, ni de su intervención en la Paz de abril del 72. Ya la estudiaremos en el lugar oportuno.

(3) Carta de fecha 11 de abril de 1874, en mi archivo.

MODIFICACIONES AL TRATADO DEL 51
LA NAVEGACIÓN DE LA LAGUNA MERÍN Y DEL RÍO YAGUARÓN (1)

(1) Este asunto fué tratado antes de discutirse el contrato con Mauá.

MODIFICACIONES AL TRATADO DEL 51

Así, poco a poco, se iba regularizando la situación en medio de la paz adquirida a costa de tanta sangre. Por todas partes se veían acreedores que gritaban, y a quienes había que contentar. Los hombres que habían aceptado la responsabilidad de salvar el país de la bancarrota, iban cumpliendo con su deber. Necesitaban despertar confianza, y lo iban consiguiendo. Esa confianza vendría a medida que la honradez administrativa se revelara y las fuentes de riqueza se exhibieran. Para eso había que buscar rentas públicas, las que no se conseguirían sino por el desarrollo del comercio. Para llegar a ese resultado era indispensable modificar el Tratado de Comercio del 51, arrancado al país, por el Brasil, en una hora triste. Era él el que, se decía, no dejaba desenvolver las fuerzas económicas y sociales de la República. Iba, sin embargo, a llegar esa hora ansiada por todos los buenos ciudadanos, hasta por quienes habían asumido ante la historia la responsabilidad de subscribir aquel Tratado. ¡Es verdad que una cosa era la materialidad de subscribirlo y otra la de tener el valor de afrontar *la impopularidad nacional*, como lo dijo su autor! El Tratado era la obra de todos los ciudadanos, de uno y otro partido, que habían colocado a la República en la situación de someterse a la imposición del extranjero para poder salvarse del derrumbe nacional.

En este ilustrativo debate sobre modificaciones al dicho Tratado, se destacaría, una vez más, la personalidad de Juanicó, de ese hombre de quien decía Herrera y Obes que, durmiendo, sabía más que todos los orientales despiertos. No menos fuerte aparecería la del negociador doctor don Andrés Lamas, quien así contribuiría, él, el autor del Tratado del 51, a reparar muchos de aquellos males, ahora que había un pueblo que quería vivir en paz y desarrollar sus fuerzas y energías.

El Tratado pasó a una comisión especial, compuesta de los señores Caravia, Juanicó, Tapia, Echenique, Iturriaga, Haedo y Pagola, la cual presentó un ilustrativo dictamen. Allí nos decía, al pedir la aprobación, que el nuevo Tratado había sido «calumniado por el mismo espíritu de bandería que nos impuso las odiosas concesiones de los de 1851». Sostenía que se recuperaban «pacíficamente derechos perdidos que sería insensato el proponernos reivindicar por la guerra». Consideraba que el nuevo Tratado «podía y debía ser la base y el principio de una política completamente nueva entre el Brasil y la República, de una política que, por lo mismo de cifrarse en recíprocas ventajas,

será la más sólida garantía de lealtad para ambos, tanto en el presente como en el futuro». Afirmaba que «ése, y no otro, sería el modo eficaz de hacer desaparecer los recelos que inspiran las tendencias tradicionales del vecino Imperio sobre nuestro territorio, y la expansión que en él han tomado la población y los intereses brasileiros en lucha con los nuestros. La situación creada a la industria y al comercio por los Tratados del 51, sobre todo después de reducir el Imperio en la mitad, la ventaja que la tarifa de aquella época ofrecía a la exportación de nuestros productos por la frontera terrestre, es, a todas luces, onerosa, leonina, e insoportablemente onerosa». Por consiguiente, era «necesario poner término a ella, bien por un arreglo constitucional, o por un conflicto entre los dos países». El Tratado era, según la Comisión lo decía, la solución pacífica y equitativa de aquella necesidad. La Comisión tenía una palabra para «la grito que en oposición a él levantó la Prensa demagoga, al sostener que el Tratado *había sido hecho para matar el hambre de los negros del Brasil* y para establecer en la República, con sacrificio de todos sus habitantes, un mercado privilegiado en favor de los productos del Brasil». Las ventajas del nuevo Tratado estaban explicadas de esta manera: «Pero la verdad del caso es que, a la par que se establece la absoluta exención de impuestos en el Brasil para *todos los productos animales* de la República, y una *disminución progresiva* para sus productos *agrícolas y naturales*, no se nos exige más obligación nueva, que la de igual *disminución progresiva* a favor de los productos brasileiros de la misma naturaleza; esto es, a favor precisamente de artículos de primera necesidad, a favor de artículos alimenticios que principalmente consumen nuestras clases pobres y trabajadoras». De aquí deducía la Comisión que por «las exenciones que se obtenían se favorecía inmensamente a nuestra industria».

Después de estas consideraciones generales, la Comisión llamaba «la más seria atención de la Cámara sobre la influencia que, asegurado una vez el orden público, pueden tener las estipulaciones del Tratado, y la política que él inicia en la cuestión de inmigración». En este sentido se creía que el Tratado se hallaba penetrado del espíritu de dar *ocupación lucrativa y alimento abundante y barato* a la población menesterosa.

En el dicho dictamen se estudiaban las dos objeciones fundamentales hechas al Tratado: la de si la *exención era privilegiada y exclusiva*, y la de si la dignidad nacional estaba ajada en lo relativo a la navegación del río Yaguarón y de la laguna Merín.

Demostraba que la exención era privilegiada y exclusiva para los productos del ganado oriental al abolirse en el Brasil los impuestos de importación y de consumo, la cual subsistiría durante el plazo del Tratado, como resultaba de la nota del doctor Lamas al Gobierno brasileño, de 5 de octubre.

Al ocuparse de lo relativo «a la objetada *indignidad* del reconocimiento hecho *en principio* y por *concesión* del Brasil, de la mutua conveniencia de abrir a la bandera de la República la navegación de la laguna Merín y del Yaguarón, la Comisión creía que debían cargar con toda la culpa de esa *indignidad* los fautores y sostenedores de la doctrina de los hechos consumados en 1852; que debían cargar con ella los que (1) hallándose a la cabeza de toda la fuerza armada del país, y en medio de las angustias de la República que se esforzaba por levantarse de la postración en que la había sumido la lucha de los Nueve Años, confesaban, en pleno Senado, hallarse prontos a debelar las autoridades constituídas de la nación, poniéndose al frente de una revolución en sostenimiento de todas las *indignidades* que se le imponían».

La Comisión declaraba que «la pérdida de nuestros derechos a la comunidad de las aguas fronterizas con el Brasil había venido a ser, por desgracia, un *hecho consumado*, convertido en *derecho* para el Imperio». No era posible pensar en conseguir por la fuerza de las armas ni mediante la *vieja política de antagonismo* cambiar las cosas, pero que se obtenía «bajo los auspicios de la *política económica y comercial*, que es el áncora de la esperanza para esta República, y que felizmente se inicia por el Tratado».

Ese reconocimiento, *en principio*, de la comunidad de las aguas, se hacía resaltar en el protocolo de 5 de octubre pasado, remitido por el ministro de Relaciones Exteriores a la Comisión, el cual, es de lamentarse, no aparece publicado en el Diario de Sesiones.

Y, por último, la Comisión concluía exponiendo que cumplía con reproducir las apreciaciones contenidas en la extensa nota de remisión del plenipotenciario oriental, que encontraba perfectamente exactas y fundadas, y que recomendaba al estudio de esta Honorable Cámara, la cual tampoco aparece allí publicada.

La Comisión creía, y con fundamento, que reconocido *en principio* ese derecho de los ribereños, muy pronto, en el Reglamento que se establecería, según allí se indicaba, se llevaría a la práctica, convirtiéndose el *principio* en un *hecho* indiscutible. Se fundaba, para abrigar esa esperanza, que sólo sería una realidad después de medio siglo, cuando la paz se radicara, y eso mismo con ciertas alternativas, en que «la República y el Imperio—decía—han establecido los mencionados principios en un protocolo firmado el 15 de septiembre último, y aprobado por ambos Gobiernos, al fijar las bases para los reglamentos de la *navegación común* del río Uruguay».

LA NUEVA POLÍTICA

Este dictamen indudablemente que estaba redactado por el doctor Juanicó, miembro informante, sobre lo fundamental, aunque sobre

(1) Debiera decirse: *quienes*.

un punto determinado debía hacerlo el señor Tapia, quien no pudo llenar su misión debido a una desgracia de familia.

Después de su lectura, en la cual había habido, como se ve, saña honda e injusta contra los adversarios, usó de la palabra el doctor Juanicó, alma de la discusión. Comenzó por un recuerdo al Tratado del 51, diciendo que la historia juzgaría quiénes eran los culpables de él.

Y la historia dice ahora, imparcialmente, que él fué la obra de las malas pasiones de todos los orientales, gustosos de vivir en riñas constantes, en vez de buscar en los medios conciliatorios la solución de sus cuestiones internas, por sí mismos, y sin ayuda de extraños.

Atribuía al Tratado del 51 la falta de industria saladeril en el país, haciendo que la poseyese exclusivamente la provincia de Río Grande. ¿Por qué? Porque el territorio oriental servía de engorde a los semovientes de los ganaderos brasileños, quienes llevaban sus animales a Río Grande sin pagar derecho alguno. Esto se agravaba con la mutación de la tarifa del Imperio, muy especialmente sobre los artículos de industria nacional. De aquí que sostuviera que no había que pensar en saladeros en esta República, bajo el régimen de esa tarifa, y mientras existiera la estipulación del año 51. «Y si no hay que pensar en saladeros, puede decirse que no hay que pensar en un comercio serio y abundante. Como ahora existe, vendría a resultar que la República Oriental no ha de servir sino para el pastoreo de los ganados que han de servir a la industria del Imperio del Brasil.

Daba a conocer el origen del nuevo Tratado. Cuando el Imperio modificó la tarifa, el Gobierno oriental ordenó a su plenipotenciario Lamas denunciara el Tratado del 51, que fenecía el 61. El Brasil se alarmó, pues ello perjudicaba los intereses de los ganaderos brasileños. De aquí resultó el nuevo convenio. «El resultado, a juicio de la Comisión en cuyo nombre tengo el honor de hablar—decía Juanicó,—ha sido como no era de esperarse; ha sido magnífico, altamente ventajoso para los intereses de la nación».

Tuvo clarovidencia cuando recordó la vieja política portuguesa pre-ocupada de la absorción del territorio, de cuya política era *leader* el marqués del Paraná, la cual, desgraciadamente, tenía herederos en el Brasil. Entonces dijo: «Y si esa política ha de continuar, ¡ay de la República! ¡de la República desunida, de la República débil, de la República reducida a qué medios? ¿a qué acción? en la desavenencia de sus hijos!» Preveía que el Imperio no necesitaba, siguiéndose bajo ese pie y continuando la lucha de partidos como hasta aquí, como desgraciadamente hemos visto, de grandes esfuerzos para irse prácticamente haciéndose dueño de este país».

Pero luego, cuando recordaba la actitud de Don Pedro II, en frente de esa política vieja, se erguía entusiasmado, y exclamaba: «¡Gracias a su monarca, hombre ilustrado; gracias a su monarca que no la

ha dejado aparecer en sus consecuencias inmediatas, esas tendencias !
¡ Gracias a su monarca, bajo cuyos auspicios se inicia un Tratado de una naturaleza ya completamente distinta ! »

No menos llamativo era todo aquello referente a la producción de ambos países, el uno de zona tropical, y el otro de zona templada, lo que los atraía, convirtiéndolos en *mercados recíprocos*. Esto, según él, era « un hecho marcado por *la mano de Dios* que la ha impuesto en las otras de su naturaleza ». Aquella frase de *últimas modificaciones*, usada al aprobar los Tratados del 51, la traía a colación para demostrar que en su tiempo importó decir que « había otro medio, otra base de relaciones posibles entre la República y el Brasil » ; que éste había sido el pensamiento de esas palabras *últimas modificaciones*, de que era una muestra la conveniencia de que se trata ».

Muy novedosa fué aquella revelación sobre de quién había partido el pensamiento de la revisión del Tratado. Con este motivo recordó que el motín militar del 53 todo lo había impedido, pero que después de consumado « fué por primera vez comunicado el pensamiento al Gobierno de San Cristóbal, que lo miró como una patraña. El individuo, decía, « que fué encargado de comunicar ese pensamiento, fué recibido con desprecio, porque se creía que se iba a comunicar, a aparentar cosas en que real y verdaderamente no se pensaba ; que se trataba de adular a aquel Gobierno. Sin embargo, con posterioridad, en el tiempo mismo del general Flores, se dió orden al plenipotenciario oriental para entablar la negociación de un Tratado de esta naturaleza. Esa negociación, al fin vino a ser resuelta y a tomar la faz que hoy tiene, a fines del año 57 ».

He hecho esta indicación, decía, « porque creen algunos que el pensamiento de este Tratado tiene su origen allá en el Brasil, y que es una nueva red con que se nos quiere envolver. No ; el pensamiento nació aquí, nació de parte de los mismos que se oponían con todas sus fuerzas hasta donde pudieran alcanzar ». ¡ No hay que equivocarse : el pensamiento es oriental, no es brasileiro ! Ese pensamiento iba recto a desenvolver el comercio « en lugar de gritar miserablemente contra el Imperio ». La política que se iniciaba era « la política económica, la política comercial, en lugar de la política de predominio ». Le parecía admirable que los políticos no se hubieran « fijado en esos hechos capitales fijados por *la mano de Dios mismo* ».

Estaba convencidísimo que todo lo que se hacía « traía consigo una relación comercial íntima, grandísima, de primer orden ». Y entonces se decía : « ¿ Seremos tan míseros que no hayamos de ser dignos de lo que *la mano de Dios* nos da (1), que no seamos nosotros los que haya-

(1) Esta *mano de Dios*, tan repetida, nos recuerda aquel *dedo de Dios* de que hablaba el padre Castañeda cuando el general Rivera invadió las misiones, en 1828.

Al respecto puede verse mi libro *El general Rivera y la campaña de Misiones, de 1828*.

mos de aprovechar lo que la Naturaleza nos brinda? ¿Por qué? Por esas ciegas prevenciones. Fiémonos en la naturaleza misma de las cosas; a ese poder tan grande del interés, que es superior a las combinaciones de la política, que domina todas las tendencias de los Gobiernos. El día que el hombre, que el industrial, que el particular, que cualquier jornalero de esta República y del Brasil vea su interés en la paz, en las relaciones comerciales... se acabó, no tenemos nada que temer del Brasil. Juzgar de otro modo, es juzgar como niños o como locos. ¿Tememos las tendencias del Brasil? El medio de arrostrarlas es hacernos ricos, poderosos, y no permanecer débiles y miserables. En la miseria de los pueblos no hemos de encontrar los medios de recuperar los derechos perdidos; no iremos sino de más a más decayendo hasta perder nuestra nacionalidad tal vez, por grandes y heroicos que sean los esfuerzos que se hicieren en contra. Digo, pues, que ésa es la cuestión que está a resolver en el Tratado sometido a la consideración de la Cámara».

Cuando se leen pensamientos políticos de tanta trascendencia, no se explica cómo esos mismos hombres cometerían luego errores tan graves hasta arrastrarlos al abismo, como se verá más adelante en las páginas de este libro. Estaban poseídos de una idea grande, cual de acercar los intereses del Brasil y de la República, para de ahí arrancar una gran política nacional fijada *¡por la mano de Dios!* Y todo lo olvidaron en la hora suprema, atrayéndose la enemistad de ese Imperio, la del Estado de Buenos Aires, y la indiferencia de la Confederación Argentina.

El Tratado nuevo, del cual tantos bienes esperaba Juanicó, exagerando las cosas, porque así era su naturaleza olímpica, imponía la obligación de «la exención del tres por ciento de derechos a los artículos de producción agrícola brasileña en nuestros mercados, en el primer año, y uno por ciento más en los años sucesivos, hasta la conclusión del Tratado, es decir, hasta el seis por ciento». Y esto le daba base al doctor Juanicó para hablarnos de la población, de la inmigración, del pueblo que paga los impuestos, de las materias alimenticias. Esto le traía a la memoria aquello de que un ministro inglés, o norteamericano, o francés, se dejaría cortar la mano antes que firmar un proyecto que significase aumento de impuesto en materias alimenticias». Esta era la única obligación nueva del Tratado, beneficiosa para la gente trabajadora.

Terminada por el doctor Juanicó su sesuda exposición, el ilustrado doctor Arrascaeta hizo uso de la palabra para recordarnos su actitud periodística en 1852, cuando atacó los Tratados del 51. Entonces lamentaba «se diese pábulo a las pasiones tan desarrolladas a causa de las guerras existentes en la República y se fomentasen esas prevenciones tradicionales, en vez de depositar en los Tratados una semilla de paz, de progreso, de instituciones y de humanidad». Pues ese espí-

ritu amplio era el que el orador veía que flotaba en el nuevo Tratado. «Es un espíritu nuevo—decía,—bajo cualquier punto de vista que se considere : ya sea bajo el punto de vista político, ya sea bajo el punto de vista histórico, ya sea bajo el punto de vista económico.» Lo apoyaba, reservándose estudiar, en la discusión particular, lo relativo «a la permanencia de la exención que hacía el Brasil de los impuestos de consumo a nuestras carnes en el Imperio, y el que se refería a la laguna Merín.

EL ESPÍRITU OPORTUNISTA DE LOS LEGISLADORES

Al iniciarse la discusión particular, se leyó, por moción del señor Aguirre, la nota con que el doctor Lamas acompañaba el Tratado, la cual, desgraciadamente, no está en el Diario de Sesiones.

El señor Caravia expuso consideraciones muy atinadas. Demostró que las estipulaciones contenidas en los tres primeros artículos del nuevo Tratado no hacían innovación a lo establecido en el artículo 4.º del de 1851. En ambos se mantenía la exención de derechos, en el Brasil, a los ganados orientales introducidos por la frontera terrestre de Río Grande, y la abolición del derecho de exportación a los productos de la misma especie al salir del Uruguay por esa frontera. Esto no era una novedad. Lo era, sí, el hacerla extensiva ahora a los que se introdujesen directamente de nuestros puertos a los puertos diversos del Brasil, o por la frontera terrestre limítrofe con el Imperio. El señor Caravia, llevado del optimismo reinante, del cual era portavoz el doctor Juanicó, creía que bastaba esta innovación para competir con ventaja con los saladeros del Estado vecino.

De igual opinión participaba el señor Fuentes, llegando hasta sostener que «los productos animales del Uruguay venían a quedar en mejor posición aún que los productos animales de la provincia del Río Grande».

Por su parte, el doctor Palomeque, al estudiar este punto de la exención de los derechos, agregó otras consideraciones, sosteniendo que los productos animales de la provincia del Río Grande tenían un recargo de un siete y un tres por ciento ; un tres, si se exportan para algunas de las provincias del Brasil, y un siete si fuesen para el exterior o puertos extranjeros».

De aquí deducía, como los señores Caravia y Fuentes, que nuestras carnes venían a quedar en mejor condición que las mismas del Brasil.

«Pero—decía—no es ésa la concesión ventajosa que envuelven los artículos señalados. Los demás productos animales, los cueros, por ejemplo, según la tarifa que acaba de leerse, tienen un 30 % los nuestros ; los del Brasil tienen un derecho provincial también, que no deja de ser fuerte. Exportándose esos frutos del Brasil para el Estado Oriental, resulta que entran a la República sin derecho alguno, y salen de

la República para los puertos extranjeros, sin derecho alguno. Consecuencia de esto : que el país viene inmediatamente a encontrarse con un doble movimiento en su comercio, porque la afluencia de esos frutos será mayor.» Esto en cuanto a los frutos, pues en cuanto al ganado en pie sostenía lo siguiente : «Si las carnes del Brasil tienen un 7 % de derechos, y las de la República Oriental no tienen ninguno, es claro que los saladeristas de la provincia del Río Grande preferirían venir a establecer sus saladeros en la República Oriental antes de conservarlos en la provincia de Río Grande. Sus carnes, desde que hay ventajas para ellos en beneficiarlas en la República Oriental, estarían equiparadas con las nuestras y harán el mismo negocio». Esto era sin dejar de tener en cuenta «la concurrencia fuerte a nuestra plaza, desde que los saladeros de los países vecinos o limítrofes—decía—se encuentran en el mismo caso que en el nuestro» (1).

El doctor Juanicó creyó conveniente acentuar más aún el pensamiento, y volvió a usar de la palabra para afirmar que «el punto capital era asegurar a la República la compensación de los ganados que salían en pie, sin pagar derecho de ninguna naturaleza».

Como se ve, no había un solo opositor. Por eso el doctor Juanicó lamentaba que «los grandes opositores a este Tratado—decía—no se hallen presentes, porque tengo la convicción, convicción profunda, hija de la meditación muy seria, porque aquí no se trata de intereses particulares, de intereses bastardos de ninguna naturaleza ; la convicción profunda, decía, de que podríamos vencer en la discusión las objeciones, no digo éstas, sino todas las objeciones que pudiesen imaginarse».

NAVEGACIÓN DE LA LAGUNA MERÍN Y RÍO YAGUARÓN

El Tratado contenía algo muy fundamental para el país, lo relativo a la navegación de la laguna Merín y río Yaguarón.

Cuando llegó el momento de estudiar este punto, el doctor Palomeque fué encargado por la Comisión para que lo ilustrase, a causa de hallarse ausente el miembro que debiera hacerlo.

El doctor Palomeque aceptó con placer el mandato, y lo desempeñó con la ilustración debida, aunque con demasiado calor del alma.

Aprovechó la ocasión para contestar las apreciaciones que en la Cámara y en la Prensa se habían vertido sobre los Tratados del 51. «Es indudable—decía—que el Tratado de 1851 ha servido de arma venenosa para los enemigos del país. Es indudable también que pareciendo poco maldecir a los negociadores de ese Tratado, se ocuparon de sus modificaciones. Los Tratados de 1851 no pueden examinarse económicamente. Si así se hiciese, sería extraviarse, sería desconocer

(1) Sesión del 1.º de julio de 1858.

la situación desgraciada en que se encontraba la República bajo el peso de momentos infaustos y de recuerdos muy tristes. Los Tratados de 1851 no tienen más que una faz : mirarlos por el lado político, por el lado de la necesidad, del deber. Esos Tratados no produjeron mal : han traído en pos de sí, y en cambio de ellos, ventajas incalculables para la República. Los Tratados de 1851 dieron el resultado de que la familia oriental se viese un día reunida, abandonando sus extravíos y pensando en el futuro. Los Tratados de 1851 vinieron a cegar un lago de sangre que existía entre los de allá y los de acá, donde navegaban los odios, las venganzas, las miserias. En ese lago se encontraba la tempestad que debía hacer fracasar la libertad e independencia de la República.

El doctor Palomeque conocía a fondo el asunto. Estaba en el secreto de cuanto se había actuado, y sabía que allí había no *un* negociador, sino *negociadores*. Por eso empleaba esta expresión, así, en plural. No era solamente el doctor Lamas el autor material del Tratado, sino el doctor Herrera y Obes, como resulta de la correspondencia privada de esos dos grandes hombres. En las *Instrucciones* que el Gobierno de la Defensa dió a Lamas, en 1847, le decía que se «*rigiera por la Memoria* que se le acompañaba». En septiembre 9 de 1851, Herrera y Obes le escribía a Lamas recomendándole «a Vuestra Excelencia—decía—que inste y acelere lo más posible por la celebración de aquellos convenios. Si estos momentos se dejan pasar, difícilmente será después que se consiga. Antes de ahora ya he dicho a Vuestra Excelencia que a cambio de asegurar al país los bienes que de tales convenios deben resultarle, el Gobierno hará todas las concesiones que el honor, la dignidad y los intereses de la República le permitan. Por consiguiente, *la cuestión de límites no debe embarazar a Vuestra Excelencia*. Esa dificultad, fácil será vencerla, haciendo uso Vuestra Excelencia de su habilidad e influjo».

Herrera y Obes le decía que *urgían esos convenios, siendo ellos el principal objeto de su misión*. No estaba contento con «salvar hoy a la República de la ambición y feroz tiranía del gobernador de Buenos Aires, si mañana ha de ser presa—decía—de la anarquía, que será tanto más voraz cuanto que estará armada con las brutales pasiones a que han dado tanta energía las dictaduras de don Juan Manuel Rosas y don Manuel Oribe. La paz interna y externa, como medio de orden, de seguridad, de libertad, de progreso y poder, sin el que toda independencia es quimérica, es la principal necesidad de nuestro país, y el principal interés de la nueva situación en que va a entrar. Pero, esa paz no es posible contar con que la tendremos, abandonándola a nuestros solos elementos. Ellos siempre le fueron contrarios. Hoy que los poderosos resortes de la moral, del bienestar individual y de los hábitos laboriosos han sido despedazados y destruídos, para crear con sus ruinas el asiento de ese monstruoso poder que yerma ha más de 45

años a los pueblos de la otra ribera del Plata, y que por más de ocho años y medio ha sido la vida del nuestro : aquellos elementos han adquirido fuerzas incomensurables. El bien inapreciable de la paz, reducido el país a lo que le queda, no puede traérselo sino las alianzas que contraiga con Poderes que tengan en ello su interés. Entre esos Poderes ninguno lo tiene mayor que el Brasil ; ésa es, pues, para nosotros, la alianza que más nos conviene. Con ella fácilmente obtendremos otras, que darán más fortaleza a las ventajas que nos proporcionen».

Con esta convicción, el doctor Herrera y Obes quería «aprovechar la feliz oportunidad que presentaban los acontecimientos y la posición e influencia de los hombres que, decía, «tanto en ésa y en ésta, como en Entre Ríos y Corrientes, se hallan al frente de los negocios públicos», por lo que recomendaba aquélla a Lamas (1).

No iba, pues, descaminado el doctor Palomeque cuando hablaba de *negociadores*. Y mucho menos cuando sostenía que esos Tratados no habían tenido sino una faz política, la fundamental, por más que el sentido económico estuviera comprendido en ella. En esa carta del doctor Herrera y Obes está el móvil secreto de esos convenios. Ya la alianza no era necesaria para derrocar a Rosas y a Oribe ; se necesitaba para contener a esos elementos indóciles, indisciplinados, que habían nacido de la situación crítica por que se atravesaba. La Historia estaba ahí, y lo estaría, para demostrar cuán rebelde era el espíritu de los orientales a las ideas de orden y de progreso. Los Tratados tenían esa base interna. Los sucesos que luego se desarrollaron dieron la razón a los *negociadores*. Ya hemos visto cómo los hombres de todos los partidos habían hociicado con la *alianza brasileña*, consecuencia forzosa de las calaveradas políticas.

El doctor Palomeque ejercitaba un acto de valor cívico al proclamar aquello frente al *leader* de la mayoría de la Cámara, el doctor Juanicó, quien acababa de expresarse en términos completamente contrarios. Uno de los pocos ciudadanos de la Defensa que tomaba asiento en aquel recinto era el doctor Palomeque. No pudo, pues, permanecer silencioso ante las afirmaciones que se hacían en el dictamen de la Comisión, ratificadas en las palabras pronunciadas por el señor miembro informante, doctor Juanicó. Es verdad que éste, con arte diplomática, las había suavizado apelando a la Historia. Otro tanto, imitándole, hacía el doctor Palomeque. «Es a la Historia a la que corresponde juzgarlos, pero no a la contemporánea. Es allá, decía, «donde se ha de juzgar a los Rivera, a los Oribe y a los Lavalleja. Es allá entonces que la soberanía de los pueblos ha de decir a quién le corresponde car-

(1) Copia de la nota dirigida a Lamas en 9 de septiembre de 1851, en mi archivo, cuyo original debe hallarse en el *Archivo Histórico Nacional*. Véase, además, en la *Correspondencia diplomática*, tomo III.

gar con la maldición y los perjuicios traídos por los Tratados de 1851. Releaguémoslos para entonces».

De una manera enérgica, aunque criticable, maltrató al doctor don Juan Carlos Gómez, quien, con su pluma brava, no había dejado títire con cabeza al ocuparse del asunto en los artículos diarios. El doctor Palomeque llegó al extremo de calificarle de «hijo desnaturalizado de la sociedad, un mercenario, un aventurero político». Iba más lejos que Juanicó cuando éste, en el dictamen, lo calificaba de *demagogo*. Dijo aquello con motivo del ataque de Gómez al Tratado del 51, que lo consideraba nulo. Entonces demostró el doctor Palomeque, y en esto sí con sobrado fundamento, que nuestros límites, al constituirnos en nación independiente, no habían sido sino los de la Provincia Cisplatina de 1821. Y éstos fueron los reconocidos en el Tratado del 51, como lo había sostenido Rivera en 1828, en el célebre convenio conocido en la Historia bajo el nombre de Irebe-Asubá (1).

Hablamos con frecuencia de la nulidad de esos Tratados, pero, en el fondo, no hemos alegado una sola razón en contra de ellos. Nuestros límites no pasaban, por el Norte, del Cuarcim, hasta la cuchilla de Santa Ana, que divide el río Santa María; y por esta parte, el arroyo Tacuarembó Grande, que, siguiendo hasta las puntas del Yaguarón, entra en la laguna Merín, y pasa el puntal de San Miguel a tomar el Chuy que desemboca en el Océano. Esto fué lo reconocido en 1851, en el artículo 4.º del Tratado.

Sostenido esto, el doctor Palomeque hacía otra afirmación importante, cual era, que si algún derecho tuvo la República a la navegación del lago Merín (2) y del Yaguarón, ese derecho desaparecía completamente por el citado artículo 4.º del Tratado de límites de 1851.

Observaba, además, que «en el hecho eso no existía antes de 1851; que la navegación en común jamás había existido para la República Oriental».

Esta afirmación categórica nadie la negó en la Cámara. Por el contrario, el doctor Juanicó la confirmó, cuando en seguida sintió la necesidad de hablar, para manifestar, de una manera olímpica, como él solía y sabía hacerlo, aunque con diplomacia, su disconformidad con las manifestaciones de un orden político que el doctor Palomeque se había visto obligado a hacer, dado lo que el doctor Juanicó había expresado en su informe y en sus discursos. Era lo menos que el doctor Palomeque podía decir, ante el coloso parlamentario, dentro de aquella Cámara adversa y partidaria, aunque compuesta de ciudadanos que supieron llenar su misión de legisladores honestos y prácticos.

(1) Véase mi libro *El general Rivera y la Campaña de Misiones en 1823*.

(2) El doctor Palomeque decía *Mini*.

Andando los años este tratado se modificó, reconociéndose *de hecho el principio proclamado*. Así lo sostuve en mi tesis al recibir mi título de doctor y en mi librito *La jurisdicción del Plata*.

Ahora bien, el doctor Palomeque hizo resaltar, en esta parte, que consideraba «la más grave», los esfuerzos del doctor Lamas para «poder alcanzar en beneficio de la República lo que el Tratado de 1851 había hecho desaparecer». Y, al ocuparse de esto, daba a conocer un antecedente muy importante, que levanta la personalidad del doctor Lamas. Es conveniente dejarlo aquí consignado. Cuando en 1851 se «enviaba a Montevideo ese Tratado de límites, y se ocupaban en esta ciudad de su ratificación, el negociador oriental, en previsión de todas las conveniencias que la situación del país había de reclamar más adelante, pasó una nota al Gobierno de San Cristóbal, con fecha 5 de diciembre, exigiéndole que, no obstante el derecho adquirido por el Gobierno de Su Majestad Imperial a consecuencia del Tratado de octubre del mismo año, la nación oriental no podía prescindir de los derechos que le asistían para modificar esa condición. Sobre ese punto, el negociador oriental no economizó ni la ciencia, ni las horas. Empleó cuanto estaba a su alcance para poder obtener del Gabinete imperial lo que solamente debido a su habilidad y patriotismo—porque sólo así se puede explicar—y obtuvo el Gabinete imperial la declaración que el diplomático exigía: que la laguna Merín y el río Yaguarón serían navegables en común para ambas banderas; pero que esa condición quedaría sujeta a una modificación que sufriría el Tratado en época oportuna. En 31 de diciembre el Gabinete imperial dió esa contestación al negociador: contestación que se transmitió al Gobierno de la República, por lo que pudo obtenerse esa ventaja cuatro años hace. Si la República no se vió en posesión antes de ahora de esos derechos perdidos por el Tratado de 1851, no es la culpa ni del Gobierno que inició esos Tratados, ni del negociador que se ocupó de ellos. Estos hechos están consignados en el Relatorio del Imperio; consignados de una manera muy clara y muy terminante; nadie puede dudar de ellos».

Cuando el doctor Juanicó habló, declaró que Lamas, en 1851, «forzado por las circunstancias, hizo un bien en materia de límites; que lo que está, sígase poseyendo como se está poseyendo», eran sus palabras. Volvió a declarar que los Tratados del 51 no eran sino la expresión de la vieja política portuguesa, mientras que el actual en discusión era la política nueva; cosa muy discutible a estar a los términos de ambos Tratados. Lo único que podía sostenerse era que cada uno respondía a las *circunstancias*, marchándose siempre hacia adelante en la vida evolutiva de aproximar pueblos tradicionalmente separados por sus costumbres, su idioma, y su forma de Gobierno. El tiempo haría andar el buen pensamiento. Lo que en 1851 se pretendía por Lamas, y se consignó en documentos emanados del Imperio, recién se establecía, en el papel, en 1857. Y lo que en el papel se puso, sólo en el papel quedó, no obstante las ilusiones de Palomeque, Juanicó, Arrascaeta y el mismo Lamas, de creer que el condominio de aquellas

aguas sería un hecho una vez que la República reglamentase con el Imperio la navegación del río Uruguay y sus afluentes, teniendo por base siempre los principios reconocidos por el Congreso de Viena.

Consideraban inmediata la navegación, sin necesidad de nuevos convenios, una vez que se arreglara lo del río Uruguay, fundados «en que no sería posible aplicar el gran principio a una localidad y negarlo a otra, con iguales condiciones». De manera que si mañana, continuaba agregando el doctor Palomeque, «(lo que no está muy distante de que vea la República), los reglamentos que han de servir de base para la navegación del río Uruguay, se ponen en ejecución, está inmediatamente en planta la navegación de la laguna Mini y del río Yaguarón» (1).

El doctor Juanicó, después de cargarle la mano a los Tratados del 51, y de elogiar al monarca Don Pedro II por la nueva política que, según él, iniciaba, reconoció que «la España nunca navegó en aquellas aguas, y, de hecho, la navegación pertenece al Imperio. Las costas, las riberas del Yaguarón y de la laguna, no estaban pobladas en tiempo de la Corona española». Reconocía que «se encontraba en posesión exclusiva de la bandera imperial». De este hecho arrancaron su derecho; pero que lo que hoy reconocían a la República era *«merced a la insistencia del plenipotenciario oriental»*.

¡Al fin se le hacía justicia al doctor Lamas! Mientras voces apasionadas se han levantado para atacar a esta personalidad, nadie ha ido a estudiar nuestros anales legislativos, con verdadera imparcialidad, para traer a colación la afirmación categórica del doctor Juanicó, de que era un triunfo exclusivo de la *insistencia* de Lamas, el reconocimiento que el Imperio hacía, en el papel, en 1857, del *principio* del condominio de las aguas ribereñas, no obstante la declaración de aquel orador de «no haber nunca flameado la bandera oriental en aquellas aguas».

Esta declaración la hacía Juanicó después de oír la exposición del doctor Palomeque, de que desde 1851 ya Lamas había conseguido que ese *principio* se reconociera al celebrarse el Tratado de límites de ese año. Era de ahí de donde surgía ese reconocimiento que ahora se hacía por segunda vez, en el papel, en 1857. Tenía razón, pues, el doctor Palomeque cuando decía que no era el negociador el culpable de que en 1853 no se hubiera así consignado, al ratificarse los Tratados con aquella cláusula: «en la esperanza de ulteriores modificaciones».

El doctor Juanicó seguía la corriente de ideas del doctor Palomeque, cuando decía: «El señor diputado que acaba de hablar, en defecto del miembro informante de la Comisión, ha dicho perfectamente que, como se halla establecida la cuestión entre el Imperio y la República, el punto sobre el derecho de navegar la bandera oriental en

(1) Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, tomo iv, pág. 125.

el Yaguarón, y la laguna Merín, se halla íntima e inseparablemente ligado al derecho de navegar la bandera imperial en las aguas del Uruguay y afluentes de este río pertenecientes a la República».

Esta ilusión del doctor Juanicó le llevaba hasta sostener, con todo candor, que «mientras el Brasil no nos reconozca los mismos derechos relativamente a las aguas fronterizas del Yaguarón y la laguna Merín, que viene a pedirnos relativamente al Uruguay, no tenemos obligación de reconocerle eso mismo que nos pide relativamente al Uruguay».

Era un error candoroso. La libertad de navegación en el Uruguay había sido uno de los propósitos fundamentales de la guerra con Rosas. La prueba era, que en seguida de terminarse esa dictadura sangrienta, Urquiza y el Paraguay se entendieron con el Brasil. El río Uruguay pertenecía a la Argentina y al Uruguay, y la condómina imponía la ley de la libertad de los ríos. El Yaguarón y Merín estaban en otras condiciones. No se habían tenido en cuenta para aquella lucha. De ahí que esos sueños candorosos nunca los vieran realizados los hombres de aquella generación. El Tratado del 57 se aprobaría, y el principio reconocido nunca sería un hecho real durante esa «nueva política» tan aplaudida por Juanicó, que decía era contraria a la vetusta del Portugal, condenada por el ilustrado monarca a quien tanto elogiaba. Más de medio siglo transcurriría, aun después de otorgarse al Imperio la navegación del Uruguay, y recién entonces, por una *concesión*, el Brasil, ya República, reconocería nuestro derecho como ribereño (1).

¡ La *insistencia* del doctor Lamas recién sería una verdad en 1912 !

Pero, no fué sólo el doctor Juanicó quien terció en este interesante debate. Allí apareció la simpática figura del doctor Arrascaeta, quien rectificó algo de lo afirmado por el doctor Palomeque, sosteniendo que en 1851 el Gobierno imperial no quiso reconocer el principio por el cual pugnaba Lamas. Afirmó que lo que constaba en el Relatorio era que Lamas así lo exigió, pero que el vizconde de Paraná se resistió a que se consignase en la Convención de mayo, *asegurando que su negativa* (la del vizconde de Paraná) *no significaría o no importaría una negativa por parte del Gobierno imperial*». Por consiguiente, decía, el doctor Arrascaeta, queda al abrigo el Gobierno de esa época, según el mismo Relatorio, del cargo de no haber obtenido ya la declaración de ese principio». Por lo demás, el doctor Arrascaeta sostenía un indiscutible principio de derecho internacional, de buen sentido común, que «aun el reconocimiento hecho en el Tratado de 1851 de la posesión en la navegación de un lago interior, no importaba el desistimiento del derecho del ribereño en la navegación de ese lago».

Estas observaciones dieron motivo para que el doctor Palomeque

(1) Véase *La Jurisdicción del Plata*, por Alberto Palomeque.

fuera más explícito en sus declaraciones anteriores. Sostuvo que a requisición del «plenipotenciario oriental, previsor e infatigable servidor de la patria», el Gabinete imperial había contestado en 31 de diciembre de 1851: «que reconociendo su perfecto derecho, el Imperio no estaba distante de hacer esa modificación al Tratado, y que esa declaración importaba un otrosí, o más bien una declaración auténtica del Tratado de Octubre; cuya declaración el plenipotenciario oriental mandó que se consignase en el protocolo, para que, llegada la oportunidad, se tuviese presente tal concesión y se hiciese la modificación tan importante».

El negociador oriental, decía el doctor Palomeque, comunicó al Gobierno de la República tamaña adquisición, rogándole e interesándose mucho para que en las modificaciones que estaban muy próximas a realizarse, se consignase esa importantísima concesión, que es, como he dicho otra vez, debida a la habilidad del negociador de la República, el haberla adquirido. Y aun cuando la Memoria del señor diputado es muy exacta, pues señala hasta el número de años que determiné en mi anterior informe, tal vez ha sido una equivocación de guarismos o de meses; pero, para precisar y no dar lugar a otras interpretaciones, diré que al Ministerio de 1852 fué al que le tocó la desdicha, y la poca habilidad, de no aceptar y de no consignar en las modificaciones de mayo los que había conseguido el negociador oriental, y que con tanto ahinco había recomendado al Gobierno que no dejase de tenerlas presente, porque el Brasil había declarado en su nota de 31 de mayo, que eran una declaración auténtica del Tratado del 51 respecto a la navegación de la laguna Merín y río Yaguarón».

Estas nuevas y terminantes manifestaciones del doctor Palomeque produjeron el resultado benéfico de arrancar a Juanicó esta declaración: «En este concepto, tomo, de lo que acaba de decir el señor diputado preopinante, lo que me parece que es esencialmente del caso, y es surgido de la declaración del Gobierno imperial en el año 1852, que sirvió de base para la negociación relativa a los puntos que en este momento están en discusión ante la Cámara. De ahí ha arrancado el fundamento que ha servido al negociador oriental para obtener estas importantes modificaciones del Gobierno imperial».

Con estas declaraciones honrosas para el doctor Lamas, probatorias de la *insistencia* a que antes se había referido el doctor Juanicó, se continuó la discusión de la materia, quedando aprobadas las modificaciones convenidas, que tanto honraban a sus autores.

Se había dado un paso más en el camino de acercar estos pueblos rivales.

La razón había triunfado, y ello, porque la paz dominaba, y en las altas esferas del Gobierno imperaban las ideas de concordia, de olvido de los viejos trapos, que se habían sustentado en el Tratado del 51 como único medio de fortificar la nacionalidad. Era sobre esa

base que el Imperio actuaba, siendo ella la misma que Mauá proclamaba, aun desde Londres, en 1865, en su carta a Villalva, cuando veía al país anarquizado y arrasado por la «nueva política» que tanto había ponderado el talento impulsivo del doctor Juanicó» (1).

(1) Este Tratado fué enviado al Senado. Allí, por moción del doctor don Florentino Castellanos, se aprobó, pero con un agregado, cual era, el de «considerar como parte integrante de él, el contenido de la nota de 5 de octubre pasada por el doctor Lamas al gobierno brasileño». La Cámara de Representantes no aceptó el agregado, por las muy justas consideraciones expuestas por el doctor Juanicó, por lo que la cuestión fué llevada a la Asamblea General, donde se resolvió de acuerdo con el buen sentido común. (Sesiones del Senado del 13 y 14 de julio de 1858, y sesión del 13 de julio de la Cámara de Representantes).

NEUTRALIZACIÓN DE LA REPÚBLICA

SIGNIFICADO DE LA PALABRA

El país marchaba. Ya tenía arreglada su cuestión financiera, económica y comercial, dentro de las cuales estaba comprendida la buena política, por cuya razón se había obtenido todo aquello. El arreglo de la Deuda, la instalación de Bancos y la apertura de la frontera terrestre para el comercio brasileño y nacional, aseguraban días de prosperidad. Por eso, cuando el arreglo de la Deuda se sancionó, la voz del doctor Juanicó se levantó, en esa misma sesión, para hacerse heraldo de una idea, derrotada en esos momentos en el Senado, como lo veremos, que en aquellos tiempos tuvo auras de popularidad, bajo el nombre de *la neutralización de la República*. Con la sanción de este proyecto creía el doctor Juanicó que estaba coronada la obra de la paz en la República.

¿Qué era eso de la neutralización de la República?

En 2 de enero de 1859, el doctor Lamas había firmado, en Río de Janeiro, un Tratado de alianza con el Imperio y la Confederación Argentina, en complemento de la Convención Preliminar de Paz de 27 de agosto de 1828. En él habían intervenido el doctor don José María da Silva Paranhos y Paulino José Suárez de Souza, por parte del Brasil, y el doctor don Luis José de la Peña, por la de la Confederación Argentina. Entre otras estipulaciones estaba la de que «el Imperio del Brasil y la Confederación Argentina, accediendo a los deseos de la República Oriental del Uruguay, convienen en que ella solicite que la Francia, la Inglaterra y cualquiera otra potencia fortifiquen con sus garantías las estipulaciones que se contienen en el artículo anterior». Lo que se decía en el artículo anterior (2.º) era : a) que la República no podría incorporarse, refundirse o confederarse con el Imperio, o la Confederación, o con cualquiera nación, y tampoco colocarse bajo la soberanía o protectorado de cualquiera de ellas ; b) que la República no podría disminuir por cualquier título o contrato que fuera, bajo la forma o pretexto alguno, el territorio que presentemente le pertenece.

Ahora bien, desde Lamas al Gobierno, y a los hombres de aquella situación política, todos ellos estaban locamente enamorados, no sólo de esto que ellos llamaban *neutralización*, sino de las demás estipulaciones del Tratado.

Estas otras contenían una por cierto muy importante, cual la de reconocerse que la independencia se había declarado, en 1828, de

acuerdo con la voluntad manifestada por el pueblo oriental del Uruguay.

Sin embargo, las otras sólo pueden concebirse teniendo en cuenta la situación triste del país y la necesidad absoluta de vivir en paz con los pueblos vecinos, de mayor vitalidad y recursos que la República naciente.

De ahí que se hicieran aquellas declaraciones, obligándose el Imperio y la Confederación a defender la independencia e integridad de la República en los diversos casos allí previstos (1).

Asimismo se declaraba y garantizaba a la República como «Estado absoluto y perpetuamente neutro entre el Brasil y la Confederación». De aquí que se impusieran serias obligaciones a la República. Esta no podía aliarse con el Brasil, ni la Confederación, ni con otra potencia, contra las potencias signatarias del Tratado, ni celebrar contratos de los que pudiera resultar la obligación de suministrar contra alguna de ellas, en caso de guerra, socorro de hombres, de dinero, de material o artículos bélicos. La República se obligaba también a observar y hacer observar a sus conciudadanos y habitantes, bajo penas graves y eficaces, la más estricta neutralidad en cualquier desinteligencia que pudiera tener lugar entre el Imperio y la Confederación. En caso de guerra entre estas dos naciones, el territorio de la República sería neutro, estando cerrado a sus fuerzas y a las de sus aliados y auxiliares. La República se comprometía a no apoyar la segregación de fracción alguna de los territorios del Brasil y de la Confederación Argentina, ni a la creación en ellos de Gobiernos independientes (2). Se comprometían los contratantes a no permitir que en su territorio se organizaran y auxiliaran revoluciones o conspiraciones.

El doctor Lamas remitió una nota ilustrativa del Tratado. Era tal la opinión que se había formado de lo que había tenido *la alta fortuna de firmar*, que concluía sus explanaciones diciendo al Poder Ejecutivo: «Vuestra Excelencia me dará licencia para cerrar este despacho, declarando que con el acto a que acabo de asociar mi nombre, juzgo terminada la obra a que me había consagrado, conservando la posición que por tan largos años he ocupado en la Corte del Brasil; que mi más íntimo deseo es que tal acto cierre mi carrera pública».

El Poder Ejecutivo, por su parte, declaraba su mayor satisfacción al ver que el negociado había «secundado de una manera inteligente y elevada uno de los pensamientos que han llamado su preferente atención»; y, en su virtud, agradecía «al señor Lamas, en nombre del Gobierno de la República, el nuevo e importante servicio que ha pres-

(1) La verdad era que esto estaba dicho, en cuanto al Brasil, en los artículos 1.º y 2.º del tratado de alianza *perpetua* del 12 de octubre de 1851.

(2) Esta pretensión era vieja en el Imperio y en la Argentina. Véanse mis libros *Orígenes de la diplomacia argentina* y *El general Rivera y la campaña de Misiones en 1828*.

tado al país». Esto lo consignaba el Poder Ejecutivo al pie de la nota del negociador, mandando se elevara todo ello a la Asamblea para su aprobación.

LA DIALÉCTICA PUNZANTE DE LAMAS

Merece que la Historia conozca mucho de lo que el doctor Lamas expuso en su ilustrativa nota. Con verdadero entusiasmo se leen aquellos párrafos en que reivindica para los orientales el derecho de haber realmente fundado su patria. Al celebrar este Tratado, que tenía su raíz en la Convención Preliminar de 1828, había conseguido la declaración de que esto estaba «de acuerdo con la voluntad manifestada por el pueblo oriental». Esto le daba motivo para decirnos que «el Brasil y la Confederación habían hecho hidalgamente la reparación de un vacío dolorosísimo para todos los orientales, que encerraba la Convención de 1828. En ella se estipulaba por la sola voluntad y el interés de las Altas Partes Contratantes la independencia de la entonces Provincia Oriental (1). No aparecía en el acta de nuestra nacionalidad una sola palabra que se refiriese a nuestra propia voluntad (2). Tal omisión, a más de dolorosísima, era peligrosa. Los documentos oficiales, los actos diplomáticos, permitían sostener esa omisión; pero toda nuestra historia protestaba contra ella. Y protestaba muy elocuentemente la historia especial de la guerra de 1825 a 1828, a que la dicha Convención ponía término. Treinta y tres orientales, de imperecedera memoria, la iniciaron el 19 de abril de 1825 por el acto sin igual en los fastos americanos; nuestros representantes unidos en la Florida, la promulgaron, rodeados de las bayonetas extranjeras, en el acta de 25 de agosto de aquel año; y nuestros conciudadanos, *solos*, venciendo en Haedo y en Sarandí, decidieron la libertad de todo el territorio de su patria, con la única excepción de las plazas fortificadas del litoral. Esos hechos, cuya heroicidad es parte de la gloria de los valientes soldados contra quienes combatían los orientales, ese alzamiento unánime de todo un pueblo que inicia, que delibera, que obra, que vence por sí solo, revela y constituye, él solo, una nacionalidad,

(1) Creo que hay un error en esto. Antes de ahora hemos sostenido, en *La Jurisdicción del Plata*, que la *Provincia Oriental* estuvo representada por los negociadores de las *Provincias Unidas* de las cuales ella era parte. No tuvo necesidad de una representación especial, por más que nada se hizo sin conocimiento y consentimiento del *jefe de los orientales*, en cuanto a la independencia uruguaya, como lo decía Dorrego, y aun los negociadores Balcarce y Guido, según consta de la documentación que, al parecer, no conocía el doctor Lamas, en esa época, y que yo cito en mi libro *El general Rivera y la campaña de Misiones en 1828*.

(2) Bien que lo declaraban los negociadores Balcarce y Guido, y aun el mismo Dorrego, como se demuestra en mi libro *El general Rivera y la campaña de Misiones en 1828*.

es la voluntad y el derecho. El Brasil y la Confederación Argentina levantándose sobre los actos oficiales y diplomáticos, hijos de las circunstancias, acababan con inmenso honor suyo, de declarar que *reconociéndonos nación libre e independiente obraron de acuerdo con la voluntad manifestada por el pueblo oriental del Uruguay*. La justicia queda hecha; el peligro queda desvanecido».

Así el doctor Lamas preparaba el espíritu de quienes leyeran el documento. Lo enviaba expresamente por intermedio de su secretario el doctor Juan José de Herrera, quien había renunciado el cargo de diputado para desempeñar esa función.

No le bastaba al doctor Lamas la impresión que pudieran causar sus elocuentes frases, sino que necesitaba, además, la palabra sincera y caliente de un hombre con influencia en el Gobierno, como lo era el dicho doctor Herrera. Éste venía entusiasmado con el Tratado, haciéndose puras lenguas para ponderarlo. Años después maldecía la hora en que había sido su honroso portador.

¡Cómo debieron levantar el espíritu de los hombres de aquella época las frases calientes del doctor Lamas, ellos que habían declarado terminantemente que rechazaban toda intervención extranjera en los destinos futuros del país! En efecto, en 1857 el Poder Ejecutivo había dicho en su Mensaje a la Asamblea que eran «prácticamente ineficaces para afianzar la paz y radicar los hábitos constitucionales, los medios estipulados en el Tratado de alianza con el Brasil en 1851, por lo que estaba inclinado el presidente a apoyarse únicamente en la opinión nacional, persuadido de que no pueden—decía—producir resultados de una ventaja permanente, sino los medios que se basen con especialidad en la razón y en el buen sentido del pueblo, fortificando sus buenos hábitos y el uso legítimo de sus libertades, se resolvió a emplear los solos elementos que ofrece el país, sin influencias extrañas, para restablecer el principio de autoridad y consolidar el orden».

Así venía elaborándose el pensamiento de la absoluta independencia nacional, después de los malos tragos que nos habían hecho pasar las intervenciones extranjeras con sus subsidios pecuniarios. El pueblo oriental ya no quería aquellas declaraciones de *la alianza brasileña, bien y dignamente entendida, como se había dicho en los documentos fomentados por la misma diplomacia del Imperio, al alentar nuestros disturbios civiles*, ya prestándoles, ya no prestándoles, el auxilio de la fuerza previsto en ese Tratado de alianza perpetua de 1851; el cual, a pesar de todo, contenía muy buenos propósitos morales, por ejemplo, el del repudio de los viejos trapos ensangrentados.

Expuesto aquello, Lamas recordaba que éramos «un Estado intermedio, cuya existencia independiente era condición de paz, de seguridad, y de equilibrio para el Brasil y la Confederación Argentina. Reconocía que los derechos inherentes a nuestra perfecta personalidad

nacional *no admitían ni tendrían jamás* más limitaciones que las que exigían nuestro rol internacional, limitaciones—decía—que nosotros mismos iniciamos, y que por acto que expresa nuestro libre consentimiento, quedan consignados en el artículo 2.º del Tratado».

Esas limitaciones eran las de no poder la República *incorporarse, refundirse o confederarse* al Brasil ni a la Confederación o a cualquier otra parte de los territorios de estos Estados, ni a cualquiera nación, ni colocarse bajo la soberanía o protectorado de ninguna de ellas; y que el territorio actual de la República no podía ser disminuído por cualquier título o contrato que fuera, bajo forma o pretexto alguno.

En estas limitaciones veía el doctor Lamas verdaderas garantías para la nacionalidad oriental, mucho más cuando esas naciones *accedían* a que el Uruguay solicitara que la Francia y la Inglaterra fortificaran con sus garantías las expresadas estipulaciones. De aquí nacía, según él, que el Brasil y la Argentina abominaban todo pensamiento de absorción o desmembramiento de la nacionalidad oriental. Luego, daba la razón de haberse designado a Inglaterra y Francia, teniendo en cuenta que la primera había sido la mediadora en la Convención del 28, y la segunda celebrado el Tratado del 29 de octubre de 1840. Esas naciones, decía, «se han declarado con títulos a exigir el respeto de la independencia de la República, y han obrado como verdaderos garantes de ella». «Si la designación—agregaba—hubiera sido un acto de simpatía de mera elección, y ese acto me hubiera sido delegado, Vuestra Excelencia me permitirá decir que mi pluma habría escrito, por un impulso del corazón, al lado del nombre de aquellas dos potencias, representantes de la más adelantada civilización, el nombre de nuestra heroica madre, la España, que representa todavía la heroicidad del espíritu de nacionalidad y los sentimientos caballerescos de nuestra raza. Las naciones, como los individuos, deben tener el sentimiento y el amor de la familia, y honrarse a sí mismas, honrando a sus padres».

Brasil y Argentina renovaban *con nuestro asentimiento* la obligación perpetua de defender la independencia y la integridad de la República, por ser esto «un interés esencial, de paz, de seguridad y de equilibrio» para esas naciones. No se permitiría su ocupación por otra nación con el fin de poseerlo como propio o de reunirlo a sus posesiones *cualquiera que fuera el título que para este fin se invocara*.

El doctor Lamas entraba después al punto fundamental de lo que el doctor Juanicó llamaba exclusivamente *neutralización*, como ya veremos, mientras él lo apellidaba indistintamente *neutralidad* y *neutralización*. No es posible hacer un resumen de esta parte tan interesante de su ilustrativa nota. Es indispensable conocerla *in extenso* para poder luego aquilatar la crítica que de ella hicieron sus impugnadores, y darnos cuenta, después de más de medio siglo, si los sucesos, y aun la razón, justificaron la actitud de aquellos hombres al buscar en ese ideal la solución del problema internacional.

Oigamos al doctor Lamas :

«La neutralidad de la República era la más lógica, la más evidente, la más saludable consecuencia de su colocación internacional, como era el uso más inteligente de su posición geográfica. La República podía, por derecho de gentes, declararse neutral. Pero este acto, sin el asentimiento, sin la aceptación y la garantía de sus vecinos, no lo resguardaría de las violaciones de su neutralidad por parte de éstos y la enajenaría su apoyo y su alianza.

»La neutralidad estaba en el fondo del pensamiento fundamental de la Convención de 1828 : porque si la República independiente pudiera ser el satélite o el auxiliar del Brasil o de la Confederación Argentina, la vieja lucha sólo hubiera mudado de forma : llamaríase lucha de influencia lo que antes llamábase lucha de dominación.

»Y la lucha, bajo cualquiera de los dos nombres, agitaría, convulsiónaria, pervertiría, disolvería, devastaría permanentemente a la mísera República condenada a perpetuidad a ser el campo de batalla de las armas o de las influencias políticas de sus vecinos.

»En todas nuestras ruinas morales y materiales, el ojo menos ejercitado puede descubrir los vestigios de tales luchas.

»Pero, el mismo pensamiento de la Convención no fué bien comprendido, ni aun por nosotros mismos, y jamás se ocupó nadie de pugnar por su realización sincera y concienzuda.

»Los sucesos, las necesidades, algunas veces vitales, que surgieron de las revoluciones y de las guerras, de las anarquías y de los tiranos que han llenado en el Río de la Plata los treinta años que nos separan de la fecha de la citada Convención, establecieron, por necesidad, el sistema diametralmente opuesto, y como debía suceder, a este sistema se ligaron intereses que, por su misma índole, tendían a arraigarlo en las ideas y en los hábitos.

»Entretanto, la neutralidad de la República era una condición benéfica, una condición de verdadera paz, de cordial amistad, para la Confederación Argentina, y para el Brasil : y ella debía prevalecer desde que esos dos Estados hubieran renunciado de buena fe a su lucha secular sobre el territorio Oriental del Uruguay.

»Pero, en las luchas de influencia entran no sólo intereses, entran los amores propios, la vanidad, que en las naciones, como en los hombres, causan cegueras relativas y crean intereses y necesidades ficticias.

»Por fortuna el actual gobierno de la República, levantándose, al iniciar esta negociación, a la esfera altísima en que deben estudiarse las cuestiones que interesan al honor y la existencia de la patria, comprendió bien que la neutralización de la República era una de las primordiales condiciones de la existencia, de la reorganización, de la paz y del engrandecimiento del país ; y subordinó a esa condición, conveniencias secundarias, aunque tal vez interesantes a su propia existencia.

»En consecuencia, y en ejecución de las órdenes de Vuestra Exce-

lencia, señor Ministro, tuve el insigne honor de solicitar de las Potencias signatarias de la Convención de 1828, que la neutralidad de la República fuese aceptada, declarada y garantida por ellas como el complemento lógico, indispensable de la obra de la referida Convención.

»Es de mi deber decir que los señores plenipotenciarios argentino y brasilero aceptaron y discutieron mi propuesta con una cordialidad, con una buena fe extrema, y que honrará eternamente el sentimiento profundo de lealtad y de paz que inspiraba a la política de que eran órganos.

»El Brasil tenía, para aceptar la neutralidad, que renunciar a una posición adquirida, y desatarnos de la obligación perpetua que nos ligaba a él por el artículo 1.º del Tratado de Alianza de 12 de octubre de 1851.

»Ese artículo dice :

«La alianza especial y temporaria estipulada en 29 de mayo del corriente año de 1851, entre la República Oriental del Uruguay y el Imperio del Brasil, se extiende por la presente Convención a una *alianza perpetua* que tiene por fin la sustentación de la independencia de los *dos Estados* contra cualquiera dominación extranjera».

»Esta obligación perpetua se extendía también (artículo 4.º) a la integridad territorial que ambos Estados se garantían recíprocamente.

»El Brasil no hesitó, renunció la posición adquirida, desató nuestra obligación perpetua.

»Convenidos en la base de neutralización, yo habría deseado : 1.º Que ella se declarase y garantizase, desde luego, para todas las guerras posibles con todas las naciones : 2.º Que *todos* los deberes recíprocos de la neutralidad fuesen convencionalmente definidos, y en ese sentido deposité una propuesta en la mesa de la conferencia.

»Sobre el primer punto hube de retroceder ante la imposibilidad de obtener una garantía para las guerras con naciones cuyo asentimiento, aunque presumible, no estaba negociado.

»Habría sido peligrosa una insistencia poco sostenible y que podría perjudicar la estipulación de la neutralización que prácticamente necesitamos obtener y garantizar en primer lugar.

»Sobre el segundo, la discusión debía ser larga y prolija, pues que existen ciertos deberes sobre los cuales aun no están de acuerdo ni los gobiernos ni los publicistas ; y como Vuestra Excelencia sabe, podíamos disponer de escaso tiempo.

»Por esas diversas consideraciones, me decidí a formular la neutralización entre el Brasil y la Confederación, en los términos de los artículos 8.º y 9.º del Tratado.

»Esa neutralización es mucho más definida que la de Suiza y la de Bélgica.

»Respecto de la Suiza, las potencias representadas en el Congreso de Viena de 1815, se limitaron a declarar : «Le reconnaissance et la

garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières».

»Respecto a la Bélgica, el Tratado de 19 de abril de 1839 estatuye simplemente lo siguiente : «Artículo 7.º : La Belgique formera un Etat «independant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer «cette neutralité envers tous les autres Etats».

»Juzgándose conveniente definir menuda y convencionalmente las dudas que respecto a los deberes recíprocos de la neutralidad existen entre los gobiernos y los publicistas, éso puede ser objeto de ulteriores negociaciones.

»Respecto de las otras guerras, nuestra neutralidad, que es derecho de gentes, puede y debe ser objeto de negociaciones con otras potencias.

»Todas las naciones que están en contacto con nosotros, no pueden dejar de estar muy favorablemente dispuestas a aceptar nuestra neutralidad y a garantirla por medio del Tratado.

»En el sistema en que entramos y que, complementado y consolidado, debe hacer la felicidad de nuestras generaciones futuras, con bien entendido provecho de nuestros vecinos y del comercio universal, nosotros sólo podemos hacer tratados para mantener y defender la neutralidad absoluta y perpetua de la República.

»El artículo 10 del Tratado en que nos obligamos a *no apoyar directa ni indirectamente* la segregación de porción alguna de los territorios de la Confederación Argentina o del Brasil, ni la creación en ellos de Gobiernos independientes en desconocimiento de la autoridad soberana y legítima respectiva, es la *neutralidad severa* en tales cuestiones.

»Faltaríamos a la neutralidad si apoyásemos directa o indirectamente las segregaciones o la creación de los Gobiernos que reza el artículo.

»El artículo 11 es también la neutralidad recíproca, exceptuándose respecto a nosotros las revoluciones apoyadas por el extranjero de que trata el art.º 5.º.

»En el modo de tratar a los emigrados políticos la neutralidad del artículo es eminentemente gubernamental, si así puedo expresarme.

»Cada uno de los países puede recibir a los revolucionarios del país vecino y darles el asilo que no perjudique a su propio reposo o seguridad, pero no puede dejar de colocarlos, como es de derecho, en posición enteramente inofensiva, si estuviesen armados, y entregando las armas, los caballos, y cualesquiera objetos propios para la guerra, al respectivo Gobierno.

»La acogida de los revolucionarios del país vecino, con muestras exteriores de otra benevolencia que la que merece el infortunio, es tan contraria a la imposibilidad oficial del neutro como al principio de la autoridad y de la ley, la que es común a todos los Gobiernos.

»Tal es el Tratado como lo entiende el plenipotenciario Oriental.

»Me lisonjeo de que él está ajustado, en todo lo esencial, a las instrucciones que recibí de Vuestra Excelencia.

»La posición de la República tiene grandes analogías con la de Bélgica.

»El Brasil y la Confederación acaban de hacer lo que Mr. Guizot clasificó en las potencias europeas de acto de *«haute et rare sagesse»*.

«La Belgique, dice ese profundo pensador y hombre de Estado, »au nord, la Lombardie au midi, trop beaux pour être jamais indifférents et trop faibles pour se défendre seuls contre leurs puissants voisins, étaient toujours une tentation pour l'ambition, une proie pour la force, un problème pour la politique. L'Europe, en 1830, a résolu ce problème pour la Belgique, en la reconnaissant comme »Etat indépendant, et en lui conférant le privilège de la neutralité, les grandes puissances ont fait d'une cause incessante de perturbations européennes, l'une des bases de l'ordre européen».

No podía pedirse más talento para desarrollar la tesis fundamental. La neutralidad nacía de un acto espontáneo del soberano para garantizarse contra lo que el Brasil y la Confederación pudieran practicar en caso de una guerra entre ambos. No preveían el caso de una guerra de estas naciones contra un tercero. Entonces no decían si quedaba garantida la República de un atentado.

Lamas, al terminar su notable exposición, apelaba al tiempo, el cual, según él, demostraría que se habían seguido los dictámenes de la razón y de la conciencia, es decir, los de la más alta sabiduría humana. Sostenía, con palabra inspirada, que «la independencia de nuestra patria se levanta por este Tratado, de entre tantas ruinas, tantos vuelcos, tantos y tan diversos peligros, más íntegra, más garantida, más respetada que lo que jamás lo estuvo. Ahora—terminaba diciendo,—todo depende del buen sentido, de la concordia fraternal, de la virtud cívica de los orientales. Si ellos lo quieren, si se alzan del miserable lodo de las facciones, de los odios, de los egoísmos, la Patria y el Gobierno les presentan en ese Tratado, puede ser en breve, una patria tranquila y próspera que nos enorgullezca a todos, a nosotros y a nuestros hijos. Sólo los orientales ¿se faltarán a sí mismos?...»

LA ACTITUD DEL DOCTOR VELAZCO

El Tratado fué remitido al Cuerpo Legislativo. La opinión se dividió. Lo que parecía ser bandera de paz y de concordia, dió motivo para pretender alterar el orden público. Lamas tenía el don de sublevar las pasiones siempre que pretendía aquietarlas, hablando de unión y de olvido de los trapos ensangrentados. Así sucedió en 1855.

La comisión de Legislación del Senado estaba compuesta de los señores Atanasio Lapidó, Juan José Brid y Ambrosio Velazco. Recién a los dos meses se expidió, en mayoría. La minoría estaba representa-

da por el doctor Velazco. La mayoría se limitó a declarar que hacía suyas las consideraciones expuestas por el doctor Lamas, ateniéndose además a lo que resultaba de los protocolos. Manifestaba que se «había alcanzado la realización de las más ardientes aspiraciones de nuestros hombres patriotas y pensadores». Hacía resaltar «el nuevo y eminente servicio con que el actual gobierno ha sabido caracterizar la época de su administración mostrando patentemente a los ojos de todos, nacionales y extranjeros, que al reinado de las malas pasiones y de las luchas sangrientas y destructoras, se ha reemplazado al fin el de las nobles aspiraciones y las más altas miras de humanidad y civilización». Y si esto decía el del Gobierno, no menos se expresaba cuando al ocuparse del doctor Lamas decía que «el honor que le cabía era insigne, como él lo reconocía, puesto que había asociado su nombre al hecho tal vez más notable y más benéfico en sus consecuencias ulteriores, de la diplomacia sud-americana» (1).

Mientras tanto, el doctor Velazco se expidió en minoría. Era el doctor Velazco un hombre instruido, pero dotado de un carácter atrabiliario. Vivió peleando con todo el mundo, desde su hogar a la escena pública. No tuvo paz con su familia; murió divorciado de ella. En el Cerrito no pudo mantener buenas relaciones con Berro, Acevedo y Estrázulas. Su vida está llena de anécdotas curiosas y geniales. Una de ellas es la de andar sin sombrero, por la calle, con él en la mano, para no usar la escarapela celeste y blanca que el gobierno de Berro había ordenado se llevase por todos los ciudadanos defensores de las instituciones al producirse la revuelta del general Flores en 1863. Estaba dotado de un carácter fuerte, que le condujo un día, en plena antesala de la Cámara de Diputados, a sacar, o pretender sacar, el estoque de su bastón para con él agredir a don Agustín de Vedia. En los últimos años de su vida se lo pasó en lucha constante con los hombres de la Iglesia y con su esposa, con motivo del juicio por divorcio sostenido con ésta. Llevó, en su consecuencia, una existencia singular. Para impedir el embargo de sus honorarios, decretado en dicho juicio, a causa de los alimentos que debía pasar a su señora, cobraba su trabajo, al contado, al entregar el escrito al cliente. Tenía su criterio especial para encarar los negocios de la vida política, y no se doblegaba. Por eso, más de una vez se le veía formando grupo aparte de sus amigos, y engrosar las filas de sus adversarios tradicionales. Un ciudadano de estas condiciones fué el que se puso frente a la obra del doctor Lamas, personaje a quien Velazco malquería; malquerencia que se traslucía desde el primero hasta el último renglón de su dictamen. Velazco fué el portavoz de la oposición al Tratado, aunque empezara por le-

(1) Sesión del 2 de mayo de 1859. El asunto vino a tratarse después de tres meses de puesto el tratado en conocimiento de la Asamblea. Durante ese tiempo, la oposición se desató, hiriendo las pasiones vulgares. Ya veremos cómo el Gobierno hizo un cargo por esto al Senado.

vantar la personalidad del Presidente de la República, a quien salvaba de los ataques que dirigía al negociador.

El doctor Velazco sostenía que «la República no podía aceptar hoy, sin menoscabar sus derechos como nación libre, las *limitaciones* que a la soberanía nacional ponía el artículo 2.º del Tratado». Recordaba que su soberanía plena, perfecta y absoluta proclamada el 25 de agosto de 1825, nunca le había sido contestada ni limitada por Brasil y Argentina.

Estos principios fundamentales habían sido sostenidos por todos los gobiernos y por el del señor Pereyra con motivo de las estipulaciones del Tratado argentino-brasileño del 7 de marzo de 1856.

De aquí deducía que esas *limitaciones* hacían que «la nacionalidad, en lugar de ser *perfecta y absoluta*, se convirtiera en una *nacionalidad anómala, mediatizada o sui generis*, de lo que tendríamos la triste gloria de presentar el primer ejemplo en la América del Sud».

Creía que el Gobierno era contradictorio con su actitud de 1856, y que la República podía, sin necesidad de ese Tratado, declararse neutra cuando le conviniera. «No vaya», decía, «a adquirir por las estipulaciones de un Tratado en favor de sus vecinos y para servir los intereses de sus vecinos, una neutralidad comprada a tan alto precio, como sería si aceptase por ella una soberanía sujeta a *limitaciones*, a *condiciones*, que *necesariamente* menoscabarían los derechos adquiridos de estado soberano en perfecta y absoluta independencia.» Declaraba que una nación no podía reconocerse a *medias*, o bajo *limitaciones*, o condiciones, sin que por el hecho se la humillara o degradara, trayendo a colación el recuerdo de lo que los negociadores del Tratado del año 28 dijeron, rechazando todo *pupillage* sobre la Provincia Oriental.

No veía cuál fuera la conveniencia de lo que se proponía, pero sí el gravísimo peligro de alterar la plena, perfecta y absoluta independencia en que se vivía, nacida del tratado del año 28.

Vislumbraba un nuevo elemento de discordia civil, arrojando a las facciones del porvenir una *bandera simpática* para que con ella agitaran el espíritu público, en las que no dejaría de tomar parte alguno de nuestros vecinos a pretexto de sostener más o menos ostensiblemente la causa del caudillo o caudillos que pugnaran por reivindicar los amenguados derechos de nuestra absoluta y perfecta soberanía.

Contemplaba en lontananza la nacionalidad perdida, porque este Tratado facilitaría la intervención extranjera.

La garantía de Francia e Inglaterra no creía debiera limitarse a los casos del artículo 2.º, «artículo, por cierto», decía, «el menos importante del Tratado, para nuestro país».

Miraba como una *tutela perpetua* sobre la República el que Brasil y Argentina se obligaran a defender la independencia y la integridad de la República.

Criticaba el hecho de quedar librado al criterio de esas naciones el juzgar si había llegado el caso de defender esa independencia e integridad, y el uso de los medios y los modos de proceder (1).

De todas las consideraciones aducidas por el doctor Velazco había una muy fundamental. Dejémosle hablar : «El artículo 9.º se compone de tres párrafos. El primero de esos párrafos impone a la República el deber de no contraer alianza política con el Imperio ni con la Confederación Argentina ; y si la prohibición se circunscribiera a ésto solamente, tendría al menos el mérito de no ser desigual. Pero ella se extiende además hasta prohibir a la República que celebre alianza con *otro u otros Estados* contra alguna de las potencias signatarias del Tratado, y a esto se obliga sin que por su parte esas potencias adopten igual obligación respecto de la República. De modo que, el Imperio y la Confederación Argentina pueden ser los amigos, y aun los aliados de una nación que llegue a estar en hostilidad con la República, pero por su parte la República tendrá *siempre* la obligación de no poder ser aliada, o se verá precisada a quebrar toda alianza que hubiese celebrado con una potencia que llegue a estar en hostilidad con el Imperio o con la Confederación. No hay esto sólo en este párrafo. La parte final de él impone a la República, y de igual manera, la prohibición de *celebrar contratos de que puede resultar obligada a suministrar contra alguna de ellas, en caso de guerra, socorro de hombres, de dinero, de material o artículos bélicos* ; y a todo esto se considerará obligada la República sin que el Imperio y la Confederación acepten con respecto a ella una prohibición igual. De manera que las trabas que en el comercio de una nación crean estipulaciones de ese género, por las reclamaciones a que dan asidero, y por el abuso que de ellas puede hacerse, todos estos inconvenientes sólo serán para los súbditos y habitantes de la República, y no para los del Imperio o de la Confederación Argentina».

Estas fueron las consideraciones fundamentales alegadas por Velazco, debiendo hacer notar que su autor, en esta época de su vida, creía, según su dictamen, *en la bondad de Dios*, y en que *el destino de las naciones sólo está reservado a Dios*.

Esto recordaba *la mano de Dios* del doctor Juanicó al discutirse el Tratado de modificaciones.

Eran hombres que pensaban, al parecer, muy mucho, en la influencia de Dios en las cosas políticas de los hombres y en la geografía de los pueblos.

SUSPENSIÓN DEL DEBATE

Ahora bien, cuando llegó el momento de tratarse el asunto en pri-

(1) Esto era una inexactitud. No se decía tal cosa en el Tratado.

mera discusión, (1) estaban presentes los ministros de Gobierno y de Relaciones Exteriores (2).

Pasada la discusión general sin debate alguno, y entrada a la particular, el señor Lara, con el objeto de promover una discusión que consideraba indispensable, vista la importancia del asunto, sometió a la Comisión informante la siguiente cuestión :

«¿Tenemos derecho nosotros los que hoy vivimos, para legislar, de un modo perpetuo, para las generaciones venideras, y entregarles una patria quizá como no la hemos recibido de nuestros mayores?»

Este fué el buscapié lanzado.

Inmediatamente, el doctor Velazco declaró que ahí estaba su informe en minoría, por lo que nada tenía que ver con la cuestión presentada.

El ministro de Gobierno sostuvo el dictamen de la mayoría.

El señor Velazco lo combatió, mientras el señor Castellanos, viendo el giro que tomaba la cuestión, buscó una salida, y propuso «el aplazamiento del asunto hasta que el Gobierno comunicara al Senado la aprobación del Tratado por el argentino».

A ello se opusieron el señor ministro de Relaciones Exteriores don Federico Nin Reyes, y el doctor Velazco ; pero, votado, «resultó aplazado el negocio, por mayoría de uno».

Y como «el señor presidente dió su voto por la minoría y empezando la votación, quedó por el hecho desechado el aplazamiento.

Entonces, dice el acta, «la Cámara pasa a votar si se aprueba en particular el proyecto de decreto presentado por la comisión en mayoría, y resulta negativa. Queda concluida la primera discusión».

Este golpe fué fatal para el Poder Ejecutivo. Nunca pudo prever que el Senado rechazara lo que tan entusiásticamente se propiciaba. Quizá pudo verse en el rechazo un acto político de los elementos del Senado, donde la mayoría dominante no era del antiguo partido del Cerrito. Los hombres como Bustamante, Acosta y Lara, Ruíz, Vázquez, Lozano, Fernández y Martínez, pertenecían al partido de la Defensa, y estos elementos no todos estaban de acuerdo con la actitud de Pereyra, después de los sucesos de Quinteros. Sin embargo, lo cierto era que Velazco pertenecía al Cerrito, y era él quien dirigía esa oposición. El Poder Ejecutivo se vió perdido, y entonces se dirigió al Senado pidiendo la suspensión de la discusión del Tratado. En la nota enviada recordaba haber urgido por su sanción, pero que «los sucesos se habían desenvuelto con una rapidez tanto más activa cuanta ha sido la de-

(1) Sesión del 2 de mayo de 1859. Estaban presentes los señores Bustamante, Lara, Ruíz, Velazco, Lapido, Brid, Vázquez, Lozano, Fernández, Martínez y Castellanos, faltando por ausencia el señor Regúnaga. Este nunca concurrió. Fué arrojado de ella indebidamente.

(2) No se dan los nombres de los ministros, obedeciendo a una práctica vieja.

mora del despacho de la Cámara de Senadores». «Ha venido», decía, «aquel grave asunto a entrar en discusión en momentos en que la atención del Gobierno está enteramente contraída en perseverar al país de los inconvenientes que esos sucesos tienden a prepararle». Por esto creía cumplir con un deber pidiendo la suspensión de la discusión hasta que desaparecieran los recelos que abrigaba, se definiera la situación y se encontrara en posición de dedicar su atención a ese importante asunto (1).

Una vez que el ministro de Relaciones Exteriores, don Federico Nin Reyes, explanó los fundamentos de la comunicación del Poder Ejecutivo, el Senado, después de dictaminar la Comisión de Legislación, declaró suspendida la consideración del Tratado de Alianza.

De esta manera quedó de hecho rechazado el Tratado, mientras el Poder Ejecutivo, alarmado ante ciertos movimientos revoltosos, tomaba medidas de seguridad.

En efecto, el Gobierno veía con mal ojo que el general Flores hubiera entrado a prestar sus servicios militares al Estado de Buenos Aires en lucha con la Confederación (2). Suponía que esto sería causa de trastornos en el país, por lo que llamaba al servicio una parte de la Guardia nacional, separando temporariamente del servicio algunos individuos (3). Estas medidas fueron aprobadas por el Cuerpo Legislativo después de hacer uso de la palabra, en la Cámara de Representantes, los señores Lapido, Lerena y Palomeque. Este último decía una verdad futura cuando afirmaba que «en la vecina orilla están los enemigos de la paz pública, los enemigos de la política salvadora de la República Oriental, enemigos que no esperan más que un momento para pasar a la República y ensangrentarla, porque este es el resultado de las guerras. ¡Dios nos libre de que llegue ese momento!... El país tal vez pasaría por una situación desconocida entre los hombres civilizados».

Todas estas medidas eran obra de los ministros general don Antonio Díaz y Nin Reyes, únicos con quienes actuaba en esos momentos el señor Pereyra (4). El primero había quedado como ministro general, en pugna con el círculo de Juanicó, quien no concurrió a la sesión donde tales medidas se aprobaron. A los pocos días de esto, el Ministerio se reconstituía, quedando fuera de él el señor Nin Reyes, mientras lo substituía Antonio de las Carreras, nombrándose a don Cristóbal Salvañach ministro de Hacienda y al general Díaz de Guerra y Marina.

(1) Sesión del 6 de mayo de 1859.

(2) Flores entró a servir al Estado de Buenos Aires, y el 30 de julio de 1859, dice el señor Antonio Díaz, fué borrado del escalafón militar (tomo x, pág. 287).

(3) Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes de 13 de julio de 1859.

(4) El Senado aprobó esas medidas en su sesión del 14 de julio de 1859.

Pero, si bien había sido vencida la idea de la neutralidad en el Senado, usando el medio indirecto de la suspensión de la discusión, no por eso el Poder Ejecutivo consideraba muerto el pensamiento. Aun persistía en él, según consta del Manifiesto que más adelante, en noviembre de 1859, dió al país, con motivo de los sucesos que se desarrollaron entre Buenos Aires y la Confederación (1). Esperaba que se reabriría la discusión una vez que esos sucesos se alejaran.

ACCIÓN DE JUANICÓ

Pero, no opinaba así el doctor Juanicó. Por eso, a raíz de la aprobación del contrato Mauá sobre la Deuda (2), él creyó del caso, no obstante lo sucedido en el Senado, *en medio de agitación y signos de desaprobación de la barra*, dice el acta del 31 de mayo de 1859, levantar la voz para fundar un proyecto sobre neutralización exclusivamente, despojado de todo lo demás que tenía el Tratado de Alianza.

El doctor Juanicó iba a hablar, decía, «de otro negocio, el primero en mi opinión, y el verdadero lauro del gobierno actual». Sostenía que «el pensamiento de la neutralización se había confundido completamente con una idea miserable, la de la neutralidad». La calificaba de miserable, hablando en política. Mantenía la tesis de la imposibilidad de ser neutral un pueblo débil entre dos que se pelean, sobre todo cuando se encontraba situado en las circunstancias especiales en que se hallaba la República. En teoría, era incuestionable que sólo el soberano declara la neutralidad, pero se necesita de la fuerza e independencia absoluta, práctica, para poder llevar adelante esa neutralidad. Declaraba que neutralización y neutralidad eran dos cosas completamente distintas, pues la última, para quien pudiera sostenerla, es un acto de soberanía; mientras la primera tenía que ser efecto del convenio del país que quería ser neutral con todos los demás países que conocieran, aceptaran, respetaran y sostuvieran esa neutralidad.

Cuando todo esto decía, el señor Lapido lo apoyaba.

Después de un justo elogio a la personalidad del Presidente, expresaba que lo que el Tratado de Alianza contenía, al respecto, «era una idea nueva, nueva en la América». «Es la primera vez», decía, «que una república americana dice: ¡alto ahí!... no quiero tomar parte en las disidencias que puedan ocurrir entre los países que me rodean, quiero atenerme a mí mismo... quiero ponerme a cubierto de las vicisitudes que hacen imposible la realización de todo principio social. Hacía presente que los que habían combatido el proyecto no sabían lo que había de grande en él; hablando, con este motivo, de «espe-

(1) Véase ese Manifiesto en la página 298 del tomo x de Díaz.

(2) Cuando se trató este asunto en el Senado se produjeron hechos de gravedad, en la calle, como consta de la nota del señor Berro publicada en la página 277 del tomo x del señor Díaz.

culadores políticos y de políticos claustrados», que, a pesar de todo, no habían osado ante la razón pública a decir que la neutralización podía ser «cosa mala para esta tierra».

Defendía el pensamiento como el recurso de los pueblos que, hallándose en una posición geográfica privilegiada, han sido objeto de la ambición de los vecinos, yendo a buscar entonces el reconocimiento, la garantía de todos los poderes de la tierra para que ese país quede completamente apartado de las cuestiones internacionales que puedan ocurrir entre otros.

Estaba enamorado de la neutralización ; era «lo único que miraba ; lo demás le era insignificante».

Todo esto lo decía así, a borbollones, a la disparada, con fuego, en medio de una improvisación caliente, ante la victoria que acababa de obtenerse en la porfiada lid del contrato Mauá. Era tal su convicción, que terminaba diciendo : «Neutralizada la República, neutralizado el territorio, está asegurada la independencia, está asegurada la soberanía, está asegurada la integridad del territorio oriental. Por eso, donde veo neutralización, veo todo lo que busco para el porvenir de la República, porque es evidente que aquí, como en otras partes, la identidad de intereses había de producir los trastornos que siempre se han visto producir. Las potencias europeas, no por el interés nuestro, sino por el interés suyo, de su comercio, en esta situación privilegiada que forma la República Oriental, tiene mucho a que atender. Neutralizada la República, establecida con acuerdo de las grandes potencias esa neutralización, infaliblemente vendría a ser el rincón privilegiado de la América, y del mundo entero, podría decirse. Porque se habría quitado entonces el principal de todos los inconvenientes, ese... que rechaza... porque espanta a todo hombre laborioso, a todo hombre de orden, el decir que se viene a un país donde no hay seguridad, que está sujeto a continuos trastornos, a continuas revoluciones, adonde no hay fijeza en la actualidad ni en el porvenir». Por fin, decía que «vendrían a concurrir las diversas potencias interesadas por distintos motivos en la paz de esta tierra, a realizar *ese ensueño del hombre patriota que preside la República en la actualidad*».

Estos eran los fundamentos de ese Proyecto de Ley, compuesto de cuatro artículos. En ellos se declaraba neutralizado el territorio de la República, neutralización que se entendería única y exclusivamente con las naciones que la aceptaren y que recíprocamente la respetaran y mantuvieran. En su consecuencia, se autorizaba al Poder Ejecutivo para llevar adelante con las potencias amigas, y especialmente con Francia, Inglaterra, España, y estados Unidos de América, la negociación ya iniciada con Brasil y Argentina, debiendo procurarse que en los Tratados se estableciera el principio del arbitraje para dirimir las diferencias que pudieran ocurrir.

EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN

Este proyecto fué pasado a la Comisión de Legislación, integrada con los señores Aguirre, Lapido y Pérez. La Comisión quedó compuesta de los señores Arrascaeta, Palomeque, Tapia, de la Torre, Fuentes, Caravia, Pérez y Lapido (1).

En el informe, la Comisión decía que «la neutralización del Estado era, como se sabía, el alto pensamiento político que había preocupado y preocupaba actualmente al Gobierno de la República y al país entero».

Era exacto, pues con motivo del Tratado, «el pensamiento de la neutralidad había sido el asunto que había ocupado a todos los ciudadanos en la prensa y en las reuniones privadas y políticas».

Consideraba ser «la obra más patriótica a que podía consagrarse la 8.^a Legislatura», a fin de garantizar la independencia, la tranquilidad y el progreso del país».

Reconocía que los males sufridos por el país procedían principalmente de las condiciones de su existencia, a causa de haber carecido de los elementos necesarios para sustentar una vida verdaderamente independiente. De aquí «la necesidad de buscar en un nuevo orden de ideas y de combinaciones políticas, la seguridad y el bienestar que la razón y la experiencia nos enseñan que sería insensato buscar en el camino en que hasta aquí hemos marchado».

Temían la influencia y la dominación de los países vecinos, fundados en lo que hasta entonces había acontecido, por lo que consideraban favorable la neutralización para todas las naciones interesadas, y como *única solución*.

Manifestaba que así lo habían comprendido Brasil y Argentina cuando «en el Tratado definitivo habían convenido en el reconocimiento y garantía de nuestra neutralidad, como la más perfecta expresión del espíritu que dictó la Convención de 1828».

La Comisión terminaba su informe transcribiendo las frases de Guizot que el doctor Lamas había citado en su ilustrativa nota, ya examinada, y manifestándose de perfecto acuerdo con las naciones que el doctor Juanicó indicaba en el proyecto para ir a proponerles adhieran a la declaración de neutralidad que habían hecho Brasil y Argentina, y con el voto a favor del arbitraje, consagrado, decía, por la civilización moderna; cuya adopción sería, especialmente en el caso, de la más oportuna y conveniente aplicación (2).

(1) El señor Aguirre no aparece en el Informe de la Comisión, tomo VII, página 97, del Diario de Sesiones.

(2) Sesión de la Cámara de Representantes de 26 de junio de 1859.

IDEAS GENEROSAS DE ARRASCAETA

La discusión general comenzó con un discurso del señor diputado Díaz, que se ha perdido para la historia.

A juzgar por lo que en seguida alegaron los demás oradores, dicho diputado se opuso al proyecto.

El doctor Arrascaeta, miembro informante de la Comisión Especial, lo rebatió.

El señor Díaz sostenía que era inconstitucional la declaración de la neutralidad, lo que fué fácil rebatir. El orador demostró el derecho de toda nación a declararse neutral en uso de su soberanía e independencia, y que eso era lo que convenía a los pueblos débiles colocados entre colosos. Eso era, decía, «lo que se llama neutralidad convencional, diferente de esa neutralidad general y escrita de que he hablado antes. La neutralidad convencional es la que pone a cubierto a los neutrales de esas violencias, porque estipula en tratados: y no se diga que es el mismo principio absoluto establecido por el Derecho de Gentes, que no tiene una sanción preceptiva: es una estipulación escrita que importa una obligación internacional; es decir, son estipulaciones que tienen fuerza obligatoria entre las naciones. Los principios del Derecho de Gentes se ponen en cuestión, como antes he dicho, con cualquier pretexto; pero las obligaciones internacionales no están en ese caso. Las naciones que han recurrido a los pactos para establecer su neutralidad, son aquellas que han podido mejor garantizar sus derechos».

No creía que se menoscababa la soberanía e independencia, sino, por el contrario, «el medio de asegurarlas, pactando la neutralidad con potencias que se obliguen a mantenerla y respetarla, y con potencias que se obliguen a garantirla».

Luego, hacía una entrada rápida por los anales históricos, para recordar cómo habíamos vivido malamente, derramando la sangre en las campañas contra España, Portugal, Brasil y Buenos Aires. Cuando recordaba las luchas civiles, las clasificaba de las peores, las cuales sólo nueva sangre nos habían dado. «Influencias de aquí... influencias de allá... predominio de todas partes sobre la voluntad del pueblo oriental...» decía, «que saqueaban su fortuna. Al fin de esa lucha, ¿qué hubo?... ¿Qué encontramos?... ¡Tratados! ¿Qué hacían esos Tratados?... Menoscabar la soberanía de este pueblo. Y bien, después de éso, ¿todavía vamos a continuar así?... Yo creo que es tiempo de procurar asegurar a este país su verdadera soberanía, su tranquilidad y su prosperidad. Sí, porque no es cosa de dejarse así con los brazos cruzados en medio de poderes fuertes y con la experiencia que hay».

Fuera de la solución proyectada, no veía que la República «pudiera verse libre de las desgracias corridas durante medio siglo».

Cuando echamos una mirada al pasado, y lo estudiamos con ánimo desprevenido, se siente orgulloso el ciudadano de conocer almas como las del doctor Arrascaeta. Tenemos en nuestra historia hombres grandes, ilustrados, abnegados, a quienes aun no conocemos, porque sólo hemos vivido para la matanza y la calumnia. La historia, algún día recogerá esos fragmentos parlamentarios, para levantar el monumento que merecen esos patricios, como ya lo ha iniciado don Carlos Rosto en su libro *Historia de la literatura uruguaya*, obra de factura noble, realizada en la edad madura, desprovista de muchas, aunque no de todas, las preocupaciones partidarias del autor, lo que le honra y dignifica.

El doctor Arrascaeta no quería vivir en el pasado luctuoso. Buscaba nueva vida; quería que las generaciones del porvenir bebieran en las fuentes puras de la concordia y del amor. De ahí su actitud, en este momento, con la que fué consecuente toda su vida, repudiando para siempre, y con sinceridad, los trapos ensangrentados. Hastiado de esa lucha sangrienta, buscaba nuevos horizontes políticos, nuevas combinaciones, para así salir del camino ya trillado, que no había sido sino un atolladero en el cual la independencia y soberanía tanto habían sufrido, siendo juguete de las pasiones extrañas. Sin duda el gran factor de esa nueva política no se hallaría solamente en el Tratado. No había que olvidar que también con muy buena intención se había buscado esa paz, ese bienestar, en los Tratados del 51, que aquí condenaba el doctor Arrascaeta, y que no se había encontrado. ¿Por qué? Porque no había ciudadanos conocedores de sus deberes. Si no hubiera habido falta de educación cívica, no se habrían encontrado gauchos y caudillos que sirvieran al extranjero. Porque éstos existieron, pudo hacerse aquéllo. La anarquía era la productora de todos los males. ¡Faltaban escuelas, educandos, y sobraban campamentos y guerreros!

LAS PASIONES DEL SEÑOR ITURRIAGA

A este discurso del doctor Arrascaeta le sucedió una breve, pero insubstancial exposición del señor don José A. Iturriaga, tendiente a demostrar que con arreglo al artículo 8.º de la Constitución, era atribución del Poder Ejecutivo iniciar Tratados con acuerdo del Senado, y de la Asamblea General aprobarlos después de hechos. De aquí deducía que la Cámara de Representantes no podía preceptuárselos al Poder Ejecutivo; que esto era invadir las atribuciones de este Poder, por lo que la moción era esencialmente anticonstitucional. No entraba al fondo del asunto, porque «estaba tan debatido, que cansaría decir una cosa que no sería nueva». Por esta razón declaraba que votaría en contra.

La intención del señor Iturriaga era no decir una palabra sobre el fondo del asunto, pero un incidente insignificante le hizo estallar su pasión contenida.

Apenas había dicho que votaría en contra, cuando se oyó la voz dominante del doctor Juanicó pidiendo la palabra.

El señor Caravia expresó entonces que la tenía pedida, a lo que el doctor Juanicó, con toda cultura y suavidad, repuso que estaba «bien, pero puedo pedirla yo sin perjuicio de que vayan hablando los señores Representantes que la han pedido antes que yo».

Nunca lo hubiera dicho, pues el señor Iturriaga, amostazado, cuya peroración todos creían hubiera terminado, exclamó : «Estoy hablando ; tengo la palabra».

Este ex abrupto motivó que el doctor Juanicó volviera, con urbanidad, a responder con un «se tomará nota». «No es de práctica», replicó Iturriaga. «Es de práctica», contesta Juanicó.

¡ Y aquí fué Troya !

Amostazado Iturriaga, responde que «no es de práctica con arreglo al Reglamento, sino una mala costumbre introducida por el señor diputado en algunas otras sesiones, y es mala práctica interrumpir a los diputados».

El doctor Juanicó fué prudente, y guardó silencio, mientras el señor Iturriaga, olvidando lo que había declarado, de que no hablaría sobre el fondo del asunto, porque «cansaría decir una cosa que no sería nueva», se lanzó a tratar la cuestión, «apoyado—decía,—no en mi corta razón, sino en la autoridad de publicistas modernos». Entonces sostuvo que la neutralidad permanente estaba en desprestigio en Europa, y que «se tenía por algunos autores tan repudiada, que consideraban de necesidad ser borrada del derecho público europeo». Citó la Bélgica y la Suiza, para sostener que su neutralidad permanente, que les fué impuesta, no era una garantía, pues se violaba cuando el caso urgía. Al efecto recordaba que los ejércitos franceses acababan de pasar por Suiza, y que el año 14 había sucedido lo mismo (1).

Sostenía que lo mismo sucedería en el Uruguay, por más que este país se encontraba en distinta situación, desde que «Brasil y Argentina podían pelear sin pasar por el Estado Oriental».

Y aquí hubo un interesante cambio de palabras entre Iturriaga, Arrascaeta, Cavia y Lapido. El primero decía que las guerras civiles eran obra nuestra exclusiva. Esto tuvo varios apoyados, por lo que Arrascaeta sintió la necesidad de declarar que no lo apoyaba, a lo que contestó Cavia con «apoyado». Entonces Lapido terció en el incidente para reforzar a su amigo Arrascaeta, agregando que eran «sostenidas por esas naciones y estimuladas por ellas». ¡ *Por nuestras miserias!* , replica Cava. El presidente llama al orden, pero nadie hace caso, por-

(1) En estos momentos (1914), la Alemania hace otro tanto.

que la pasión va creciendo. Y de ahí que Iturriaga, que estaba ansioso de combate, contestara que «nuestras luchas han sido sostenidas por nosotros mismos». El doctor Arrascaeta sostiene que por «nuestras miserias ; pero fomentadas por esos poderes». Entonces Iturriaga afirma que «no estamos libres de esa influencia todavía», por lo que Lapido le responde muy acertadamente : «Pero tratamos de libertarnos».

E Iturriaga reanuda su discurso ante esta última frase de Lapido, para decirnos que «de ningún modo se liberta con esa neutralidad : al contrario, nos sometemos así ; eso es lo que ganamos».

Y, como ya la pasión había empezado a sacudir el temperamento nervioso, el señor Iturriaga siguió enardecido, y declaró que «la neutralidad permanente era una humillación, y que no quería que su país fuera el primero en el continente americano que se sometiera a ella ; la consideraba una utopía en el país».

Pero, apercibido sin duda de que había ido demasiado lejos, o que se había excitado muy mucho, se detuvo, y volvió a declarar que era un asunto muy debatido, que estaba demás ocuparse de exponer argumentos, desde que podía sacudir «nuestras pasiones, en lo cual no veo conveniencia alguna». Por consiguiente, no insistía, después de haberse desahogado a su gusto.

Lo expuesto revelaba cuál era el estado de los ánimos, y que los amigos del doctor Juanicó habían empezado a faltarle al respeto. En esos días la lucha de círculo comenzaba, y el Ministerio empezaba a debilitarse. La influencia de Juanicó decaería, yendo el general don Antonio Díaz al ministerio General, acompañado de Nin Reyes, hasta que se constituyera definitivamente con Carreras, Salvañach y Díaz.

UN TRIBUNO IMPERTINENTE

A continuación habló el señor Cavia. Fué un discurso tribunico, sin pies ni cabeza, llegando hasta hablarnos «del ilustre brigadier general don Manuel Oribe que fué en vida el ídolo del pueblo oriental, como lo es aún hoy día en medio del mármol frío donde descansa !!!» (Así, con tres admiraciones.)

Hizo mención del Informe del doctor Velazco en el Senado, y atacó el Tratado de Alianza, cosa que no se discutía aquí.

Consideraba que sancionado ese Tratado, «él sería un baldón de discordia, un combustible más, echado en la hoguera de nuestras mezquinas pasiones».

El señor Lapido le interrumpía, con razón, para decirle que estaba abusando de la Cámara.

Y Cavia concluía, después de hablar de *oprobio y de ignominia*, con este arranque de ridiculez tribunica :

«¡ Delegados del Pueblo Oriental !... dos caminos nos quedan para andar esta escabrosa jornada ; el uno nos conduce a la gloria, recha-

zando el Tratado ; el otro, a la ignominia, aceptándolo : ¡ elegid, Honorables Representantes, que yo votaré contra él... »

El orador parecía haberse ahogado, ante aquel esfuerzo tribunicio, cual si estuviera hablando a las muchedumbres. Se levantó, en seguida, lo mismo que el señor Iturriaga, por no tener el valor de oír lo que el doctor Juanicó iba a responderle (1).

Tenían miedo al intelecto poderoso del adversario, de su *leader* de ayer. Por eso, cuando él pedía la palabra, se sublevaban y le maltrataban ; mientras el agredido, fuerte en su derecho, y con la conciencia de la noble causa que defendía, permanecía sereno, a la espera de la hora para contestar y ultimar a aquellos pigmeos de la inteligencia. Estos, y así son en todas partes, y en todos los parlamentos, desearían encontrar un medio rápido con que ahogar la voz del adalid del pensamiento. Los consume el gusano de la impotencia, al sentir el dardo agudo de la idea fulgurante, vestida con frase galana, ir a herir la parte sensible del enemigo. Si pudieran cortarles la lengua al orador ilustrado, lo harían. No sabiendo cómo criticarle, dicen entonces que habla demasiado. Creen, los pobres de espíritu, que cuando un hombre de pensamiento toma la palabra, es para decir cuatro vulgaridades sobre tema baladí. No ; cuando hombres como Juanicó se adelantan a emitir sus ideas, es porque así lo reclama la magnitud del tema o la importancia del debate. Y entonces, no pueden ocupar la atención por un momento, porque peroran para la historia, para la humanidad, abriendo rumbos nuevos, cualquiera que sea el punto que aborden. En cambio, dejan para los pigmeos las cuestiones insignificantes, para que en ellas luzcan su ignorancia. Por lo demás, cuando ésta, siempre atrevida, como sucedía en el caso, se colocaba en jarras, frente al saber, justo era que recibiera el castigo merecido. Y era el que Juanicó iba a infligirles en este momento solemne, respondiendo a la vez a cuanto, en lo fundamental, había expuesto el doctor Velazco en el Senado.

El doctor Juanicó empezó haciendo una referencia « a los señores diputados que se habían levantado sin oír lo que él les contestaría ». Hacía presente que el señor Díaz era quien, a su juicio, había expresado algo que pudiera ser tomado en consideración por la Cámara ; y esto mismo le daba motivo para manifestar « que como el proyecto es sobre neutralización y el señor Díaz decía que no sabía lo que significaba la palabra *neutralización*, quería decir que el señor diputado no sabía lo que estaba discutiendo ».

El toro salía bravo del brete, al sentir el dolor de la banderilla, que, aún allí, encerrado, le habían colocado sus guardianes. Miraba a todos lados, con la cerviz altiva, y arremetía contra el primer obstáculo que se le oponía, lleno de bríos y de furia. El doctor Juanicó, al primero

(1) El señor Iturriaga volvió luego a la sala.

que había encontrado, era al señor diputado Díaz, y lo había atacado fuertemente. Es verdad que no por eso el adversario dejaba de defenderse. A pesar de la herida, por ella respiraba, diciendo que esa palabra *neutralización* «no tenía significado en ningún diccionario: esa palabra es referente—decía—a la farmacia, a las composiciones químicas; no se halla en ningún diccionario».

Era el argumento de quienes no son genios y siguen la huella trillada del *magister dixit*. La cuestión no es que una expresión no esté en el diccionario; lo fundamental e importante es saber si quien la inventa o la aplica hace buen uso de ella. Y esto fué lo que Juanicó explicó al fundar su proyecto, que ya conocemos.

Su discurso fué sobrio. Contenía cinco partes. La primera estuvo dedicada a defender la *neutralización*; la segunda, a demostrar que también había hombres ilustres de la Independencia que apoyaban el proyecto de ley; la tercera, dedicada a probar que el proyecto podía discutirse en la Cámara de Representantes, con independencia del Tratado que se hallaba en el Senado; la cuarta estuvo destinada a exhibir el error de quienes sostenían que en el Tratado se *limitaba* la independencia y soberanía de la República; y la quinta, a exhibir que la *neutralización* permanente no era una ilusión.

Fué un discurso metódico, en el cual brilló la elocuencia sobria de su autor, más poderosa que el profundo pensamiento que por el brillo de la frase misma.

Cuando se ocupó de definir la *neutralización*, reveló su mal talante. Trató con olímpico desprecio a sus contrincantes. «Se ha puesto una palabra», decía, «que sirve para representar una idea, y esa idea no la han entendido ninguno de los señores que han hablado sobre el particular; lo que no es extraño, pues cuando se habla de alguna cosa que no se conoce, se desatina, sobre todo cuando se empieza por decir: no sé lo que hablo.»

Luego, afirmaba que se trataba de palabras empleadas por los primeros publicistas. Neutralizar era, según él lo definía, «constituir en neutralidad, no constituirse neutro, sino ser constituido neutro, por acción propia, o de los demás que luchen, que pudiesen obstar a esa neutralidad». Había «enorme diferencia entre *neutralización* y *neutralidad*. Ser constituido en neutralidad, es *neutralización*», decía. «La neutralidad de que hablan los publicistas como derecho inherente a la soberanía absoluta de cada pueblo considerado como nación, es asunto que en la práctica importa nada, mientras no esté apoyado ese derecho en el poder que lleva consigo la fuerza, el derecho. Así la Prusia, en la última guerra, por ejemplo, entre la Inglaterra y Francia contra Rusia, en que tomó parte la misma Austria, dijo: «soy neutral, ¿cómo? ¡armando quinientos mil hombres!» Es derecho exclusivo del muy poderoso decir: soy neutral y he de ser neutral; hacer respetar su neutralidad. Pero, para los que vamos buscando, como dice la Co-

misión, en algo más que la fuerza material, en el progreso del pueblo, en el derecho real y positivo, algo que sirva de base a nuestras relaciones con los demás pueblos; los que no pretendemos una política de chuzas para encontrar en ella el medio de progreso, de bienestar y felicidad a que aspiramos, y que aspiramos para nuestra tierra, vamos efectivamente buscando en las relaciones que la civilización reconoce, una base, que, cuando menos, si en el caso de lucha llegase algún poder a faltar a ella, tendríamos el respeto de los demás, cuando menos. La neutralidad sin la neutralización, es decir, sin que esa neutralidad esté respetada, es una ilusión siempre que no haya un gran poder para hacerla respetar. Aquí está la diferencia práctica también, que existe entre la neutralidad y la neutralización».

Y así bien explicado lo que, según su talento genial, quería decir aquella expresión, pasaba a responder al argumento del recuerdo hecho a los hombres de la Independencia con motivo del baldón y humillación que importaba el proyecto. «Y; vive Dios!—decía,—que tengo la satisfacción de creer que el pueblo todo de mi tierra no se cree ofendido... Y se ha hablado de hombres ilustres de nuestra patria, que si esos hombres que se han evocado, pudiesen sus manes aparecer aquí, tengo la conciencia de que ellos, así como los compañeros que viven y han firmado el pensamiento de la neutralización, ellos habrían venido a contradecir a esos que dicen que es mengua del honor nacional el decir que sea neutralizada esta tierra».

Y entonces, ante la interrupción del señor Iturriaga, diciendo que «si lo han firmado unos, lo han rechazado otros», Juanicó y Lapidó citaban los nombres de Tomás Gómez, los Figueredo, los Burgueños, los Muñoz, los Pereyra, los Núñez, produciendo esto un tumulto en el que se oían las voces del Presidente llamando al orden; las del señor Avelino Lerena que exclamaba: «¡Mal camino! ¡Por Dios! Nada de nombres, no nombremos a nadie por honor de la Cámara»; las de varios Representantes: «¡A la cuestión! ¡a la cuestión!»; la de Iturriaga: «si hay derecho a nombrar, es preciso nombrar»; la de Lapidó: «no hemos sido los de la iniciativa nosotros»; y la del mismo Juanicó, quien, dirigiéndose al señor Lerena, le decía: «Se persuadirá el señor diputado que ha hecho la interrupción, de que jamás hago uso de nombres para imponer, y de que jamás he ido sobre un argumento que sirva para imponer a la libertad absoluta que deba tener un diputado».

Aquí se veía al hombre culto, educado en Europa, y cuyas primeras armas políticas las había hecho en la Defensa, y no en el Cerrito, adonde por una aberración fué a parar, ya en los últimos momentos, cuando hombres como su amigo el doctor Acevedo, y aun Lerena, allá vivían desencantados del poder dictatorial del general Oribe.

Restablecido el orden, el doctor Juanicó manifestaba que entre «los nombres que figuraban a favor de la neutralización, reconocía los que

figuraban al lado de los primeros héroes de la Independencia y aquellos que podrían ser muy bien considerados como los verdaderos intérpretes del espíritu que los dominaba». «Son los mismos—decía—que han derramado su sangre a la par de aquéllos; son los mismos que, si no han estado a la cabeza, a lo menos han acompañado y han sido miembros eficientes de esas tropas orientales que nos han dado días de gloria, de loor, de independencia contra todos, contra Buenos Aires, contra el Brasil, contra nuestra madre patria la España, porque también fué necesario luchar contra ella. Esos mismos hombres que representan esas glorias, los que viven piensan eso, ¿cómo no he de pensar que los que han muerto habían de discurrir de la misma manera?»

Y así destruido ese argumento, estudiaba en seguida la facultad de la Cámara de Representantes para ocuparse del proyecto de ley sobre neutralización, aunque estuviera pendiente en el Senado la discusión del Tratado.

Lástima que el doctor Juanicó no tuviera entonces a la mano la hoy conocida obra de Cushing para que hubiera citado la opinión de este autor. Es verdad que sus argumentos eran bien convincentes, a punto que el señor Iturriaga tuvo que manifestar su conformidad cuando el orador le preguntaba si la Cámara podía o no dictar una ley declarando que la República no quería guerra con uno ni con otro beligerante.

Pero, donde brilló la dialéctica indiscutible del doctor Juanicó, fué cuando tocó el punto referente a si el Tratado que estaba en el Senado limitaba la soberanía e independencia de la República. «¡ Ah, señor !—decía,—si me lanzase ahora a contestar los argumentos relativos, no a la moción, sino al Tratado, por supuesto». Y usando de la preterición, entraba, sin embargo, al fondo de la cuestión. Hacía memoria de las *limitaciones* a la independencia para recordar ciertas frases que por ahí andaban. Estas eran : «¡ Aquí se ve la habilidad de los brasileños !... Ya conocemos al señor Paranhos en este país... Ya tenemos idea de su habilidad... ¡ Es un grande hombre de Estado !... ¡ Cuidado !... ¡ Se acecha contra la libertad de la República !... Dos Poderes rivales son nuestros enemigos... ¡ oh ! ¡ Son rivales entre sí, y van a ponerse de acuerdo para anonadarnos, para hacer que caigamos en poder de uno u otro, es decir, del Brasil !... »

Con este introito, cuya consecuencia fué muy bien traída, vamos a reproducir los párrafos que han merecido nuestro elogio. Dicen así :

«¡ Limitaciones ! Se hace uso de la palabra limitaciones con grandes aspavientos ; se dice : *las limitaciones siguientes* ; llega el caso, y no se ve cuáles son esas limitaciones. Limitaciones que consisten en que no puede pertenecer este país nunca al Brasil, bajo ninguna forma ni ningún nombre ; que no puede pertenecer a la República Argentina, ni colocarse tampoco bajo el protectorado de cualquiera de esas

naciones. ¿Los patriotas se espantan de que venga a quedar esto bien determinado? «¡ Ah ! ¡ Estaremos prontos a luchar contra cualquiera de estos Poderes !» Nos espantamos y decimos : ¡ oh, señor !, ¡ se ponen obstáculos a que de ningún modo pueda pertenecer esta República al Brasil o a la Confederación Argentina ! ¿ Y esta es la limitación que les espanta ? Señor : yo creería que para juzgar de esas limitaciones, como para otras cosas semejantes, lo que habría que hacer sería, irnos a colocar en lugar de los legisladores de la Confederación, por ejemplo, o del legislador del Brasil ; y pregunto, si no sería muy natural que un diputado de la Confederación Argentina o del Paraná, al ver esa declaración, diga : ¡ Cómo ! ese pueblo que por su origen, por sus costumbres, por sus instituciones, es idéntico con nosotros ; ese país donde existen los mejores puertos del Río de la Plata, ¿ vamos, por una resolución, por un Tratado permanente, a privar el que nunca pueda pertenecernos ? ¿ Se va a limitar así la soberanía de la Confederación ? Y con algún derecho diría que no al Gobierno a al ministro que iba a proponer una cosa semejante. Y si no, nos vamos al Brasil ; al Brasil, donde tradicionalmente se considera por todo el mundo como el pensamiento más patriótico que ha cabido a cada uno de sus hijos... Se dice : no, alto ahí, se forma un Tratado solmne, por el cual en ningún caso, en ningún tiempo, bajo ningún título, pueda llegar a pertenecer a ninguna parte. ¡ Esas sí que son limitaciones ! porque no sé a quién ocurra que debemos esperar a ir, como esos poderes lo han pensado siempre, a ir nosotros a conquista sobre ellos... Algo más, para todos los hombres que pensamos en esta tierra, cuando hemos visto, cuando hemos ido viendo crecer la Deuda que pesa sobre este país a consecuencia de los subsidios repetidos por parte del Brasil, hemos visto allá una amenaza oculta latente, ¡ un algo terrible !, que considerábamos que algún día podría convertirse en realidad, y servir para algún fundamento, algún título, por el cual viniese a decir, aprovechando cualquier coyuntura entre poderes extranjeros, a decir : páguenme ; ¿ no produce el país ? Pues entonces, yo me pago. No había hombre pensador a quien no le hubiera ocurrido ese recelo. ¡ Y una de las limitaciones que sirven de aparato para espantar, es la que establece que ningún título, por ninguna razón, por ningún pretexto, pueda ser dominada esta tierra ! ¡ Ah !, señor ; ahí, sí, que yo comprendería que el diputado del Brasil, por ejemplo, dijese : ¡ Oh ! ya sabíamos que era un hombre hábil el señor Lamas, porque con el artículo de ese Tratado está demostrada su habilidad ; nos pasa el bizcocho ; nos dice que son limitaciones de la soberanía oriental, y son limitaciones, ¿ pero, cómo ? hasta de privarnos de hacernos pagos de nuestra deuda ! ¿ Esas son limitaciones ? ¡ Por qué viene la palabra limitación !... Bien dijo el plenipotenciario oriental, ¡ garantías ! ¡ y tamañas garantías ! a las cuales no se puede faltar, sin faltar a la fe pública de las naciones. ¿ Y qué perdemos con que se establezcan ?»

Era formidable la argumentación. El doctor Juanicó, después de esta arremetida, se detenía. Él abundaría mucho más, pero no quería seguir sobre el asunto del Tratado, porque no había llegado el momento. Y ante esta salida, el señor Iturriaga aprovechaba para decirle que era porque estaba fuera de la cuestión, a lo que el interrumpido contestaba con acierto: «Sin embargo, es preciso reconocer que el señor diputado no reclamaba contra otro señor diputado cuando hablaba del mismo asunto». Y ante tan sensata respuesta, no menos airoso salió el señor Iturriaga cuando le retrucaba aquello de «de acuerdo ese derecho al señor diputado; pero eso no le autoriza para que haga lo mismo». Y si airoso estuvo este señor, no menos el doctor Juanicó cuando recordaba que «al hablarse de esas limitaciones, ya había dicho entonces que llegado el momento hablaría de eso».

Iba el doctor Juanicó a concluir su peroración. Entraba a la parte final, en la que demostró que la neutralización permanente no era una ilusión, sino, por el contrario, algo práctico. Recordó las palabras de Guizot respecto de Bélgica, «causa permanente, durante cuatro siglos, de una gran parte de los trastornos de la Europa». Trajo a colación lo que en esos momentos pudo suceder en Italia, y por lo que se proyectaba en Nicaragua una vez que se hiciera el canal que uniera al Atlántico con el Pacífico, sin olvidar el ejemplo de la libre Suiza. Por lo demás, «los casos en que se ha salido por encima de su derecho», con respecto a Bélgica o Suiza, eran excepciones, no se podían llamar reglas. La violación de los tratados no quiere decir que éstos sean malos. Lo único que puede decirse es que hubo quien los violó. Pero, ello no impide que se reanude. Ahí está todavía Bélgica y Suiza, a pesar de esos hechos extraordinarios.

La neutralización era, para el ilustrado orador, «la confirmación definitiva de la independencia de esta tierra»; concluyendo por preguntarse, como si previera el porvenir que nos esperaba: «¿Qué país, qué gobierno tendrá la facultad o el derecho de venir a ingerirse en nuestras guerras civiles, de que se ha hablado antes, a virtud de la neutralización? Al contrario; le será prohibido, vedado, por actos suyos, solemnes; si lo hacen, faltarán a su palabra».

DISCURSOS EXTRAVIADOS PARA LA HISTORIA

Después de este sesudo y penetrante discurso, terció nuevamente en el debate el doctor Arrascaeta. Él no era el miembro informante, pero se consideraba en el caso de aducir sus opiniones. Se limitó a satisfacer una duda del señor Díaz. Expuso las razones porque Francia e Inglaterra estaban en el caso, dados sus intereses comerciales, de intervenir en el asunto. No dudaba de que esa neutralización, que importaba el sosiego de la República, traería el aumento de su población, de su riqueza y de su consumo a esas naciones. Y esto, porque las

ideas del siglo eran las de la conquista de la industria y del comercio. «El país —decía,— que es más industrial y más comerciante, esa es la más gloriosa creación del siglo XIX». Lo primero era declarar que no queríamos aventuras, es decir, que queríamos la neutralización, y luego ir a negociar con Francia e Inglaterra. Por lo demás, hacía una manifestación muy importante, con la que contestaba a algo de lo dicho por el doctor Velazco : que «la Confederación Argentina, por ejemplo, si acepta nuestra neutralidad, está en el deber de ser neutral si nosotrosuviésemos una guerra con la Francia. Es recíproca—decía—la neutralidad». Al hablar de limitaciones exponía que «las potencias que aceptasen la neutralidad, a su vez estaban obligadas a guardar el respeto de nosotros ; también ellas se limitarán en el derecho de la guerra, es decir, también encuentro la teoría de limitaciones ; por consiguiente, la limitación es una doctrina muy general».

Todo esto era apoyado por el señor don Octavio Lapido, en una ligera exposición destinada a convencer al señor Moreno, diputado por la Colonia, quien, si bien no rechazaba el pensamiento, creía que primero debía tratarse con Francia e Inglaterra, y luego venir el asunto al Cuerpo Legislativo para que declarara si convenía o no la neutralización de la República. Esto no era más que una idea traviesa del señor Moreno, pues en el fondo estaba en contra del proyecto, como lo demostró el doctor Palomeque, al contestarle, y como se corroboró con su actitud final al votar negativamente. El señor Lapido sostenía que primero era aquéllo, que era el antecedente, y luego ésto, que era el consecuente.

A esta altura del debate, hizo uso de la palabra el señor Moreno, hombre de buen sentido y culto, pero a quien se le fué la mula en este caso, estando muy majadero en sus continuas interrupciones.

No es posible saber lo que expuso en su discurso, sino por la respuesta que le dió el doctor Palomeque, pues su peroración se ha perdido, lo mismo que la del señor Díaz.

Da la casualidad que los discursos de los dos opositores no figuran en el diario de sesiones, lo que es sensible.

El doctor Palomeque hizo un resumen de los cuatro argumentos fundamentales expuestos por el señor Moreno. Primero : que deseaba la neutralidad ; segundo : que era extemporánea la declaración, pues antes debía buscarse el consentimiento de las demás naciones ; tercero : que el ejemplo de Dinamarca demostraba que las naciones débiles no eran respetadas en su neutralidad ; y cuarto : la inconstitucionalidad del pensamiento y la competencia del Cuerpo Legislativo.

Todos esos argumentos los tomó en consideración el doctor Palomeque, para exhibir el error del señor Moreno, no perdiendo la ilación de su discurso a pesar de la actitud del adversario, quien ni por un minuto cesó de interrumpirle.

El interruptor llegó al extremo de decirle al doctor Palomeque

que *no viniera con chicanas, que él no acostumbraba a chicanear todo el día y toda la noche*. Ello autorizaba al señor Lapido para pedir que el señor Moreno *fuera llamado al orden, pues había estado toda la noche interrumpiendo*.

«Mirémonos en esos ríos de sangre oriental—decía el doctor Palomeque,—mirémonos a través de todas las desgracias porque hemos pasado y que estamos pasando para buscar los medios de evitarlas... No vendrá esa lucha ahora si se neutralizase la República y se garantizase su neutralización. No vendrá esa lucha, ni veremos sobre las murallas, sobre las puertas de Montevideo, legiones de extranjeros mezclados en nuestras luchas, como hemos visto. Eso es lo que prueba nuestra debilidad, y para evitarla no hay más camino que la neutralización.»

Y terminaba, haciendo presente que el señor diputado Moreno se «había ido después de haber estado interrumpiendo y majadereando».

El doctor Palomeque sólo expuso breves consideraciones, pues reconocía que ya todo estaba dicho, pero no quiso dar, decía, su *voto silencioso*.

FILOSOFÍA DEL DEBATE

Así concluyó la discusión general del proyecto, el cual fué votado nominalmente :

POR LA AFIRMATIVA.—Victorica, Palomeque, Antuña, Arrascaeta, Lapido, Fuentes, Pérez (Antonio), Lecocq, Gómez, Juanicó, Sienra, Rodríguez, Latorre (Pedro), Illa, Fisterra, Echenique, Latorre (Luis), Irureta, Molina y Haedo.

POR LA NEGATIVA.—Lerena (Avelino), Moreno, Lapuente, Lerena (Luis), Iturriaga, Díaz, Camino y Caravia.

¡ 19 contra 8 ! (1).

¡ La revancha estaba tomada ! Si en el Senado se había suspendido la discusión, en la Cámara de Representantes se había hecho triunfar el pensamiento. El doctor Juanicó debía estar satisfecho de su triunfo, pues la Cámara joven, la que más directamente representaba los anhelos populares, había dejado constancia del sentimiento general de la República, ávida de paz, la cual instintivamente se defendía desde ya contra lo que vendría a desarrollarse en el país, dentro de breve tiempo. Detrás de esa Cámara estaba el sentimiento nacional, manifestado en declaraciones firmadas por los principales ciudadanos al conocer lo sucedido en el Senado (2).

(1) Sesión del 26 de junio de 1859.

(2) He aquí uno de esos tantos documentos, que, original, existe en nuestro archivo. Dice así :

Era indiscutible que el país veía en ese proyecto el medio de solucionar los conflictos internacionales y las conmociones internas. Se defendía instintivamente de lo que iba a suceder. En ese proyecto se hallaba la muerte de toda revuelta. Él impediría la intervención de los países limítrofes. Podrían éstos violarlo, pero ello no quería decir que la obra no fuera meritoria y práctica. La infamia sería para quien así lo hiciera, porque si bien el cumplimiento de los pactos internacionales depende de la buena fe de los gobernantes, también, aunque no haya una pena material para quienes impunemente los falseen, hay, sí, una condena en las páginas de la Historia, que, aunque tarde, tiene su sanción moral. La fe púnica no es el timbre de honor de ningún pueblo. Y el honor es algo que no sólo se cotiza entre los individuos, sino entre los seres morales llamados naciones. Por eso todos aspiran a ser respetados por sus procederes nobles y dignos. La humanidad día a día avanza en ese camino, instituyendo los tribunales de la Paz, que resuelven los conflictos entre los pueblos, ya sean débiles o poderosos, para así levantar el prestigio de la justicia y del derecho. ¡La sociedad moderna no quiere desamparados! Lo que se ha considerado una utopía de Bernardino de Saint-Pierre va en camino de ser una realidad. La virtud no es una palabra vana para el hombre ni para los pueblos. Y lo único que impone respeto es la honradez. Los pueblos no pueden substraerse a esa tendencia, como que no son sino un compuesto de individuos, cuyo honor individual sumado da el resultado del honor nacional.

Era un error, pues, suponer que Argentina y Brasil procedieran de mala fe. Y tan de buena fe iban, que el Tratado de Alianza y neutralización que el doctor Velazco combatía, no hacía sino reproducir, con sus mismos términos, lo que esas dos naciones tenían pactado en

cida por muchos ciudadanos del De-
Montevideo la necesidad de hacer con-
verdadera opinión del Pueblo sobre el
Neutralización de la República
ya casi todos los otros Departamen-
nvenido manifestar por medio de

la presente declaración, pública y solemnemente:

1.º Que prestamos la más completa adhesión al pensamiento político de la Neutralización de la República, proclamado por el ciudadano presidente don Gabriel Antonio Pereyra, como el verdadero medio de libertarla de las agitaciones del pasado, de las influencias e intereses extraños que han contribuido a promover o perpetuar esas agitaciones, y como la garantía más eficaz para su independencia para la integridad de su territorio, y para el desarrollo de todos los gérmenes de prosperidad sofocados por el estado de desorden y de guerra permanente en que hemos vivido.

2.º Que reiteramos una vez más, y con este motivo, nuestra adhesión a la política del Presidente de la República, trazada en el programa con que inició su Gobierno, y nuestra decisión a secundar sus patrióticos esfuerzos en favor de la Independencia, de la Paz y del Progreso del País.

Montevideo, mayo 13 de 1859.

(Este documento está suscrito por 115 firmas).

7 de marzo de 1856 en sus artículos 3.º y 4.º relativo a defender la independencia e integridad de la República. Más aún, ese Tratado de 1859, no ratificado por el Uruguay, aparece en las colecciones de Tratados y Convenciones de la República Argentina, como si para ella fuese una ley (1).

Aprobado ese proyecto en la discusión general, el doctor Juanicó propuso una enmienda durante la discusión particular, declarando que «la neutralización no será un hecho sino desde que esté reconocida y aceptada por las partes que deben intervenir en ella, es decir, no hay neutralización sino desde que se haya contratado, es decir, desde que las potencias que hayan de intervenir para que sea efectiva, hayan real y verdaderamente prestado su aquiescencia y se hayan obligado a defenderla como corresponde al efecto».

Llamaba la atención de la Cámara «sobre esta circunstancia que siempre estuvo en el espíritu de la moción que hizo, pero que le parecía que quedaba más claramente redactada en el artículo como ahora lo presentaba».

Los señores Arrascaeta y Palomeque, miembros de la Comisión, aceptaban la enmienda, manifestando el último que no encontraba ningún inconveniente, «tanto más cuanto que en las sesiones anteriores se habían suscitado dudas sobre la inteligencia de la moción, y a fin de que esos escrúpulos desaparezcan, ha sido muy oportuna la enmienda que se propone».

(1) Tratados, Convenciones, Protocolos, Actos y Acuerdos Internacionales de la República Argentina, edición de 1911, tomo II, página 480. No aparece aquí el Acta de Ratificación.

El señor Pereyra Pinto, escritor brasileño, dice en su libro sobre el Tratado del Brasil:

Este tratado fué aprobado por el Gabinete Imperial, como se ve de la nota de 14 de mayo de 1859 dirigida al ministro oriental Lamias, por el consejero Paranhos.

Por su máxima importancia insertamos en esta colección el tratado de 3 de enero no obstante su no ratificación. Dió lugar a este resultado, como se ha dicho en otras páginas de esta obra, la rehusa que el Gabinete Imperial opuso a la propuesta por parte del general Urquiza de una alianza con el fin de llamar a la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina, como fué sugerido por el plenipotenciario don Luis José de la Peña, en el momento de celebrarse el referido tratado, y consta del *Protocolo* de 5 de enero de 1859, publicado en el Relatorio de 1860. He buscado ese tomo del Relatorio en las bibliotecas del Ministerio y Museo Mitre y no está. (Lo he pedido al señor Caire, director del Archivo de Montevideo, aunque inútilmente).

Este tratado fué rechazado en el Senado del Uruguay en la sesión del 13 de abril de 1860. La votación fué nominal, por indicación del señor Lara, quien «en el deseo de que las generaciones del futuro juzguen del proceder que a cada cual toque en el presente, propone que la votación sea nominal», dice el acta. Votaron así: el señor Bustamante, sí; los señores Velazco, Lara, Vázquez, Castillo, Ruíz, Fernández, Lozano, Giró y Martínez, no.

El Gobierno oriental aprobó el tratado, como lo comunicó al Brasil en nota de 12 de marzo de 1859, pero el Senado de la República lo rechazó.

Esto era apoyado por los señores Fuentes y Latorre.

Uno solo de los diputados asistentes a la nueva sesión (1), el señor Basañez, se opuso tenazmente, sin conocer el asunto, a votar el artículo.

El doctor Juanicó hizo gala de toda su dialéctica, para convencerlo, pues quería que el proyecto no tuviera un solo voto en contra. Es de advertir que a esta sesión, donde se sancionó en particular el proyecto, sólo asistieron dos de los adversarios de la víspera (Díaz y Camino). Los demás no concurrieron. No hubo oposición, salvo las palabras del señor Basañez (2).

Obtenido este triunfo en la Cámara de Representantes, el proyecto pasó al Senado, donde la muerte le esperaba. Allí estaban los enemigos de la idea, como si supieran, que, triunfante, no podrían venir, en 1863, los eternos revoltosos, a detener la marcha progresiva del país. ¡Se defendían! En la sesión del 6 de julio se presentó el informe de los señores Brid y Lapidó, sosteniendo el proyecto, y en la del 7 del mismo, el del doctor Velazco, oponiéndose. En la del 14 el señor ministro de Gobierno se hallaba presente para entrar al debate. En esta misma sesión se tomaron diversas resoluciones, entre las cuales se hallaba la de aprobar las medidas de seguridad adoptadas por el Poder Ejecutivo con motivo de los sucesos que agitaban el ánimo del pueblo.

Luego, como no se entraba al debate, «el ministro de Gobierno se había retirado considerando que, por lo avanzado de la hora, no tendría lugar la discusión sobre el proyecto de neutralidad; y que, estando él a la orden del día, resolviera la Cámara al respecto».

Esto dice el acta que dijo el señor Presidente.

Era la última sesión ordinaria, y, en su consecuencia, el señor Velazco hizo moción para que «el asunto se relegara al período próximo de sesiones, en el cual podía ser tratado con toda la detención que su gravedad demandaba, lo que hoy—decía—no puede ser por la premura del tiempo».

Y así se resolvió, quedando de hecho rechazado el proyecto. Por

(1) Sesión del 27 de junio de 1859.

(2) De los 35 Representantes, sólo 25 asistieron a esta sesión. Faltaron los señores Ramos (con licencia), Pereyra, Lapuente, Pérez (Martín), Iturriaga, Lerena (Luis), Barbosa, Caravia, Moreno, Lerena (Avelino), Vázquez Sagastume, Cavia, Alvarez, Tapia y Villaurreta. A la sesión anterior tampoco concurrieron Ramos, Pereyra, Barbosa, Caravia, Alvarez, Pérez, Tapia y Villaurreta. Se sentían los síntomas de la división interna, cuyas causas explica el señor don Antonio Díaz en la página 288 del tomo x de su obra histórica. Al respecto, he aquí parte de la carta que el doctor Palomeque dirigió al doctor don Juan José de Herrera. Dice así:

«... al país, su perdurable paz, su independencia verdadera, su crédito, y algo más, que nosotros mismos no alcanzamos.

»La crisis producida irreflexivamente por nuestro común amigo, el señor Nin, nos ha mortificado y mortifica aún, porque no está dominada.

lo demás, esta resolución estaba en un todo de acuerdo con la actitud que el Poder Ejecutivo había asumido cuando la discusión del Tratado, al pedir su suspensión, dadas las agitaciones populares, de las que eran una prueba las medidas de seguridad que acababan de tratarse.

Es conveniente, antes de terminar la exposición de esta materia, dejar aquí consignados los argumentos alegados en dichos dictámenes. Los señores Brid y Lapido, en su breve exposición se referían a lo ya expuesto cuando se expidieron sobre el Tratado, «opinión tanto más decidida—decían,—cuanto que, en el proyecto de ley sometido ahora a vuestra consideración, se hallan eliminados los diversos puntos que dieron materia a la oposición en la primera discusión del Tratado, ciñéndose el proyecto a declarar la neutralización de la República para con todas las naciones que la acepten, y que recíprocamente la respeten y mantengan. En esa declaración, sobre un principio que

»La composición del Gabinete, manteniendo la existencia del general don Antonio Díaz, y depositando la política interna y externa en el saber del doctor Carreras, son dos hechos que a mi ver ofrecen la continuación del disgusto y del malestar que ha traído la imprudencia del señor Nin.

»Repito que no veo en el nuevo Ministerio las luces que han de alumbrarnos el tenebroso camino, por donde tiene que cruzar toda nuestra suerte, para llegar a descubrir la incógnita, que con un pésimo precedente, envuelve la prolongación de siete meses. ¡Dios quiera, amigo, no venga a nuestra novedad un *sietemesino!*

»Los males que a mí me asaltan son de dimensiones colosales, si con tiempo y con tino no les ponemos remedio. Tal vez, me dirá usted, ¿y dónde está el remedio? No quiero darle a usted la solución: es un secreto de mi fantasía, no puedo revelarlo.

»Entrar a narrar a usted los acontecimientos que se han desenvuelto en estos últimos quince días, sería repetir lo mismo que han de escribirle sus numerosos amigos, y lo mismo que verá en la ilustrada prensa de este país.

»Llamo a usted muy seriamente su atención hacia los números 53 y 56 de un papel que aquí se reparte impreso, con el título de «Constitución».

»Sus doctrinas, sus ideas, y las luces que revela, da la medida del estado de nuestra pobre situación, y de las inteligencias que están al frente de los intereses generales de la República.

»En el número 53 de la «Constitución» verá usted los sarcasmos, y los inmerecidos dictérios con que se nos quiere compensar, por nuestro afán, por nuestro interés, en levantar al país de su descrédito y de su ruina. En el número 56, se avergonzará usted al ver, que a nuestra altura se quiera parodiar los tiempos en que doña Encarnación y la señorita doña Manuela eran las árbitras de los destinos del hombre porteño. ¡Por Dios, paremos aquí!

»¿Qué dirá el señor Lamas, sabedor de todos esos episodios? El señor Lamas, que tanto ha hecho por la Unión y por el honor de nuestra patria, con demasiada razón maldecirá sus vigiliás y su talento mismo. Consuélelo, amigo; déntegalo, e implórele el nombre de la patria para que no nos vaya a abandonar en esta situación: él mucho puede hacer, sin él, estamos doblemente perdidos.

»Creo que le escribo a usted cuanto basta: no dejaré de continuar si hay causa.

»Suyo amigo Q. S. M. B.,

»JOSÉ G. PALOMEQUE.»

ha merecido la universal aprobación del país, está lo esencial del proyecto».

Por su parte, el doctor Velazco sostenía que no presentaba utilidad alguna positiva, que pudiera compensar la posición secundaria en que se vendría a quedar ante las demás naciones por la renuncia de una parte de los derechos soberanos como Estado independiente. Sostenía que se usurpaba la atribución que el art. 81 de la Constitución confería al Poder Ejecutivo, a quien exclusivamente competía iniciar Tratados. Criticaba el uso de la palabra *neutralización*, la cual—decía—sólo se aplicaba en química para expresar la extinción de las propiedades particulares de los ácidos y de los álcalis, siendo ajena al lenguaje técnico de la jurisprudencia y ciencia del derecho de gentes, sin empleo en los diccionarios de la época. Volvía a insistir en que el único camino legal era el de la declaración de la neutralidad en caso de guerra entre dos países, las que estaban «en el deber perfecto de respetar aquel derecho». Luego, hacía presente que lo que se pretendía sólo sucedía en Bélgica y Suiza «a quienes las naciones fuertes de Europa les *impusieron* esa condición en mengua de la soberanía de esos Estados». Abogaba por que no debía presentarse como modelo a los nuevos Estados de la América del Sur. Recordaba que «la Suiza, a pesar de ello, no se había librado de luchas internas ni de ser violado su territorio por varias veces, no obstante su decantada neutralidad». Reconocía que el proyecto era aceptado por el pueblo oriental, pero debido a que «la generalidad era llevada de un laudable deseo de paz, y fascinada con el *charlatanismo de algunos que van a cierto objeto*». Exponía que el proyecto no podía alejar la guerra externa ni la interna, y que «todas las ventajas consiguientes estaban en favor de los Estados vecinos y en especial del Imperio del Brasil». Por último, afirmaba «que los distinguidos estadistas del Brasil halagaban a sus vecinos, pero que tenían buen cuidado de no poner en práctica en su propio país, cuyos intereses promovían con tanta habilidad, aprovechando los desaciertos de nuestros políticos, que algunas veces saben promover» (1).

Este informe reflejaba el carácter personal del doctor Velazco. Incurría en errores históricos cuando hablaba de Bélgica y Suiza. Era inconsecuente, pues si los poderes fuertes no respetaban un Tratado, lo mismo podía suceder con la neutralidad temporaria declarada durante la guerra de dos naciones. Y esta falta de respeto no querría decir que la neutralidad no fuera un derecho, y hasta un deber de la nación ajena a la guerra. Lo que sucedería, sería que se habrían atacado injustamente los derechos y deberes de la nación neutra. Otro tanto cuando se viola un Tratado. La cita era contraproducente, porque si a Bélgica y a Suiza le *impusieron* esa neutralidad permanente, aquí

(1) Estos dictámenes no se hallan en el Diario de Sesiones del Senado, pero sí en las páginas 278 a 284 de la obra de Díaz.

nadie la *imponía*, sino que la República, en uso de su conveniencia, buscaba la *neutralización*. La cuestión era discutir si convenía o no, porque los pueblos se inspiran, para vivir, en sus intereses bien entendidos, ya morales, ya materiales. Y ese derecho de estudiar sus conveniencias, era la prueba del ejercicio de la soberanía e independencia. Si convenía, era el caso de decir : ¡ hagámoslo ! Ahora, si ese derecho lo ejercitaba para su bien o para su mal, era lo que estaba en tela de juicio, y no lo de si ella misma menoscababa su soberanía e independencia. Los argumentos en pro y en contra quedaban sometidos al hecho práctico buscado, desde que de éste dependía el resultado. Podrían equivocarse quienes iban detrás de ese ideal, pero el porvenir sería el que descifraría el arcano. Dudar desde luego de la honradez del hombre con quien vamos a celebrar un contrato, es un absurdo, pues entonces vale más no hacerlo. Cuando se contrata, no se piensa sino en la buena fe del contratante, pues luego vendrá o no el engaño. Con los pueblos sucede lo mismo. Es agraviarlos empezar por poner en tela de juicio su buena intención.

Los autores del proyecto tenían sus razones para sostener la conveniencia de la idea. Cerca de 30 años de vida independiente no les habían enseñado más que luchas intestinas, provocadas por la inmixción del Imperio y de la Argentina en las cosas de la tierra, como en 1828 lo previeron los generales Guido y Balcarce (1). Esta escuela había sido fatal para la República naciente, surgida de la Convención de 1828, de la cual resultaba *velis nolis* que Argentina y Brasil garantizarían la independencia e integridad del Uruguay. Luego, ya que el camino adoptado hasta entonces había dado tan mal resultado, bien hacían los ciudadanos en buscar otro sendero.

¿Era bueno? ¿Era malo?

Eso dependía del hecho práctico.

Nadie podía decir que era malo, a título de que debíamos desconfiar del tercero ; quien, en el caso, no nos regalaba cosa alguna como para empezar por decir : *Timeo Danaos et dona ferentes* ! Si la neutralización no daba su resultado, tiempo habría para cambiar de rumbo y buscar otro. Nada se perdía con abandonar el camino trillado, lleno de espinas, para empezar por otro, que, aunque desconocido, parecía mejor que el ya seguido. No era el caso de decir : vale más malo conocido que bueno por conocer ; porque el malo ahí estaba, con su crudeza, enseñándonos al país esquilmado, destilando sangre por todos sus poros. Los pueblos no pueden continuar por el camino que les deshonra. Buscar, pues, un tercero que nos garantizara nuestra paz, no ya contra nosotros mismos, en nuestros derechos civiles, entiéndase bien, sino contra los vecinos, era una obra sana, reservada al porvenir. Persistir en lo existente, no era sensato. Los sucesos del 63

(1) Véase *El general Rivera y la campaña de Misiones en 1828*, por el doctor Alberto Palomeque.

demonstraron que la *neutralización* no hubiera sido mala, cuando nuestra pobre tierra se vió invadida por el Imperio y la complicidad Argentina, para imponernos como gobernante al general don Venancio Flores. Entonces se habría recordado aquel artículo del Tratado que decía se consideraba atacada la independencia «cuando una nación extranjera pretenda por sí sola o aliándose, o auxiliando una revolución interior, designar e imponer persona o personas que deban gobernar a la República» (artículo 5.º, inciso 3.º).

La circunstancia de producirse una guerra civil en nada contrariaba la idea de la neutralización. Ésta no iba contra los partidos del país sino contra los extranjeros, y en especial los vecinos limítrofes, que quisieran atentar contra la soberanía e independencia, introduciéndose en esas reyertas de familia. Lo que se quería, era que nadie se mezclara en ellas, dejando que los hijos de la tierra las resolvieran por sí mismos. Las intervenciones extranjeras no dejaban sino recuerdos dolorosos. Por consiguiente, la cita de Bélgica, en cuanto a sus luchas intestinas, nada probaba. La neutralización de Bélgica sólo tuvo en cuenta los intereses de las otras naciones, no mezclándose en lo que dentro de Bélgica hicieran sus hijos. La neutralización no iba hasta introducirse en la casa del vecino para arreglar sus cuestiones domésticas, mientras no afectaran los intereses internacionales. El argumento era tan débil, que se contestaba sencillamente recordando que también un país no neutralizado puede ser azotado por las guerras civiles, y a nadie se le ocurriría decir que eso era debido a la soberanía e independencia de que gozaba, por lo que era necesario arrebátarsela. Las guerras intestinas pueden desarrollarse lo mismo en un país neutralizado, como en uno no neutralizado, sin que la causa haya de ir a buscarse sino donde está: en la falta de educación cívica de ese pueblo. Es la ignorancia, el analfabetismo de los habitantes, la causa productora, desde que no conocen sus derechos y deberes, viéndose obligados a soportar malos gobernantes, caudillos ensoberbecidos, con asiento en las masas apasionadas, idólatras de un hombre porque carecen de ideales definidos.

Por lo demás, eran sumamente criticables las expresiones personales, de mal gusto parlamentario, cuando el doctor Velazco hablaba de *charlatanismo de algunos*, para cohonestar la popularidad del pensamiento reflejado en los documentos firmados por los adherentes a la idea (1).

Las cuestiones fundamentales estaban resueltas, pero en esos momentos el Gobierno se veía en figurillas para mantener su neutralidad en la lucha de Urquiza con Buenos Aires. Por eso el Gobierno persistía en hallar la solución del problema en esa neutralización. Quería que

(1) El proyecto fué finalmente rechazado en el Senado en la sesión del 5 de marzo de 1860, lo mismo que el tratado de 1859. Ya dominaba don Bernardo P. Berro.

los ciudadanos no se mezclaran en dicha guerra. La política de neutralidad del Gobierno se reflejaba en esos *Tratados pendientes sobre neutralización*, que eran acogidos por «la manifiesta opinión de los pueblos. La República quería conservarse *neutralizada por su propia voluntad y sin entrar imprudentemente a participar de luchas que le eran extrañas*. El gobernante estaba convencido de que *si se dejaba arrastrar bajo la influencia de la una o de la otra nación, bien a las luchas fratricidas, bien a las guerras nacionales, sólo tendría que recoger por resultado la desmembración de su territorio, el empobrecimiento y la ruina de su bienestar*. Aleccionado el gobernante por esa dolorosa y sangrienta experiencia, había proclamado como el único medio contra tales peligros el principio salvador de la neutralización absoluta, sin limitarlo a sólo lo que *tuviera relación a las naciones vecinas, sino haciéndolo extensivo a todas en general*. La actitud prescindente del Gobierno había hecho formar la conciencia de que la República podía vivir de vida propia sin ser el satélite o auxiliar de ningún otro poder independiente. En esa lucha entre Buenos Aires y la Confederación, el Gobierno declaraba desde ahora muy alto que guardaría la más completa y absoluta neutralidad, por ser éste el medio más adecuado, el medio único de conservarse la República íntegra, tranquila, el medio de hacerla prosperar y engrandecerse. El gobernante proclamaba así la manifestación de los principios de su política externa en el período constitucional que le restaba, mientras la nación no llegaba, bajo otra forma, a consignarlos como permanentes e inmutables».

Todo esto exponía el gobernante en su Manifiesto al Pueblo, de fecha 13 de noviembre de 1859, suscripto por sus ministros don Antonio Díaz y Antonio de las Carreras. Como se ve, aunque suspendida la discusión del Tratado, esperaba que la idea de la neutralización fuera un hecho indiscutible.

LA PERSONALIDAD DE AZARA
Y EL AMOR DE LA CONCORDIA

INTERESANTE DEBATE SOBRE LA PERSONALIDAD DE AZARA

El Cuerpo Legislativo, después de tan fundamentales asuntos, se preocupaba del proyecto de Código civil redactado por el doctor Acevedo (1), del crédito a favor de don Dionisio Coronel, por el que tanto trabajó el doctor Palomeque (2); de la conservación de nuestros montes públicos (3); del establecimiento del gas (4); de la construcción del ferrocarril (5), y de honrar la memoria de los «33» (6).

El doctor Palomeque tomaba una parte activa en la discusión del proyecto sobre si la sucesión Solsona y otras estaban o no comprendidos en la ley que mandó suspender las denuncias de tierras públicas (7). En este debate, lo acompañó el doctor Juanicó, quien reaccionó sobre la opinión que había emitido el año anterior al discurrir el proyecto de suspensión de toda denuncia de tierras públicas.

El doctor Palomeque ocupó varias veces, durante este tiempo, la presidencia provisoria de la Cámara, en las sesiones del 2 de mayo y julio 9 de 1859, elegido por unanimidad. Asimismo tomó parte en todas las discusiones, y presentó diversos proyectos referentes: a) a la fundación de un pueblo con el nombre de Pereyra en la confluencia de los arroyos Hospital y San Luis (tomo 5.º pág. 480); b) inutilización de todos los documentos que sirvieron para la liquidación de la Deuda Consolidada y expedientes en tramitación, custodiados en los archivos públicos, sobre perjuicios de guerra (tomo 7.º, página 262); c) fundación de un pueblo entre las vertientes de los arroyos Tacuarembó Grande y Cuñapirú, denominado *Arenal Grande* (tomo 8.º, pág. 413), y otros más de que se ha hablado o mencionará más adelante.

Tomó participación muy activa en la discusión sobre el Banco Comercial, y en una que resultó muy interesante sobre la fundación del pueblo que quería denominarse Azara.

(1) Tomo I, página 254.

(2) Tomo IV, página 293.

(3) Tomo V, página 21.

(4) Tomo V, página 303. y VI, página 504.

(5) Tomo VII, páginas 49 y 463.

(6) Tomo V, páginas 40 y 106. Fué un interesante debate. Juanicó decía: «La independencia, real y verdaderamente, tiene su origen práctico en la época de los 33, por más que sea de aplaudir y de honrar la memoria del primer esfuerzo del padre de la patria, del patriarca Artigas». (Página 111 del tomo citado).

(7) Tomo V, página 286; VIII, página 348, y IX, página 4.

El señor Errazquin había presentado un proyecto creando un pueblo en el centro del departamento del Salto, en el paso del Sauce, que se denominaría Azara.

Durante la discusión, el señor Representante don Pedro Díaz pidió explicaciones sobre la razón de darle ese nombre al pueblo proyectado.

El doctor Palomeque, miembro informante de la Comisión que había matenido el proyecto en un fundado discurso, contestó que al respecto poco se había discurrido, que se aceptó el que se había encontrado en el proyecto. «No obstante—decía,—el nombre de Azara no puede ser desconocido por ningún oriental. Un hombre eminentemente grande, el de un naturalista reconocido en los países más adelantados que el nuestro, un hombre que figura en nuestra historia; no se abre un libro que se haya impreso en el Estado Oriental, donde no se halle el nombre de Azara».

El doctor Arrascaeta abundó en otras consideraciones, revelando su ilustración en la materia. Recordó que don Félix de Azara había sido empleado por el gobierno español para la medición de límites del país, prestando eminentes servicios. Había dado a conocer mucho esta República—decía,—su situación geográfica y topográfica; además, se ocupó en sus viajes a la América del Sud, que han sido publicados, de la historia de nuestro país, y estudió los reinos vegetal y mineral de nuestro suelo, dando a conocer sus riquezas en el extranjero. En efecto, los sabios de Europa recibieron con mucho gusto y con grande aplauso para el nombre de Azara, las colecciones que envió de productos vegetales y minerales. Grandes sabios de allá han citado sus colecciones con recomendación y las han presentado a la Academia de Ciencias de España. Estos servicios han sido muy importantes para atraer la inmigración» (1).

A estas consideraciones, objetó el señor Díaz que él conocía las obras de Azara y su estudio sobre el Paraguay «adonde fué dirigido y comisionado por el gobierno español en clase de ingeniero». Conocía «lo de las colecciones de productos vegetales y animales del Paraguay, pero declaraba que Azara nunca estuvo en el Uruguay, ni siquiera pisó en sus playas».

De aquí deducía que «eran los paraguayos los que debían levantarle monumentos, si les hizo grandes servicios; pero no la República Oriental, que nunca lo ha conocido, y que tiene nombres ilustres para denominar sus pueblos». Por ello proponía el nombre de Lavalleja o cualquier otro significativo de nuestra historia.

El doctor Arrascaeta negaba aquello de que Azara no hubiera conocido nunca el país, sosteniendo que debía honrarse a los sabios,

(1) Véase el estudio del señor don Juan María Gutierrez en la página 167 del tomo xvi de la *Revista de Buenos Aires y Viajes inéditos de Azara*, publicados en la *Revista de Derecho, Historia y Letras*, tomo xxviii, página 363.

puesto que sus conocimientos han servido, dando a conocer al país cuando en Europa no era conocida la riqueza de su suelo. Todo ello, decía, sin perjuicio de que se presente otro proyecto recomendando otro nombre al país.

Por su parte, el señor Basañez apoyaba el pensamiento del señor Díaz, considerando que era hasta ridículo proponer el nombre de Lavalleja.

Ante estas palabras, el doctor Palomeque se creyó obligado a hacer presente que la Comisión no había propuesto ningún nombre oriental, sino que el punto no se había tratado en el seno de aquella; que, a haber sucedido, entonces no habría dudado. Ella, decía, no ha tenido en vista marchitar los laureles del general Lavalleja.

Con mucha oportunidad hizo presente que a la Cámara no le interesaba la estadía del señor Azara, sino «el nombre de uno de los sabios europeos que vinieron a engrandecer estos países, llevando sus noticias y sus productos a la vieja Europa. Es con esas inteligencias que estos países se han poblado y se han enriquecido, que hemos llegado a ser lo que somos. Me parece que esto vale algo también en el corazón de los orientales».

El señor Díaz llevó luego su entusiasmo hasta sostener que «eran limitados los conocimientos de Azara, que bastaba leer solamente su obra «Viajes de Azara en América» para conocerlo»; a lo que el doctor Palomeque interrumpía para decir: *¡Consumado en ciencias exactas!*

Sin embargo, el señor Díaz, para probar, sin duda, su erudición, hacía presente que Azara fué «el primero que descubrió unos cangrejos muy grandes en el Paraguay». No lo creía un gran sabio, sin embargo de reconocer en él *grandes conocimientos*.

Por su parte, el doctor Arrascaeta sostenía que podía honrarse al sabio sin desdoro del sentimiento nacional, en prueba de lo cual teníamos en la ciudad de Montevideo una calle con el nombre de Washington y ninguna con el de Lavalleja» (1).

Rectificaba al señor Díaz suponiendo que confundía a Azara con Humboldt, por ser éste el que estuvo solo en el Paraguay, lo que motivó una interrupción desgraciada del señor Díaz. No, señor, decía éste; Humboldt es el que ha muerto hace poco en el Paraguay; a lo que replicaba el doctor Arrascaeta: «Bompland, querrá decir el señor diputado», causando la risa consiguiente ante la ignorancia del señor Díaz (2).

El doctor Arrascaeta terminó su improvisación diciendo: «Además, dice que no era sabio. Y cuando yo he visto a la Francia sabia llamarle sabio, recomendar los trabajos del señor Azara, y lo que han

(1) Ahora la hay.

(2) Véase el interesante estudio sobre Humboldt en el *Boletín del Centro de Estudios Americanistas de Sevilla*, números 4 y 5.

escrito sobre la importancia de esos trabajos, y cuando sé que él fué el primero que hizo conocer la riqueza de este país, desconocido en Europa, para que viniera a ser explotado por capitales, era hacerle un servicio desde mucho atrás y él es el primero que lo hizo. Yo reconozco más autoridad en los sabios de Francia para llamar sabio al señor de Azara, que en el señor diputado para negarle esa calidad... ¿Por qué privarse al Cuerpo Legislativo de honrar la memoria de un sabio que le ha servido? Esto dará una alta idea de él, y la Europa verá que honra a los sabios que le prestaron sus servicios. Desearía que quedase consignado un ejemplo de esta especie. Después podemos levantar obeliscos a todos nuestros hombres nacionales».

La erudición del doctor Arrascaeta resaltaba, al ser interrumpido por el señor Díaz, pues le contestaba que el señor Soulié lo recomendaba a Azara como sabio, si bien es cierto que Díaz, con no menos aparente erudición, manifestaba que Soulié «lo recomendaba en cuanto a la sección rústica de los productos animales», como si con esto pudiera abonar su afirmación.

Lo cierto era que Soulié lo citaba, lo recomendaba, lo enaltecía, restrictiva o ampliamente.

Azara fué un escritor que dejó dos grandes obras, de aliento, de labor y de mucho tiempo de meditación. Esas eran: *Ensayo sobre la historia natural de los cuadrúpedos del Paraguay*, y *Viajes en la América Meridional de 1781 a 1801*. En 1781 fué uno de los comisarios encargados, en ejecución del Tratado de San Ildefonso, de trazar los límites de las posesiones de España y de Portugal en América, y aprovechó su estadía en el nuevo mundo para hacer el plano de las vastas comarcas cuyas fronteras acababa de levantar (1).

Había mucho de *chauvinisme* en quienes combatían la simpática figura de Azara, pues nada privaba hacer lo uno y lo otro, como decía el doctor Arrascaeta.

A tal punto se llevó la cosa, que, cuando el señor don Antonio María Pérez, con un patriotismo que lo honraba, pues no había sido partidario del general Rivera, propuso que al pueblo se le diera el nombre de este servidor de la Independencia, el señor Basañez tuvo el valor de decirnos que no apoyaba la moción «porque el general Rivera no tenía los hechos del general Lavalleja, lo que decía con franqueza».

«¡Por Dios!... ¡Por Dios!», exclamaba el doctor Palomeque, asustado o asombrado del camino vidrioso por do se quería atravesar; siendo acompañado en su tarea por el señor don Avelino Lerena, quien reflejaba sus sanos sentimientos en otra exclamación no menos honrosa que aquella, al decirnos: «¡Mal terreno!»

La barra se agitaba, *produciéndose sensación en la Cámara*, dice el acta; y mientras, el doctor Palomeque exclamaba: *¡Por Dios! ¡Res-*

(1) Nació en Aragón en 1746 y murió en 1811. En Larousse se le llamaba «sabio viajero español».

petémonos!, el presidente llamaba ; *A la cuestión!* ; *A la cuestión!*, y varios Representantes pedían la votación (1).

¡ Y esta se verificaba en el acto !

Este incidente, nimio en sí, demostro cuánto era de profundo y arraigado en el doctor Palomeque su pensamiento de olvido del pasado y amor a la concordia ; como asimismo la influencia que paulatinamente había ido adquiriendo entre esos elementos adversos, que, al fin, reconocieron su valía moral e intelectual y lo respetaron, de Juanicó abajo, ante quien alguna vez el doctor Palomeque se alzó altanero, como se verá más adelante, al convencerse del mal camino adoptado al votarse la Comisión Permanente ; en cuya composición se vió una hostilidad al Poder Ejecutivo, por no figurar en ella hombres adictos de corazón al gobierno surgido el 1.º de marzo de 1856.

EL AMOR DE LA CONCORDIA

No fueron esos los únicos debates en que intervino el doctor Palomeque, revelando su preparación científica y el conocimiento perfecto que tenía de la geografía y de las necesidades del país, presentándolo, no ya como un consumado parlamentario, sino como un hombre de Estado en todo sentido.

No había cuestión que no conociera, teórica y prácticamente, como que al llegar al Parlamento había recorrido las más importantes reparticiones públicas y todo el territorio de la República.

Lo que había observado como ganadero, educacionista, empleado y funcionario, lo ponía al servicio del país, y, sobre todo, al del gobierno inaugurado en 1856, por cuyo buen crédito luchaba. Él había sido uno de los principales elementos de la campaña presidencial, no por servir las tendencias e imposiciones de los caudillos Oribe y Flores, sino obedeciendo a sus propias inspiraciones, que eran las de los hombres pensadores e influyentes de aquella época.

El mérito moral de la actitud de esos dos caudillos consistió, no en imponer su opinión a los legisladores de entonces, sino en acatar, ellos, lo que la opinión reclamaba. Oribe no tenía influencia alguna sobre los legisladores llamados a elegir presidente, y menos en la fuerza militar. Flores pertenecía, es verdad, al círculo de esos electores, pero debe declararse, para honor de su memoria, que no hizo sino responder al pensamiento de sus amigos, que nada absolutamente querían saber con los elementos conservadores encabezados por César Díaz, Pacheco y Obes, Gómez y Bustamante.

La candidatura del señor Pereyra no fué la obra de los caudillos (2).

(1) Producida la calma se votó el nombre de Lavalleja. Sesión del 13 de junio de 1859, tomo VI, página 453.

(2) Flores tenía otra, la del señor Agell. Así lo asegura el señor Díaz. Había algo de verdad, dado lo expuesto en otra parte de este libro.

Ellos no hicieron sino acatar lo que la opinión reclamaba.

Nunca los elementos de la Asamblea habrían votado a un *conservador* ni a un oribista, aunque los caudillos lo hubieran resuelto.

Esto estaba en la conciencia del pueblo.

Es un error, pues, el de aquellos escritores que miran las cosas de afuera, sostener que el general Flores impuso a sus amigos tal o cual candidato.

La correspondencia particular mantenida con ese caudillo, demuestra que era un hombre que sabía acatar lo que los hechos aconsejaban. Y lo que éstos imponían, era rechazar todo candidato *conservador* u oribista, por méritos personales que tuviera. No podía olvidarse todo el desorden causado con los procedimientos anárquicos de tales ciudadanos, y eso era lo que los inhabilitaba para llegar al Gobierno.

Flores no era sino el portaestandarte de una idea ya hecha. Por su parte, Oribe, que no estaba en la situación influyente de Flores, tenía un capital, aunque bastante dividido por los sucesos del 53 y 55. Había, en su partido, hondas divisiones, reveladas desde el año 53 en el Parlamento. Los acontecimientos del 55 habían acercado a hombres distanciados, pues los conservadores habían luchado junto con elementos de Oribe, para derrocar al general Flores, o, cuando menos, para beneficiar, en el acto, lo que del derrumbe resultara.

En este sentido, la influencia de Oribe se hizo sentir, convenciendo a sus amigos de la necesidad de aunar esfuerzos con el general Flores para luchar contra quienes habían sido sus aliados. No puede negarse que el general Oribe atrajo un capital importante de opinión pública alrededor de la candidatura del señor Pereyra. No tendría eficiencia por su acción directa sobre los individuos que formaban el Parlamento, llamado a resolver la cuestión presidencial, pero aportaban a esos electores una gran fuerza política y social que fortificaría la acción electoral. De esta manera la opinión se manifestaba, y en ella se apoyaba el elector presidencial.

La candidatura del señor Pereyra era, pues, invencible, desde que tenía los electores, y la opinión de los dos partidos. De nada servirían los recursos empleados por sus adversarios. La cuestión, como se ve, era entre hombres que pertenecieron a la Defensa. Nada los dividía, en ese sentido, pues tan bueno era Pereyra como César Díaz, mirados individualmente. Ahora, como servidores, Pereyra tenía una importante foja de servicios consulares, desde los tiempos de Artigas. Había prestado su contingente como ciudadano-soldado, batiéndose en las Piedras, con Artigas, y luego desempeñado elevadas funciones, desde la presidencia de la Junta de Representantes, durante la guerra por la independencia provincial, hasta el cargo de ministro. Allí, en la Defensa, había estado, junto con César Díaz, éste, militar instruído, pero que deslustró sus antecedentes de disciplina rebelándose contra el gobierno constitucional de su patria.

Desde aquella evolución, pues, quedaron unidas las fuerzas electorales, pero conservando la prepotencia política el elemento de la Defensa, que dominaba en el Parlamento y en el Ejecutivo, en 1856.

Fué una evolución política útil y práctica, de la que tantos ejemplos tenemos en el país, hasta nuestros días, la que sirvió para acercar hombres y cosas, y suavizar pasiones, en beneficio de todos. Se hizo lo que luego se ha llamado coparticipación política en el Gobierno, confraternizando los hijos de las víctimas y victimarios, cuando no éstos mismos, en beneficio de la nacionalidad. El error consistió en no persistir en esa sana política, una vez que el partido evolucionista llegó al Poder. La política de los elementos de Oribe consistió en suministrar esa fuerza moral al candidato, aunque ellos no gozaran, por el momento, de las posiciones gubernamentales. Se reservaban para recibir su recompensa en el momento oportuno.

El candidato, sin embargo, tuvo el talento de conservar la dirección política para sus hombres (1). No dió, a los que podríamos lla-

(1) «Señor don Domingo Márquez.

»Montevideo, noviembre 8 de 1856.

»Muy señor mío:

»Empeñado el señor Presidente de la República en el mantenimiento de la paz y del orden, los actos de su administración se han dirigido y se dirigen a tan importante fin, y los resultados benéficos que se experimentan van dando cada día mayor prestigio a la autoridad y las instituciones.

»Después de tantos años de males, de desgracias y de sufrimientos, originados por las discordias civiles y por la ambición de algunos, los que gozan hoy de los beneficios de la paz pública pueden valorar lo que importa alejarse de todo camino que nos conduzca de nuevo a aquella funestísima situación. El peligro está en sobreponer a la influencia pacífica de los principios y de la Ley, y puesto que la política justa y equitativa del Gobierno da garantías a todos, es incuestionable que colocándose los ciudadanos al lado del Gobierno, no sólo sirven a los intereses generales del país, sino también a los intereses privados, mientras que, si los ciudadanos se oponen al Gobierno, su marcha se complica y dificulta, y esos intereses vendrán necesariamente a ser perjudicados.

»Comprendiendo la gran mayoría de los habitantes del país este peligro, quieren y desean que la acción del Gobierno sea robustecida y facilitado su ejercicio. Para ello conviene contar siempre con el concurso de la Asamblea, y de consiguiente, debe procurar el Gobierno que los ciudadanos que vayan a cualesquiera de las Cámaras, reúnan a su patriotismo e ilustración, una adhesión franca y decidida a la política del Gobierno y voluntad de apoyarla. Para eso, entre muchos buenos ciudadanos, el señor Presidente da la preferencia a los que conoce con esa buena disposición y voluntad y los propone al voto de sus conciudadanos. Este paso del señor Pereyra es tanto más necesario, por lo mismo que otras influencias, desacordes con él en realidad, aunque ostentando una conformidad que no existe, ni puede existir desde que los candidatos son distintos, trabajan activamente en las elecciones (a).

»El Excelentísimo señor Presidente respeta las conciencias y las convicciones de cada uno, pero, cuando se ponen en juego esas influencias y esos arbitrios, no debe callar, desde que los ciudadanos que de veras quieren que haya estabilidad y orden han de lisonjearse de conocer, para apoyarlas, las ideas de

(a) Se refería a Oribe.

mar oribistas, un puesto en el Ministerio. Tan es así, que, cuando el general César Díaz y Gómez iniciaron los movimientos que terminarían en Quinteros, obligando al gobernante a buscar en todos los ciudadanos, y no en un círculo, la defensa institucional, la situación política estaba en manos de los hombres de la Defensa. Los nombres de Lorenzo Batlle, Joaquín Requena y Carlos de San Vicente, ministros en esos momentos, que firmaron el decreto suspendiendo la reunión política que iba a celebrarse en el Teatro San Felipe, lo demuestra elocuentemente. Más aún : el caudillaje representado por Oribe estaba en lucha abierta con el gobierno de Pereyra. Se asegura que en los momentos en que moría Oribe, éste, en unión de Flores, se preparaba para una revuelta, cuyo plan consistía «en ser asegurado el ministro Requena y atado el jefe político don Luis de Herrera por sus propios comisarios, todos en su mayor parte oficiales de los cuerpos del ejército del general Oribe» (1).

En la primera elección que se verificó en noviembre y diciembre de 1856, durante la administración de Pereyra, no triunfaron los hombres del Cerrito, sino los de la Defensa. A la Cámara de Representantes ingresó don Julio C. Pereyra, y al Senado, los señores doctor don Emeterio Regúnaga, don Juan Miguel Martínez, doctores don Florentino Castellanos y don Ambrosio Velazco, y don Bernardo P. Berro (2). Los tres primeros no eran del Cerrito, si bien los tres últimos pertenecieron a él. Hasta este momento, durante el año 57, los Poderes Legislativo y Ejecutivo estaban dominados completamente por los hombres de la Defensa.

Como era natural, no se podía políticamente hacer prescindencia de quienes habían cooperado a prestigiar y a sostener la situación, y de ahí que hombres como Castellanos, Velazco y Berro, tuvieran entrada en el Senado, donde, sin embargo, dominaba la mayoría de la gente de la Defensa. Y era asimismo natural que los puestos electivos, y no electivos, se otorgaran a los vencedores en la lucha, y no a los vencidos. Estos, por otra parte, no formaban sino un círculo de los hombres de la Defensa, frente a otro círculo de los hombres de la misma, tan honrados, numerosos e inteligentes como ellos, pero que

un Gobierno que ha creado y conserva con su política aquellos inestimables bienes.

»Considerando a usted animado de esos sentimientos, el Excelentísimo señor Presidente me ha encargado dirija a usted esta carta *particular* acompañándole la lista de electores que han de nombrar senador al candidato que Su Excelencia prefiere, y que lo es el ciudadano don Atanasio Aguirre, pues que esos ciudadanos conocen la necesidad de no contrariar a Su Excelencia el señor Presidente.

»Cumpliendo con ese encargo, me complazco en ofrecerme de usted afectísimo S. S. Q. B. S. M.,

»JOAQUÍN REQUENA.»

(1) Tomo ix, página 168, obra de Díaz.

(2) Berro ingresó contra la voluntad de Pereyra, según lo hemos demostrado en un trabajo especial publicado años ha en *La Razón*.

contaban con la adhesión de los ciudadanos que se movían alrededor del general Oribe. Aquéllos no querían ahora saber nada de vinculaciones con el enemigo tradicional; aspiraban a mantener la tradición. Y esto mismo no era del todo exacto, pues en 1855, días antes podía decirse del pacto de Oribe y Flores, en 1856, confraternizaban conservadores y oribistas para luchar contra el Presidente Constitucional, el general Flores. Proclamaban entonces la unión de los orientales, y la alianza brasileña, inspirados en el Manifiesto de 1855, del doctor don Andrés Lamas.

Ahora las cosas se les habían dado vuelta. Esos mismos elementos se unían al propio general Flores para luchar contra sus aliados de la víspera, proclamar la candidatura Pereyra y levantar en alto el mismo lema de la *Unión de los orientales*! No podían, pues, criticar lo mismo que ellos habían predicado y realizado. Eran sus doctrinas que triunfaban, por lo que debieron felicitarse.

De aquí que cuando el señor Basañez, con toda imprudencia, quiso herir la personalidad del general Rivera, el doctor Palomeque, que vivía preocupado de mantener el eje de aquella política de coparticipación, inmediatamente asumió la actitud levantada de que hemos dado cuenta. Y se vió asimismo, en ese incidente, que todos rendían culto al programa que los mantenía unidos, aunque Oribe hubiera muerto, y Flores ausentándose para Entre Ríos.

El caudillaje no tenía acción. Por eso Pereyra había combatido a esos caudillos en las elecciones del 56, anulando su *influencia*. Y así se explica la ausencia del uno, después de la muerte del otro.

Por lo demás, aquella actitud política del doctor Palomeque no se explica porque él hubiera pertenecido a la Defensa. Si así como se quería herir la personalidad de Rivera, se hubiera pretendido atacar la de Oribe, lo mismo habría procedido. Sus ideas de concordia le imponían esa conducta, dejando, como ya lo había dicho en páginas anteriores, a la Historia la misión de estudiar esas personalidades. Estaba dentro de un programa que no le permitía otra conducta. Por eso, muerto Oribe, había honrado la memoria del servidor de la Independencia. Esa línea de conducta estaba trazada en la política de evolución y de unión de los orientales. Mucho costaba; y en ello consistía la prueba evidente de la firmeza de opiniones del luchador. Los partidos no son compuestos de ángeles. El doctor Lamas lo había dicho en su Manifiesto del 55, que sirvió de base a los conservadores en sus revueltas de ese año: «unámonos, sin preguntarnos sobre nuestro pasado; el que es bueno hoy, es bueno».

EL CÓNsul ALDAMA, LA ADUANA E IMPUESTOS

LA SOLICITUD DEL SEÑOR ALDAMA, CÓNSUL EN MÁLAGA

Una cuestión interesante fué la de si el señor don Antonio de Aldama, cónsul en Málaga, necesitaba la autorización de la Asamblea para usar la Cruz de Comendador de la Real Orden de Isabel la Católica. Con este motivo, el señor don Antonio María Pérez decía que, según sus informes, el solicitante no era ciudadano de la República, «por lo que podía recibir de cualesquiera naciones condecoraciones, sin necesidad de venir a pedir la venia a la Asamblea». Hacía presente que el desempeño del consulado no era uno de los medios de adquirir la ciudadanía. Al señor Antuña, miembro de la Comisión de Peticiones, le *parecía* que el señor Aldama era militar del país, porque en la solicitud que había presentado se llamaba teniente coronel de línea, y por el reglamento consular, coronel de la República». Luego, don Martín Pérez, con un candor admirable, como buen fraile franciscano, nos decía que era ciudadano porque era coronel según el reglamento consular.

A esto objetaba el doctor Palomeque que lo que el reglamento establecía era que los cónsules podían usar las insignias de coronel de la República, y nada más, pero que no daba el grado. Al efecto hizo leer los artículos 1 a 10 del reglamento. Luego, procediendo con tino, aconsejó se pidieran conocimientos al Poder Ejecutivo antes de resolver el asunto, pues creía recordar que el señor Aldama años atrás había pedido al Gobierno los despachos de jefe de la República.

Era tal el interés que se tenía, por algunos, de servir al solicitante, que el señor Antuña, con la mayor soltura, alegaba que según *informes de personas lo habían conocido militar aquí, como teniente coronel* (1).

El señor Pérez (Antonio María), vista la duda, apoyaba lo que el doctor Palomeque había indicado. Otro tanto hacía el señor don Martín Pérez.

Por su parte, el señor Díaz creía que la solicitud debía interpretarse en el sentido de que, según el señor Aldama, el carácter de cónsul era incompatible para aceptar la condecoración.

La indicación previa del doctor Palomeque fué rechazada, y se entró al fondo del asunto.

Entonces los señores Fuentes y Antonio Pérez atacaron de lleno el proyecto con argumentos incontestables. El último volvía a insistir en la suspensión de la discusión y solicitud de datos al Poder Ejecutivo.

(1) Sesión del 17 de mayo de 1859.

Después de un cambio extenso de palabras, en el que intervinieron los señores Díaz, Palomeque, Basañez, Pérez (Martín) y Antuña, la Cámara reaccionó, y votó la moción del doctor Palomeque, de pedir los informes al Poder Ejecutivo, suspendiendo la discusión.

¡Y así quedó en el olvido el proyecto que había venido sancionado por la Cámara de Senadores!

EL PRESUPUESTO, LA ADUANA Y LOS IMPUESTOS

La situación del país continuaba siendo difícil, a pesar de los esfuerzos de sus delegados. Esto se veía en la sanción de la ley de presupuesto general de gastos. ¡La ley más importante fué votada a tambor batiente! Apenas si una ligera discusión. Su articulado ponía en evidencia el estado desastroso de las finanzas. La Cámara declaró vigente el presupuesto del año anterior, importando la suma de 2.473.510 pesos. El Poder Ejecutivo atendería en la forma que fuese posible al pago de los créditos mandados incluir en el Presupuesto por sanción legislativa del período próximo pasado. Se autorizaba al Poder Ejecutivo para hacer los gastos extraordinarios que demandara la defensa de la República en las circunstancias que pudieran ocurrir, quedando al efecto facultado para realizar operaciones de crédito al máximo de 12 % de interés anual, y a los más largos plazos posibles. Esta autorización se daba teniendo en cuenta la situación vidriosa en que la República se hallaba con motivo de la lucha entre Urquiza y Buenos Aires. El Poder Ejecutivo quedaba igualmente autorizado para rescatar las rentas públicas de las afectaciones que aun pesaban sobre ellas, por medio de empréstitos; de todo lo cual debería dar cuenta al Cuerpo Legislativo (1).

Cuando llegó el momento de discutirse la ley de aduanas, el doctor Palomeque puso a contribución todos sus conocimientos prácticos. Por uno de los artículos del proyecto se establecía que el puerto de Yaguarón era el único habilitado para *la exportación*. Al oír esto, manifestó que se le haría un perjuicio a Cerro Largo, en cuyo territorio se encontraban situados los dos puertos de Yaguarón y Aceguá que se establecía para *la importación*, aunque obligando a que sólo en Yaguarón pudiera hacerse *la exportación*. «El puerto de Aceguá—decía—está sobre un pueblo mercantil del Brasil, muy inmediato (Bagé), y para venir a hacerse la exportación el comercio de esa frontera tiene que trasladarse al interior de esta República, hasta Yaguarón, viajar una multitud de leguas; y esto ofrece al comercio dificultades con que debe tropezar. Ya he dicho otra vez que las franquicias para el comercio son unas de las primeras conveniencias para todos los países. Además, resultaría que la ley podría ser burlada, porque frente a Aceguá

(1) Sesión de 26 de junio de 1859.

nuestra línea es una cuchilla, encontrándose allí las puntas del Yaguarón con las de Río Negro; de manera que el conductor de nuestros cueros, de nuestros frutos, en lugar de cumplir con la ley, la violaría, porque de toda esa frontera al pueblo de Bagé hay una distancia muy corta, mientras que de allí al puerto de Yaguarón hay una distancia muy larga. Si la Comisión ha examinado un poco esto, y cree atendibles mis razones, podría dejar que por el puerto de Aceguá se pudiese hacer la exportación de los frutos del país. Sería dar una facilidad muy grande al comercio en esta parte, y al mismo tiempo no exponerse a que la ley fuera burlada, porque a mi entender (conozco el territorio), podía serlo». Y, como el señor Antonio María Pérez, miembro informante de la Comisión, no estuviera conforme, volvió el doctor Palomeque a desarrollar sus opiniones, en medio de grandes apoyados. Es verdad que llevaba una ventaja, pues el señor Pérez había declarado que *nunca había andado por esos parajes, que no los conocía*; por más que en seguida afirmaba que Aceguá era «un punto desierto» donde no sabía que hubiera «pueblo, casas, ni nada», lo que confirmaba el doctor Palomeque. Sin embargo, hicieron mella las observaciones, y el señor don Antonio María Pérez, que era un ciudadano muy sesudo y manso, aunque *entété* en las cosas referentes a la nacionalidad, concluyó por manifestar que se adhería a lo indicado. Por su parte, los señores Arrascaeta y Moreno consideraban necesario, como también lo habían indicado Pérez y Palomeque, la presencia del ministro, autor del proyecto, para conocer bien a fondo la razón del artículo en cuestión, es decir, por qué se admitía la importación y exportación por Yaguarón, y sólo la importación por Aceguá. En este momento intervino el doctor Juanicó con una displicencia tal, que lo conducía a oponerse a la espera del ministro, por considerar insignificante el punto. Y esto, porque le bastaba, para así opinar, que allí no hubiera casas ni vecindario. Esta era la prueba, para él, de que aquello no era un punto mercantil, pues si valiera como aduana, «infaliblemente habría población allí. Yo no necesito otra base—decía,—otro dato, para formar mi juicio, que el de saber que no cuenta con población. Así es que no importa lo que se resuelva sobre el particular». De esta manera olímpica, despreciativa, como cosa baladí, trataba el incidente, sosteniendo que «aquello era una prueba evidente que no importaba nada absolutamente al comercio de exportación. No es a Bagé a donde han de ir los frutos del país en un orden natural, porque no es allí donde se han de consumir. Vamos buscando los puntos marítimos, no un punto terrestre de una provincia donde se producen frutos enteramente análogos a los nuestros. No comprendo, pues, qué clase de importancia pueda tener el negocio. Así es que por mi parte no importa lo que se resuelva. No merece que se cambie una palabra, que haya una dificultad; y, sobre todo, que se espere la presencia del ministro para resolver cosa de tan pequeña importancia

como esta. Esta es la impresión que yo recibo». En su consecuencia, no se esperó al ministro, y el asunto fué sancionado tal cual lo había indicado el doctor Palomeque (1).

Ese conocimiento perfecto de la República lo exhibió durante la discusión de esta ley de aduana, tomando una participación activa en ella, como se ve cuando nos habló de las Receptorías en el Rosario (2), Carmelo y Colonia. El legislador sabía lo que acontecía en la Aduana. De ahí sus observaciones, todas fundadas, como las relativas a los relojes de bolsillo, alhajas de oro y plata y piedras preciosas (3), y el hilo de lana y algodón (página 291). Cuando se discutía esta ley, sostuvo que «el puerto franco no era otra cosa que el arma violenta con que se mata a los vecinos» (página 302). Indicó la conveniencia de incluir en la ley los frenos, que se habían omitido al ocuparse de las argollas de fierro, bronce, etc. (página 306), promovándose, con este motivo, una muy instructiva discusión sobre la industria nacional de fabricación de ese instrumento. El doctor Palomeque nos decía que en nuestras fábricas se construían toda clase de frenos, hasta los árabes. La indicación la recogió el señor Antuña y la hizo triunfar (página 307), protegiendo así esa industria nacional.

Llamó la atención sobre la conveniencia de incluir en la ley las palabras *jabones de olor* para distinguirlos del jabón amarillo y del jabón negro que se importaban y tenían otro uso (página 310).

Todas estas correcciones eran el fruto del estudio y de la experiencia. Cuando proponía algunas, con lo que fastidiaba a la Comisión, deseosa de concluir un debate tan largo como fué aquel, durante el cual se invirtieron cinco sesiones, el señor diputado don Antonio María Pérez le hacía presente que la Comisión había encontrado aquello establecido en el artículo 9.º de la ley vigente, por lo que el doctor Palomeque pretendía sin duda que esa ley estaba mal. El comprendía adonde iba el golpe. Con esto el señor Pérez quería decirle que criticaba su propia obra. Ello, sin embargo, no le afectaba ni le cortaba, por lo que en el acto respondía, con esa nobleza humilde, pero digna que lo caracterizaba: «el artículo 9.º de la ley vigente estará mal; si es así, el defecto será mío, porque a mí me cupo el honor de perfeccionar esa ley; y en esos errores es que estudio ahora para no padecer los mismos. Veo que el artículo 9.º, según dice el señor diputado, habla de jabón, pero no distingue las calidades, y será bueno distinguirlas ahora: ¿qué dificultad hay? ¿se destruye la ley? ¿se desmejora la ley? Si así pudiese demostrarlo el señor ministro informante, yo no insistiría más. Yo creo que se mejora. Repito que mi empeño es contribuir a que las rentas alcancen y que la ley no quede con dudas» (página 312).

(1) Sesión del 30 de junio de 1859, página 196, tomo VII, Cámara de Representantes.

(2) Página 203.

(3) Tomo VII, página 274.

En toda la discusión siguió demostrando su competencia en la materia y el estudio concienzudo que había hecho del proyecto de ley. Así era que recordaba la falta de «el papel y la tinta para su uso» al hablar de las imprentas que no pagarían derecho de importación (página 317). Curioso fué el hecho que denunció de haber un ministro diplomático traído para su uso 200 toneladas de carbón de piedra, que tenía depositadas en una barraca *para su uso*. De aquí que propusiera se consignara en la ley que no pagarían derecho «los equipajes, muebles y alhajas que traigan para su uso» (319). No menos fundada era la indicación de estar exentos del pago de derechos «las maderas, clavazón y herrajes destinados a la construcción de muelles, ferrocarriles y puentes» (322). Fueron muy fundadas las consideraciones sobre el derecho que debieron tener los comerciantes de hacer vender las mercaderías averiadas junto con las sanas (325).

Como hemos dicho, la Comisión quería concluir con la cuestión, y estaba fastidiada ante tantas *indicaciones* del doctor Palomeque. Éste, que así lo comprendía, procedía delicadamente, limitándose a hacer indicaciones a la Comisión, por si las aceptaba. Si no, continuemos adelante, decía. No hacía mociones, para no detener la discusión. Ahora bien, se había llegado a un artículo que estaba mal redactado, y el doctor Palomeque, sin decirlo, para no herir susceptibilidades, se limitó a proponer su corrección. El señor Pérez, miembro informante, que no se dió cuenta de lo que sucedía, se enfadó, y dijo que «por no hacer perder tiempo a la Cámara se conformaba», agregando que le «parecía hubiera el espíritu de enmendar y corregir todo, de perder tiempo». Ante esta salida de tono, el doctor Palomeque perdió la paciencia, y dijo lo que quería callar: «No es perder tiempo, es porque no es castellano eso... (lo que era apoyado por el señor Díaz). Propongo una cosa racional; no vengo a perder el tiempo; tengo buena intención en esto; y a buena intención nadie me gana». El señor Pérez, que era un hombre culto, y muy respetuoso con el doctor Palomeque, como consta de su correspondencia privada, para quien deseaba «altas posiciones dignas de su talento», como se verá oportunamente, comprendió que había ido muy lejos, por lo que no insistió en su ataque, reduciéndose a decir, para calmar las cosas, que «había dicho que por su parte se conformaba». A su vez el doctor Palomeque, no menos culto y respetuoso que el señor Pérez, comprendió el sesgo que este caballero daba al asunto, y no quiso ser menos noble que su contrincante, por lo que se limitó a decir que «eso era error de imprenta, que no podía haberlo despachado la Comisión; ¡es un error!» Pero, para demostrar que se había dado cuenta del fastidio de la Comisión, la cual, en su deseo vehemente de concluir con el proyecto, miraba con malos ojos toda observación, quiso darle una lección, y dijo: «Voy a darle una prueba al señor diputado de que no quiero perder tiempo». Y junto con el dicho, guardó el proyecto de ley en el

bolsillo, porque no me gusta—decía—que me tapen la boca cuando estoy sirviendo a la patria» (330 y 332). Además, «no quería con su voto poner dificultades ni trabas de ninguna naturaleza al señor ministro de Hacienda (338).

Después de una tarea ímproba, fué sancionada la ley de aduana. Sin embargo, ahí quedaban los proyectos sobre impuesto departamental y contribución directa. El Cuerpo Legislativo no había sancionado las leyes de impuestos, y el año ordinario legislativo terminaba. Los espíritus estaban preocupados de la cuestión política que se les venía encima. La presidencia de la República terminaba, y todos vivían solicitados por ese problema. De ahí que cuando llegara el momento de discutir esas leyes de impuestos, el doctor Juanicó propusiera se nombrara una comisión de cinco miembros para que presentara en los primeros días de abiertas las sesiones del tercer período de la octava legislatura, un proyecto de ley sobre impuesto departamental y contribución directa (página 460, tomo 7.º). Y así se resolvió, no obstante la oposición del doctor Palomeque, Fuentes y Pérez. En este momento, el primero de los señores nombrados había pronunciado un extenso discurso sobre el proyecto de impuesto departamental en cuestión.

FERROCARRIL A LA UNIÓN

EL FERROCARRIL A LA UNIÓN

Lo resuelto, y la sanción ligera e informal dada a la ley de presupuesto, revelaban la situación difícil del país. Sin embargo, esto no impedía que hombres como Pablo Duplessis, Carlos Navia, Francisco Hocquard, Leandro Gómez, Juan D. Ruiz y don Jaime Vinet, se presentaran dispuestos a formar una sociedad anónima para la construcción de un ferrocarril desde Montevideo a la Villa de la Unión. El capital sería de doscientos mil pesos, y los trabajos se empezarían dentro de un año, a contar desde la formalización del contrato, debiendo entonces existir en caja la tercera parte del capital. El Poder Ejecutivo podía tomar hasta 20,000 patacones en acciones. Se autorizaba la expropiación de las propiedades privadas, y se concedía servidumbre sobre las vías públicas que ocuparan los rieles, debiendo dejar en ellas un espacio de 20 varas. Eran libres de derecho las máquinas, rieles, herramientas y demás objetos necesarios al ferrocarril. Y se concedía a la Sociedad el derecho de prolongar el camino del ferrocarril, o establecer sucursales en cualquiera dirección y hasta los puntos que juzgara convenientes bajo las bases acordadas en el proyecto de ley (1).

¡ Doscientos mil pesos ! ¡ Esto iba a emplearse en la construcción de un ferrocarril a la Unión, que suplantaría los viejos ómnibus ! Iba a constituirse una sociedad anónima, a expropiarse tierras, a contratar con el Gobierno. Todo esto era una novedad en el país, como lo había sido la organización del sistema bancario con Mauá, Banco Comercial y Banco del Salto, e iluminación a gas. Los hombres de entonces recién empezaban a tantear estas cuestiones. Las leyes españolas eran atrasadas. No conocían los progresos operados en países como Inglaterra y Norte América, donde el capital evolucionaba vertiginosamente. Por eso, cuando de concesiones de Bancos se trató, aquello era una discusión constante en el Cuerpo Legislativo. Para cada Banco era una ley, perdiendo la Asamblea lastimosamente su tiempo, por más que hubiera quienes, más por intuición que por estudios de la materia, como sucedía con el mismo doctor Palomeque, comprendieran que era el caso de dictar una ley general de Bancos, de acuerdo con la cual se establecieran esas instituciones de crédito. Todo era dificultades, mirando con temor esa manera de operar el capital. Hoy nos es muy natural todo ello, y vemos cómo a cada momento se agrupan los capitales anónimamente, para realizar grandes empresas, dentro de la libertad comercial. Entonces no sucedía así, pues

(1) Sesión del 9 de julio de 1859.

si bien había algo hecho en ese sentido, aun el Estado no tenía trazada una línea de conducta firme. Cuando se discutieron esos asuntos en nuestras Cámaras, no faltó quien lamentara no fuera una verdad el Código del doctor Acevedo en el cual se trataban esas cuestiones. Es cierto que en la Cámara de Representantes estaban hombres ilustrados como los doctores Juanicó y Arrascaeta, que abordaban el tema, pero tenían que luchar con la falta de preparación de la mayoría de sus miembros. Eso mismo se observó cuando se discutió el proyecto de ferrocarril ¡de Montevideo a la Unión! con un capital de ¡200,000 pesos! ¡Se citaba a España como modelo de progreso en caminos de fierro! El doctor Juanicó, que los había visto, y conocía a fondo el estado de atraso de esa nación, se sonreía ante tal afirmación, y pronunciaba discursos para convencer a aquellos legisladores de la necesidad de sancionar el proyecto presentado. Varias sesiones se celebraron, y, cuando ya parecía que la cosa iba a cuajar, sucedió lo mismo que con las leyes de impuestos, que se postergaron para el año siguiente. En ese debate tomó parte el señor Fuentes, quien se asustaba de la sociedad anónima, prefiriendo la sociedad colectiva. Se asombraba de que se confiriera a una empresa particular «una facultad especial que en su concepto no podía ser legal, cual era la designación de los capitales en un presupuesto que no se conocía». Se alarmaba de la «concesión del derecho de servidumbre sobre las vías públicas». Todo esto lo consideraba negocio de gravedad» (página 467). Nada de extraño que el señor Fuentes se expresara así, cuando el mismo Juanicó, que conocía la teoría y la práctica, nos decía: «Y como que tenemos poca práctica en estos negocios, aunque no comprendo que sea una necesidad absoluta el que se establezca la autorización al Gobierno para firmar un contrato, no hallo inconveniente en que se haga así» (pág. 470). Hoy es sabido que no hay sociedad anónima ni ferrocarril donde no intervenga el Estado, garantiendo los intereses públicos rozados en estos asuntos». No obstante, el doctor Juanicó daba en el clavo cuando aconsejaba se modificara el articulado, para «en lugar de poner de una manera tan absolutamente preceptiva el artículo, el Poder Ejecutivo contratará», se dijese: «autorízase al Poder Ejecutivo para contratar con los señores tal y cual, que quedan facultados, etc.».

El doctor Arrascaeta disertó sobre las sociedades anónimas, ocupándose de si el Estado podía concurrir al acto como contratante o sólo como autoridad facultativa.

El doctor Vázquez Sagastume, miembro informante de la Comisión, divagaba; aceptaba la enunciación de Juanicó; y para demostrarnos la perplejidad de su espíritu, llegaba a decir que «aquí se ha formado no hace mucho tiempo una sociedad anónima sin conocimiento del Cuerpo Legislativo, y creo que sin conocimiento siquiera del Poder Ejecutivo funciona, y es tan sociedad anónima como si hubiese recibido una sanción del Cuerpo Legislativo. Tal es la Sociedad

de Seguros, por ejemplo, que es una sociedad anónima». ¡ Luego nos hablaba de «leyes españolas que hablaban de la sociedad anónima, que debían registrarse en el consulado» ! Y, para justificar lo que hemos dicho de que aquella gente *tanteaba* el asunto, ahí estaba nada menos que el miembro informante, diciéndonos no sólo esto, sino agregando todavía : «Si el Poder Ejecutivo debe figurar como autorizante y contratante. En mi concepto puede figurar de ambos modos ; pero es infinitamente más conveniente que figure como contratante, porque si fuera como autorizante propiamente, no podía más que consentir en lo que la sociedad hiciese ; pero como contratante puede decir : el camino irá por aquí, se hará esto y aquello que es realmente reglamentario ; en cambio yo le ofreceré el que usted será respetado hasta allí en su propiedad, que la policía le cuidará sus rieles, que los carros y las carretas no pasen sobre ellos, etc. De manera que hay obligaciones contraídas recíprocamente. Y esto sólo es materia de un contrato. Por eso la Comisión ha creído que era más conveniente, que era hasta necesario el contrato» (pág. 475, tomo VII, año 1859, sesión del 9 de julio).

Aquí se veía la falta de preparación sobre la materia, lo que Juanicó se encargaría de hacer resaltar, en mucha parte, pues él también incurriría en errores. Hoy ya nadie duda que el Estado puede construir ferrocarriles, por su cuenta, contratando su construcción con una empresa, como que puede autorizar a ésta para hacerlo por sí misma, y para sí, siendo dueña de los materiales, aunque la concesión no sea a perpetuidad. Este tanteo se observaba en las palabras del señor Fuentes, quien ponía en tela de juicio lo de si una sociedad anónima podía constituirse sin autorización legislativa. Ya este punto se había dilucidado por los señores Juanicó, Arrascaeta y Fuentes al iniciarse esta cuestión, y al tratarse lo relativo a la iluminación a gas (1), y dicho entonces el último de estos legisladores que «las leyes españolas que nos rigen no reconocen la sociedad anónima, hablan de otra clase de sociedad, de la sociedad colectiva, y es la única que reconocen. Otras leyes españolas, que no rigen aquí, son las que tratan de la sociedad anónima, las leyes especiales que la reglamentan ; pero éstas no rigen entre nosotros. Las que rigen aquí son anteriores a nuestra emancipación política, y éstas no reconocen, repito, la sociedad anónima. Así es que esas tales sociedades no pueden tener existencia legal entre nosotros, sino en virtud de una sanción legislativa». De este ataque se había defendido entonces el doctor Vázquez Sagastume, diciendo que sus maestros de Derecho le habían enseñado a respetar la opinión de Escriche, quien reconocía la sociedad anónima (2).

Bueno es recordar ciertos antecedentes de este importante asunto, para así honrar la memoria de aquellos hombres.

(1) Sesión del 22 de junio de 1859.

(2) Sesión del 22 de junio de 1859.

El Poder Ejecutivo había empezado por celebrar un convenio con lo que hoy llamamos empresarios. Hecho éste, sin que la empresa tuviera ningún carácter de sociedad anónima, el Poder Ejecutivo se creyó obligado a remitir todos los antecedentes al Cuerpo Legislativo, pero al sólo efecto de pedir autorización para expropiar por causa de utilidad pública las propiedades particulares por donde pasara el ferrocarril a establecerse *por ahora* hasta la Villa de la Unión (1). Fué entonces cuando el doctor Arrascaeta observó que no se acompañaba el contrato, en el cual, según sus noticias particulares, se concedía servidumbre perpetua en ciertos terrenos por donde pasaría la vía hasta la Unión, lo que requería autorización legislativa; como asimismo si del contrato resultara que se trataba de una sociedad anónima. Como la Comisión y el Poder Ejecutivo sólo hablaban de aquella expropiación, el doctor Arrascaeta mocionaba para que se agregara el contrato a fin de discutir esos otros puntos.

El ministro de Gobierno declaró entonces que se había limitado a la autorización para expropiar, porque la autorización legislativa sólo para eso se necesitaba. «No ha concedido el Ejecutivo servidumbre en un terreno que sea del fisco: lo han de ocupar los empresarios; y desde que sea suyo, adquirido legalmente, y pagándolo, harán de su *propiedad lo que crean conveniente* (2). Ellos mismos dicen el uso que van a hacer de esa propiedad, porque el Estado no tiene en la actualidad terrenos públicos. Ha negado la vía pública, porque el camino es de todos, y ha obligado a esa empresa a dirigir el ferrocarril por terrenos que comprará al efecto. No puede una empresa particular usar el camino sin perjudicar al resto de los habitantes o de la sociedad. Si la sociedad es anónima, el Gobierno no hubiera dejado de solicitar la autorización de las Honorables Cámaras, siempre que en ese contrato se hubiese estipulado algo que exigiese garantías y responsabilidades por parte de los empresarios».

Por su parte, el doctor Vázquez Sagastume reproducía lo expuesto, sosteniendo que la autorización legislativa era necesaria para cuando se concedía algún privilegio a la sociedad anónima, pues mientras no fuese así, ésta no podía constituirse haciéndola registrar en el Tribunal de Comercio». Por lo demás, no se oponía a que se incorporara el contrato, y se suspendiera la discusión, como lo deseaba el doctor Arrascaeta.

TANTEOS CIENTÍFICOS

En este momento ocupó la atención de la Cámara el doctor Juanicó. Quiso traer al debate un grano de su profunda sabiduría. Se consideraba obligado a ello «para inculcar que las sociedades anónimas

(1) Sesión del 22 de junio de 1859.

(2) Esto era un error. Sólo podía destinarse al objeto para el cual se expropió.

no son de derecho común, que no pertenece a la libertad del ciudadano formar sociedades anónimas; más: que las sociedades anónimas no están reconocidas por las leyes civiles; que las sociedades anónimas no pueden existir, en una palabra, sino a virtud de un acto legislativo: son la excepción de la regla del derecho común, porque todos los miembros de una sociedad, en nombre colectivo, están obligados solidariamente con todos sus bienes a la responsabilidad de todos los actos que son materia de la asociación... Para que sean los socios responsables únicamente por el importe de sus acciones, es preciso que esté reconocido por un acto legislativo este derecho especial, esta excepción de la regla... Es un principio reconocido, y, repito, no existe ni en las Ordenanzas, ni en las Leyes Recopiladas, ni en las de Partidas, nada que se parezca a sociedades anónimas, pues éstas son la última expresión del principio de asociación en las sociedades modernas a la altura de la civilización de nuestros días: cierto, pero es necesario que sean reconocidas para poder obrar con fruto benéfico. De otra manera abren ancho campo al fraude; sobre todo, minan por su base la asociación. Siempre, pues, que se trate de sociedades anónimas, es preciso empezar por pedir autorización legislativa».

El no se oponía a la constitución de sociedad anónima, como tampoco el doctor Arrascaeta; lo que quería era que los empresarios se colocaran en ese terreno, y se autorizara al Gobierno para proceder como en el caso del alumbrado a gas, «estableciendo las bases, las condiciones generales, la autorización para la formación de la sociedad anónima, autorización para la expropiación con arreglo a la ley, las condiciones de la asociación en cuanto al número de acciones: por lo menos algo que pruebe que existe un capital». Por todo esto opinaba «se autorizara al Poder Ejecutivo para que celebrase las bases del contrato; pues, decía, «nadie mejor que él puede juzgar de los inconvenientes que ofrezca», sosteniendo la conveniencia de devolver el proyecto a la Comisión para que sobre esas bases presentara otro.

A todo aquello contestaba el doctor Vázquez Sagastume que la autorización legislativa sólo era necesaria para el caso de un privilegio; pero que no tenía inconveniente en lo que se proponía.

En seguida, el doctor Palomeque expresó que atentas las dudas suscitadas, era necesario meditar mucho, por lo que adhería a la indicación de volver el asunto a la Comisión de Hacienda para que con el mismo proyecto, o con otro que se creyera conveniente, se volviera a distribuir junto con el contrato. Esto era indispensable, porque, entre otras cosas que era necesario poner en claro, estaba lo de la servidumbre de las calles, que el ministro (1) negaba se hubiera concedido, mientras los doctores Arrascaeta y Juanicó afirmaban lo contrario.

(1) ¿Quién era el ministro? En los diarios de sesiones nunca aparece el nombre del ministro. Es una mala práctica.

El asunto, pues, volvió a la Comisión para que «formulara un nuevo proyecto y se repartiera con el contrato» (1). Y éste era el que ahora se debatía, autorizando la fundación de la sociedad anónima y el contrato con los empresarios, a la vez que estableciendo las condiciones, la facultad para expropiar, el derecho de servidumbre y la exención de derecho de aduana (2). Y fué durante este nuevo debate que volvió a discutirse lo de la sociedad anónima, y cuanto hemos expuesto anteriormente sobre si la redacción del artículo de la Comisión importaba considerar al Gobierno como contratante. El señor Díaz estuvo acertado, desde un principio, al oír al señor Fuentes, pues suponía, con fundamento, que todas las dudas desaparecerían «desde que se variase la redacción de una manera muy pequeña, cual es, decía, «la de autorizar al Poder Ejecutivo para contratar con los señores nombrados el establecimiento de un ferrocarril por medio de una sociedad anónima, y bajo las bases que establece el mismo artículo».

Esto mismo fué lo que en seguida indicó el doctor Juanicó, explicándolo. Sostuvo que primero se autorizaba al Poder Ejecutivo para hacer el contrato con los señores nombrados, y que luego éstos constituirían la sociedad anónima, tal cual se había procedido hacía muy poco al establecerse un Banco. Hablaba de los individuos que «pedían *el privilegio* de formar sociedad anónima» (pág. 470). Reconocía que «teníamos poca práctica en estos negocios», llegando hasta sostener que no era «una necesidad absoluta» el que se establezca la autorización al Gobierno para formar un contrato», si bien hallaba que estaba «muy en el caso que el Gobierno quedara facultado, *tuviera autorización para formar la sociedad*».

El mismo doctor Juanicó, con toda su sabiduría, no conocía muy a fondo la cuestión, pues la organización de una sociedad anónima no es la obra del Gobierno, sino de los particulares, y mucho menos un *privilegio*. Tampoco puede un Gobierno celebrar contratos de construcción de ferrocarriles, aunque sea con empresarios no constituidos en sociedad anónima, sin la autorización legislativa. Por eso hay una *ley general* de ferrocarriles, trazada de acuerdo con las necesidades de la nación. Es con arreglo a esa *ley* que el Poder Ejecutivo celebra los contratos. Él no organiza, no forma la sociedad anónima; él no sale a solicitar accionistas, ni a formular estatutos. Él, lo unico que hace es, dentro del *derecho común*—porque la sociedad anónima es una persona jurídica sobre la cual legislan el Código Civil y el Código Comercial, no obstante lo aseverado en contrario por el doctor Juanicó,—aprobar los Estatutos y autorizar su establecimiento, siempre que no violen las leyes comunes. Para lo que no se necesitaba una sanción legislativa especial, en cada caso, era para autori-

(1) Sesión del 22 de junio de 1859.

(2) Sesión del 9 de julio de 1859.

zar el funcionamiento de la sociedad anónima. Bastaba, como se hizo más tarde, dictar los códigos, y en ellos regular sobre la sociedad anónima, como se trataba de la colectiva, de la comandita, etc. Lo que sí, como aun no se habían dictado esas leyes generales sobre Bancos, sobre ferrocarriles, sobre sociedades anónimas, se explicaba la intervención del Cuerpo Legislativo en cada caso. Era esa «poca práctica», de la cual hablaba el doctor Juanicó, la que influía en el debate. Hoy todo esto nos es familiar, y por eso nos asombra lo que nuestros padres ignoraban. Hoy vemos constituirse las sociedades anónimas para un determinado fin, sin una sanción legislativa previa, y luego, de acuerdo con el Código Civil o Comercial, pedir la autorización al Poder Ejecutivo para funcionar, previa la inscripción en el Juzgado de Comercio y publicación de los Estatutos. Ha de hacerse todo lo contrario de lo afirmado entonces por el doctor Juanicó. Primero, ha de constituirse, suscribir una buena parte de su capital, depositarlo en un Banco de la nación, formular sus estatutos, etc., y luego recién presentarse al Poder Ejecutivo pidiendo la aprobación de estos últimos y la autorización para maniobrar. La sociedad anónima nada tiene que ver con los individuos, por lo que era un error del doctor Juanicó aquello de : «siempre las sociedades anónimas sobre la garantía de esas bases y la *garantía personal*, o la fianza, si se quiere, que prestan los individuos.

Ahora bien, el doctor Vázquez Sagastume no se atrevió a combatir las ideas emitidas. Reconocía que «el señor diputado preopinante había explicado con la ilustración que no era extraña en él, cuáles han sido—decía—las opiniones de la Comisión de Hacienda». Era que nada sabían sobre la cuestión el miembro informante, ni la Comisión. Estaban en el A B C del asunto, y el doctor Juanicó era un oráculo. Todos estaban a oscuras en el negocio. ¡ Les pasaría lo que a los legisladores en Buenos Aires, que concedieron media legua de tierra al costado de la primera vía férrea construída desde el Retiro !

FIGURACIÓN DE ARRASCAETA

De todos estos legisladores, con inclusión del propio doctor Juanicó, el único que reveló conocer a fondo el asunto, fué el doctor Arrascaeta. Hizo una exposición lo más sesuda. «Según yo concibo, la formación de esta sociedad—decía,—cuyo origen es muy moderno, hay dos actos previos a toda sociedad anónima : unos que pueden llamarse puramente privados y preparatorios de una sociedad, y otros que llamaré yo actos legales o gubernativos que vienen a dar una forma legal a esas sociedades. En la primera clase, pues, encuentro los individuos que tratan de formar una asociación, el objeto que ha de tener el capital con que ha de operar esa sociedad, la formación de esa sociedad, el número de socios por medio de los pedidos de acciones, sus reglamentos, sus estatutos y el régimen de una administración. He aquí

los principales actos que llamo yo privados o preparatorios para una asociación, porque en efecto ellos deben existir precisamente... Ahora bien, hecho esto, me parece a mí llegado el caso de venir a efectuar los otros trabajos, es decir, los trabajos legales... Por consecuencia de esta teoría, yo deduzco que una sociedad anónima no puede recibir sanción legal, o una autorización legal, sin que presente el contrato, bien al legislador como sucede con los Bancos, o bien al Poder Ejecutivo, cuando el Poder Ejecutivo ha sido autorizado para conceder esas autorizaciones, es necesario presentar el contrato social al mismo tiempo que la solicitud que se hace para formar la sociedad, los estatutos y las cartas-pedido de acciones. Porque, ¿cómo el legislador que va a conceder una autorización en virtud de probabilidades existentes de formación de sociedad, podrá conocer si esta sociedad tiene todas las probabilidades de realizarse, si esto no consta por el número de los pedidos de acciones? Indudablemente que no tendrá base. Vendrían los individuos y dirían: vamos a formar una sociedad; pero la autoridad no tendría la conciencia de eso sin ver esas cartas de pedidos y si en efecto la sociedad presentaba garantía de realización».

Esta era la primera condición, por lo que habló de la segunda. Afirmaba que era necesario que la autoridad estableciese qué número de acciones bastaría para conceder la autorización. Y luego se refería a la tercera condición, cual la de saber cuándo la sociedad podrá emitir sus acciones. Nada de esto veía él en los artículos del proyecto, ya que se partía del principio de que el Cuerpo Legislativo debía intervenir en estas cosas.

Después de las consideraciones del doctor Vázquez Sagastume, volvió a hacer uso de la palabra el señor Fuentes, para demostrar, como lo demostró, que era impertinente aquello de quererlo hacer parte de la empresa al Poder Ejecutivo, cuando éste, en su Mensaje, sólo se limitaba a pedir autorización para expropiar. Sostenía, y con razón, que los solicitantes «iban a hacer un negocio propio, una vía férrea, cuya propiedad les iba a pertenecer», por lo que no debía aparecer el Poder Ejecutivo como contratante. Sostenía igualmente que «no podía autorizarse a los Duplessis, Nevía, etc., a formar tal sociedad, sin que primeramente llenaran los requisitos que se habían establecido en otras partes donde tenían existencia legal las sociedades anónimas».

El doctor Juanicó volvía a tratar el punto y a ilustrarlo con citas de lo que sucedía en Inglaterra, para manifestar su desacuerdo con aquello de convertirse el Poder Ejecutivo en policía para vigilar los rieles, carros y carretas, como lo pretendía el doctor Vázquez Sagastume. Cuando aquí habló, reconoció la preparación del doctor Arrascaeta, diciendo que una de las reflexiones hechas «mostraba lo que había meditado en el asunto de sociedades anónimas». Hizo un sofisma cuando sostuvo que el contrato ya hecho por el Gobierno con los empresarios estaba aprobado por el Cuerpo Legislativo, o que era un vínculo exis-

tente desde el momento de su celebración. Era un sofisma, porque precisamente de eso se trataba, dada la doctrina que él sostenía de la intervención legislativa. El mismo proyecto que se discutía, en el cual se establecían las condiciones del contrato a celebrarse, *previa autorización de la Asamblea*, demostraba el error del doctor Juanicó. En cambio, pensaba bien cuando sostenía que el estudio de los estatutos no era obra de la Cámara, sino que eso quedaba «al cargo del Poder Ejecutivo y que a él correspondía vigilar el que no hubiera en los estatutos cosa alguna inmoral».

El doctor Arrascaeta explicó brillantemente, otra vez, sus opiniones, con una firmeza de convicciones jurídicas que confirmaban la justicia del elogio hecho por el doctor Juanicó; agregando que «en algunas leyes modernas se establecían dos categorías en cuanto a la naturaleza de las sociedades, unas en que en el Poder Ejecutivo se delega la facultad de concederlas, previos los requisitos que han sido señalados; y éstas son las empresas de actividad pública, que no necesitan privilegio, y que se separan de otras, como son los canales de navegación, las empresas que requieren privilegio, los ferrocarriles que necesitan la sanción del legislador, y también para constituirse se establecen estos requisitos».

Y era en este momento, cuando lamentaba que no rigiera el Código civil del doctor Acevedo, «porque—decía—no nos veríamos aquí con ideas equivocadas sobre estas materias, y, sobre todo, sin esa regla segura que deben tener todos los ciudadanos para sus obligaciones recíprocas». Con este motivo recordaba que era ante el Poder Ejecutivo que debía presentarse «su contrato, su reglamento, su régimen de administración, para que el Gobierno lo revisara, su lista de subscriptores y demás». El doctor Arrascaeta, que había estudiado a fondo la materia, se encontraba fastidiado al ver aquello, por lo que terminaba recordando que ya había mocionado para que se introdujera eso. «Si se cree conveniente—decía—se adoptará, y si no, yo habré cumplido con mi deber al indicarlo y creerlo útil».

Los legisladores iban revelando sus conocimientos y aprendiendo a medida que avanzaban en la discusión. Creemos que quien se destacó por su exposición nítida y convincente fué el doctor Arrascaeta. El doctor Juanicó divagó bastante. Se veía que no tenía la completa independencia de ideas del doctor Arrascaeta. Estaba comprometido, sin duda, a sostener el proyecto. Lo quería de cualquier modo, convencido de que las cosas luego se perfeccionarían ante el Poder Ejecutivo. Recordaría que la carga se acomodaba en el camino, como en la carreta tucumana. Lo que le importaba era que se estableciera el ferrocarril. Es verdad que otro tanto deseaban, y así lo habían manifestado, los demás oradores.

Por fin, después de un largo cambio de ideas entre los señores Fuentes, Pérez (Antonio María), Díaz, Lerena (Avelino), Basáñez, Alvarez,

Cavia, Pagola y Juanicó, quedó eliminado el Poder Ejecutivo como contratante, debido en mucha parte a los esfuerzos constantes del señor Fuentes. Ya los espíritus estaban cansados, y se llegó a encontrar la fórmula, propuesta por el señor Avelino Lerena, que era más o menos la indicada por Díaz y Juanicó desde un principio. El Poder Ejecutivo quedaba autorizado «para conceder a los señores Duplessis, Navia, etcétera, el permiso para constituir una sociedad anónima con el fin de establecer un ferrocarril». Luego se aprobó lo relativo al capital de 240,000 *pesos*; al tiempo para empezar y concluir los trabajos, que sería de un año y treinta meses respectivamente, y a la integración de la tercera parte del capital dentro del año para empezar las obras (1).

IGNORANCIA Y MIEDO

La discusión continuó fuerte en la sesión del 11 de julio. Allí se sancionó la moción del doctor Juanicó para que los estatutos se presentaran al Poder Ejecutivo para su aprobación, los cuales, junto con el contrato de la sociedad, debieran inscribirse en el Registro Público de Comercio; lo mismo que el término de 99 años para la concesión de la vía férrea. Después de una nueva sesión (la del 12 de julio de 1859), se sancionó lo del tomarse por el Poder Ejecutivo veinticuatro mil pesos en acciones, y la facultad para expropiar las propiedades privadas por cuenta de la sociedad anónima, de acuerdo con la ley de 8 de julio de 1853.

Hasta aquí todo había andado muy bien. A lo menos el doctor Juanicó había sabido salvar los escollos. Su personalidad ya empezaba a ser fastidiosa. Pesaba demasiado su volumen intelectual entre aquella gente, mucha de ella ignorante, incapaz de comprenderle. En este asunto se había hecho sentir su dialéctica. Había tenido que asumir el rol de miembro informante de la Comisión, para explicar el articulado, y salvarlo de los ataques vehementes que le llevaban algunos, entre los cuales sobresalió el señor Antonio María Pérez, como se verá.

Ahora bien, había llegado el momento álgido, en el que iba a ponerse a prueba la paciencia del doctor Juanicó, a quien, por razones políticas, se le hostilizaba por cierta parte de la Cámara, en los momentos en que iba a constituirse la Comisión Permanente. Iba a discutirse el artículo que concedía a la sociedad «el derecho de servidumbre sobre las vías públicas que ocupaban los rieles, debiendo dejarse en ellas un espacio de veinte varas para el servicio común».

El debate lo inició el señor Pérez, persona completamente ignorante en la materia, como él mismo lo confesó. Sostuvo que eso era una donación, y que en Europa las vías férreas no iban por los caminos públicos. Declaró que votaría en contra del artículo. Es de recordarse

(1) Sesión del 9 de julio de 1859.

que el señor Pérez ya había declarado que «no sabía nada sobre la materia, que no había podido abrir un libro sobre ello» (pág. 486) y que se le había ido al bulto al doctor Juanicó diciéndole que esquivaba explicaciones porque tenía *miedo* de entrar al fondo del incidente (página 526). Entonces el doctor Juanicó supo colocar las cosas en su lugar, yendo hasta declarar que no tomaría más la palabra, ya que así se quería. «No se explicaba, de veras, por qué se tomaba la cosa con tanto calor.» «En el espíritu con que debemos discutir los intereses públicos, yo, no comprendo—decía—esa animosidad con que parece se quieren considerar ciertos asuntos—mal nacidos o sea de mala suerte—y que a todo trance son materia de una oposición en todo» (página 527). Luego hacía presente que se le decía que *¡tenía miedo!* y contestaba: «¡Por Dios! señor... concluyamos con ese modo de discutir. Por mi parte no lo seguiré. Puede hablar el señor diputado. Ya he demostrado que no tengo miedo y lo que opino sobre el negocio» (pág. 528). Y en efecto, el señor Pérez había hecho una plancha en el incidente que promovió, como consta en el Diario de Sesiones. ¡Por repetidas veces había afirmado que en el contrato con el Poder Ejecutivo se establecía que la Tablada se establecería en la Unión! Mientras tanto, en el contrato, que ahí estaba, ¡nada de eso se decía! El señor Pérez no tuvo el buen sentido de leerlo antes de decir aquello. Por lo demás, incurrió en ciertas vulgaridades, como aquello de recordar algún acto generoso realizado en beneficio de la Unión, para concluir por decir: «Yo, hasta ahora, a la patria no le debo nada, y la patria a mí, sí; me ha costado muchísima fortuna» (531). El doctor Juanicó creía, por otra parte, que la empresa fracasaría, y que era un error construir un ferrocarril en corto trayecto (533).

Estos antecedentes explican la actitud del señor Pérez. Él se oponía a que se tomaran las vías públicas. El doctor Vázquez Sagastume estuvo muy oportuno cuando sostenía que no se comprendía cómo no estableciendo la servidumbre sobre las vías férreas que cruzaban los rieles, podía establecerse el ferrocarril. El señor Pérez no había visto el trayecto que el ferrocarril del Oeste, en Buenos Aires, recorría por las calles, pues entonces no habría dicho: «Pero, yendo el camino férreo de aquí a la Unión por la vía pública, nadie puede usar del camino sino en los vehículos de la empresa; nadie puede andar a pie o a caballo. Luego ese terreno sale del uso de los vecinos para entrar al uso del particular; y esto, ¿qué se llama? Una enajenación, o una donación, más bien».

Lo curioso era que el señor Pérez tenía de su parte a los señores Fuentes y Palomeque.

SERVIDUMBRE

Fué interesantísimo el discurso que entonces pronunció el doctor Juanicó. ¡Con qué habilidad impugnó la palabra *servidumbre*, causan-

te de cuanto sucedía ! Sacarla del artículo, y colocar en su lugar una frase profana, era solucionar el punto. Bastaba con decir que la empresa podía «usar de la vía pública». Fué honroso el canto que hizo a Norte América por despreciar toda esa jerga jurídica de que nosotros éramos tan amantes, y con la que obstruíamos muchas buenas cosas. Él, volvía aquí a repetirlo, «no daba importancia, como los empresarios y algunas otras personas, al establecimiento del ferrocarril de que se trataba». Reconocía que la vía férrea vendría a establecer caminos, pues en el país no los había transitables.

No es posible dejar en el olvido párrafos como estos : «Más que la Europa en materia de ferrocarril han avanzado los Estados Unidos de Norte América ; allí es donde existe el modelo en esa materia ; allí es donde están dando hermosos resultados ; allí es donde existe lo práctico de lo que en Europa se ha admitido ; antes de establecerse en ciudades y poblaciones de ninguna clase, aun de cierto, ha entrado el comercio público, se dirigen caminos de fierro antes de otra clase de vías, y se sancionan libremente por los Estados. Luego, el modelo de la Europa no es buen modelo, no lo es porque en Europa mismo se ha imitado lo que se hace en los Estados Unidos... Pero insisto, y ya que antes me referí a los Estados Unidos, diré : que una de las cosas que más ha contribuído al desenvolvimiento de aquel país, ha sido precisamente el que se ha tenido muy poco respeto a las formas jurídicas, a la ejecución jurídica que vale esencialmente cuando se trata del derecho de sociedad, de leyes que son relativas a ese orden que es puramente civil. ¡ En cuanto al orden público, son fatales !... La jurisprudencia es fatal en mi opinión. Deseo evitar una discusión jurídica ; sólo trato de separar la expresión *servidumbre*, que, de veras, no la hallo de ningún modo necesaria» (págs. 548 y 549).

La Comisión aceptaba lo expuesto, pero el señor Fuentes se oponía, fundado en que «las vías públicas, por las leyes vigentes, están declaradas de uso común, y por ellas han adquirido los vecinos un derecho, es un derecho adquirido ; ¿ puede el Cuerpo Legislativo privar a los vecinos del uso que tienen de ese derecho para darlas a un particular que las utilice en su exclusivo provecho?» (pág. 551). Por lo demás, no se oponía a la concesión de la «servidumbre en las vías públicas transversales que atravesase o que debiese sucesivamente atravesar el ferrocarril».

Y luego arremetía el señor Pérez con argumentos peregrinos, curiosos, hijos de la ignorancia del asunto, o de la malquerencia política que en este instante comenzaba a dividirles, y cuyas manifestaciones iban a sentirse en el nombramiento de la Comisión Permanente y en el cambio de Ministerio con el general don Antonio Díaz a la cabeza. El señor Pérez nos decía, con toda seriedad : «Dejemos a las calles, vamos a los caminos. Se tiene el derecho de poner el camino de fierro por un lado de la vía pública, no por la vereda, por un lado, me-

dia vara de la puerta de calle de ese vecino ; ese individuo no puede tener un caballo en la puerta de su casa, no puede tener un carruaje, no puede hacer descargar una carreta de leña, porque el ferrocarril se lo impediría, no puede edificar, porque para edificar tiene que hacer uso de la calle : ¿por qué? Porque el camino de fierro se lo priva».

Estaban, como se ve, en el principio de estos asuntos. Es verdad que el mismo señor Pérez, en seguida, confesaba su ignorancia, una vez más, diciéndonos que «yo no entiendo nada de caminos de fierro, y para estudiar este punto he pensado mucho, he pedido datos a Buenos Aires : no me los han dado porque allí no los hay ; he preguntado entonces aquí a individuos europeos. Y yo, que tengo estos antecedentes, que he estudiado y he dicho : señor, vengo con conocimiento en el asunto, este proyecto es malo, la idea es buena, pero el proyecto es malo, ¿yo seré opositor? ¿seré opositor a lo bueno? Tal vez yo, que me opongo al proyecto, sea más amigo del adelanto que los que lo apoyan. Yo quiero lo bueno, no quiero lo malo» (pág. 553).

El doctor Juanicó, al oír aquello, y saber cuál era la fuente donde había bebido sus conocimientos el señor Pérez, le decía : «¡Muy laudable!...» no sabemos si con ironía, o seriamente, al ver a aquel legislador que confesaba no conocer la cuestión, pero que se atrevía con tal bagaje y con tan curiosos argumentos a discutir con quien tenía nutrición intelectual de primera clase. Aquel ciudadano se reiría por dentro ; mientras con arte compasivo y una paciencia a toda prueba, seguía luchando y enseñando. Es verdad que él se daría cuenta de que no todos eran ignorantes, sino que la oposición era a su persona por razones de política de actualidad.

El señor Pérez redactaba su moción en esta forma : «Artículo 4.º : Concédese a la sociedad el derecho de servidumbre sobre las vías públicas que atraviase el ferrocarril».

Luego, el doctor Palomeque entró al debate para sostener las ideas del señor Pérez, aunque empleando argumentos jurídicos. No pretendía establecer un juicio de jurisprudencia, porque no se consideraba con aptitudes para ello, ni ser ése el lugar aparente ; pero hacía presente que todo el mundo sabía lo que era servidumbre. Si se concedía «a la sociedad el derecho de servidumbre sobre las vías públicas—decía—sin determinar cuáles son estas vías, quiere decir que los empresarios tienen el derecho de establecer el ferrocarril en la vía que mejor les convenga tener el uso, o el derecho de servidumbre, porque siempre sería más cómodo poner el ferrocarril en la calle real de Artigas hasta Maroñas ; admite que la empresa no tendría que gastar un medio, más que venir a expropiar en una línea recta, por ejemplo, de la plaza de Cagancha hasta la Unión. Sería más cómodo eso indudablemente». Si se sancionaba el artículo, sostenía que al Gobierno no le quedaba ni el derecho directo ni el derecho útil sobre la vía pública ocupada por el ferrocarril, durante los 99 años de la concesión. No po-

día ir el ferrocarril por una vía pública donde existía población, por el peligro que ello entrañaba. No daba fuerza a los casos citados de Buenos Aires, Brasil y Estados Unidos. «No era muy exacto esto—decía,—pues aun cuando la comparación no es muy exacta o no tiene nada de regular respecto de nosotros, no obstante yo diré lo que he oído a personas que han viajado : en París hay ferrocarril que para no interrumpir la vía pública, sale por subterráneo (y sobre casas de cinco y seis pisos, interrumpía el doctor Juanicó). De esta interrupción se aprovechaba el orador para contestar que entonces él y sus compañeros tenían razón, «y el señor diputado, no ha tenido ninguna. Si es exacto esto, y si lo sabía el señor diputado, no ha debido citarnos desiertos : debía habernos citado las calles públicas». Concluyó recordando que el doctor Juanicó había hecho un reproche, por cuya razón se decía : «Yo no sé qué vendríamos a hacer aquí los Representantes, si tenemos que cumplir con nuestros comitentes y no tuviésemos el derecho de observar y proponer : ¿callarnos la boca para que un solo orador hubiese en la Cámara? Me parece que al señor diputado por Montevideo no le había de gustar hacer este papel en la Cámara. Las sanciones mudas tienen un carácter pésimo en todo sentido. Y, como el doctor Juanicó *hiciera una interrupción en francés que no se oyó*, dice el acta, pero que sin duda la oyó el orador, aunque no así el taquígrafo, el doctor Palomeque, con esa energía natural que ponía en sus cosas personales y públicas, tuvo una respuesta en que jugaba con el nombre del interruptor, llamado Cándido. «Me parece—terminaba diciendo—que las observaciones del señor diputado son demasiado *cándidas*... Yo no acepto, señor diputado, esos reproches sino para contestarlos. Yo, cuando hago oposición, la hago como la hacen los hombres de corazón. El proponer una enmienda, el decir «este artículo es malo», no es oposición ; eso es querer el bien de la patria, es querer el crédito de la octava legislatura ; y sería bueno que no nos hiciese esa injusticia».

El doctor Juanicó, que empezaba a sentir a su alrededor una fuerza nueva, acostumbrado, como estaba, a dominar en aquella Cámara, y aun fuera de ella, dió las explicaciones del caso. Ya no veía en el doctor Palomeque al hombre que había comenzado por mirar por encima del hombro. Había sentido lo que valía. Aquella Cámara se dividía, pues hombres como Arrascaeta, Pérez, Fuentes, etc., empezaban a subírsele a las barbas al doctor Juanicó, y a discutirle sus opiniones. Entre ellos estaba el doctor Palomeque, que se las había tenido tías con el doctor Juanicó desde el día en que éste tomó asiento en la Cámara, como se ha visto en estas páginas. No siempre la razón estuvo de parte del doctor Juanicó, quien, como en el caso de las familias Solsona y Lavalleja, hubo de reconocer, con esa humildad del genio, que su primitiva opinión no era del todo exacta. El doctor Juanicó tenía eso de bueno, que sabía reaccionar. Era buen político, de espíritu maleable, y no se aferraba a sus opiniones cuando creía que convenía modificar-

las. Tenía talento para saber evolucionar. Su paciencia era notoria, sin que esto quiera decir que su energía de carácter no se revelara llegada la oportunidad. Al notar que la tormenta arreciaba, se adelantó a proponer lo siguiente: «Concédese a la sociedad, para el establecimiento de los rieles, el uso de las vías públicas hasta salir de la población al campo abierto, no debiendo obstar al tránsito, y quedando para el servicio común el espacio de veinte varas».

Esta redacción, salvo lo de *campo abierto*, la aceptaba el miembro informante de la Comisión, doctor Vázquez Sagastume. Después la aceptó aún con ese agregado. Por su parte los señores Fuentes, Palomeque y Pérez, se oponían. El segundo consideraba que «la redacción era peor que la que existía en el proyecto, porque por éste se daba la servidumbre hasta la Unión, y por esa nueva redacción se daba más allá de la Unión; de manera que se aumentaba la gracia».

TAPUJOS DEL SEÑOR PÉREZ

Pero el señor don Antonio María Pérez, que estaba nervioso, no se limitó a eso, sino que en su entusiasmo llegó hasta donde no debía, ni pudo ser su intención, como el mismo doctor Juanicó lo reconoció. Él decía: «¿En dónde está el campo abierto de aquí a la Unión? Seamos más claros, no estemos con tapujos; digamos: se concede el uso del camino, no de aquí a la Unión solamente, sino hasta más afuera».

El doctor Juanicó soportó el dardo, y con toda paciencia y cultura explicó lo de *campo abierto*. Se refería a «fuera del terreno edificado en Montevideo, en el Cordón y en la Unión». No se oponía a que así se dijera, ni por un momento. «Repito—decía—que la idea que yo he tenido en vista, es precisamente la última que ha indicado el señor diputado, y no cosas de *tapujos*. ¡Por el amor de Dios! no hagamos uso de semejantes términos, que son demasiado miserables; es como lo de miedo... ¡Tapujos!... ¿a qué? Es ofender a los diputados. ¡Tapujos!... ¡por Dios! Luego hay que tapar. ¿Pero qué hay que tapar?»

«Lo sabrá el señor diputado», le interrumpía el señor Pérez. «Lo sabrá el que (1) lo indica», respondía rápidamente el doctor Juanicó; y ya excitado ante ataque tan imprudente, provocativo, en el que se veía la intención de herir, no por el asunto del ferrocarril, pues éste no era motivo para ello, sino por alguna otra causa oculta, que ahí fermentaba, el doctor Juanicó expuso, indignado, pero sereno y respetuoso: «Y desafío que exprese qué es lo que se trata de tapar, porque eso es ofensivo. Y de veras creo que es una alusión, no más, porque no comprendo que esté en la idea del señor diputado. Le hago esta justicia o me la hago a mí mismo, en el concepto que supongo que la tenga

(1) Debió decir *quien*.

el señor diputado : de no querer emplear tapujos, así como lo dije precisamente del mismo modo ayer, tratándose de miedo».

Y dicho esto, dueño de sí mismo, con una tranquilidad envidiable, continuaba explicando su pensamiento, y exponiendo por qué en Europa se compraba la tierra. Allá se trata de introducir los caminos a los centros de las grandes poblaciones, por lo que pasan por encima de edificios que tienen cinco y seis pisos de altura. «A los centros de población—decía,—y donde precisamente no es vital el que existan ferrocarriles ; porque vital es donde no existen otros medios fáciles, adecuados, de comunicación ; en ninguna parte más vital el que se establezcan caminos que en los desiertos. Allí donde la población existe, que se abran ellos mismos salidas. ¡ Oh ! ahí lo hacen sin necesidad de que entre el legislador a facilitar, y sin que sea necesaria concesión alguna. Las concesiones son necesarias allí donde la acción individual no baste de ninguna manera para establecer los objetos generales» (página 562).

Fué aquí cuando hizo presente que antes de concluir la discusión del proyecto, propondría a la Cámara un artículo sobre la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo ; detalle que mencionamos por la influencia que debió tener en la suspensión del debate.

El doctor Palomeque sintió la necesidad de manifestar que la construcción de ferrocarriles era «vital en los pueblos europeos, más que aquí—decía,—porque las inmensas poblaciones necesitan para vivir esa facilidad de tránsito». La vida de España lo atribuía a eso.

Un tiroteo se produjo entre los doctores Juanicó y Palomeque, dando por resultado que el primero hiciera una declaración terminante, ya entrevista en uno de sus párrafos anteriores, la que tuvo una influencia decisiva en el asunto. Dijo que creía que era «absolutamente inverificable el ferrocarril, si hubiere de imponerse a la empresa la obligación de pagar las casas que hubiesen de encontrarse en el tránsito desde la plaza de Cagancha, no ocupando las vías públicas, hasta poderse poner en posición de poder marchar sobre el campo». Y, «como había entendido que la anchura de las vías públicas daba para eso, no encontraba inconveniente que dentro de esos límites, que deberían reglamentarse con la mayor precisión por el Poder Ejecutivo, hubiese desventaja, y sí ventaja en hacer la concesión, ventaja para los propietarios y para el público en todos conceptos».

Apenas el doctor Juanicó declaró esto, y ya el señor don Antonio María Pérez exclamó : «¡ He aquí el tapujo explicado ! Yo sabía que era ésa la razón, desde el primer día, de que si no hay servidumbre o donación de las vías públicas para el ferrocarril, aunque se dé la ley, no se establecería», lo que era apoyado por el doctor Palomeque. El señor Pérez aseguraba que «si no se había dicho, era por ocultarse». Afirmaba que «la empresa era mala, y que no había necesidad del ferrocarril a la Unión, y que no era de necesidad primera». Llegaba has-

ta declarar que la construcción del ferrocarril «era por negocio, por ganar plata, por asegurar a capitales muertos el interés del 1 ½ %; que eso era una especulación». «Tienen—decía—un capital muerto, no sabían en qué emplearlo, y han dicho: vamos a emplearlo en un ferrocarril, y en lugar de emplear cien mil duros emplearemos veinte mil. ¿Por qué? Porque el legislador nos da tierras de balde. Vamos a despojar de un derecho que tiene el público, para hacer una donación a una empresa particular. ¿Con qué facultad?»

Y hasta aquí llegaba la discusión, cuando tres Representantes se retiraron enfermos. La sesión terminó (1).

Al día siguiente volvieron a reunirse, pero ya no asistió el doctor Juanicó. Faltaba el alma de la discusión. Estaba enfermo. Entonces se mocionó para que el asunto se tratara en el período próximo, porque las sesiones ordinarias iban a concluirse. Además, el doctor Arrascaeta recordaba que el doctor Juanicó había ofrecido presentar un artículo al final de la ley, por lo que era del caso esperar su concurrencia. Por su parte, el doctor Lapido hacía presente que aunque la Cámara resolviera el asunto, el Senado no tenía tiempo para ocuparse de él. El doctor Palomeque y el señor Fuentes apoyaban lo expuesto, mientras el señor Moreno era de parecer contrario. Sin embargo, la Cámara resolvió continuar la discusión. Y así se hizo (2).

Como es natural, la falta del doctor Juanicó hizo decaer el debate. Los adversarios quedaban dueños del campo, a lo menos en cuanto se refería a la oratoria. Pero, asimismo, después de un cambio de ideas, la Cámara quedó sin número. De hecho, pues, el proyecto quedó aplazado para el período próximo. ¡Y esto nunca llegaría, resultando muerto el primer proyecto de ferrocarril en la República! (3).

¿Tenían razón quienes lo combatieron, sosteniendo que no podía acordarse la vía pública para la colocación de los rieles?

En tesis general, es indiscutible que no debe concederse el uso de la vía pública, por los muchos inconvenientes que esto trae para el movimiento comercial; pero, la cuestión no era de *principio*, sino de *conveniencia* y *necesidad*. Es así cómo se ha resuelto en todos los paí-

(1) Sesión del 12 de julio de 1859.

(2) Sesión del 13 de julio de 1859 (segunda sesión, de tarde).

(3) Debemos recordar que en 1857 el señor don Roberto Rowley propuso un ferrocarril desde Montevideo al Brasil (sesiones del 10 y 13 de mayo de 1857, Cámara de Representantes). Asimismo el Poder Ejecutivo remitió al Cuerpo Legislativo un proyecto de construcción de un ferrocarril de Maroñas a San José. Lo llamativo es que la concesión del ferrocarril al Brasil, uniendo todos los pueblos del interior, se había hecho por el Poder Ejecutivo por ocho años, y que el señor Rowley ocurrió al Cuerpo Legislativo para pedir se aumentara a 99 años. La Cámara de Representantes así lo resolvió, pero el Senado, sin informe escrito, y con cuatro palabras del señor Lara, fundado ¡cosa estupenda! en que lo «juzgaba inútil», decía, «por cuanto falta en el país la población, que es el alimento principal de estas empresas», lo desechó. (Sesión del Senado del 30 de junio de 1857).

ses. Al respecto, no hay una regla fija. Era una argumentación falsa aquella de que el público había adquirido el derecho de servidumbre por el uso de la calle. El legislador podía establecer la servidumbre a favor de una empresa, si *convenía y era necesario*; tomándose luego por el Poder Ejecutivo, en el contrato correspondiente, las medidas para la seguridad pública y el tránsito de la vía por el costado libre. En ciudades despobladas como Montevideo, en aquel entonces, nada se hacía de más ni de menos con conceder el camino a la Unión. Los capitales necesitaban ser alentados. Ya vendrían los tiempos en que la densidad de la población hiciera cesar ese estado de cosas, como sucedió en Buenos Aires con el ferrocarril del Oeste y el del Retiro, que atravesaban las calles de la ciudad. Pero, en lo que estamos conformes, era en aquello de ser ridículo un ferrocarril de Montevideo a la Unión. No se sentía la necesidad, como decía el señor Pérez, y como el mismo Juanicó lo expresaba (1).

De todos modos quede aquí constancia de cómo los hombres de aquella época luchaban.

(1) De esta discusión surgió el proyecto que al año siguiente presentó el doctor Arrascaeta sobre las sociedades anónimas. (Sesión del 5 de mayo de 1860).

LA ADMINISTRACIÓN DEL 56

LA ADMINISTRACIÓN DEL 56

Iba a terminarse el gobierno del señor Pereyra. Las sesiones ordinarias del Cuerpo Legislativo se clausuraban, procediéndose en seguida a nombrar la Comisión Permanente. En este acto hubo un criterio restrictivo. ¡Ya no había, al parecer, para qué guardar consideraciones con el gobernante que se iba! En su consecuencia, sólo por cortesía, se puso a su hijo Julio C. Pereyra en dicha Comisión, inutilizado en medio de los demás elementos adversos; persona, por otra parte, de muy cortos alcances políticos. No se llevó al doctor Palomeque, porque se conocían sus facultades. Esa Comisión Permanente quedó compuesta de los señores Pereyra, Llerena (Luis), Caravia (Bernabé), Errazquin e Iturriaga, como titulares; y de Fernández Echenique, Pérez (Martín), Alvarez (Javier), Aguirre (Atanasio) y Cavia, como suplentes. En la composición de ella se vió la influencia del doctor Juanicó, y de las ideas restringidas de aquellos hombres, por más que su personalidad brilló por la ausencia, a causa, sin duda, de la enfermedad de que hemos hablado antes. De aquí que el Poder Ejecutivo iniciara una lucha sin cuartel, separando al ministro Nin Reyes, a quien se le consideraba vinculado con Juanicó colocándose al frente del Ministerio al general don Antonio Díaz (1).

La obra gubernamental tenía su contorno satisfactorio. El señor Pereyra había recibido el país anarquizado y esquilado. Con voluntad férrea había levantado el principio de autoridad constitucional y organizado la Hacienda. Ahí quedaba el arreglo de la Deuda y de los perjuicios de guerra, las leyes sobre rentas de Aduana, honores al general Artigas, los propósitos de dotar al país de un ferrocarril hasta el Brasil, organización de la justicia, rentas departamentales, pensamiento de dotar al país del Código Civil redactado por el doctor Acevedo (pág. 791, año 57), leyes de colonización, de regularización del cobro de los impuestos, de honores a ciudadanos como don Joaquín Suárez, de valizamiento del Uruguay, de hipotecas, de arreglo de la sociedad del 48, de relaciones con el Brasil, de organización banca-



EL CORONEL DOCTOR
DON JOSÉ GABRIEL PALOMEQUE
EN 1860

(1) Entre los muchos errores contenidos en la obra del señor Díaz, se encuentra el hecho falso de que el doctor Palomeque pertenecía al círculo del doctor Juanicó.

ria, de tierras públicas, de monedación de oro, plata y cobre, de contrabando, de honores a Rivadavia, de minas, de revisión de la Constitución, de Banco Mauá y Comercial, de saneamiento de la ciudad de Montevideo, de catastro, de mercados, de deudas internacionales, de Aduana, de Montes públicos, de Guardias nacionales, de protocolos de escribanos, de inmigración, de modificaciones al Tratado de Comercio con el Brasil, de presupuesto general de gastos, de recuperación de las rentas de Aduana, de fiestas cívicas, de honores a los próceres nacionales, de creación de pueblos, de alumbrado a gas, de neutralización del territorio, de patentes, de Contribución Directa, de papel sellado, de faros, etc.

Ahí estaba la obra esbozada e iniciada en 1856, y realizada, en parte, en 1860, en medio de cruentos sacrificios, en los que se puso a prueba la energía de aquellos hombres y su amor a la tierra nativa. El nuevo gobernante, que lo sería don Bernardo P. Berro (1), colaborador sesudo en esa administración, encontraba el terreno preparado, e iba a recoger sus buenos frutos. La administración del señor don Gabriel Antonio Pereyra mucho tenía, pues, de que enorgullecerse. Y mucho quien, como el doctor Palomeque, le consagró todas sus energías y desvelos pensando en la felicidad de la nación (2).

(1) He aquí algo relativo al nombramiento de Berro: Dice así:

«Doctor:

»En vista de la suya, y conociendo cuán importante es el que nos entendamos sobre el mejor desempeño de nuestros deberes como representantes y como patriotas, digo a usted que a la hora indicada y en el local que se me avisa seré con usted.

»Sin más, saluda a usted atentamente S. S. S. Q. B. S. M.,

S/c febrero 24/860.»

»FRANCISCO F. FISTERRA.

»Montevideo, febrero 24/860.

»El Presidente de la República invita a usted a una reunión de señores Senadores y Representantes en su casa habitación, mañana a las dos de la tarde, para tratar de asuntos de interés público.

»Saluda a usted atentamente,

»A. DE LAS CARRERAS.

»Señor Representante doctor don José G. Palomeque.»

(2) Lo condenable fué que, muerto ya políticamente el señor Pereyra, se desechara recién el proyecto que lo declaraba brigadier general. Este título debiera presentársele el día de su cese en la presidencia. El proyecto así sancionado en la Cámara de Representantes, el 27 de mayo de 1858, estaba aún por discutirse en el Senado, después de terminado el mandato presidencial. El señor Pereyra, además, estaba gravemente enfermo, pues murió el 16 de abril de 1861, sin ocupar su asiento en el Senado para donde fué electo. Los señores Juan José Ruiz, José Lozano y Juan Miguel Martínez se habían expedido favorablemente en julio 3 de 1858, pero el asunto volvió a tratarse en la sesión del 5 de marzo de 1860. En ésta fué desechado el proyecto, y así ratificado su rechazo en la del 9 de marzo. Políticamente considerado el hecho, no tiene defensa. Fué un acto indigno de quienes habían usufructuado una situación política. Con este rechazo en nada amenguaban la participación que habían tenido en los sucesos. Por lo demás, es sabido que el señor Pereyra había rechazado esos honores. Para darse una idea de la restricción con que procedieron los hombres en esos momentos, basta leer las sesiones del Senado del 19, 22 y 23 de abril de 1861, al ocuparse de los honores a tributarse al señor Pereyra en la hora de su muerte.

LA AMNISTÍA POLÍTICA Y LA VENGANZA DE QUINTEROS

INTERPELACIÓN AL PODER EJECUTIVO SOBRE AMNISTÍA POLÍTICA

(1860)

Los sucesos de 1858 tenían alejados del país a algunos ciudadanos. Ya durante la administración del señor Pereyra se había permitido el regreso de aquellos menos comprometidos, mientras otros recibían sus sueldos aunque permanecieran en el destierro (1).

Ahora bien, uno de los primeros actos del Gobierno del señor Berro, fué tirar un decreto por el cual declaraba que, «habiendo cesado los motivos que hicieron necesario el alejamiento de ciertos individuos, dejaba sin efecto las medidas gubernativas que ordenaron su extrañamiento» (2). Junto con este decreto, enviaba al Cuerpo Legislativo un proyecto de ley, por el cual «quedaban amnistiados todos los individuos que habían tomado parte en los movimientos subversivos de años anteriores», debiendo «los ex jefes militares establecer su residencia en el Departamento que el Poder Ejecutivo designare a cada uno, si no prefirieran permanecer en la capital».

Es de advertirse que todos los hombres civiles de importancia estaban en el país, como Mateo Magariños Cervantes, Joaquín Suárez, Pedro Bustamante. Sólo permanecían fuera de él caudillos como Flores, Caraballo y Carabajal (3).

Ahora bien, el doctor Arrascaeta creyó del caso interpelar al Po-

(1) He aquí lo que decía el Poder Ejecutivo: «Dispuesto el Gobierno a mantener lejos del país, en el interés mismo de su paz, aquellos espíritus irreconciliables con el orden y el imperio de las instituciones, ha tendido una mano generosa, y ha abierto las puertas de la Patria a todos los que, sin haber tomado una parte muy principal en los desórdenes anteriores, solicitaran regresar a ella, prometiendo que no contribuirán en lo sucesivo a perturbar el reposo que felizmente le aseguran sus leyes.» Mensaje del Poder Ejecutivo de fecha 15 de febrero de 1860).

(2) Sesión del 31 de marzo de 1860.

(3) Es conveniente dejar constancia de cómo el general Flores salió del país en 1856. Se dirigió a la Asamblea General y expuso que: «conviniendo a los intereses del país y a los míos particulares mi ausencia al extranjero por algún tiempo, vengo a Vuestra Honorabilidad a pedirle se digne concederme la venia necesaria para efectuarlo en virtud de lo dispuesto por el artículo 81 de la Constitución del Estado. Con este sacrificio doloroso creo hacer un nuevo servicio a mi querida patria, proporcionándome también el reposo de que tanto necesito.» Esta solicitud fué destinada a una Comisión Especial, compuesta de los senadores Lara y Lasala, y Representantes Zás, Palomeque y Fernández (Román). La Comisión se expidió concediendo la licencia, y «reconociendo el Cuerpo Legislativo los sentimientos de abnegación y de patriotismo que la mo-

der Ejecutivo para que explicara quiénes eran esos individuos a que aludía el decreto, pues «no sabía—dice—a qué medidas se refiere, desde que todas habían merecido la aprobación del Cuerpo Legislativo, deduciendo de aquí que habiéndose tomado aquéllas con acuerdo suyo, no podían declararse sin efecto sin su participación». Encontraba vago el decreto en lo dispositivo. «Indudablemente—decía—el país ha de estar inquieto, y esta Cámara también (y mucho), no pudiendo saber qué clase de individuos son esos a quienes se permite la vuelta al país en momentos en que entra la República en una era nueva de paz y de adelanto; en que la atención del Ejecutivo ha de contraerse a la reorganización administrativa del país y al afianzamiento de ese orden; ha de inquietarse, digo, de que vengan al país ciertos hombres (puesto que no se puede decir quiénes son), ciertos hombres que el país conoce, que son capaces de todo, continuos perturbadores del orden público. Permitir que vengan al país los antiguos redactores de *El Sol*, de *La Estrella*, el ex redactor de *El Nacional* y jefes que fueron alejados del país, que vendrían primero conmoviendo la paz pública, atacando al Gobierno en el interior y comprometiéndolo en el exterior; vendrían dañando, por eso mismo, a su crédito, a la riqueza pública, muy en progreso en el país, y acabarían por abrir una ancha brecha, sino por conculcar las instituciones, que tantos sacrificios ha costado mantener en la situación en que se encuentran.»

El señor ministro de Gobierno, doctor don Eduardo Acevedo, en presencia de sus colegas don Tomás Villalva, de Hacienda, y coronel don Diego Lamas, de Guerra y Marina, manifestó que «entre los individuos que había fuera del país había dos categorías; una, la de aquellos que han tomado parte en los movimientos subversivos de los años anteriores. Respecto de éstos, que tienen pendiente sobre sí la espada de la ley, el Poder Ejecutivo no puede hacer nada; ya sea que hayan salido del país en virtud de órdenes gubernativas, sea que hayan salido espontáneamente, el Poder Ejecutivo no se mete con ellos, por la razón muy sencilla de que el Poder Ejecutivo no puede protegerlos. Ellos vendrán, y si son culpables, serían acusados, juzgados y condenados. Hay otros individuos que no han tomado parte en movimientos subversivos, y que existen, sin embargo, fuera del país. En-

tivaban.» Durante la discusión, el señor Vázquez sostuvo que era inconstitucional lo que se hacía. El doctor Palomeque contestó que «en nada se alteraba la Constitución desde que el general Flores venía a pedir la licencia ante la Asamblea; que, si ésta creía que hubiera fundamento para acusar la Presidencia de aquel entonces, se le negara en buena hora; pero, en caso contrario, debía acordársela». El señor Lasota sostuvo lo aconsejado, en pugna con los señores Vázquez y Pedro Bustamante. Votada la Minuta de Decreto, fué aprobada. Así salió el general Flores del país. (Sesión de la Asamblea General del 14 de julio de 1856). El 30 de junio de 1859 fué borrado del escalafón del ejército, a consecuencia de haber pasado a prestar sus servicios al Gobierno de Buenos Aires. (Obra de Díaz, página 236, tomo x).

tonces el Gobierno dice : «habiendo cesado los motivos que hicieron necesario el alejamiento de ciertos individuos, se declara que quedan sin efecto las disposiciones gubernativas que de aquí los alejaban». Para esos culpables recordaba que estaba el Cuerpo Legislativo, al cual competía la amnistía. No creía que debía entrar a hablar del peligro que podría traer para el país la vuelta de los redactores de *El Sol Oriental*, de *La Bruja* y *El Nacional*. «Yo me avergonzaría—decía—de declarar, como ministro del despacho, que el Poder Ejecutivo de la República, y más, que la Honorable Asamblea General tiene miedo, ve comprometida la paz pública porque vuelvan el redactor de *El Sol*, *La Bruja* y *El Nacional*.»

Estas manifestaciones encontraban eco simpático en la barra. El doctor Acevedo no creía del momento emitir sus opiniones sobre la amnistía, por no estar en discusión. Sin embargo, no dejaba pasar la ocasión sin decirnos : «todo el bien que para el país resultaría de que en el exterior se supiera que realmente teníamos confianza en nosotros mismos, que realmente sabemos—decía—que los pocos hombres que están en el exterior no pueden causarnos mal y de que llegase esa noticia por el paquete : que tan consolidado consideramos el orden, que decimos : ¡ vuelvan !» (1).

Al doctor Arrascaeta no le satisficieron las observaciones del ministro. Persistió en lo que había expuesto, bordando algo alrededor de la amnistía y de las consecuencias del regreso al país de los eternos perturbadores. Quería que el Poder Ejecutivo explicase a qué individuos se refería el decreto, para salvar los temores, pues, decía, «mientras no se haga esto, con esa medida así general y vaga, el país se inquietará, porque el país, más que medidas políticas, espera medidas administrativas».

Por su parte, el doctor Acevedo hacía notar que «para los individuos culpables viene el Poder Ejecutivo a pedir a la Honorable Asamblea General que se les conceda la amnistía ; pero mientras la amnistía no se les conceda, vendrán, y se expondrán a los peligros que son consiguientes a todos los hombres que han faltado a sus deberes». Sostenía que el Poder Ejecutivo no tenía necesidad de la autorización de la Asamblea para dejar sin efecto las medidas de seguridad por él adoptadas, y luego aprobadas por la Asamblea. Y esto, porque en ese caso el Poder Ejecutivo no pide la suspensión de ningún artículo constitucional : hace sólo uso de sus prerrogativas, porque el Poder Ejecutivo las tiene también con arreglo a la Constitución de la República. Afirmaba que «el orden estaba consolidado, y que si los desórdenes se repitiesen, y hubiese diarios licenciosos, el Poder Ejecutivo tenía la voluntad y los medios de someter a esos hombres a la línea del deber».

El señor Fuentes estuvo oportuno cuando decía que si había inocentes, no veía la eficacia que pudiera tener el decreto, porque «esos

(1) Sesión del 31 de marzo de 1860.

individuos inocentes podían venir al país». Ahora, para los alejados, de acuerdo con la Asamblea, no estaba, según él, facultado el Poder Ejecutivo para proceder por sí, sino que ellos estaban comprendidos en el proyecto sobre amnistía, lo que aprobaba el ministro. El orador recordaba el destierro de Gómez, en 2 de noviembre de 1857, los decretados el 10 a 12 de diciembre del mismo año, y 10 de julio de 1859. Deseaba saber si a éstos se refería el decreto. Esperaba que se lo dijera el ministro.

El doctor Acevedo volvió a explicar el asunto sosteniendo que el Poder Ejecutivo no había confundido, sino distinguido perfectamente. Ha dicho: «o necesitan amnistía, o no necesitan; si necesitan, esperen a que el Poder Legislativo se pronuncie, porque es el único que puede dar la amnistía; si no están en el caso de esperar la amnistía, pueden venir. Se dirá: ¿quién hace la distinción?... Ellos tendrán buen cuidado de hacerla; no vendrán sino los que estén seguros de estar comprendidos en ese caso».

Oídas estas explicaciones, y retirados los ministros, el señor Fuentes presentó una Minuta de Comunicación, por la que se rogaba al Poder Ejecutivo suspendiera los efectos del decreto hasta tanto el Cuerpo Legislativo resolviera sobre el proyecto de ley de amnistía. Se alegaba la doctrina de que el Poder Ejecutivo no podía de por sí dejar sin efecto las medidas aprobadas por el Cuerpo Legislativo. La Minuta fué votada por todos, menos por el señor Aguirre. Este señor sostenía, y con razón, que el Decreto (no obstante lo dicho por el doctor Acevedo) se refería a los individuos sobre los cuales no se hubiera dado cuenta a la Comisión Permanente o a la Asamblea, lo que fué rebatido por el doctor Arrascaeta. La interpretación que hacía el señor Aguirre era lógica y racional.

Pasada la Minuta al Poder Ejecutivo, éste inmediatamente la contestó. En ella decía que la Constitución establecía en el artículo 136 que nadie podría ser penado sin forma de proceso y sentencia legal, pero que el Poder Ejecutivo, en uso de las atribuciones que le confería el artículo 81, *en casos graves e imprevistos*, de conmoción interior o ataque exterior, procedería a la prisión de uno o más individuos. Entonces tenía que dar cuenta inmediatamente a la Asamblea, estando a su resolución. «Hay necesidad—decía—de que la Asamblea apruebe la medida, pero cuando el Poder Ejecutivo cree que la prisión debe cesar, no necesita para nada de la autorización de la Asamblea General. La razón es evidente. La autorización se necesita para salir del orden legal, para tomar medidas extraordinarias; pero es inútil para volver a él, para entrar al estado normal.» El Poder Ejecutivo no creía haber invadido atribución alguna. Esa era su convicción más íntima, por lo que esperaba que esas explicaciones satisficieran a la Cámara (1).

(1) Sesión del 9 de abril de 1860.

El decreto quedó subsistente y el asunto no tuvo mayores ulteriores, por lo que los espíritus se prepararon para la gran batalla parlamentaria a librarse cuando se discutiera el proyecto fundamental sobre la amnistía de los delincuentes políticos.

LEY DE OLVIDO

El Poder Ejecutivo pasó un Mensaje al Cuerpo Legislativo acompañando la *ley de olvido*, como se la llamó, a imitación de la del gran Rivadavia en Buenos Aires. El señor Berro se daba cuenta de lo que el país exigía, y quería inaugurar su administración con un gran acto que acallase las resistencias y calmara definitivamente las pasiones exaltadas. En su consecuencia, se dirigió al Cuerpo Legislativo pidiéndole que en uso de la 14.^a atribución del artículo 17 de la Constitución, declarara amnistiados a los individuos que habían tomado parte en los movimientos subversivos de los años anteriores. Se fundaba para ello en que estaban «afianzados sólidamente el orden y las instituciones, merced a grandes y conocidos esfuerzos, por lo que no podía haber peligro para la tranquilidad pública en detener la acción de la justicia respecto de los individuos que se habían hecho culpables de aquellos actos. El Poder Ejecutivo esperaba que esos individuos, conociendo el error en que incurrieron, observarían en adelante los deberes impuestos por la Constitución. «Pero—decía—si desgraciadamente no fuese así, el Poder Ejecutivo tiene la voluntad y los medios de hacerlos entrar en la senda del deber. A tal respecto, será inexorable» (1).

Ya hemos indicado los términos del proyecto. Por él se amnistiaba a todos, debiendo los ex jefes militares establecer su residencia en el Departamento que el Poder Ejecutivo designara a cada uno, si no prefiriesen permanecer en la capital.

La Comisión Especial del Senado, compuesta de los señores José Lozano y Juan A. Fernández, no sólo adhirió a lo expuesto por el Poder Ejecutivo, sino que amplió mucho más el pensamiento, suprimiendo lo referente a la residencia de los ex jefes militares. Sostuvo que el proyecto debía limitarse a declarar la amnistía, sin condición alguna. «La amnistía—decía la Comisión—no puede dejar subsistir ninguna pena, porque entonces no sería una amnistía, sino una gracia especial, una conmutación de pena: la amnistía implica rehabilitación completa; el amnistiado es tan puro a los ojos de la ley, como si jamás hubiera cometido delito alguno. La amnistía no es solamente el perdón leal y absoluto; es algo más, es a la vez, el perdón y el olvido. La amnistía, después de las desgraciadas revueltas por que ha pasado nuestro país, es una necesidad de alta política, pues viene a ser un re-

(1) Diario de Sesiones del Senado, del 21 de abril de 1860.

medio a los males causados por las guerras civiles, y el mejor camino para asegurarse después de la victoria, vencidos y vencedores». Así, fundado en altas y nobles consideraciones, terminaba declarando que la amnistía «será para los orientales tan hijos de nuestra patria como nosotros».

El pensamiento noble tomaba alto vuelo, a medida que se avanzaba en el terreno de la concordia. Cuando el Poder Ejecutivo quiso acordar, ya su idea estaba vestida con mayor esbeltez. El había dado el primer paso, y la opinión pública lo acompañó en ese camino tan hermoso. Por eso la Comisión Especial, al sentir las palpitaciones del pueblo, se hizo intérprete caluroso de ellas, y remontóse a las serenas regiones del patriotismo y de las sumas conveniencias políticas, queriendo que esa amnistía no tuviera límites, ni cortapisas, ni retrancas. La quería para «los orientales, tan hijos de nuestra patria como nosotros».

Pero, no se detuvo la inspiración generosa, desde que se iba en busca de un gran propósito, el de hacer política nacional, grande, amplia, para concluir con los «viejos partidos» y con los odios engendrados de las malas acciones. El programa nacional se conservaba enhiesto. El objetivo primordial era «mantener la paz pública, tan necesaria para el bienestar del país; y muy particularmente para que se afirmaran, y produjeran sus benéficos frutos, nuestras instituciones republicanas» (1). Iban detrás de esa paz fecunda en bienes, que un día hiciera decir a hombres como Eduardo Acevedo y Mateo Magariños Cervantes, que estos países progresaban aún con malos Gobiernos, siempre que se viviera en paz. Es verdad que esto era mucho decir, si bien reflejaba un anhelo generoso al hacer la frase, pues no puede haber paz donde hay malos gobernantes, pues la causa de la revolución entonces está latente.

Pero, como decimos, la inspiración generosa no se detuvo. El Senado se sintió atraído ante el proyecto de la Comisión Especial, que era más noble y amplio, y lo iba a votar sin vacilaciones, después de haber rechazado el del Gobierno. La ola de previsión política avanzó y todo se lo llevó por delante en una hora de improvisación hermosa.

El doctor don Ambrosio Velazco, el ciudadano que ya conocemos, de ideas atrevidas e independientes, calzó el alto coturno en este instante (2). La historia tiene que honrar su actitud ejemplar en este suceso magno, de tan trascendental importancia para la República. En

(1) Palabras del señor Berro al clausurar las sesiones ordinarias de la Asamblea, en 15 de julio de 1860.

(2) Da una idea del carácter del ciudadano nombrado y de las relaciones del doctor Velazco con los señores Berro y Acevedo, el documento que va en seguida, debiendo dejar constancia de que en estos momentos parecía que aquellas estaban en buen pie con el doctor Acevedo, según carta que aparece en la nota de la página 302 del tomo x de la obra de Díaz. Debemos dejar constancia de no haber el doctor Velazco votado por Berro para Presidente, sino por el coronel, entonces, don Diego Lamas. La elección de Berro sólo tuvo, en contra,

ese momento él vió claro en el porvenir. No podía regatearse el pensamiento. Había que honrarlo en todo sentido. Había que ser o no ser. Había que olvidarlo todo perpetuamente. Por eso él propuso «olvido

este voto, y el de los señores don Vicente V. Vázquez, quien lo dió por don Bernabé Caravia, y don Martín Cavia, por el «digno coronel don Diego Lamas».

«Excmo. señor.—Al acuerdo del Tribunal Extraordinario.—Don José Vázquez de Ledesma en autos con don Francisco González sobre cumplimiento de un contrato de compra-venta en la mejor forma, a Vuestra Excelencia digo: Que deducido el recurso de nulidad e injusticia notoria, presenté el escrito que adjunto el 26 del corriente recusando a los señores ministros Fort y De las Casas por las causales legales que expreso y reproduzco si fuere necesario; pero el escribano de Cámara, después de haberle puesto nota del cargo sin firmarlo, me lo ha devuelto con el pretexto de que no iba firmado por letrado negándose a darle curso, con lo que ha propendido a que ese escrito quedara sin providencia, cosa que no le es permitido hacer porque son los jueces quienes deben mandarlo y no el escribano el que pueda arrogarse esa facultad. Este proceder sería bastante para recusarle con arreglo a la ley; pero como puede proceder de mala inteligencia, me limito a hacerlo presente a Vuestra Excelencia para que se sirva ordenarle se abstenga de atribuciones que no le competen. La ley últimamente dictada aunque prescribe que las peticiones ante los Tribunales letrados vengán con firma de letrado, no ha derogado la ley N. C., ni el acuerdo del Tribunal Superior de 26 de octubre de 1835, que permite a las partes presentarse por sí mismas sin necesidad de firma de letrado, a menos que sus peticiones sean desarregladas, en cuyo caso no se encuentra el escrito que adjunto, porque la recusación es un derecho legítimo, y además, estoy dispuesto a probar plenamente las causales expuestas. Por estas consideraciones, y porque no tengo ningún inconveniente legal que me prohíba usar de mi derecho por mí mismo, o con firma de letrado, para no dificultar el juicio de recusación, y sólo por esto, es que me presento ante Vuestra Excelencia con firma de letrado. Por tanto—A Vuestra Excelencia pido y suplico se sirva proveer como dejo solicitado, y es de rigurosa justicia.—*José Vázquez de Ledesma.*—*Ambrosio Velazco.*—Informe sin dilación el actuario.—Hay cuatro rubricas.—El Tribunal Superior de Justicia, estando en acuerdo, así lo mandó y rubricó en Montevideo a veinte y ocho de mayo de mil ochocientos cincuenta y seis de que doy fe.—*Martiniano Mouliá*, Escribano de Cámara.—Exmo. Señor.—El actuario debe informar a Vuestra Excelencia que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 50 de la Ley de 15 de mayo (corriente) rechazó recibir el escrito a que se refiere el suplicante.—Es cuanto debo informar a Vuestra Excelencia.—Excelentísimo señor.—*Martiniano Mouliá*: Escribano de Cámara.—Visto el precedente informe y resultando que el escrito a que se refiere la queja del suplicante no está firmado por abogado matriculado como debe estarlo y sin cuyo requisito no debe ser admitido en este Tribunal, según lo expresamente dispuesto en el artículo 50 de la Ley de 15 del corriente mes, declárase que el Escribano de Cámara ha cumplido con su deber; y apercíbese muy seriamente por la irregularidad de su pedimento al abogado Velazco, a quien se devolverá el otro escrito no firmado para que lo presente con arreglo a derecho.—Y publíquese.—*Tort.*—*Rodríguez.*—De las Casas.—*Aguiar.*—El Superior Tribunal de Justicia, estando en acuerdo así lo mandó y firmó en Montevideo a veinte y ocho de mayo de mil ochocientos cincuenta y seis de que doy fe.—*Martiniano Mouliá*, Escribano de Cámara.—El mismo día notorié al doctor don Ambrosio Velazco: Doy fe.—*Cardoso.*—*Velazco.*—Y en seguida a don Antonio Rodríguez: Doy fe.—*Cardoso.*—*Rodríguez.*—El treinta a don José Vázquez Ledesma: Doy fe.—*Cardoso.*—*Vázquez de Ledesma.*—En cumplimiento del superior auto que precede fué devuelto el escrito de la referencia al abogado don Ambrosio Velazco, quien lo volvió a presentar con su firma.—*Conste.*—*Mouliá.*—*Enmd.*—Sin di=

perpetuo sobre las conmociones políticas, amnistía completa para quienes tomaron parte en aquellos sucesos, reintegración al pleno goce de los derechos civiles y políticos, y reconocimiento en los grados y empleos que tenían los jefes y oficiales del ejército cuando fueron dados de baja» (1).

vale.—Concuerda con el original escrito y demás actuaciones de su tenor, que obran en el incidente de su referencia, a que me remito y doy fe.—Y de mandato verbal de Su Excelencia signo y firmo el presente en Montevideo, a cinco de julio de mil ochocientos cincuenta y seis.

»MARTINIANO MOULIÁ, *Escribano de Cámara.*»

«En el Miguelete, a cuatro de diciembre de 1847, reunidos en la Sala de Audiencia los señores que componen el Superior Tribunal de Justicia, a saber: el señor Presidente don Carlos Anaya y ministros don Eduardo Acevedo y don Francisco Solano de Antuña, dió cuenta el señor Presidente de una nota del señor ministro de Gobierno del tenor siguiente.—¡Vivan los defensores de las Leyes!—¡Mueran los salvajes unitarios!—Ministerio de Gobierno.—Cuartel General, diciembre primero de mil ochocientos cuarenta y siete.—Al señor Presidente del Superior Tribunal de Apelaciones don Carlos Anaya.—El Gobierno ha sabido con extrañeza por relación conteste de los individuos siguientes: Magín Artigas, José Queirolo y Natalio Ruzca que el juez de lo civil doctor don Ambrosio Velazco ha cobrado dinero por los informes que de oficio se le han pedido en las solicitudes de pasaportes.—Este procedimiento tan abusivo ha llamado seriamente la atención del Gobierno, y habría en uso de sus facultades extraordinarias procedido a remover de su destino a dicho juez previa las justificaciones necesarias, si no viese en la existencia del Superior Tribunal de Apelaciones una autoridad bastante y legalmente indicada para juzgar y reprimir el escandaloso exceso a que se hace referencia.—Por esta razón el Gobierno ha acordado se dirija al expresado Superior Tribunal la presente comunicación a los efectos en ella manifestados. Lo que así se verifica haciéndolo saber al señor Presidente del mismo para que lo transmita a su conocimiento.—Dios guarde al señor Presidente muchos años.—Bernardo P. Berro.—Después de madura discusión acordó el Tribunal que, dando a la Comunicación del Ejecutivo la importancia que le corresponde, debía tenerse por bastante para proceder inmediatamente a la suspensión del Juez Letrado de lo Civil don Ambrosio Velazco, designándose al ciudadano don Luis Bernardo Cavia para que llene provisoriamente las funciones de Juez de lo Civil y del Crimen y encargando al Camarista Acevedo de la formación del sumario que ha de iniciarse sin pérdida de momento, habilitándose los días feriados, pidiendo al efecto al Ejecutivo la comparecencia de los individuos que cita en su expresada comunicación y avisando el recibo y las medidas en su consecuencia tomadas.—Ordenó asimismo se comunicase por acordada al juez Velazco la suspensión y a don Luis Cavia su nombramiento, y sirviese de cabeza de proceso, testimonio del presente acuerdo, y lo firmaron por ante mí de que certifico.—Anaya. — Acevedo. — Antuña. — Francisco Castro, Escribano de Cámara.—Enmendado uar=vale. Nota: Con la misma fecha se sacó testimonio de este acuerdo a los fines que en él se indican se acusó recibo al Poder Ejecutivo de la nota que queda transcrita y se comunicó al juez Velazco su suspensión y a don Bernardo Cavia su nombramiento.—Concuerda con el original de su tenor que obra en el archivo de la Escribanía de Cámara hoy a mi cargo, y de mandato verbal de Su Excelencia lo signo y firmo en Montevideo a cuatro de julio de mil ochocientos cincuenta y seis, de que doy fe.

»MARTINIANO MOULIÁ, *Escribano de Cámara.*»

(1) Sesión del Senado de 28 de abril de 1860.

Este pensamiento se impuso de tal manera, que, al conocerlo los miembros de la Comisión Especial, manifestaron que lo aceptaban y que votarían por él.

No podía, pues, el Poder Ejecutivo quejarse de que el Senado no lo acompañara en la tarea, pues sus ideas marchaban al galope.

Allí estuvo, en la sesión, el señor ministro de Gobierno doctor Acevedo. El acta se limita a decirnos que antes de presentar sus ideas el doctor Velazco, «el señor ministro expone los sentimientos de justicia que han inducido al Gobierno a presentar el proyecto de amnistía». El acta no dice que el doctor Acevedo hiciera uso de la palabra para combatir las opiniones del doctor Velazco, después que éste «explica las razones que tiene para ampliar la amnistía, siendo apoyado» (1).

Esto sucedió en la primera discusión del proyecto, donde se rechazó el del Gobierno, sancionándose el del doctor Velazco, aunque no en la parte relativa al reconocimiento de los militares en los goces y empleos cuando fueron dados de baja.

Cuando vino la segunda discusión, no asistió el señor ministro Acevedo, fuera porque estuviera convencido de la innecesidad de su presencia, dado el primer rechazo, o porque comulgara con las ampliaciones hechas. Y fué en esa segunda discusión del 28 de abril, donde triunfó definitivamente la tendencia sana del doctor Velazco.

¡ Ah! cuando los sucesos de 1863 se produjeron, ¡ cómo se lamentaría no haber hecho lo aconsejado en 1860, y así votádose por hombres como Lara, Velazco, Lozano, Fernández, Giró, Martínez y Castellano, contra los votos de los señores Bustamante, Vázquez, Castillo y Ruiz!

UNA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL

Como se ve, ¡ votaron siete contra cuatro! Ahora bien, el artículo 17, inciso 14 de la Constitución, establece que la Asamblea puede «conceder indultos, o acordar amnistías en casos extraordinarios, y con el voto, a lo menos, de las dos terceras partes de una y otra Cámara». Remitido el proyecto, por el Senado, a la Cámara de Representantes, el mismo día de su sanción, se objetó por el señor Pérez que había una infracción inconstitucional, por lo que no podía tomarse en consideración, desde que no habían existido las dos terceras partes reclamadas.

Fundado en esta disposición constitucional, el señor Pérez arremetió contra el proyecto, sosteniendo que esa infracción imponía a la Cámara de Representantes la actitud de «devolverlo al Senado antes de pasar a la Comisión, para que venga en forma, porque, decía, «si yo fuera miembro de esa Comisión, no sabría de qué ocuparme, puesto

(1) Sesión del Senado de 21 de abril de 1860.

que el asunto fué desechado, lo que a mí me consta, como a muchos miembros de la Cámara, que estuvieron presentes. En virtud, pues, del artículo 17 de la Constitución, pido que se devuelva el proyecto» (1).

Esto lo sostenía, así, sobre tablas, al darse lectura de la comunicación del Senado, para que, sin más trámite, se despachara su moción.

En esta actitud estaba retratado el carácter del señor Pérez, que ya conocemos, según se ha visto en las páginas anteriores. Era un ciudadano bueno, honesto, patriota, de alma sana, pero impulsivo, como la mayoría de los hombres de su época. Solía dejarse llevar de sus primeras impresiones, e incurría en errores por su falta de lastre científico, aunque acertaba, algunas veces, por instinto bondadoso. Por lo demás, era un ciudadano de conocimientos prácticos, que sabía utilizarlos cuando se discutían leyes como las de impuestos y de finanzas. Lo veremos más adelante desempeñando las funciones de ministro de Hacienda, poniendo en ello todo su espíritu honrado, su tendencia económica y su celo de buen orden. Esto no quitaba que se dejara llevar de sus pasiones fuertes, que las poseía cuando abrazaba un pensamiento político.

Mucho de esto había en su actitud, al verse frente al doctor Juanicó, nuevamente, en este incidente parlamentario, como se verá.

El partía de un error, porque ignoraba la ciencia constitucional, y, sobre todo, el régimen parlamentario.

Por lo demás, nada de extraño que un hombre de su escasa preparación científica procediera de esa manera, pues muchos años después, en 1899 a 1903, hemos visto a un ilustrado catedrático de derecho constitucional, el doctor don Emilio Ximénez Aréchaga, sostener la misma tesis, la de considerarse una rama del Poder Legislativo con la facultad para rever los actos de la otra, aun en puntos de reglamentación interna de la Cámara.

El señor Pérez olvidaba que ese argumento de inconstitucionalidad del proyecto de ley, podía hacerlo valer al discutirse el fondo del asunto, y, por lo mismo, desecharlo, haciéndoselo así saber a la otra Cámara. Por otra parte, no era exacto que dentro de la economía de la ley fuera de aplicación el artículo constitucional citado. Para lo que se necesitaban dos terceras partes de votos, era para *acordar la amnistía*, y esto se había realizado al sancionar el artículo 1.º, que de ello trataba. Los otros artículos en nada se referían a la amnistía. Eran artículos que podían sancionarse por separado, independientes de la amnistía, siguiendo el procedimiento común de la formación de las leyes. Declarar que los militares quedaban reincorporados al ejército con el goce de sus sueldos, era algo que podía hacerse independientemente de la amnistía. Si cada uno de los artículos de ese proyecto hubiera

(1) Sesión del 23 de abril de 1860.

tenido que sancionarse con las dos terceras partes de votos, tendríamos que hasta el artículo aquel que decía que el Poder Ejecutivo reglamentaría la ley, ¡también debió hacerse con las dos terceras partes de votos!

Ahora bien, apenas el señor Pérez concluyó su exposición, el doctor Palomeque usó de la palabra, para decir que, si bien respetaba mucho lo expuesto por el señor Pérez, y creía que era la pura verdad cuanto había dicho, «la Cámara no podía ser el juez de los actos, ni de las infracciones que pudiera cometer el Senado», lo que era apoyado por el señor Basáñez.

Su raciocinio era el siguiente: «Me parece que la Cámara obraría prudentemente permitiendo que el asunto pase a la Comisión, que la Comisión tome datos oficiales de la sesión del Senado, y en presencia del relato que hace el señor Representante por San José, aconseje eso mismo, si ella lo cree conveniente; porque sería un procedimiento extraño de esta Cámara, entrar en discusión de este negocio y devolverlo. Me parece que sería mejor que la Comisión se encargase de despachar el negocio mañana mismo, y que mañanauviésemos sesión para ocuparnos del asunto, pero llenando las formas de nuestro Reglamento, sin meternos en las infracciones que haya cometido el Senado. La opinión pública las juzgará; aun el Poder Ejecutivo, cuando la ley llegue a él, tiene el derecho de ponerle el veto y observar la sanción; aparte de que la Cámara con ese dato y los que recoja la Comisión, de cierto que se ocupará de ellas, pero se ocupará por los trámites que manda el Reglamento».

El señor Fuentes sostenía que se trataba «de procurar que se llenara una informalidad de parte del Senado en este negocio». «En este concepto—decía—apoyé la moción del señor Representante por San José, para que se devuelva el proyecto y venga en forma.»

Lo que llamaba la atención, era, que un hombre de ciencia, como el doctor Arrascaeta, sostuviera la doctrina errónea. Él partía de la base de que la Cámara *sancionaría* esa ley que el Senado habría sancionado inconstitucionalmente. «Por consiguiente—decía,—nunca la ley habría recibido una sanción legal, y el Poder Ejecutivo tendría motivos para ponerle su veto, o podría mañana, en cualquier tiempo, objetar de nulidad esa ley.» Por eso, votaría por la moción hecha.

Era inconcebible que un hombre como el doctor Arrascaeta sostuviera tal cosa. Él partía del hecho *indiscutible* de que la Cámara *sancionaría* el proyecto remitido, con olvido de que podía *reformularlo*, y luego enviárselo al Senado, con la supresión precisamente de ese artículo 3.º que tanto les preocupaba. Luego, el Senado podría, o no, insistir, en cuyo caso se llevaría el asunto a la Asamblea General, donde se resolvería cualquier cosa, teniendo que existir los dos tercios de los sufragios. Dentro del mecanismo constitucional, pues, se hallaba el remedio al conflicto, sin necesidad de entrar la Cámara a consti-

tuirse en juez del Senado, al cual, sin embargo, llegaría la noticia de la causal discutida.

Los tratadistas enseñan que ése es un pésimo sistema, hasta el de discutir en una Cámara las consideraciones que un miembro de la otra haya alegado ; por la muy sencilla razón de la falta de nobleza en atacar a quien no puede defenderse. ¡ Es verdad que esto mismo lo hizo, en nuestra época, el propio doctor Aréchaga, catedrático de derecho constitucional !

La cuestión era bien encarada por el señor Aguirre. Sostenía este señor, y con razón, que lo indicado por el doctor Palomeque «era lo regular ; es más propio—decía—que eso, como todo otro asunto de que da cuenta la Mesa, vaya a la Comisión», para que aconsejara una resolución. ¡ Para algo se habían establecido en el Reglamento las Comisiones !

En esto volvía a insistir el doctor Palomeque, sin perjuicio de creer, dados los hechos que se denunciaban, que el Senado había procedido inconstitucionalmente.

Pero, como esa «infracción es grave—decía,—importa nada menos que un voto de censura de una de las Cámaras sobre la otra por sus procedimientos, por eso mismo es que yo quiero que no se eliminen de la resolución de la Cámara los trámites que establece el Reglamento... Pero, así, simplemente, resolver la devolución de este proyecto, porque no ha venido constitucionalmente... un negocio tan serio... no se puede proceder así ; es necesario ir con más calma, con más fundamento». Él estaba conforme con todo lo que había dicho el señor Pérez, «menos con los medios de resolución ; es en lo único en que no lo estoy», terminaba diciendo.

Estas observaciones sensatas y tranquilas excitaron el sistema nervioso del distinguido señor Pérez, quien llegó, en su exaltación, hasta declarar que el Senado procedía «por medio de chicanas». «¿Y ahora—decía—esta Honorable Cámara quiere ser el juguete del Senado? Tengamos un poquito de dignidad y pongamos coto a esos avances del Senado, porque si sancionamos esto, mañana vendrá otro proyecto en contra de las leyes, sin discusión ninguna, y ¿porque venga del Senado vamos a sancionarlo? Siguiendo ese sistema, mejor es agarrar la Constitución y romperla.»

Siempre partiendo del concepto de que el proyecto había de *sancionarse* !, cuando la Cámara podía *reformarlo* y así remitirlo al Senado, y hasta rechazarlo. Se quería precipitar la resolución, pasando por encima de todos los procedimientos parlamentarios. Ya habría oportunidad para entrar a dilucidar ese punto, una vez que la Comisión se expidiera. Entonces cada diputado podría emitir libremente su opinión, y llegarse a la conclusión que se considerara razonable por la mayoría, ya fuera la de devolver el proyecto al Senado, el de reformarlo, o el de desecharlo, o de no decir una palabra al respecto, como

así se hizo finalmente. Todo podía hacerse, pero a su tiempo, y llenando las formalidades creadas, que son la garantía de todos los derechos, y de la libertad parlamentaria, en el caso. En el fondo, lo que había, como se verá al final de este debate, era un propósito político : ¡ el de demorar lo más posible la resolución del proyecto, porque era adversario de la amplitud de la amnistía ! Se tenía miedo al debate, porque no se creía contar con las dos terceras partes de votos en la Asamblea General. Otra cosa sería cuando se renovaran el Senado y la Cámara de Representantes, y a ésta ingresara el impulsivo doctor Antonio de las Carreras, que la dirigiría, en reemplazo del doctor Juanicó, cuya personalidad política se eclipsaría desde entonces.

Otro de los legisladores que adoptaban el camino tortuoso, era el señor don Octavio Lapido. Sostenía enérgicamente, y apoyado por el señor Pérez, que su « opinión era que no se le debía hacer honor a un proyecto de ley remitido en esas condiciones a la Cámara de Diputados, de pasarlo a una comisión para ser considerado ! » Afirmaba que lo que « correspondía pasar a una comisión era la moción del señor Pérez, de si había de volver o no al Senado ».

A esto contestaba el señor Basáñez, con toda cordura, « que cuanta más cortesía había, se hacía más acreedora de los respetos una corporación como la Cámara ; que nunca los excesos de cortesía eran una demasía ; que, por el contrario, por ese camino se les daba más altura y seguridad de acierto ». Creía que era mucho más conveniente, más juicioso, más razonable, que ese proyecto de ley pasara a la comisión respectiva ». Quería, aun para resolver como se pretendía, que se tuvieran datos oficiales, y no los particulares citados, pidiéndolos al Senado mismo. « Este es—decía—el verdadero camino, más juicioso ; y creo también fuera de la cuestión estas apreciaciones, más o menos personales, que se hacen de un Cuerpo como el Senado, que nos merece alguna consideración. »

El señor Lapido insistía en la resolución de lo que él consideraba cuestión previa, sobre si era « constitucional o inconstitucional el procedimiento del Senado », no dando trámite alguno al proyecto remitido hasta no resolver este punto. A esto adhería el señor Fuentes, incurriendo en el error de sostener que por haberse desechado un proyecto en una Cámara, no podía ya ser considerado sino en el período siguiente. Confundía lamentablemente el criterio constitucional. Lo que se resolviera en el Senado ninguna influencia tenía en la Cámara de Representantes. Aquí cualquier diputado podía presentar el mismo proyecto. Más aún : presentarlo, aunque en ese momento se estuviera tratando uno de igual índole en la otra rama legislativa. El proyecto que no puede presentarse hasta el siguiente período, es el que ha sido *desechado al principio por la Cámara a quien la otra se lo remita* (artículo 67 de la Constitución). Y ése no era el caso.

En este estado, el doctor Palomeque sostuvo que la moción del doc-

tor Lapido llenaba los objetos que algunos diputados se proponían, «es decir, que no se devuelva al Senado una resolución de la Cámara, para que el Senado pueda objetarle los mismos vicios que la Cámara de Representantes objeta en la sanción del Senado ; porque el artículo 59 de la Constitución establece que un proyecto que tenga primicia en una Cámara, si fuese sancionado allí, lo remitirá a la otra, para que, discutiéndolo, lo apruebe, modifique o deseche. De consiguiente, el artículo 39 de la Constitución nos impone a nosotros la obligación imprescindible de entrar en la discusión del asunto, y modificarlo, aprobarlo o desecharlo, o hacer las observaciones legítimas que la Cámara pueda hacer» (1). Y sería muy sensible que la Cámara, saliendo del cumplimiento de la Constitución, viniese a dar una sanción inconstitucional también, es decir, una resolución inconstitucional». Volvía a repetir que el punto era grave, y no ser bueno separarse de las formas reglamentarias y de los preceptos constitucionales.

Después de un nuevo cambio de ideas entre los señores Pérez y Palomeque, usó de la palabra el doctor Juanicó para abundar en consideraciones juiciosas, en apoyo de cuanto habían expuesto los señores Palomeque y Basáñez.

El doctor Juanicó insistía en la necesidad de calma y meditación, sosteniendo que no bastaban las afirmaciones del señor Pérez para resolver el punto sobre tablas, «porque una cosa somos los Representantes considerados aisladamente, y otra cosa es la Cámara formando corporación. La conciencia individual del hombre, aunque sea diputado... no puede hablar... ¿por dónde?... Por muy cierto que yo esté de un hecho, nunca pretenderé se considere como completamente justificado y averiguado en virtud de mi simple declaración». Sostenía que «la Cámara no puede juzgar al Senado como cuerpo, de la misma manera que el Senado no puede juzgar a la Cámara. Ni censuras pueden dirigirse la una a la otra como cuerpo. ¿Hay faltas?... Quiere decir que no se dará curso a los asuntos... el curso constitucional ; que no llegarán a formar leyes, porque no vienen con los requisitos debidos». No veía la necesidad de obrar con precipitación, no veía ninguna urgencia, no veía comprometida la paz, nada veía comprometido. Con calma, con tranquilidad, por el sendero de la ley, decía, «que se nombre la comisión y que ella proponga a la Cámara lo que convenga. La Cámara resolverá».

Esto sostuvo, que era lo indicado por el señor Lapido, y apoyado por el doctor Palomeque desde un principio. Y, en su consecuencia, se resolvió que una comisión especial informara respecto de la moción del señor Pérez, la que quedó compuesta de éste y de los señores Fuentes, Lecocq, Errazquin y Arrascaeta.

(1) Esto fué lo que al fin se hizo, no estando ya en la Cámara el doctor Palomeque.

La Comisión Especial propuso se sometiera el proyecto al examen de una comisión para que dictaminara sobre él. «La Comisión tenía conciencia—decía—de que ha habido informalidad en remitir ese proyecto tal cual ha venido, porque prescindiendo de las infracciones del Reglamento cometidas en la discusión del todo del proyecto, su artículo 3.º (el de la reintegración de los empleos) fué proclamado sancionado con infracción del artículo 17, párrafo 14, de la Constitución.» Opinaba, como queda expuesto, porque consideraba que siempre quedaba a la Cámara su derecho a salvo para apreciar esa infracción que había dado mérito a la moción del señor diputado por San José (1).

La Cámara se engolfó en una cuestión innecesaria, entrando al fondo del asunto, si bien es cierto que mucho influyó en ello la circunstancia de haber la Comisión hecho una declaración inútil, desde que no sacó de ella la consecuencia natural. Se limitó a aconsejar que el asunto pasara a la Comisión para que ésta lo estudiara y emitiera su dictamen. Pues bien, para eso no tenía necesidad alguna de declarar si había habido infracción del Reglamento del Senado y de la Constitución. Esto lo estudiaría la Comisión, porque sería uno de los argumentos para desecharlo el proyecto, o uno de sus artículos. En fin, después de un debate en el que se vió la anarquía reinante entre los elementos parlamentarios, al finalizar el período legislativo, se resolvió acertadamente que el proyecto pasara a una Comisión Especial, la que quedó constituida de los señores Lapido, Fuentes, Juanicó, Sagastume y Basáñez (2).

DEBATE SOBRE LA AMNISTÍA

Se iba, pues, al fin, a entrar al debate parlamentario, y allí veríamos triunfante la doctrina sostenida por Palomeque, Juanicó y Basáñez. Pero, no se haría inmediatamente. La política se interpondría, y el tiempo transcurriría. En efecto, transcurrió el año 60, y al abrirse las sesiones ordinarias de las nuevas Cámaras, la novena legislatura, el señor presidente de la República, don Bernardo P. Berro, decía en su Mensaje anual a los legisladores : «Persisto en mirar como una medida provechosa y justa la amnistía que os propuse el año anterior y que de nuevo os recomiendo» (3). El gobernante comprendía perfectamente que un país no puede marchar teniendo una parte de sus ciudadanos, más o menos numerosa e importante, fuera del territorio ;

(1) En la página 155 del Diario de Sesiones se ha incurrido en el error de publicar allí el Informe de la Comisión Especial, el cual corresponde a la sesión siguiente, del 30 de abril de 1860, donde se encuentra reproducido, como una prueba del error de la referencia.

(2) Sesión del 30 de abril de 1860.

(3) Diario de Sesiones de la Honorable Asamblea General, tomo III, año 1861, página 309.

pues esos elementos son un constante espíritu de conspiración. La patria no podía estar eternamente cerrada para los delincuentes políticos, sin que peligrara el orden público. La administración se hacía difícil y engorrosa en esa forma. De ahí que el señor Berro persistiese en el proyecto, y urgiera a la Cámara por su pronto despacho.

El gobernante hacía presente en estos momentos que «las malas pasiones políticas, si no del todo extinguidas, se habían amortiguado en gran parte, y que en su lugar reinaba un espíritu de paz, pronunciándose en propios y extraños un empeño tal por sostenerla, que haría del todo impotente, ya que no imposible, cualquier conato de perturbación». Y esto lo aseguraba, pero para decirnos que «había, sin embargo, todavía, por desgracia, quienes pretendían especular, para fines depravados, con *las viejas divisas de partido*, empeñados en fundar una lucha perpetua de exterminio, más que de dominación; y en cuyo término sólo podía hallarse, con la aniquilación de todos, la pos-tración y muerte de la patria» (1).

Este deseo ardiente de concluir con los viejos partidos le llevaba hasta impedir la publicación de diarios donde «se enarbolan—decía—de nuevo, con ningún motivo ni pretexto, *las viejas banderas de partidos personales que nada representan*, considerando cualquier tentativa de ese género como una excitación a la anarquía y a la guerra civil» (2).

Así preparado el terreno, y organizada la nueva legislatura, en la que dominaba exclusivamente el elemento que había pertenecido al Cerrito, con excepción de uno que otro ciudadano, se abordó la discusión del punto, en la sesión del 29 de mayo de 1861.

¡Un año largo se había demorado en la Cámara de Representantes el proyecto iniciado por el Poder Ejecutivo, y enviado por el Senado!

La Comisión Especial, anteriormente nombrada, había desaparecido con la instalación de la nueva legislatura.

El proyecto, pues, fué despachado por la Comisión de Legislación, compuesta de los señores Antonio de las Carreras, Enrique de Arrascaeta, Antonio María Pérez, Eustaquio Tomé, Juan M. Turreiro y Ramón Vilardebó (3).

La Comisión se fundó en lo que el Poder Ejecutivo había manifestado, sobre la seguridad de la paz, para aceptar la amnistía, declarando que «creía también que esa ley debe referirse *sólo a lo que puede ser materia de un acto legislativo*». De aquí que se limitara, dado ese criterio erróneo, a proponer que «quedan amnistiados todos los ciudadanos que han tomado parte en las conmociones políticas que agitaron al país en años anteriores».

(1) Mensaje a la Asamblea de fecha 15 de febrero de 1861.

(2) Véase obra de Díaz, página 309 del tomo x.

(3) El doctor Palomeque ya no estaba en la Cámara. Desempeñaba las funciones de Jefe Político en Cerro Largo. Y aquí se ocupaba de atraer al país a todos los desterrados en el Brasil. Ya lo veremos.

El debate lo inició el señor Díaz. Sostuvo que «cuando se perdona, debe perdonarse por entero, y que los grados militares que tenían esos señores amnistiados no se los había dado ningún Gobierno especial, sino la nación, por lo que nosotros no podemos quitárselos sin que por medio de los juicios competentes se los exonere de ellos».

El doctor de las Carreras, miembro informante de la Comisión, desarrolló la doctrina de que el Cuerpo Legislativo debía limitarse al *perdón*, y que «si algunos de esos ciudadanos se consideraban con derecho a ser repuestos en sus empleos, honores o grados, etc., que lo pidieran ante el Poder Ejecutivo, que pidieran la promoción de esos juicios y aceptaran sus consecuencias». Consideraba que «la reposición en esos grados y demás, dada por el Cuerpo Legislativo, importaría, aparte de lo impolítico y de lo injusto que sería para con la administración que los destituyó y que estableció la expatriación de esos ciudadanos, importaría también una medida excesiva de las atribuciones del Cuerpo Legislativo». Según su criterio, eso no podía ser sino «una materia judicial de los tribunales competentes, siendo éstos los llamados a decidir si había sido justa o injusta la destitución de empleados y la degradación que habían sufrido algunos de esos ciudadanos». «El perdón—decía—importa decir que no se promueven las causas que han quedado abiertas, o, por lo menos, por iniciarse. Lo demás sería francamente, como dijo muy bien el señor ministro de Gobierno en el año anterior, en el Senado, sería reconocer que habían obrado perfectamente los agitadores de la paz pública, y a más de reponerlos en los empleos y grados que habían perdido por razón de sus actos criminales, importaría darles las gracias por lo que habían hecho (1). Y ¿qué quedaría entonces para los sostenedores del orden, para los hombres que han sacrificado su vida en sostén de las instituciones? Quedarían todos por igual, y la ley de amnistía, lejos de ser una ley de salud pública, sería una ley de anarquía, porque vendría a establecer un desaliento para los sostenedores del orden público, y, por otra parte, aliento para la anarquía; y eso no puede concebirse en un país que tiene el deseo de marchar por la vía del progreso.»

Por todo ello sostuvo que la resolución de la Cámara «no podía extenderse a lo que se había extendido el Senado».

Estos fueron los lineamientos de la discusión general. Nadie más usó de la palabra, ni a nadie se le ocurrió encarar el asunto sobre si era o no constitucional lo hecho por el Senado. Triunfaba, pues, la sana doctrina expuesta desde un principio por los señores Palomeque, Ba-

(1) En el acta del Senado no consta nada de esto absolutamente, como lo hemos hecho resaltar al ocuparnos de la actitud del doctor Acevedo. Sin embargo, algo hubo, pues el señor Díaz, aunque apasionado, relata el hecho como aquí lo asevera el doctor Carreras. Véase página 307, tomo x.

sáñez y Juanicó, en 1860, quienes ahora brillaban por su ausencia en el Parlamento (1).

EL CARÁCTER DURO DE DE LAS CARRERAS

Ahora bien, durante el intervalo corrido entre la sesión citada y la en que se entraría a la discusión particular, se produjo un suceso inesperado, que causó fuerte impresión en el país, cual fué la caída del Ministerio. La opinión pública se conmovió, y de ello da una idea, aunque ligera, la sesión celebrada en esos momentos en la Cámara de Representantes (2). De aquí que concurrieran al Parlamento los señores ministros interinos de Gobierno y Guerra, cuyos nombres, como de costumbre, no constan en el acta (3).

Con asistencia de esos señores, se reanudó el debate, empezando el doctor Arrascaeta por pedir que el ministro explicara «el pensamiento del Gobierno», dada la divergencia entre el proyecto que el Poder Ejecutivo presentó y el que sancionó el Senado.

El ministro así lo hizo, diciendo que el presidente de la República le había «especialmente encomendado hacer presente a la Honorable Cámara que el Poder Ejecutivo creería completamente satisfechos sus deseos con la sanción del proyecto de la Comisión de Legislación, agregándole un segundo artículo». Este artículo decía así: «Los militares a quienes comprende la ley de amnistía, tendrán opción a los goces establecidos por las leyes, en razón de sus servicios anteriores» (4). Volvió aquí a repetir que no había peligro para la paz pública en el regreso de los desterrados. Creía que el espectáculo de la paz en el país despertaría en esos ciudadanos el sentimiento de patriotismo «o cuando menos su respeto hacia una situación que es el resultado del reinado de las instituciones, sino porque de esa manera se evitaría también que pudiera formularse el reproche de que los servicios que algunos de esos ciudadanos hubiesen podido rendir antes de ahora a la República, quedasen abandonados al olvido».

El señor Díaz aplaudió con verdadero entusiasmo el pensamiento del Poder Ejecutivo. «Eso—decía—es hacer verdaderamente una ley de olvido; lo demás era hacer una especialidad que podría interpretarse como un lazo que se les tendía, diciéndoseles que estaban amnistiados para traerlos al juzgamiento de los tribunales de la República».

(1) Al votarse en general el proyecto, los señores Díaz, Gil y de la Fuente hicieron constar que votarían por el proyecto del Senado.

(2) Sesión del 4 de junio de 1861. De esto me he ocupado en *Mi año político* de 1893, en la biografía del doctor Acevedo.

(3) El de Gobierno era el señor Carlos Carvalho, oficial mayor del ministerio.

(4) Sesión del 5 de junio de 1861.

No compartieron esta opinión los señores De las Carreras, Arrascaeta y Fuentes.

Después de un debate, en el que se puso en evidencia el carácter duro y cruel del doctor de las Carreras, se postergó la sesión para estudiar mejor el junto.

Carreras estuvo impolítico. Trajo a colación el recuerdo doloroso de Quinteros, y tuvo el valor de aplaudir lo hecho. Además, sostuvo un error garrafal, como ya se ha visto, en el que incidía ahora, al dar a la palabra amnistía una interpretación reñida con la opinión de todos los tratadistas.

Faltó allí el doctor Juanicó, para, con su autoridad científica, contener la audacia del legislador. Es cierto que el ministro interino así lo expresó, pero era un simple oficial mayor, carente del valor moral e intelectual de Juanicó. Con razón decía ese ministro interino: «La amnistía no es *el perdón*. La amnistía es *el olvido de los delitos cometidos* contra el Estado». La amnistía se refiere al pasado, no al porvenir. El perdón supone crimen. La amnistía no supone nada. Que en la acusación ordinaria se haga uso del perdón, lo comprendo; pero en la acusación política se hace uso de la amnistía, es decir, del olvido de los delitos cometidos contra el Estado, y nada más. Fuera de esos términos me parecería que todo lo demás importaría una invasión de atribuciones. Así es que la sanción de la ley, aun con el artículo propuesto por el Poder Ejecutivo, estaría indudablemente en los términos en que puede concederse por el Cuerpo Legislativo».

El señor don Carlos Carvalho, oficial mayor, dragoneando ahora de ministro de Gobierno, era un tipo caballeresco, distinguido en su porte y maneras, elegante en su vestir, amable en la frase, dulce en el sentimiento, fuerte en sus amistades, hombre en sus acciones y casto en sus maniobras varoniles. Nada de extraño, pues, que desempeñara con satisfacción íntima el hermoso papel de bregar por la amnistía, tal cual debiera entenderse y ser en la práctica de los pueblos civilizados. Él tenía perfecta razón cuando le decía al doctor de las Carreras que la amnistía no era perdón. Hay perdón donde hay sentencia condenatoria, que declara existente un delito. En la amnistía, nada había que perdonar, porque a nadie se había condenado. La medida política, extraordinaria, de pronta seguridad, adoptada por el Poder Ejecutivo, de extrañar a los ciudadanos, aprobada por el Cuerpo Legislativo, no era una sentencia ni la prueba evidente del delito. ¡Eso no era sino una medida de seguridad, humana, políticamente aconsejada, para así evitar un mal mayor, cual sería, la condena, dictada en horas de pasión efervescente, que mañana sería lamentada por quienes diciéndose jueces no habían sido sino verdugos, o enemigos, o parte apasionada en los procesos condenatorios!

Esto no lo podía o no lo quería entender un hombre como de las Carreras, creyente fervoroso en que la sangre derramada en el patíbulo

concluía «con las revoluciones en este país». Estaba convencido—y esto era un error, como pronto lo vería, siendo él la víctima, el mártir, en poder del bárbaro tirano del Paraguay—de que si las revueltas se habían «encendido unas tras otras, había sido porque no hubo un escarmiento» en las primeras. En «la 4.^a—decía—hubo un escarmiento; es necesario que esa situación se mantenga; es necesario que esos actos acaben de una vez, y que el respeto a la autoridad sea una verdad entre nosotros. Es el modo como los países conservan su paz, haciendo que el respeto a las leyes sea eficaz, y presentando a las generaciones venideras el escarmiento que sufrieron aquellos que faltaron a las leyes y que faltaron a sus deberes como ciudadanos. Eso nos lo enseña la historia, y lo enseñan también las conveniencias públicas».

Todo esto, acentuado crudamente, en este instante, por el doctor de las Carreras, sería desmentido por la futura historia nacional, como estaba desmentido por la del pasado, no sólo en nuestro país, sino en las páginas de la humanidad.

Nunca, en parte alguna, los hombres se han sentido amedrentados ante la muerte, cuando la pasión política los mueve. No se piensa en el castigo cuando se lucha por ideales, por la muy sencilla razón de tratarse de apóstoles a quienes el martirio santifica y engrandece. Y, si de esta generalidad descendemos a su aplicación en nuestro país, entonces era más evidente el error. Ahí estaba ese charco inmenso, ese lodazal de sangre, derramada de una y otra parte, enseñando elocuentemente que los orientales no eran hijos del rigor, sino de la clemencia. La matanza no les había intimidado, pero el perdón, ése sí, los había llevado, a más de uno de ellos, como sucedió con Medina, Castro, Caraballo, Aguilar, etc., a servir con Urquiza o a no luchar contra él. La sangre y la violencia traerían sangre y violencia.

Cuando el señor Lapido oyó todo eso en labios de las Carreras, comprendió que la cuestión iba por mal camino si dejaba al orador internarse en esa selva oscura, donde la pasión no razona; y la contuvo, para recordar que se salía del asunto. De esa manera no tuvo el carácter impulsivo de las Carreras, oportunidad de resbalar más por aquella pendiente peligrosa, de lo que ya lo había hecho, y la Cámara, después de algunas palabras pronunciadas por el señor Fuentes, el ministro y el señor Díaz, cerró el debate, y se sancionó el artículo propuesto por la Comisión.

RECUERDO IMPRUDENTE DE QUINTEROS

Quedaba ahora por discutirse el artículo propuesto por el Poder Ejecutivo. El señor Fuentes lo encontraba *vago* en aquello de *servicios anteriores*, por lo que el ministro Carvalho lo explicó diciendo que se refería «a una época anterior a aquélla en que por los actos que esos ciudadanos van a ser amnistiados, hayan sido rendidos a la Re-

pública ; servicios, por ejemplo, rendidos en la guerra de la Independencia, en la campaña del Brasil, y cualesquiera otros que mereciesen ser comprendidos en los goces que las leyes acuerdan a esos servicios. Por eso dice : *servicios anteriores* ; pero anteriores naturalmente a la época de la cual data la proscripción de los ciudadanos de que se trata ; servicios que no podrían echarse en olvido, sin dar lugar a formular un reproche que se ha querido evitar.

El señor Lapido propuso se aplazara el estudio de este punto, y así se sancionó, después de una ligera oposición de los señores de las Carreras, Arrascaeta y Fuentes (1).

El Gobierno no hallaría en la mayoría de la Cámara, dirigida por Carreras, el apoyo que necesitaba para el agregado que pretendía en la ley, el cual, debemos decirlo en honor de la verdad, no era tan amplio como debiera, y lo había sostenido el Senado.

La actitud del doctor de las Carreras fué inconcebible. El espíritu se abisma al leer lo que aquel legislador expresó. Empezó por sostener que «el hombre tenía que poner la mano sobre su corazón y dejar libre la cabeza ; pensar en lo que conviene y no en lo que pueda ser simpático a sus sentimientos ; que cuando se está en una posición, es preciso cerrar los oídos y los ojos ante lo que pueda tocar el corazón». Manifestaba que era necesario que «ese poder continuara y continuara para escarmiento y para ejemplo en las sociedades venideras». Sentía «tener que tomar la palabra en este asunto de la manera que lo hago como diputado—decía,—porque puede creerse que habla aquí el hombre que se encontró en el caso de hacer cumplir la ley y levantarla a la altura de los principios. Por ese porvenir, entiendo que no puede desconocerse la justicia con que obró la administración del señor Pereyra, haciendo caer el peso de la ley sobre los individuos que se apartaron de sus deberes ; y para la historia, para la moral, para las instituciones, *es necesario que se santifique la justicia que entonces se hizo*. Si hoy se entra en rasgos de generosidad, generosidad que no puede admitirse políticamente, porque la política no admite sino conveniencias públicas y no las dictadas por los impulsos del corazón ; si hoy se quiere dar ensanche a ese sentimiento y atenuar algún tanto la justicia de esos actos, no se hace más que introducir un principio de desmoralización, un principio de desaliento en los hombres que se sacrifican por las instituciones ; y, por otra parte, un principio de aliento para los hombres que se lanzaron a la revolución buscando la fortuna, contando que con tres o cuatro años de emigración volverían a la patria y recuperarían todos los derechos perdidos».

Por lo demás, reconocía que «el Poder Ejecutivo estaba en su derecho para reponer en sus empleos a aquellos ciudadanos que vinieran a la patria y a quienes consideraba acreedores por sus servicios».

(1) Sesión del 5 de junio de 1851.

Todo esto expresaba innecesariamente el doctor de las Carreras, trayendo al debate lo que no debía, y ello con una audacia admirable.

Felizmente se levantó la voz del señor Díaz para desvirtuar todos los conceptos falsos del doctor de las Carreras. Es una vulgaridad eso de que el hombre *piensa* con el corazón. El cerebro es el que medita. Ahora, un sistema nervioso, más o menos delicado, puede producir ex abrupto. Y estos eran los que realizaban Carreras. Él creía que obraba con la cabeza, y aquí estaba su error. Ninguno más impulsivo, ninguno más apasionado. Precisamente porque no tenía cabeza política para ver claro en el porvenir, y deducir la consecuencias de sus impulsos, era que opinaba de esa manera. Ese apasionamiento le oscurecía el raciocinio, y no le permitía elevarse a las regiones serenas de esas conveniencias políticas de las cuales hablaba. Si hubiera tenido cabeza, habría comprendido que los dictados sanos del corazón rechazaban la *santificación* de lo que el doctor Acevedo, ministro que en esos instantes caía, había calificado de *crimen*, de una manera velada, en la Memoria presentada a la Honorable Asamblea General.

Está bien que se *explique* por la ofuscación y el calor de la lucha, en la que la reflexión ha desaparecido y el hombre es un demente furioso, el acto realizado en tales condiciones; y aun hasta *justificarle*, si se quiere, dado el ambiente en que se vive, en el que el hombre no es hombre sino una fiera; pero, de ahí no puede pasarse en la vida pública. Serenados los espíritus, y envainadas las armas, entonces la cabeza sigue eso que se llaman los dictados nobles del corazón. Estos son los que dominan en el mundo, así como los malos caen en el desprecio. Los pueblos se gobiernan por los grandes sentimientos, que el pensador luego modela, dándoles la forma de la idea luminosa. Todo es sentimiento en el mundo. Esos hombres-ideas son una mentira, pues, en el fondo, no hacen sino interpretar el corazón humano propio y ajeno, en su más hermosas sacudidas. El amor de la patria, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, de la justicia, del derecho, el odio a la esclavitud, etc., no son sino el sentimiento puro que el cerebro viste de galas literarias, al sentirse acariciado por el paso de aquél bajo la cúpula del cráneo. Los que no tienen lo que se llaman *corazonadas*, no son pensadores, ni políticos, ni hombres. Esos tienen un nombre en la Historia: son los Luzbeles políticos, condenados a no poder amar, personificados en hombres como Felipe II en España, Luis XI en Francia y Rosas en Río de la Plata. Por eso era de aplaudirse al señor Díaz cuando decía: «Yo entiendo que si hemos de dar ley de gracia, la debemos dar amplia, para no empañar la gloria que tiene la actual administración de haber conservado la paz pública y restablecido el imperio de la autoridad de la ley. ¿No será un dolor que mañana, después que concluya la actual administración, se diga: hizo el bien del país, no hubo ningún Gobierno como éste,

pero una parte de sus hijos venían a gozar de las glorias de la Patria y estaban como simples particulares al lado de los que habían sido sus compañeros de armas en las guerras de la independencia y que habían ganado sus grados derramando su sangre? Y ¿podrá ningún oriental soportar que vengan esos individuos despojados de sus grados militares? No; entonces valdrá más que se estén en el extranjero y sancionemos el rechazo de la ley. Yo, como individuo de la administración anterior, he sido uno de los más calurosos defensores del Gobierno, especialmente en la lucha que se trabó con la anarquía; mis opiniones son muy conocidas a este respecto. Pero creo que así como en la lucha debemos ser imperdonables para con nuestros enemigos, así en la paz debemos ser cautos y previsores».

El señor Díaz no temía a sus conciudadanos dentro de la Patria, y se sublevaba al ver que las medidas se conservaban para los más insignificantes, pues recordaba que los señores general Flores (1) y doctor José María Muñoz, ausentes, podrían venir al país cuando quisieran, desde que no habían sido desterrados.

«Estos—decía,—¿no son los dos únicos jefes orientales que pueden venir a convulsionar esta tierra, porque son los jefes del partido que se dice enemigo en la actualidad? Y ¿si pueden venir estos dos enemigos de la actualidad, por qué no han de venir Silveira, Sandes y demás individuos que están muriéndose de hambre en el extranjero?... ¡Demasiada sangre se ha derramado en Quinteros! Y creo que con eso es bastante para echar un velo sobre este negocio y concluir de una vez con la ley de amnistía sancionándola como la ha propuesto el señor ministro en nombre del Poder Ejecutivo... Aquí tratamos de los orientales que se están muriendo de hambre en el extranjero, y que tal vez mañana, por no perdonarlos como es debido, por no traerlos al seno de la Patria, van a ser nuestros enemigos, pues eso les servirá de pretexto para venir a hacer una revolución.»

El orador hablaba proféticamente. Tenía de compañeros, aunque no del todo, a los señores Pedralbes y Turreiro.

Luego, cuando en la sesión siguiente se entró a la discusión del artículo propuesto por el Poder Ejecutivo, ya no existieron los ministros interinos. En esa discusión sólo tomaron parte los señores de las Carreras, Arrascaeta, y Diago. Estos combatieron el artículo, sosteniendo que el punto no era de materia legislativa, que la Cámara debía limitarse a declarar la amnistía, pudiendo el Poder Ejecutivo hacer uso de sus facultades incorporando a la administración pública a aquellos emigrados que así lo considerara conveniente, pudiendo «pedir al Senado su aprobación para los que la necesiten—decía Carreras,—según la Constitución de la República en el mismo artículo 81» (2).

(1) Unas cartas interesantes del general Flores y del doctor Palomeque aparecen en el capítulo de este libro relativo al *Motín Militar* del 53.

(2) Sesión del 6 de junio de 1861.

LUCHA EN LA ASAMBLEA GENERAL

Sancionada así la ley de amnistía, que rechazaba la del Senado, el proyecto fué remitido a éste, y como no se conformara con la supresión hecha, el asunto se llevó a la Asamblea General.

Mientras tanto, se había operado un cambio en el Ministerio. Los elementos de la Cámara de Representantes, encabezados por de las Carreras, habían vencido al Poder Ejecutivo, como se ha visto. Y el gobernante, dando una muestra del respeto que le merecía esa mayoría de la Cámara popular, eco de la opinión política, juzgó del caso constituir su Ministerio con los elementos vencedores. Al efecto nombró ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, al doctor Arrascaeta, personalidad simpática, laboriosa, que tanto se había distinguido por su saber en el Parlamento, y a don Antonio María Pérez, ministro de Hacienda, cuya energía y honradez eran indiscutibles.

La Cámara sufría, pues perdía hombres de importancia. A la ausencia de ciudadanos como Juanicó y Palomeque, se unía ahora la de estos legisladores, quienes iban al Ministerio acompañados del coronel don Pantaleón Pérez, como ministro de Guerra y Marina (1).

Ahora bien, el Senado sostuvo su proyecto, diciendo su Comisión de Legislación que «el artículo propuesto últimamente por el Poder Ejecutivo, en el sentido de la sanción del Senado, era un motivo más para persuadir la conveniencia de lo ya sancionado, creyendo que si con verdad se trataba de poner los hechos de acuerdo con las palabras del Poder Ejecutivo, el Honorable Senado, que ya había procedido de ese modo, no podía dejar de ser consecuente con su primera sanción». Creían que así lo exigían «la justicia y las conveniencias de la paz interna de la República» (2).

Esta argumentación ya no era del todo exacta, pues el gobernante había capitulado y llevado a las secretarías de Estado a los señores vencedores, heraldos de la nueva idea; la que, en el fondo, a juzgar por lo que aseguraba de las Carreras (y así lo dice el señor Antonio Díaz también, según lo hemos hecho notar), había sido sostenida por el doctor Acevedo en el Senado, en lucha con el doctor Ambrosio Velazco.

El pensamiento, pues, sería exclusivamente propio del señor Berro. Él fué quien mandó a su secretario interino, el señor oficial mayor don Carlos Carvalho, una vez separado el doctor Acevedo, para que sostuviera aquel artículo «en el sentido de la sanción del Senado», co-

(1) Sesión de la Cámara de Representantes del 21 de junio de 1861, donde se concede la venia a los señores Arrascaeta y Pérez para aceptar el ministerio.

(2) Sesión del Senado de 1.º de julio de 1861.

El informe lo suscriben los señores Ambrosio Velazco y Narciso del Castillo.

mo decía ahora la Comisión de Legislación compuesta de los señores Velazco y del Castillo. Vencido, había acatado el hecho, trayendo a su lado a los representantes de esa mayoría legislativa, haciendo así un verdadero acto de gobierno. Es verdad que esa mayoría también había dado una prenda, cual era aquella de que el Poder Ejecutivo estaba facultado para reponer en sus grados militares a los emigrados, de lo cual haría uso oportunamente. Puede decirse que se había transado, y de ahí la combinación ministerial.

Cuando se trató la cuestión en el Senado, ya el Poder Ejecutivo no envió a sus ministros para que fueran a luchar con el doctor Velazco. Los reservó para la Asamblea General, adonde pasaría el proyecto de ley. El Senado sostuvo su primitivo pensamiento, no sin que el señor don Luis de Herrera, otro ciudadano de fibra *de cabeza*, diría el doctor de las Carreras, nos declara que «comprendía que el proyecto de la Cámara de Representantes llenaba cumplidamente *los deseos del Poder Ejecutivo*, y los de la generalidad, por lo que votaría por él» (1). Es verdad que agregaba que «sobre la reposición en sus grados, de que hablaba el proyecto del Senado, nada tenía que observar, pero no así, en cuanto a empleos, porque eso sería notablemente injusto».

Asimismo el señor Aguirre aceptaba el proyecto de la Cámara de Representantes (2).

El Senado mantúvose firme, y se fué a la Asamblea General.

A ésta concurrió el nuevo ministro de Gobierno doctor Arrascaeta. La Comisión de Legislación de la Asamblea, compuesta de los señores de las Carreras, Diago, Lapido, Vilardebó y Tomé, informaron aceptando el proyecto de la Cámara de Representantes, «porque se adaptaba mejor a los principios constitucionales y a los inmutables preceptos de la moral y la justicia».

Sostenía a la vez «que si bien el Cuerpo Legislativo, en virtud del artículo 17 de la Constitución, podía y debía amnistiar a nombre del pueblo que representa, *esto no quiere decir que pueda invadir atribuciones que están cometidas por ese Código a los otros dos Poderes en que también está delegada la soberanía popular*» (3).

Aquí se veía la transacción hecha. El ministro declaraba que «el Poder Ejecutivo nunca se había conformado con el proyecto del Senado», pero, sin embargo, se reconocía que el Poder Ejecutivo no tenía necesidad de ocurrir al Cuerpo Legislativo para reponer en sus grados a los militares desterrados. Y la Asamblea así lo resolvió, quedando aprobado el proyecto de la Cámara de Representantes que se limitaba a decir: «Quedan amnistiados todos los ciudadanos que han to-

(1) El señor Herrera recién había ingresado al Senado, representando al Departamento de Soriano (sesión del 12 de junio de 1861), una vez fallecido don Gabriel Antonio Pereyra, quien nunca tomó posesión de su cargo.

(2) Sesiones del 1.º y 3 de julio de 1861 en el Senado.

(3) Sesión del 13 de julio de 1861, de la Asamblea General.

mado parte en las conmociones políticas que agitaron al país en años anteriores».

¡ Y para sancionar esto, se había empleado casi un año y medio, deteniendo así la marcha política del Poder Ejecutivo ! Dieron tiempo a que se desarrollaran sucesos que torcieron la corriente natural de las cosas.

Como se ve, no había triunfado la doctrina de declarar inconstitucional el proyecto de ley enviado por el Senado, haciéndose lo que el doctor Palomeque, Basañez y Juanicó sostuvieron desde un principio. Por lo demás, quienes en un principio opinaron por la inconstitucionalidad del proyecto del Senado, continuaron en el Parlamento, y ahora estaban, como Arrascaeta y Pérez, en las Secretarías de Estado (1). Juanicó vivía alejado, arreglando cuestiones personales con el doctor Velazco (2), mientras el doctor Palomeque luchaba con el caudillaje indómito de Cerro Largo, de conformidad, primero, con el ministro doctor Eduardo Acevedo, y luego, con el mismo doctor Arrascaeta, teniendo ese caudillismo por mentor, en Montevideo, al doctor de las Carreras.

Armado el Poder Ejecutivo de aquella facultad, no usó de ella inmediatamente, porque se cruzaron acontecimientos que así lo impusieron.

EL FANTASMA DE LA REVUELTA

El general Flores, y sus compañeros emigrados, habían tomado participación en los acontecimientos político-militares que se desarrollaron en la República Argentina. La Confederación Argentina acababa de ser vencida por Buenos Aires, en Pavón. El gobierno de Derqui, en Paraná, había sido disuelto, y ese político buscado refugio en Montevideo. Urquiza y Mitre se entendían para organizar de nuevo el país, siendo un hecho indiscutible la preponderancia del general Mitre, a quien muy pronto se le discerniría el cargo de presidente de la República. Los orientales no sólo servían a Mitre, sino también a Urquiza, respondiendo a esa ley de inmixción de las cosas políticas en el Río de la Plata. El señor Berro, cumpliendo con un deber internacional, y con otro de conveniencia política, que mucho le honra en las páginas de la historia, como así lo reconoció el general Mitre, conservó «la más estricta neutralidad». Así lo dijo en su Mensaje, y a ello se debió la manera rápida con que procedió a disolver su *Gran Ministerio* de Acevedo, Villalva y Lamas. Quiso, y lo consiguió, guardar la más absoluta neutralidad (3). Fundaba su actitud en raciocinios como estos :

(1) Allí permanecerían desde junio de 1861 hasta octubre de 1862, siendo suplantados por Estrázulas, Egaña, Laguna y García (Juan P.)

(2) Sesión del Senado de 13 de julio de 1861.

(3) Diario de Sesiones de la Honorable Asamblea General, tomo III, página 412.

«Debatiéndose allí cuestiones y sosteniéndose pretensiones enteramente extraordinarias (1) a este país, injusto, al par que torpe, habría sido ingerirse en ellas sin provocación ni motivo de ningún género. Poderosas razones movían a adoptar esa neutralidad, aun por separado de lo que acabo de expresar, evitando, por ese medio, comprometer a la República en una guerra inmotivada, contra sus más notables intereses, y en oposición a la opinión bien pronunciada del país. Lejos de mí la idea de producir cargos contra nadie (2). Culpa de los tiempos, más bien que de los hombres, obra de acontecimientos raros, de circunstancias dominadoras, irresistibles, casi todas nuestras luchas domésticas, si no en su origen, en su prosecución se han ligado más o menos con las contiendas internas de la República Argentina, haciéndose así más duraderas y desastrosas, y concluyendo a veces por figurar apenas el interés oriental dominado y absorbido por el argentino. Preciso era romper resueltamente con esa tradición funesta; preciso era que la República se recogiese a llevar una vida propia, a separar sus cosas de las cosas extrañas, a nacionalizar, digamos así, su existencia y sus destinos. A eso me he aplicado con firmeza y decidida voluntad; y espero que tal procedimiento merecerá vuestra aprobación y la de los pueblos que representáis. No puedo dudar también, que allá mismo, en la República Argentina, cualesquiera que sean los afectos y las ideas que dominen actualmente, no se comprenda, al cabo, que esa absoluta separación política, que proclamamos, es de igual provecho para la quietud y seguridad de ambos países, y para la paz y buena inteligencia que debe reinar entre ellos».

Estas sensatas y profundas consideraciones, hijas de la experiencia del señor Berro, no eran sino la repetición de lo que el señor Pereyra había proclamado. Eran dos ciudadanos que, aunque habían pertenecido a bandos distintos, comulgaban en pensamientos fundamentales, cuales, los de la extinción de los viejos partidos y la neutralidad absoluta de la República. Los hechos ahí estaban para demostrar que el señor Berro no predicaba lo que no hacía. Se había sometido a la dura ley de la imparcialidad, y quiso mantenerla a todo trance. Para probarlo sacrificó a su Ministerio, que era respetado y estimado. Vió en él una dificultad para su política internacional, y lo alejó. Quería demostrarle al general Mitre, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era noble y sincero en sus acciones como Gobierno vecino. No estuvo ni con uno ni con otro; ni con Urquiza ni con Buenos Aires. Además, en eso lo guiaba un interés propio, el cual estaba revelado en las páginas del Mensaje. Temía la acción de esos orientales emigrados que actuaban en el ejército de Buenos Aires, sobre todo después del triunfo obtenido en Pavón. El señor Berro sabía muy bien lo que

(1) ¿No habrá querido decir *extrañas*?

(2) Esto era una referencia a los ministros cesantes, a causa de la distinta manera de encarar la cuestión argentina. Véase *Mi año político*, de 1893.

Oribe había hecho una vez vencedor en la Argentina, y esa lección de la historia temía se reprodujera. De ahí su interés por cumplir mayormente con sus deberes de neutralidad y de buena vecindad, para así obligar al general Mitre al cumplimiento de los suyos, llegado el caso.

«Habiendo tomado servicio — decía — en el ejército de Buenos Aires, un número considerable de orientales emigrados, el gobernador de aquella provincia me hizo saber que su admisión en las filas de ese ejército no tendía a otra cosa que a utilizar sus servicios en la guerra a que lo provocaba el gobierno de la Confederación, y que no permitiría que esa medida, hija de la necesidad, sirviese a ningún plan de invasión a esta República. No teniendo motivo para dudar de la sinceridad de esa manifestación, y de la lealtad con que se cumpliría la promesa que ella envolvía, he creído que nada debía reclamar contra el expresado armamento de los emigrados; tanto más, cuanto que formando parte del ejército de la Confederación otros orientales, hubiera sido faltar a los deberes de la neutralidad poner impedimentos a uno de los beligerantes, que no se le ponían al otro.»

No obstante, el Poder Ejecutivo era optimista; creía en la paz, pues «su conservación en medio de la conflagradora convulsión política porque está pasando la Confederación Argentina—decía,—es un acontecimiento feliz que robustecerá considerablemente el crédito del país, mostrando cuánto es el poder de sus elementos de orden. Las excitaciones producidas por esa contienda vecina, se han quebrado ante ese poder incontrastable, y no puede dudarse ya, que serán siempre y en toda ocasión muy vanas e impotentes, cualesquiera que sea el incremento que se les diera. Algunas tendencias peligrosas se han mostrado para hacer revivir los furores y el antagonismo de muerte de los viejos partidos. Toda vez que adquieran la importancia de una agitación anárquica, me consideraré en el caso de emplear, para contenerla, los medios que la Constitución y las leyes han puesto a mi disposición. Así lo he hecho recientemente, cuando en medio de una polémica insensata, por la prensa, apareció un extravío de ese género».

Se veía, pues, al gobernante preocupado de todo eso, temeroso de un desorden, no obstante su seguridad en la paz. No quería prédica de partidos viejos, llegando hasta inmiscuirse en aquello que no debía; tal era su levantado propósito, para impedir que la prensa resucitara las divisas ensangrentadas. Tenía asimismo el presentimiento de que la tormenta vendría de Buenos Aires, por lo que se puso en relaciones con el mismo general Flores, y aun con el general Mitre, por intermedio del doctor don Florentino Castellanos. Llegó hasta tirar un decreto, dentro de aquellas facultades que el Cuerpo Legislativo le había reconocido, para impedir la invasión.

En efecto, producida la caída de los ministros Arrascaeta, Pérez y

Pérez, se nombraron a los señores Jaime Estrázulas, Joaquín T. Egaña, Plácido Laguna y Juan P. Caravia (1).

Estos tiraron un decreto haciendo presente «que aquellos individuos que no tienen recursos para atender a su subsistencia, y que aun puedan ser útiles a la República restituidos a los grados que antes tenían». En su consecuencia, eran «reincorporados al Estado Mayor Pasivo en los grados que tenían por el sólo hecho de solicitarlo del Gobierno acompañando los justificativos necesarios». Igualmente los inválidos eran agregados de nuevo al cuerpo respectivo. Además, el Poder Ejecutivo pediría al Cuerpo Legislativo autorización «en el próximo período para mandar liquidar los haberes atrasados anteriores a la baja correspondientes a los jefes y oficiales que, encontrándose en aquel caso, hicieran uso del derecho que se les acordaba en el Decreto» (2).

Este Ministerio sólo duró un mes y días, por lo que se le calificó de «amapolas», siendo reemplazado por uno que no transaría con los emigrados. Este se compuso de los señores Juan J. de Herrera, Silvestre Sienra, Luis de Herrera y Juan I. Blanco (3).

Los temores se realizaron. De nada valieron la ley de amnistía, ni los dos decretos del Poder Ejecutivo. La venganza era por lo que se clamaba y lo que se buscaba. La revuelta atravesó el Uruguay, y no fueron bastantes todos los elementos del Gobierno, que acanzaban, en número, a 20.000 soldados, para cortar de raíz el mal, no obstante levantarse toda la sociedad como *un solo hombre* para protestar contra el movimiento anárquico de *¡de un solo hombre!* Hasta el cuerpo diplomático creería de su deber asumir la actitud irregular e impolítica de

(1) Hasta entonces, tres habían sido los ministerios. Ahora se dividió el de Gobierno y Relaciones Exteriores. A los cuarenta años volvió a ser ministro Estrázulas, desempeñando el mismo cargo de Relaciones Exteriores. Era el único sobreviviente de aquella época. El señor Berro arrancarí a al doctor Estrázulas del Senado, en octubre de 1862, para llevarlo a un ministerio, que caería a los treinta y cinco días; pero él volvería al Senado como representante por Maldonado (a). Desde aquí continuaría su lucha contra el señor Berro y Errazquin, hasta caer definitivamente, para vivir retirado de la política, desde febrero de 1864 hasta el año 1902, en que, por un suceso inesperado, se le vió aparecer como presidente del Directorio del Partido Nacional, siendo en seguida llevado al ministerio de Relaciones Exteriores por el señor don Juan Idiarte Borda (b). Era el último ministro sobreviviente del señor Berro, y quien había inaugurado, en 1862, el nuevo ministerio creado al separar las funciones del entonces ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores. Esto dió motivo a una crítica en la Comisión Permanente.

(a) Sesión del 16 de marzo de 1863. Véase además página 326 del tomo x de la obra de Díaz.

(b) Ya estaba inútil. Murió en seguida. Véase mi estudio publicado en *El Día*, titulado *El doctor don Jaime Estrázulas y el ambiente educacional*.

(2) Decreto de fecha 29 de septiembre de 1862.

(3) El padre y el hijo, de ministros. Era algo indebido. Nos referimos a los señores Luis y Juan José de Herrera. ¡Iba al Ministerio el espíritu intransigente de 1858!

interpelar al general Mitre, quien contestaría, como debía, la nota de los señores ministros.

La profecía del señor Díaz se había cumplido, y el país, desde el día 19 de abril de 1863, vería holladas las instituciones y pisoteado el territorio por el caudillaje y las huestes extranjeras.

UN ATAQUE CONTRARRESTADO

La administración de justicia fué objeto de estudio por parte del doctor Palomeque, y, en su consecuencia, presentó un proyecto de ley tratando de regularizar su marcha. Al fundarlo, dió una prueba más del conocimiento de las cosas de su país; y, a causa de él, exhibió la energía prudente de que estaba dotado para contrarrestar las inconveniencias de algunos de sus colegas.

La situación política se había puesto difícil para él, en aquel recinto legislativo, e iba a demostrarlo el incidente que pasamos a relatar.

El proyecto en cuestión proponía se integrara el Superior Tribunal de Justicia con cinco jueces letrados, estableciéndose que las providencias de substanciación y mere-interlocutorias podrían dictarse habiendo dos votos conformes; pero para pronunciar sentencias interlocutorias que tuvieran fuerza definitiva, o causaran gravamen irreparable, o para sentenciar en definitiva, era indispensable cuando menos la concurrencia de tres jueces y que la votación fuera unánime. No habiendo tres votos conformes, concurrirían los cinco jueces; y en caso de impedimento, se integraría el Tribunal con dos jueces más con arreglo al artículo 15 de la ley de 15 de mayo de 1856. Para el caso de revisión o de segunda apelación, era necesaria la concurrencia de cinco jueces; y para calificar el grado y conocer del recurso de nulidad e injusticia notoria, se formaría el Tribunal Extraordinario, con siete u once jueces, según se hubiese pronunciado la sentencia que motivaba el recurso, por tres, o por cinco jueces, conforme a lo dispuesto en los artículos 4.º y 5.º de la ley de 10 de mayo de 1858 (1).

Al fundar este proyecto, sostenía que el número de tres jueces, tal cual se hallaba el Tribunal, «no correspondía a las necesidades ni a las exigencias del país». Recordaba que por la ley de 3 de abril de 1830 se había elevado el número de jueces a cinco, dejando así sin efecto, en esa parte, la del 29, que sólo exigía tres; pero que en 10 de mayo de 1858 se habían restablecido las cosas dejando el número de tres. «El país tuvo, por 28 años, el Tribunal de Justicia compuesto con cinco miembros. Desde 1858 aquí—decía,—el país siente (y hay en la Cámara miembros del Superior Tribunal de Justicia que podrían justificar esta verdad), la necesidad del aumento del Superior Tribunal de

(1) Sesión del 19 de marzo de 1860.

Justicia para que los asuntos puedan expedirse con la urgencia y con el interés que son necesarios.»

El proyecto estaba fundado, con la sola diferencia del número de jueces, y los casos de revisión y de segunda apelación, en la ley de 10 de mayo de 1858.

Leído el proyecto, y fundado, ni una voz, por cortesía parlamentaria, lo apoyó. Esto era algo completamente desconocido en los usos legislativos. Nunca se había visto que la presentación de un proyecto, fuera bueno o fuera malo, no se apoyara, para pasarlo a Comisión, y luego estudiarlo, para admitirlo o rechazarlo.

Entonces el doctor Palomeque, que había sentido el dardo lanzado, no pudo menos que arrojar otro a su vez ante aquella descortesía incalificable, y dijo : «Como me ha causado muchísima sorpresa que tratándose de un asunto tan importante como el que he presentado, se le juzgue sin siquiera discutir, lo que por otra parte no es práctica dejar de apoyar una moción, pido, señor Presidente, quede constancia en el acta que es el primer caso que ocurre en el presente período en materia tan importante».

A un dardo, él lanzaba otro. Nada pedía, como se ve, después del agravio. Quería solamente que se supiera que él no era hombre que aguantara tales desprecios parlamentarios, por lo que en el acta aparecería su protesta para castigo, y hasta enmienda de sus autores.

Apenas hecha la protesta, se levantó la voz del doctor Arrascaeta para manifestar que «había esperado a que algún diputado apoyara el proyecto ; pues, aunque él no estuviera conforme con él, en el fondo, reconocía que eran de grande interés sus disposiciones».

«Mucho me alegro que se reconozca», decía el doctor Palomeque.

El doctor Arrascaeta deseaba que el proyecto pasara a una comisión, que ésta presentase su informe, y viniese a la discusión, a lo que su autor observaba que no había sido apoyado.

La Mesa decía, de una manera inconcebible : «Es tarde ; la Mesa no puede volver atrás».

No obstante, el doctor Vázquez Sagastume lo apoyaba, pero la Mesa entendía que ella no podía pasarlo a comisión.

Por su parte, el doctor Palomeque declaraba que sus palabras no se habían pronunciado por mera vanidad, ni por amor propio. «Lamento nada más—decía,—que se haya prejuzgado a la simple lectura de un proyecto que habla nada menos que de la administración de justicia, del honor, de la fama, de la vida de una nación. Por lo demás, la Cámara estaba en su perfecto derecho para darle un voto mudo desde que hablen de mejoras de esa naturaleza ; pero me asiste la satisfacción de que un señor diputado muy competente en la materia diga que es muy importante.»

Entonces el señor Fuentes manifestó que resultando bastantemen-

te apoyado el proyecto, debía mandarse a la comisión. La Mesa creía que era faltar a su deber.

Por lo demás, el doctor Palomeque creyó del caso expresar que sentía que habiendo un miembro del Superior Tribunal de Justicia no hubiese tomado parte en esta discusión.

Éste no se dió por aludido.

Por su parte, el doctor Arrascaeta apoyaba la idea del señor Fuen-tes, demostrando concluyentemente que el proyecto estaba apoyado y que debía pasarse a comisión.

Mientras tanto, el doctor Palomeque, que era hombre de constancia, una vez que asumía una actitud, después de meditarla, no creía que el silencio del miembro del Superior Tribunal de Justicia debiera consentirlo. Eso le hería, y volvió a la palestra, para colocarle una banderilla, y hacerlo hablar al mudo, que no era otro sino el doctor Juanicó.

«Como hay en la Cámara—decía—un miembro del Superior Tribunal de Justicia que negase el apoyo a mi moción, desearía a lo menos que el señor miembro del Tribunal de Justicia, representante por Montevideo, dijese si en efecto el Tribunal Superior de Justicia puede desempeñarse con arreglo a las necesidades del país, porque ese fallo silencioso del señor miembro del Tribunal de Justicia, me hace creer que está bien representado, y entonces retiraré mi proyecto, aun cuando fuese apoyado».

Y así, acosado, el doctor Juanicó dijo que no había apoyado, porque el doctor Palomeque había hablado de «la retribución que reciben los jueces. Consideré propio—decía—callar, no tomar ninguna parte en la discusión. Si no hubiera sido así, «indudablemente habría apoyado», pues «en cuanto al hecho—decía,—es de una evidencia perfecta; jamás se puso en duda». Por lo demás, observaba que la moción hecha podía volver a presentarse. «Si el señor Representante, que parece que lo único que necesitaba en el caso es que yo apoyase si tenía la conciencia de que había conveniencia en aumentar el número de jueces, deseaba esto, lo he hecho. Ahora, si quiere reproducir su moción, y es apoyada, se puede mandar a comisión.»

Ante esta manifestación elocuente, el doctor Palomeque hizo presente que cuando se trataba del bien del país, nada eran para él las cuestiones de amor propio. No obstante lo sucedido, tenía muy en cuenta la opinión del doctor Juanicó, «que es—decía—una autoridad en este caso que debe respetarse mucho». Y como éste ha sido mi único objeto: ver si se puede llenar esa necesidad, bien sea por esa variación, o por la que los señores silenciosos puedan presentar mejor, yo voy a presentar de nuevo la moción, sólo porque el miembro del Tribunal de Justicia aquí presente encuentra que hay necesidad de mayor número de jueces en el Tribunal».

Y así, con toda dignidad, prudencia y energía, obligaba a la Cá-

mara a que volviera por sus fueros, no obstante la incomprensible actitud de la Mesa, la cual pudo evitar toda discusión diciendo sencillamente que el asunto pasaba a comisión. Si alguien protestaba, entonces hubiera sido el caso de discutir el punto.

Al lado de este incorrecto proceder, aparecía el señor Aguirre con un espíritu formulista, escolástico, digno de los tiempos del expediente que hemos heredado. No, decía con toda solemnidad, ahora, no; mañana, sí; en esta sesión no puede hacerse de nuevo la moción; en la siguiente sí puede hacerse.

A esta curiosa argumentación dió un golpe formidable el doctor Lapido. Con ese estilo lapidario que lo caracterizaba, dijo que desearía saber si había algún artículo del Reglamento que prohibiera repetirse una moción; y como el Presidente le manifestara que no, él declaraba: «Entonces no veo el inconveniente para que no pueda ser admitida. El señor Presidente ha cumplido con el Reglamento no mandando a una comisión una moción que no fué apoyada. Ahora, el señor Presidente cumplirá con el Reglamento mandando a una comisión una moción que es apoyada. Es como yo entiendo desde que no hay prohibición establecida».

Y no obstante esta argumentación de fierro, el Presidente no aflojaba, discutiendo desde su asiento y declarando que para él eso era una violación del Reglamento.

Fué necesario que apareciera el señor don Antonio María Pérez para, con su carácter rudo, decirle que era él quien violaba el Reglamento. Y ante esta arremetida, el Presidente aflojó, aunque en parte, consultando a la Cámara «si permitía la introducción de la moción del representante señor Palomeque». ¡La Cámara, después de una votación dudosa, votó por la *afirmativa*!

Y así pudo pasar el proyecto a la Comisión de Legislación, a la vez que festejar sus cincuenta años el doctor Palomeque, pues en ese día 19 de marzo, los cumplía.

Sería uno de los últimos proyectos que presentaría a la Cámara, pues muy pronto renunciaría al cargo para ir de jefe político a Cerro Largo (1).

La idea aconsejada por el doctor Palomeque sobre aumento de los jueces del Tribunal, triunfó en el Senado, siendo un hecho más tarde (2).

LA VENGANZA DE QUINTEROS

La obra llevada a término con tanta paciencia, desde 1855, que hemos bosquejado en sus lineamientos principales, para honor de aque-

(1) Luego presentaría dos proyectos más: uno, aboliendo el pasaporte, y otro, creando el pueblo Arenal Grande.

(2) Sesión del 11 de julio de 1860 de la Cámara de Representantes, y del 8 de julio de 1861 de la Asamblea General.

llos hombres, aun con todas sus imperfecciones, iba a derrumbarse. El caudillo, alentado por ciudadanos como Pedro Bustamante y José Cándido Bustamante, contaría con la complicidad de los hombres del gobierno del general Mitre.

Los revoltosos no sabían lo que en política era *un hecho consumado*, como lo recordó el doctor don Manuel Herrera y Obes, en 1847, en la Asamblea de Notables. Los pueblos no conocen el efecto retroactivo para marchar por la vía del progreso. Y aquí los revoltosos pretendían retrotraer las cosas al año 58, para vengar los manes de Quinteros. Así lo decía en su proclama el general Flores. En ella se hablaba de «las puertas de la patria cerradas por la tiranía». Él venía «a abrirlas y a libertar a sus compatriotas de los *vejámenes* que sufrían». Venía «a combatir al gobierno de los déspotas que, vencidos siempre, han aplaudido y continuado los escándalos de la bárbara hecatombe de Quinteros».

Esta era la bandera de la revuelta. ¡Se venía a combatir *tiranos y déspotas* que no existían!

Lo que se quería era convulsionar el país, contando con los hombres de Buenos Aires, sin que los contuviera la ley de amnistía, más o menos amplia, dada por el legislador. Aunque no se hubiera sancionado el proyecto tal cual lo había hecho el Senado en 1860, se hubiera producido la invasión. Era necesario echar por el suelo el gobierno de Montevideo. Así lo exigían los intereses de Buenos Aires.

El caudillo no fué sino un instrumento inconsciente, cuyas pasiones se explotaban, al invocar los manes de Quinteros. A Buenos Aires poco le importaba la venganza invocada. Era otra cosa la que buscaba, obligado a ello por la impolítica de los hombres que actuaban al frente de los destinos nacionales, como se verá más adelante (1).

(1) Debemos hacer presente que éste no es un estudio completo de las Asambleas Legislativas, sino en lo que se relaciona con nuestro personaje el doctor Palomeque. Si hemos hablado de los sucesos del 62-63 en su relación con la ley de amnistía, es para exponer la situación en que nuestra personalidad va a actuar, defendiendo las instituciones e independencia nacional. Si nuestra intención hubiera sido la de estudiar por completo la acción legislativa desde 1855 a 1862, seguramente que habríamos tenido que ocuparnos de la justicia, aduanas, balizamiento, salubridad de Montevideo, catastro, ciudadanía, código civil de Acevedo, colonización, contribución directa, división territorial, ejército, elecciones, arrendamiento de escribanías, faros, ferrocarriles, impuestos, juntas económico-administrativas, marcas de ganado, mercados de frutos, minas, monedas, papel sellado, pasaportes, patentes de giro, idem de rodados, pavimentación, pesca de anfibios, extracción de piedras, policía, presupuestos, privilegios, procedimientos civiles y parlamentarios, puentes, puertos, recompensas nacionales, reforma militar, registro general de hipotecas y privilegios, de leyes y decretos y de propiedades, reglamento consular, reglamento interno, rentas departamentales y públicas, teatro, universidad, montes públicos, protocolos de escrituras públicas, inmigración, emisión de billetes, crédito de don Dionisio Coronel, creación de pueblos, monumentos públicos, empresas de gas, convención postal con la Gran Bretaña, timbres, sociedades anónimas, alum-

Conviene, sin embargo, dejar constancia de que la reprobación fué tan unánime, que hasta los hombres de la Defensa, el más caracterizado de ella, el doctor don Manuel Herrera y Obes, la reprobó, calificándola de *«injustificable y criminal invasión, la cual constituía una verdadera traición a la Patria»*.

Así se lee en el Informe que expidió la Comisión Especial del Senado, compuesta de los señores doctores don Jaime Estrázulas y don Manuel Herrera y Obes (1).

Este último ciudadano acababa de ingresar al Senado, como una demostración elocuente de la evolución operada en la política del país. Todos los intereses estaban garantidos. A nadie se arrojaba del terruño. Las puertas se abrían para todos los orientales. Más aún; se reponían en sus grados a los militares dados de baja. En esos momentos acababa de reincorporarse el caudillo Manduca Carabajal con el grado de coronel (2).

La presencia del doctor don Manuel Herrera y Obes, el más ilustre talento político de la Defensa de Montevideo, en la Cámara de Senadores, condenando como *criminal la invasión* y como *una verdadera traición a la Patria*, bastaba y sobraba para el juicio de la Historia, y con él toda la sociedad de aquella época.

Era una invasión sin razón y sin prestigio. No tenía más apoyo que el que Elizalde, como ministro de Mitre, le daría externamente, y lo que en el fondo, por más que no lo manifestara, desearía el mismo general Mitre, al no contrariar lo que sus amigos realizarían en plena calle de Buenos Aires con hombres exaltados a su frente.

De aquí que Estrázulas y Herrera se pusieran en guardia, desde

brado en los departamentos, libertad de esclavos, arriendo de la isla de Gorriti, colonos, derechos de puerto y de exportación, denuncias de propiedades públicas y sobras, navegación de Cabollati, Tacuarí y Olimar, expropiación de terrenos en las plazas públicas, Comisión Mixta-Oriental-Anglo-Francesa liquidadora de la deuda por perjuicios de guerra, deuda flotante, contrabando, instrucción primaria en campaña, honores fúnebres a don Gabriel Antonio Pereyra, expulsión de los jesuitas, cultivo del algodón, etc., que de todo esto allí se trató y resolvió.

No queremos terminar esta parte, sin recordar la intervención que el doctor Palomeque tomó en la discusión sobre ciudadanía del señor don Juan Manresa, sacerdote, de nacionalidad española, electo diputado (a); su proyecto sobre abolición del pasaporte (b); sus opiniones sobre los vales a la orden (c), y su actitud al discutirse si los señores Solsona y Sociedad de los Rincones de Palacios y Covongos estaban comprendidos en la ley de 29 de abril de 1858 (d).

Por lo demás, se comprende que nuestro estudio sobre las Asambleas legislativas debe detenerse aquí, porque nuestro propósito no es sino exponer aquello que se relaciona con el personaje y con el campo de acción en que va ahora a desarrollar sus fuerzas, es decir, su lucha con el caudillaje de Cerro Largo.

(a) Sesión del 19 de marzo de 1860.

(b) Sesión del 26 de marzo de 1860.

(c) Sesión del 29 de marzo de 1860.

(d) Sesión del 19 de abril de 1860.

(1) Sesión del 2 de mayo de 1863.

(2) En seguida aparecería en la revuelta del 63.

luego y dijeran en su dictamen : «Pero no alcanzándose todavía a conocer la extensión, los medios y el carácter que trae la invasión, para poder apreciar, en el caso, la conducta de los gobiernos o autoridades de los países limítrofes, según los principios del Derecho de Gentes entre naciones que cultivan relaciones de amistad, la Asamblea General confía en que el Poder Ejecutivo hará mantener y respetar los derechos de la República en el exterior».

Esto aconsejaba la Comisión Especial en la Minuta de Comunicación a dirigirse al Poder Ejecutivo al aprobar las medidas tomadas por este Poder.

Y lo decía, en la seguridad de que *un solo hombre*, que era quien había invadido para echar por tierra todas las instituciones, pronto caería envuelto en el desprecio y en el vacío.

¡ Ah ! ¡ Ignoraban que la inhabilidad política, los celos de los caudillos, las ambiciones de los dirigentes, iban a ser los aliados del desgraciado ciudadano que tanto mal venía a hacer en tierra nativa, él, el único precisamente que no había sido desterrado del país, y para quien siempre habían estado abiertas las puertas de la Patria !

No quiso venir como cualquier ciudadano modesto y humilde, sino con las armas en la mano, sirviendo, sin saberlo, los propósitos internacionales del gobernante argentino.

¡ El trapo ensangrentado volvía a levantarse !

Apéndice

MINISTERIO DE GOBIERNO

DECRETO

Montevideo, septiembre 11 de 1855.

Habiéndose comunicado oficialmente al Gobierno Provisorio, que la Asamblea General ha aceptado la renuncia, que de la Presidencia del Estado le presentó el general don Venancio Flores, el Gobierno Provisorio ha acordado y decreta :

Artículo 1.º Queda desde esta fecha en posesión del Poder Ejecutivo de la República el Presidente del Senado ciudadano don Manuel Basilio Bustamante, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución del Estado.

2.º Comuníquese a todas las autoridades, imprímase e insértese en el Registro Nacional.—LAMAS.—FRANCISCO S. DE ANTUÑA.—LORENZO BATLLE.—MANUEL HERRERA Y OBES.—Está conforme, el Oficial Mayor, P. ELLAURI.

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA

DECRETO

Montevideo, septiembre 12 de 1855.

El Presidente de la República acuerda y decreta :

Artículo 1.º Nómbrase Ministro General interino mientras no se organizan los respectivos Ministerios al ciudadano don Juan Miguel Martínez.

2.º Comuníquesele el presente decreto, para que a las dos de la tarde de este día se apersona a prestar el juramento.

3.º Queda sin efecto el decreto del día anterior por el que se autorizaba a los oficiales mayores para el despacho.

4.º Comuníquese, publíquese, etc.—BUSTAMANTE.—CARLOS DE SAN VICENTE.—Está conforme, el Oficial Mayor, P. ELLAURI.

EL GOBERNADOR PROVISORIO

A SUS COMPATRIOTAS

¡CIUDADANOS! Elegido por vuestra voluntad para presidir provisoriamente por el tiempo estrictamente necesario hasta llegar a la elección de un nuevo Gobierno Constitucional, declaro que acepto gustoso el sacrificio que se impone a mi avanzada edad, tan sólo porque veo prácticamente realizada la unión y fraternidad de todos los orientales, sin distinciones ni excepciones algunas.

¡ CIUDADANOS ! Tened confianza en que no ultrapasaré vuestro mandato, y que caminaré leal y verdaderamente dentro de la esfera de la ley fundamental según las circunstancias lo permiten.

¡ ORIENTALES ! Unión, patriotismo y abnegación sincera es lo que necesita de vosotros el Gobierno.

¡ Viva la Constitución ! ¡ Viva la unión de los Orientales !—LUIS LAMAS.

Montevideo 29 de agosto de 1855.

DECRETO

El Gobernador Provisorio del Estado acuerda y decreta :

Montevideo 29 de agosto de 1855.

Artículo 1.º Queda interinamente nombrado el coronel don Lorenzo Batlle ministro de la Guerra y encargado de los ramos de Hacienda, Gobierno y Relaciones Exteriores.

2.º El presente Decreto será autorizado por el oficial mayor del Ministerio de Gobierno.

3.º Comuníquese y publíquese. — LAMAS. — PRUDENCIO ELLAURI, Oficial Mayor.

MINISTERIO

DE GOBIERNO

DECRETO

Montevideo, agosto 29 de 1855.

Siendo indispensable en las presentes circunstancias que la policía civil esté unida a la militar, para la más rápida y enérgica acción de la autoridad, el Gobernador Provisorio acuerda y decreta :

Artículo 1.º Queda interinamente encargado de la policía del Departamento de la Capital el coronel don José María Solsona jefe de la artillería.

Art. 2.º Comuníquese, publíquese e insértese en el libro competente.—LAMAS.—LORENZO BATLLE.

UNIÓN DE LOS PARTIDOS

NOMBRAMIENTO DEL GOBIERNO PROVISORIO

El Gobierno del general don Venancio Flores ha dejado de pesar sobre la República Oriental del Uruguay, y una nueva era se abre para los Orientales, unidos ante el interés de la Patria, flagelada por la tiranía del Gobierno que cesó.

El general Flores, después de haber llevado hasta el último exceso la negación de la ley, abandonó la capital, y se preparaba a lanzarse sobre ella con la fuerza, cuando el pueblo, cansado de los desmanes que sobre él se habían cometido, se presentó en el Fuerte en la mañana del 28, y a su cabeza el señor coronel don José María Muñoz pidió el cese del general Flores en el Gobierno.

En aquel momento, los Orientales se olvidaron de sus viejas divisiones, y animados de un solo interés, pedían y querían todos la unión para la caída del hombre que los dividía más y más.

La unión de los Orientales se ha hecho en efecto.

En la noche del día anterior, una gran porción del partido blanco se reunió, con el objeto de mantener compacta la opinión de todos sus afectos, y para el efecto, nombraron una comisión directiva de sus trabajos. La comisión se ocupó desde el siguiente día de preparar los trabajos que debían conducir al resultado que felizmente se ha obtenido.

El objeto de estos trabajos era la unión de los partidos; y la comisión se ocupaba de redactar un pacto de unión para presentarlo a los señores del partido colorado, cuando estalló la revolución.

El movimiento popular que ha dado en tierra con la autoridad del general Flores, ha sido improvisado en el momento; nada había pactado aún cuando el pueblo se pronunció unánimemente contra la autoridad que contrariaba la ley. Pero los partidos continuaron en avenimientos, que no se consiguieron sin embargo el 28.

Al día siguiente el general Flores apareció en los suburbios de la capital; y una comisión del pueblo le pidió su renuncia de la presidencia. El general Flores la rehusó, y llamado a ocupar su puesto el Presidente del Senado, lo rehusó igualmente.

Entretanto, la República permanecía sin Gobierno y la inquietud se hacía general. Todos dudaban, y en aquellos momentos, el corazón de todos habló muy alto en favor del interés general. Los partidos, con sus primeros hombres a la cabeza, se acordaron en presencia de la patria sin Gobierno, que era necesario renunciar para siempre a los odios; y el genio de la patria inspiró a todos, la voz del interés común habló a todos los corazones.

Los partidos hicieron entonces un pacto de unión, y la comisión directiva del partido blanco, formuló su programa de olvido en las siguientes palabras:

¡ VIVA LA LIBERTAD !
¡ VIVA LA UNIÓN DE LOS ORIENTALES !

La comisión electa por el partido blanco para representarle, tiene la satisfacción de declarar que ante la libertad y la Constitución, han desaparecido todos los colores políticos.

Derrocado el Gobierno y levantada la bandera de la unión y la Constitución, ésa es desde hoy la causa de todos los Orientales. Unidos todos sin distinción, tomemos las armas por la libertad, jurando no deponerlas mientras que la Nación no sea legítimamente representada conforme la comisión lo ha convenido con los primeros hombres del partido colorado.

¡ Viva la Constitución ! ¡ Viva la Unión !

Montevideo, agosto 29 de 1855.

FRANCISCO S. DE ANTUÑA.—LUIS DE HERRERA.—AMBROSIO VELAZCO.—ENRIQUE DE ARRASCAETA.—PELRO FUENTES, *Secretario*.

El pacto de unión fué leído en presencia de muchos Orientales en la casa del señor doctor don Francisco Solano de Antuña; y al instante salió de allí la comisión directiva con el señor doctor don Manuel Herrera y Obes, y acompañada de un inmenso pueblo se dirigieron al Fuerte.

Durante el tránsito, los vivas a la unión de los Orientales, al pueblo soberano, a la Constitución del Estado, y a la Guardia Nacional no fueron interrumpidos; y el pueblo, delirante de gozo, olvidaba de corazón sus penas pasadas, ante el fausto suceso que le hacía olvidar los odios.

En efecto, los colores desaparecieron: y los odios de partido dejaron de existir ante la gran necesidad de salvar la patria.

Llegado el pueblo a la casa de Gobierno y agrupado en el salón que antecede al despacho, en momentos en que la alegría radiaba en todos los rostros, el señor doctor don Manuel Herrera y Obes tomó la palabra, y declaró a los circuns-

tantes, que la autoridad del general don Venancio Flores como Presidente de la República había dejado de existir con su desaparición, que el Presidente del Senado había rehusado ocupar su puesto, a pesar del llamamiento que se le había hecho, y que en vista de la acefalía en que quedaba el Gobierno de la República, en presencia del pueblo soberano se procedía al nombramiento de un Gobierno provisorio.

Entonces fué designado para este cargo el ciudadano don Luis Lamas, y el pueblo lo aclamó con entusiasmo. Los orientales se abrazaron de nuevo, reconciliados para siempre, y el nuevo Gobierno recibió mil ovaciones del pueblo unido, que renudaba el pacto social con su voluntad suprema.

El nuevo Gobierno, después de haber jurado en presencia del pueblo, el cumplimiento exacto de los deberes que se le imponían, dirigió a sus compatriotas la proclama que en otro lugar insertamos.

El poder que nos había flagelado tan inicuaemente, dejó de existir de derecho; y el pueblo corrió a las armas, para defender el nuevo Gobierno que se había dado.

Ya no hay colores que nos dividan, y el pueblo oriental unido, acabará de pulverizar el poder de los déspotas.

El general Flores que tan imprudentemente ha roto el pacto social, no puede aspirar ni un momento más a la posesión del poder que humilló él mismo, negando las leyes y los derechos del hombre. Todos sus últimos actos fueron un sacrilegio; sus avances contra las libertades públicas lo hicieron reo de lesa nación.

El poder en semejantes manos es una iniquidad, porque el poder del general Flores violaba las leyes, en la propiedad, en la libertad del individuo, en el pensamiento mismo.

El pueblo oriental no debía, pues, tolerar a un hombre que lo humillaba en sus derechos, en su dignidad, en su nombre. El pueblo oriental tiene dignos antecedentes, grandes glorias en su historia y gran reputación por su valor; tolerar, pues, el despotismo, sería menguar sus antecedentes, borrar sus glorias, afeminar su genio.

Pero no; ¡jamás! Los pueblos libres no pueden permitir la autocracia en el poder. Los pueblos libres no pueden ser víctimas de sus elegidos, no pueden ceder sus derechos a la voluntad del que manda, no pueden inclinar su cabeza al despotismo.

El despotismo, pues, ha concluído ya con ese poder que negaba las leyes, la vida, la propiedad y el pensamiento; y debemos esperar del nuevo Gobierno, lo que cumple a todos por el pacto social.

No podemos temer; tenemos la unión y contamos con ella, para ser independientes, libres y felices.

Debemos esperar que el genio de la patria nos inspirará a todos, y que entraremos de nuevo en la senda de la ley fundamental, con un solo corazón, con un solo sentimiento, con una sola voluntad.

Unidos seremos fuertes y libres; unidos honraremos la memoria de nuestros padres; unidos haremos honor a nuestra historia.

¡Olvido eterno sobre las cosas del pasado! y si es verdad que nos honra la memoria de nuestros padres, respondamos a ella, con el respeto a la ley, con la unión de las opiniones, con el amor entre nosotros mismos, hermanos ante la patria y ante la ley.

JOSÉ P. PINTOS.

PACTO DE UNIÓN ENTRE LOS PARTIDOS

He aquí el pacto de unión entre los partidos para sacar al país de la triste situación en que se encuentra, y volver a la senda constitucional con la unión de todos.

Los ciudadanos que subscribimos, reunidos en asociación política, con el designio de formar un gran Partido Nacional, que rijan los destinos del país sacándolo de las condiciones a que lo han reducido las disensiones civiles, hemos acordado y aceptado, como bases fundamentales de nuestro programa político las siguientes:

1.^a Promover y sostener la existencia de Gobiernos regulares, que arrancando de la voluntad nacional legítimamente expresada por medio de los comicios públicos, radiquen su existencia en la observancia de la Constitución, y el respeto a cada uno de los principios que ella consigna.

2.^a Aceptar leal y decididamente como medio de arribar a ese grande objeto la alianza brasilera digna y benéficamente entendida.

3.^a Trabajar en la extinción de los odios y prevenciones que ha dejado la lucha de los dos grandes partidos en que estuvo dividida la República, predicando la unión entre todos los Orientales, y dándoles a todos la parte que les corresponde en la reorganización del país.

4.^a Pugnar por la inviolabilidad de la ley fundamental haciendo uso de todos los medios que ella permite.

5.^a Aceptar como consecuencia de las estipulaciones anteriores, y punto de partida de los compromisos que contraen los asociados, la actualidad creada por los acontecimientos, a que ha dado lugar la marcha arbitraria y atentatoria de la Presidencia del general Flores.

Montevideo, agosto 29 de 1855.

Fermín Ferreira, Pedro Bustamante, Emeterio Regúnaga, Adolfo Rodríguez, Manuel Herrera y Obes, Enrique Muñoz, Zacarías Mayobre, Francisco Hordeñana, Luis Lamas, Lucas Herrera, Antonio de las Carreras, Juan Carlos Neves, Leandro Gómez, Luis de Herrera, Ambrosio Velazco, Pedro Fuentes, Enrique Arrascaeta, Octavio Lapido, Federico Nin Reyes, Jaime Illa y Viarmont, José Brito del Pino, José Pedro Pintos, Cándido Juanicó, Juan J. Barbosa, Nicolás L. Conde, Joaquín Reyes, Manuel N. Tapia, Juan F. Servy.—
(Sigue las firmas).

MINISTERIO
DE GOBIERNO

CIRCULAR

Montevideo, octubre 19 de 1855.

Con esta fecha el Ministerio de Relaciones Exteriores ha transcritto a éste el acuerdo siguiente:

Ministerio de Relaciones Exteriores. — Acuerdo. — Montevideo, octubre 17 de 1855.—Habiendo tomado en consideración el Gobierno la nota que con fecha 15 del corriente ha dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores Su Ex-

celencia el señor Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en misión especial de Su Majestad el Emperador del Brasil cerca de la República, comunicando que en virtud por una parte de haber manifestado confidencialmente el Gobierno Imperial antes de ahora, su deseo de retirar la división que se halla en el territorio Oriental por considerar que habían desaparecido las razones que aconsejaban su permanencia en él, y atendiendo por otra, a que en 5 de septiembre último el Ministro Plenipotenciario de la República en la corte del Río de Janeiro declaró a Su Majestad que el Gobierno Oriental consideraba innecesaria la permanencia por más tiempo de aquellas tropas en el territorio del Estado, en virtud de hallarse completamente restablecido el orden público, atendiendo a que en vista de estos antecedentes y circunstancia no puede haber divergencia entre ambos Gobiernos, en cuanto a la retirada de aquellas tropas, lo que está además de acuerdo con las estipulaciones del tratado de 5 de agosto, el Gobierno en Consejo de Ministros ha acordado y resuelve que por el Ministerio respectivo se conteste a Su Excelencia el señor Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en misión especial de Su Majestad el Emperador del Brasil de conformidad en el punto indicado.—Y considerando al mismo tiempo que la evacuación del territorio del Estado no podrá tener lugar en el término de dos meses si éstos hubieran de contarse desde el 5 de septiembre último, acuerda igualmente que dicho plazo empiece a contarse desde el 15 del corriente como Su Excelencia lo indica en la expresada nota.—Comuníquese esta resolución a Su Excelencia el señor Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en misión especial expresándole que el Gobierno ve en esta determinación del Gobierno de Su Majestad la más amplia prueba del elevado desinterés que preside a la política del Gobierno Imperial en sus relaciones con la República, sentimientos que están en perfecta armonía con los que abriga el Gobierno de la República (firmados) Bustamante.—Adolfo Rodríguez.—José Britos del Pino.—Jaime Illa y Viamont.

Lo que transcribo a Vuestra Señoría para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años.—ADOLFO RODRÍGUEZ.

Señor Jefe Político del Departamento de Canelones.

MINISTERIO DE GOBIERNO

Montevideo, noviembre 13 de 1855.

La división del ejército de Su Majestad el Emperador del Brasil, que vino a la República en calidad de auxiliar, se retira hoy de ella en virtud de lo acordado entre el Gobierno y Su Excelencia el señor Plenipotenciario Especial del Imperio

Su Excelencia el señor Presidente, que quiere y desea que en el tránsito de esa División no se presente el más pequeño obstáculo, ha encargado al infrascrito de ordenar a Vuestra Señoría preste a la fuerza imperial en su marcha, todos los auxilios que estén en la esfera de sus atribuciones, impartiendo al efecto las instrucciones necesarias a las autoridades de su dependencia.

Con el objeto de que esta disposición tenga el mejor éxito, Su Excelencia el señor Presidente dispone también que, al llegar la División Brasileira al departamento de su cargo, Vuestra Señoría, con la fuerza de que pueda disponer, la reciba y acompañe hasta los límites del departamento vecino del suyo, avisando

a su jefe político respectivo, con anticipación de veinticuatro horas, la marcha de dicha División a fin de que sucesivamente se haga lo mismo en todos los otros departamentos.

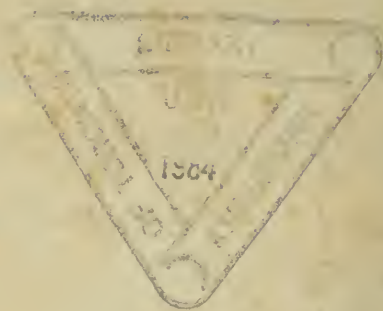
Durante el tiempo que Vuestra Señoría acompañe a la División Imperial, no sólo le prestará, como queda prevenido, los auxilios todos que sea posible, sino que vigilará al mismo tiempo que respecto de ella se guarde la más conveniente conducta, usando de los medios a su alcance para evitar todo aquello que pueda imprimir el más leve disgusto entre esa fuerza y el vecindario.

El infrascrito espera que Vuestra Señoría con el celo y actividad que le distinguen, llenará cumplidamente los deseos del Gobierno.

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años.—ALBERTO FLANGINI.

Señor Jefe Político del Departamento de Canelones.

FIN





**PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET**

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

UTL AT DOWNSVIEW



D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 13 24 11 01 007 3